



LOS SINDICATOS EN EL GOBIERNO

LA CRISIS DEL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO (1982-1985)



Archivo

ENRIQUE IBÁÑEZ ROJO

21.219

Para Marisa, siempre

*Embriaguez te sobra, y no hay
tanta locura en la razón, como este
tu raciocinio muscular, y no hay
más racional error que tu experiencia.*

*Pero, hablándolo más claro
y pensándolo en oro, eres de acero,
a condición que no seas
tonto y rehúses
entusiarmarte por la muerte tanto
y por la vida, con tu sola tumba...*

*Anda, no más; resuelve,
considera tu crisis, suma, sigue,
tájala, bájala, ájala...*

*Vamos a ver, hombre;
cuéntame lo que me pasa,
que yo, aunque grite, estoy siempre a tus órdenes.*

César Vallejo

INDICE

INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTOS	I
--------------------------------------	---

CAPÍTULO 1: ELEMENTOS DE TEORÍA	1
---------------------------------------	---

1. <i>El punto de partida: elección racional y materialismo</i>	
1.1. La teoría formal	1
1.2. El contenido de las preferencias	5
2. <i>Los actores corporativos</i>	
2.1. Los límites del reduccionismo: intereses individuales y sistemas de "múltiples niveles"	8
2.2. Organización y capacidad de estrategia	13
3. <i>Las metáforas del juego</i>	
3.1. El modelo analítico	24
3.2. Equilibrios múltiples y dinámica de la interacción	34
3.3. Estrategias de transición: la inercia estructural y las dos matrices del juego	43
4. <i>La metáfora "evolucionaria"</i>	
4.1. Emergencia y consolidación de las organizaciones	51
4.2. Transición y crisis	57
5. <i>Una nota epistemológica: los límites de la explicación en ciencias sociales</i>	62

CAPÍTULO 2: LA HISTORIA DEL JUEGO	68
---	----

1. <i>La economía monoexportadora y las comunidades mineras: las bases estructurales del movimiento obrero boliviano</i>	70
2. <i>El período formativo</i>	
2.1. Los sindicatos en la etapa oligárquica	81
2.2. La quiebra del parlamentarismo oligárquico y la emergencia del sindicalismo minero	85
3. <i>El período de consolidación</i>	
3.1. La Revolución de 1952 en la historia del movimiento obrero: ruptura y continuidad	97
3.2. Restricciones estructurales y estrategias de desarrollo: el confinamiento minero de la economía boliviana	102
3.3. Los sindicatos y el MNR	110
3.4. Campesinos, mineros y militares	119
4. <i>Los resultados: las razones del sindicalismo revolucionario</i>	123

CAPÍTULO 3: LA HORA DEL PCDER OBRERO	134
1. <i>El legado del autoritarismo</i>	
1.1. El "desarrollo" espurio	136
1.2. La decadencia política	144
2. <i>Transición y crisis económica</i>	
2.1. La COB, el "Partido de la Democracia"	160
2.2. El hundimiento del "centro" minero, la deuda, y la espiral inflacionaria	174
3. <i>Los resultados: el nuevo contexto estratégico del movimiento obrero</i>	183
 CAPÍTULO 4: LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA "POPULAR"	 193
1. <i>La izquierda frente a la crisis</i>	
1.1. Los compromisos del gobierno	195
1.2. Las razones de la COB	204
2. <i>La dialéctica del veto</i>	
2.1. El bloqueo de la política económica	214
2.2. El debate sobre la participación sindical en el gobierno	221
3. <i>"Las amenazas de la realidad"</i>	
3.1. En la pendiente	234
3.2. El peligro de "morir de éxito": la huelga nacional de hambre de enero de 1984	239
4. <i>Los resultados: las antinomias de la COB</i>	249
 CAPÍTULO 5: EL COLAPSO INSTITUCIONAL	 261
1. <i>El derrapaje</i>	
1.1. Un segundo ensayo de estabilización	263
1.2. La explosión del conflicto social	272
2. <i>La inercia</i>	
2.1. La radicalización de las estrategias de conflicto	282
2.2. El VI Congreso de la COB	286
3. <i>La desintegración del movimiento obrero</i>	
3.1. El gobierno provisional	301
3.2. La apoteosis del "salarialismo" y la hiperinflación	306
4. <i>Los resultados: las dimensiones del fracaso</i>	315
 CAPÍTULO 6: LA DEMOCRACIA GOBERNANTE (EPÍLOGO)	 334
 CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES	 352
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA	365

INTRODUCCIÓN

(La lucha económica) es el medio de unir a la clase obrera, de prepararla para el derrumbe de toda la vieja sociedad con sus contradicciones de clase. Y desde este punto de vista los trabajadores hacen bien en reirse de los inteligentes maestros burgueses que les recuerdan lo que esta guerra civil está costándoles en derrotas, dolor y sacrificios. Aquel que quiere derrotar al adversario no discutirá con él los costos de la guerra

Karl Marx

Todo indica que la humanidad desciende la pendiente... Después de tantas conquistas y hazañas de todo tipo, el hombre empieza a estar fuera de moda. Sólo merece interés en la medida en que se encuentra perseguido y acorralado, en que se hunde más y más. Si prosigue es porque no tiene fuerzas para capitular, para suspender su deserción hacia adelante porque ha adquirido un automatismo en la caída

Emil Cioran

Si es cierto que la seguridad de la victoria final permite, como en el texto de Karl Marx, dar un sentido a la acumulación de derrotas, dolor y sacrificios, resulta muy fácil comprender por qué tantos se aferraron y se aferran todavía en Bolivia a esa certeza escatológica. «Aquí sí unos hombres murieron como perros para que otros hombres coman como cerdos», escribía René Zavaleta poco antes de su muerte: hablamos, en efecto, de «la patria de la injusticia social, y, si no fuera por sus masas, sería mejor que no existiera Bolivia» (Zavaleta, 1983b: 39). Si no fuera porque "las masas" de Bolivia convirtieron con sus luchas la derrota constante en una sucesión de actos heroicos que parecían marcar los jalones de un imparable ascenso hacia el cielo de la Revolución. Por eso merecía la pena después de todo que existiera el país, y por eso merecía la pena ocuparse de él.

Por eso también mientras la historiografía latinoamericana del Siglo XX sólo concedió muy raras veces a las organizaciones del movimiento obrero el papel decisivo que seguramente han desempeñado en la evolución de las sociedades de la región (Bergquist, 1988), en el caso de Bolivia sucedió exactamente lo contrario. Como los trabajadores de la república más pobre eran «los más combativos y políticamente conscientes de toda América Latina» (Strengers, 1991: 11), su importancia en la configuración del país fue ampliamente reconocida por los científicos sociales más destacados, que llegaron incluso a reducir su dinámica política contemporánea a una confrontación titánica y desigual entre los sindicatos

y el estado excluyeron... «No es una exageración decir que, al menos desde 1940, la historia de Bolivia es un duelo entre los militares y la clase obrera» (Zavaleta, 1983a: 222). Finalmente, la patria de la injusticia social era a la vez el lugar de una esperanza milenarista avivada por la realidad del sufrimiento colectivo de los mineros y su heroísmo desesperado: ¿acaso todo aquello podía ser para nada?; ¿acaso no hacía *necesario* un final feliz?.

Pero los acontecimientos de la última década parecen querer demostrar precisamente que todas aquellas luchas fueron inútiles. Y es que en los años ochenta, como es sabido, el movimiento obrero boliviano terminó hundiéndose en una crisis sin precedentes, tal vez la más violenta y espectacular de cuantas han afectado a las organizaciones de la izquierda latinoamericana en el curso de la última década (Carr y Ellner, 1993). Desde entonces, el tiempo histórico se ha ido ralentizando, mientras la política adoptaba un estilo napoleónico primero, rutinario y mezquino después, y Bolivia dejó entretanto de ser el "país de vísperas"(*): ese territorio violento rodeado de montañas míticas en el que siempre parecía posible "tomar el cielo por asalto" (Jetté, 1989). Con el gran aburrimiento llegó el abandono en masa de un movimiento obrero que había perdido ya su encanto épico, y quienes no se dejaron ganar por un pesimismo histórico estilo Cioran fueron trasladando sus ilusiones y afectos hacia el sindicalismo campesino independiente y otros "nuevos movimientos sociales" destinados al parecer a convertirse en portadores de reemplazo de la esperanza utópica.

Desde luego, en todas partes tiende a considerarse a los aparatos sindicales existentes tan sólo como expresión de todo aquello que ha quedado obsoleto. Barridos por una crisis frente a la que no encuentran respuestas, cuestionada su representatividad por una pléyade de nuevas asociaciones, diluida su base social por el torrente de la "informalización" de las economías, la problemática del movimiento obrero es hoy para muchos analistas un fenómeno de importancia marginal en la evolución futura de los sistemas políticos latinoamericanos. Pero con independencia de la plausibilidad que atribuyamos en general a la hipótesis de que los "nuevos movimientos sociales" tienen un mayor potencial transformador que las viejas organizaciones obreras(**), con independencia de que seamos más o menos optimistas

* La expresión pertenece al parecer a Marcelo Quiroga, el ensayista, orador y líder socialista asesinado por la dictadura de García Meza en 1980.

** Un diagnóstico especialmente pesimista al respecto, basado en varios estudios empíricos desarrollados en el Perú, es el de Pásara (1991). Un repaso muy equilibrado a las distintas posiciones sobre la potencialidad de los "nuevos movimientos sociales" puede encontrarse en Lehman (1990), pp. 148-214.

respecto a la posibilidad de que se constituyan en actores sólidos y autónomos capaces de articular los intereses de los sectores más desfavorecidos de la sociedad civil, en el caso de Bolivia continuará careciendo de sentido cuestionar la vigencia de la matriz sindical.

La inmensa mayoría de los ciudadanos de todo el país, en efecto, continúa viendo en la vieja Central Obrera Boliviana (COB) el lugar "natural" para canalizar casi cualquier acción colectiva. Para bien o para mal, la COB es mucho más que un sindicato, y su trayectoria histórica ha hecho de ella una institución indiscutible, capaz de resistir la más larga travesía por el desierto para reemerger en el primer plano del escenario nacional a medida que vayan desarrollándose nuevas expectativas y reconstruyéndose alguna base material para la acción colectiva de los sectores populares. Desde esta perspectiva sólo cabría discutir sobre utilización que hará la COB de su poder en el futuro, y es en este punto donde tal vez podamos extraer algún conocimiento útil observando la historia reciente: analizando los límites de su acción en el pasado, los determinantes de las conductas que condujeron a la crisis, podremos tal vez eliminar determinaciones no deseadas y ampliar así la posibilidad de que el movimiento obrero obtenga un mejor resultado en la próximas rondas del juego.

Pero las "enseñanzas de la historia", por desgracia, son siempre ambiguas. En este terreno no cabe "demostrar" nada, sino sólo ofrecer respuestas más plausibles y completas a las preguntas que nos inquietan. Entiendo que explicar algo a alguien es resolverle, siquiera en parte, una perplejidad, generalmente modificando o reemplazando su campo conceptual: introduciendo nuevos conceptos o un nuevo lenguaje que ayuden a hacer inteligible lo que antes no lo era. De este modo, para que la explicación tenga lugar deberá existir primero esa perplejidad, o al menos deberá poder suscitarse. Por ello no me atrevo a esperar que encuentren algo de provecho en las páginas que siguen aquéllos que continúan manteniendo intacta la fe en la necesidad histórica del socialismo, o aquellos otros que "saben" que sólo la traición y la conducta pusilánime de los dirigentes están retrasando el advenimiento de una revolución que está desde hace tiempo y para siempre en la agenda política boliviana. Tampoco, por supuesto, quienes han cortado todas las rutas hacia la emancipación y han llegado a concebir la historia bien como un descenso inevitable por la pendiente, bien como la repetición continua de un presente eternalizado.

AGRADECIMIENTOS

Deseo recordar aquí a alguna de las muchas personas que hicieron que mi estancia en Bolivia entre 1990 y 1992 fuera más fructífera y, sobre todo, infinitamente más agradable. Agradeceré siempre la paciencia y la bondad de Edgar Camacho, director por entonces de la minúscula sede boliviana de FLACSO. Jorge Lazarte y Marcelo Zabalaga comenzaron restando algún tiempo a sus múltiples ocupaciones para atender a mis requerimientos de información para terminar convirtiéndose en entrañables amigos. Espero que Jorge y Marcelo no se molesten si recuerdo un poco más todavía a Christian Jetté, compañero imprescindible en la mitad más una de mis jornadas paceñas. Finalmente, la indómita militante Tere Alem sabe que guardaré siempre para ella todo mi cariño.

No puedo terminar sin agradecer muy en serio el estímulo intelectual y el apoyo personal que he recibido desde el primer momento de Ludolfo Paramio.

Madrid, junio de 1996.

ELEMENTOS DE TEORÍA

EL PUNTO DE PARTIDA: ELECCIÓN RACIONAL Y MATERIALISMO

LA TEORÍA FORMAL

Hoy resulta imposible introducir un trabajo de investigación ofreciendo como aperitivo un resumen nítido de la posición dominante en filosofía de la ciencia. No hay ninguna posición nítida que resumir. Tan sólo parece haber un cierto consenso en torno a la idea de que a las teorías debe permitírseles contener bastante más de lo que la experiencia puede "demostrar" o "falsar", de que es necesario aceptar que esto hará que siempre sea posible apoyar teorías rivales con los mismos hechos, o disputar los hechos mismos desafiando a la teoría que los ha identificado o, finalmente, convivir largo tiempo con una buena cantidad de "anomalías" dormitando a la espera de explicaciones ulteriores. Se supone, desde luego, que la estructura de las teorías debe representar de alguna manera el funcionamiento real del mundo que modelan, pero también que la "demostración" empírica de sus afirmaciones tan sólo prueba que la realidad *puede* leerse de un modo que resulte consistente con ellas. No hay, por lo tanto, un canon de explicación científica. En la respuesta de Lakatos a Kuhn todo se reducía a la postre a una receta práctica: inténtese distinguir entre programas de investigación "progresivos" y "degenerativos".

En este caso, el que la *teoría de la elección racional* se haya ido convirtiendo a lo largo de la última década en el programa de investigación dominante para la explicación de la acción social y política podría deberse a que, pese a las considerables inconsistencias que

ha ido acumulando¹, su identificación de las tendencias y de los datos relevantes es más reveladora y *fértil* que la de las teorías rivales². Si esto fuera así, sería sin duda *el mejor punto de partida para la investigación empírica* o, en la expresión de Abell (1992), "una elección racional de teoría". Por mi parte, considero que hay un par de buenas razones para sospechar que efectivamente lo es.

La primera de ellas es la necesidad de introducir alguna *restricción individualista* en las explicaciones sociales. Aunque es indudable que para construir una explicación *científica* satisfactoria basta en principio con que las regularidades y estructuras que se proponen estén lo suficientemente bien establecidas sobre una base empírica como para que pueda defenderse que caen dentro de un sistema causal, en cuyo caso resultará *innecesaria* cualquier indagación ulterior, también lo es que las ciencias *sociales* no han sido capaces hasta hoy de apelar a esos sistemas causales aparentemente sólidos que permiten a los científicos experimentales conectar en forma de leyes las unidades agregadas con que operan y eludir en la práctica - dado que sus teorías *funcionan*- las inquietantes preguntas por los "microfundamentos" de su saber. En las condiciones de las ciencias sociales, por lo tanto, resulta muy plausible la afirmación de que cualquier explicación adecuada deberá incluir hipótesis sobre el comportamiento de los individuos, y ser cuando menos *consistente* con ellas. Ciertamente, en el debate generado en el seno del marxismo anglosajón a partir de la crítica de Jon Elster a la obra fundacional de Gerald Cohen (1986 [1978]) se han presentado argumentos muy convincentes al respecto, que no cabe reproducir aquí³. Bastará recordar que el propio Elster ha terminado dejando muy claro tanto que los relatos causales viables en ciencias sociales dependen de la identificación de los *mecanismos* específicos que conectan causa y efecto, como que éstos tendrán que basarse *principalmente* en afirmaciones sobre el *comportamiento inten-*

¹ Puede verse un recuento de alguna de estas inconsistencias y un comentario sobre los mecanismos que emplea la teoría para integrarlas en Zay (1992).

² Sobre el "estancamiento" de los principales programas de investigación en ciencias sociales véase Holmwood y Stewart (1991), que no mencionan sin embargo a la teoría elección racional. Para un listado de los avances de este último programa en la explicación de una variedad de fenómenos sociales puede consultarse Friedman y Hechter (1988).

³ La revista *Zona Abierta* tradujo en su momento varias de las contribuciones más destacadas a este debate. También pueden verse los artículos recogidos en Roemer, comp. (1989)

cional de los individuos, sobre las *razones* de los actores⁴.

La segunda es que si se acepta lo anterior, y creo que es necesario aceptarlo, la teoría de la elección racional se presenta como la única alternativa individualista capaz de ofrecer el mismo nivel de *generalización* que los viejos meta-relatos holistas contruídos sobre luchas de clases, contradicciones estructurales o adaptaciones funcionales en una línea universal de "progreso" o "modernización". Dado que el comportamiento de cualquier sujeto debe explicarse a partir de *deseos* y sus *creencias* (Elster, 1989: 20), que son sus razones, y dado que la variedad de unos y otras resulta casi infinita, la pretensión de proponer una teoría general de la acción humana parece a primera vista un empeño absurdo. Pero la teoría de la elección racional intenta hacerlo afirmando de los deseos -*preferencias*, en la jerga de la economía neoclásica- tan sólo que requieren de una descripción históricamente precisa, que deseos y creencias son *independientes*, que sólo los primeros pueden motivar a la acción y las segundas están a su servicio, de tal modo que toda la acción humana es *instrumental*; finalmente, que los sujetos actúan para dar la mayor satisfacción posible a sus deseos, de tal modo que *toda* la acción humana puede describirse como *maximizadora*.

Se asume así, en primer lugar, que cada agente tiene algún conjunto consistente y completo de preferencias a partir del cual puede comparar los resultados de los distintos cursos de acción de que dispone, asignando costos y beneficios a cada uno de ellos: sobre ese conjunto completo y consistente de preferencias el teórico podrá construir una *función de utilidad*, que incluirá en una expresión matemática unívoca todas las motivaciones de cada individuo. En segundo lugar, se introduce una severa restricción sobre las *creencias*: para que la acción sea considerada racional en el sentido de la teoría, el agente deberá tener una idea de las alternativas de que dispone y de las probables consecuencias de cada curso de acción que sea *óptima respecto de la evidencia disponible*. Esta última calificación es la característica distintiva de la teoría de la elección racional, dado que permite sostener la regla de la maximización y defender que las acciones serán no sólo *consistentes* con los motivos - un requisito que incorporan todos los conceptos de racionalidad-, sino *óptimas* dados los motivos⁵.

⁴ Una muy buena introducción al reciente debate sobre las explicaciones legítimas en ciencias sociales es el libro de Little (1991)

⁵ Una descripción sucinta y muy útil de todo esto puede encontrarse en Domenech (1991). También conviene consultar el primer capítulo de Elster (1988).

Se afirma, por lo tanto, que los individuos poseen intereses históricamente precisos, que suelen saber lo que quieren y pueden ordenar el valor de los diversos resultados posibles de sus decisiones; que les interesa disponer de un máximo de información verídica sobre el entorno de elección y disponen de una capacidad cognitiva suficiente para obtenerla; y *que cualquier acción puede explicarse mostrando cómo los actores seleccionaron la alternativa más idónea para la satisfacción de sus objetivos*. Así descrita, la teoría de la elección racional parece contener un indudable "núcleo" de verdad, o al menos uno que se lleva muy bien con el sentido común que ha heredado Occidente de la tradición ilustrada: por ello Alexander Rosenberg ha podido afirmar que se trata en realidad de nuestra "psicología popular formalizada" (Bohman, 1991: 67).

Seguramente porque comparto en muy buena medida esa "psicología popular"; porque prefiero considerar *de entrada* a los trabajadores bolivianos como maximizadores racionales y no como reproductores de normas sociales o nudos de estructuras simbólicas andinas, mantendré que la teoría de la elección racional es de hecho el mejor punto de partida para el investigador forzado a elegir en el menú de una ciencia social cada vez más "multiparadigmática". Pero la elección del punto de partida no sólo se deriva en gran medida de un prejuicio iluminista, sino que además, por desgracia, no dice demasiado sobre los méritos de la teoría de la elección racional y resuelve muy pocos problemas en la tarea de diseñar un buen modelo para la investigación empírica, dado que hoy por hoy la identificación del programa más saludable en las ciencias sociales equivale a lo sumo a poner el pie en el primer peldaño de una tortuosa escalera. Lo que ocurre, en efecto, es que *todos* los programas *en curso* resultan radicalmente *incompletos*, y la economía neoclásica, convertida hoy en buque insignia del proyecto reduccionista del *individualismo metodológico*, no es desde luego una excepción a la regla.

EL CONTENIDO DE LAS PREFERENCIAS

La teoría formal de la elección racional mantiene abierta la cuestión del contenido de los deseos⁶, y es a la vez enormemente precisa y absolutamente indeterminada. Es muy precisa porque la afirmación de que el comportamiento de los individuos es racional en un sentido instrumental elimina de entrada un conjunto de motivaciones o "fuentes" de la acción con un largo curriculum en las ciencias sociales⁷, mientras los requisitos formales de consistencia de deseos y creencias y la regla de la maximación efectúan una selección posterior, eliminando a todas las formas no óptimas de comportamiento instrumental⁸. Sin embargo, es absolutamente indeterminada porque la teoría carecerá de capacidad para afirmar nada sustantivo sobre la acción real de los agentes mientras no incorpore afirmaciones sobre el contenido concreto de las preferencias⁹. Si no informa sobre los deseos, no explicará *qué*

⁶ Cualquier motivo espiritual o material puede incluirse en principio en las funciones de utilidad, pero ello no convierte sin más, como veremos de inmediato, a la teoría de la elección racional en una teoría *general* de la acción ni tampoco la inmuniza contra las críticas *normativas*. Respecto a esto último, creo que aunque el concepto de "strong evaluation" desarrollado por Charles Taylor para describir *la capacidad humana de efectuar juicios sobre el valor moral sustantivo de los deseos* no refuta, como cree Callinicos (1987: 117 ss.), la teoría formal de la acción maximizadora, sí apunta con buenas razones a los límites de la ética utilitarista y al hecho de que la teoría presenta de entrada un marco *insuficiente* para evaluar la razón política. Mi propia utopía exige que no exista un mapa social ideal capaz de reducir los problemas políticos a la administración eficiente, una imagen que la teoría de la elección racional comparte por supuesto con todos los herederos directos de la Ilustración, pero en cualquier caso, y "mientras tanto" no arribemos a ese peligroso paraíso, la razón política nos obliga a juzgar sobre la *legitimidad* de demandas muy diversas y sobre el peso que se *debe* conceder a cada una. Lo racional en política es hasta ahora una mezcla peculiar de propósitos morales y sentido práctico; no es *sólo* cálculo y, por lo tanto, no puede modelarse sobre la teoría económica por muy "formal" que sea ésta: la moralidad Kantiana conserva así, contra Weber, un lugar -¿menguate?- en la acción política.

⁷ Entre ellas el comportamiento normado, el hábito, las emociones repentinas, etc. Algunas pueden intentar retraducirse en términos de conductas óptimas rutinizadas; las que no, entran dentro del ámbito de las motivaciones irracionales y se afirma que tienen una incidencia muy marginal en la explicación de la acción social.

⁸ Dejando fuera de juego, entre otros, al principio de *satisfacción* de Simon, que no exige que las creencias sean óptimas con respecto a la información disponible (Simon, 1983); a las decisiones deformadas por los *marcos* de referencia estudiados por la psicología cognitiva, que informa de que las preferencias no serán óptimas respecto de los afectos y las creencias (Kahneman, Slovic y Tversky, 1982) o a la *deliberación limitada* de Hindess (1988), que avisa de que habitualmente no se reflexionará sobre las posibles consecuencias de todas las elecciones.

⁹ Véase sobre esto la crítica de Brennan (1999) a Jon Elster. En su comentario sobre los problemas de indeterminación que enfrenta la teoría de la elección racional, Elster parece no darse cuenta, en efecto, de que en tanto teoría formal resulta desde el principio totalmente indeterminada: no puede *predecir* ninguna acción en absoluto. Para poder hacerlo deberíamos saber no sólo que los agentes son maximizadores de su función de utilidad y que tienen preferencias consistentes y una buena información sobre el entorno de decisión, sino también cuál es el *contenido* preciso de la función de utilidad. Las cuestiones que trata Elster -básicamente, que a veces hay varias alternativas óptimas y otras ninguna- son por lo tanto problemas de indeterminación de segundo orden. Para criticar la indeterminación de la teoría de la elección racional no es necesario, sin embargo, aceptar la muy fuerte conexión

hacen los actores de la historia, sino tan sólo, en el mejor de los casos, *cómo* lo hacen (Bhaskar, 1989: 72). El modelo formal de la racionalidad de la economía neoclásica sería en este caso una teoría normativa de la acción eficiente, capaz de presentar un conjunto sofisticado de técnicas para alcanzar fines dados, y no una teoría explicativa capaz de arrojar alguna luz sobre la realidad empírica. Para evitar el vacío empírico, por lo tanto, el teórico o, mejor, el investigador interesado en *aplicar* la teoría, parece obligado de entrada a realizar un problemático asalto a la *privacidad* de las gentes.

De "comprender" la privacidad de las gentes, asomándose a sus cabezas, se ocupa la hermeneútica. En principio puede intentar resolverse el problema del vacío empírico y evitar lidiar con los abismos de la interpretación recurriendo al concepto de "preferencia revelada", exigiendo de los deseos tan sólo que sean consistentes en el tiempo y *deduciéndolos de la acción*, pero esta vía desemboca de inmediato en explicaciones tautológicas: los individuos hacen finalmente lo que les gusta, y siempre podrá postularse que están maximizando alguna función de utilidad¹⁰. Desde luego, los investigadores afines al programa tienden desde luego a incluir al menos una asunción sustantiva, introduciendo el supuesto del *egoísmo*. Al hacerlo ensucian la elegancia de la teoría formal, sustituyendo su silencio "matemáticamente inmaculado" (Hollis, 1987: 73) por un psicología bastante desagradable, pero pueden al menos ofrecer un punto de partida al análisis empírico: provisionalmente, por lo tanto, los individuos se ocupan de maximizar su propio bienestar.

Sin embargo, parecería necesario añadir algo más, dado que para que la teoría y la regla de maximización resulten operativas es imprescindible que las utilidades que se deriven de la acción sean *cuantificables* de algún modo. Caso contrario, las hipótesis construídas sobre medidas abstractas de utilidad no tendrían contrastación empírica posible. Y de hecho, lo que suele suponerse es que el individuo maximiza en realidad sus intereses privados defini-

que establece Elster (1991: 11) entre explicación y predicción, que hoy muy pocos filósofos de la ciencia estarían dispuestos a firmar.

¹⁰ El concepto de "preferencia revelada" trata a las acciones de los agentes como índice de sus preferencias subyacentes, de modo que para poder efectuar predicciones sólo se requiere que las preferencias sean consistentes sobre el tiempo: si A escogió x antes que y, no debe elegir y en otro momento si x está disponible. Con el concepto de "preferencia revelada" la teoría neoclásica pretende explicar cualquier acción humana salvando su metodología positivista, pero la circularidad es inevitable, ya que, en palabras de Amartya Sen (1977: 323), «si eres consistente, no importa si eres un egoísta estrecho, un rematado altruista o un militante con conciencia de clase; aparecerás maximizando tu utilidad en el mundo encantado de las definiciones».

dos en el sentido más estrecho; esto es, sus niveles de ingreso o su bienestar *material*¹¹. Si se emplea el concepto de "bienestar material" para enumerar los medios que permiten satisfacer necesidades de consumo básicas -alimentación, vestimenta, vivienda, educación, salud-, parece sensato conceder que los individuos suelen tener un interés prioritario en promover su *bienestar material* y el de sus familias, tanto como las condiciones de *seguridad* que les permiten confiar en su capacidad para continuar haciéndolo en el futuro. Desde luego, es una descripción muy pobre de los móviles de la conducta humana, e implica una separación enormemente cruda entre el conjunto de necesidades "básicas" y otras "espirituales", más "elevadas" o de segundo orden. Mi propia hipótesis, sin embargo, es que de esta concisión dependen tanto alguna de las limitaciones más notorias para la aplicación de la teoría de la elección racional como su fuerza y su capacidad para iluminar una serie de problemas básicos de la dinámica histórica.

Las restricciones que he impuesto sobre las preferencias aportan cuando menos un conjunto *manejable* de intereses para construir funciones de utilidad personal y contrastar las predicciones con la evidencia. Mayores dosis de realismo descriptivo harían sin duda *inmanejable* la teoría (Przeworski, 1987: 112) y, en cualquier caso, me temo que suponer una preocupación prioritaria con el bienestar material privado seguirá siendo un punto de partida bastante realista mientras continuemos atrapados en el "reino de la necesidad". Cualquier otra afirmación general resultaría sin duda mucho más extravagante por mucho que fuera también más agradable. La utilización de magnitudes de ingreso o de bienestar "material", sin embargo, exige de inmediato una calificación: es evidente que éstas tienen una *utilidad marginal decreciente*, de modo que a medida que aumente el ingreso disminuirá la eficacia de la herramienta. Un trabajador europeo con una renta alta estará seguramente menos dispuesto que un minero boliviano a asumir costos para obtener un ingreso adicional y tenderá por el contrario a valorar más otros bienes "intangibles"¹².

Mi propia inclusión del concepto de seguridad o *certidumbre de futuro* en la canasta de necesidades "básicas" puede parecer extraña, y de hecho es una idea relativamente ajena

¹¹ Puede verse, por ejemplo, Przeworski (1988a), donde la potencia heurística real que demuestra tener la teoría de la elección racional depende en buena parte de la asunción de una hipótesis sustantiva muy concreta: «...daré por hecho que, bajo el capitalismo, los trabajadores están interesados en mejorar su situación material, y basaré todo el análisis de sus estrategias y preferencia políticas en esta suposición» (p. 197).

¹² Para una argumentación en este sentido véase Taylor (1990).

a la teoría de la elección racional¹³, pero más adelante defenderé que, combinada con la hipótesis del egoísmo, constituye un elemento fundamental para dar cuenta de la relación entre los intereses individuales y la evolución de las organizaciones sociales y políticas. En términos generales, creo que el valor de la seguridad es relativo tanto a la posición que ocupan los individuos en el mercado como a las características de la coyuntura que viven. La situación general de dependencia de los asalariados, su separación de los medios de subsistencia, incrementa probablemente el valor que tiene para ellos reducir la inseguridad: de ahí tal vez el que la lucha histórica de los movimientos obreros haya sido la lucha por la desmercantilización de la fuerza de trabajo (Savage, 1987: 17-18); pero lo mismo cabe decir del común de la "gente pequeña", tantas veces hipersensible a las amenazas del entorno, atrapada entre el temor al avance de los ricos y el miedo a las "clases peligrosas" (Hobsbawm, 1989: 90). Por lo que respecta a la coyuntura, no cabe descubrir ahora que los procesos de crisis que hacen del futuro algo crecientemente impredecible tienden a convertir a la certidumbre en el factor más valorado del "ranking" de preferencias individuales: los amplios consensos posinflacionarios que han arropado en los últimos años a varios gobiernos latinoamericanos en medio de fuertes caídas de los niveles de bienestar material son sin duda una buena prueba de ello.

LOS ACTORES CORPORATIVOS

LOS LIMITES DEL REDUCCIONISMO: INTERESES INDIVIDUALES Y SISTEMAS DE "MÚLTIPLES NIVELES"

La descripción previa de los intereses "básicos" es sin duda muy cruda y escueta, pero no creo que se pueda defender ninguna hipótesis general más amplia y con contenido

¹³ Sin embargo, Friedman (1983 y 1990) ha hecho alguna indicación en el mismo sentido.

empírico sobre las preferencias individuales como *causas* de la conducta, y para ver por qué podría bastar con dar un breve repaso a la literatura reciente sobre el concepto de *interés* y sus posibles conexiones con la acción social y política. Como es sabido, las dificultades para establecer una relación operativa entre la idea de *interés objetivo* definido desde la teoría marxista o no¹⁴- y las diversas variantes de la acción socio-política de los *trabajadores* llevaron a los estudiosos de la historia del movimiento obrero a concentrarse en el análisis la "cultura" como un conjunto de variables que determinan las preferencias "actuales" de los trabajadores -o sus intereses en el único significado aceptable del término¹⁵-. Pero estos trabajos encontraron de entrada, a mi modo de ver, graves problemas con la representatividad y la interpretación de las fuentes disponibles para reconstruir las preferencias¹⁶; y, en segundo lugar y más importante, tuvieron que enfrentarse a la evidencia de que las mismas imágenes pueden dar lugar a prácticas muy diversas, dado que la acción social y política tiene una dimensión estratégica que no puede deducirse de ningún contenido específico de la conciencia. Si resulta enormemente difícil saber lo que la gente piensa "realmente", y si además saberlo puede resultar a la postre poco informativo para el análisis de las acciones consecuentes, no debería extrañar que la respuesta más extendida al problema de la aparente *subdeterminación de la política por los intereses* haya sido renunciar a la vez al concepto de "interés objetivo" y a la descripción de las formas históricas de la conciencia de clase desde

¹⁴ Recuérdese a los pluralistas americanos de los años 50 y primeros 60, encabezados por Lipset. Su filosofía al respecto está muy bien recogida en la siguiente afirmación de Alford (1965: 68-9): "Una relación entre la posición de clase y el voto es *natural* y esperable" (la cursiva es mía). Una muy buena y breve presentación del núcleo de los problemas y de la discusión en la teoría marxista sobre este punto puede encontrarse en Caínzos (1989).

¹⁵ Junto a la obra de E.P. Thompson, el ensayo de Lockwood sobre la vinculación entre los entornos laborales, las "imágenes de sociedad" y el comportamiento político, se convirtió en el punto de referencia esencial de los estudios sobre los contenidos concretos de la "conciencia" que emprendieron los historiadores marxistas británicos. David Lockwood ("Sources of variation in working class images of society", *Sociological Review* 14, 1966) intentaba mostrar cómo diferentes entornos laborales tendían a promover el surgimiento de distintos imaginarios sociales entre los trabajadores, que él clasificó en "tradicional proletario", "tradicional deferencial" e "instrumental". Sin embargo, también insistió en que el comportamiento efectivo de los individuos no podía deducirse directamente de estas "imágenes". Véase sobre esto el debate recogido en Bulmer (1975).

¹⁶ Sin ir más lejos, los argumentos del trabajo de Thompson (1963) descansaban básicamente sobre estudios de textos y discursos de portavoces radicales. Este problema llevó a muchos a concentrarse en el estudio de diversas actividades prácticas de los trabajadores para inferir a partir de ellas formas de conciencia obrera, y en esta línea Gareth Steadman Jones (1981-82) dedujo la presencia de una "conciencia defensiva" en el proletariado londinense analizando el contenido de las canciones de cabaret. El problema de estos estudios, por lo demás muy interesantes, es que para empezar no está nada claro que los individuos involucrados en una determinada actividad práctica compartan las mismas percepciones sobre ella. La última vía de salida en lo que respecta a las fuentes para abordar la descripción de las "conciencias", la historia oral, enfrenta también, como es sabido, graves problemas de interpretación.

la perspectiva de "los de abajo", para concentrarse en el análisis de las *instituciones políticas*.

En el movimiento reciente hacia la "autonomía de lo político" hay dos corrientes principales. Quienes resaltan los aspectos instrumentales de la acción describen las *estructuras de oportunidades* políticas generadas por los distintos *marcos institucionales* y señalan la importancia de las decisiones estratégicas de los *actores colectivos establecidos* que actúan dentro de esos marcos¹⁷. Los autores más afines al "giro lingüístico", por su parte, se concentran en destacar el lugar de las prácticas discursivas en la *generación de identidades colectivas* y el papel de las instancias representativas -formales e informales- en la *interpretación* de los intereses individuales (Laclau y Mouffe, 1987; Laclau, 1994; Moscoso, 1992). Esta segunda línea de análisis, al contrario que la primera, es radicalmente incompatible con mi propia argumentación, y pergeña un paradigma alternativo que no cabe comentar siquiera brevemente en el espacio de este capítulo: tan sólo mencionaré que la escueta descripción de las preferencias básicas individuales esbozada arriba, irreprochable -creo- desde una perspectiva materialista, impone precisamente, al combinarse con la hipótesis de la elección racional, un límite absoluto a cualquier tentación de disolver por completo el análisis de la acción en las prácticas e intereses específicos de las instancias de representación y en el marasmo de las articulaciones discursivas. Ambas salidas, sin embargo, apuntan directamente a los *límites del programa individualista* señalando con buenas razones los *efectos causales del entorno institucional sobre las conductas de los sujetos*.

Conviene, en efecto, diferenciar nítidamente las aportaciones metodológicas de los defensores del individualismo de su epistemología reduccionista. No es lo mismo avisar de que los relatos causales en ciencias sociales generalmente sólo pueden hacerse inteligibles incorporando alguna hipótesis sobre el comportamiento de los individuos, que mantener, en palabras del más conspicuo divulgador contemporáneo del individualismo, que todos los fenómenos sociales deben explicarse *exclusivamente* a partir de "las propiedades, los objetivos, las creencias y las acciones de los individuos" (Elster, 1985: 5). Ya la afirmación del propio Elster de que los individuos tienen, entre otras, "propiedades relacionales", permite sospechar que su empeño por defender el programa reduccionista podría tener más

¹⁷ El análisis de Katznelson (1985), por ejemplo, enfatiza la importancia de la estructura federal del estado en los EE.UU. para explicar la inexistencia de alineamientos políticos de clase. Przeworski (1988a) ofrece por su parte una argumentación muy convincente sobre la necesidad de atender a las decisiones estratégicas de los partidos obreros para explicar los vaivenes de la relación entre clase y política.

que ver con consideraciones metafísicas que con sus muy legítimas preocupaciones metodológicas. Desde luego, en su crítica a la "teleología objetiva" de muchos relatos funcionalistas, Elster demostró suficientemente por qué aquéllos resultaban completamente indeterminados: basando las explicaciones en las consecuencias y los beneficios para los grupos, "uno podrá generar un número indefinido de 'explicaciones' del mismo explanandum" (Elster, 1985: 28). Que, por lo tanto, cuanto más puedan elaborarse los "microfundamentos", más adecuada -inteligible, determinada- será la explicación de los "macro-procesos". Sin embargo, lo mismo podría decirse a la inversa: las explicaciones individualistas resultarán totalmente indeterminadas si no se sitúa a los actores en relación con su contexto "estructural" y, de hecho, aquéllas contienen siempre afirmaciones sobre estructuras e instituciones: bien como *restricción* externa, o primer "filtro" del rango de las alternativas de acción disponibles, bien como premisa "oculta", en forma de *capacidades* de los actores. En el epígrafe que sigue me ocuparé del problema de las *capacidades* de los actores, en particular las de los actores colectivos, y sólo más adelante, al interpretar la metáfora del juego, añadiré algo sobre los marcos institucionales que regulan la interacción: por el momento, quede claro que cuando falta el "filtro" no hay explicación posible, de modo que el problema real estaría, como afirman últimamente los teóricos, en la "conexión" -*linking*- entre los niveles, y no en la "subsunción" de alguno por el otro (Bohman, 1991: 146 ss.). Si esto es así, no está cuando menos nada claro que el costosísimo e incierto camino en busca de los orígenes que exige el individualismo pueda ayudar demasiado a solucionar los problemas metodológicos *reales* de la ciencia social¹⁸.

Lo cierto es que el reconocimiento de la subdeterminación de las conductas por los intereses revela además hasta qué punto la discusión sobre el nivel adecuado de análisis es en realidad un juego de "cajas chinas" (Hollis y Smith, 1991: 146 ss.), dado que los sistemas sociales modernos son, pese a lo que pudieran dar a entender los términos polares del debate macro-micro, sistemas de "múltiples niveles" (Hannan, 1992), y ello añade sin duda una buena cantidad de obstáculos al programa reduccionista. Para lo que nos ocupará de

¹⁸ La crítica de Hechter (1990) a Michael Taylor por introducir "demasiada estructura social" -la variable "comunidad"- en su análisis de la acción colectiva es un buen ejemplo de este tipo de obsesión por remontar las explicaciones hasta un estado de naturaleza original. El problema, por supuesto, es que la explicación de Taylor no deja de ser adecuada por el hecho de incorporar una variable estructural en sus premisas, y que la elucubración de Hechter sobre el actor colectivo originario no deja de carecer de cualquier relevancia empírica por mucho que cumpla con todas las exigencias del individualismo metodológico.

inmediato, el hecho central a este respecto es que no todos los agentes de los que puede predicarse con propiedad una acción son personas naturales, dado que las *personas jurídicas* - partidos políticos, actores corporativos- cumplen en principio con todos los requisitos necesarios para ser considerados *actores* de pleno derecho: poseen una organización estable, un centro o procedimiento deliberativo y decisorio, y mecanismos estipulables de acción (Caínzos, 1989: 88). Así, el escenario sociopolítico está habitado regularmente por dos tipos de "personas" (Hindess, 1989), de modo que hay algo más que personas e instituciones. Los teóricos individualistas afirmarían de entrada que debería tratarse a esas personas "compuestas" que son las organizaciones para la acción colectiva como un resultado agregado de decisiones individuales, como meros *instrumentos* o *dispositivos estratégicos* de sus miembros¹⁹, pero la imposibilidad práctica de reducir el comportamiento de los sistemas sociopolíticos a un agregado de acciones individuales les llevará a describirlas de inmediato como *actores racionales* de pleno derecho²⁰. La inconsistencia resulta evidente, y de hecho la explicación del comportamiento de las organizaciones, que son sin duda alguna los actores básicos de todos los sistemas históricos contemporáneos, es un punto ciego del programa de la elección racional. El problema, como veremos de inmediato, es que las organizaciones no son *sólo* instrumentos de conjuntos de intereses individuales, ni pueden ser descritas siempre como actores *racionales* que actúan para promover sus intereses en un entorno institucional; por el contrario, ellas mismas *son también instituciones*, y su mayor o menor "racionalidad", su mayor o menor *capacidad de estrategia*, dependerá ante todo precisamente de las variables que las describen *como instituciones*.

¹⁹ Instrumentos que pueden ser no sólo relativamente ineficientes sino muy peligrosos tanto desde la perspectiva del liberalismo político (Coleman, 1982), como desde la perspectiva del liberalismo económico (Olson, 1986).

²⁰ Hannan (1992), pp. 24-26. Hannan se refiere a la obra de James S. Coleman (*Foundations of Social Theory*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990) que ofrece seguramente el tratamiento más completo de la problemática de los actores corporativos desde la teoría de la elección racional.

INTERÉS COLECTIVO, ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD DE ESTRATEGIA

Por supuesto, el problema del contenido "objetivo" de las preferencias se complica enormemente cuando los actores de la teoría pasan a ser individuos jurídicos. Si incluso la asunción, en apariencia trivial, de que las empresas capitalistas suelen tener una estructura de preferencias unitaria encabezada por la maximización del beneficio en el mercado está siendo crecientemente cuestionada en el campo de la teoría de las organizaciones²¹, ¿qué cabrá decir de las preferencias de un partido político o de un sindicato?. En principio parece posible defender que la *maximización del propio poder* para alcanzar cualquier meta es un interés objetivo de toda organización en tanto que tal. En ciertos contextos institucionales y normativos resulta difícil discutir que el apoyo electoral es un buen referente empírico del poder de los partidos, de modo que cabría atribuir a éstos el objetivo "estandarizado" de maximizar votos. En el caso de las organizaciones sindicales, a las que dedicaré los párrafos que siguen, el nivel de afiliación sería tal vez el candidato más plausible a referente empírico del "poder", aunque su utilidad suele ser mucho más reducida o incluso nula: en Bolivia, por no ir más lejos, la firma de un contrato laboral supone la afiliación automática al sindicato de empresa, perteneciente a una federación de rama encuadrada en la central sindical única. Dejemos, sin embargo, el problema de los indicadores, y *partamos de la siguiente afirmación general* que creo podría resultar aceptable: las organizaciones desean maximizar su poder, y el poder de las organizaciones del movimiento obrero, en tanto que instancias representativas, dependerá en el medio plazo, en cualquier sistema medianamente "abierto" y competitivo, de su capacidad para satisfacer las expectativas históricamente precisas de bienestar y seguridad del conjunto de individuos racionales -capaces de evaluar la utilidad relativa de su apoyo a la organización- que desean representar.

La estructura de preferencias de cualquier organización obrera, por lo tanto, podrá expresarse en una función de utilidad unitaria que refleje la máxima satisfacción posible del "interés general" de un colectivo de individuos. Lo primero que deberemos preguntarnos al analizar sus conductas, por lo tanto, es de qué colectivo estamos hablando en cada caso. Las decisiones de las organizaciones del movimiento obrero, en efecto, sólo podrán evaluarse a

²¹ Una presentación relativamente reciente del "estado de la cuestión" en teoría de las organizaciones es la obra de Pfeffer (1992).

partir de las *reglas de límites*²² que demarcan los *sistemas de referencia* contra los que los sujetos comparan los cursos alternativos de acción (Scharpf, 1989: 153). Los sistemas de referencia sobre los que operan las organizaciones del movimiento obrero pueden situarse en diferentes niveles -empresa, comunidad o sindicato local, sector productivo, clase, nación-, y cualquiera de estos agregados puede ser, en un momento u otro, el referente efectivo para la evaluación de los resultados de las acciones. Para lo que nos interesa aquí, señalan quién pertenece y quién no al grupo relevante, a quienes tienen en cuenta y a quienes excluyen cada vez las organizaciones al valorar los resultados de sus decisiones. En determinados casos, como en el de los "movimientos obreros y populares" del estilo de la Central Obrera Boliviana (COB), que pretenden representar los intereses de la práctica totalidad de la población nacional, las reglas de límites que demarcan los sistemas de referencia "hacia afuera" pueden llegar a ser casi irrelevantes: el sistema de referencia de los liderazgos de la central sindical boliviana es, en efecto, el "pueblo" de Bolivia, y sólo cabrá evaluar los resultados de sus decisiones contra las expectativas de bienestar material y seguridad -o, si se prefiere, los *intereses* históricamente precisos- del "pueblo".

En este punto puede surgir un problema de interpretación que conviene despejar, dada su importancia. Se trata de si debemos depender de las expresiones -*utterances*- de los actores -en el caso de la COB, su *autocomprensión* universalista- para evaluar la racionalidad de sus conductas; o si, por el contrario, resulta más conveniente hacerlo a partir de algún análisis de su entorno *objetivo* de elección. Apostaré por esta segunda salida, manteniendo que el dato clave para la descripción del sistema de referencia *efectivo* de la organización será la magnitud relativa y la situación de los recursos de poder que pueda movilizar en cada coyuntura. Como veremos en el trabajo, los recursos potencialmente movilizables por el movimiento sindical boliviano se limitaron durante un largo ciclo histórico al poder de negociación del *proletariado minero* en la *arena económica*, pero se desplazaron violentamente hacia la *arena política* a raíz de la crisis del modelo de acumulación primario-exportador y la disolución del equilibrio autoritario. En la coyuntura de transición, el poder de la COB quedó atado a la legitimidad democrática del movimiento obrero, y en este contexto el "pueblo" de Bolivia se convirtió, con independencia de cuál fuera la sinceridad

²² Tradúzco como "reglas de límites" las "boundary rules" que encabezan la clasificación de los tipos de reglas que ensaya Ostrom (1986: 468-71) en su agenda para el análisis institucional.

de su autocomprensión universalista, en el sistema de referencia de la organización sindical.

Las reglas de límites, en cualquier caso, unen y separan: describen unidades agregadas que pueden ser tratadas como "actores" -el "movimiento popular"- . *Idealmente*, trazan también la frontera entre el territorio de la interacción con otros actores independientes y el campo sobre el que se ejerce el *gobierno interno* de la organización, y esto introduce ya una dimensión distinta. Las organizaciones del movimiento obrero, en efecto, *son siempre actores* dado que poseen una estructura de preferencias -el "interés general" del colectivo- que es distinta de las de los individuos y de la que se derivará en cada caso una serie de cursos de acción alternativos con diversos resultados asociados. Pero *sólo en determinadas condiciones* podrán ser descritas como *actores racionales*. De entrada, su estructura de preferencias sólo tendrá efectos causales sobre su acción cuando posea la capacidad de gobernar efectivamente la conducta de sus miembros individuales. Hemos topado, por lo tanto, con la problemática del *poder institucional*: las organizaciones podrán actuar racionalmente para maximizar su poder hacia el futuro, promoviendo cualquier "interés general" de un colectivo, en la medida en que sean capaces de ejercer poder en el presente, comprometiendo los recursos o las capacidades de sus miembros en una acción concertada. En cualquier momento, toda organización dispone de un nivel de recursos potenciales y de unas *estructuras de autoridad* que la describen *como institución* y determinan en qué medida será capaz de movilizar efectivamente esos recursos para la acción colectiva.

Los procesos de movilización de consenso, control social y burocratización, en efecto, determinan la autonomía y el poder de las organizaciones corporativas, *creando un poder sin el cual sería imposible alcanzar determinados objetivos colectivos* (Czada, 1991: 262). El poder organizado, sin embargo, también permite oprimir e imponer intereses personales y sectoriales sobre los intereses mayoritarios, y estas "dos racionalidades" de la dinámica organizacional han ocupado desde la obra de Robert Michels un lugar central entre las preocupaciones de los estudiosos de las organizaciones del movimiento obrero²³. La *tradición weberiana* se ha movido generalmente entre ambos extremos, reflexionando sobre el autoritarismo latente en la expansión de las burocracias y afirmando a la vez que la eficacia de cualquier sistema, la calidad de sus decisiones políticas y administrativas, es un producto de la buena regulación institucional (March y Olsen, 1989). En contraste, tanto la *tradición marxista*

²³ Puede encontrarse un recuento de los principales tópicos de la discusión en Crouch (1982), pp. 161-189.

como la *teoría de la elección racional* tienden a no encontrar ningún aspecto positivo en las estructuras de autoridad que ordenan el funcionamiento de los grandes grupos, y en particular, para lo que nos ocupará en el trabajo, las de las organizaciones del movimiento obrero.

Los autores marxistas suelen seguir a Michels en su insistencia sobre los efectos nocivos del poder de las burocracias sindicales, interesadas en mantener las relaciones de dominación enraizadas en la estructura del orden capitalista para perpetuar así su propia posición en el sistema a costa de desviar y sofocar las "auténticas" demandas de las bases²⁴. La utopía que subyace a esta percepción radicalmente negativa del poder institucional es, por supuesto, la disolución de la política en una asociación de productores libres en la que no existirían relaciones de autoridad de ningún tipo (Nove, 1987: 75-8). Por su parte, los teóricos afines al individualismo metodológico de la elección racional, dado que comienzan localizando la acción social en ecologías atomísticas e igualitarias de las que se derivan a lo sumo normas básicas de reciprocidad (Axelrod, 1986), tienden a ver a las organizaciones representativas como un mero producto de la "colusión" de "intereses estrechos" que sólo puede provocar opresión, rigideces y distribuciones inequitativas de los recursos (Olson, 1986). El horizonte es también, como se sabe, la disolución de la política, ahora en un universo en el que el mercado sería el único mecanismo legítimo de agregación de los intercambios entre individuos libres.

Sin embargo, pese a las devastadoras recetas políticas que suelen -y pueden- extraerse de ella, la teoría neoclásica de la acción colectiva desarrollada a partir de la obra de Olson (1992 [1965]) ha introducido de hecho un nuevo lenguaje que permite formular de un modo riguroso el viejo problema de la traducción de los intereses generales en acciones individuales efectivas, ofreciendo un marco bastante más realista que el del paradigma colectivista del marxismo clásico para modelar alguno de los problemas de gobierno interno que enfrentan en la práctica las grandes organizaciones obreras. La teoría de la elección racional combinada con la hipótesis del egoísmo permite afirmar, en efecto, que los individuos sólo colaborarán en la producción de un bien colectivo cuando el costo que deban asumir sea menor que la

²⁴ Un ejemplo reciente es el trabajo de Hyman (1989), donde el autor afirma entre otras cosas que las burocracias sindicales están interesadas en mantener la "paz establecida" y favorecen el control de los trabajadores por los administradores del capital mediante la supresión de la agenda de las discusiones de «cuestiones fundamentales de principio» (p. 40).

utilidad que esperen extraer de su participación unilateral, y el corolario de esto, al que Olson debe su inmensa popularidad, es que dado que en los grupos grandes tal cosa no ocurrirá nunca, la estrategia dominante de cada individuo será no cooperar y adoptar la actitud del "free rider" que espera a recoger los frutos del esfuerzo ajeno sin asumir los costes (Olson, 1992). La acción racional individual, por lo tanto, contradice y derrota al interés colectivo²⁵. Es fácil ver, por ejemplo, que la contención de un proceso inflacionario es un resultado cuya producción *puede*²⁶ interesar a todos los trabajadores, y que la acción de cada uno de ellos, librada a su propia dinámica, puede tender a producir una competencia inter-sectorial en la que las reivindicaciones salariales se empujarán mutuamente hacia arriba, multiplicando la inflación y provocando un resultado colectivamente subóptimo. Todos estarán mejor si la economía se estabiliza, pero cabe prever que cada uno intente eludir los costes y esperar a que sean los demás quienes contengan sus demandas; para cada actor sólo merecerá la pena cooperar si los demás lo hacen, pero cuando los otros lo hagan cada uno sólo tendrá un incentivo adicional para reemprender una política salarial agresiva.

La generalización de este tipo de conductas autodestructivas en la historia *real* de las organizaciones obreras permite afirmar de entrada -y esta es una afirmación que cuenta con abundante respaldo empírico- que una *estructura institucional fragmentada* en términos pluralistas, con una diversidad de sindicatos y/o élites en competencia, tendrá menos posibilidades de perseguir con éxito objetivos comunes que una estructura con organizaciones grandes y monopolistas -"omnicomprensivas" en la terminología de Olson- que podrán promover mejor el interés colectivo en la cooperación²⁷. La ubicuidad del Dilema del Prisionero -la siniestra "trampa hobbesiana"- exige en cualquier caso tomar en serio las conclusiones de la teoría neoclásica de la acción colectiva y aceptar que la "representación" de los intereses en las grandes organizaciones debe implicar necesariamente *coacción*, sanciones que disuadan a los individuos de la no cooperación (Przeworski, 1987: 121). Esto, combinado con las "dos lógicas" de la acción colectiva de Offe y Wiesenthal (1985), que

²⁵ Una muy buena introducción en castellano a la lógica del razonamiento Olson y a las distintas soluciones que se han propuesto para la "paradoja del free-rider" es la de Aguiar (1990).

²⁶ En el siguiente epígrafe sobre la "metáfora del juego" explicaré el sentido de este condicional.

²⁷ La superioridad de las estructuras centralizadas es desde luego una de las hipótesis principales de la amplia literatura sobre las "ventajas del neocorporatismo". Véase, por ejemplo, Cameron (1984).

introducen una clara distinción entre las fuentes de poder de la clase capitalista -el capital acumulado- y de la clase obrera -la unidad o "asociación" de los trabajadores²⁸-, deja ver ya que el poder de las clases trabajadoras es centralmente una *variable organizacional* en la que *la estructuración vertical de la autoridad formal* desempeña un papel clave.

Lo anterior merece sin duda un par de calificaciones. La primera es, por supuesto, que se está hablando de grupos amplios. En grupos de dimensiones reducidas y relativamente cerrados en los que se da una gran intensidad de relaciones personales "cara a cara" y que pueden ser descritos como "comunidades" (Calhoun, 1988), es mucho más difícil comportarse como un "free-rider", dada la eficacia de las sanciones informales del grupo de compañeros. Así, las organizaciones que actúen sobre estructuras institucionales de tipo comunitario podrán desplegar una fortísima capacidad para la acción colectiva sin ocuparse de desarrollar una sólida estructuración vertical del poder formal. Este es el caso, como veremos, de los sindicatos mineros de Bolivia.

Por otro lado, es indudable que a medida que aumente la *solidaridad* entre los miembros del grupo disminuirá la importancia tanto del poder institucional formal como de las siempre asfixiantes presiones comunitarias en la promoción de la acción colectiva, y nadie que conozca someramente la historia de las luchas obreras podrá negar la importancia de aquélla. Pero para que la solidaridad surja y arraige entre los individuos será crucial el que éstos hayan vivido una historia compartida, una larga interacción que haya permitido el desarrollo de la preocupación y el conocimiento mutuos (Elster, 1984: 53). En Bolivia este podía ser de nuevo el caso de los mineros y de cualquier otro segmento parcial, pero por desgracia la experiencia histórica del colectivo amplio representado en la COB estuvo siempre muy alejada de esas condiciones. Con independencia de las variables específicas del caso boliviano, sin embargo, creo que es necesario conceder que si en general es cierto que el poder jerárquico "corrompe" no parece serlo menos que la solidaridad no puede exorcizar permanentemente y por completo los intereses egoístas *en los grandes grupos*.

En primer lugar, por lo tanto, la eficacia del poder institucional centralizado/articulado en las organizaciones obreras es importante porque en demasiadas ocasiones la acción racional egoísta de los individuos tiende a derrotar al interés del colectivo. Sin embargo, en el marco analítico de Olson incluso las organizaciones más

²⁸ Therborn (1983: 41) afirma por su parte que «el principal recurso de poder de que dispone la clase obrera es la *colectividad*: especialmente su capacidad para unirse para emprender acciones concertadas».

"omnicomprensivas" -cuya existencia misma, por otra parte, no puede explicarse a partir de la teoría neoclásica- sólo pueden representar *un interés singular compartido de un modo idéntico* por todos los representados. Así, si la cooperación para la producción del bien colectivo es un interés universal y unívoco, los desacuerdos potenciales entre los miembros se limitarán a decidir cuánto se va a producir y a qué precio, y el papel de la organización a garantizar, mediante incentivos y sanciones, que los más remisos a asumir los costes cooperen en la empresa. El modelo, por lo tanto, no permite plantear los problemas, sin duda alguna fundamentales, de cohesión interna y "voz" que enfrentan en la práctica todas las grandes organizaciones²⁹. Por lo que respecta a las organizaciones obreras, tal vez sólo la lucha contra la inflación puede modelarse aproximadamente como un "bien colectivo" transparente, y es fácil ver que la gran mayoría de las dificultades que enfrenta en la práctica la capacidad de estrategia de las grandes organizaciones obreras atañen, por el contrario, a su aptitud para *definir en cada situación de elección el interés general de un modo acorde con el sistema de referencia sobre el que opera e "imponer los sacrificios necesarios" sobre determinados intereses*: los de unos grupos frente a otros, los de corto o largo plazo (Scharpf, 1991: 283).

Generalmente, las grandes organizaciones representativas deben, en efecto, *construir* una función de utilidad única a partir de intereses potencialmente muy diversos en las dimensiones *intertemporal* e *interpersonal*, y dado que es imposible maximizar más de un valor al mismo tiempo será siempre inevitable optar entre las *prioridades competidoras*. Como se verá, el problema es distinto -en parte previo y desde luego mucho más complejo- al planteado por Olson, dado que aquí no se trata de hacer que cada uno se comporte de acuerdo con el interés colectivo, asumiendo la parte alícuota de los costes, sino de *elegir entre diversas definiciones posibles del interés colectivo que obligarán a su vez a distribuir costes diferenciales*.

Por supuesto, las grandes organizaciones podrían ser descritas como actores racionales si hubieran alcanzado tal grado de *integración cognitiva y normativa* entre los individuos incluídos en su sistema de referencia que éstos compartieran realmente una misma "identidad". En el caso de la COB, esto se hubiera traducido en algo como que una gran mayoría de los miembros del "pueblo" de Bolivia reconociera de modo directo y espontáneo

²⁹ El término "voz" está tomado, por supuesto, de Hirschman (1977).

un interés común transparente y actuara para promoverlo siguiendo una norma de cooperación incondicional, olvidando por completo sus intereses privados³⁰. Pero siempre que no sea esperable que ocurra algo parecido a eso, la racionalidad de la organización dependerá de la medida en que disponga de *mecanismos adecuados de deliberación y toma de decisiones colectivas* y de *poder institucional para discriminar* consistentemente contra ciertas perspectivas e intereses, y por lo tanto contra ciertos grupos.

La importancia central de las estructuras de autoridad que describen a las organizaciones como instituciones, en efecto, no se deriva sólo de que los individuos de los grupos suelen ser demasiado egoístas para actuar de acuerdo con el interés general, sino también a que *los intereses privados son demasiado diversos y el mundo demasiado ambiguo y complejo para que resulte esperable una convergencia espontánea en una misma definición del interés general*. Una gran organización "popular" como la Central Obrera Boliviana deseará sostener simultáneamente las subvenciones públicas a los alimentos de un grupo de trabajadores mineros, los ingresos de todos los asalariados urbanos, las ganancias de los pequeños comerciantes, y obtener precios "justos" para los productos de los campesinos independientes, pero deberá ocuparse de jerarquizar esas metas sustantivas construyendo una función de utilidad unitaria -definiendo el "interés general" del grupo- siempre que se planteen conflictos prácticos entre ellas. Del mismo modo, en cualquier momento la organización podrá defender definiciones alternativas del interés general en la dimensión intertemporal, privilegiando con mayor o menor intensidad los resultados de corto, medio o largo plazo, y deberemos explicar tanto por qué optó por una u otra definición, generando una "estructura de preferencias" determinada, como por qué fue más o menos capaz de hacer efectivas sus decisiones.

El problema es que si tomamos realmente en serio estas dimensiones complejas de la capacidad de estrategia no sólo nos alejaremos un paso más del programa reduccionista del individualismo metodológico, al profundizar en los efectos causales de los distintos diseños institucionales que "filtran" la acción estratégica de los individuos. También deberemos reconocer la importancia que tienen las *motivaciones normativas* en la conducta de los

³⁰ Al estilo de los mejores sueños marxistas sobre el comportamiento del "hombre nuevo", "brillante", sumamente racional, socializado y humano". Véase Nove (1987), pp. 15 y 79 ss.

actores³¹. Las *estructuras de autoridad* heredadas por la organización de su historia previa, en efecto, estarán respaldadas en medida variable por *normas/valores* que determinarán *compromisos* con intereses específicos y fijarán *las condiciones y los límites del ejercicio del poder* por parte de los liderazgos establecidos.

En primer lugar, aunque nunca ocurrirá, salvo tal vez en cortos intervalos, que los cálculos de interés de los individuos queden disueltos en una identidad colectiva, no conviene despreciar la importancia relativa que tuvieron los distintos niveles de identificación - empresa, comunidad o sindicato local, sector, clase, nación- en la trayectoria previa de las organizaciones. De hecho, creo que resultaría imposible explicar las conductas del movimiento obrero boliviano en la coyuntura democrática desconociendo la identidad *minera* que fue consolidando a lo largo de su historia. Afirmé arriba que las *reglas de límites*, que demarcan los sistemas de referencia sobre los que operan las organizaciones separando a los individuos del colectivo de aquéllos que se reconocen como "los otros", pueden llegar a ser casi irrelevantes para actores populares tan "omnicomprensivos" como la COB. Pero entonces cabrá esperar que éstas operen fundamentalmente "hacia adentro", jerarquizando el "valor" o determinando la *centralidad* de los distintos intereses (Moscoso, 1992: 104). Por supuesto, estas reglas tienen una traducción formal en la distribución de posiciones de poder en la estructura orgánica del actor corporativo, pero el problema va más allá del número de votos en los órganos de gobierno. En cualquier momento, en efecto, el poder diferencial de los grupos tendrá un *arraigo normativo* variable: bien habrá sido más o menos "interiorizado" en algún sentido o, si se prefiere, habrá llegado a *ser* parte de la identidad misma de los miembros del colectivo³²; bien será *valorado* por éstos como más o menos *legítimo*.

Así planteado, es evidente que el asunto desborda el marco de la teoría de la elección racional, dado que exige reconocer que los individuos pueden actuar por alguna *lealtad*

³¹ El problema de las normas como fuente independiente de la conducta está tratado *in extenso* en Elster (1989b), cap.3.

³² Alessandro Pizzorno afirma en este sentido que «la misma estructura de nuestro yo está conformada por normas de reconocimiento. No seguir ciertas normas implica simplemente perder los criterios que usamos para dar sentido a nuestras acciones» (cit. en Moscoso (1992), p. 147). Por mi parte, no entiendo por qué esta redefinición debería permitir "superar las visiones sobresocializadas de la acción humana". Conviene recordar en este punto que el propio Parsons se defendió de las críticas que señalaban cómo las normas no determinan la conducta en un sentido causal, afirmando que los individuos no *tienen* normas de conducta internalizadas sino que más bien *son*, entre otras cosas, un sistema de normas. Véase Bohman (1991), p. 37.

tradicional, o por consideraciones de *deber* ajenas a sus intereses corrientes (Hollis, 1987: cap.6), respaldando en mayor o menor medida los "derechos" adquiridos por determinados intereses dominantes. El compromiso de los actores con metas específicas, en cualquier caso, es algo que en el lenguaje de la economía neoclásica sólo puede describirse como una preferencia particularmente intensa, y la intensidad de las preferencias no la podemos medir. Apunté arriba que la idea en que se basa el concepto de función de utilidad es que pueden asignarse magnitudes de valor comparables a los varios resultados posibles asociados con la acción, ya que para que una decisión racional sea posible resultará necesario que el agente pueda sopesar los "trade-offs" entre costos y beneficios que cabe esperar se derivarán de cada elección alternativa. Pero aunque se conceda que generalmente es factible ordenar las preferencias, seguiríamos sin saber nada sobre su *intensidad* relativa, y por mucho que técnicamente resulte posible generar una ordenación *cardinal* proponiendo elecciones entre conjuntos de resultados especificados probabilísticamente, la solución es meramente formal e inútil para la investigación empírica³³. El asunto es grave, porque casi todas las elecciones políticas, casi todas las decisiones históricas de las organizaciones del trabajo, plantean preguntas sobre la intensidad de sus "preferencias", sobre su nivel de compromiso con objetivos y metas específicos. Un partido en el gobierno, por poner un ejemplo conocido, querrá sin duda alcanzar simultáneamente todos los fines del "cuadrilátero mágico" de la política económica -crecimiento, pleno empleo, estabilidad monetaria y equilibrio externo- y es probable que pueda ofrecerse una clasificación ordinal creíble de sus preferencias por los cuatro objetivos, pero para explicar sus acciones será fundamental conocer también la intensidad con que persiguió la consecución de cada uno de ellos. Los compromisos normativos con intereses específicos serán más o menos fuertes y podrán entrar en contradicción más o menos abierta con otros intereses relevantes para el sistema de referencia de las organizaciones, en función de las restricciones que imponga en cada caso el entorno de elección. Pero siempre será imprescindible incorporar al análisis de las conductas la historia previa del actor, a no ser que carezca por completo de ella, para saber algo sobre

³³ Si un individuo tiene un conjunto consistente de preferencias ordenado como A(1), B(2) y C(3) y se le propone una serie de elecciones entre B y un boleto de lotería con una probabilidad definida de obtener A, o C en su defecto, habrá una probabilidad p en la que será indiferente entre la seguridad de obtener B y el boleto de lotería con la probabilidad p de obtener A y la probabilidad $1-p$ de obtener C; conociéndola, se podrá determinar el valor relativo que le asigna el individuo a cada resultado. Lo que resulta imposible se trasladar este procedimiento, que ya enfrenta problemas para medir la intensidad real de las preferencias en un laboratorio -dada la necesidad de conocer la actitud de los sujetos frente al riesgo-, a cualquier problema relevante para la ciencia social empírica.

los compromisos normativos con determinados intereses dominantes que habrá ido desarrollando sin duda a lo largo del tiempo.

Si las reglas de límites jerarquizan los intereses operando "hacia adentro" del sistema de referencia de la organización, distribuyendo el poder entre los grupos en la estructura de autoridad de la organización, las *reglas de decisión*, que gobiernan el tránsito entre las preferencias de los individuos y grupos y las decisiones colectivas, especifican también las condiciones y los límites del ejercicio del poder organizado, y parecen tener efectos causales especialmente directos sobre la conducta de los actores corporativos. Creo que es muy poco lo que puede decirse en abstracto sobre esto sin incluir discusiones muy extensas sobre puntos de vista radicalmente contrarios³⁴, pero tal vez quepa ensayar alguna generalización, sin duda muy precaria, a partir de su clasificación en tres tipos ideales: reglas *jerárquicas*, *mayoritarias* y *consensuales* (Scharpf, 1989: 153-9; Scharpf, 1991: 284-6).

En cualquier caso, conviene tener muy presente que el impacto diferencial de los distintos sistemas de decisión sobre el nivel de "racionalidad" deberá entenderse en combinación con la distribución interna del poder entre los grupos fijada por las reglas de límites y dependerá, al igual que en el caso de éstas últimas, de las exigencias específicas de cada entorno de elección. Así, a medida que las normas se desplacen de la jerarquía al consenso, exigiendo en el límite el acuerdo universal para que la decisión sea considerada legítima, será más fácil para cada parte defender sus posiciones, evitando cualquier redefinición del "interés general" que amenace con debilitarlas. Las autoridades jerárquicas pueden favorecer arbitrariamente cualquier interés, la regla de la mayoría permite cuando menos redistribuciones en desmedro de los intereses minoritarios, y siempre será necesaria una fuerte estructuración *vertical* de la autoridad legítima cuando la organización deba gobernar la conducta de sus representados en cualquier situación en que su estructura de preferencias - el "interés general" del colectivo incluido en el sistema de referencia- exija sacrificios sobre intereses consolidados. El resultado será entonces la parálisis -inercia- o la desintegración del poder central, impidiendo a la organización adoptar decisiones efectivas bien para aprovechar nuevas oportunidades que resultan atractivas en conjunto pero dañan la posición de algún

³⁴ Habría que incluir, por ejemplo, las elaboraciones teóricas sobre las posibilidades y los límites de los sistemas democráticos de gobierno propuestas por G. Sartori (*Teoría de la democracia. I. El debate contemporáneo*, Madrid: Alianza, 1988) y D. Held (*Modelos de democracia*, Madrid: Alianza, 1992), y los análisis sobre los efectos de la participación en la conducta de las organizaciones (A. Clāyre, comp., *The political economy of Co-operation and Participation*, Nueva York: Oxford University Press, 1987).

grupo, bien para minimizar pérdidas en respuesta al empeoramiento de las condiciones del entorno.

Como veremos, las reglas de decisión en la red sindical boliviana estaban y están fuertemente sesgadas hacia la unanimidad, y el "basismo" asociado a la tradición minera de *democracia directa comunitaria* permite legitimar la desobediencia cualquier decisión de los órganos de gobierno que contradiga el interés particular percibido por el grupo. Por supuesto, la reglas formales de la COB describen un sistema de gobierno mayoritario, pero el universo normativo del "basismo" hace que la organización opere *de facto* bajo normas consensuales. Finalmente, también parece cierto que los sistemas de decisión jerárquicos tienen mayor libertad para tomar en cuenta consideraciones de largo plazo, mientras los elevados "costos de transacción" asociados a las reglas consensuales tenderán, para reducir la complejidad a unos límites manejables, a centrar las discusiones en las consecuencias inmediatas de las acciones: una intensa competencia entre puntos de vista diversos, en efecto, tenderá a producir un sesgo sistemático hacia las definiciones más "miopes" -cortoplacistas- del interés general. Esto será más determinante, por supuesto, a medida que aumente la incertidumbre del entorno, multiplicando el número de interpretaciones plausibles sobre las consecuencias futuras de las decisiones.

LAS METÁFORAS DEL JUEGO

EL MODELO ANALÍTICO

Las elaboraciones clásicas sobre la decisión racional en microeconomía tratan a los resultados de la acción como valores fijos, determinados por el contexto *paramétrico* externo, el entorno "natural" del agente, que puede ser más o menos conocido, presentando grados variables de *riesgo* o *incertidumbre*³⁵ que harán más o menos difícil asignar probabilidades

³⁵ Véase más adelante p. 43 para una definición de estos conceptos.

a los distintos resultados de la acción. La coyuntura económica internacional, por ejemplo, es siempre un parámetro para cualquier organización social o política boliviana: tan sólo podrá conocer mejor o peor las oportunidades y desafíos que le presenta, determinar con mayor o menor precisión su impacto *probable* sobre los resultados de sus decisiones. Los tipos de interés y los precios de las materias primas en los mercados mundiales en la primera mitad de los ochenta eran así parámetros esenciales del contexto de elección de la COB y el gobierno de Bolivia, en tanto que su evolución restringiría sus alternativas y resultaría a la vez igual de impermeable a sus propias acciones -aunque, por fortuna, algo más predecible- que la evolución del ciclo climático en el Oriente del país. Lo mismo cabe decir de las dotaciones de recursos que los actores reciben como herencia de acciones que tuvieron lugar en el pasado, y el entorno paramétrico en el que las organizaciones intentan maximizar su poder puede describirse en cualquier momento como un límite *ecológico*³⁶.

Pero las decisiones de los actores de la historia ocurren casi siempre en contextos *estratégicos*, y esto añade una dimensión muy distinta a sus *estructuras de oportunidades*. En el entorno del decisor, en efecto, no sólo hay parámetros: también hay otros *estrategas* que actúan a su vez para promover sus propios intereses. Por ello, los resultados asociados a los distintos cursos de acción no son probabilísticos, dado que no dependen sólo del impacto de herencias y acontecimientos externos inevitables, sino también de las decisiones de sujetos racionales: lo que obtenga cada uno en cada caso estará ligado a lo que hagan los demás y a lo que obtengan los demás, de modo que deberá escoger su mejor alternativa a partir de sus expectativas sobre la actuación de los otros, y contando con que ellos harán lo mismo (Elster, 1984: 40-1). A una central sindical le irá mejor o peor si el gobierno opta por aplicar una u otra combinación de política económica; esas políticas, a su vez, tendrán un éxito variable en función de las respuestas del sindicato; por lo tanto, ambos decisores deberán elegir siempre sus propias estrategias contando con sus alternativas mutuas y con las de

³⁶ Por supuesto, todos los acontecimientos sociales y políticos que ocurren en la "*economía-mundo*" contemporánea (Wallerstein) podrían describirse en otro nivel como el resultado agregado de una serie casi infinita de decisiones de actores racionales interconectadas de un modo complejo. Pero hay muchísimos -demasiados- jugadores moviendo las piezas simultánea y sucesivamente. Esto hace, por ejemplo, que no podamos encontrar ya "otros" a quienes culpar de los malos resultados y los riesgos que nos amenazan porque, en palabras de A. Giddens (1993: 126), la responsabilidad «no recae en personas concretas ni en grupos a los que se pueda exigir "llevar las cosas por el buen camino"». También que por mucho que no exista una *realidad* económica independiente de las expectativas y acciones de los sujetos, los resultados emergentes de ese número infinito de decisiones serán siempre un parámetro para casi cualquier sujeto individual. Este tendrá delante el equivalente de un actor todopoderoso y relativamente arbitrario en cuyos resultados no podrá influir: su problema, por lo tanto, se limitará a intentar anticipar lo mejor posible sus dictámenes.

cualquier otro conjunto de posibles rivales o aliados. Si el gobierno o la central sindical fuesen *la única voluntad en el escenario*, bien porque las acciones de los otros pudiesen describirse como una constante mecánica, bien porque no afectarían a su suerte, simplemente escogerían su mejor estrategia a partir de alguna lectura de los datos del entorno paramétrico; si no lo son, cualquier apuesta por una política económica determinada deberá contar con las decisiones estratégicas de los otros, y será también un intento deliberado de obtener su *cooperación* o de *derrotar* su resistencia. Las decisiones de los actores de la historia, por lo tanto, sólo podrán explicarse atendiendo al hecho de que suelen ser *simultáneamente* una respuesta a las restricciones dadas por los parámetros externos y a la conducta *esperable* de otros estrategas con capacidad para influir en sus resultados.

Estos procesos de *interdependencia* de los resultados y las decisiones son el terreno de la *teoría de juegos*, la principal herramienta auxiliar de la teoría de la elección racional. Y si convenimos en afirmar que los actores de la historia están "jugando un juego" siempre que sus conductas y sus resultados mantienen relaciones de dependencia mutua, parece evidente que casi cualquier problema de interés para las ciencias sociales es un "juego" en este sentido. Por mi parte, creo que tratar a los procesos de interacción "como juegos" tiene alguna ventaja importante. De entrada, cuando menos, la teoría estándar dispone de conceptos formales bastante precisos que resultan muy útiles para *analizar* unas situaciones de conflicto y cooperación que no entendemos demasiado bien, y que ayudan además a "enfriar" el discurso del científico social, ofreciendo una vía para eludir las tentaciones moralizantes - las expresiones apologéticas o condenatorias - que suelen acompañar al estudio de esos procesos. No debería extrañar, por lo tanto, que el empleo del vocabulario de la teoría matemática de los juegos se haya extendido durante los últimos años fuera de las fronteras de la microeconomía, y que sus conceptos básicos sean ya suficientemente conocidos en todas las disciplinas de las ciencias sociales³⁷.

Cada modelo *formal* de "un juego" contiene tan sólo una presentación de las reglas institucionales y de las opciones estratégicas de cada actor o "jugador" (Shubik, 1992: 127). En primer lugar, por lo tanto, la teoría de juegos *propone un modo de analizar* -descomponer

³⁷ Como no tengo la menor intención de decir algo nuevo o interesante sobre la teoría formal de los juegos de estrategia evitaré recargar el texto de notas. Puede encontrarse una presentación suficiente en castellano en Davis (1971), y una exposición más avanzada del "estado" de la teoría en Shubik (1992). Continúa siendo muy útil la obra clásica de Luce y Raiffa (1957), que analiza una gran variedad de modelos de juegos, aunque sin duda resulta mucho más agradable leer el primer capítulo de Binmore (1990).

en sus elementos fundamentales- *una situación de interacción*, incorporando las dos dimensiones relevantes -parámetros y estrategias- para describir las estructuras de oportunidades de los actores. Siempre será necesario conocer la estructura del juego en que están implicados los actores en cada caso tanto para explicar sus decisiones y sus resultados como para evaluar la "racionalidad" de sus conductas. Este es el principal hallazgo de la teoría, y éste es el sentido del condicional que introduce en el epígrafe anterior: bien podría ocurrir, en efecto, que nuestra central sindical nacional no tuviera interés alguno en contener un proceso inflacionario de estar "jugando un juego" en el que su mejor opción pasara por acelerar la destitución del gobierno, y siendo la escalada de los precios un movimiento eficaz para alcanzar ese objetivo.

En determinadas ocasiones, lo que intentan los jugadores es arrebatar al contrario la mayor proporción posible de una cantidad fija, de modo que el progreso de uno implicará únicamente pérdidas para el contrario: son los juegos de *suma cero*, los más populares de la tipología convencional. Aunque apenas existen en la historia social y política juegos estrictos de suma cero, el término se emplea frecuentemente en un sentido metafórico para describir situaciones en las que los actores se inclinan por percibir sus intereses como diametralmente opuestos y la interacción tiende a adquirir una dinámica de *conflicto puro*. Los juegos de *coordinación* (Figura 1.1, izquierda) se sitúan en el extremo contrario. Son juegos de *suma variable*, en los que las estrategias seleccionadas influyen en el tamaño del premio a repartir; y son juegos de *cooperación pura*, en los que los actores tienen exactamente el mismo interés, de modo que su problema se limita a encontrar la manera de coordinar sus acciones para obtener la mayor suma posible: ambos ganan o pierden a la vez, y ambos ganan o pierden en la misma proporción.

Los modelos de juegos con mayor relevancia para la ciencia social empírica son sin embargo los de suma variable con *motivación mixta* (Figura 1.1, derecha) en los que se dan a la vez elementos de *conflicto* y *cooperación*, dado que de lo que decida cada uno dependerá tanto el producto total a repartir como el modo de dividirlo³⁸. En este tipo de situaciones, los actores *tendrán un interés compartido en maximizar las ganancias o minimizar las pérdidas conjuntas*, pero a la vez *competirán* por obtener la mejor *distribución* posible de los

³⁸ El término "motivación mixta" está tomado de Schelling (1989). Tiene mucho interés consultar su clasificación de los tipos de juegos en las pp. 97-104.

beneficios o los costos en la suma agregada. De hecho, los juegos que habitualmente se describen como de "suma cero" en los trabajos empíricos son en realidad juegos de motivación mixta en los que los elementos de *conflicto* distributivo tienden a predominar fuertemente sobre la *cooperación* para promover los intereses comunes.

Figura 1.1

Jugador (A)	Jugador (B)			
	S	R	S	R
S	4,4	2,2	3,4	2,1
R	1,1	4,4	2,1	4,3
Juego de coordinación		Juego de motivación mixta		

El problema para el investigador empírico, por supuesto, consiste en llenar de contenido las "cajas vacías" del modelo formal, empezando por la noción de "un jugador", que en la teoría no es más que una etiqueta aplicada a un ramillete de cursos de acción alternativos -opciones estratégicas- con distintos *pagos* asociados, que reflejan sus preferencias por los resultados. Cuando los intereses individuales sean idénticos, como en los juegos de coordinación, o cuando pueda postularse un óptimo colectivo transparente, como en el famoso *Dilema del Prisionero*, el *poder* será un dato irrelevante para la descripción de los jugadores y el modelado de la situación interacción. Pero siempre que existan varios resultados posibles con distintas consecuencias distributivas, las alternativas estratégicas reflejadas en la matriz de pagos deberán contener algo más que las "preferencias" de los actores: a medida que se consideren juegos de motivación mixta con un fuerte contenido distributivo, la descripción precisa de las *asimetrías en los recursos* de los jugadores resultará, en efecto, crecientemente determinante.

La propuesta de la teoría de la negociación en este punto consiste en integrar en la matriz de pagos las variaciones en los recursos de poder de los actores como *valores de ruptura*. La idea básica es que los resultados de los juegos distributivos dependerán de la capacidad relativa de los actores para influir en las expectativas del contrario, anunciando *compromisos creíbles* con una determinada línea de acción, y que aquéllos que dispongan de un mayor valor de ruptura estarán en una mejor posición para hacerlo (Osborne y Rubinstein, 1990: 88-89). En la matriz representada en la derecha de la **Figura 1.1**, (A) tiene mayor poder de negociación que (B), dado que obtendría un pago más alto en caso de no alcanzarse ninguna de las soluciones coordinadas. Los valores de ruptura pueden incorporar así a la matriz de pagos toda la variedad de recursos que determinan la plausibilidad de los compromisos con un determinado resultado a través de su influencia en las *actitudes hacia el riesgo* y las *preferencias inter-temporales* de los actores. En cualquier momento, el jugador que tenga menos que perder con la ruptura, el que disponga de una mejor *opción de salida*, el que pueda soportar mejor los *costos del conflicto*, será más inmune al riesgo y estará en mejores condiciones para comprometerse fuertemente con su estrategia preferida; del mismo modo, mayor será su capacidad para mantener su posición mientras espera a que el contrario se resigne a aceptar la solución que él prefiere.

Por lo que respecta a los recursos de poder de las organizaciones del trabajo, éstos variarán en función tanto de su *solidez institucional* como de su *situación en las arenas económica y política*³⁹. La principal opción de salida de los trabajadores en los juegos de negociación -el conflicto huelguístico- tendrá mayor valor a medida que aumenten, por ejemplo, la capacidad de sus organizaciones para sostener la movilización, minimizando las deserciones -*salida*- y la protesta -*voz*- de las bases y los liderazgos competidores, y la importancia para el otro de los bienes económicos y/o políticos que puedan detraerle con el conflicto. Pero con independencia de las variables específicas que debamos incorporar en cada caso para completar la descripción de los poderes, la teoría de la negociación se limita hasta aquí a ofrecer un lenguaje para formalizar el sentido común popular: "a quien más

³⁹ Para las variables que influyen en los recursos de poder de los trabajadores pueden consultarse Shaiev (1980) y Korpi y Shalev (1980).

tiene, más se le dará"⁴⁰. *Cualquier variación en los parámetros externos del juego o cualquier resultado de interacciones previas* que afecte diferencialmente a los recursos de los jugadores -una crisis económica, un giro en las expectativas populares, una nueva mayoría electoral- *se traducirá en una alteración de sus pagos*, incrementando o reduciendo sus valores de ruptura.

Las variaciones en los parámetros externos, por supuesto, no sólo introducen cambios en los valores de ruptura de cada jugador, afectando a su poder de negociación en el juego de motivación mixta: también inciden tanto en el *valor del total a repartir* como en la *dimensión de los conflictos potenciales*. Cualquier crisis reducirá siempre el total de recursos del sistema, pero sus características precisas afectarán también a las consecuencias distributivas de los distintos acuerdos posibles. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, puede ocurrir que cada estrategia coordinada de política económica exiga ahora un mayor sacrificio relativo a la central sindical o a los actores políticos en el gobierno y un mayor beneficio relativo al otro, de modo que los intereses comunes en la cooperación tenderán a perder fuerza y aumentará el potencial de conflicto; o puede ocurrir, por el contrario, que las características específicas de la crisis minimicen las consideraciones distributivas, favoreciendo la cooperación entre los actores. Sin duda, algunos ejemplos históricos estarán ya en la mente de todos.

Si los intereses y los poderes, que varían con la evolución de los parámetros externos

⁴⁰ El concepto de *precompromiso*, desarrollado por Thomas Schelling en su obra clásica, apunta en cambio en el sentido contrario. Según Schelling (1989: 174-176), si en un juego distributivo un jugador puede "quemar las naves", eliminando las alternativas menos preferidas por el procedimiento de elevar drásticamente sus costos, garantizará al contrario que está obligado a perseguir su mejor estrategia, convertida ahora en *estrategia dominante*, y su argumento contraintuitivo es que paradójicamente esta posibilidad tiende a situar en una posición estratégica privilegiada a los actores con menos recursos, dado que las restricciones que enfrentan les impedirán realmente asumir los costos de un resultado mediocre. Contra esto podría alegarse, en primer lugar, que si las restricciones a la conducta proceden de fuentes externas -normas legales o informales- no hay ninguna razón para pensar que los actores débiles deban tener un acceso privilegiado a la "tecnología" del precompromiso; más bien cabe esperar lo contrario: que los más fuertes encuentren la manera, en interacciones iteradas, de alterar y volcar a su favor las reglas legales e informales que permiten acceder a ella. En segundo lugar, y más importante, la capacidad del actor débil para manipular su propia escasez de recursos será eficaz contra un actor realmente más fuerte sólo si consigue sorprenderlo y, por lo tanto, se diluirá necesariamente en el medio plazo. Resulta evidente, por emplear un ejemplo del propio Schelling (1989: 38-39), que cuando los líderes de un sindicato debilitan deliberadamente el control de la organización sobre las bases están aumentando su tasa de descuento temporal, al abrir mayores espacios para la disidencia interna en caso de que la solución se difiera, de modo que si el contrario está avisado y dispone de recursos para mantener su posición durante un tiempo suficiente -si es realmente más fuerte- el precompromiso tendrá casi con certeza un efecto "boomerang". En el trabajo veremos que la idea de "la ventaja estratégica del débil" puede ser muy útil para dar cuenta de algunos aspectos aislados de la interacción, pero es indudable que el principal factor determinante de los resultados de los juegos distributivos en el medio plazo serán siempre los recursos objetivos de los actores.

del juego, determinan los pagos asociados a cada combinación de estrategias, *las instituciones que regulan los juegos socio- políticos* realizan una selección posterior, definiendo el rango de los movimientos permitidos a los jugadores. Las instituciones aparecen en el modelo como *reglas del juego* y, como es sabido, pueden ser *formales* o *informales*: las primeras incluyen sanciones legales garantizadas por el poder coactivo del estado; las segundas -normas y convenciones- están sostenidas por sistemas consolidados de sanciones sociales. Bajo las reglas del juego político democrático, los jugadores principales son los partidos, a los que se permite acceder al poder del estado a través de la competencia electoral. Mientras no "se salte por la ventana", esas reglas serán un *límite* para todos los actores interesados en "hacer política", en determinar o influir los procesos de toma de decisiones colectivas (Bobbio, 1986: 53). Así, las organizaciones del trabajo tenderán, bajo las reglas del juego democrático, a promover la formación de partidos políticos o a vincularse a partidos preexistentes si desean obtener el apoyo necesario para lograr una legislación favorable a sus intereses o para presionar tanto al estado como a las organizaciones patronales: son las reglas del régimen las que imponen tanto al movimiento obrero como a todos los actores de la sociedad civil, los medios por los que deben forzosamente ejercerse las presiones políticas (Valenzuela, 1983: 346).

Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se analizan los entornos institucionales en el contexto de los juegos de motivación mixta que estamos considerando es que *la gran mayoría de las reglas tiene profundos sesgos distributivos*. Puede muy bien ocurrir, en efecto, que la estrategia más favorable para los intereses de un actor, dada su dotación de recursos, esté penalizada por las instituciones, y desaparezca así del conjunto factible. La distinción teórica entre recursos de poder y reglas del juego, por lo tanto, no implica en absoluto que éstas últimas sean en algún sentido "neutrales"⁴¹. Por el contrario, los recursos de los actores tendrán, por un lado, un valor diverso en distintos marcos institucionales: el poder coactivo o los recursos económicos de una minoría resultarán en principio menos determinantes en un marco democrático consolidado que en un régimen autoritario, y más en un contexto normativo que tolere la violencia y los privilegios que en otro que los castigue fuertemente. Por otro lado, las reglas pueden también *constituir*

⁴¹ Debe verse para esto la argumentación de Knight (1992), que ofrece en su libro una amplia crítica de las teorías que explican la emergencia de arreglos institucionales -formales e informales- a partir de la postulación de algún beneficio universal, recordando que las instituciones tienen profundos efectos distributivos.

recursos nuevos. La legitimidad del poder político derivada del voto mayoritario en las urnas, por ejemplo, no existe fuera de una constitución democrática, en tanto que ésta no es una regulación formal de un juego preexistente sino un intento deliberado de crear uno nuevo. De este modo, si en un estado no democrático las políticas públicas serán básicamente el producto indirecto de la interacción entre las élites del estado y grupos de interés poderosos, con fuertes *recursos prepolíticos* -dinero y armas-, en un estado democrático serán también, y centralmente, el resultado del éxito relativo de los actores en acceder a esos nuevos *recursos políticos*, abiertos ahora a la competencia: la lucha por el control legítimo del propio proceso de toma de decisiones políticas se superpondrá así a las presiones de los grupos de interés, circunscribiendo las oportunidades de éstos (Knight, 1992: 189-190; Levi, 1988).

En segundo lugar, resulta necesario recalcar que los marcos institucionales, y en particular los sistemas de reglas formales, *no marcan límites definitivos a las alternativas de acción*, como sí ocurre en cambio con los parámetros externos del juego. Por el contrario, preservar, restringir, ampliar, o alterar radicalmente el rango de los movimientos viables es una decisión consciente de los mismos actores que sostienen las reglas, que en cualquier momento pueden descubrir que su mejor opción pasa precisamente por modificarlas: los sistemas de reglas, por lo tanto, deben describirse como *parámetros "internos" o endógenos* del juego, en la medida en que su evolución está sujeta a la conducta estratégica de los actores (Tsebelis, 1990: 92 ss). No cabe que los actores sociales y políticos de la arena nacional boliviana apuesten por incrementar la demanda de estaño en los mercados mundiales, o que pretendan liberarse del "peso muerto" de las acciones que se ejecutaron en el pasado, pero es perfectamente posible que intenten cambiar o revocar las reglas del juego político democrático.

Este carácter endógeno de las reglas institucionales afecta directamente a su capacidad para distribuir *información* entre los actores, tanto sobre los movimientos que pueden efectuar para promover sus propios intereses como *sobre la conducta esperable de los otros*. El principal subproducto de las instituciones es, en efecto, que éstas "introducen *predictibilidad* en las acciones potenciales de los otros", al constreñir y limitar sus alternativas de acción (De Francisco, 1995: 163). Pensemos, por ejemplo, que en la medida en que las instituciones electorales democráticas proscriben efectivamente ciertas estrategias para ganar el poder del estado -la revolución, el golpe militar y algunas otras-, estructurando la interacción de las organizaciones que compiten por diseñar o influir en el diseño de las políticas públicas, están

informando a cada una sobre las posibles acciones de sus rivales. La interacción podrá estar más o menos *institucionalizada*, conteniendo reglas que incorporen una información más o menos *precisa*, aunque, por supuesto, aquéllas no reducirán casi nunca el conjunto de estrategias factibles a una sólo alternativa.

Pero con independencia de la densidad o precisión de los sistemas de reglas, su capacidad para repartir información, orientando las expectativas de los actores, dependerá siempre del grado en que resulte realista esperar de los otros que actúen *en los hechos* de acuerdo con ellas; esto es: de la medida en que los marcos institucionales estén más o menos *consolidados*. Dado que las instituciones constriñen la acción distribuyendo incentivos positivos -beneficios- y negativos -sanciones- entre los jugadores, su eficacia estará siempre vinculada, en primer lugar, a la extensión de su *reconocimiento* entre la población. Será necesario que una gran mayoría de los miembros de la comunidad o sociedad relevante reconozcan *el mismo* conjunto de reglas, y es fácil ver que en cualquier momento las reglas formales en proceso de consolidación y las normas informales heredadas pueden reforzarse mutuamente o contradecirse, socavándose unas a otras. Como las normas informales -convenciones- influyen en la distribución de los recursos, siempre podrá haber actores que las defiendan mientras se realizan esfuerzos para introducir cambios en las instituciones formales, y en estos casos las reglas del juego resultarán enormemente ambiguas y serán objeto de distintas *interpretaciones*. Así, el entramado legal de la democracia representativa, que atribuye el poder para adoptar decisiones vinculantes legítimas a instancias representativas elegidas por mayoría, será desafiado si existe una convención informal extendida que vincule en exclusiva la legitimidad democrática de los gobiernos a la satisfacción de determinadas demandas populares. Las distintas interpretaciones sobre el significado y las consecuencias de la "democracia" reflejarán el conflicto entre los distintos actores sociales y políticos por imponer a los otros el reconocimiento del conjunto de normas que respalda en mayor medida su propio poder de negociación. En este tipo de situaciones será necesario que al menos un número suficiente o "decisivo" de los actores más fuertes deseen sostener las nuevas reglas formales, bien por razones de *interés* egoísta, bien por una *valoración* crítica positiva hacia ellas, para que aquéllas terminen consolidándose. Desde luego, si aquéllos que tienen el poder para cambiar las normas parecen dudar sobre sus ventajas y/o no les otorgan valor alguno, resultará muy difícil justificar las expectativas sobre las consecuencias futuras de la acción basadas en las restricciones impuestas por el marco

institucional formal.

La socorrida imagen del ajedrez, en fin, es una metáfora demasiado engañosa, porque el "juego" de la teoría no tiene demasiado que ver con el significado ordinario del término: si en los juegos de la vida cotidiana los jugadores obedecen normas, en la teoría su actitud hacia ellas es básicamente instrumental. Participan en el juego por lo que pueden obtener de él, y se someten a las reglas sólo en la medida en que no tienen una alternativa mejor. Desde luego, un mínimo de realismo exigiría aceptar, como acabo señalar arriba, que los jugadores pueden sostener las normas por consideraciones de *valor* o, cuando se trata de convenciones, por motivos de *rutina*. Pero aquí terminan los parecidos en la familia de los juegos y comienzan las diferencias. Las reglas del ajedrez, en efecto, son *constitutivas* en un sentido mucho más fuerte que, por ejemplo, las reglas de la democracia, dado que no resuelven ningún problema que hubiera planteado previamente el movimiento desordenado de un grupo de piezas de madera sobre un tablero. Tan sólo ofrecen una alternativa para pasar una tarde agradable. En los juegos sociales y políticos, por el contrario, los intereses y los poderes preexisten en gran medida a las normas. Desde luego, estas pueden haber sido *absolutamente* interiorizadas por los actores o ser objeto de una valoración positiva *universal*, y devenir así en ambos casos en normas realmente constitutivas: en parámetros externos del juego. Pero afortunadamente esto no ocurrirá casi nunca por completo, y si los actores de la historia no tienen la opción de quedarse al margen del juego, escogiendo otro pasatiempo, siempre será esperable que luchen por cambiar las instituciones que les atenazan.

EQUILIBRIOS MÚLTIPLES Y DINÁMICA DE LA INTERACCIÓN

La metáfora del juego, tal como la he presentado hasta ahora, se limita a introducir la idea esencial de que los procesos sociales y políticos deben entenderse como el *resultado agregado* de las decisiones *interdependientes* de actores capaces de calcular y alterar sus estrategias en función de sus expectativas sobre las actuaciones de los otros, y a presentar un lenguaje formal para analizar situaciones de interacción en las que importan tanto los intereses de los actores y los recursos de que disponen -los datos que definen sus *pagos*-

como el marco institucional que restringe en mayor o menor medida sus movimientos y que estará siempre sometido a su propia actividad estratégica -las reglas del juego-. La teoría de juegos ofrece, por lo tanto, herramientas conceptuales para describir las *estructuras de oportunidad* que enfrenta cualquier actor con unos intereses y recursos dados al interactuar con otros actores con distintos intereses y poderes bajo restricciones institucionales variables.

Pero, por supuesto, la teoría va más allá, afirmando que si se dispone de una descripción precisa de la estructura del juego, *la hipótesis de comportamiento de la teoría de la elección racional permitirá deducir, y por lo tanto explicar, las conductas efectivas de los jugadores*. De hecho, la teoría matemática de los juegos presenta como su principal logro la demostración de que pueden construirse *soluciones determinadas* para muchos problemas de interacción estratégica que en principio parecerían inabordables desde la regla maximizadora⁴². El problema, como veremos de inmediato, es que todos sus desarrollos técnicos resultan perfectamente inútiles para la investigación empírica.

Como es sabido, las soluciones de la teoría matemática de los juegos se estructuran en torno al concepto de *equilibrio*, que describe el valor máximo que puede esperar obtener cada jugador dadas sus alternativas estratégicas y las de sus rivales. El equilibrio es inmediato y estable cuando al menos uno de los jugadores tiene una *estrategia dominante*; esto es, un curso de acción que parece ofrecerle el pago más alto *con independencia de cuál sea la elección de los otros*, y es la solidez de estos equilibrios en estrategias dominantes lo que está en la base de las "paradojas" de la teoría neoclásica que hoy constituyen ya una referencia ineludible en cualquier estudio de la dinámica del orden político y la acción colectiva⁴³. Si ningún actor dispone de una estrategia dominante, el juego puede tener todavía un único *equilibrio de Nash*, definido por la intersección de las estrategias que son simultáneamente la mejor respuesta para cada uno de los jugadores *dada la conducta esperable de los otros*. Pero aquí las cosas comienzan ya a complicarse, dado que los requisitos de *información* para que los actores adopten efectivamente sus estrategias de equili-

⁴² Si cada jugador debe escoger una estrategia óptima basándose en cálculos sobre las elecciones de los otros, y teniendo en cuenta que ellos están haciendo lo mismo, parecería que se enfrenta de inmediato a un problema de progresión infinita: A calcula que B calcula que A calcula...etc.

⁴³ No hace falta recordar que el modelo más conocido de juego con un equilibrio en estrategias dominantes es el "Dilema del Prisionero", que ha demostrado tener una enorme potencia heurística. Para ilustrar su profunda atracción sobre los académicos anglosajones basta anotar que un recuento realizado hace veinte años registró más de 2.000 trabajos dedicados a buscarle soluciones. Véase Ostrom (1990), p. 5.

brio son enormemente exigentes, mucho más desde luego que en el caso de los juegos con estrategias dominantes, en los que las expectativas sobre la conducta de los otros no desempeñan ningún papel y basta con que el decisor sepa lo que quiere y disponga de un conocimiento suficiente de sus propias alternativas. El concepto de equilibrio de Nash requiere que todos los jugadores sean *perfectamente racionales* y sean plenamente conscientes de ello, de tal manera que cuando dispongan de una *información completa* sobre las alternativas *mutuas* quepa suponer que sus pensamientos estarán en algún sentido "sincronizados": todos anticiparán correctamente lo que harán los otros y sus acciones confluirán sobre la solución matemática del juego, en la que todos obtienen lo mejor que pueden esperar⁴⁴.

Sin embargo, si esto puede parecer ya irrealizable y suficientemente abstruso, *el límite absoluto de la teoría matemática* viene dado por el hecho de que todos los juegos de coordinación y la gran mayoría de los juegos de motivación mixta capaces de modelar situaciones de interacción relevantes para la ciencia social empírica tienen *varios equilibrios* de Nash. Es el caso de los dos juegos representados en la **Figura 1.1** arriba, en los que la estructura de la matriz de pagos imposibilita desde el principio generar expectativas *racionales*: todas las combinaciones de estrategias son igualmente posibles *a priori*, y no bastará con suponer la racionalidad perfecta y universal de los jugadores y la presencia de una información completa para eliminar la *indeterminación*. En estos casos, la teoría se convierte sin más en metafísica, proponiendo el concepto de "estrategia mixta" para definir un plan de acción racional preciso en situaciones de múltiples equilibrios: se afirma nada menos que los actores de la historia recurrirán al azar, asignado a cada una de sus estrategias puras la probabilidad matemática idónea para un esquema completo de racionalidad estratégica que producirá su convergencia en un "equilibrio en estrategias mixtas". La idea es intuitivamente ridícula y resulta evidente que no tiene ninguna utilidad práctica. Desde luego, el de "estrategia mixta" es el más oscuro de todos los conceptos nucleares de la teoría de juegos y es muy probable

⁴⁴ Este es el discutido supuesto del "Common Knowledge" - "conocimiento compartido"-. La imagen que mejor capta la idea es la de una pantalla situada delante de los jugadores en la que se van reflejando sus respectivos procesos mentales: en cada momento, los pensamientos de cada jugador son conocidos por todos, de modo que carece de sentido pretender obtener un mejor resultado desviándose de la estrategia de equilibrio porque el movimiento sería *anticipado* inmediatamente por los contrarios. En un contexto de racionalidad universal e información perfecta no tiene sentido ir de listillo.

que se me escape su significado más profundo⁴⁵, pero no faltan representantes muy competentes de la ortodoxia dispuestos reconocer que sólo resulta interesante por consideraciones de "elegancia" formal, ya que sin él sería imposible construir soluciones matemáticas "acabadas" para la inmensa mayoría de los modelos de juegos relevantes para la ciencias sociales empíricas (Rubinstein, 1988: 11).

El hecho es, en efecto, que cuando el juego tiene varios equilibrios la indeterminación sólo podrá acomodarse abandonando la pretensión de definir soluciones precisas para los procesos de interacción con la sólo ayuda de la teoría formal de la racionalidad y del instrumental matemático de la microeconomía. De entrada, *resultará necesario introducir la dinámica histórica en los modelos*, suponiendo que los juegos se repiten un número variable de veces -son juegos *iterados*-, de modo que las estrategias de los actores puedan converger *progresivamente* en uno de los equilibrios posibles. El concepto de "estrategia mixta", en efecto, sólo podrá tener alguna traducción empírica en la medida en que quepa *interpretarlo* como una descripción ideal de la "mezcla" de las distintas opciones estratégicas puras -conflicto y cooperación, por ejemplo-, adaptada a las circunstancias del juego, que *los actores desarrollarán tendencialmente tras una larga secuencia de ensayos y errores y nunca mediante los complejísimos cálculos que exige la teoría*.

Los juegos de coordinación -ver arriba **Figura 1.1**, izquierda-, que constituyen, junto a las situaciones modelables como un Dilema de Prisionero, el núcleo de las narraciones evolutivas elaboradas sobre la teoría de la elección racional para explicar el desarrollo de las normas y convenciones sociales, presentan a este respecto muchos menos problemas que los juegos de motivación mixta con múltiples equilibrios distributivos. Cuando los intereses comunes de los jugadores predominan abrumadoramente sobre cualquier otra consideración, puede asegurarse que emplearán cualquier dato "saliente" del contexto para coordinar progresivamente sus estrategias y que, tras una serie de interacciones, convergerán en alguno de los equilibrios posibles. El relato de los remeros de Hume es seguramente la metáfora que mejor ilustra la dinámica de estos juegos de coordinación en *contextos "no cooperativos"*, en los que no se permite la comunicación previa entre los actores ni la adopción de acuerdos

⁴⁵ Según Rubinstein (1988: 12), sus colegas no se ocupan en absoluto de explicar cómo puede conectarse con la investigación empírica, y suelen limitarse a señalar que alude a algo "más profundo y más sutil de lo que parece" -de lo que pueden llegar a intuir sus críticos-. El asunto es desde luego bastante grave, si se tiene en cuenta la ubicuidad de los juegos con múltiples equilibrios y que la "estrategia mixta" es, en consecuencia, un concepto central en el edificio de la teoría de juegos.

vinculantes: dos extraños pueden tomar cada uno un remo en un bote y alcanzar gradualmente un ritmo común; cualquier ritmo sirve, no hacen falta palabras, y una vez que se encuentra se mantiene estable (Hollis, 1987: 33). Así aparecen las convenciones sociales autosostenidas del estilo de "conducir por la derecha"; así, a través de una interacción continuada, podrían emerger también -aunque esto resulta ya más complejo- instituciones con poder coactivo capaces de sostener el interés universal de los actores en el mantenimiento de un orden social mínimo.

Pero la dinámica de los juegos de coordinación o de los "Dilemas de Prisionero" sólo puede extenderse con muchos matices a las situaciones en que *los actores poseen un poder desigual y cada equilibrio tiene distintas consecuencias distributivas*. Lo único que cabe afirmar aquí es que siempre que se reconozca una ventaja mutua en la estabilización de alguno de ellos, los actores *tenderán* a coordinar sus estrategias en el medio plazo. Tal vez podríamos convenir en describir así la *dinámica básica* de este tipo de juegos: a lo largo de una interacción prolongada y mediante procesos de *aprendizaje* -ensayo y error-, los actores implicados terminarán reconociendo sus límites -*resignándose* a su suerte- y adoptando estrategias que *convergerán en alguno de los equilibrios distributivos posibles, estabilizando un contexto "cooperativo" determinado*. En teoría de juegos, un "contexto cooperativo" es aquél que permite que los actores se comuniquen entre sí y adopten acuerdos *vinculantes* para la resolución de sus conflictos, acuerdos garantizados por las sanciones de instituciones formales y/o informales *eficaces*. La eficacia del entramado institucional para la *inducción* de estrategias de equilibrio será mucho menos trascendente, por supuesto, si los actores han desarrollado a lo largo de sus interacciones previas un grado importante de *identidad*: cuando se trata de comunicar intenciones y obtener garantías sobre el cumplimiento de los acuerdos distributivos, la *confianza* puede llegar a ser, en efecto, mucho más determinante que la presencia de una sólida regulación coactiva. Intentaré ejemplificar muy brevemente esta dinámica básica.

Si dos actores (A) y (B) -siendo el primero una *organización sindical* y el segundo un *empleador*- se encuentran por primera vez en el contexto de un juego de motivación mixta con fuertes componentes distributivos, *tenderán a percibirlo como uno de suma cero*, y su interacción estará dominada consiguientemente por estrategias de *conflicto puro*. Esto será así siempre que uno de los jugadores tenga motivos para sentirse insatisfecho con lo que se le ofrece inicialmente. Como el juego *no es* de suma cero, dado que los costos del conflicto,

con independencia de cómo le vaya a cada cual, reducirán *siempre* el resultado agregado -el total a repartir-, las estrategias estarán muy lejos del equilibrio. Deberíamos así esperar que a medida que la interacción progrese ambos actores reconozcan sus poderes mutuos y su interés común en minimizar las pérdidas netas y convergan en un equilibrio, consolidando alguna estructura institucional efectiva -un "contexto cooperativo"- capaz de sostenerlo⁴⁶.

Sin embargo, existen varias razones por las cuales ese "interés común" en la estabilización de algún equilibrio institucional podría no llegar a realizarse durante un período prolongado. De entre ellas cabe destacar dos. En primer lugar, puede ocurrir que cualquiera de los actores crea que a través del conflicto conseguirá en el medio plazo una mayor participación en los beneficios y cargará con menos costes que el contrario. En segundo lugar, puede darse el caso de que un actor -generalmente el más poderoso- espere que los fuertes sacrificios que soporta el otro anulen su capacidad de lucha, y crea por lo tanto que merece la pena tolerar los suyos a la espera de ese resultado⁴⁷. No habrá así cooperación para la reducción de las pérdidas y no habrá equilibrio estable alguno, como no puede haberlo en ningún juego de suma cero en el que los actores mantengan su capacidad para "seguir intentándolo" indefinidamente en cada jugada. De hecho, en cada jugada los actores intentarán imponer un nuevo equilibrio. Los conflictos nunca serán ilimitados, pero sólo estarán puntuados por una sucesión de treguas, y es muy posible que la interacción se mantenga durante un largo tiempo en este estadio. Por supuesto, *cabe esperar que en este tipo de situaciones los movimientos obreros desarrollen ideologías revolucionarias* -ligadas

⁴⁶ Conviene, por supuesto, tener muy presente que estos equilibrios pueden resultar siniestros en términos morales. La teoría de juegos ofrece lateralmente la posibilidad de incluir consideraciones normativas sobre la calidad de los equilibrios institucionales, desarrollando una crítica de las desigualdades que inducen, pero cuando se abandonan los juegos de pura coordinación y se introducen resultados distributivos desiguales se abrirá inevitablemente una brecha, que puede llegar a ser realmente enorme, entre sus aspectos normativos y positivos. En la teoría de los juegos de negociación, que se limita en esencia, como afirmé arriba, a formalizar el sentido común popular -"a quien más tiene, más se le dará"-, la información completa anula, en efecto, la posibilidad de que surjan conflictos distributivos en contextos cooperativos. Esto es sólo una consecuencia necesaria de las motivaciones que admite la teoría como causas de la acción: si ésta sólo puede derivarse de los intereses corrientes de los actores, y nunca de razones *externas*, y suponiendo que existen posibilidades de comunicación e instituciones capaces de forzar el cumplimiento de los acuerdos, no podrá haber nunca un conflicto distributivo "racional" en condiciones de información perfecta. Si lo hay, deberá serlo en un sentido completamente ajeno al de la teoría estándar. Un actor Kantiano podría considerar "racional" destruir sus propios recursos y atentar contra sus deseos corrientes por consideraciones de justicia distributiva, pero *el decisor racional que habita los modelos de juegos se resignará siempre a conceder al adversario la parte del león*.

⁴⁷ Crouch (1993), p. 33. El autor añade una tercera razón, que es en realidad equivalente a la segunda: «una parte puede creer que una reducción general de los costos del conflicto sólo ayudaría a la otra parte a mantener su capacidad de lucha».

al marxismo o al sindicalismo-, capaces de justificar los fuertes costos de la confrontación radical con la perspectiva de una transformación social profunda.

La mera acumulación de enfrentamientos a lo largo del tiempo o el fortalecimiento del actor menos poderoso -generalmente las organizaciones sindicales- puede llevar progresivamente al reconocimiento mutuo, a la aparición de normas compartidas de "justicia" y "equidad" en la distribución, y al desarrollo de instituciones formales para la deliberación, negociación y resolución de conflictos⁴⁸. Por supuesto, junto a la intensificación de los contactos y los cambios en el poder relativo de los actores, cualquier alteración globalmente favorable en los parámetros externos del juego -piénsese, por ejemplo, en un prolongado auge económico derivado de innovaciones tecnológicas- coadyuvará al surgimiento y consolidación de un equilibrio institucional en el juego distributivo. La estabilización de las democracias occidentales es un producto típico de este proceso de *reconocimiento mutuo*, que ha estado acompañado por unos niveles crecientes de *autonomía estatal* respecto de los intereses de la clase dominante y por el desarrollo en sus movimientos obreros de estrategias centradas en la *negociación colectiva* y en la *colaboración más o menos estrecha entre sindicatos y partidos* -demócratas en los EE.UU, socialistas o comunistas en Europa- *con representación parlamentaria*. Desde luego, los *sistemas de reglas consolidados* raramente reducen, como afirmé arriba, el conjunto factible a una única alternativa: no eliminan por completo la indeterminación, pero permiten al menos acomodarla, facilitando los cálculos de los jugadores. Esto es así con independencia de que en la interacción predominen en cualquier momento el conflicto o las conductas cooperativas. El problema será el mismo en ambos casos: los actores sólo tendrán una base racional para formular expectativas sobre la conducta de los otros si existe un equilibrio institucional consolidado capaz de estructurar sus elecciones mutuas.

Por supuesto, los actores pueden percibir que la continuidad de sus relaciones hace que el juego contenga importantes elementos de *suma positiva*: que ambos, con independencia de que persistan elementos de conflicto sobre la división del botín, pueden obtener ganancias

⁴⁸ A la inversa, el fortalecimiento del actor más poderoso puede hacer realidad su sueño de eliminar la resistencia del otro durante un período prolongado. Pero en estos casos el término "equilibrio" tenderá a perder cualquier significado real, porque en el límite al menos uno de los jugadores simplemente habrá desaparecido. Conviene recordar al respecto que los edificios corporativistas que construyeron los regímenes fascistas y afines en la Europa de entreguerras fueron en gran medida fachadas vacías, ya que una vez liquidados los movimientos obreros autónomos esas instituciones no cubrían ninguna necesidad real de inducir equilibrios distributivos entre actores independientes.

sustanciales de la cooperación en el medio plazo promoviendo el crecimiento de la economía. Sin embargo, para que esa nueva percepción, que es un fruto posible del aprendizaje, tenga una traducción en las conductas reales, los actores deberán desarrollar además una capacidad estratégica suficiente para asumir los costes de los compromisos necesarios. Si los resultados son buenos durante un período prolongado, puede esperarse que desarrollen vínculos de *confianza* y adopten el estilo de toma de decisiones dirigido a la *"solución de problemas"* que caracteriza a las relaciones industriales bajo el corporatismo avanzado⁴⁹. En estas condiciones, el entramado institucional que estructura el juego resultará menos determinante para promover los acuerdos: como afirmé arriba, la confianza respaldada en la experiencia puede reemplazar a las sanciones cuando se trata de prever la conducta de los otros.

Estas estructuras institucionales y estos compromisos mutuos, en la medida en que realmente se consoliden, constituirán restricciones efectivas sobre la libertad de los actores, dotando de predictibilidad a sus acciones mediante "salientes"⁵⁰ capaces de *inducir* estrategias de equilibrio. Así, en cualquier momento tanto las soluciones precisas del juego de motivación mixta como la posibilidad misma de que las estrategias confluyan en algún punto de equilibrio dependerán fundamentalmente de la medida en que la interacción se desarrolle en un contexto más o menos "cooperativo" y de las características específicas de ese contexto. De este modo, *el "input" de información histórico-estructural necesario para completar los modelos resultará tan determinante que anulará por completo la utilidad de*

⁴⁹ En un trabajo clásico J.G. March y H.A. Simon (*Organizations*, Nueva York: Wiley, 1958) clasificaron los "estilos de toma de decisiones" en "confrontation", "bargaining" y "problem solving". Por su parte, Crouch (1982: 106-117) ofrece una clasificación simétrica -"contestation", "bargaining" y "concertation"- de los "estilos estratégicos" de las organizaciones sindicales, afirmando que éste último es el que predomina claramente en los sistemas corporatistas democráticos. Los corporatismos "populistas" de América Latina respondieron a una lógica semejante, pero allí las élites políticas del estado tuvieron que asumir un papel mucho más decisivo en la promoción de estrategias cooperativas entre actores sociales estructuralmente muy débiles. Pese a que la debilidad de los actores sociales ayudó mucho, las doctrinas populistas sobre la identidad de intereses entre los diversos cuerpos de la nación, sin embargo, sólo pudieron "arraigar" mientras el crecimiento de la industria sustitutiva basado en el endeudamiento público ocultó realmente los conflictos sobre la distribución del producto durante un período significativo. De hecho, aquello fue muy parecido a un soborno

⁵⁰ Los "salientes situacionales" o "puntos focales" de Schelling (1989: 67 ss.) son en la gran mayoría de los casos datos del "contexto" socio-político ajenos a la estructura de la matriz de pagos, en los que los universos de normas/valores heredados desempeñan un papel central (Elster, 1989b, cap. 6). En este sentido, es fácil ver que las soluciones que propone la teoría de juegos para las negociaciones en contextos cooperativos son a su vez "convenciones" fundadas en los ideales de "justicia" y/o "eficiencia" de cada autor. En una de las exposiciones más recientes de la teoría estándar, Myerson (1991: 409) concluye el análisis de los juegos de negociación reconociendo que en la práctica las estrategias se coordinan a partir de datos del entorno independientes de las funciones de utilidad, aunque se consuela afirmando que hay muchas situaciones en las que "cabe esperar" que los jugadores se pongan de acuerdo clamando al unísono: "juguemos este equilibrio, que es el mejor para los dos".

los desarrollos técnicos de la microeconomía. De hecho, alguno de los más destacados exponentes de la ortodoxia reconoce explícitamente que las conductas de los jugadores en la mayoría de las situaciones de interacción *reales* dependen de "*variables exógenas*", completamente ajenas a la matriz de pagos (Rubinstein, 1988: 10). Y estas variables no son otras que *el carácter y la eficacia de las instituciones formales e informales presentes en el entorno y las percepciones mutuas que los actores hayan desarrollado a lo largo de sus interacciones previas*: de la absoluta *alienación* -desconocimiento- a diversos grados de *hostilidad e identidad* (Crouch, 1993: 24-26).

El límite para las ambiciones de la teoría matemática de los juegos, por lo tanto, es que resulta necesario conceder que *sólo tendrá sentido buscar estrategias de equilibrio cuando los sistemas estén ya de hecho en equilibrio*: esto es, *cuando exista un conjunto estable de arreglos institucionales que estructure fuertemente el juego y sea reconocido -como útil, legítimo o insuperable- por todos los jugadores, y/o cuando entre éstos se hayan desarrollado vínculos sólidos de confianza*. El problema no es en absoluto nuevo, y puede encontrarse ya expresado en cierto modo en la crítica que formuló Hayek hace más de medio siglo al tratamiento del concepto de equilibrio en la obra de la mayoría de sus colegas:

"...equilibrio significa simplemente que la previsiones de los distintos miembros de una sociedad son correctas en un sentido especial. Deben ser correctas en el sentido de que el plan de cada persona está fundado en la expectativa de una acción de los otros que es exactamente la acción que los otros pretenden realizar...la previsión correcta no es por lo tanto, como se ha pretendido a veces, una precondition que debe existir para que se alcance el equilibrio. Es, por el contrario, *la característica definitoria del estado de equilibrio*"⁵¹.

Pero si los equilibrios socio-políticos son el resultado de largos procesos de ensayo y error y a veces no se alcanzan durante períodos muy prolongados -si el aprendizaje, en suma, requiere *tiempo*-, la estructura de los juegos que tienen lugar en la historia puede cambiar con bastante frecuencia, a menudo muy rápida y muy profundamente (Paramio, 1992: 49). Los equilibrios socio-políticos, en efecto, no son un límite ecológico⁵². Por el

⁵¹ Frederick von Hayek, "Economics and Knowledge", *Economica* 4, 1937, citado en Varoufakis (1991), p. 180 (cursiva mía).

⁵² El contrario es el caso de las comunidades de campesinos tradicionales. Allí el juego siempre es el mismo, y sólo un desastre ecológico puede obligar a alterar las "estrategias mixtas" desarrolladas a través de una larguísima cadena de ensayos y errores para diversificar riesgos frente a las conductas del rival imprevisible -la naturaleza-.

contrario, las alteraciones en los parámetros externos del juego afectarán a los recursos de los actores, produciendo cambios en sus pagos, y las reglas tendrán con frecuencia resultados imprevistos. Cualquier variación sustancial en las asimetrías de poder, o cualquier consecuencia distributiva indeseada de las instituciones, tenderá a abrir *coyunturas de transición*. Y en estas coyunturas las combinaciones de estrategias heredadas de las interacciones previas podrán alejarse enormemente del equilibrio del juego, provocando "fracasos" espectaculares.

ESTRATEGIAS DE TRANSICIÓN: LA INERCIA ESTRUCTURAL Y LAS DOS MATRICES DEL JUEGO

Supongamos que conocemos los pagos del jugador y podemos traducirlos en una función de utilidad. La teoría de la elección racional propone a continuación, como afirmé arriba, una *regla de decisión* específica: se postula que el sujeto seguirá el curso de acción que le permita *maximizar* su *utilidad esperada*, medida ésta por el valor que asigna al resultado multiplicado por la probabilidad de tiene de obtenerlo. En una decisión bajo *riesgo*, el agente conoce las probabilidades asociadas a todos los resultados posibles, de modo que su único problema será moderar sus ambiciones. Si se enfrenta a un gran número de situaciones de elección entre varias alternativas a lo largo del tiempo, la regla del "maximax" le garantizará la obtención de la mayor utilidad global; en una situación de elección única, sin embargo, puede resultarle conveniente minimizar riesgos y seguir la regla del "maximin", que recomienda escoger la línea de acción que tiene el mejor peor resultado. El concepto de *incertidumbre* describe situaciones de elección, en las que, al contrario que en las de riesgo, no es posible determinar con precisión la frecuencia relativa de los resultados. Este es el caso de *todas* las decisiones adoptadas en contextos estratégicos, dado que en éstos, por definición, los resultados no son *nunca* probabilísticos. Los cálculos sólo podrán basarse en estimaciones *subjetivas*, y la teoría ortodoxa afirma que el agente maximizará entonces su *utilidad subjetiva esperada*: contando con alguna *teoría causal* sobre la evolución esperable de los acontecimientos y siendo capaz de *comprender* a los otros actores, podrá elaborar juicios racionales sobre la base de *la evidencia disponible*.

El primer problema que enfrenta este criterio de la maximización de la utilidad subjetiva esperada es, como se ha señalado en numerosas ocasiones, que los costos para la obtención de una información "óptima" respecto a la evidencia disponible bajo condiciones de incertidumbre pueden hacer que el empeño resulte contraproducente⁵³. De hecho, la investigación empírica ha demostrado una y otra vez que en esas circunstancias las decisiones se atienen en el mejor de los casos a criterios sub-óptimos⁵⁴. Aquí la teoría puede reaccionar frente a la acumulación de anomalías apelando a descripciones incompletas de las restricciones que enfrentaba el decisor o jugando con la regla de la maximización⁵⁵, pero parece más sensato aceptar que el principio de *satisfacción* de Herbert Simon es una metáfora mucho más conveniente para describir la conducta *racional* de los actores en los contextos inciertos que constituyen casi *todas* las situaciones históricas.

El límite está, sin embargo, en las situaciones de *incertidumbre radical*, en las que el decisor ya no lidia con los costos derivados de la recogida de información adicional en un ambiente incierto, lo que le llevaría a conformarse con alguna elección "satisfactoria", sino con *alteraciones fundamentales en los parámetros de su entorno habitual de elección y en las conductas de los otros actores*. En estas condiciones es la propia "racionalidad" histórica del agente, las teorías que ha construido a través de su experiencia previa para comprender a los otros, explicar su entorno y establecer conexiones entre los acontecimientos, lo que le llevará a adoptar decisiones que pueden ser directamente desastrosas, y no meramente sub-óptimas o "satisfactorias". Pero siempre se sorprenderá, porque carecerá de instrumentos para generar *expectativas racionales* sobre los posibles resultados de su acción. En la historia, los

⁵³ Un recuento de los problemas que enfrenta el concepto por parte de un defensor de la teoría ortodoxa en Anand (1993), quien termina proponiendo el abandono del concepto de maximización de la utilidad subjetiva esperada como criterio de racionalidad en situaciones de incertidumbre para sustituirlo por otros tan poco precisos como los de "intencionalidad", "prudencia" y "dominancia" -este último se limita a afirmar que si el conjunto de opciones más preferidas no está vacío, el agente debería escoger una de ellas-. Véanse en especial las pp. 111-129.

⁵⁴ El punto de referencia en el debate son los trabajos de Herbert Simon, que lleva largo tiempo insistiendo en que las decisiones de las organizaciones se guían por un principio de "satisfacción", determinando unas metas mínimas y deteniendo la búsqueda cuando obtienen una solución que las satisfaga, aunque no sea la óptima. Puede verse Simon y Asociados (1992), para una evaluación de los resultados de numerosas investigaciones empíricas en este terreno.

⁵⁵ La regla no es unívoca, y sin duda la manipulación del criterio "maximin" -minimización de riesgos- puede dar mucho juego a quienes se empeñan en defender que en cualquier situación las elecciones pueden ser, y son de hecho, óptimas en algún sentido *desde la perspectiva del decisor*. Con la manipulación de los infinitos grados posibles de "aversión al riesgo" resulta evidente que "casi cualquier comportamiento puede ser tratado como óptimo" (Elster, 1985: 326).

momentos de *entrada* en una crisis de sistema, las coyunturas de profundos y rápidos cambios socioeconómicos y políticos tienden a generar este tipo contextos de incertidumbre radical. Creo, sin embargo, con Przeworski (1987: 114), que las situaciones en que los agentes no pueden obtener *ninguna información relevante* para tomar sus decisiones son bastante escasas, aunque este es desde luego un problema al que sólo cabe dar una respuesta empírica. En cualquier caso, si las decisiones *iniciales* tienen resultados absolutamente imprevistos, la constatación de este hecho ofrecerá siempre al actor una información adicional para perfeccionar o alterar las teorías causales y las expectativas sobre el comportamiento de los otros sujetos que regían hasta entonces sus cálculos.

La cuestión central, por lo tanto, atañe al *ritmo de adaptación* de las conductas a la realidad cambiante. Los científicos sociales afines a la teoría de la elección racional pretenden aquí que la adaptación es *automática*, que todas las entradas de información adicional provocarán un reajuste paralelo en las estrategias de los jugadores, y es esto lo que les permite defender la utilidad del análisis estático "de equilibrio" para dar cuenta de las decisiones de los actores *en cualquier coyuntura histórica*. Sin embargo, esta pretensión contradice toda la evidencia empírica sobre la acción histórica real de las organizaciones. Resulta muy difícil negar, en efecto, que la conducta de las organizaciones sufre fuertes *presiones inerciales*, de tal modo que aquéllas no podrán variar sus estrategias *a cualquier velocidad* (Hannan y Freeman, 1989, cap. IV), y que en los períodos de transición, cuando las condiciones de entorno cambian muy rápidamente, «la tendencia a mantener repertorios estratégicos heredados» (Paramio, 1992: 49) resultará tanto o *más determinante que el cálculo racional* para explicar su comportamiento y sus resultados.

Para la ciencia política, desde luego, este problema no es en absoluto nuevo, dado que ha apelado siempre a conjuntos de factores estructurales relativamente *constantes* para dar cuenta de la acción *no racional* -en un sentido instrumental- de los actores colectivos: desde las ideologías y las culturas políticas a los efectos causales las normas institucionales heredadas. Sí es en cambio un desafío para la teoría de juegos, dado que en la medida en que las presiones inerciales sean importantes, la estructura de oportunidades de los actores, reflejada en su matriz de pagos, sólo resultará suficiente para explicar los *resultados* que obtengan en el juego, pero no para dar cuenta de las *estrategias* seleccionadas.

Mi propuesta en este punto consiste en diferenciar en primer lugar entre la *matriz objetiva* del juego, que describe "desde fuera" la estructura de oportunidades que enfrentan

los actores, y una *matriz efectiva*, que determina en la realidad sus decisiones estratégicas. Se trata con ello de introducir un mecanismo formal que puede permitir a los científicos sociales empíricos "*beneficiarse del poder analítico-descriptivo del aparato de la teoría de juegos sin tener que renunciar a la mayoría de lo que saben sobre la diversidad y la contingencia de las motivaciones de los actores de la historia*" (Scharpf, 1991b: p. 67, cursiva mía)⁵⁶. En segundo lugar, en identificar los *mecanismos inerciales* capaces de dar cuenta del tránsito entre las dos matrices, ensayando en los períodos marcados por cambios rápidos en las condiciones del entorno una *explicación básicamente histórico-estructural de las estrategias* de las organizaciones para la acción colectiva.

Una primera fuente de presiones inerciales son las disposiciones culturales e ideológicas *hacia los otros actores* heredadas por la organización de su trayectoria previa. Lo interesante es que éstas disposiciones subjetivas pueden captarse en un número muy *reducido* de reglas de transformación que convierten la matriz objetiva del juego en matrices efectivas diferentes, evitando así que el análisis naufrage al enfrentar una variedad inmanejable de factores cognitivos y normativos. Entre las disposiciones descritas en los estudios experimentales en psicología social parece haber tres con un interés particular para el análisis de la acción socio-política: *la maximización de la propia ganancia* del decisor "frío" de la teoría de la elección racional, que respetaría la estructura objetiva de la matriz; *la maximización de la ganancia relativa* frente al otro, que la sometería a una *transformación competitiva*; y *la maximización de las ganancias conjuntas*, que se traduciría en una *transformación cooperativa* del juego. En cada caso, *el actor interpreta de un modo distinto sus intereses en función de su actitud hacia los otros jugadores involucrados en la interacción*. Si los actores imponen al juego representado en la **Figura 1.2** una transformación "competitiva" dejarán en el extremo de estar interesados en alcanzar acuerdos mutuamente ventajosos. Simplemente, intentarán superar al otro y medirán sus pagos en términos de ventaja relativa, adoptando las estrategias de *confrontación* propias de situaciones de suma cero: se tratará sólo de ganar o perder. La transformación "cooperativa" tenderá, por el contrario, a hacer irrelevante la diferencia entre los pagos individuales e impulsará a la maximización del resultado agregado. En este caso, los jugadores adoptan un estilo de toma de decisiones

⁵⁶ La idea original es de H. H. Kelley y J. W. Thibaut, *Interpersonal Relations. A Theory of Interdependence*, Nueva York: John Wiley, 1978.

solidario, que pretenderá centralmente "solucionar los problemas" y que resultará más adecuado para coordinar políticas que el estilo *negociador* que caracterizaría a un maximizador racional en la misma coyuntura. Continuará habiendo más de un equilibrio distributivo, pero será desde luego mucho más fácil alcanzar un acuerdo.

En todas las situaciones modelables en términos de un juego de distribución de suma variable en el que *cualquier* solución coordinada arroje un resultado muy superior a la ruptura, una actitud solidaria facilitará la obtención de acuerdos estables que favorecerán a ambos jugadores; la transformación competitiva, por el contrario, les empujará a adoptar decisiones que resultarán suicidas a la luz de la "matriz objetiva" del juego: se comportarán como si estuvieran jugando un juego de suma cero, cuando en la realidad de los hechos están implicados en una situación que exige soluciones cooperativas. Por supuesto, si los pagos cambian y las consideraciones distributivas adquieren una mayor relevancia, la "transformación sentimental" o "solidaria" puede contribuir a complicar bastante las cosas, conduciendo del mismo modo a estrategias que resultarán subóptimas en función de la estructura de la matriz objetiva del juego, que hubiera exigido tal vez actitudes más "negociadoras" e incluso elementos de "confrontación".

Figura 1.2

**Matriz objetiva y transformaciones cooperativa y competitiva
de un juego de motivación mixta**

Jugador (A)	Jugador (B)					
	S	R	S	R	S	R
S	4,3	2,2	7/2,7/2	3/2,3/2	1,-1	0,0
R	1,1	3,4	3/2,3/2	7/2,7/2	0,0	-1,1
	Matiz Objetiva		Cooperativa		Competitiva	

En cualquier caso, hay algo más que ignorancia en el origen de los malos resultados durante los períodos de cambio. Junto a las inevitables limitaciones cognitivas de decisores "racionales pero mal informados" (Arrow, 1974: 49; Przeworski, 1991: 64), las conductas

no racionales causadas por las *disposiciones subjetivas hacia los otros* pueden entrar en el modelo del juego de la mano de las reglas de transformación de la psicología social, que concuerdan perfectamente con las elaboraciones de la literatura de sobre los "estilos de toma de decisiones"⁵⁷. Resulta necesario, sin embargo, evitar que el tipo de razonamiento que acabo de formalizar conduzca a la jaula de oro de la admonición moralista, y conviene recordar al respecto que una buena parte de los discursos políticos y teóricos sobre la necesidad de la concertación para promover y consolidar las transiciones democráticas en América Latina quedaron sistemáticamente atrapados en una lógica normativista, que terminaba en práctica limitándose a amonestar a los actores sociales y políticos por sus "instintos bélicos". En el caso de la transición democrática de Bolivia, por ejemplo, los más destacados científicos sociales del país (Lazarte, 1985 y 1987; Romero, 1987; Mayorga, 1987; Mansilla, 1989) redujeron la explicación de las estrategias de conflicto que ensayó la COB durante el período a referencias a una cultura política belicista y mesiánica, escasamente compatible no sólo con la negociación democrática sino con cualquier forma de comportamiento racional.

Pero es fácil desterrar por completo el "moralismo"⁵⁸ del análisis socio-político si se tiene en cuenta que las disposiciones subjetivas encerradas en los universos ideológicos y culturales heredados exigen a su vez una explicación que en ningún caso puede ser "interna". Es posible, en efecto, dar cuenta de las ideologías y las "culturas políticas" desde los efectos causales que tienen sobre la experiencia de los sujetos las posiciones estructurales que ocupan (Scott, 1973), o a partir de mecanismos psicológicos capaces de alterar las creencias a la luz de las alternativas disponibles, en particular la reducción de la disonancia cognitiva (Elster, 1988: caps 2 y 3). Las dos aproximaciones son de hecho complementarias, dado que la segunda se limita a intentar aportar algún "microfundamento" a los análisis que se centran en el impacto sobre la formación de las creencias y valores de las *estructuras de oportunidades* que enfrentaron los sujetos a lo largo de su historia. Creencias y valores deben verse, por lo tanto, como un resultado de la *historia del juego*: las culturas políticas y los discursos ideológicos legitiman y dan sentido a los *repertorios de estrategias* que fueron

⁵⁷ Véase arriba nota 49.

⁵⁸ Perry Anderson (1985: 95) define el "moralismo" como "la vana intrusión de los juicios morales en el conocimiento causal, en la vida diaria y en las valoraciones políticas, que conduce a una 'inflación' de los mismos términos éticos".

consolidando las organizaciones para promover sus intereses en su interacción con otros actores. Pero dado que esos sistemas de creencias tienden a adquirir fuerza normativa será necesario conceder a la literatura sobre las "culturas políticas" y los "estilos de toma de decisiones" que en cualquier coyuntura histórica tendrán *efectos causales independientes* sobre la conducta. Siempre será necesario, por lo tanto, conocer la historia del juego, porque las estrategias de transición no podrían explicarse sin atender a *las percepciones mutuas hayan desarrollado los actores durante sus interacciones previas*, que oscilarán entre la absoluta *alienación* -desconocimiento- y diversos grados de *hostilidad e identidad* (Crouch, 1993: 24-6).

La segunda fuente de presiones inerciales sobre los repertorios de estrategias de las organizaciones se sitúa en el nivel de su *gobierno interno*. Esta cuestión la abordé ya al discutir sobre la "racionalidad" de los actores corporativos, afirmando que tanto las definiciones del interés general del grupo amplio como la posibilidad de traducir esas definiciones en conductas efectivas dependerán de la eficacia de las *estructuras de autoridad* que haya heredado de su historia⁵⁹. *El poder de la organización sobre los miembros del colectivo y su nivel de identificación con determinados intereses y objetivos* son aquí las variables esenciales, más allá de las características específicas de los distintos conjuntos de reglas formales. No voy a volver ahora sobre ello, pero conviene tener presente que si siempre será difícil, lento y costoso, iniciar un ajuste estratégico que implique una redefinición radical de las percepciones ideologizadas de los otros jugadores, lo será mucho más si ese ajuste exige además a imponer sacrificios sustanciales sobre los intereses inmediatos de los representados y/o promover una redistribución importante de los recursos entre los miembros del colectivo. Desde luego, la ineficacia del poder organizado o el compromiso histórico del actor corporativo con un segmento de intereses estrechos para los que el juego continúa siendo de "suma cero" pueden ser datos tanto o más importantes que las disposiciones subjetivas hacia los otros para explicar la "transformación competitiva" de la matriz de pagos representada en la Figura 1.2.

En cualquier caso, la importancia real de los problemas de la rigidez o la inercia estratégica sólo podrá entenderse si se considera que *las expectativas que guían conducta de las organizaciones en los juegos socio-políticos tienen una doble dimensión: calculativa y*

⁵⁹ Véanse arriba pp. 18-23

normativa. Los individuos que forman parte de ellas no sólo calculan lo que decidirán los otros, dados sus intereses y sus recursos; también esperan -en un sentido distinto y en ocasiones mucho más determinante- de los otros que hagan algo, dada su *identidad*. Al enfrentarse a una situación de elección, cada minero y cada trabajador boliviano pensará en parte en términos de su presupuesto familiar y en parte en términos de una moralidad más amplia, de modo que la racionalidad de la organización *en tanto que dispositivo estratégico* siempre estará limitada por las *expectativas normativas* que genera *en tanto que institución*. Es un problema de lealtad a principios que prescriben tanto lo que los dirigentes deben esperar de las bases y éstas de los dirigentes, como lo que la organización debe esperar de un gobierno democrático o de un partido político determinado, y es desde luego un problema tan viejo como las mismas ciencias sociales.

La hipótesis de la elección racional a nivel individual y el contenido de las preferencias "básicas" descrito en el primer epígrafe de este capítulo, garantizan que el éxito de la organización en el medio plazo dependerá de su capacidad para dar cuenta -"account"- a la población que desean representar del resultado material de sus estrategias. Pero las estrategias heredadas son también legítimas, y cualquier cambio frustrará las expectativas normativas de los representados. En los períodos de transición, las organizaciones cargadas de historia deberán pagar así inevitablemente algún coste en dos dimensiones inconmensurables, y como la razón política y el cálculo económico no son en absoluto equivalentes⁶⁰ nunca será fácil definir el curso de acción más racional, con independencia de que los decisores estén mejor o peor informados sobre las restricciones del contexto. En todos los casos, los cambios en el repertorio de estrategias, necesarios para aprovechar las oportunidades o enfrentar los desafíos del nuevo entorno, "traicionarán" compromisos, demandas legítimas y valores arraigados. Pero en algunas ocasiones habrá muy poco que hacer al respecto en el corto plazo: *el universo normativo heredado resultará tan determinante que los cambios en el repertorio de estrategias sólo serán posibles después de una reconstrucción radical de las visiones ideologizadas de los otros y de las estructuras de autoridad del actor corporativo*. Los cambios exigirán, por lo tanto, "refundar" la organización sobre bases nuevas.

⁶⁰ Véase arriba nota 6.

EMERGENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

La imaginería organicista no se lleva del todo bien con la historia de las organizaciones, y nada en absoluto con la de las organizaciones obreras. Los sindicatos, al parecer, no nacen, crecen, envejecen y mueren; por el contrario, el esplendor puede llegarles cuando están muy entrados en años, y las "resurrecciones" son, además, muy frecuentes; la sociología histórica, por su parte, ha demostrado suficientemente que la trayectoria de la lucha de clases y de las organizaciones del trabajo tiene una forma cíclica que contradice por completo los relatos lineales del evolucionismo. Las poblaciones de organizaciones obreras son además muy escasas, y no es raro que se reduzcan a una o dos unidades, de modo que de entrada parecería absurdo postular que su desarrollo puede explicarse apelando a algún mecanismo análogo a la selección natural.

Sin embargo, las "resurrecciones" cíclicas de las pocas organizaciones que componen los movimientos obreros podría integrarse sin demasiados problemas en un modelo evolucionario si se tiene en cuenta que la selección no opera sobre y entre las organizaciones mismas -las siglas-, sino sobre y entre los elementos centrales que describen la *forma organizacional* dominante: sus *estructuras de autoridad* y sus *repertorios de estrategias*. Por otro lado, la *competencia* entre distintas ofertas organizativas a lo largo los períodos de formación y consolidación de las organizaciones del trabajo y la *elección racional* en el nivel individual, pueden aportar los *mecanismos* necesarios para construir un relato causal creíble del proceso de *adaptación funcional* de las organizaciones obreras a las condiciones del

⁶¹ Merece la pena reproducir aquí "in extenso" la distinción de Van Parijs entre las perspectivas *evolucionista* y *evolucionaria* del cambio social: «Una perspectiva evolucionista consiste en mirar a la historia (sea biológica o social) como desarrollo, como progreso, como una sucesión de estadios de creciente complejidad o perfección. Sus pretensiones explicativas a menudo se limitan a descifrar una *lógica* de desarrollo: la sucesión de estadios que presenta sólo refleja el hecho de que un estadio es una precondition del siguiente. Pero a veces sus pretensiones se extienden a la *dinámica* del desarrollo: la sucesión de estadios que presenta corresponde entonces a un camino en el que las especies o sociedades son "arrastradas" hacia algún "Fin de la Historia" por referencia al cual deben explicarse los diversos estadios [...]. Una perspectiva evolucionaria, por otro lado, se centra en mecanismos de *filtro* o de *ensayo y error*, i.e., en mecanismos de selección entre alternativas actuales (por oposición a potenciales)». Citado en De Francisco (1995), pp. 139-140.

dores; finalmente, la evolución de la base de recursos sobre la que las organizaciones realizan sus reclamos distributivos afectará a la *flexibilidad de las estrategias de conflicto* frente a los otros jugadores.

En este punto resulta ya necesario, sin embargo, hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, afirmar que las organizaciones obreras tenderán a adaptarse funcionalmente a las condiciones del entorno es algo totalmente distinto a postular que sus estructuras y estrategias apuntarán hacia algún "óptimo social", expresado en su capacidad para obtener la satisfacción máxima del bienestar agregado de sus representados bajo restricciones determinadas. Desde luego, los relatos evolucionistas contruidos sobre el modelo básico de la elección racional para explicar la emergencia de instituciones sociales parecen avalar esta imagen, dado que se han ocupado exclusivamente de situaciones modelables como juegos de coordinación o "dilemas de prisionero" que permiten describir a los individuos en forma de "especie" cuyos intereses comunes pueden especificarse de algún modo. También he anotado, sin embargo, que en la historia real los actores suelen jugar juegos de distribución, y que en estos casos la hipótesis de la elección racional obliga a desplazar el discurso desde la postulación de un "óptimo social" hacia el análisis de las *asimetrías de poder* entre grupos de individuos racionales que difícilmente estarán dispuestos a estabilizar equilibrios sobre alguna base arbitraria relegando a un segundo plano las consideraciones sobre sus efectos distributivos. En principio debería esperarse, por lo tanto, que las estructuras y las estrategias de las organizaciones reflejen *equilibrios institucionales impuestos por sus miembros con un mayor poder de negociación*⁶³.

Las organizaciones obreras, en efecto, enfrentarán numerosas demandas procedentes de los distintos grupos sociales que quieren representar. Muchas de ellas serán difícilmente compatibles, y la medida en que sus estructuras de autoridad y sus repertorios de estrategias reflejen su *vinculación a las demandas de un grupo de intereses determinado* dependerá siempre tanto de la importancia para la supervivencia de la organización de los recursos en manos del grupo y como del grado en que éste tenga un poder discrecional sobre su asignación y uso (Pfeffer, 1992: 214). En lo que se refiere al caso boliviano, como veremos

⁶³ Puede mantenerse, sin embargo, que la adaptación funcional responde también a una variable integradora: el *refuerzo* del equilibrio interno. Las organizaciones más estables son sin duda las que alcanzan un mayor nivel de inclusión de los intereses de sus representados, aquéllas cuyas estructuras y estrategias se aproximan precisamente a un "óptimo social" capaz de sostener equilibrios sólidos y minimizar los riesgos de rupturas internas. Véase Paramio (1992), pp. 32-34.

en el capítulo 2 de esta tesis doctoral ("La historia del juego"), el escasísimo desarrollo industrial del país a lo largo de los períodos de formación y consolidación de las organizaciones sindicales situó a las élites competidoras en una situación de dependencia absoluta respecto de los recursos de un grupo reducido de trabajadores mineros, dotados de un gran *poder de negociación en la arena económica* e insertos en estructuras comunitarias que les dotaban de *una fuerte capacidad para la acción colectiva autónoma*. De este modo, los parámetros del juego determinaron en primer lugar que no existiera ninguna otra población obrera capaz de ofrecer una base suficiente para sostener modelos organizacionales alternativos, y que las comunidades sindicales de base en los campamentos mantuvieran un control discrecional sobre sus recursos de poder: el movimiento obrero boliviano estaba condenado así a ser un movimiento *minero*. *Será por lo tanto la elección racional de los mineros*, y no la del conjunto más amplio de "los trabajadores y el pueblo de Bolivia", *el filtro intencional encargado de seleccionar las distintas ofertas organizativas de los liderazgos*.

En segundo lugar, la amable imagen "panglossiana" que suelen proyectar los relatos evolucionistas⁶⁴ termina de disolverse si se tiene en cuenta que la adaptación es *relativa a la oferta existente*. Por un lado, un sistema con recursos muy escasos podrá mantener un número muy reducido de organizaciones formales -una central sindical *única*, con unas estructuras de autoridad hegemonizadas por el segmento minero- y la población amplia de trabajadores, en este caso, tendrá poco donde elegir. Por otro, las restricciones estructurales pueden ser tan fuertes que la adaptación funcional no sólo se produzca *con independencia* de las intenciones de los actores sino incluso *en contra* de éstas, en tanto que la forma organizacional consolidada es también *la única* capaz de reproducirse en el sistema. En estas condiciones, *no podrá identificarse ningún resultado positivo en las conductas adaptativas más allá de la mera supervivencia del movimiento*. De hecho, a partir de 1956 los mineros de Bolivia sólo consiguieron hacerse matar sin obtener a cambio una mayor participación en el producto ni una mejora demostrable en sus niveles de vida: en 1964, a las puertas del ciclo militar y más de una década después del triunfo revolucionario, en los "cementeros mineros" (Almaraz, 1969) de la Corporación estatal el 75% de los niños moría antes de cumplir los 10 años de edad. No hubo, por lo tanto, ninguna "primavera" en la historia de sus luchas.

⁶⁴ Hannan y Freeman (1989), pp. 21-22. Un repaso breve a las diversas visiones evolucionistas del cambio social puede encontrarse en Sztompka (1993), pp. 99-128.

El problema en este caso no sería sólo que la población amplia de trabajadores bolivianos contara únicamente con la oferta de una COB *minera*, sino que también los propios trabajadores del subsuelo y los liderazgos que competían por representar sus intereses disponían sólo de una opción estratégica.

La interacción entre los trabajadores mineros y las élites del estado, en efecto, continuó desarrollándose a lo largo de todo el proceso de formación y consolidación del movimiento obrero en el contexto de la crisis secular que arrastraba desde los años treinta la gran minería del estaño, nacionalizada en 1952. De este modo, *el juego distributivo adquirió necesariamente una configuración de "suma cero"*. Como veremos con algún detalle en el texto, ninguno de los actores políticos que se sucedieron en las tareas de gobierno fue capaz de ofrecer mejoras sustanciales en los niveles de vida de los mineros, cuyas demandas de consumo resultaban totalmente antagónicas -competitivas- frente a proyectos de desarrollo económico que sólo contaban con los declinantes excedentes de la gran minería como recurso interno de inversión. La cooperación con las élites del estado nunca fue una estrategia viable, dado que el juego no contenía elementos de suma positiva, pero tampoco pudieron desarrollarse estrategias de negociación flexibles, dada la dimensión de los desacuerdos distributivos implicados. En una situación de este tipo debía esperarse, como afirmé en el tercer epígrafe de este capítulo, que los actores mantuvieran estrategias *rígidas de conflicto puro* con la esperanza de anular el poder del adversario, y que en el movimiento obrero dominaran *ideologías revolucionarias, capaces de justificar los fuertes costos de la confrontación* -que sólo podían sostenerse gracias a la solidez de la estructura comunitaria de los sindicatos mineros- *con la perspectiva de una transformación social y política radical*.

Los datos del entorno socio-económico, enormemente restrictivos, y la hipótesis básica de la elección racional proporcionan, por lo tanto, una base suficiente para explicar *la consolidación del movimiento obrero boliviano como una organización minera y revolucionaria*. Para ofrecer una explicación completa de su carácter *sindicalista*, sin embargo, la descripción de la estructura del juego deberá incluir las características de los *sistemas políticos* vigentes durante los períodos de formación y consolidación organizacional. Como veremos también con algún detalle en el **capítulo 2** de la tesis, las organizaciones sindicales bolivianas se formaron y consolidaron en sistemas políticos que estuvieron siempre, por un lado, *cerrados a la competencia electoral*, de modo que no existieron oportunidades para promover los intereses de los trabajadores a través de la una actuación político-

partidaria regular y aquéllos tendieron a privilegiar la *acción directa* sobre el estado a través del sindicato. Antes de la revolución de 1952, por la absoluta ausencia de cualquier nivel de autonomía de los gobiernos democráticos frente a los intereses de los grandes propietarios mineros⁶⁵; después de esa fecha, por el aislamiento corporativo de los mineros en un sistema de partido dominante apoyado en el voto masivo de un campesinado satisfecho con los resultados de la Reforma Agraria.

Por otro lado, fueron sistemas políticos *muy poco institucionalizados*, que impusieron *unas restricciones muy laxas sobre los objetivos de las organizaciones* permitiendo, por ejemplo, que los violentos conflictos distributivos entre los mineros y los gobiernos del MNR no se tradujeran en una ruptura política formal. Sin atender a la escasísima institucionalización del sistema político no podría entenderse la ausencia de segregación entre los papeles del partido y el sindicato, el hecho de que los trabajadores pudieran canalizar su acción opositora radical exclusivamente a través de este último sin promover la formación de un nuevo partido y sin vincularse a alguna de las formaciones izquierdistas existentes. El movimiento obrero boliviano pudo desarrollarse así como un movimiento revolucionario "sin partido" marxista, y la COB se consolidó como un "*actor mixto*" o un "sustituto funcional de los partidos" (Lazarte, 1991: 585), siendo *a la vez* representación corporativa de los poderosos intereses mineros y uno de los actores políticos que competían por el poder del estado dentro del difuso movimiento revolucionario de 1952.

Se propone, en resumen, analizar la consolidación en Bolivia de un movimiento obrero minero, revolucionario y sindicalista, como un proceso de adaptación funcional a las oportunidades y restricciones de los contextos socio-económicos y políticos que enfrentaron sus liderazgos. Unos contornos que, por supuesto, no sólo incluyen parámetros, sino también a las otras poblaciones de *actores* que determinaron el rango de las alianzas posibles y la utilidad relativa de las distintas opciones estratégicas: poco podría entenderse de la historia del movimiento obrero boliviano sin tener en cuenta, por ejemplo, las expectativas del campesinado y de las clases medias urbanas en la etapa posrevolucionaria.

⁶⁵ El suicidio político en la inmediata posguerra del PIR, el único partido marxista de masas de la historia de Bolivia, fue, como se verá en el capítulo 2 del trabajo, el resultado más dramático de esa dependencia y el que tuvo consecuencias de más largo alcance para la evolución posterior del movimiento obrero boliviano.

TRANSICIÓN Y CRISIS

El paradigma ecológico en teoría de las organizaciones mantiene que la gran mayoría de las variaciones en las estructuras nucleares -"core structures"- y en los repertorios estratégicos de las poblaciones de organizaciones se debe a la creación de *nuevas* unidades y al hundimiento de las preexistentes. Por su parte, la idea, original de Arthur Stinchcombe, de que las "cohortes" de organizaciones *quedan "marcadas" de un modo perdurable por los contornos del ambiente en que se fundaron* ha tenido una fuerte influencia en varios paradigmas de la disciplina, dado que expresa muy gráficamente el hecho reconocido de que los actores corporativos, una vez consolidados, adquieren una *inercia* propia que va más allá de los intereses y las intenciones de cada uno de sus miembros: en palabras de Samuel Valenzuela (1986: 40), tras la consolidación organizacional el campo del movimiento laboral se "congela" durante un período duradero.

Por un lado, sin embargo, la "imprinting hypothesis" de Arthur Stinchcombe no defiende que las organizaciones conservarán en *cualquier* corte temporal sus características fundacionales. Por el contrario, afirma que estas características sólo podrán mantenerse sin problemas durante un período prolongado de tiempo en caso de que: a) resulten las más adecuadas para la consecución de un objetivo dado; b) la organización esté aislada de presiones competitivas, bien por el apoyo de "intereses creados", de "fuerzas tradicionalistas" o una "posición ideológica fuertemente legitimada", bien por la ausencia de rivales potenciales⁶⁶.

No es difícil ver que estas condiciones que según Stinchcombe permiten la reproducción de una forma organizacional consolidada dependerán, en la terminología que estoy utilizando hasta ahora, de que la estructura del juego se mantenga relativamente estable. En la medida en que no ocurran transformaciones en el entorno que reduzcan el valor de los recursos controlados por los grupos dominantes en el interior de la organización -los "intereses creados"- y/o promuevan la "entrada" en el escenario de nuevos actores con nuevas expectativas y recursos, las organizaciones consolidadas podrán continuar ligadas a los mismos grupos conservando su vitalidad. En segundo lugar, las estrategias excluyentes diseñadas para el beneficio de cualquier "fuerza tradicionalista" estrecha no debilitarán a las

⁶⁶ Stinchcombe (1965), pp. 167-169. Para una revisión reciente de la hipótesis puede verse David J. Tucker et. al. (1990).

organizaciones obreras mientras los parámetros del juego político las mantengan aisladas de la competencia de otros actores que podrían rivalizar con ellas en la representación de los colectivos nuevos y más amplios. Finalmente, mientras no se produzcan grandes inflexiones en la estructura del juego no habrá peligro de que las estrategias tengan resultados imprevistos, produciendo "fracasos" y "fracturas" en la interpretación de las demandas que sometan a discusión las "posiciones ideológicas fuertemente legitimadas" por la experiencia histórica, cuestionando tanto las estrategias empleadas para alcanzar objetivos dados como los objetivos mismos.

Como veremos en el capítulo 3 ("La hora del poder obrero"), las condiciones que permitieron en Bolivia la reproducción durante casi tres décadas de un fuerte movimiento obrero minero, sindicalista y revolucionario, se disolvieron por completo al inicio de la década de los 80 bajo el doble impacto del *agotamiento del modelo de acumulación* y de la *transición democrática*. En aquella coyuntura, y a medida que avanzaban los procesos paralelos de crisis terminal en la gran minería nacionalizada y de disolución de la coalición social del autoritarismo, la estructura de la interacción entre organización sindical y las élites políticas del estado sufrió un cambio radical. Por un lado, los recursos de poder del movimiento obrero se desplazaron abruptamente desde la arena económica hacia la arena política; por otro, las reglas formales del juego democrático fijaron un límite a las estrategias viables para conservar o ampliar los recursos políticos, al introducir un nuevo mecanismo de legitimación -las elecciones- y designar a un nuevo conjunto de competidores -los partidos-. Las herramientas analíticas de la teoría de juegos me permitirán describir "desde fuera" una situación de elección que era exactamente la inversa de la que había prevalecido en las décadas precedentes: después de 1982 el movimiento obrero no jugaba a debilitar a un estado excluyente y a sus aparatos corporativos, sino a conservar o ampliar en lo posible *desde el gobierno* el poder político que había alcanzado durante el período de transición. El nuevo contexto, por lo tanto, exigía el tipo de *estrategias cooperativas* -concertación- que la central sindical no había tenido ocasión de desarrollar a lo largo de su historia previa.

Si la "imprinting hypothesis" afirma tan sólo que las características fundacionales de la organización se mantendrán mientras la estructura del juego se mantenga relativamente estable, para la teoría ecológica, por otro lado, *la reorganización profunda es sinónimo de la creación de una unidad nueva*: sólo la marca -o la sigla- pervive, la "forma" ha cambiado por completo. El movimiento obrero que "resucite" después de un proceso de crisis será en

este sentido *otra* organización, dotada de nuevas estructuras de autoridad y/o un nuevo repertorio de estrategias, de tal manera que la potencia heurística de la metáfora evolucionaria no exige que los actores corporativos se extingan como material genético bajo el impacto de transformaciones en el entorno. Tan sólo será necesario que resulte plausible la afirmación de que las organizaciones raramente cambian lo *suficientemente rápido* para enfrentar las demandas de entornos cambiantes e inciertos: que la adaptación es lenta y difícil, y que el resurgimiento bajo una forma nueva, cuando llegue a producirse, estará precedido en la gran mayoría de los casos por una larga crisis.

Desde luego, las organizaciones no son compuestos biológicos u organismos *inertes*, y de hecho pueden emprender cambios radicales en las estructuras y estrategias que definen su forma, pero ya he anotado arriba alguno de los factores que permiten afirmar tanto que siempre cabe esperar que demuestren grados variables de *rigidez* como que *los mecanismos de inercia serán especialmente determinantes en las organizaciones mayores y más antiguas*.

En primer lugar, cuanto más amplio sea el universo representado en la organización - su *sistema de referencia* -, más compleja será su política interna, y mayor la posibilidad tanto de que se produzcan profundos conflictos de intereses como de que alguno de los grupos resista fuertemente los cambios y sea capaz de bloquearlos por completo. Los ajustes en las estructuras y estrategias se diseñarán normalmente para beneficiar al conjunto del movimiento: su utilidad pretende ser general. También normalmente llevará tiempo realizarlos. Siempre enfrentarán la oposición de algún grupo de interés, pero en los períodos de transición marcados por una fuerte incertidumbre contextual tropezarán también con una resistencia psicológica general: al parecer, los individuos tienden siempre a valorar más las pérdidas potenciales que los beneficios potenciales a la hora de tomar decisiones (Kahneman, Slovic y Tversky, 1982), y en los períodos de transición será muy frecuente además que deban afrontar costos inmediatos para perseguir ventajas inciertas. La resistencia al cambio será enorme en estas condiciones. Como veremos en el **capítulo 4**, para explicar las decisiones que adoptó la izquierda durante su primer año de gobierno basta tener en cuenta la estructura sindicalista que heredó el movimiento obrero boliviano en la coyuntura democrática, y el hecho de que los liderazgos sindicales no tenían razones suficientes para soportar los costos ciertos de un enfrentamiento con las demandas inmediatas de las bases a partir de algún cálculo sobre la utilidad probable de una política de austeridad.

En segundo lugar, la historia previa de la organización restringe también la

posibilidad de emprender los ajustes estratégicos necesarios. En el tercer epígrafe de este capítulo afirmé que los conjuntos de normas/valores tienen en cualquier momento efectos causales sobre la conducta de los actores corporativos, y es fácil ver que pueden bloquear la adaptación al menos en dos sentidos: por un lado, *proveen justificaciones legítimas, más allá del propio interés egoísta, a los grupos que se oponen al cambio*; por otro, *los consensos normativos pueden prevenir cualquier consideración seria de determinadas respuestas a las amenazas y oportunidades del entorno*. Como veremos en el **capítulo 5**, los valores asociados a las reglas de decisión y las reglas de límites que describían las estructuras de autoridad de el movimiento obrero boliviano en 1982 y los compromisos ideológicos que daban sentido al repertorio de estrategias heredado de su trayectoria histórica, anularon la capacidad de los liderazgos para emprender un ajuste en la dirección requerida cuando resultaba ya imposible desconocer los límites de las estrategias tradicionales en el nuevo contexto. El universo normativo del movimiento obrero boliviano impidió, en efecto, que las alternativas fundamentales pudieran siquiera plantearse, e hizo que todas las apuestas del Comité Central de la COB en favor de una moderación de las demandas derivaran en oleadas masivas de "indisciplina", provocando la deslegitimación progresiva de la autoridad central, y forzando la huida hacia adelante que desembocó finalmente en el ascenso de un nuevo liderazgo "revolucionario" y en la espiral de conflictos que hundió al país en la mayor crisis inflacionaria registrada hasta entonces en América Latina.

Por supuesto, la metáfora evolucionaria no sólo debe enfrentar el hecho de que las organizaciones son a lo más *estructuras relativamente rígidas* y no compuestos biológicos, sino también el problema de que sus procesos de crisis tampoco obedecen a la selección *azarosa* del medio, sino a *las elecciones de grupos de individuos racionales*. Si las rupturas en los equilibrios socio-políticos se producen como consecuencia de los efectos redistributivos indeseados de las instituciones y/o de los cambios en las asimetrías de poder entre los actores, los procesos de quiebra del *statu quo* implicarán comparaciones de los beneficios esperables bajo los nuevos equilibrios, generando *expectativas* diversas en la población. Los cambios en el entorno, por lo tanto, se traducen en el desarrollo de nuevas expectativas y en las fracturas entre expectativas y logros que caracterizan a los períodos transición, generalizando la incertidumbre, y la *elección racional* de los individuos dotados de expectativas de bienestar material y seguridad históricamente precisas es de nuevo el mecanismo intencional que selecciona, a través de procesos de ensayo y error, entre las

distintas ofertas de acción colectiva.

La hipótesis de la elección racional garantiza, como afirmé arriba, que el éxito de las organizaciones consolidadas en el medio plazo dependerá de su capacidad para dar cuenta a sus representados de los resultados de sus acciones, de modo que *la frustración de las expectativas provocará siempre protestas, salidas, y trasvases de lealtad hacia instancias competidoras* -otros movimientos sociales o partidos políticos- que pueden ser tanto organizaciones preexistentes como otras creadas "ex novo" para aprovechar las oportunidades del entorno. Al inicio de una crisis los resultados dependerán de la concordancia fortuita entre el repertorio de estrategias heredado y los requerimientos de la situación, pero las coyunturas transcionales exigirán muy pronto cambios profundos en la conducta de los actores. El hecho clave es que en estas situaciones *la organización sufrirá fuertes presiones en sentidos contrarios*: las estrategias heredadas son confiables y legítimas, pero tenderán a producir malos resultados en la nueva estructura del juego; cualquier cambio drástico en las estrategias, por su parte, violará expectativas normativas y demandas legítimas de los representados, que se sentirán "traicionados", dejarán de identificarse con la organización o cuestionarán la autoridad de las direcciones. En las coyunturas de cambio, por lo tanto, las organizaciones consolidadas deberán asumir *inevitablemente* algún costo, que puede terminar siendo enorme.

Sin embargo, es necesario evitar el error de ver a las organizaciones como víctimas pasivas de las transformaciones del entorno, cuando, por el contrario, son ellas mismas quienes en gran medida las inician y dirigen. Por un lado, las otras organizaciones del sistema son un elemento fundamental del entorno de cada una, de modo que *la perspectiva adecuada es siempre la de la teoría de juegos*, y los procesos de desarrollo y crisis de las formas organizacionales sólo podrán entenderse introduciendo la competencia entre actores estratégicos en el marco de parámetros cambiantes. En el **capítulo 5** de esta tesis, escrito a modo de epílogo, veremos que las élites políticas bolivianas, agrupadas en partidos nuevos (ADN) o renovados (MNR), supieron aprovechar la caída de las expectativas populares derivada del fracaso del movimiento obrero para impulsar un cambio profundo en la estructura del juego socio-político, estabilizando la economía y consolidando su propio poder frente a la COB.

Por otro lado, como vimos en el epígrafe dedicado a los actores corporativos, cada organización no es un mero instrumento adaptativo, sometido a los movimientos aleatorios

entorno. El primero es un *filtro estructural* cuya eficacia dependerá de la apertura del sistema; el segundo es un *filtro intencional*, que recoge el núcleo de verdad de la teoría de la elección racional tal como lo expuse en el primer epígrafe de este capítulo, afirmando que los individuos son capaces de *aprender* de la experiencia, generando creencias verdaderas sobre sus oportunidades, y que apoyarán a las opciones que se demuestren más capaces de satisfacer sus expectativas.

El paradigma ecológico de la teoría de las organizaciones⁶² propone agrupar bajo el concepto de "nicho" -que es *por completo equivalente al modelo objetivo del "juego"*- las variables del entorno que dan cuenta de la funcionalidad de las estructuras y del repertorio de estrategias que definen a una forma organizacional (Hannan y Freeman, 1989: cap. 5). Por mi parte, mantendré que los datos que describen los "nichos" de los movimientos obreros y permiten ensayar una explicación *funcional* de sus formas organizacionales dominantes deberán situarse en dos niveles: las *estructuras socio-económicas* y los *sistemas políticos*. El volumen de recursos sociales y económicos movilizables por las organizaciones del trabajo, las reglas de la interacción y las características de los otros actores que interactúan con ellas, definen la estructura del juego al que se adaptarán las estructuras y estrategias de los movimientos obreros durante sus etapas de formación y consolidación organizacional.

El desarrollo de una forma organizacional específica en el movimiento obrero dependerá en primer lugar, por lo tanto, de *un conjunto de variables del entorno socio-económico* que determinan el volumen de recursos a que tienen acceso los liderazgos y su capacidad para movilizarlos, estableciendo un primer filtro sobre la viabilidad de las estructuras y el rango de estrategias disponibles. Las dimensiones de la población asalariada, las características de los entornos laborales, los aspectos estructurales del modelo de acumulación y sus tasas de crecimiento, son los datos más relevantes a este respecto. El *número de individuos movilizables* es sin duda un determinante esencial de las oportunidades de acción de las organizaciones obreras en las arenas social y política; las características de los entornos laborales, por su parte, inciden en la *capacidad de acción colectiva* de los diferentes segmentos de la clase; la estructura del modelo económico determina la *distribución del poder de negociación* en el mercado entre los distintos grupos de trabaja-

⁶² Una descripción -excesivamente- sucinta en castellano puede encontrarse en Pfeffer (1992), pp. 199-212. Una exposición completa del paradigma de manos de sus dos principales artífices, en Hannan y Freeman (1989).

de los actores de nivel inferior -los individuos- y capaz sólo de anticiparlos mejor o peor en sus cálculos. Por el contrario, entre las organizaciones y las poblaciones de individuos se desarrollan relaciones de *autoridad* más o menos efectivas: los actores del nivel superior -liderazgos- tendrán mayor o menor *poder* para hacer cumplir decisiones propias a los del nivel inferior, y no limitarse a anticipar en las suyas el resultado agregado de las decisiones autónomas de éstos. Los actores agregados, o personas jurídicas, que actúan en las arenas nacionales y sectoriales, afectarán en medida variable la conducta y las expectativas de los actores de nivel inferior, pese a la resistencia que éstos puedan ofrecer, y dispondrán de algún nivel de *autonomía* -libertad- frente a las reacciones de los actores en los niveles inferiores, que no se presentarán ya como parámetros, sino como recursos susceptibles de ser *movilizados* y voluntades susceptibles de ser *persuadidas* o *derrotadas*. De hecho, la habilidad de los liderazgos importará mucho en las transiciones, cuando el mantenimiento de las viejas rutinas no garantiza ya los resultados y la posibilidades de fracaso son mayores.

Si en este trabajo he optado por adoptar una perspectiva radicalmente antiheroica, destacando los factores de inercia y desterrando cualquier consideración sobre la menor o mayor astucia y las percepciones de los liderazgos, es sólo porque dadas las estructuras de autoridad que heredó el movimiento obrero boliviano en la coyuntura democrática las cúpulas dirigentes carecían de cualquier poder para alterar las conductas de las bases, de modo que la organización obrera era un actor demasiado previsible, casi enteramente rígido. No necesito comprometerme, por lo tanto, con una epistemología *determinista*. Pero este punto tal vez merezca un breve comentario final.

UNA NOTA EPISTEMOLÓGICA: **LOS LÍMITES DE LA EXPLICACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES**

Los relatos de la elección racional operan sobre una base *estática*, suponiendo a efectos del análisis que todos los sistemas están, en cualquier corte temporal, técnicamente "en equilibrio": las acciones de los sujetos, "congeladas" en cada punto, deben ser, por definición, óptimas -digamos "satisfactorias" para añadir un grado de realismo- respecto a la evidencia disponible. Se afirma por ello que el comportamiento de los actores *podrá*

describirse siempre como racional si se conoce con detalle la información que poseían en el momento de adoptar sus decisiones; que cualquier entrada de información adicional provocará un reajuste automático en las estrategias; y que las acciones con resultados pésimos deben situarse a lo largo de un proceso de adaptación continua que permitirá modelar en todo momento las estrategias sobre una "ruta" de equilibrio, "como si" tendieran hacia él. Desde luego, la incertidumbre no sólo produce errores inevitables⁶⁷ y malos resultados, a través de las limitaciones cognitivas que impone a los actores. Por el contrario, la ignorancia del adversario es también para cada jugador una oportunidad estratégica para avanzar los propios intereses: en contextos inciertos, los actores tienen la opción de jugar de "farol", y las huelgas bien pueden responder a la intención de ocultar al otro la propia debilidad.

En cualquier caso, la imagen que mejor capta los escenarios en los que se desarrollan los conflictos distributivos que modela la teoría de juegos es la de una nube que se va disipando a medida que los jugadores ejecutan sus movimientos y aproximan sus estrategias al equilibrio del juego⁶⁸. Sin embargo, la neblina inicial puede prolongarse indefinidamente, o bien acabar convirtiéndose durante los procesos de transición en una espesa humareda que deja al analista las manos libres para descubrir un número *arbitrario* de decisiones "óptimas respecto a la evidencia disponible". La ignorancia irá afectando a los pagos y alternativas de los rivales, a las reglas del juego, a los pagos propios, y así sucesivamente, y es fácil ver que en estos escenarios *todas las anomalías aparentes podrán integrarse al modelo incluyendo datos adicionales sobre los objetivos "reales" de los decisores o las restricciones que enfrentaron*, introduciendo mayores dosis de incertidumbre y multiplicando los aspectos "estratégicos" de unos conflictos distributivos que progresan sobre la ruta infinita del equilibrio.

El problema, por supuesto, es que *el analista carecerá siempre de la posibilidad de ofrecer un referente empírico positivo de la información* que atribuye a los jugadores. Como la *única variable independiente* capaz de dar cuenta en el análisis de equilibrio de las

⁶⁷ En el marco de la elección racional, todos los errores son inevitables. No hay lugar para el arrepentimiento, ya que todos los resultados son producidos por actores que adoptan siempre "el comportamiento estratégico apropiado, dada la información disponible en el momento en que adoptaron las decisiones, decisiones que el actor repetirá necesariamente, y querrá repetir, cada vez que la situación se repita y a pesar de los resultados subóptimos que arrojaron" (Lange y Tsebelis, 1993: 140).

⁶⁸ Un resumen reciente de las distintas propuestas de la teoría de juegos para el análisis del conflicto distributivo puede encontrarse en los tres últimos capítulos de Myerson (1991).

profundas *discontinuidades* que constatamos en la "racionalidad" de los actores de la historia estará siempre demasiado oculta en sus cabezas sólo podrá *deducirse* de sus conductas, y la circularidad será inevitable: como hizo tal cosa *debía* saber esto y desconocer aquéllo otro. El resultado será el mismo en el caso de que el teórico reaccione frente a las anomalías -las conductas sorprendentes- exigiendo una descripción más completa de las *preferencias* de los actores, dado que tampoco será posible obtener una evidencia empírica positiva sobre los deseos a partir de alguna base independiente de la observación de las conductas: si hizo tal cosa, será porque en el fondo era *realmente* eso lo que deseaba.

Conviene recordar aquí que la teoría de la elección racional defiende una lectura muy peculiar del *Verstehen* weberiano, afirmando que la capacidad del observador para ponerse en el lugar de los sujetos que estudia se deriva del hecho de que todos los individuos -yo, tú y él- somos *intercambiables*, y que por lo tanto bastará con aplicar las reglas de la maximización bajo restricciones externas para "comprender" las conductas. Las razones podrán convertirse así en *causa* de la acción, y "explicar" y "comprender" serán una misma cosa (Tsebelis, 1991: 44-5). La cruz, sin embargo, es que esta estrategia para eludir la hermeneútica ofreciendo *explicaciones intencionales positivas* sólo resulta sostenible bajo unas condiciones de entorno muy precisas: *cuando la teoría se aplica a sistemas estables y con una fuerte integración normativa*. Sólo en estas circunstancias la información de los actores sobre sus estructuras de oportunidades coincidirá "grosso modo" con la del observador externo; de manera que éste podrá "ponerse en su lugar" sin abandonar las *asunciones discretas* sobre las *creencias*, suponiendo que los sujetos aborígenes disponían de un conocimiento "completo" o cuando menos "suficiente" de su entorno de elección. Sólo en estos casos la atribución *desde la teoría* de un conjunto de *preferencias "básicas"* a los actores resultará tal vez suficientemente informativa, de modo que el analista no se verá obligado a añadir casi nada, por ejemplo, a sus afirmaciones generales sobre los objetivos "estandarizados" de los partidos políticos y/o sus liderazgos, pudiendo afirmar sin riesgo de hacer el ridículo que bajo unas mismas restricciones "comunistas, socialistas, gaullistas y giscardianos se comportan exactamente del mismo modo" (Tsebelis, 1991: 239).

Pero en los períodos de transición, marcados por una fuerte *incertidumbre* contextual y cruzados por *conflictos normativos* que pueden llegar a ser muy intensos, el observador y los distintos actores distarán mucho de ser directamente intercambiables. Y en este tipo de coyunturas los esfuerzos de los defensores de la explicación intencional estática por cerrar

la brecha con la evidencia empírica reinterpretando el modelo del juego como una descripción de las preferencias y los datos del contexto "desde el punto de vista de los propios actores" (Rubinstein, 1988: 14-8), no podrán evitar que el análisis derive necesariamente bien hacia "explicaciones" circulares, bien hacia el "círculo hermeneútico". O las acciones que observa el estudioso "explican" las mismas razones que deberán a su vez explicarlas, o a aquél sólo le quedará bucear en las cabezas de los sujetos, interpretando sus expresiones *-utterances-*. Y los dos caminos conducen a la indeterminación absoluta, por mucho que los relatos estén basados en la *evidencia* (Bohman, 1991: 28). Para dar cuenta de las decisiones efectivas, el analista imputará a los actores diferentes actitudes frente al riesgo a partir de sus afirmaciones y/o de la observación de su conducta, interpretará las interpretaciones que pudieron hacer de sus pagos y de sus alternativas de elección, imaginando o deduciendo lo que sabían, lo que ignoraban y lo que querían, etc... Construirá así una *hermeneútica de la interacción* crecientemente compleja, una "descripción densa" en la que las conductas sólo podrán hacerse inteligibles en conexión con situaciones y propósitos ajenos a la práctica de un juego difuso que carecerá necesariamente de cualquier referente empírico preciso⁶⁹.

En los procesos de transición convendría entonces, por razones estrictamente metodológicas, ensayar explicaciones de la acción que dependan «*lo menos posible* de los detalles de los microprocesos en varios niveles» (Hannan, 1992: 121, subrayado mío); esto es, explicaciones que descansen menos en las razones -preferencias y creencias- de los actores en un "tiempo cero" y más en los *determinantes estructurales* heredados de su trayectoria previa. Reducir el espacio de las intenciones en el análisis, aceptar partir de una descripción sucinta de algún conjunto de intereses básicos, y no ocuparse demasiado de averiguar qué era lo que realmente sabían los sujetos en aquéllas circunstancias inciertas, permitirá reducir los márgenes del "fantaseo" y ofrecer explicaciones positivas de las conductas.

Pero resultará necesario conceder a los defensores del análisis intencional estático que esta opción metodológica dejará siempre algo -a veces mucho- sin explicar. Conviene tener claro que la teoría de la elección racional y las aproximaciones estructurales/holistas no son

⁶⁹ Es el caso de Przeworski (1991), un estudio estratégico de la última ola de transiciones democráticas en América Latina y Europa del Este, al que volveré a referirme más adelante. En general, el autor, pese a su declarada fidelidad a las herramientas analíticas de la teoría de juegos, ofrece un conjunto muy sugerente de descripciones "densas" de la interacción que, de no ser por el vocabulario que emplea, bien podría haber firmado el propio Clifford Geertz.

sino dos estrategias metodológicas alternativas para eludir los límites que impone a la explicación en ciencias sociales su sustrato ontológico: la existencia de actores de carne y hueso, *libres y diversos en sus ideas, sus valores y sus capacidades intelectuales*. La primera propone convertirlos en máquinas maximizadoras con intereses *dados* que computan sus elecciones de un modo enteramente predecible, dado algún conjunto de restricciones externas. Pero hemos visto que la teoría de la elección racional sólo podrá contar historias creíbles, ofreciendo explicaciones intencionales positivas, cuando los actores se muevan en entornos integrados y estables en los que resulte viable eliminar la indeterminación sometiendo la variedad infinita de las razones humanas a las crudas mutilaciones que propone la microeconomía. El holismo, por su parte, sólo contará en el mejor de los casos *una parte de la historia*, dado que las estructuras, en cualquiera de los niveles de análisis, dejarán siempre algún margen de maniobra a los individuos: «las restricciones estructurales no determinan por completo las acciones emprendidas por los individuos en una sociedad» (Elster, 1984: 39).

Desde luego, resulta evidente que las "precondiciones" estructurales importan, e importan mucho, y cuando -por poner el ejemplo conocido y excepcionalmente brillante de Przeworski (1991)- se las expulsado por la puerta en el estudio de las estrategias de los actores en los procesos de transición democrática, han entrado una y otra vez por la ventana en la forma del peso muerto de "orientaciones normativas" o "mapas cognitivos" ideologizados que se van acumulando para dar cuenta de las desviaciones de los cursos de acción racionales, e incluso de la persistente irracionalidad de algunos jugadores⁷⁰. El problema, desde luego, es que «los actores relevantes (son) *organizaciones colectivas previamente constituídas*, (que) *inician los conflictos en un contexto en el cual hay siempre convenciones preexistentes, normas e instituciones*» (Przeworski, 1991: 38-9, cursiva mía). Si esto es así parecería más sensato estudiar las "precondiciones" con alguna profundidad en lugar de ir haciéndolas entrar en escena como parches *ad hoc* para cerrar los múltiples agujeros del análisis intencional estático. Una vez más: atribuir *ex post* marcos cognitivos y compromisos normativos a los actores a partir de la observación de sus conductas no añade nada a nuestro conocimiento, y no existe evidencia *ex ante* más allá de sus propias expresiones, que habrá entonces que interpretar. Incluso si pudiéramos establecerlos *ex ante*, seguiría siendo crucial

⁷⁰ Véase en esta línea la reseña crítica de Kistschelt (1993) al trabajo de Przeworski (1991).

explicar por qué fueron esos compromisos normativos y esos marcos cognitivos, y no otros, los que generaron las percepciones del actor sobre su contexto de elección, motivando las conductas consiguientes (Kitschelt, 1993: 419), y la pregunta nos lleva directamente a la relación entre las creencias, las preferencias y las instituciones; esto es: al análisis histórico-estructural.

Sin embargo, Przeworski (1991: XII) no dejará por ello de tener razón al recordar que también importan la voluntad y la inteligencia, lo que nos devuelve al terreno del análisis intencional. No creo que nadie pueda discutir que en cada partida los actores de la historia reciben una mano de cartas que ellos no eligen, y tampoco que *cabe hacer dos lecturas muy distintas de esta analogía*. La primera afirmaría que el modo en que uno juegue la mano determinará en buena parte el resultado. La segunda, que hay una enorme cantidad de gente que recibe cartas tan pobres que toda la habilidad que pueda desplegar le servirá de muy poco. En la medida en que la primera lectura resulte plausible, el "fantaseo" que incorporan los análisis intencionales "heroicos" de los procesos de transición será tal vez más fructífero para el cálculo político que las aproximaciones histórico-estructurales, dado que "aun cuando nos equivoquemos con respecto a las posibilidades inherentes en una determinada situación histórica -soslayando algunas que de hecho son posibles o esperando engañosamente lo imposible-, al menos tendremos alguna oportunidad de identificar correctamente ciertas posibilidades factibles, y los caminos que llevan a ellas" (Przeworski, 1988b: 83). Sin embargo, cuando no quepa suponer que los jugadores tuvieron en los hechos un margen de maniobra significativo -que sus "puntos de vista" hicieron realmente alguna diferencia- será muy difícil defender la renuncia a la explicación en favor del "fantaseo" hermeneúico. Por mi parte, no pondría en duda que éste último fue en 1982 el caso de los liderazgos de la COB y con ellos de los trabajadores de Bolivia. Habrá *siempre e inevitablemente dos historias que contar*, pero por desgracia en muchas ocasiones las cartas estarán lo suficientemente cargadas como para que el relato "desde el punto de vista de los actores" carezca casi por completo de interés.

LA HISTORIA DEL JUEGO

Toda la vida de Bolivia, presente y futura, reside en las minas. Su potencialidad como país o región depende de su desarrollo minero. Si las minas no existieran, Bolivia sería considerada en América como Liberia, Etiopía o Tíbet, misteriosos países sólo conocidos por sus leyendas o sus rebaños

Tristán Marof

La emergencia de la protesta obrera en Bolivia fue bastante tardía. Mientras la gran mayoría de las repúblicas latinoamericanas había presenciado ya en la segunda década del siglo XX el desarrollo de un movimiento obrero sustancial y episodios importantes de acción colectiva obrera, en Bolivia la "cuestión social" comenzó a ocupar un lugar preferente en la agenda de los gobiernos tan sólo a mediados de la década de los 30's. Ello se explica sin duda tanto por el escaso desarrollo urbano-comercial y la inexistencia de una planta industrial mínima en el país durante las primeras décadas del siglo, como por su casi absoluto aislamiento de las corrientes migratorias, y por lo tanto de la influencia europea.

Las mismas características peculiares que retardaron el surgimiento de manifestaciones significativas de protesta obrera dieron una enorme gravitación a las luchas de los trabajadores del "enclave" minero, que no comenzaron a adquirir importancia para la evolución de la política nacional sino a partir de la derrota de las armas bolivianas en la Guerra del Chaco, en 1936. El desarrollo de las organizaciones sindicales en las minas marcó, como veremos, una *ruptura* total en la historia previa del movimiento obrero boliviano y puede muy bien considerarse como el inicio de su período formativo.

A lo largo de su *período formativo*, en las dos décadas que se extienden entre la crisis del Chaco y la Revolución Nacional de 1952, las organizaciones obreras, y en especial los

sindicatos mineros, fueron adquiriendo una creciente presencia en el escenario nacional, obligando a las élites del estado a adoptar diversas estrategias de respuesta, que flucturaron entre acciones abiertamente represivas e intentos para controlarlas y/o movilizar su apoyo. La *interacción* entre los actores del sistema político oligárquico y las organizaciones del trabajo durante esta etapa tuvo, como veremos, consecuencias fundamentales para la definición de los rasgos básicos del movimiento obrero que se consolidó en Bolivia tras el triunfo revolucionario abril de 1952.

En la década que siguió al triunfo revolucionario de 1952 el sindicalismo boliviano alcanzó su *consolidación organizacional* definitiva. Inmediatamente después de la revolución se fundó la Central Obrera Boliviana (COB), estructurada en torno a los sindicatos mineros, que se ha mantenido vigente desde entonces como la única central sindical efectiva. A partir de 1952, y a lo largo de aproximadamente una década, los sindicatos fijaron definitivamente el tipo de relación con los partidos políticos, la estructuración vertical de los procesos internos de toma de decisiones en la red organizativa, y las estrategias de acción frente al estado que conformarán el núcleo de la herencia que recibió el movimiento obrero al inicio del proceso democrático en los años ochenta.

El objetivo del presente capítulo es ensayar una explicación histórica y ofrecer una descripción de los elementos fundamentales de esa herencia, analizando *la génesis y el desarrollo de la forma organizacional característica del movimiento obrero boliviano: el sindicalismo revolucionario*.

**LA ECONOMÍA MONOEXPORTADORA Y LAS COMUNIDADES MINERAS:
LAS BASES ESTRUCTURALES DEL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO**

El desarrollo desigual de la economía boliviana a lo largo del período republicano había consolidado la división del país en dos sistemas socio-económicos enormemente diferenciados: en un polo se encontraba el circuito de la producción de estaño, relativamente moderno y orientado hacia la economía mundial; en el otro, un sistema agrícola de subsistencia, o a lo más con una circulación comercial limitada a los mercados locales, de muy baja productividad y encerrado en una estructura de relaciones de producción semif feudales. Eran en verdad «dos Bolivias»¹.

De los tres millones de habitantes que tenía el país en 1950, una abrumadora mayoría eran campesinos indígenas sometidos a un régimen semi-feudal y ocupados en una extensa economía rural tan ineficiente que Bolivia necesitaba importar entre un cuarto y un tercio de los alimentos que consumía anualmente². Bolivia era entonces -y es todavía hoy- el país más pobre de América del Sur: su producto per cápita de 255 dólares, 4.4 veces inferior al de Argentina, superaba tan sólo al de Haití en el conjunto de América Latina. El 70% de los bolivianos eran analfabetos, y sólo el 36% se expresaba regularmente en castellano (Albó, 1980: 3). Según cálculos de Naciones Unidas, las tasas de mortalidad infantil durante el primer año de vida en las comunidades mineras y en el campo excedían con frecuencia el 500 por mil; en las ciudades, un «cálculo conservador» situaba la tasa media entre un 200 y un 300 por mil (CEPAL, 1989: 210).

¹ Malloy (1989), pp. 41-42. Al utilizar la categórica expresión de James Malloy («dos Bolivias») no pretendemos suscribir una interpretación "dualista" del desarrollo económico boliviano, y menos aún la teleología implícita en esta perspectiva. En primer lugar, no puede defenderse que no existiera *ninguna* conexión entre el sector "moderno" o "progresivo", representado por las grandes empresas mineras, y el sector "cerrado" o "tradicional" de los vastos espacios rurales andinos. El concepto de "dualismo" sólo sería aceptable en tanto que señalara la existencia de «conexiones limitadas» entre ambos (Barrat Brown, 1976: 77), pero hecha esta precisión es fácil ver que la imagen dual resulta especialmente útil para caracterizar las situaciones de enclave minero, dado su brutal aislamiento y su nulo «valor como factor de transformación de las estructuras internas» (Furtado, 1977: 67). En segundo lugar, la historia económica de Bolivia debería ser un antídoto suficiente contra la teleología optimista de las teorías de la modernización vinculadas al "dualismo", con su atribución automática al sector "moderno" de una acción benéfica sobre el desarrollo global de la economía. Una exposición clásica de la polémica entre los defensores de las metáforas del "dualismo" y el "colonialismo interno" puede encontrarse en Solari et. al. (1976), pp. 406 ss.

² Conviene señalar que esta elevada proporción de importaciones agrícolas no se debía tan sólo a la baja productividad de los campesinos bolivianos, ya que el sistema de transportes, escasamente desarrollado y volcado "hacia afuera", hacía más barato para La Paz importar mercancías del extranjero que traerlas del interior del país.

En 1950 Bolivia era sin duda un caso peculiar en la economía de América Latina. El sector primario -agricultura y minería- daba empleo al 75% de la PEA, cuando en el conjunto de la región sólo alcanzaba al 56%, mientras el sector secundario ocupaba a menos de un 10% de los trabajadores contra el 18% de la media latinoamericana (Cuadro 2.1). El desarrollo urbano y comercial era muy escaso: aproximadamente un 25% de los bolivianos vivían en centros urbanos, y La Paz, con mucho la mayor ciudad del país, superaba escasamente los 300.000 habitantes³, un 10% de la población total, pero agrupaba a cerca de un 40% de la fuerza de trabajo no agropecuaria del país (Maletta, 1980: 24).

CUADRO 2.1

Bolivia 1950: Distribución por ramas y sectores de la Población Económicamente Activa, y participación de los sectores en el PIB.

Rama de actividad	Población ocupada	PEA(%)	Sector	PEA(%)	PIB(%)
Agricultura	973.959	72.1	Primario	75	51
Explotación de minas	43.441	3.2	Minería	3	17
Industria manufacturera	109.591	8.1	Secundario	10	13
Comercio, restaurantes y hoteles	54.621	4.0			
Servicios comerciales, sociales y personales	110.540	8.2	Terciario	15	41
Otros	58.6	4.3			
PEA total país	1.350.782	100		100	100

Fuente: *Censo Demográfico de 1950, Calderón (1982).*

Los enclaves mineros y la limitada vida urbana que fueron alimentando conformaban lo que James Malloy llamó el «sistema nacional»: un pequeño conjunto de islas modernas, distribuidas sobre un inmenso territorio, pobre y escasamente poblado (Malloy, 1989: 41 ss). *La producción minera era el único rubro que vinculaba a Bolivia al mercado mundial*, y la salud del segmento "moderno" de la economía boliviana dependía por completo de su

³ El segundo centro urbano del país, Cochabamba, agrupaba a algo menos de 81.000 ciudadanos. Calderón (1982), pp. 25 y 220..

funcionamiento. Entre el 90 y el 95% por ciento de las divisas necesarias para comprar en el mercado mundial los alimentos y todos los bienes y servicios que no se producían en el país procedían de la exportación de minerales en bruto (Cuadro 2.2)

CUADRO 2.2

Bolivia 1929-1952: Exportaciones de minerales y estaño sobre el total de exportaciones.
(En dólares Us.)

Año	Total Exportaciones	Estaño	%	Total Minerales	%
1929	36.621.542	27.507.287	75.1	34.491.930	94.1
1935	42.119.069	31.028.646	73.6	40.474.457	96.0
1940	49.828.880	35.513.512	71.2	47.847.526	96.0
1945	80.431.630	60.275.870	74.9	73.728.721	91.6
1950	94.217.798	63.376.321	67.2	90.910.718	96.4
1952	141.303.341	72.329.512	51.1	137.754.000	97.4

Fuente: Banco Central de Bolivia, *Memoria Anual 1960 y 1965*, y elaboración propia.

La economía primario-exportadora boliviana se caracterizaba ante todo por una *extrema concentración de la propiedad*. Tres grandes empresas familiares -Patiño, Hochschild y Aramayo- controlaban en 1950 el 80 por ciento de la industria del estaño, que en algún momento llegó a ser responsable de las tres cuartas partes de las exportaciones nacionales. Antes de 1941, estas compañías produjeron hasta una cuarta parte del estaño mundial y nunca menos del 15 por ciento. Durante la Segunda Guerra Mundial su cuota aumentó al 49 por ciento. En 1945, los "tres grandes" produjeron 35.000 toneladas finas de mineral, cuando ninguna otra empresa en Bolivia producía más de 400 toneladas⁴.

La actividad de las compañías mineras, además de determinar por completo la

⁴ Dunkerley (1987), p. 19. Pero en realidad puede decirse que los "tres grandes" controlaban el cien por ciento del estaño boliviano, dado que Hochschild monopolizaba la comercialización del 20 por ciento restante. El proceso de concentración de la propiedad en la industria del estaño se desarrolló en la segunda década del siglo: en 1907 aproximadamente el 60% del estaño que se comercializaba en el país procedía de un centenar de minas pequeñas; diez años después, en 1917, cuatro grandes empresas -principalmente la Estañífera Liallagua y el grupo Patiño- acaparaban más del 65% de la producción. Véase Rodríguez (1991), p. 63.

capacidad del país para importar, constituía uno de los soportes principales de las magras finanzas públicas⁵. Pese a ello, las grandes empresas tributaban tan sólo una fracción ínfima de sus ingresos al estado boliviano, y mientras pudo mantenerse esta situación los "barones" del estaño, a diferencia de la vieja oligarquía de la plata, permanecieron alejados de la política nacional y dedicados por entero a su negocio. Pero a medida que los gobernantes fueron enfrentando crecientes problemas financieros en la década de los años veinte, surgieron voces que reclamaban con insistencia un aumento del control estatal sobre las ganancias de la producción minera⁶; por otro lado, la firma del acuerdo de 1930 entre los países productores de estaño para hacer frente a la caída de los precios del mineral en los mercados mundiales asignó a Bolivia una cuota máxima de exportación y otorgó al gobierno la facultad de fijar la participación en ella de las distintas compañías. Desde entonces las grandes empresas tuvieron razones de peso para intervenir directamente en los asuntos del estado en defensa de sus intereses corporativos, y se iniciaron así los años de la "Rosca" minera: un amplio grupo de políticos y abogados aglutinados alrededor de los "barones" del estaño que a partir de la crisis de entreguerras ejerció *una presión asfixiante y cada vez más abierta sobre las líneas maestras de la política estatal*⁷. Pero si la propiedad de los yacimientos que alimentaban la economía del "país oficial" otorgó una ingente capacidad de presión al aparato que la propaganda nacionalista bautizó como "superestado minero", los trabajadores que producían el "metal de diablo" tenían también en sus manos un formidable recurso de poder.

El proletariado minero era desde luego pequeño, en especial si se lo compara con la población campesina, y seguramente no llegó nunca a ocupar al 6% de la PEA masculina. Tal vez en los años de la Segunda Guerra Mundial, uno de los momentos de mayor auge de la producción de estaño, la actividad minera involucró a unos 53.000 individuos. En 1950, según los datos del censo realizado en aquél año, había 43.441 trabajadores en las minas de

⁵ Los impuestos a la exportación de minerales debían aportar aproximadamente el 25% de los ingresos previstos en el Presupuesto General de la Nación de 1950. Sobrados (1953), pp. 153 y 154.

⁶ El gobierno de Bautista Saavedra, enfrentado a crecientes déficits presupuestarios, decidió en 1923 aumentar sustancialmente los impuestos a las exportaciones y a las ganancias de las compañías mineras. Como resultado de ello, los ingresos del gobierno se elevaron de 3.5 millones de bolivianos en 1922 a 11.2 millones en 1924.

⁷ Para la dinámica de la política boliviana en los años de la "Rosca" minera continúa siendo indispensable consultar *El poder y la caída*, el trabajo más completo de Sergio Almaraz y sin lugar a dudas una obra maestra del ensayismo boliviano (Almaraz, 1987 [1967]).

Bolivia⁸.

Sin embargo, *en el contexto de la economía boliviana los mineros constituían la fracción mayoritaria del proletariado, y, desde luego el único grupo concentrado en unidades de producción relativamente grandes*. Los dos mayores centros mineros, la Patiño Mines de Uncía y la Compañía Unificada de Potosí, daban empleo a 5.444 y 4.137 trabajadores respectivamente (Whitehead, 1981: 327), unas cifras de por sí enormes que resultaban especialmente llamativas en su entorno nacional. Hay que tener en cuenta que de los 109.591 individuos que según el censo de 1950 estaban empleados en la industria de transformación boliviana, poco más de 43.000 pertenecían a la categoría de "obreros asalariados", y aún éstos trabajaban mayoritariamente en pequeños establecimientos artesanales. Las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Industrias, el segmento más "formal" de la manufactura boliviana, declaraban a mediados del siglo un total de 20.000 personas ocupadas, incluyendo empleados de oficina⁹. Pero el proletariado minero tenía potencialmente, en cualquier caso, *una influencia política y económica que no guardaba relación con su número, dada la importancia estratégica de la industria que lo empleaba*.

La dureza de las condiciones de vida y trabajo en las minas de Bolivia es casi legendaria. Allí, en los que Sergio Almaraz describió una vez como «cementorios mineros»¹⁰, el 75% de los niños moría antes de cumplir los diez años, la mayoría de

⁸ Según los cálculos realizados por Maletta (1980) en base a los datos censales, la población económicamente activa masculina comprendía a un total de 893.687 individuos en 1950. Por lo que respecta al número de trabajadores mineros, lo cierto es que no se dispone de datos fiables. La cifra de 53.000 trabajadores para los años de la Segunda Guerra Mundial está tomada de Whitehead (1981: 327), que da por buenos los datos de Anaya (1952), p. 83. Por su parte, en su estudio sobre la minería boliviana y chilena, Sobrados (1953: 133) afirmaba que «la población que normalmente trabaja en las explotaciones mineras es aproximadamente de 100.000 hombres». Esta apreciable disparidad en las cifras se debe seguramente a que Sobrados realiza una estimación del número de trabajadores ocupados en las múltiples pequeñas explotaciones que se asentaban en lugares remotos y de muy difícil acceso, muchas de las cuales eran además ilegales.

⁹ CEPAL, *Análisis y proyecciones del desarrollo económico, IV. El desarrollo económico de Bolivia*, Vol. II, México, 1958, pp. 18-19. La distribución por categorías de la PEA industrial era la siguiente:

Patronos	5.123	4.6%
Empleados	7.124	6.5%
Obreros y jornaleros	43.886	40.0%
Trabajador por su cuenta	40.050	36.5%
Pariente colaborador	12.552	11.5%
Otros	865	0.7%

¹⁰ Almaraz (1985 [1969]), pp. 59 ss. Merece la pena anotar aquí un par de datos sobre las condiciones de trabajo en la minería de la plata (en el período del cambio de siglo) que Almaraz recoge de relatos de empresarios y viajeros en otro de sus libros. El presidente de Huanchaca, la mayor mina argéntifera de Bolivia, anotaba fríamente por ejemplo que «de los 400 niños nacidos anualmente (en las propiedades de la empresa), mueren alrededor de 360

tuberculosis... ¡en 1964! (Martin, 1984: 228). Cuatro años antes del estallido revolucionario de abril de 1952, un 97,48% de los trabajadores del mayor centro estañífero del país padecían algún grado de infección tuberculosa (Lora, 1980: 324). El médico jefe del Hospital Central de Oruro descubrió por su parte, en 1954, que la edad promedio de los enfermos de silicosis en tercer grado era de 32 años, con una media de 4,5 años de trabajo en interior mina¹¹. En las modernas empresas de los "barones" del estaño sólo usaba guardatojo¹² el 30 por ciento de los obreros de interior mina, y no se empleaba ninguna otra ropa especial de trabajo. La subalimentación era un fenómeno generalizado en todos los campamentos, donde por lo demás los niveles salariales eran ínfimos, no existía salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas no se respetaba nunca¹³. Aquéllas durísimas condiciones de vida aportarán un *constante caudal de motivos de queja a las movilizaciones mineras* a lo largo de toda la historia contemporánea del país, ya que a pesar de la nacionalización de las grandes compañías del estaño y al extraordinario desarrollo del sindicalismo minero tras el acontecimiento revolucionario de 1952, las condiciones de trabajo en las minas de Bolivia seguirían estando entre las peores del mundo. Todavía en marzo de 1983 la Federación sindical del sector recordaba que el porcentaje de enfermedades laborales alcanzaba allí al 24%, frente a un 4% registrado en Perú: uno de cada cuatro mineros estaba afectado por una enfermedad profesional; el índice de accidentalidad arrojaba también cifras siniestras: de cada cinco trabajadores de la corporación minera estatal, uno terminaba sufriendo algún tipo de lesión o accidente en el socavón o en el ingenio¹⁴.

antes de los tres meses»; por su parte, un viajero de la época nos informa de que los mineros de Potosí «sólo viven cerca de 10 años, porque trabajan 36 horas seguidas». Almaraz (1987 [1967]), p. 19.

¹¹ Luis Mealla Caso, *Consideraciones sobre la Vida de los Obreros Mineros de Bolivia*, Cochabamba, 1945. Cit. en Dunkerley (1984), p. 26.

¹² En Bolivia se conoce como "guardatojo" al casco de protección que usan los mineros.

¹³ La información procede de la Comisión Magruder, un grupo de expertos norteamericanos llegados al país en 1943 para analizar la situación del obrero boliviano, especialmente del trabajador minero. Dado que se trataba en realidad de estudiar las condiciones para aumentar la producción de estaño, en unos momentos en que Bolivia era el único proveedor de los aliados en la guerra mundial, la comisión se sintió obligada a señalar que: «Aun admitiendo que la productividad de los trabajadores bolivianos sea susceptible de acrecentarse en medida apreciable, esto puede ser resultado de una vitalidad disminuida y por causa de la mala nutrición». Las conclusiones del trabajo, que tuvieron una amplia repercusión en el país, fueron publicadas con el título de *Report of Joint US-Bolivian Commission of Labour Experts*, OIT, Montreal, 1943. Véase Lora (1980), p. 347.

¹⁴ Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, *Proyecto de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia para la Cogestión Obrera en la Corporación Minera de Bolivia*, La Paz, 1983, p. 5.

Pero no es desde luego en la miseria donde debemos buscar la explicación de la fuerza sostenida que adquirirían con el tiempo las organizaciones sindicales de las minas¹⁵. En realidad, puede mantenerse que unas condiciones de vida especialmente duras, unidas al particular aislamiento del país y de sus campamentos mineros, *retardaron más que favorecieron la emergencia de un movimiento obrero poderoso en las minas de Bolivia*. La miseria y el aislamiento, que resultaba en una total dependencia del trabajador hacia la empresa, facilitaron sin duda el desarrollo inicial de fuertes relaciones *paternalistas* e inhibieron durante un período prolongado el surgimiento de una conciencia corporativa y de unas organizaciones obreras autónomas entre los mineros de Bolivia¹⁶. Sin embargo, una vez superados los primeros problemas organizativos, existían unas *condiciones estructurales* que habrían de proporcionar *una base excepcionalmente sólida a la acción colectiva de los mineros*.

En primer lugar, la misma dependencia absoluta de la empresa para el abastecimiento tanto de viandas a través de la pulpería¹⁷, como de luz, agua y todos los servicios básicos, que favoreció inicialmente el arraigo de la ideología paternalista, tendió a reforzar a la postre

¹⁵ Seguramente no es necesario recordar de nuevo que una constante en la historia de la acción colectiva popular es que quienes están peor y ganarían más con el cambio raramente se movilizan, dado que suelen carecer de los recursos mínimos para actuar e intentar mejorar su suerte. Véase Elster (1989), pp. 162-163.

¹⁶ En este punto es inevitable aludir a la famosa hipótesis de la «masa aislada», formulada por Kerr y Siegel en 1954. Según la hipótesis Kerr/Siegel, determinados grupos de trabajadores muestran con regularidad una gran propensión a desarrollar acciones reivindicativas, y ello se deriva de dos características definitorias: a) su *aislamiento* (que puede ser geográfico o social); y b) su *capacidad de cohesión*, dada por la concentración espacial de los trabajadores (lo que excluye a las poblaciones campesinas dispersas, a pesar de su frecuente "aislamiento"), y la homogeneidad del colectivo (no existen grandes diferencias salariales o de cualificación). Ambas características conforman los dos términos de la «masa aislada». La propensión a la movilización vendría dada por la facilidad con que en este contexto surge entre los trabajadores una conciencia de compartir problemas comunes; por la ausencia de posibilidades de movilidad individual y, finalmente, porque al situarse la autoridad empresarial en un plano remoto e impersonal, se fomenta el odio y la rebelión entre los trabajadores. No cabe duda de que muchos de las propuestas que se derivan de esta hipótesis son de gran utilidad para dar cuenta de la capacidad de movilización de grupos obreros como el que ahora nos ocupa. Sin embargo, creo que la hipótesis de la «masa aislada» se encuentra desde el principio con un grave problema, que no es otro que la dificultad misma de definir *operativamente* el concepto de "aislamiento". En este punto podría destacarse el contraste del caso boliviano con el chileno: la alta tasa de rotación de los trabajadores chilenos del salitre y sus permanentes contactos con el mundo urbano, hicieron que el proletariado minero del Norte de Chile estuviera desde el principio mucho menos aislado de su contexto nacional que el boliviano. Sin embargo, sus acciones reivindicativas fueron tan frecuentes como la de sus colegas del Altiplano y mucho más precoces. Los obreros de la pampa del salitre estaban sin duda "aislados" en términos geográficos, pero mucho menos en términos sociales y políticos, y esto último favoreció, al contrario de lo que haría suponer la hipótesis Kerr/Siegel el desarrollo más temprano de sus luchas reivindicativas.

¹⁷ En Bolivia se conoce como "pulperías" a los almacenes dependientes de la empresa, que generalmente venden sus productos a los trabajadores a un precio subvencionado.

el sentimiento de pertenencia al colectivo. En general, todas las características definitorias del entorno laboral minero contribuían a dotar a los trabajadores de una *identidad unívoca*: en el campamento minero, la vida en el hogar forma un todo con la actividad laboral, las casas son una prolongación del lugar de trabajo, y resulta a veces difícil decir dónde empiezan los hogares mineros y dónde terminan los edificios de la administración de la empresa. En este contexto no existía ningún espacio para el desarrollo de la pluralidad de roles que dificulta los procesos de identificación entre los trabajadores insertos en contextos urbanos complejos. Por otro lado, el minero, empleado en el único sector dinámico de la economía nacional y rodeado por un campesinado indígena anclado en una agricultura de subsistencia, *carecía tanto de opciones de empleo alternativas como de cualquier expectativa de movilidad social individual*. Las habilidades que hubiera adquirido en el socavón no le servirían en ninguna otra parte, y su organismo, habituado a la vida en la altiplanicie andina, difícilmente podría acostumbrarse a las condiciones del llano oriental o de los valles tropicales, donde se encontraban las únicas tierras disponibles para la colonización. Así, su capacidad de supervivencia dependía casi por completo de su empleo en la mina, y sus posibilidades de mejorar su situación de la suerte del colectivo. Un tercer elemento que contribuyó sin duda fuertemente a reforzar la estructuración interna de los mineros bolivianos, facilitando el surgimiento de una identidad colectiva sólida, fue su *radical diferenciación étnica y cultural frente a los patronos*. Aunque en la economía de enclave boliviana, al contrario de la tendencia general verificada en América Latina, las altas exigencias de capital no llevaron al control de los medios de producción por grupos de capitalistas extranjeros¹⁸, los gerentes que representaban a las grandes familias de propietarios en el lugar de trabajo eran casi siempre extranjeros, o, en el mejor de los casos, criollos urbanos que desconocían o despreciaban las tradiciones y la cultura locales.

Pero en términos generales cualquier descripción de las características del entorno laboral de los campamentos podría resumirse y formalizarse en la afirmación de que las bases

¹⁸ «El caso más general de formación de enclaves en las economías latinoamericanas expresa un proceso en el cual los sectores económicos controlados nacionalmente, por su incapacidad para reaccionar y competir en la producción de mercancías que exigían condiciones técnicas, sistemas de comercialización y capitales de gran importancia fueron paulatinamente desplazados». F.H. Cardoso y Enzo Faletto (1987 [1969]), p. 48. En Bolivia, debido a las elevadas exigencias de capital para la explotación y el transporte del estaño se llegó efectivamente a una enorme concentración de la propiedad, pero ésta quedó en manos de capitalistas locales que supieron aprovechar sus influencias y su mejor conocimiento de la situación para absorber a sus competidores chilenos e ingleses. Un episodio muy conocido de este proceso es la compra por Patiño de la empresa chilena "LLallagua", que por entonces era la mayor compañía minera de Bolivia. Véase para esto Querejazu (1978), pp. 135 y ss..

de los sindicatos mineros se hallaban, y se hallan todavía, insertas en una *situación comunitaria*. Entendemos aquí el término "comunidad", siguiendo a Craig Calhoun, como una variable que mide el grado en que los individuos están ligados unos a otros por *relaciones sociales directas*, de modo que referirse a "una comunidad" es simplemente señalar a una población caracterizada por una extensión considerable de este tipo de vínculos¹⁹. En el estrecho mundo de los campamentos, la férrea ligazón y la dependencia de los mineros de la suerte del grupo relativamente reducido y enormemente "cerrado" de compañeros que compartían su mismo trabajo, generó sin duda *un grado muy elevado de integración comunitaria*, permitiendo la consolidación, como demostró el prolongado trabajo de campo de June Nash en una de las mayores minas de Oruro, de un sistema de «obligaciones explícitas, socialmente sancionadas, fijadas en afiliaciones primarias de grupo» capaz de promover la cooperación de los miembros con las mismas técnicas características estudiadas por los antropólogos en «otras comunidades rurales no occidentales» (Nash, 1979: 76). El argumento teórico es que en una situación así puede mantenerse que *para cualquier individuo es racional participar en toda acción colectiva que emprenda el grupo*, en tanto que éste tiene a su disposición un conjunto de sanciones sociales informales, positivas y negativas, que puede ejercer contra los miembros remisos con una gran efectividad (Taylor, 1990: 76). La afirmación, por supuesto, no da por hecho que la motivación que subyace a la acción de los mineros (de *todos* los mineros) sea un tipo de racionalidad restringida: únicamente destaca que aún en los casos en que la acción instrumental egoísta sea dominante entre los individuos del grupo éstos participarán en las acciones colectivas que aquél emprenda. Insertos en una estructura comunitaria, los trabajadores tenderán a movilizarse siempre "como un sólo hombre", con independencia de las motivaciones, los valores o el "nivel de conciencia" que puedan atribuirse a sus miembros²⁰.

¹⁹ Véase Calhoun (1988). El problema de cómo definir a las comunidades en tanto que instituciones específicas con tareas y metas específicas, que genera hoy debates entre los antropólogos que estudian un mundo andino cada día más heterogéneo, no afecta a nuestra definición. Para esto último véase Harald Mossbrucker (1990).

²⁰ Ya hemos mencionado que la perspectiva de la elección racional contiene la aceptación de un reduccionismo psicológico particular, pero que éste ofrece también ventajas, al menos como supuesto inicial "fuerte" para el inicio de cualquier análisis de la acción colectiva. Aunque podamos cuestionar que el egoísmo sea una buena descripción de la psicología individual, hay que reconocer que no resulta fácil sustituirla por ninguna otra que pueda alcanzar el mismo nivel de generalidad. Para el caso que nos ocupa conviene recordar la hipótesis lateral, de contenido psicológico, que introducen Kerr y Siegel para explicar las diferencias en la intensidad y el radicalismo de las movilizaciones de distintos grupos de trabajadores. Kerr y Siegel suponen que las variaciones en la naturaleza del trabajo realizado determinan el carácter del trabajador: cuando el trabajo es sucio y duro, los trabajadores serían

En el caso de los mineros bolivianos parece además evidente -y éste es el tema central en el estudio antropológico de Nash- que existían ya en gran medida tanto un universo compartido de *valores* previo al ingreso en la mina, como una fuerte *tradición cooperativa* derivada de la procendencia mayoritariamente campesina de unos trabajadores que heredaron las *normas de reciprocidad* arraigadas en la experiencia ancestral de las comunidades andinas. Pese a que, debido al escaso crecimiento, y aún disminución a partir del máximo alcanzado en los años cuarenta, del contingente de obreros empleado en las minas, éstos fueron cada vez más "mineros hijos de mineros", puede aceptarse que la presencia de todo un conjunto de elementos culturales²¹ y de tradiciones organizativas prehispánicas tuvo una cierta importancia en el desarrollo inicial de los sindicatos mineros, dado que contribuyó seguramente a dotar a los trabajadores de una identidad colectiva sólida y de una base aprovechable para la creación de redes organizativas en el nuevo contexto laboral.

Pero si resulta plausible afirmar que las tradiciones campesinas aportaron un caudal inicial de recursos organizativos y normativos a los sindicatos mineros, los intentos de explicar las pautas básicas y el sentido de sus movilizaciones ulteriores apelando a esa herencia cultural andina tienen, por el contrario, muy poco interés. Esto podría valer para el período que abarca el siglo XIX y las primeras décadas del XX, cuando las luchas mineras se realizaron ante todo contra las sucesivas ofensivas empresariales para extender la racionalidad capitalista en la práctica productiva (Rodríguez, 1986a, 1986b, 1989a, 1989b). La resistencia de los mineros adquirió muchas formas en aquélla etapa. Sus motivaciones estuvieron seguramente enraizadas en la defensa de las tradiciones andinas y de todo un

«rudos, inconstantes, combativos y viriles», de modo que aparentemente actuarán en las huelgas para expresar su masculinidad, o simplemente porque como hombres rudos actúan enérgicamente, en consonancia con su carácter. No sería éste el caso de los "white collars": «Ciertamente, dos tipos tan distintos como los vigorosos trabajadores de los bosques y los tímidos empleados de la banca deberían actuar de forma muy diferente» (Kerr y Siegel (1954), p. 195). Este tipo de pseudo-explicaciones psicológicas, enormemente populares para el caso de los mineros bolivianos, parten, como es evidente, de supuestos mucho más discutibles que los, también discutibles, que subyacen a las teorías de la elección racional.

²¹ Es el caso del culto al Tío de la mina (Supay). June Nash, en su original estudio antropológico sobre los mineros de San José, destaca cómo especialmente después de la toma militar de las minas, cuando la challa del Tío fue suprimida junto con los sindicatos y el control obrero, el ritual, que continuó realizándose clandestinamente, se convirtió además en en la mejor ocasión para discutir los problemas y las luchas de los trabajadores. En general, según Nash, «la resistencia a la represión militar por las mujeres y los hombres de la comunidad minera se alimentó de estas fuentes profundas de identidad cultural que les proporcionaron una orientación y la voluntad de sobrevivir cuando reconocieron el poder genocida del régimen de Barrientos». Nash (1979), p. 318. La importancia de esta herencia cultural común para la generación de solidaridades se ve reforzada por la radical "otñedad" de los gerentes y técnicos extranjeros que dirigían las empresas.

conjunto de "derechos adquiridos" amenazados por la nueva "racionalidad" capitalista, y el radicalismo y la desesperación de muchas de las acciones que se emprendieron en aquella etapa debería atribuirse a la incompatibilidad absoluta entre el modo de vida que pretendían mantener los mineros y los planes empresariales de modernización. Sin embargo, tras el tránsito de los años 30 y 40 del presente siglo, en los momentos en que se desarrollaron las primeras organizaciones propiamente proletarias en las minas, los temas de las reivindicaciones y los móviles de la acción colectiva fueron cambiando rápidamente²², y las tradiciones ancestrales -andinas o no- fueron pesando cada menos a medida que los mineros iban insertándose por completo en relaciones de producción netamente capitalistas y encaminaban sus esfuerzos a mejorar su situación dentro del nuevo sistema.

Con lo anterior no pretendo negar que la herencia cultural precapitalista siguiera cumpliendo un papel importante en la generación de solidaridades en el proletariado minero²³. Pero es necesario destacar la quiebra radical que se produjo en el sentido de su acción colectiva, dado que a partir de la crisis de entreguerras, la movilización de los mineros tendrá un carácter crecientemente *proactivo*²⁴, dirigiéndose a la consecución de nuevos derechos y de un mejor nivel de vida. Las *opciones* abiertas por los avatares del

²² Gustavo Rodríguez destaca cómo el ciclo de protesta que se desarrolló en los campamentos mineros en 1938-39 reflejó claramente las transformaciones que se estaban produciendo en la acción colectiva minera. Junto a las reacciones violentas contra las agresiones de la empresa, que adquirieron la forma tradicional de los motines espontáneos, se dió una creciente institucionalización del conflicto, canalizándose las demandas a través de organizaciones sindicales que las negociaban con la empresa. Sin embargo, Rodríguez intenta ver todavía en los sucesos de Catavi en diciembre de 1942 aquella «economía moral de la multitud» de que hablara Thompson. Se trataría nuevamente, según el autor, de la quiebra por parte de la empresa de las *reglas tradicionales de reciprocidad* que exigían que en épocas de "boya" (auge) se procediese a una redistribución de los beneficios. Es posible que fuera ése el motivo, pero también se puede pensar que los trabajadores simplemente intentaron aprovechar la oportunidad creada por la buena situación de la empresa para mejorar su nivel de vida a través del aumento salarial. Parece evidente, en cualquier caso, que las reacciones en defensa de tradiciones culturales y pautas pre-capitalistas de uso del tiempo fueron a partir de la década de los treinta cada vez más marginales como motivaciones de la acción colectiva minera. Véase Rodríguez (1991), pp. 81-89, y 110-115.

²³ June Nash (1979) ha argumentado convincentemente sobre este punto (véase arriba nota 21). Sin embargo, la dirección de la acción colectiva minera será radicalmente otra, y conviene dejar bien claro este punto frente a la tendencia a interpretar las luchas de los sindicatos en una clave "antropologista" que tiende a privilegiar la actuación constante de elementos de las tradiciones y la psicología andinas. La misma Nash, sin embargo, no ha podido establecer mayor relación entre las luchas mineras contemporáneas y las tradiciones y rituales andinos que la coincidencia de las fechas de algunos hitos de la historia del sindicalismo minero con celebraciones religiosas tradicionales. Véase Nash (1985).

²⁴ El término, por supuesto, está tomado de Tilly (1978). Tilly define como acción *proactiva* aquélla que tiene por objetivo la consecución de derechos nuevos encaminados a mejorar la situación del colectivo; la acción *reactiva*, por el contrario, surge como consecuencia de la agresión a derechos previamente establecidos o considerados legítimos por el grupo afectado.

modelo de acumulación y las alternativas de las luchas en la *arena política* nacional serán las variables que determinarán desde entonces la evolución de la acción colectiva minera, actuando como *un filtro que seleccionará progresivamente las estrategias y las características de las organizaciones que los trabajadores del subsuelo irían empleando para promover sus nuevas reivindicaciones*. Los estudios sobre la herencia cultural andina pueden hacer muy poco para iluminar la dinámica peculiar de esta historia.

EL PERÍODO FORMATIVO

LOS SINDICATOS EN LA ETAPA OLIGÁRQUICA

En las primeras tres décadas del siglo XX el movimiento obrero boliviano se desarrolló fundamentalmente en las áreas urbanas, y ante todo en La Paz²⁵. Su base social era mayoritariamente artesanal y eso se reflejaba, al igual que en el resto de América Latina, en una fuerte influencia anarquista²⁶. Artesanos que reaccionaban ante los atentados contra su posición social derivados del proceso de "modernización" del país, traducido aquí en el creciente consumo de manufacturas importadas, y algunos grupos de obreros de reciente creación, escasos y dispersos, constituyeron hasta la guerra del Chaco (1932-36) la escueta base del sindicalismo boliviano. La única organización obrera relativamente fuerte se encontraba en el sector de los trabajadores ferroviarios, el grupo sin duda más moderno del

²⁵ La producción historiográfica sobre el movimiento obrero boliviano es todavía muy escasa. El único trabajo de largo aliento es la monumental *Historia del movimiento obrero boliviano*, de Guillermo Lora. Pese a que al apego estrico de Lora al marxismo-leninismo ortodoxo y su sectarismo político le llevan con frecuencia a una interpretación muy forzada de los hechos, la obra aporta un enorme caudal de datos útiles. Para el período formativo del movimiento obrero boliviano pueden consultarse también los trabajos de Barcelli (1957), Delgado (1984), y el ya citado de Rodríguez (1991).

²⁶ Sobre el anarquismo boliviano puede consultarse la obra de Rivera y Lehm (1988). Un panorama general de los orígenes y evolución del sindicalismo anarquista en América Latina puede encontrarse en Melgar Bao (1988), pp. 93-209.

proletariado urbano boliviano que ocupaba además un lugar estratégico en la estructura de la economía exportadora (Lora, 1969: 401-427).

En los primeros años veinte, la drástica depresión de los precios del estaño en 1921-22 agravó la competencia intra-elitaria que se había iniciado cuando la "revolución" de 1920 puso fin a la era liberal²⁷, y en este contexto la incipiente protesta obrera experimentó un relativo auge y pareció adquirir una cierta relevancia para el acontecer político nacional. Debido a la ruptura de su propio partido republicano y a la oposición cerrada de los liberales, Bautista Saavedra, presidente de la República desde enero de 1921, se vio privado del apoyo de los terratenientes y de las élites provinciales, que habían sido hasta entonces el eje de todas las coaliciones gobernantes, y «empezó a ver al movimiento laboral naciente como un aliado importante en sus luchas políticas crecientemente difíciles»²⁸. Saavedra promulgó así la primera legislación social boliviana, y durante su mandato el sindicalismo urbano encabezado por los ferroviarios pudo lanzar, en febrero de 1923, la primera huelga general de la historia del país. *Aquella relativa apertura del sistema político no alcanzó sin embargo a los trabajadores mineros*. Estos, al contrario que los sectores más modernos del proletariado urbano, continuaron sometidos a una presión asfixiante por parte de los empresarios y de los aparatos coactivos del estado que *impedía cualquier desarrollo organizativo estable*. Los pocos trabajos que se han ocupado de indagar los orígenes del sindicalismo minero en las empresas del estaño²⁹ describen un panorama en el que la represión brutal de todas las acciones reivindicativas que comenzaban a ensayar los mineros se combinaba con la creación de asociaciones mutualistas promovidas por unos patronos que se negaban a reconocer los conatos de organización independiente de los obreros.

Los violentos sucesos ocurridos en Uncía durante el gobierno de Saavedra no fueron sino una ilustración particularmente sangrienta de la actitud de las empresas frente a cualquier

²⁷ A partir de la "revolución federal" de 1899, se inauguró una etapa de hegemonía del Partido Liberal, caracterizada por una sorprendente estabilidad del sistema político que se apoyó en el auge de la economía del estaño. El período liberal se prolongó hasta 1920, año en que accedió al poder el Partido Republicano a través de una nueva "revolución", esta vez incruenta. Los diferentes grupos que surgieron de la desintegración del Partido Republicano se mantuvieron en el gobierno hasta la conclusión de la Guerra del Chaco, a lo largo de una etapa mucho más inestable que la anterior, definida por una violenta lucha de facciones en un contexto de estancamiento económico, especialmente grave en 1920-21 y a partir de 1927, con el inicio del declive secular de los precios del estaño.

²⁸ Klein (1987), p. 83. En los trabajos de Klein y Malloy (1989) se encuentran seguramente las mejores descripciones disponibles de la dinámica de la democracia oligárquica en Bolivia.

²⁹ Véase la recopilación de artículos de Rodríguez (1991).

episodio de protesta popular en las grandes minas, y la prueba más clara de las limitaciones de las élites reformistas cuando entraban en juego los intereses de los "barones" del estaño. El 1 de mayo de 1923 se fundó la **Federación Obrera Central de Uncía (FOCU)**, que pretendía asumir la representación de todos los grupos populares que habitaban la principal zona estañífera del país, el complejo Uncía-LLallagua³⁰. La FOCU elaboró inmediatamente un pliego petitorio que giraba en torno a la defensa del derecho a la sindicalización, y que fue en principio bien acogido por el gobierno. Sin embargo, las dos grandes empresas que operaban en la zona se negaron radicalmente a reconocer la representatividad de la nueva organización, y consiguieron forzar muy pronto el desencadenamiento de una acción represiva en gran escala por parte del ejército. El 4 de junio de 1923, tan sólo un mes después de la creación de la FOCU, tuvo lugar la "masacre de Uncía", el primero de los grandes baños de sangre mineros con una cierta resonancia a nivel nacional, que arrancó de cuajo el germen del sindicalismo obrero independiente en las minas³¹. La Federación quedó reducida desde entonces a un pequeño núcleo de activistas y acabó disolviéndose oficialmente en 1926.

El aparente ascenso del movimiento obrero al inicio de la década de los veinte quedó, por lo tanto, circunscrito al ámbito urbano. Pero las bases del sindicalismo en las ciudades eran tan reducidas que una cierta recuperación del crecimiento económico a partir de 1923 y el consiguiente apaciguamiento de las tensiones intraelitarias bastó para revertir de inmediato la tendencia. Los sindicatos eran demasiado débiles para mantener una presencia constante en el sistema político oligárquico, y desaparecieron del escenario en cuanto éste alcanzó una nueva estabilidad tras el episodio de crisis en los primeros años del gobierno de Saavedra.

En la Bolivia prerrevolucionaria sólo podían ejercer el derecho al voto los varones

³⁰ La FOCU no fue desde luego una organización propiamente minera, y pese a que en su plataforma reivindicativa aparecían temas nuevos, como el derecho a la sindicalización, los acontecimientos que desencadenaron la masacre de Uncía recuerdan todavía mucho a los "motines" preindustriales descritos por George Rudé y Eric Hobsbawm. Rodríguez (1991), pp. 70 ss. hace hincapié en este punto. Al igual que las revoluciones urbanas del período preindustrial, el movimiento de Uncía no fue proletario, sino plebeyo. Los protagonistas del conflicto no fueron únicamente los trabajadores mineros de la moderna industria del estaño: entre los principales dirigentes de la FOCU había dos sastres, un peluquero, un zapatero, un tipógrafo y un empleado de comercio, y las bases de la organización estaban compuestas en gran medida por obreros-artesanos y empleados del pueblo de Uncía, que contaban además con el apoyo de los pequeños comerciantes locales. La FOCU, por lo tanto, no era un sindicato de clase moderno, sino una organización que agrupaba al «*menu peuple*, coalición sociológicamente heterogénea de elementos unidos por la 'pequeñez' y la pobreza comunes más que por criterios de ocupación o de clase». Hobsbawm (1987), p. 134.

³¹ Sobre la "masacre de Uncía" existe una monografía de Rivera (1967), y un relato bastante completo en Lora (1969), pp. 386-398.

adultos y letrados que cumplieran unos requisitos determinados de renta y se hubieran inscrito previamente en los registros electorales. Dado el reducido número de sus miembros y las restrictivas leyes electorales, *las organizaciones sindicales no tenían abierta la opción de ligarse al trabajo político-partidario*, bien construyendo un partido propio o actuando como grupo de presión al interior de los partidos oligárquicos preexistentes. Los pocos votos que podían movilizar no eran un recurso suficiente para participar en el juego de la democracia oligárquica. Y si la democracia restringida no ofrecía ningún mecanismo para canalizar las demandas de los grupos obreros y artesanos de la ciudad, éstos eran demasiado débiles y heterogéneos, con la excepción parcial, ya anotada, de los ferroviarios, para obtener alguna satisfacción a sus demandas a través del ejercicio de la presión corporativa. El único sector del proletariado boliviano suficientemente numeroso y dotado en potencia de una fuerte capacidad de negociación en el mercado, los trabajadores de las grandes empresas del estaño, se encontraba todavía muy aislado del escenario político nacional, y, sometido a una continua represión, no pudo consolidar ninguna organización reivindicativa autónoma. La trágica suerte de la FOCU demostró suficientemente que los intentos de extender la actividad organizativa a las minas estaban por el momento condenados al fracaso: los barones del estaño no dudarían en emplear la mayor violencia para erradicar cualquier germen de protesta obrera, y contarían con el apoyo incluso de los sectores más reformistas de los partidos tradicionales, encarnados en la figura de Bautista Saavedra.

Pero si ninguna de las fuerzas políticas del sistema estaba dispuesta a enfrentar la oposición de los grandes propietarios a cambio de obtener el apoyo de sus empleados, el aislamiento de los campamentos y el estrecho control que ejercían los patronos en el nivel local evitó también el arraigo en las minas de los escasos y débiles grupos políticos opositores³². De este modo, los mineros que, al contrario de los trabajadores urbanos, representaban en potencia un caudal electoral considerable dentro del sistema político republicano, tampoco tuvieron ninguna oportunidad de promover sus intereses de grupo mediante la acción

³² En 1921 se había fundado en Bolivia un Partido Socialista nacional, a raíz de la fusión de varios grupos locales. El partido se presentó a las elecciones legislativas de 1927 con algunos candidatos abiertamente marxistas y consiguió obtener un escaño, que no fue reconocido por el Congreso. En junio de ese mismo año se recreó con el nombre de Partido Laborista, radicalizando su plataforma, y tuvo que enfrentar muy pronto la persecución y el destierro de sus principales líderes, volviendo a convertirse, a partir de 1930, en Partido Socialista. Nunca pasó, sin embargo, de ser una reducida camarilla de intelectuales. Lo mismo puede decirse de otros grupos como el Tupac Amaru o el Partido Socialista Revolucionario, aparecidos a fines de los años veinte. Hasta la aparición del PIR en 1940 no pudo desarrollarse en Bolivia ningún partido de izquierdas con un apoyo popular considerable.

política dentro de la democracia oligárquica. El *corporativismo* y el *aislamiento de la política partidaria* fueron así inevitablemente las características más destacadas de las primeras organizaciones obreras a lo largo de la única etapa de la historia nacional en que la democracia representativa tuvo una existencia relativamente estable.

LA QUIEBRA DEL PARLAMENTARISMO OLIGÁRQUICO Y LA EMERGENCIA DEL SINDICALISMO MINERO

Las perturbaciones de la Gran Depresión de los 30's y la cruenta derrota de las armas bolivianas en la guerra del Chaco provocaron muy pronto la crisis definitiva del sistema político republicano. Por un lado, los enfrentamientos por la distribución de los costos que se produjeron a raíz del hundimiento del mercado mundial del estaño después 1929 agravaron la rigidez del sistema, multiplicaron el descontento de los sectores medios y terminaron aislando a los grandes empresarios mineros, disolviendo así las bases de la coalición que había sustentado la estabilidad de la democracia oligárquica (Whitehead, 1972). Por otro, los desastrosos resultados de una guerra que aniquiló en tres años de sangrientos combates a 65.000 de los 250.000 hombres movilizados en un país con sólo dos millones de habitantes³³, desprestigió por completo a las viejas élites civiles y proyectó al primer plano de la dinámica política a un conjunto nuevo de actores políticos reformistas y "nacionalistas". Pero la recesión económica, la supervivencia del poder omnímodo de la oligarquía estañera, y la profundidad de los agravios heredados de la guerra bloquearían en adelante cualquier posibilidad de reconstruir una democracia parlamentaria o cualquier régimen político estable, y en los años que transcurrieron hasta el triunfo revolucionario de 1952 las disputas entre las distintas facciones del ejército marcarían un ritmo abrupto y agónico a la sucesión en el poder del estado de los segmentos enfrentados de las élites. En este contexto signado por la violencia y la inestabilidad política se produjo finalmente la emergencia de las organizaciones sindicales de las minas de Bolivia, que inauguró una etapa completamente nueva en la historia de su movimiento obrero.

³³ La cifra de bajas no incluye a inválidos y heridos. Klein (1987), pp. 211-212.

El resultado inmediato de la guerra del Chaco fue el golpe de estado incruento del 17 de mayo de 1936, que inauguró el trienio reformista de los gobiernos militares de David Toro (1936-1937) y Germán Busch (1937-1939)³⁴. Inmediatamente después del término de la guerra se había producido un fuerte ascenso de la actividad organizativa en el movimiento obrero, acompañado del mayor movimiento huelguístico registrado hasta entonces en el país. La oleada de protestas culminó con la masiva huelga general del 10 de mayo de 1936 que proporcionó una inmejorable oportunidad para actuar a los oficiales jóvenes, resentidos con los responsables de la conducción política de la guerra y deseosos de encabezar un proceso de "regeneración" nacional.

Los militares nacionalistas se definieron como "socialistas de Estado" e intentaron incorporar al movimiento obrero en un esquema corporativo inspirado en los fascismos europeos y en la experiencia brasileña de Getulio Vargas. El proyecto de los militares, al igual que el de Vargas o el de Ibáñez en el vecino Chile, apuntaba a contrarrestar la oposición de los segmentos desplazados de la élite tradicional *movilizando un apoyo controlado de los grupos obreros, integrando verticalmente a los sindicatos en la estructura institucional de estado*. Para lograr su objetivo intentaron combinar las acciones coactivas con el ofrecimiento de ventajas materiales y legales a los trabajadores. David Toro procuró a la vez suprimir la autonomía sindical y fortalecer a las incipientes organizaciones obreras emitiendo un decreto que imponía la sindicalización obligatoria, al tiempo que estableció precios fijos, subsidió los productos de las pulperías, aumentó los salarios y aprobó varias normas para mejorar las condiciones de trabajo. Su gobierno auspició la organización de una central sindical nacional, la **Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB)**, y creó el Ministerio de Trabajo, nombrando ministro al principal líder de la huelga general de mayo. Germán Busch continuó y profundizó la misma línea después de derrocar a su antecesor en julio de 1937. Junto a medidas destinadas a aislar a los grupos más radicalizados que actuaban en el movimiento obrero³⁵, convocó en 1938 a una Convención que acabaría elaborando una Constitución con un fuerte contenido social, y promulgó una Ley General del

³⁴ Sobre los gobiernos de Toro y Busch existen dos monografías excepcionalmente extensas y detalladas: Gallego (1991) y Gallego (1992).

³⁵ En marzo de 1938, dos semanas después de celebrarse las elecciones para la Asamblea Constituyente, el gobierno de Busch promulgó un decreto que prohibía la difusión de «doctrinas extremistas» en el país. Con aquel acto legal dejó clara su actitud de fondo hacia los pequeños grupos de la izquierda independiente, a los que se intentaba excluir de la actividad política. Ver Gallego (1992), p. 29.

Trabajo donde se estipulaban los derechos del empleado y se agrupaban regulaciones sobre salarios, jornadas y condiciones de trabajo.

Pero estos intentos de apoyarse en los sectores obreros ofreciéndoles una nueva legislación no pudieron finalmente acompañarse con ninguna mejora real en el nivel de vida de los trabajadores. La aguda crisis económica en que se debatía el país en los años treinta no era desde luego el contexto más propicio para movilizar de un modo efectivo el apoyo obrero desde el estado, y las nuevas organizaciones sindicales, por su parte, apenas pudieron superar su extrema debilidad de partida y no consiguieron alcanzar un nivel aceptable de implantación ni en el nivel nacional ni, ante todo, en las estratégicas zonas mineras³⁶. Por ello, más allá de los dispersos segmentos de las élites nacionalistas afectas a Busch, los militares reformistas no encontraron apoyos suficientes para construir una coalición de gobierno sólida. Enfrentados a las crecientes presiones distributivas de todos los sectores de la sociedad, estaban totalmente aislados cuando el 23 de agosto de 1939 Busch se suicidó de un tiro en la cabeza, poniendo un trágico punto final a la experiencia agónica del "socialismo militar".

Sin embargo, el inmediato retorno al poder de los partidos tradicionales, unidos en un frente único -"La Concordancia"-, no podría ya devolver el juego al punto de partida. Aunque el breve intento de los militares por incorporar a las masas obreras a la política nacional había sido derrotado con bastante facilidad, en adelante no iba a ser posible eludir los problemas provocados por la emergencia de la protesta obrera simplemente apartando otra vez de la agenda la "cuestión social". Pero la principal herencia irreversible de los años de experimentación que siguieron a la derrota en la guerra del Chaco fue la extensión de la inquietud política entre la juventud de clase media: había surgido ya *una nutrida élite que se declaraba en abierta oposición al viejo orden oligárquico y que no tardó en darse cuenta de que el descontento obrero era un formidable recurso político, potencialmente movilizable para decantar a su favor el resultado de la confrontación con los grupos de poder tradicionales*. Esta nueva dimensión de la lucha política nacional parecía abrir oportunidades inéditas a los trabajadores en el escenario democrático recién reconstruido.

De los muchos grupos políticos que se habían formado en aquellos tiempos revueltos el más importante fué sin duda el que se nucleó en torno a Ricardo Anaya y José Antonio Arze, dos jóvenes intelectuales marxistas. En las elecciones presidenciales que siguieron al

³⁶ La participación de los mineros en el II Congreso de la CSTB fue mínima, dado que sólo se presentaron algunas pequeñas organizaciones locales y de empresa. Gallego (1992), p. 261.

suicidio de Busch, José Antonio Arze obtuvo 10.000 votos frente a los 50.000 de *Peñaranda*, el candidato de la coalición de partidos tradicionales. El resultado era prometedor³⁷, y poco después de las elecciones los grupos que habían apoyado su candidatura decidieron la creación de un nuevo partido político: el **Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR)**, que habría de ser el primer -y en verdad el único- partido marxista de masas de la historia de Bolivia. El PIR comenzó muy pronto a extender su influencia entre los diferentes sectores obreros y de las clases medias urbanas³⁸. En parte como consecuencia del impulso recibido por la industria liviana durante la Guerra del Chaco y al incipiente desarrollo del aparato estatal en los años del "socialismo militar", el liderazgo del movimiento obrero estaba pasando de los antiguos sectores artesanales a elementos más propiamente proletarios -obrerros y asalariados urbanos-, que se identificaban más fácilmente con el discurso marxista³⁹, y que eran más propensos a valorar la acción política institucional que los sectores artesanales tradicionales. Ello puede explicar la claridad con que el PIR impuso su hegemonía en la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB) creada en 1936 bajo el patrocinio del gobierno de Toro.

Con la aparición del nuevo partido de izquierda surgía también la posibilidad de que el parlamentarismo oligárquico se abriera a una participación más amplia de los sectores populares, y en particular del proletariado minero, que había aprovechado el pequeño espacio abierto por los gobiernos de Busch y Toro y estaba experimentando un fuerte desarrollo organizativo en torno al complejo Catavi-Siglo XX, el mayor centro estañífero de Bolivia. El hecho es que *las elecciones de 1940, en las que Arze recibió los dos tercios de su votación total de los departamentos mineros de Oruro y Potosí, dieron por primera vez la oportunidad a los mineros para canalizar sus demandas sufragando masivamente a favor de una fuerza*

³⁷ Hay que hacer notar que los grupos afines al nacionalismo reformista y varios sectores socialistas se negaron a apoyar a Arze, definido como "marxista radical", "comunista" y "desertor del Chaco" -el pacifismo de Arze fue un pecado imperdonable para los nacionalistas-. Los votos de gran parte del reformismo de clase media fueron, por lo tanto, a parar a Peñaranda. Véase Gallego (1992), p. 282-285.

³⁸ La influencia del PIR fué especialmente notable entre los ferroviarios y entre los maestros, cuya Confederación Nacional, que había sido fundada en 1926, se convirtió en un auténtico baluarte del partido.

³⁹ Algunos textos programáticos del PIR pueden encontrarse en Anaya (1966), pp. 403-445, y Lora (1987), vol. 2, pp. 85-130.

*de oposición definida y con un programa abiertamente favorable a sus intereses*⁴⁰. Podía esperarse, por lo tanto, que aquellas elecciones presidenciales se convirtieran en el inicio de una relación estrecha entre los sindicatos mineros, que iban abandonando progresivamente su viejo apoliticismo, y el nuevo partido de la izquierda. Los acontecimientos, sin embargo, seguirían un curso muy diferente.

El 21 de diciembre de 1942 el ejército oligárquico reprimió brutalmente una manifestación obrera en el campamento minero de Catavi, provocando una gigantesca masacre⁴¹ que se convertiría en un hito fundamental del desarrollo político del país y de su clase obrera. Para los mineros aquéllo no fue algo nuevo, dado que sus experiencias sangrientas con el ejército databan de antiguo. Pero *en 1942, por primera vez en la historia de Bolivia y en virtud del nuevo escenario político creado después de la guerra del Chaco, la problemática de los mineros del Altiplano iba a adquirir una auténtica resonancia nacional* (Arteaga, 1984). Los nuevos partidos de oposición utilizaron con astucia la oportunidad que les brindó aquella brutal carnicería cometida con hombres, mujeres y niños indefensos para realizar propaganda política, y no tuvieron ninguna dificultad para relacionar aquellos hechos en un gran número de intervenciones parlamentarias con la ilegitimidad del orden oligárquico.

Tras los sucesos de Catavi, la influencia del PIR entre los mineros aumentó significativamente. Sin embargo, otro partido de reciente creación, formado por un grupo heterogéneo de intelectuales y políticos nacionalistas inspirados en gran medida por los fascismos europeos, también supo hacer de la "Masacre de Catavi" una poderosa arma política⁴², empleando hábilmente la plataforma parlamentaria para acosar al gobierno con

⁴⁰ De acuerdo a los resultados oficiales, sin duda manipulados en favor del candidato gubernamental, Arze recibió 4.716 votos en Potosí y 3.482 en Oruro, frente a los 8.448 y 5.080 de Peñaranda. La importancia decisiva del voto minero en los sufragios del candidato izquierdista se hace evidente comparando las cifras anteriores con los resultados de la elección en La Paz: allí Arze obtuvo tan sólo 1.117 votos contra los 19.862 de Peñaranda.

⁴¹ No se conoce exactamente la dimensión de la matanza que se produjo cuando los soldados ametrallaron a la multitudinaria de marcha de protesta encabezada, como era costumbre, por las mujeres de los trabajadores del subsuelo. Según Lora (1980: 376) las cifras que se han barajado oscilan entre los 40 y los 400; Dunkerley (1987: 26) da una cifra de 35, mientras Klein (1987: 410) cree que hubo «varios centenares» de víctimas mortales.

⁴² Lo cierto es que el MNR pudo aprovechar mejor que el PIR las oportunidades para la propaganda política que brindó a las fuerzas opositoras la "Masacre de Catavi". El PIR, por entonces el partido con una mayor implantación en los sindicatos mineros, fue acusado por el gobierno de instigar el «movimiento subversivo» de Catavi, sus dirigentes no parlamentarios fueron encarcelados o enviados al exilio, sus periódicos fueron clausurados y toda su estructura organizativa sometida a una fuerte presión. En estas condiciones, sus parlamentarios se vieron obligados a adoptar una actitud más cauta que los del MNR. Véase Klein (1987), pp. 411 y ss.

una serie de elocuentes intervenciones: el **Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)**. Aquella pequeña camarilla de intelectuales filo-fascistas iba a desempeñar muy pronto un papel clave en un acontecimiento que marcaría un importante giro en la dinámica política de la Bolivia contemporánea, influyendo decisivamente en la trayectoria de su movimiento obrero. El 20 de diciembre de 1943, en efecto, la actividad conspirativa del MNR con un grupo jóvenes oficiales nacionalistas que integraban la logia RADEPA (Razón de Patria) desembocó en un incruento golpe de Estado que volvió a quebrar el desarrollo del parlamentarismo recientemente restaurado y situó al Mayor Gualberto *Villarroel* a la cabeza de un gobierno que se declaraba decidido a realizar amplias reformas en la estructura económica y social del país.

El gobierno de Villarroel, que contaba con una participación sobresaliente de miembros del MNR⁴³, emprendió una serie de reformas bastante radicales que le enfrentaron a los intereses de las grandes compañías mineras, a las que obligó a vender el 60% de sus divisas a una tasa de cambio fija y pagar nuevos impuestos sobre la exportación y los dividendos en moneda extranjera. El régimen dictó también medidas legales a favor de los trabajadores, elaborando ante todo un Fuero Sindical que prohibía los despidos sin causa justificada y los traslados sin consentimiento previo, y promulgó decretos sobre beneficios por despido y una variedad de otras primas. El PIR, que se había negado a participar en los preparativos golpistas, fué rechazado cuando exploró la posibilidad de ingresar en el gobierno, y quedó así condenado a la oposición frente a un régimen que sería a la postre uno de los más populares de la historia de Bolivia, especialmente entre los mineros. La experiencia del PIR durante el gobierno militar de Villarroel y en los años que siguieron a su caída acabaría marcando *el fin de lo que parecía prometer el desarrollo de un partido marxista de masas, con una ideología declaradamente obrerista y que contaba hasta entonces con un fuerte apoyo en los sindicatos y una amplia proyección nacional.*

Los militantes del MNR, que habían sido hasta entonces una reducida camarilla profundamente elitista y totalmente ajena a las luchas de los trabajadores organizados, se habían percatado también a partir de la "Masacre de Catavi" de que la capacidad para movilizar o controlar la protesta obrera iba a ser en adelante un recurso político fundamental. No debe extrañar por lo tanto que intentaran aprovechar al máximo las oportunidades que

⁴³ Paz Estenssoro, el principal líder del MNR, fue Ministro de Hacienda y otros importantes miembros del partido ocuparon otros ministerios y cargos públicos de importancia.

les ofrecía su proximidad al poder para vincularse a las organizaciones obreras, entablando una lucha a veces muy violenta con el PIR, que partía de una situación mucho más favorable, dada su fuerte implantación previa en los sindicatos. El mayor éxito de su política laboral, y el que tuvo mayores consecuencias en el futuro, fué la organización de los sindicatos mineros en una confederación nacional. Bajo su auspicio se creó en 1944 la **Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB)**, que fue desde entonces el eje articulador del movimiento obrero boliviano. *La primera red organizacional que ligaba a los principales grupos obreros del país de un modo efectivo y duradero quedaría así vinculada a la acción política del MNR*⁴⁴.

El esfuerzo proselitista del MNR obtuvo desde luego más éxitos en las minas que en las áreas urbanas. Sin duda, esto se debió en parte a la menor tradición organizativa de los trabajadores mineros y a su escasa definición ideológica, pero el factor más decisivo para explicar la mayor vinculación del proletariado minero con el MNR y su apoyo incondicional a la figura de Villarroel, fue seguramente su experiencia previa con los patronos y las élites del estado. Por muy restrictivos que puedan parecer ahora algunos aspectos de la legislación laboral de aquel gobierno, el profundo contraste con el medio altamente represivo en que se había desenvuelto el sindicalismo minero hasta ese momento, en el que era totalmente imposible construir ninguna organización duradera, hizo que las bases y los dirigentes mineros apreciaran enormemente, mucho más que cualquier otro grupo obrero, el respiro que les ofrecía la nueva conducta gubernamental y la posibilidad de construir por primera vez un movimiento sindical masivo y duradero en el nivel nacional. Nada parecido ocurrió, en cambio, con los ferroviarios o los maestros, que permanecieron mayoritariamente fieles al PIR.

La caída y el linchamiento de Villarroel, el 21 de julio de 1946, sería, por eso mismo, un episodio especialmente sentido por los mineros. Llevaría también al hundimiento definitivo del Partido de la Izquierda Revolucionaria. Atrincherado en una acción opositora radical frente a un régimen al que había definido como expresión del fascismo criollo, el PIR acabó participando, apoyándose en la estrategia frentista diseñada por la Komintern, en el

⁴⁴ Aunque no fue, como pretende Malloy (1989), p. 163), la primera Federación de sindicatos mineros. Véase Gustavo Rodríguez (1991), p. 106.

gobierno de reconstrucción oligárquica que sucedió a los nacionalistas⁴⁵. Pero el nuevo gobierno se alineó de inmediato con los intereses de las grandes compañías del estaño, lo que *cerró al PIR la posibilidad de iniciar la política de reformas* que le hubiera permitido reforzar su implantación entre los sectores obreros, y, mucho más grave, *le embarcó muy pronto en una política abiertamente represiva frente a las organizaciones sindicales de las minas*. Así, cuando el 27 de enero de 1947 los soldados dispararon contra los trabajadores de Potosí; cuando la empresa Patiño decidió imponer un despido masivo a sus trabajadores en Catavi-Siglo XX para deshacerse en un sólo golpe de todos los activistas sindicales, o cuando la intervención del ejército desembocó en una nueva masacre en el centro minero, el PIR tenía a uno de sus militantes ocupando el Ministerio de Trabajo. De este modo, el resultado de su compromiso con los partidos "democráticos" tradicionales fue que perdió casi todo su apoyo en el movimiento laboral, y, lo que es más importante, *fué repudiado radical y definitivamente por el que habría de ser su segmento decisivo: el proletariado minero*.

En los momentos que siguieron a la caída de Villarroel, con el PIR totalmente desacreditado y el MNR en desbandada y sometido a una aguda represión estatal, los cuadros del **Partido Obrero Revolucionario (POR)**, de orientación trosquista, adquirieron una considerable influencia en la joven Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. El fruto más llamativo del activismo trosquista fue sin duda la Tesis política aprobada en el Primer Congreso Extraordinario de la FSTMB, celebrado en Pulacayo en noviembre de 1946. Conocido desde entonces como **Tesis de Pulacayo**, el documento es un intento de adaptar el «programa de transición» de Trotsky a la realidad del país, y fue redactado en su integridad por Guillermo Lora, hasta hoy el más conspicuo intelectual trosquista boliviano. La Tesis describía a Bolivia como un «país capitalista atrasado», dotado de una burguesía incapaz de cumplir con sus «objetivos históricos», socio subordinado del «imperialismo» y los «señores feudales» latifundistas en una alianza perversa amparada por la violencia del

⁴⁵ Los factores de política internacional son imprescindibles para comprender las decisiones del PIR, pero éstas se guiaron básicamente por los intereses del partido comunista en el escenario político nacional. Las recomendaciones del frentismo entonces dominantes en los manuales tácticos de la Komintern, le permitieron justificar la oposición a las élites nacionalistas que amenazaban con arrebatarle sus clientelas "naturales" definiendo al régimen militar como una expresión peculiar del "fascismo criollo". Si la jugada resultó a la postre suicida en términos de su relación con el movimiento obrero ello se debió a sus propios errores de cálculo y no a la imposición desde el exterior de una línea táctica ajena a las peculiaridades de la política local. En otros países latinoamericanos, la adopción de la línea de los "frentes antifascistas" guardó al parecer menos relación con las exigencias de la dinámica política interna. Para un relato breve (que no incluye el caso boliviano) puede consultarse Godio (1985), pp. 47 ss.

«Estado feudal-burgués»: en estas condiciones «solamente los traidores y los imbéciles pueden seguir sosteniendo que el Estado tiene la posibilidad de elevarse por encima de las clases sociales». Por suerte, «en Bolivia el proletariado se caracteriza por tener suficiente fuerza para realizar sus propios objetivos e incluso los ajenos», dirigido por un grupo minero capaz de tapar la boca a cualquier reformista con su radicalismo y su «temeraria audacia en la lucha». La tarea prioritaria era derrotar definitivamente a los «colaboracionistas de clase», empeñados en impedir con sus falsas promesas de reformas «la expropiación de los expropiadores». Tras ello, el horizonte de la revolución proletaria quedaría al alcance de la mano⁴⁶.

La aprobación de los planteamientos radicales contenidos en la Tesis, que serían ratificados desde entonces en todos los congresos de la FSTMB, fue sin duda el resultado de un complejo cúmulo de factores. Los más determinantes, sin embargo, fueron elementos básicamente coyunturales, tales como la habilidad del POR para aprovechar el vacío organizativo creado por el desprestigio o la desarticulación momentánea de los partidos mayores, o la frustración por el hundimiento de un gobierno nacionalista que había generado muchas expectativas, y el retorno de los odiados políticos de la oligarquía al gobierno, que pudo ser fácilmente atribuido por los ideólogos trosquistas a la traición del «reformismo» encarnado en el PIR. Tal vez algún otro más profundo, porque el radicalismo verbal de la Tesis era en cierto modo una expresión inevitable de la violencia que había marcado desde el principio las relaciones de los mineros con el estado⁴⁷.

Pero en términos tácticos la victoria coyuntural de los trosquistas resultaba irrelevante, y sobre todo enormemente engañosa. Cualquiera fuese el significado del lenguaje violentamente anti-reformista del programa aprobado en 1946, en efecto, lo único que parece cierto es que *los trabajadores mineros habían aprendido en los últimos años a relacionar sus oportunidades para luchar con éxito en defensa de sus intereses de grupo con la naturaleza de la élite gobernante*, y decidieron en consecuencia seguir el único camino que les quedaba abierto después del suicidio del PIR, *estableciendo una relación cada vez más estrecha con el MNR. La consecuencia principal para el movimiento obrero de los acontecimientos que*

⁴⁶ Guillermo Lora, *Tesis de Pulacayo. Contenido y defensa*, La Paz, s/f (16 ed.), pp. 48-64.

⁴⁷ Delgado (1984: 184-86), contemporáneo de los hechos que narra, asegura que los postulados de la tesis no fueron entendidos por nadie en el momento en que fue presentada y aprobada, pero que su lenguaje violento, sin embargo, sí fue entendido y seguramente compartido por casi todos.

se sucedieron a partir del golpe de 1943, la gran segunda ruptura de la democracia oligárquica en el siglo XX, no fue en absoluto la marginación del "reformismo", sino la virtual desaparición del único actor político que podía ofrecer a los sindicatos una alternativa viable al nacionalismo de clase media para intervenir en la política nacional. De haberse mantenido la vigencia del PIR en el escenario político boliviano, la historia de su movimiento obrero hubiera sido tal vez muy diferente. El MNR era en adelante la única carta con que contaban para jugar en el escenario político nacional, y es importante dejar bien claro el papel del gobierno nacionalista de Villarroel en este resultado, que marcaría profundamente toda la historia posterior del país y la trayectoria de su movimiento obrero.

Tras la larga etapa de experiencias altamente represivas que había vivido el proletariado minero, la relajación de la presión de las empresas y el apoyo estatal explícito - durante el mandato de Villarroel *tuvieron el efecto real en el corto plazo de marginar a los liderazgos más radicales y fortalecer la posición del grupo de dirigentes que se vincularon más estrechamente con el gobierno*, explotando los réditos de las ventajas relativas que obtuvieron los trabajadores, y la aprobación de la Tesis de Pulacayo no debería confundirnos a este respecto⁴⁸. Entre los nuevos dirigentes ligados al MNR que surgieron entonces comenzó pronto a destacar la figura de Juan Lechín, que se mantendría durante las cuatro décadas siguientes a la cabeza del sindicalismo minero boliviano. Dada la experiencia histórica acumulada por los mineros, resulta falaz insistir en las limitaciones del apoyo estatal en los años de la alianza entre los militares nacionalistas y el MNR. Las nuevas condiciones que se crearon entonces, su impacto en la conciencia de las bases y en la competencia por el liderazgo entre los distintos segmentos de las élites sindicales, deben evaluarse en relación a la situación preexistente, y resulta evidente que los logros del movimiento obrero bajo el gobierno de Villarroel, por muy limitados que puedan parecerle hoy a un observador externo, fueron sentidos por los trabajadores como avances reales en la consecución de metas indispensables para la consolidación de sus organizaciones, y apreciados en consecuencia.

El MNR supo utilizar estas realidades, que se convirtieron desde entonces en recursos a los que podía apelar para contrarrestar los desafíos a su posición dirigente, y consolidó de ese modo su influencia sobre las organizaciones del trabajo. Esto fue cierto especialmente en su relación con la nueva FSTMB, destinada desde su fundación a ser la organización más

⁴⁸ Dunkerley (1987: 23) cree sin embargo que desde su aprobación la Tesis de Pulacayo fue «el punto de referencia programático esencial de los mineros bolivianos y por extensión de la clase obrera en su conjunto».

poderosa del movimiento obrero boliviano. Así, en las elecciones presidenciales de 1951 los mineros sufragaron en bloque a favor del candidato del MNR, y sus votos fueron sin duda una de las claves del inesperado triunfo de Victor Paz Estenssoro. Y cuando el ejército cerró el acceso al poder del líder nacionalista, los trabajadores mineros se convirtieron en el soporte más seguro de la estrategia subversiva que se vio forzado a adoptar el MNR.

Pero la vinculación que se había ido estableciendo entre el MNR y los sindicatos mineros tenía también unos límites muy claros, derivados de las características definitorias de cada uno de los actores. Si he destacado el hecho de que el apoyo de las élites del estado fue una condición previa indispensable tanto para la consolidación inicial de organizaciones reivindicativas autónomas en las minas de Bolivia como para su estructuración en una red nacional efectiva, conviene recordar ahora que los sindicatos mineros contaban con sólidas bases para la acción colectiva en el nivel local, asentadas en la estructura comunitaria de los campamentos. Los dirigentes de los sindicatos de los grandes centros mineros, que eran la base real del poder de la FSTMB, eran a la vez líderes comunitarios que estaban inevitablemente sometidos a un control muy estrecho de sus afiliados. Atados a las bases por la disciplina estricta de la democracia comunitaria, los líderes de los mayores sindicatos tenían además sus propios recursos de poder, y no dependían por lo tanto de los que pudieran obtener mediante su vinculación política con el partido/movimiento. Contaban con el comportamiento compacto de los trabajadores mineros y con el enorme poder de negociación en el mercado derivado de su control del producto estratégico de la economía mono-exportadora boliviana.

Si la actuación de los líderes mineros en las elecciones para la renovación parcial del Parlamento celebradas en 1946, todavía con Villarroel en el gobierno, había avisado ya al MNR de que no iba a ser «tan fácil controlar a los sindicatos mineros como había sido crearlos»⁴⁹, los resultados que obtuvo la FSTMB en las elecciones presidenciales de 1947, con el MNR en la clandestinidad, fueron una brillante demostración tanto de la fuerza que había adquirido la nueva organización como de su independencia frente al partido que

⁴⁹ Whitehead (1981), p. 339. En las elecciones para la renovación parcial del Parlamento que tuvieron lugar en mayo de 1946, dos meses antes de la caída de Villarroel, la FSTMB postuló sus propios candidatos en competencia con los del MNR. En la provincia Dalence, el candidato de la FSTMB, Juan Lechín, un militante movimientista poco disciplinado, ganó la diputación obteniendo siete veces más votos que el candidato oficial del partido, y en Inquisivi ocurrió aproximadamente lo mismo.

apadrinó su nacimiento⁵⁰. Al contrario que el PIR, cuyas actividades estuvieron ligadas desde su creación a los sindicatos, el MNR procedía de una tradición ajena a las luchas obreras. Había comenzado siendo un pequeño grupo de intelectuales y activistas de clase media, con una definición ideológica que, si bien estuvo marcada desde el principio por una inquietante ambigüedad, era en cualquier caso profundamente elitista. La ambigüedad ideológica que lo caracterizó siempre no hizo sino acrecentarse a medida que pugnaba por ampliar su radio de influencia en el país, especialmente hacia los sectores obreros, y por obtener una homologación internacional enterrando sus orígenes filo-fascistas. El resultado final de su proceso de "aggiornamento" fue un partido "democrático" enormemente heterogéneo, que difícilmente podía estar en condiciones de convertirse en un factor de unificación y ofrecer una dirección sólida al movimiento obrero. Las alternativas de la turbulenta dinámica política boliviana durante la etapa formativa de sus organizaciones sindicales habían terminado promoviendo la vinculación entre éstas y *un partido preexistente, que no compartía en absoluto su historia y enarbolaba un programa nacionalista vacío de contenidos precisos*. De los poderosos sindicatos mineros no podía esperarse una lealtad realmente sólida hacia el partido, y para el MNR el apoyo de los trabajadores de las minas, el único gran sector estructurado de la sociedad civil boliviana, era simplemente un recurso clave para el fortalecimiento de la difusa alianza policlasista que pretendía encabezar. *La relación entre las dos fuerzas que acabaron protagonizando la Revolución de 1952 era, por lo tanto, laxa y exclusivamente instrumental*. Sería desde luego muy difícil sobreestimar la importancia de estos hechos para la futura trayectoria política del país y la evolución de su movimiento obrero.

⁵⁰ En las elecciones presidenciales de 1947, con el MNR legalmente excluido del juego político, la FSTMB y el POR (trosquista) organizaron un frente electoral (el "Frente Proletario"), que consiguió elegir 10 diputados y actuó en el Parlamento con el nombre de Bloque Minero. Las elecciones presidenciales de 1947, al igual que las ya mencionadas de 1951, fueron una demostración elocuente del enorme peso del voto minero dentro del parlamentarismo de representación restringida y de la influencia que había alcanzado ya la FSTMB entre los trabajadores mineros. Para la experiencia del bloque parlamentario minero puede consultarse el texto de Lora (1980: 565 ss), prescindiendo de sus elucubraciones sobre las miserias de la «ilusión parlamentarista» y de sus críticas sobreideologizadas a la actuación de los diputados obreros no trosquistas, contaminados según él por las taras del «reformismo» y el «tradeunionismo» y condenados por lo tanto al oportunismo político.

EL PERÍODO DE CONSOLIDACIÓN

LA REVOLUCIÓN DE 1952 EN LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO: RUPTURA Y CONTINUIDAD

Los años treinta presenciaron en América Latina la crisis generalizada de los regímenes oligárquicos que caracterizaban al «orden neocolonial» (Halperin Donghi, 1979: 356 ss). La Gran Guerra europea y la Depresión de los años treinta produjeron una sucesión de crisis políticas en el subcontinente que desembocaron finalmente en diversas modalidades de "entrada de las masas" en los escenarios políticos nacionales. Un elemento clave en aquellas transiciones fue desde luego la *incorporación del movimiento obrero a los sistemas políticos nacionales*. En Bolivia, la incorporación definitiva del movimiento obrero a la escena política nacional tuvo lugar en los momentos que siguieron al triunfo de una revolución social "en forma" que liquidó por completo las instituciones socio-económicas y políticas del viejo estado republicano, y en principio, por lo tanto, no debería extrañar que la revolución de 1952 supusiera una quiebra radical en la trayectoria histórica de las organizaciones de trabajo.

René Zavaleta insistió siempre en este contenido de ruptura, describiendo al acontecimiento revolucionario de 1952 como «*momento constitutivo*» del movimiento obrero y de toda la historia contemporánea del país. Aunque su tratamiento del concepto es bastante impreciso⁵¹, no resulta difícil asimilarlo -dejando de lado la amplitud y la ambición explica-

⁵¹ Zavaleta nunca precisó lo que entendía exactamente por "momento constitutivo". Entre sus muchas virtudes no figuró desde luego la precisión terminológica, y lo más parecido a una definición del concepto es probablemente este texto de *Lo nacional popular en Bolivia*: "Hay un momento en que las cosas comienzan a ser lo que son y es a eso lo que llamamos momento constitutivo ancestral o arcano o sea su causa remota, lo que Marc Bloch llamó la 'imagen de los orígenes'". Zavaleta (1989), p. 180. En la historia de Bolivia habría habido dos "momentos constitutivos" originales: la primera domesticación del hábitat andino, y la Colonia. Según mi lectura de su obra, la herencia de estos momentos constitutivos fundamentales seguiría estando presente en la realidad boliviana sobre todo a través de su legado simbólico e ideológico -cosmovisiones andinas, racismo, darwinismo social-, así como de patrones de segmentación social cuyo origen puede remontarse hasta entonces, y en menor medida por la persistencia de formas de organización social y productiva prehispánicas y coloniales. Entiendo que la Revolución del 52 habría sido lo que Zavaleta llamaba un "momento constitutivo complementario" al menos en dos sentidos: en primer lugar, en tanto que generó una matriz de relaciones -"matriz del 52"- entre el estado y los agentes sociales cuya herencia definirá la dinámica política del país por un período de tiempo prolongado; en segundo lugar, porque la crisis revolucionaria fue un hito fundamental en el proceso de formación del acervo de experiencias de los actores sociales y políticos, marcando profundamente su memoria histórica. Una exposición bastante compleja -y notablemente confusa-

tiva mucho mayores de la intuición del sociólogo boliviano- al de «*coyuntura crítica*», desarrollado originalmente por Lipset y Rokkan: una *profunda discontinuidad* en la vida política de una comunidad, *una etapa de transición en la que se establecen ciertas direcciones de cambio y se cierran otras, en un modo que informa la dinámica política subsecuente durante un prolongado período de tiempo* (Collier y Collier, 1991: 29 ss.). En este sentido, puede mantenerse que *todas las coyunturas de democratización social* acompañadas de la incorporación de los movimientos obreros al sistema político *fueron "coyunturas críticas" en la historia de los trabajadores*, profundos puntos de inflexión en la trayectoria histórica de sus organizaciones. Las estrategias de desarrollo económico que emprendieron entonces las élites reformistas, el tipo de sistema político presente en el momento de la incorporación, las características definitorias de cada uno de los actores y las decisiones que adoptaron entonces, fijaron los rasgos básicos de unos procesos que adquirieron contenidos específicos en cada país e influyeron de un modo decisivo sobre la configuración de los movimientos obreros nacionales, proyectando *consecuencias muy duraderas sobre sus repertorios estratégicos y sus estructuras organizativas*⁵².

En Bolivia, inmediatamente después del triunfo revolucionario se creó la **Central Obrera Boliviana (COB)**, la primera matriz sindical que ligó de un modo efectivo a todas las organizaciones obreras a nivel nacional. *La COB emergió tras los desarrollos de la primera década pos-revolucionaria como una institución plenamente consolidada, convirtiéndose desde entonces en un actor fundamental del sistema político. Tanto la estructura organizativa del sindicalismo boliviano como sus estrategias de acción frente al estado y los actores políticos quedaron ya claramente perfiladas en este período, y se mantuvieron casi inalteradas hasta el día de hoy*⁵³. En este sentido el acontecimiento revolucionario de Abril de 1952 y sus desarrollos inmediatos señalaron efectivamente un "antes" y un "después" en

de éste y otros conceptos empleados por René Zavaleta en sus trabajos puede encontrarse en Antezana (1991).

⁵² Puede verse para esto Valenzuela (1983) y Valenzuela (1986). Las características que adquirió el proceso de incorporación de las "masas" a la política nacional no sólo tuvo importantes consecuencias para la estructuración de los movimientos obreros, sino también, según han intentado demostrar recientemente Collier y Collier (1991), para la evolución global de los sistemas políticos en toda la etapa posterior. La tipología que elaboran estos autores, sin embargo, resulta enormemente discutible.

⁵³ Tomando prestada una imagen que Lipset y Rokkan utilizaron para describir el surgimiento de alternativas partidarias estables, podríamos decir que el campo del movimiento obrero boliviano quedó "congelado" a partir de su consolidación orgánica en la década que siguió a la Revolución de Abril. La referencia a la obra de Lipset y Rokkan procede esta vez de Valenzuela (1986), p. 40.

la historia de los trabajadores bolivianos. Pero si en general es cierto que las transformaciones operadas en cualquier coyuntura, por muy "crítica" que ésta sea, no surgen de la nada ni eliminan elementos fundamentales de la realidad social preexistente, en el caso de la revolución social boliviana los *elementos de continuidad* tuvieron además una especial relevancia. Sin duda fueron, paradójicamente, *más importantes que en otros países latino-americanos en los que los procesos de democratización social que liquidaron el orden oligárquico adquirieron unas formas mucho más graduales*. Resulta por lo tanto indispensable matizar la imagen de la revolución 1952 como «momento constitutivo».

A este respecto ya se ha hecho notar en varias ocasiones el carácter "atípico" del ciclo revolucionario boliviano. Indudablemente, su desarrollo no encaja bien en los esquemas teóricos que han pretendido dar cuenta de las diversas fases que deberían sucederse en todo acontecimiento de ese tipo, y la revolución de 1952 ha sido por ello calificada de «lance incompleto» o «revolución inconclusa» en las obras mayores de sus dos principales estudiosos⁵⁴. Lo que según estos autores diferencia al ciclo revolucionario boliviano es, en esencia, el hecho de que la coalición revolucionaria fracasó por completo en la tarea de construir un nuevo orden institucional estable que sustituyera al parlamentarismo oligárquico⁵⁵. Así, mientras las élites políticas mexicanas pusieron fin con un notable éxito a la otra gran revolución social de América Latina⁵⁶, institucionalizando un orden capaz de integrar a las diversas fuerzas sociales y de eliminar a los militares de la escena política, la sociedad boliviana, por el contrario, habría de convertirse en la segunda mitad del siglo XX en un modelo

⁵⁴ Respectivamente, Klein (1987) y Malloy (1989). A sus calificativos «inconclusa», «incompleta» subyace sin duda la idea de que existe algo como una "historia natural" de las revoluciones, expresada en una serie de etapas que todas ellas deberían transitar. Para una crítica de este "espejismo de la historia natural", habitual en ciencias sociales y tal vez dominante en el campo del estudio comparativo de las "grandes revoluciones" puede verse Dobry (1988), pp. 47-65. La atípica trayectoria de Bolivia después de 1952 tiene que resultar a la fuerza particularmente incómoda para cualquiera que parta de una imagen esquemática de la evolución "natural" de los procesos revolucionarios empleando alguna variación del modelo clásico de Crane Brinton.

⁵⁵ El "fracaso" del MNR puede calificarse de tal en comparación con las trayectorias de otros partidos que recogieron la herencia de una revolución social. Sin embargo, en el contexto de la historia boliviana, es necesario recalcar que ningún gobierno logró en Bolivia, después de 1930, igualar el "magro" récord de los 12 años de permanencia en el poder establecido por el MNR.

⁵⁶ Por lo que sabemos, el único trabajo dedicado a comparar los resultados de las dos revoluciones es el breve ensayo de Eckstein (1976).

de «sociedad pretoriana de masas»⁵⁷, entregada a la pugna violenta entre las distintas fuerzas sociales y sometida a frecuentes golpes de estado. De este modo, *la dinámica política del país a partir de 1952 mantuvo importantes paralelismos con la que se había desarrollado en las dos décadas que siguieron a la derrota del Chaco.*

Son básicamente dos los factores que determinaron esta llamativa continuidad del proceso político boliviano antes y después del acontecimiento revolucionario. *En primer lugar, las brutales restricciones que impuso la estructura económica heredada* a las opciones de los líderes del MNR, el actor político que encabezó la Revolución Nacional. Los sucesivos gobiernos del MNR, en efecto, fueron incapaces de llevar adelante estrategias de diversificación económica que superaran la agonía del modelo de acumulación heredado, totalmente dependiente de la suerte de un sector minero exportador que se encontraba ya desde finales de los años veinte azotado por un constante declive productivo. El persistente confinamiento minero de la economía boliviana se mantendrá por lo tanto como un determinante fundamental de las opciones de los actores sociales y políticos en la Bolivia posrevolucionaria, y la crisis secular de la industria del estaño, que estuvo en la base del hundimiento del orden oligárquico, enmarcará su juego en unos parámetros muy semejantes a los que prevalecieron a partir de la Depresión de los años treinta.

El segundo elemento de continuidad vino dado por *la existencia previa de un segmento de la clase obrera dotado de una estructura organizativa sólida e independiente y situado en el lugar estratégico de la economía monoexportadora*, la minería del estaño, que después de 1952 pasaría a ser de propiedad estatal. Como hemos visto, tanto el MNR como el sindicalismo minero habían tenido ya una importante presencia en el escenario político nacional a lo largo de la década de los cuarenta y habían cooperando en la oposición frente a los gobiernos oligárquicos. También hemos anotado que los vínculos que se establecieron entonces entre las dos organizaciones fueron muy precarios. En 1952, los gobernantes del MNR tenían enfrente a unas organizaciones sindicales preexistentes, sólidamente asentadas en la estructura comunitaria de los campamentos, que controlaban el único recurso de exportación del país, y de las que no podían esperar ninguna colaboración por motivos de lealtad o disciplina partidaria. Esta absoluta "centralidad minera" tendrá, como veremos, unas consecuencias formidables para la selección de estrategias y la estructuración organizativa

⁵⁷ Por supuesto, el término está tomado de Samuel Huntington. Véase Huntington (1990), especialmente pp. 175 ss.

del movimiento obrero en su etapa de consolidación.

Si estos elementos heredados del pasado fueron un determinante fundamental de la interacción entre las organizaciones sindicales y las élites del estado en el período posrevolucionario, *el principal elemento de ruptura* promovido por la revolución triunfante, y el que introduciría la mayor alteración en la estructura del juego político a partir de 1952, tuvo que ver con la entrada en el escenario de un actor que hasta ahora no había aparecido en nuestro relato: el campesinado. La exclusión política del campesinado había alcanzado sin duda en Bolivia las expresiones más extremas, al cruzarse de un modo particularmente violento con la segmentación étnica y cultural. Para las grandes mayorías que habitaban el campo, el estado republicano fue un ente ajeno y abstracto⁵⁸, y la ampliación del radio del conflicto político en el período pos-Chaco no había penetrado los muros de las comunidades y las haciendas rurales. Había sido, por el contrario, un fenómeno relacionado exclusivamente con la desafección y creciente hostilidad hacia el régimen de buena parte de los pobladores urbanos y los trabajadores de la gran minería del estaño, los miembros menos favorecidos de la "sociedad nacional"⁵⁹. No debe extrañar, por lo tanto, que los campesinos no tuvieran apenas participación ni en la apertura ni en el decantamiento inicial de la situación revolucionaria. Sin embargo, una vez que se produjo derrota del ejército oligárquico y la toma del poder por la coalición insurgente, la movilización autónoma de los campesinos impulsó la extensión de la Reforma Agraria mucho más allá de los límites previstos por los líderes del MNR, desencadenando un proceso que liquidó en tan sólo dos años una buena parte de las estructuras sociales tradicionales en el campo⁶⁰ e integró en el escenario político nacional

⁵⁸ Ramiro Velasco describió así la precariedad del Estado oligárquico: «El dominio jurídico territorial del Estado no se expresaba económicamente en un intento de integración. Todo conducía a la dispersión. Geográficamente, el país, dividido por sus murallas interiores y sus grandes espacios vacíos, no podía superar el aislamiento de realidades étnicas incomunicadas y de grandes porciones territoriales cuanto más alejadas del *enclave minero* tanto más deprimidas y abandonadas a su suerte». Velasco (1985), p. 17.

⁵⁹ Los episodios de resistencia en el campo han sido desde luego muy abundantes a lo largo de toda la historia de Bolivia. Sin embargo, después del ciclo revolucionario de 1780-81 encabezado por Tupac Amaru y Julián Apaza (Tupac Katari), las rebeliones campesinas habían tenido un carácter marcadamente localista, con la relativa excepción de las luchas dirigidas por el líder aymara Pablo Zárate Willka a raíz de su participación en la guerra civil de 1899. En realidad puede mantenerse que, al igual que en 1899, los campesinos aprovecharon en 1952 la oportunidad que les ofreció el derrumbe de las instituciones nacionales para dar un nuevo impulso a su lucha secular por la propiedad de la tierra. Véase "Bolivia: la revolución obrera que fue campesina", en Mires (1988), pp. 224-278. En Rivera (1986) puede encontrarse un relato breve de las rebeliones campesinas en la primera mitad del siglo XX.

⁶⁰ «La revolución destruyó la hacienda como estructura social, económica y política, y la destruyó para siempre». García (1964), p. 349.

a las grandes mayorías que habían estado hasta entonces sometidas al poder local de los terratenientes. *Los resultados de esta revolución agraria, unidos al establecimiento del voto universal, dotaron así de nuevos recursos a las élites políticas del estado y tuvieron un enorme impacto en las oportunidades de acción de los sindicatos en el seno del sistema político.*

Elementos de ruptura y de continuidad; la entrada en el escenario de nuevos actores y la historia previa de otros; la reforma agraria y la persistencia de viejas estructuras "congeladas", se combinarían en la compleja historia del ciclo de la revolución nacional para dibujar el escenario en el que el movimiento obrero boliviano adquirió finalmente todas sus características distintivas.

RESTRICCIONES ESTRUCTURALES Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: EL CONFINAMIENTO MINERO DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA

En la Bolivia posrevolucionaria, pese a la intención inicial del MNR, no fue posible promover una auténtica diversificación de la estructura económica ni iniciar un proceso de crecimiento con redistribución. El programa de las élites reformistas se quedó en los papeles⁶¹, aplastado por las realidades de la economía más pobre y aislada de América del Sur, y por un entorno natural especialmente hostil al optimismo desarrollista.

Los líderes políticos de la revolución heredaron una planta industrial mínima y un

⁶¹ El espíritu "cepalino" que animaba al proyecto económico original de los movimientistas está bien reflejado en este fragmento del discurso que pronunció Paz Estenssoro ante la Convención nacional de su partido en febrero de 1953: «Tras las realizaciones básicas, vendrá la diversificación de la economía, la liquidación de la monoproducción; no debemos exportar únicamente barrillas, sino vender lingotes fundidos de nuestros minerales; debemos desarrollar las posibilidades de la ganadería y la agricultura que ofrece nuestro país, para disminuir el pasivo de nuestra balanza comercial y no estar más sometidos a la subordinación que representa estar sometidos a la importación de alimentos; debemos desarrollar la industria fabril a fin de pagar altos salarios a los obreros, porque sólo el obrero de la gran industria es mejor remunerado. Así el Estado puede cumplir todos los fines que debe llenar: asistencia sanitaria, escuela para todos, sin tomar en cuenta clase ni edad. Necesitamos vías de comunicación unir los mercados con las zonas fabriles y realizar todo lo que signifique bienestar y felicidad a que tiene derecho el pueblo boliviano». Citado en Llobet Tabolara (1990), p. 332.

ambiente muy desfavorable para el desarrollo de un proceso industrialización sustitutiva. La estructura social vigente durante el período republicano había representado un límite infranqueable para cualquier intento industrializador, dado que la mayoría campesina vivía encerrada en una economía de autoabastecimiento y las capas consumidoras de las ciudades, que se abastecían con mercancías importadas o con la producción artesanal, no eran una base suficiente para constituirse en mercado de una industria nacional moderna. Es indudable que las exigencias de la Guerra del Chaco habían dado un primer impulso positivo a la industria moderna boliviana, especialmente a la textil, y la fuerte caída de los ingresos por exportaciones durante la Depresión de los años treinta contribuyó a mantener su crecimiento. Surgió entonces una pequeña industria nacional bajo el amparo del control de cambios y de las divisas de tipo preferencial otorgadas por el gobierno⁶². Sin embargo, estos desarrollos fueron muy limitados, y no evitaron que Bolivia llegara al período de la posguerra mundial con una base industrial incomparablemente menor a la de los países del subcontinente que habían iniciado en aquellos momentos un proceso amplio de industrialización sustitutiva.

Desde luego, la revolución nacional de abril de 1952 pareció abrir nuevas oportunidades de desarrollo para la industria. Cuando menos, las medidas que comenzó adoptando el nuevo régimen, en especial la concesión de amplios créditos y divisas a precio preferencial, se adecuaban perfectamente a los intereses de la tan deseada burguesía nacional. Pero las buenas intenciones de los políticos no fueron un estímulo suficiente para despertar los instintos schumpeterianos de los dueños del capital, ya que tras la revolución siguieron operando en la misma medida las restricciones estructurales que habían inhibido hasta entonces el desarrollo de una planta industrial en el país. El hecho fundamental es sin duda que apenas se dio una ampliación significativa del mercado interno. Es cierto que los gobiernos del MNR se embarcaron, a partir de 1953 e impulsados por fuertes presiones desde abajo, en un profundo proceso de reforma agraria que destruyó por completo la propiedad latifun-

⁶² Ver para lo anterior Ramos Sánchez (1983), especialmente pp. 47 ss. El diagnóstico de la *Estrategia socio-económica del desarrollo nacional* sobre los orígenes y deficiencias del proceso de industrialización en Bolivia destaca los mismos factores: «Las dificultades creadas por la crisis económica y la Guerra del Chaco primero y la falta de abastecimiento durante la Segunda Guerra Mundial después, crearon condiciones para que se iniciara un proceso de desarrollo industrial.... Este crecimiento debe vincularse también con el del mercado interno, resultante del proceso de urbanización y del aumento de los sectores de administración y de servicios. No obstante, la persistencia de los factores determinantes de la marginación de la parte mayoritaria de la población, la extrema concentración del ingreso y las características de enclave de las actividades dinámicas, impidieron al país iniciar un proceso de desarrollo hacia adentro por la vía de la producción sustitutiva de importaciones». Ministerio de Coordinación y Planificación *Estrategia socio-económica del desarrollo nacional*, Vol. I, p. 37.

dista en el Altiplano y en los Valles. Sin embargo, los cambios revolucionarios en el campo se tradujeron en primer término en una drástica reducción de la producción agrícola, y dieron lugar finalmente a una estructura de propiedad con un amplio predominio del minifundio que impuso severos límites a la participación campesina en el consumo de bienes industriales.

CUADRO 2.3

1955: Ingreso per cápita y contribución de la industria al producto nacional en Bolivia y países seleccionados

País	Ingreso por habitante (en dólares)	Contribución de la industria al PIB (%)
Argentina	575	23,4
Chile	308	17,1
Panamá	290	13,2
Colombia	250	13,6
México	210	18,3
Brasil	195	18,2
Nicaragua	140	14,1
Perú	125	11,4
BOLIVIA	83	8,9

Fuente: CEPAL, *Análisis y proyecciones del desarrollo económico, IV. El desarrollo económico de Bolivia, México, 1957*, Vol. II, p. 18.

En estas condiciones no resulta sorprendente que la burguesía decidiera dedicarse a actividades más sencillas y lucrativas que la inversión en una industria de muy dudoso futuro⁶³. De hecho, el juego con las diferencias entre las tasas cambio oficial y paralela, que se ampliaron aceleradamente a partir de 1953, se convirtió de inmediato en la fuente de ganancias más significativa para las clases acomodadas. La mayor disponibilidad de moneda extranjera derivada de las políticas gubernamentales de fomento industrial no fué aprovechada

⁶³ Grebe (1988: 4) se ha referido a «la ausencia de vocación industrializadora puesta de manifiesto por los titulares del poder central, así como por las clases empresariales privadas», y a las «omisiones industrializantes del bloque de poder» (Grebe, 1987: 221). El mismo autor reconoce, sin embargo, que más allá de la falta de "vocación" y de las "omisiones", existieron restricciones estructurales que afectaron la capacidad estatal y privada para promover la industrialización del país: ante todo los estrangulamientos externos provocados por la caída de los precios del estaño después de la Guerra de Corea y el reducido tamaño del mercado interno.

por lo tanto para impulsar la inversión productiva; se empleó, en cambio, en expandir la especulación⁶⁴. Con una población ligeramente superior a los tres millones de habitantes, con un producto per cápita muy reducido y una pésima distribución del ingreso, Bolivia seguía teniendo a mediados de los años cincuenta una de la tasa de industrialización más baja de América de Sur y una de las menores de América Latina (Cuadro 2.3).

Es cierto que, dadas las dificultades de partida que enfrentaba en Bolivia la creación de una planta industrial, el MNR enfocó con mucha mayor intensidad su esfuerzo diversificador hacia el desarrollo de nuevos productos primarios de exportación, invirtiendo grandes cantidades de recursos en la agricultura comercial de las tierras tropicales del Oriente y en el impulso a la extracción de petróleo. Pero la primera era una apuesta de largo plazo, enmarcada en una estrategia de integración nacional, que sólo comenzaría a dar frutos en la década de los setenta. La segunda fue simplemente una mala apuesta, dado que la enorme inversión en la empresa petrolera estatal obtuvo resultados muy alejados de los previstos. El resultado de todo ello fue, en cualquier caso, que *la salud de la economía boliviana y las finanzas del Estado continuaron dependiendo casi por completo de la evolución de la industria minera*, que seguía aportando alrededor del 90% de los ingresos por exportaciones (ver abajo Cuadro 2.4).

Pero *el modelo de crecimiento basado en la exportación de minerales, fundamentalmente estaño, enfrentaba además una grave crisis estructural ya en el momento en que el MNR se hizo cargo del gobierno*. Las tres mayores compañías mineras, cuyas propiedades fueron estatizadas y agrupadas en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) poco después del triunfo revolucionario, estaban seriamente descapitalizadas en 1952, dado que durante las dos décadas de incertidumbre política que siguieron a la Gran Depresión los "barones" del estaño apenas habían invertido en el reequipamiento de sus minas o en la

⁶⁴ Esto es lo que parece desprenderse de los datos que revelan la escasa capitalización de la industria en este período. El capital existente en maquinaria en la industria manufacturera alcanzaba en 1952 la cifra de 52.224.000 dólares americanos, y se elevó en 1956 a 56.232.000. Por lo tanto, la inversión neta realizada entre esos años fue solamente de 4.008.000 dólares -una inversión anual inferior al millón-. Según los mismos datos, la inversión bruta -es decir, incluyendo una depreciación estimada del 3 por ciento- habría sido de 10.409.000 dólares. Esta cifra, afirma Pablo Ramos (1983, I: 58), resulta «extremadamente baja» teniendo en cuenta que, según sus cálculos, «la empresa dispuso durante ese período de 40 millones para invertir en repuestos y bienes de capital».

prospección de nuevos yacimientos⁶⁵. La ley de cabeza del mineral en los principales yacimientos, que llevaban 50 años en explotación, era ya muy baja, y las técnicas de extracción y procesamiento de las piedras no habían experimentado ninguna mejora desde 1929. Con unos costos de producción y de transporte muy altos, el estaño boliviano difícilmente podría soportar la creciente competencia de los nuevos productores en el contexto de una caída sostenida de las cotizaciones del "metal del diablo" en el mercado mundial. El estaño sólo recuperaría el precio que alcanzó en 1951 trece años más tarde, iniciando a partir de entonces un nuevo ciclo ascendente⁶⁶. Pero no serían ya las élites civiles del MNR quienes se beneficiaran de ese cambio en la tendencia.

El MNR era perfectamente consciente de la gravedad de la crisis minera⁶⁷ y no estaba preparado para aceptar que el futuro económico del país fuera a continuar ligado enteramente al de sus minas. Se dedicó por ello a exprimir los beneficios, cada vez más magros, de la COMIBOL, sin reinvertir nada en ella⁶⁸. La COMIBOL era la única fuente interna de recursos no sólo para financiar los frustrados intentos de diversificación productiva, sino también para atender los reclamos de mejora material de todos los agentes sociales. De ahí su conspicua "función social", expresada de inmediato en el aumento del personal contratado por la empresa y en la creciente proporción de empleados de escritorio que fue cobijando: el porcentaje de trabajadores de interior mina en las nóminas totales se redujo de 82 por

⁶⁵ Esta severa descapitalización de partida ha llevado a Zondag (1968), el autor del más célebre estudio sobre la historia económica de la revolución boliviana, a afirmar que la nacionalización fue una decisión equivocada. El retraimiento de la inversión en las compañías mineras data en realidad de la crisis que los años 30: en 1928 el capital total de la industria minera alcanzaba aproximadamente a 160 millones de dólares, y en 1952 apenas llegaba a los 161 millones, de modo que podemos presumir que en todo el periodo el nivel de reinversiones apenas superó los costos del mantenimiento de los equipos. Malloy (1989), p. 99.

⁶⁶ La mayor caída se produjo además en 1953, el primer año de funcionamiento de la Corporación Minera de Bolivia. A partir de los datos elaborados por Morales et. al. (1992: 84), se obtienen los siguientes índices de la evolución de los precios reales del estaño entre 1951 y 1964: 1951:100; 1952:92.8; 1953:76.9; 1954:75.4; 1955:76.9; 1956:78.9; 1957:74.2; 1958:74.0; 1959:79.4; 1960:79.7; 1961:87.3; 1962:87.0; 1963:90.0; 1964:119.2.

⁶⁷ Víctor Paz Estenssoro, en su discurso de primer aniversario en 1953, dio por agotado el potencial de crecimiento de la economía del estaño con estas palabras: «El estaño, aunque tenga un ciclo ascendente, no tendrá mayores precios. Parece que estamos llegando al ciclo final del estaño. Es el caso de la plata que llegó a su fin el siglo pasado». La cita está tomada de Guzmán (1990), p. 356.

⁶⁸ Martin (1984: 95) cree que a la descapitalización de COMIBOL durante el gobierno del MNR subyace una intencionalidad política: «minar la posición económica del elemento más políticamente consciente del país: los mineros». En realidad, el hecho de que el gobierno dependiera por completo de los recursos generados por la minería estatal para llevar adelante sus planes de diversificación económica, y el mal cálculo sobre el futuro económico del país que cabe atribuir a los proyectistas del MNR, son una explicación suficiente para este fenómeno.

ciento en 1952 a 52 por ciento en 1959; hacia 1967, cerca de la tercera parte de los 22.250 empleados de la Corporación eran de escritorio, y de los 14.700 trabajadores nominales sólo 7.600 trabajaban en la roca mientras los demás estaban empleados en el mal organizado y poco mecanizado servicio de transporte y en las actividades de procesamiento de exterior mina. La COMIBOL, por lo tanto, sucumbió desde el principio a las demandas de "trabajo para los muchachos" y a los intentos de las élites del estado por satisfacer a los poderosos sindicatos mineros.

CUADRO 2.4

1952-1964: Participación de las exportaciones de minerales (1) y estaño (2) en el total de exportaciones; índices del quantum de la exportación de minerales (3) y de estaño (4).

	(1)	(2)	(3)	(4)
1929	94.1	75.1	100	100
1952	97.5	60.0	160.2	68.9
1953	97.6	64.2	131.1	75.1
1954	95.6	55.2	107.2	62.1
1955	95.5	56.0	113.3	60.2
1956	93.0	55.1	108.9	57.9
1957	90.5	65.5	116.5	60.0
1958	86.0	56.0	86.2	38.2
1959	88.4	68.0	78.5	51.3
1960	88.2	63.2	73.5	41.9
1961	90.2	66.1	82.4	44.0
1962	92.2	68.3	83.1	46.3
1963	93.2	66.4	92.9	49.1

Fuente: Banco Central de Bolivia, *Memoria Anual 1960 y 1964; Minería Boliviana*, IX, No.64, 1965.

Pero conviene recordar que más allá del aumento irracional del personal administrativo, que sobrecargó peligrosamente sus costos de operación en una etapa de caída constante del valor de las exportaciones de minerales, una gran parte de los recursos generados por la empresa estatal fue desviada para alimentar la estructura de mediaciones clientelares que comenzó a organizar en todo el país el partido del gobierno. El resultado inevitable fué, en cualquier caso, un profundo agravamiento del declive secular de la industria estañífera, y aún una caída de la producción total de minerales por debajo de los índices de

1929 (Cuadro 2.4 arriba). La crisis de la industria minera y el fracaso de los proyectos de diversificación económica provocaron así un agudo estancamiento económico, que se prolongó a lo largo de todo el período de gobierno del MNR: entre 1950 y 1960 el producto interno de Bolivia creció apenas a un ritmo del 0.4% anual, cifra que contrasta fuertemente con la tasa media del 5% registrada en América Latina durante el mismo período⁶⁹.

El estrangulamiento de su modelo de acumulación minero-exportador terminaría sometiendo a Bolivia a *una fortísima dependencia de la ayuda financiera norteamericana*. Entre 1954 y 1964, el país andino fue el mayor receptor individual de la ayuda externa de Estados Unidos a América Latina y el mayor *per cápita* del mundo. En 1958, un tercio del presupuesto gubernamental se financiaba ya con fondos de la ayuda norteamericana (Klein, 1988: 290). En el camino, por supuesto, *la autonomía política de los gobernantes bolivianos se había reducido a unos límites muy estrechos*, y el que el programa de estabilización de diciembre de 1956 fuera redactado en su integridad por un funcionario del Departamento de Estado fue una demostración suficientemente elocuente del poder ilimitado que estaban adquiriendo los Estados Unidos en la definición de la política económica del país.

Pero las medidas de austeridad eran, en cualquier caso, necesarias. Hasta 1957, el declive productivo había estado acompañado de una altísima inflación, provocada por las políticas fiscales expansivas que había aplicado el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1952-56) en sus esfuerzos por fomentar la diversificación económica y mantener unida a la coalición revolucionaria atendiendo a las reivindicaciones de todos sus sectores. Los menguantes ingresos de la minería no podían sostener las inversiones públicas, las subvenciones a la industria y las políticas redistributivas, y la situación inflacionaria se había vuelto ya insostenible, cuando el paquete de medidas que anunció finalmente Hernán Siles Zuazo (1956-60) el 15 de diciembre de 1956 logró contener el alza de los precios a costa de la primera caída en los ingresos de los trabajadores y de una severa recesión que hizo de 1957 el "año terrible" de la industria boliviana, hasta entonces protegida y dependiente del favor estatal. El tipo de cambio único, que terminó con la concesión de divisas a precios subvencionados, y la implantación de la libre comercialización, que otorgaba a toda persona

⁶⁹ Furtado (1977), p. 79. El crecimiento de las economías de Venezuela y Brasil se situó por encima de la media regional, arrojando tasas del 7.6 y 6.8% respectivamente; México y Perú, por su parte, experimentaron un crecimiento semejante al promedio, mientras que *las economías más estancadas* (Uruguay, Paraguay y Argentina) *mantuvieron tasas de crecimiento que superaban entre cinco y seis veces a la boliviana*.

la facultad de importar libremente cualquier producto o mercancía sin necesidad de permisos de importación⁷⁰, tuvieron un impacto brutal sobre la naciente industria. La producción manufacturera se redujo en 30 por ciento sólo en el primer año (Dunkerley, 1987: 85), y ya no podría recuperarse de ese golpe.

El programa de 1956 había alcanzado con éxito el objetivo de contener la inflación, pero no había hecho nada para superar el estancamiento de la economía. Por el camino habían quedado los proyectos de promover una rápida diversificación económica, las ilusiones industrializantes, y la alegría de las primeras políticas redistributivas. El destino económico de Bolivia parecía estar condenado a depender de la suerte de su declinante industria minera, y para iniciar la senda del crecimiento no había más alternativa que intentar revertir de una vez su ya larga agonía. En el segundo gobierno de Paz Estenssoro (1960-64), el MNR se rindió a la evidencia y aceptó llevar adelante un plan de "racionalización" de COMIBOL que prometía restablecer la rentabilidad de las minas nacionalizadas, aumentando la disponibilidad de recursos internos de inversión. La reestructuración se encararía con el apoyo de un programa de asistencia financiera respaldado por EEUU, Alemania Occidental y el BID, el Plan Triangular, que el gobierno había aprobado tras rechazar una oferta soviética al parecer más ventajosa⁷¹. Sus condiciones eran extremadamente duras. Los financiadores del Plan Triangular partían de la convicción de que para hacer de COMIBOL una empresa solvente debía comenzarse por reducir drásticamente el componente laboral de sus costos, eliminando las actividades puramente "sociales" -básicamente la subvención a los alimentos de los trabajadores en las pulperías-, supeditando los salarios a la productividad y reduciendo la mano de obra (Malloy, 1989: 379). *Si el programa de estabilización de 1956 había provocado ya una fuerte caída en los salarios de todos los trabajadores, el Plan Triangular atentaba ahora de un modo brutal contra los intereses del proletariado minero, el eje de la coalición social que llevó al MNR al poder.* El populismo boliviano apenas había tenido espacio para iniciar el vuelo.

⁷⁰ Se dictaron también medidas complementarias, relativas a la restricción casi completa del crédito y a la elevación de las tasas de interés a niveles nunca registrados. Por otro lado, el Plan de Estabilización provocó la parálisis de importantes obras de desarrollo que constituían un gran estímulo para la demanda.

⁷¹ El episodio de la oferta soviética es uno de los tópicos más citados por los muchos relatos sobre la derrota de la revolución nacional a manos del Imperialismo, y es indudable que reflejó con especial claridad la ausencia de cualquier margen de maniobra por parte de los políticos bolivianos cuando entraban en juego los intereses geopolíticos del vecino del Norte. Puede encontrarse un relato completo del episodio, si bien en clave de intriga, en Canelas (1981), pp. 74 ss.

LOS SINDICATOS MINEROS Y EL MNR

El MNR había llegado al poder gracias a su alianza con unos sindicatos mineros independientes y con una sólida base organizativa, que habían desarrollado además una plataforma reivindicativa propia y fuertemente radical recogida en la Tesis trosquista de 1946. Sin embargo, hemos destacado también que la relativa influencia del trosquismo en la definición ideológica de las organizaciones mineras debería entenderse ante todo como un reflejo coyuntural debido a las características específicas de la crisis abierta con el linchamiento de Villarroel⁷². Así, pese al notable activismo de los trosquistas, *la situación de vacío organizativo generada por la caída de Villarroel fue superada muy pronto en favor de los militantes del MNR, que alcanzaron sin apenas oposición un claro predominio orgánico en el sindicalismo minero*. La vinculación con el POR trosquista no había sido en un ningún momento una alternativa viable para los mineros, y el triunfo de la alianza revolucionaria en 1952, resultado final de la estrecha colaboración entre mineros y movimientistas en las luchas clandestinas durante el "sexenio" oligárquico, no hizo sino consagrar *el prestigio del partido reformista y su hegemonía absoluta en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia*. Todos los miembros del Comité Ejecutivo de la FSTMB elegidos en la Conferencia de Catavi, en diciembre de 1953, comenzando por su líder máximo, *Juan Lechín Oquendo*, estaban afiliados al MNR (Cajías, 1987: 165).

En los momentos que siguieron al triunfo de la Revolución de Abril los sindicatos mineros obtuvieron además concesiones muy importantes. Ante todo, la incorporación de la cláusula del «control obrero con derecho a veto» en el decreto de nacionalización de las grandes minas del 31 de octubre de 1952, fue una conquista esencial de las organizaciones mineras. La fórmula daba a los trabajadores una enorme capacidad de fiscalización sobre su entorno laboral e institucionalizaba de hecho un centro de poder independiente en los campamentos. En general, el modo en que se llevó a cabo la nacionalización *fortaleció enormemente en términos de organizativos a la FSTMB y con ella a la Central Obrera Boliviana (COB)*, fundada el 16 de abril de 1952. La iniciativa de crear una central sindical nacional partió de la FSTMB, y aquélla nacería inevitablemente como *una prolongación de*

⁷² Guillermo Lora, el más influyente intelectual trosquista boliviano y autor de la Tesis de Pulacayo, comentó alguna vez su desencanto porque las masas "confundieron" la Tesis que aprobaron en 1946 con el programa burgués del MNR.

la estructura sindical minera. Resulta sin duda muy significativo que la reunión fundacional tuviera lugar en sus locales, o que su Secretario Ejecutivo, Juan Lechín, fuese elegido para ocupar el mismo cargo en la COB (Lazarte, 1989: 6), y la nueva organización obrera, en realidad, no hizo sino expresar en el nivel nacional la situación de "*poder dual*"⁷³ que había generado ya la presencia de las milicias sindicales armadas y, sobre todo, el control discrecional que ejercían los mineros en sus centros de trabajo.

Consciente de los peligros que entrañaba la existencia de un poder sindical independiente, el MNR emprendió desde el principio una sorda lucha para eliminar por completo a las élites que rivalizaban con él en la conducción del movimiento obrero. Su ofensiva contra los miembros del POR, apoyada por el joven **Partido Comunista de Bolivia** (PCB) tuvo obtuvo inicialmente un éxito espectacular, y la influencia de los trosquistas en el movimiento obrero boliviano declinó rápidamente⁷⁴. Los resultados del Primer Congreso de la COB, realizado en octubre de 1954, parecieron probar que el MNR y el gobierno encabezado por Paz Estenssoro habían conseguido efectivamente consolidar su hegemonía en las organizaciones nacionales obreras. Los dirigentes de la central sindical única observaron allí la «perfecta identidad de intereses y de sentimiento que actualmente existen entre Gobierno y Pueblo»⁷⁵, reflejando una relación de *colaboración y dependencia mutua* entre la COB y las élites del estado que se había institucionalizado ya en la fórmula del "*Cogobierno*", consistente en la participación en el gabinete de un número de "ministros obreros" designados por los sindicatos (Lazarte, 1989: 121 ss.).

Pero por debajo de este aparente idilio existían importantes puntos de conflicto potencial entre el gobierno y los sindicatos. El problema real no estaba en que el programa que había aprobado la COB en el Congreso incluyera, aparte de la reafirmación del "socialismo" como objetivo estratégico de las luchas obreras, una serie de demandas *políticas* que el

⁷³ Los teóricos de la izquierda boliviana polemizaron sobre la medida en que la situación podía compararse a la que caracterizó a la Rusia de Kerenski. Véase para este debate Zavaleta (1974).

⁷⁴ Una buena parte de los militantes del POR ingresó en el MNR después de la revolución. El trosquismo boliviano se vio también afectado por las discusiones en el seno de la IV Internacional, que desembocaron en 1956 en la escisión más seria sufrida por el POR, cuando algunos dirigentes disconformes con la línea política de Guillermo Lora consiguieron arrastrar tras de sí a una mayoría de los militantes, apartándolos del partido.

⁷⁵ *Cartilla* de la COB, citada en Dunkerley (1987), p. 76.

gobierno reformista no parecía dispuesto a otorgar⁷⁶, sino, por el contrario, en que *los incentivos ofrecidos hasta ese momento por el gobierno a los trabajadores habían sido casi exclusivamente políticos y simbólicos*.

El aumento del poder de las organizaciones obreras a todos los niveles, reflejado en la presencia abrumadora de sus milicias armadas y en la invasión del escenario nacional por la simbología y el discurso del nuevo "poder popular", en efecto, no se estaba traduciendo en la obtención de ventajas *materiales* para las bases de los sindicatos. Aunque una vez realizada la nacionalización la FSTMB logró imponer algunos de sus criterios, y el gobierno recontrató a un alto coste a los mineros despedidos y liquidó a la nueva plantilla de COMIBOL todos los beneficios devengados por los antiguos propietarios⁷⁷, los trabajadores habían tenido que aceptar el argumento de que la corporación minera no estaba por el momento en condiciones de financiar aumentos salariales ni una mejora real en las condiciones de vida y trabajo en las minas⁷⁸. Pero tanto las características específicas de las organizaciones mineras, como la laxitud de los vínculos, exclusivamente instrumentales, que habían forjado con el partido en el gobierno, dejaban muy poco margen a las élites del estado en este terreno. Los gobernantes del MNR no podían esperar mucha colaboración de los sindicatos mineros por motivos de lealtad afectiva⁷⁹ o disciplina partidaria, y la desconfianza que enfrentó en las minas la propuesta de participación formal en el gobierno -que fue aprobada sólo sobre la base de que constituía «el medio más eficaz de garantizar las

⁷⁶ Básicamente, la nacionalización de todo el transporte, la cooperativización masiva de la agricultura, la creación de tribunales revolucionarios populares, el reacondicionamiento total del sistema educativo, y el control obrero con derecho a veto en todas las actividades económicas y no sólo en las minas nacionalizadas. Véase Dunkerley (1987), pp. 76-77.

⁷⁷ Esto supuso que en cuatro años la fuerza laboral de la COMIBOL creciera de 29.000 a 36.000 trabajadores, y que el estado desembolsara 8 millones de dólares en «pago de reposición» como bono de recontratación sus empleados. Dunkerley (1987), p. 63.

⁷⁸ La evolución de los salarios, especialmente de los mineros, durante los primeros cuatro años de gobierno movimientista, es un asunto sobre el que aparentemente no se puede decir nada definitivo. Hay quienes, como Ericson (1962), Pfaller (1973), Kelly y Klein (1981) o el mismo Malloy (1989), opinan que los mineros obtuvieron ventajas salariales reales en esta primera etapa; otros, como Amado Canelas (1981), Ruiz González (1980), Margaret Martin (1984) o Dunkerley (1987), que mantienen que hubo una caída en el salario real. Lo que puede afirmarse con seguridad es que las condiciones de vida y trabajo en las minas bolivianas apenas variaron nada en todo este período.

⁷⁹ Martin (1984: 7) piensa que las luchas del "sexenio" (1946-1952) generaron un sentimiento de «identidad común» y fuertes «lazos emocionales» entre los mineros reprimidos por las empresas y los movimientistas reprimidos y masacrados por el estado oligárquico. Tal vez esto tuviera alguna importancia, pero es indudable que no resultaba suficiente para cerrar los abismos que existían entre ambos actores.

demandas sindicales y evitar la claudicación» de los políticos (Dunkerley, 1987: 51)- había sido ya una señal suficientemente clara en ese sentido.

En las grandes minas del estaño, el centro neurálgico de la economía nacional, la oficina sindical del "control obrero" estaba investida en las grandes minas de una importante autoridad administrativa y de un efectivo poder de veto sobre muchos temas de la política empresarial a nivel de planta. El sometimiento de los "controles" a la vigilancia constante de los miembros de la comunidad que los había elegido en asamblea, impedía a los gerentes de las empresas, ahora nacionalizadas y dependientes de corporación estatal COMIBOL, obtener su colaboración vía cooptación, y las exigencias de los trabajadores de base estaban provocando ya numerosos enfrentamientos. Esto fue especialmente cierto desde el principio en Siglo XX-Catavi, el mayor centro minero del país y el que había encabezado la oposición a los últimos gobiernos oligárquicos, pero *el creciente poder a nivel local de las organizaciones mineras, unido a la escasa autonomía de los dirigentes frente a la presión de los trabajadores de base, había producido de hecho un peligroso aumento del potencial de conflicto en todos los campamentos*. El estado crítico de las minas nacionalizadas, producto del declive productivo de los yacimientos heredado de dos décadas de continua descapitalización y de el inicio el año anterior de una fuerte caída en las cotizaciones internacionales del estaño a consecuencia del final de la guerra en Corea, no auguraban nada bueno. *La combinación de unas organizaciones sindicales independientes, que habían logrado incrementar notablemente sus recursos organizativos y controlaban el recurso estratégico de la economía nacional, y una situación de estancamiento productivo derivado del estrangulamiento del modelo de acumulación mono-exportador, por el contrario, amenazaba con el desencadenamiento de violentas pugnas distributivas.*

Durante los cuatro años del primer gobierno de Paz Estenssoro, el recurso a la inflación mantuvo latente el conflicto, pero éste estalló abiertamente en el mandato de Siles Zuazo tras la puesta en práctica del Plan de Estabilización de 1956, que «constituyó un ataque directo a la economía popular establecida después de abril de 1952; pues, si bien logró reducir la inflación, contrajo muy pronto la producción, aumentó el desempleo, redujo el crédito y recortó el ingreso real de todos los sectores, con excepción del rural, pues los campesinos se beneficiaron de un incremento en los precios de sus productos» (Dunkerley, 1987: 100). El impacto sobre el salario real fue especialmente agudo en los campamentos mineros, debido a la eliminación de los subsidios a los alimentos de las pulperías empresaria-

les. Juan Lechín y el resto de los dirigentes sindicales nacionales, afiliados al MNR y ligados al gobierno, habían defendido la necesidad de llevar adelante el Plan de Estabilización y habían expresado abiertamente su apoyo al Presidente, pero la respuesta de los sindicatos mineros locales en el Ampliado nacional de dirigentes⁸⁰ del 4 de enero de 1957 fue presentar varias mociones a favor de la renuncia de todos los ministros obreros del gabinete. Aunque Juan Lechín contestó con un violento ataque a la "ultraizquierda", en referencia a los liderazgos sindicales ajenos al MNR que estaban comenzando de hecho a recuperar su influencia en los sindicatos mineros, la dirección nacional de la COB no pudo evadir la presión de unas bases que sentían ya en su carne los efectos de la nueva política económica gubernamental y tuvo que resignarse a firmar una resolución que exigía al presidente un aumento salarial en gran escala acompañado de controles de precios. La demanda, que amenazaba directamente los fundamentos de la estrategia anti-inflacionaria, fue respaldada contundentemente por los trabajadores de Siglo XX, el principal centro productor de estaño, que declararon su primera huelga masiva contra un gobierno del MNR.

Siles Zuazo inició entonces una campaña contra la izquierda del MNR, intentando dividir a la COB, que en su II Congreso, celebrado en las dos primeras semanas de junio de 1957, había resuelto exigir un incremento del 300% sobre las compensaciones salariales ofrecidas por el gobierno y, desoyendo las advertencias del Presidente, había convocado una huelga general (Lazarte, 1988: 36). Siles Zuazo pretendía aislar al grupo de sindicatos mineros más radicalizados del resto del movimiento obrero, cuyas bases por lo pronto no habían sufrido tan intensamente como los trabajadores del subsuelo los efectos del programa de estabilización. Comenzó sus movimientos con buen pie, consiguiendo que la dirección nacional de la COB, enfrentada a la división de sus sindicatos afiliados, decidiera suspender la huelga general en el último momento, y para consolidar su estrategia promovió de inmediato la formación de un "Bloque Restaurador" de la COB, *una estructura embrionaria de organización obrera para-estatal apoyada inicialmente por todos los principales sindicatos a excepción de los mineros*⁸¹. El "Bloque" se oponía desde dentro estructura sindical a la

⁸⁰ El Ampliado Nacional de dirigentes es la mayor autoridad de la COB entre dos Congresos. Reune a los miembros del Comité Ejecutivo con los delegados de los sindicatos de empresa y los líderes de las federaciones de rama para tratar asuntos de especial importancia para el movimiento. En este caso, se trataba de definir la posición de los sindicatos frente al Plan de Estabilización.

⁸¹ Entre los sindicatos mineros importantes, sólo el de Huanuni se puso del lado del gobierno.

dirigencia nacional, ligada a la izquierda del MNR y a la FSTMB, pidiendo su renuncia o la aceptación de una "reestructuración" que debía traducirse de inmediato en el abandono de la línea opositora que había comenzado a gestarse en el Ampliado nacional de enero y que había sido confirmada por los resultados del II Congreso.

Siles Zuazo, que no disponía de margen para negociar las condiciones de su política de estabilización monetaria con los sindicatos mineros, había iniciado así un movimiento destinado a sustituir el sindicalismo preexistente por unas organizaciones altamente coactivas, capaces de evitar el conflicto de clase y "armonizar" los intereses de los trabajadores y las élites reformistas del estado, y sus maniobras divisionistas lograron efectivamente debilitar la influencia de la dirigencia nacional de la COB sobre el conjunto del movimiento sindical. Juan Lechín tuvo que "replegarse" hacia el núcleo minero más radicalizado, el campamento de Siglo XX, y finalmente, en noviembre de 1957, la COB se vio forzada a emitir una "declaración de unidad" en la que ratificaba su pleno respaldo al plan de estabilización económica. El ala izquierda del MNR prefería desde luego continuar jugando sus cartas dentro del partido y deseaba a toda costa evitar una ruptura, pero *el control del liderazgo de las poderosas organizaciones mineras era su único recurso de poder en la arena política central, y ello imponía unos límites muy estrechos a su capacidad de maniobra*. Los sindicatos de base de la FSTMB se lo harían saber muy pronto.

Inmediatamente después de que la dirección nacional de la COB emitiera su "declaración de unidad", los sindicatos mineros, reunidos en un Ampliado nacional en diciembre de 1957, reafirmaron radicalmente su independencia frente al gobierno, elaborando una "plataforma de lucha" que incluía la reivindicación de la «autodeterminación clasista», y a mediados del año siguiente el IX Congreso Minero aprobó unas resoluciones que certificaron final del "Cogobierno" y recordaron el carácter «clasista y revolucionario» de la FSTMB. El gobierno recurrió sin éxito a la fuerza desnuda de las armas para reventar el Congreso, y los violentos enfrentamientos que se produjeron entonces en Catavi entre los "comandos" del MNR y las milicias sindicales certificaron definitivamente el fracaso de la estrategia gubernamental⁸². El programa de estabilización había golpeando fuertemente a los

⁸² Antes de que se iniciara el acto de inauguración del Congreso, miembros de los comandos del MNR atacaron a los congresales; los trabajadores de interior mina de Colquiri defendieron a sus representantes nacionales enfrentando a los milicianos con dinamita, mientras los delegados del Congreso se retiraban al campamento de San José. Dunkerley (1987), p. 88.

trabajadores del subsuelo, pero éstos mantenían intacta su fuerza organizativa independiente y su capacidad para emprender acciones colectivas prolongadas a nivel local. Los dirigentes sindicales mineros carecían casi por completo de autonomía frente a sus bases, y esto impedía de entrada su cooptación por un gobierno incapaz de ofrecer beneficios materiales tangibles a los trabajadores. Siles Zuazo y los dirigentes del tronco central del MNR habían podido asaltar con éxito la estructura orgánica nacional de la COB, limitando así los recursos de poder de la izquierda del MNR, encabezada por Lechín y los dirigentes sindicales mineros encuadrados en el sector obrero del partido, y obligándola a retroceder. Pero *la ofensiva corporativista del gobierno se detuvo ante la solidez de la estructura comunitaria de los campamentos mineros, que levantaba un límite infranqueable a los esfuerzos por subordinar al sindicalismo.*

Mientras la política económica del gobierno continuaba afectando negativamente a la mayoría de los sectores populares urbanos, la existencia de un poder sindical independiente en las minas garantizaba una referencia segura y un aliado potencial a los grupos cada vez más numerosos de descontentos. Incluso en los momentos más duros de la ofensiva gubernamental, los liderazgos opositores encontraron en los campamentos mineros un refugio seguro, un núcleo duro sobre el que podrían ir reconstruyendo su influencia y organización. En estas condiciones, era casi inevitable que el Bloque Restaurador fuera agotando su impulso inicial. Desde mediados de 1958, había ido perdiendo afiliados, y, según relata Dunkerley (1987: 93), «se derrumbó del todo en enero de 1959, cuando los dirigentes de los trabajadores fabriles fueron desplazados por una votación masiva de las bases escépticas de su postura progubernamental desde el principio».

Así, con independencia de cuál hubiera sido "en el principio" la actitud de los asalariados urbanos, el hecho es que en 1959 los sindicatos de la COB estaban de nuevo reagrupados bajo el liderazgo indiscutido de la FSTMB y los dirigentes del ala izquierda del partido. La capacidad de acción de la FSTMB había avanzado paralelamente al debilitamiento del Bloque progubernamental, y en febrero-marzo de 1959 fué capaz de sostener durante dos semanas una huelga general que arrancó al gobierno un incremento salarial del 20 por ciento y, lo que era más decisivo, la conservación de los precios subsidiados en las pulperías de COMIBOL. Esta última concesión suponía el abandono de un elemento central de la política de estabilización monetaria, y sólo puede entenderse como una severa derrota del gobierno. De este modo, cuando Siles Zuazo entraba en el último año de su mandato la estrategia de

crear una estructura sindical "amarilla", emprendida con una enorme energía y violencia, había naufragado ya por completo, y *el núcleo minero de la COB estaba de nuevo en condiciones de vetar la política económica gubernamental en sus aspectos medulares.*

Paz Estenssoro asumió su segundo mandato en 1960 con la decisión de superar el bloqueo político que se había producido a raíz del fracaso de su antecesor en consolidar un sindicalismo paraestatal. Había sido elegido candidato con la ayuda del sector sindical del partido y llevando a Juan Lechín, líder máximo de los mineros, como compañero de fórmula, pero muy pronto se vio obligado a intentar eliminar a la clase obrera como contendiente nacional de poder y a emprender una ofensiva a gran escala contra las organizaciones mineras. A los seis meses de su toma de posesión dio a conocer uno de los puntales de la nueva estrategia de desarrollo de su gobierno, el Plan Triangular para la rehabilitación y relanzamiento de la COMIBOL, que incorporaba una serie de exigencias que amenazaban directa y muy seriamente los intereses de los mineros: para comenzar, y como requisito previo para recibir la ayuda financiera prometida, el gobierno debía despedir a una quinta parte de la fuerza laboral de COMIBOL y cerrar varias de sus de sus minas.

Juan Lechín, ahora Vicepresidente, dio de nuevo un respaldo pleno al proyecto, y consiguió volcar a su favor a la mayoría de los delegados presentes en el XI Congreso Minero, celebrado en mayo de 1961. Pero la incorporación del líder de la COB a la vicepresidencia no pudo evitar que se reprodujera de inmediato la situación que acabó prevaleciendo tras la aprobación inicial por parte de los dirigentes obreros del programa de estabilización económica del anterior gobierno. Las bases sindicales en las minas, en efecto, consiguieron de inmediato que los liderazgos nacionales de la FSTMB revirtieran el apoyo otorgado inicialmente a un Plan que atentaba directamente contra sus intereses materiales. El descontento de los trabajadores mineros ante el compromiso político adoptado por la dirigencia nacional comenzó expresándose en una radicalización de los niveles de dirección local, donde surgían nuevos grupos de izquierda y el trosquismo parecía recuperar su antiguo ascendiente. Y los líderes de la FSTMB, enfrentados a la presión de sus bases y amenazados por la creciente influencia de las élites rivales dentro del movimiento, se vieron obligados una vez más a encabezar la resistencia de los trabajadores mineros frente al esfuerzo desarrollista del gobierno.

La espiral de conflictos que se desarrolló a partir de entonces terminaría bloqueando en la práctica la aplicación del Plan para la "racionalización" de la COMIBOL: el veto

sindical sobre los proyectos de reforma de la minería pública continuaba siendo efectivo. La pugna entre el gobierno y los sindicatos durante el segundo mandato de Paz Estenssoro estuvo marcada de hecho por una violencia sin precedentes, y culminó en 1963 con una de las huelgas más prolongadas de la historia del sindicalismo minero boliviano. Para medir la dimensión que había adquirido el enfrentamiento entre las dos fuerzas que articularon la alianza revolucionaria diez años antes basta recordar la declaración política del XII Congreso Minero, celebrado en diciembre de 1963, que no sólo declaró a Paz Estenssoro «traidor a los objetivos de la Revolución», sino que equiparó sin matices su gobierno a aquéllos de la odiada "Rosca" oligárquica.

La izquierda obrera, sin embargo, continuó intentando hasta el último momento evitar una ruptura abierta con el partido, y sólo cuando Paz Estenssoro anunció en 1964 su decisión de sucederse a sí mismo apoyándose en las FF.AA. y marginando a la COB, el sector obrero retiró a todos sus delegados de izquierda de la Convención Nacional del MNR y anunció al fin la creación de una nueva formación política izquierdista encabezada por Juan Lechín: el **Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN)**. También Siles Zuazo rompió entonces con el "líder" e inició una actividad opositora, pero la implosión final del MNR no podría dar ya lugar al desarrollo de un nuevo sistema de partidos. Sólo unos meses después, el general René Barrientos, candidato a la vicepresidencia con Paz Estenssoro, inauguraría con un golpe de estado dos largas décadas de gobiernos autoritarios.

CAMPESINOS, MINEROS Y MILITARES

La incapacidad de los gobiernos movimientistas para obtener la cooperación de las organizaciones obreras existentes, agrupadas en torno a un sector minero sobre el que se cargaron los mayores costes de los sucesivos ensayos de política económica, se reflejó, como hemos visto, en una espiral de conflictos que fue acelerándose a medida que los problemas del desarrollo se revelaban en toda su dureza y complejidad. La redistribución hacia arriba de los magros recursos generados por COMIBOL que necesitaban las élites del estado para la inversión en desarrollo tuvo que enfrentar desde el principio la oposición frontal de los sindicatos mineros, y el único camino que les quedó abierto a los gobernantes del MNR fue tratar de quebrar su resistencia. Esto fue lo que intentaron primero Siles a partir de 1957 y después, con mayor intensidad, Paz Estenssoro entre 1960 y 1964. Ninguno de los dos alcanzó su objetivo, y *las organizaciones sindicales de las minas permanecieron intactas, conservando su poder de veto corporativo sobre las políticas gubernamentales en el sector estratégico de la economía nacional.*

Para contrarrestar los efectos negativos sobre la estabilidad política de la defección de los poderosos sindicatos mineros, los líderes del tronco central del MNR ensayaron a partir de 1957 una serie de movimientos que tendrían enormes consecuencias para el desarrollo futuro del país y para la historia de su movimiento obrero. Sus dos apuestas principales en este sentido fueron *la reconstrucción del ejército y la consolidación del apoyo de los campesinos beneficiados por la reforma agraria* (Malloy, 1989: 369 ss.). La reconstrucción del ejército adquirió un fuerte impulso a partir de 1957. Durante el segundo gobierno de Paz Estenssoro, los militares intervinieron crecientemente en las luchas regionales y en las disputas entre caudillos campesinos, y fueron ocupando un lugar cada vez más decisivo en la ejecución del programa desarrollista del gobierno. Por otro lado, la Reforma Agraria había convertido al campesinado en un elemento conservador, interesado ante todo en preservar los beneficios ya obtenidos, y los gobernantes pudieron transformar sin dificultad el recién adquirido derecho al sufragio de los nuevos ciudadanos campesinos en un voto "cautivo", y es ello lo que explica que entre 1956 y 1964 sus candidatos obtuvieran invariablemente alrededor del 85% de las papeletas electorales (Whitehead, 1991: 547).

Sin embargo, la aproximación del partido gobernante a las grandes mayorías campesinas encontró unos límites insuperables en la *debilidad institucional* del aparato del

MNR, continuamente paralizado por las luchas entre sus distintas facciones, y en la *fragmentación del universo agrario boliviano*. Más allá del voto masivo a cualquiera fuera el candidato oficial, los vínculos entre el MNR y los campesinos se redujeron en efecto al establecimiento de un frágil sistema de *mediaciones prebendales*, que ligaban a los líderes nacionales del movimiento con los distintos caudillos campesinos locales a través de unas redes clientelares enormemente volátiles. Así, no sólo no se produjo una institucionalización del apoyo campesino al movimiento, sino que las crecientes divisiones en el seno de este último tendieron a agravar conflictos ancestrales heredados por varias colectividades campesinas, alimentando un buen número de enfrentamientos armados entre milicias que respondían al liderazgo una miríada de caudillos locales. En estas condiciones, los gobernantes tuvieron que recurrir cada vez con más frecuencia a la intervención directa del ejército para mediar en los conflictos locales. *El resultado fue que las FF.AA., reconstruidas y modernizadas con la ayuda de los EE.UU., terminaron siendo la única institución nacional capaz de vincularse de un modo efectivo con el campesinado*. Sus oficiales, además, canalizaban buena parte de los fondos de *US Aid* para el desarrollo rural, y aventajaron fácilmente a los caudillos movimientistas en el uso de las mediaciones prebendales en el agro.

La clave del creciente papel político de los militares, que culminó con la nominación del Barrientos como acompañante de fórmula de Paz Estenssoro para las elecciones de 1964 y en el golpe de estado de noviembre del mismo año, no debería buscarse por lo tanto en las enseñanzas de la Escuela de las Américas, sino en los determinantes internos de la dinámica política boliviana, en los grandes escollos que enfrentaron los sucesivos gobiernos movimientistas que intentaron institucionalizar un orden civil estable capaz de reemplazar al viejo parlamentarismo oligárquico⁸³. Por un lado, la solidez de las estructuras comunitarias del sindicalismo minero y la crisis secular del sector exportador les negó la posibilidad tanto de desmovilizar a las organizaciones sindicales preexistentes como de cooperar con ellos sobre la única base factible dada la ausencia de una historia compartida y de vínculos sólidos entre

⁸³ Aquí se dio siempre una gran importancia en la explicación del golpismo al adoctrinamiento de los oficiales bolivianos en la doctrina de la "seguridad nacional" en la Escuela de las Américas. Es cierto desde luego que durante el último período del MNR los militares bolivianos, que dependían por completo de la ayuda de EE.UU., se habían convertido en colaboradores activos y bien dispuestos de la estrategia de seguridad hemisférica del vecino del Norte. También que en 1963 Bolivia tenía en su pequeño cuerpo de oficiales más graduados de la Escuela de las Américas que cualquier otro país latinoamericano. Sin embargo, en este como en la gran mayoría de los casos, las causas de la intervención militar en política -incluso del sentido de su intervención- deben buscarse ante todo en circunstancias ajenas a las características o a la dinámica interna de la institución armada. Véase para esto Huntington (1990 [1968]), esp. pp. 175 ss.

las élites partidarias y los sindicatos: la satisfacción de sus demandas materiales inmediatas. Por otro, la fragilidad inicial y la progresiva desintegración del aparato partidario, desgarrado por las pugnas entre una derecha anti-sindical y una izquierda atada a los intereses mineros, impidió a los gobiernos civiles organizar de un modo efectivo a las grandes mayorías campesinas hasta entonces excluidas de la política.

Si se tiene en cuenta el relato anterior resultará muy fácil apreciar los profundos elementos de continuidad que incorporó el golpe de estado de noviembre de 1964. En primer lugar, la política de represión sistemática que inició entonces el general Barrientos hacia los grupos obreros -si bien no el paroxismo de violencia que signó desde muy pronto sus relaciones con los mineros⁸⁴- era en realidad *el único resultado esperable dada la estructura de "suma cero" del juego que se había establecido entre las organizaciones sindicales de la minas y los gobernantes civiles del MNR*. El "disciplinamiento" de la mano de obra, las reducciones en los salarios y los despidos previstos por el Plan Triangular para hacer de COMIBOL una empresa rentable serían impuestos a partir de entonces *manu militari*. *La ocupación militar de las minas en 1965 fue simplemente el único instrumento eficaz que encontró el estado boliviano para hacer frente al veto sindical sobre sus estrategias de desarrollo económico.*

En segundo lugar, la formalización de la alianza entre las élites estatales y los campesinos de la reforma agraria en el "pacto militar-campesino", renovado cada año con la firma del Presidente militar y los representantes de la central vertical campesina, no fue sino la conclusión lógica de las fallidas estrategias de consolidación política que había ensayado el MNR. *La coalición de gobierno instalada a partir del golpe militar de 1964 sería exactamente la misma que habían intentado establecer sin éxito los gobernantes del MNR después del anuncio del Plan de Estabilización de 1957*: simplemente, la desintegración paulatina del movimiento político que había encabezado la revolución de 1952, iniciada en

⁸⁴ En septiembre de 1965 unas doscientas personas murieron en tres días de lucha entre las milicias mineras y el ejército en Llallagua, Siglo XX y Catavi. Sin embargo, el episodio más brutal y el que mejor revela la actitud del régimen fue sin duda la masacre de San Juan: una intervención militar cuidadosamente planeada, con amplio despliegue de bazookas y ametralladoras, que asesinó en la noche del 23 de junio de 1967 a al menos 87 mineros, incluyendo mujeres y niños, mientras celebraban la entrada del Invierno bebiendo y bailando alrededor de las fogatas en las calles de Siglo XX, en la víspera de una reunión clandestina de los dirigentes de la FSTMB. No fue, por el número de víctimas, la mayor matanza en la violenta historia de los mineros de Bolivia, y nunca se había conocido algo comparable a la vesania de aquel ataque indiscriminado y premeditado contra hombres dormidos o borrachos.

los primeros desgarramientos por la derecha⁸⁵ y culminada con la oposición frontal tanto de Siles Zuazo como de Juan Lechín a la tercera candidatura presidencial de Paz Estenssoro y en la formación de un nuevo partido movimientista en la izquierda, había convertido sin más a las FF.AA en la única institución nacional capaz de garantizar la continuidad del programa desarrollista de las élites civiles. Sólo ellos disponían de los recursos necesarios para agrupar y gobernar sobre la coalición social anti-sindical que quisieron construir Siles Zuazo y Paz Estenssoro: las clases medias urbanas, abrumadas por el desorden posrevolucionario y la omnipresencia de las milicias obreras y las grandes mayorías de campesinos satisfechos.

⁸⁵ La ruptura más seria se produjo en 1960, cuando Walter Guevara, el cuarto de los grandes caudillos del MNR, rompió con el partido y se presentó a las elecciones al frente del Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico (MNR-A), que poco después se transformaría en el Partido Revolucionario Auténtico (PRA). Ya en enero de 1953, sin embargo, varios dirigentes del MNR habían organizado un golpe de estado fallido para "librar al presidente de la influencia comunista".

LOS RESULTADOS:
LAS RAZONES DEL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO

A lo largo de este capítulo he pretendido delinear, sin duda con pinceladas muy gruesas, los desarrollos histórico-estructurales que deberían permitir entender la dinámica del juego socio-político en el que el movimiento obrero boliviano desarrolló el *repertorio de estrategias* y las *estructuras organizativas* que constituyeron el núcleo de la herencia que recibiría al inicio de la década de los 80. En este epígrafe final pretendo resumir los ejes principales del relato, agrupando los factores que a mi entender resultan suficientes para dar cuenta de los dos rasgos que más han llamado más la atención a los estudiosos de su historia: el persistente *radicalismo* de sus acciones frente al estado, y su arraigada *tradición sindicalista*. Intentaré, en suma, aclarar en qué sentido esas características definitorias del movimiento obrero boliviano pueden explicarse como *adaptaciones racionales a la dinámica del juego, a la distribución de restricciones y recursos, a las estructuras de oportunidades* que enfrentaron los liderazgos sindicales y los trabajadores bolivianos durante las etapas de formación y consolidación de sus organizaciones.

En primer lugar, he otorgado un espacio importante en el relato a la descripción de la *estructura económica* del país y a los límites de su *modelo de acumulación*, que deberían entenderse como *parámetros* que fijaron el rango de las alternativas disponibles para *cualquier* actor social o político. La característica definitoria del caso boliviano a este respecto es sin duda que el país *mantuvo inalterada a lo largo de todo el proceso de formación y consolidación del movimiento obrero su dependencia absoluta de un sector primario-exportador centrado casi exclusivamente en la producción minera*. Es cierto desde luego que el sector exportador de materias primas siguió cumpliendo un papel clave en los países latinoamericanos que alcanzaron un mayor grado de industrialización en la posguerra, proveyendo a la economía de divisas vitales y ocupando en realidad el lugar que los manuales otorgan a la industria de bienes de capital⁸⁶, pero también lo es que la industrialización masiva de sus economías generó en varios países de América Latina unos escenarios sociopolíticos *nuevos*, promoviendo el surgimiento de nuevos actores y fortaleciendo o debilitando a los ya existentes, y que la transformación estructural de las poblaciones obreras

⁸⁶ Ver por ejemplo Sunkel y Paz (1970).

y las nuevas oportunidades para el establecimiento de alianzas con las élites del estado y con otros sectores sociales produjeron entonces profundas quiebras en la evolución histórica de sus movimientos obreros.

Es un hecho suficientemente conocido que el desarrollo inicial de proceso de "industrialización sustitutiva" permitió en varios países latinoamericanos la emergencia y el mantenimiento de gobiernos reformistas que cooperaron con las organizaciones sindicales preexistentes o crearon otras nuevas, incorporando verticalmente a grupos de trabajadores de reciente creación en el sistema político. Pero en todos los regímenes la relación entre las élites del estado y el movimiento obrero estuvo basada típicamente en alguna relación de intercambio: los políticos reformistas ofrecieron entonces diversos incentivos materiales y organizativos a los trabajadores a cambio del apoyo que necesitaban para consolidar sus gobiernos⁸⁷. Un dato fundamental para explicar estas variantes periféricas de aquel "compromiso de clase" que sustentó la estabilidad de las democracias europeas después de 1945, fue sin duda el hecho de que *las demandas distributivas del movimiento obrero resultaron funcionales para unos modelos de acumulación que comenzaron a el crecimiento en la expansión del mercado interno* para bienes de consumo masivo, en la que se ha dado en llamar fase "fácil" de la industrialización sustitutiva⁸⁸. Aquél dinamismo económico autocentrado redujo en todos los casos durante períodos variables la violencia de los "trade-offs" entre acumulación y consumo, tan característicos de las economías periféricas, abriendo el espacio para el desarrollo de un juego cooperativo entre los actores de la sociedad industrial emergente bajo la mediación política de las élites reformistas civiles o militares.

⁸⁷ Puede encontrarse un resumen breve y muy útil de alguna de las conclusiones de la abundantísima literatura sobre el tema en Calderón y Jelin (1988), pp. 7-18.

⁸⁸ El paso a un segundo estadio definido por una necesidad de profundizar el proceso de industrialización que demandaba una atracción masiva de inversiones extranjeras y a la vez un drástico recorte de las demandas salariales y por bienestar de los grupos obreros para promover la acumulación interna de capital, habría bloqueado la viabilidad de los regímenes populistas, inclinando a los grupos dominantes hacia una exclusión autoritaria de las organizaciones del trabajo. Esta es, por supuesto, la teoría de O'Donnell, que ha sido últimamente criticada por el teleologismo implícito en su explicación funcional. Puede, sin embargo, mantenerse una versión débil de la teoría: no se trataría de que los regímenes autoritarios excluyentes surgieran *porque* se agotara fase "fácil" de la industrialización sustitutiva, sino que ese agotamiento, al agudizar las contradicciones entre acumulación y distribución, redujo las oportunidades de los modos populistas haciendo a los gobiernos excluyentes más compatibles con las exigencias del desarrollo económico dependiente. Habría, por lo tanto, una relación tendencial o "afinidad electiva" entre la fase "difícil" y los regímenes burocrático-autoritarios. Véase para esto Mouzelis (1986), pp. 191-194. En cualquier caso, el lugar central que viene otorgándose últimamente a los factores propiamente políticos en la explicación de la dinámica socio-política de América Latina no elimina absoluto la relevancia los factores más "estructurales" destacados, entre otros, por O'Donnell.

Nada de esto ocurrió en Bolivia. La historia económica del país andino durante las etapas de formación y consolidación de su movimiento obrero fue, como vimos, radicalmente distinta. Aquí la estructura productiva apenas sufrió alteración alguna en las tres décadas que siguieron a la Gran Depresión, y este hecho tuvo de entrada dos consecuencias fundamentales para la evolución de las organizaciones obreras. En primer lugar, *los trabajadores de las minas, insertos en comunidades fuertemente solidarias y con una gran capacidad de movilización para la acción colectiva continuaron ocupando el lugar estratégico en la economía nacional en mucha mayor medida que los trabajadores de cualquier "enclave" de exportación en los países vecinos relativamente industrializados y/o con una estructura exportadora más variable o diversificada. En segundo lugar, dado que no hubo industrialización nacional significativa, la población minera aparecía de entrada exclusivamente como competidora del estado en la distribución de los excedentes generados por la minería nacionalizada, y en ningún caso como mercado potencial para la producción manufacturera de una industria nacional inexistente.*

Pero el sector mono-exportador boliviano tenía, además, unas características muy específicas. Ante todo, atravesaba desde la Gran Depresión de entreguerras una *crisis secular de productividad que cerró la posibilidad de construir sobre la industria minera nacionalizada un modelo de crecimiento mono-exportador viable, siquiera en el corto plazo.* De este modo, al continuar dependiendo tanto la salud de las finanzas públicas como los recursos de inversión para el conjunto de la economía de la evolución de los excedentes de un sector minero muy poco rentable, *el juego distributivo entre los actores políticos del estado y los trabajadores mineros adquirió una apariencia de "suma cero".* En este punto hay que recordar los orígenes diversos y la ausencia de una vinculación sólida entre los sindicatos y el MNR: la ausencia de cualquier *compromiso* sólido, la falta de *confianza* y *certidumbre* sobre las intenciones mutuas en el medio plazo dificultaron sin duda el que los trabajadores aceptaran sacrificios inmediatos. Pero, en cualquier caso, la profundidad de la crisis minera hacía muy difícil saber si las reducciones salariales y los programas para "rehabilitar" COMIBOL contenían alguna esperanza de mejora en el futuro o eran tan sólo intentos de extraer en el corto plazo la mayor proporción posible del producto a sus trabajadores sobre la hipótesis, formulada explícitamente por Paz Estenssoro al inicio de su mandato, de que el "ciclo del estaño" se había agotado irremediablemente.

Si era verdad que aquéllo estaba condenado a ir muriendo, o si su evolución dependía

sólo de factores externos impredecibles -auges o descensos coyunturales en los precios-, carecía de sentido calcular las ventajas que se obtendrían más adelante a cambio de las renunciadas presentes. Pero, además, como en el presente se trataba de una economía *verdaderamente pobre*, las partes parecían tener amenazados sus intereses esenciales: tenían razones para sentir que lo que estaba en juego era, por un lado, la defensa de la unidad social, de la posibilidad misma de obtener los recursos mínimos para construir un orden político; por otro, la supervivencia misma de la colectividad obrera, el mantenimiento de unos salarios próximos ya al nivel de subsistencia y de unos empleos sin alternativa. En este contexto, todas las decisiones tendían a adquirir un espíritu o un carácter *verdaderamente extremista*, y cualquier solución negociada parecía ser, tanto para las élites del estado como para las comunidades mineras, más intolerable que la escalada del conflicto. Esta continuaba al menos prometiendo la posibilidad de eliminar en algún momento la resistencia del adversario.

Pero dada su fuerte capacidad para la acción colectiva y su posición estratégica en la economía nacional, las poderosas organizaciones mineras ejercieron una abrumadora hegemonía en el seno de la COB, que *mantuvo desde su fundación y durante todo el período una dependencia absoluta de los recursos de los sindicatos de la FSTMB*. Los estrechos límites estructurales que enfrentaron en Bolivia las estrategias industrializadoras y el fracaso de los proyectos de diversificación del sector exportador, anularon cualquier posibilidad de construir *un liderazgo obrero alternativo*. La principal consecuencia de esta dependencia, expresada claramente en el solapamiento de las dos organizaciones, fue desde luego que los intereses y las oportunidades de acción de los sindicatos mineros determinaron por completo las estrategias de la central nacional. *La COB nació y se consolidó inevitablemente como una organización minera*. La acción colectiva de la población de los campamentos era su única fuente de poder real, y *sus estrategias de acción fueron el reflejo inevitable de su dependencia de los recursos de un grupo de trabajadores con una gran capacidad de presión corporativa y condenado a competir con el estado en un juego de conflicto puro*. El resto de los sectores de obreros y asalariados urbanos afiliados a la COB apoyarían las luchas mineras o negociarían con los gobiernos en función de las oportunidades que percibieran en cada coyuntura, pero nunca serían capaces de alterar la correlación de fuerzas en el seno de la central única ni de ofrecer una base suficiente para la consolidación de un liderazgo sindical alternativo. El corto vuelo sindicalismo "amarillo" encarnado en el "Bloque Reestructurador"

de la COB fue una prueba muy elocuente de ello, pero también lo fueron los constantes virajes estratégicos, aparentemente absurdos, de los dirigentes sindicales "auténticos". Como hemos visto, tras apoyar inicialmente todos los programas de desarrollo nacional del gobierno, la cúpula de la COB se veía obligada una y otra vez a "plegarse" de inmediato a la voluntad de las bases mineras y a encabezar sus acciones de resistencia, vetando a la postre la aplicación de las mismas medidas que había aprobado poco tiempo antes.

La hegemonía absoluta de las organizaciones mineras permite también explicar la consolidación del conjunto específico de *reglas formales e informales* que enmarcarían los *procesos de toma de decisiones* dentro de la red sindical boliviana. La identificación entre las estructuras de la FSTMB y la COB trasladó al seno de la organización nacional los procedimientos de toma de decisiones característicos de los sindicatos mineros, basados en los mecanismos de la *democracia directa comunitaria*: el *asambleísmo* minero. Aquella extensión de las prácticas asamblearias, reflejada en la enorme fuerza normativa que fue adquiriendo la *ideología basista* en toda la red sindical, tuvo desde luego una influencia directa en la *selección de estrategias* por parte de la cúpula de la COB. La democracia directa provocó, en efecto, una notable rigidez a la dirección nacional del movimiento, al reducir enormemente su espacio para maniobrar y negociar en el escenario nacional en función de los intereses estratégicos de la organización en las sucesivas coyunturas políticas⁸⁹, y el conspicuo *espontaneísmo* del movimiento obrero boliviano -derivado directo de la democracia comunitaria minera- alimentó sin duda su tantas veces mentado "*maximalismo*" -su radicalismo reivindicativo-, dado que eliminó la capacidad de los liderazgos para contener las demandas de unos trabajadores que tuvieron siempre demasiados motivos de queja. Parece indudable que el creciente repliegue de la COB hacia los sindicatos locales de los campamentos a medida que

⁸⁹ La explicación que ensaya García (1966), en un artículo por lo demás muy útil, de la ruptura entre el MNR y los sindicatos, basada en la influencia de «ideologías alienadas» y de un «liderismo artificial» que empujó al movimiento hacia una «orientación distribucionista», tiene por ello muy poco que ver con la realidad. Para empezar, la influencia de las «ideologías -marxistas- alienadas» no explica en absoluto la fuerte lealtad *simultánea* hacia dirigentes locales como Pimentel, Escóbar -miembros del Partido Comunista-, César Lora -trosquista- o los diversos activistas del MNR, dado que el compromiso de los mineros era exclusivamente hacia *individuos* que habían demostrado valor y dedicación en el trabajo sindical (Martín, 1984: 402). En cuanto a los liderazgos "artificiales", éstos no tenían ninguna posibilidad de consolidarse en el contexto comunitario de los sindicatos locales, que eran la base del poder de la FSTMB. La capacidad de los dirigentes -de la "burocracia sindical", en términos de un propagandista del nacionalismo derechista como Bedregal- para dirigir el conflicto social en función de sus intereses personales o de los de su facción política, en efecto, fue siempre mínima. Robert Chapman, gerente de la mina Catavi, se quejaba ya en 1958 de las dificultades que encontraba para negociar con los dirigentes sindicales, dado que éstos «en ningún momento pueden imponer sus decisiones» a las bases. Cit. por Whitehead (1980), pp. 1492-1493.

avanzaba la espiral de enfrentamientos con los gobiernos del MNR sólo pudo dificultar la estructuración vertical de los procesos de toma de decisiones en la organización nacional, fortaleciendo por el contrario las tendencias asamblearias, que se verían reforzadas aún más durante las largas etapas de clandestinidad que vivieron los sindicatos bajo los regímenes militares.

En realidad, una buena parte de la historia contemporánea de Bolivia puede leerse como una disputa violenta entre el estado y los grandes sindicatos de la FSTMB por la distribución de los excedentes de la minería, dado que *la solidez de la acción colectiva minera y la escasez de los recursos generados por el modelo mono-exportador boliviano* estuvieron en el origen tanto de *la extrema virulencia que adquirió siempre la lucha clases en Bolivia*⁹⁰, como de la "centralidad obrera" que fue para René Zavaleta la característica principal y distintiva de la dinámica política del país andino⁹¹. De este modo, si mi interpretación es correcta, la abrumadora presencia del movimiento obrero en la escenario político boliviano no tuvo lugar *a pesar de* el subdesarrollo económico del país, sino *debido a* las peculiares características de éste⁹². La apariencia "moderna" de la dinámica política boliviana sólo resulta así paradójica en una lectura muy superficial, porque *la fortaleza de su "sociedad civil" representada en la COB y la visibilidad de sus luchas de clase no fueron sino el producto concreto y limitado de la perpetuación de una estructura productiva particularmente "tradicional"*.

La cohesión comunitaria, la consiguiente autonomía organizativa en el nivel local, y

⁹⁰ Esta peculiaridad boliviana tuvo por supuesto el efecto de inflamar la imaginación de varios sociólogos e historiadores extranjeros en busca de terrenos fértiles para la Revolución. La obra de Dunkerley (1987) sobre la historia contemporánea de Bolivia se resiente en general de este romanticismo épico.

⁹¹ El tema de la "centralidad obrera" recorre toda la obra de René Zavaleta, que dedicó un brillante artículo a explicar por qué «en pocos lugares en el mundo es tan acabada la *centralidad* obrera como en la implantación de lo nacional-popular en Bolivia» (Zavaleta, 1983: 222, cursiva en el original).

⁹² El contraste entre el subdesarrollo económico boliviano y la relativa "modernidad" de su dinámica política en el período contemporáneo, dada por la fortaleza de su "sociedad civil" y en particular de las organizaciones obreras, ha sido puesta de relieve por la mayoría de los científicos sociales del país. Horst Grebe, por ejemplo, afirma que a pesar de que «de acuerdo con indicadores convencionales, Bolivia suele clasificarse como uno de los países latinoamericanos más atrasados (-) la polaridad social muestra una estructura relativa *avanzada*» (Grebe, 1986: 13, el énfasis es mío). Portantiero, por su parte, afirmaba que su discusión sobre la pertinencia del concepto de "hegemonía" para el estudio de la problemática política del Cono Sur podía aplicarse también a la realidad boliviana, dado que «pese a que no participa del mismo peldaño de desarrollo económico que el resto de los países en consideración, la densidad del sistema político boliviano y la influencia que dentro de él ejerce el movimiento obrero acerca mucho más a Bolivia, para el sentido de estas notas, a Argentina y Chile que a los países centroamericanos, por ejemplo, o a otros países andinos» (Portantiero, 1985: 279).

la situación estratégica de los sindicatos mineros, datos todos derivados de la peculiar estructura de la economía exportadora del país, son también un punto de partida indispensable para explicar el carácter dominante que adquirieron en el movimiento obrero boliviano las *estrategias de acción directa sobre el estado*. Un colectivo de trabajadores con un menor poder económico y/o mayores dificultades para organizarse como grupo de interés hubiera sido sin duda mucho más propenso a orientarse hacia la *arena político-partidaria*. La transferencia de los recursos del movimiento obrero hacia la arena política podría haber sido en éste último caso tal vez una consecuencia *necesaria* de la debilidad sindical en la arena económica. Pero esta relación bi-unívoca no puede sostenerse en el sentido inverso: son demasiados los ejemplos de grupos de trabajadores con un gran poder en la arena económica y dotados de una fuerte capacidad para la acción colectiva que han *optado* por privilegiar la acción política a través de los partidos. Para aclarar el sentido de la estructura *sindicalista* que adquirió el movimiento obrero boliviano será necesario, por lo tanto, abandonar la descripción de los parámetros económicos del juego y tomar en cuenta otros conjuntos de determinantes de las estructuras de oportunidades que enfrentaron los trabajadores y los liderazgos en las etapas de formación y consolidación de las organizaciones obreras. En concreto, deberemos analizar el tipo de *sistemas políticos* en que actuaron para promover sus intereses, y las características específicas de los *actores políticos* con que establecieron relaciones de conflicto y cooperación⁹³.

Para apoyar esta afirmación resulta útil introducir en primer lugar una distinción sencilla entre *regímenes políticos democráticos y no democráticos*. La vigencia de la democracia representativa durante los períodos en que el movimiento obrero se forma y consolida sus organizaciones suele llevar a los sindicatos a establecer vínculos estrechos con

⁹³ Estas variables, desde luego, han sido tradicionalmente muy descuidadas por los estudiosos del movimiento obrero. Lo cierto es que el desprecio por el análisis del sistema y de los actores políticos tiene profundas raíces teóricas y una larga historia. El neo-evolucionismo de las teorías de la "modernización" se despreocupó del problema, en tanto que pretendía que el proceso unilineal de la modernización afectaba simultáneamente a las esferas política, económica y cultural: las sociedades que trepaban por su escalera acendente irían inevitablemente adoptando, sin mayores problemas, las estructuras económicas, las pautas culturales y las instituciones políticas de sus parientes más avanzados. La réplica neo-marxista y/o dependentista, sin embargo, tampoco prestó ninguna atención a los problemas propiamente políticos del proceso histórico latinoamericano. Un buen ejemplo de este déficit es el modo en que se abordó el funcionamiento de las instituciones liberal-parlamentarias tempranamente importadas por los nuevos estados latinoamericanos, consideradas como un epifenómeno, una mera fachada que no afectaba a las estructuras de dominación autoritarias y profundamente antidemocráticas que prevalecían en estas sociedades, olvidándose así las profundas consecuencias que tuvieron sus características diversas para la evolución histórica de las diferentes repúblicas.

el ámbito político-partidario: la constitución de partidos políticos fuertes es un resultado inevitable del funcionamiento continuado de la democracia representativa, y aunque ello no tiene por qué desembocar desde luego en el abandono de la acción directa por parte de los actores sociales sí convierte a los partidos políticos en un canal *necesario* para encauzar sus presiones sobre el estado. Cabría entonces proponer como regla general que en contextos donde las reglas de la democracia electoral tienen una importante vigencia, estructurando durante períodos prolongados el juego socio-político, los partidos políticos acaban siendo un instrumento fundamental del movimiento obrero, y que la vinculación entre partido y sindicato tiende a ser en ellos muy estrecha⁹⁴.

En el caso boliviano *el parlamentarismo oligárquico estuvo marcado por una inestabilidad crónica durante todo el proceso formativo del movimiento obrero*. Como vimos en el segundo epígrafe de este capítulo, el fuerte declive de los beneficios de la gran minería del estaño iniciado con la Gran Depresión incrementó la rigidez del sistema político oligárquico, que fue incapaz de abrirse a la participación política de los grupos emergentes. Los "barones del estaño" sometieron a una presión asfixiante al sistema, vetando cualquier movimiento hacia la *autonomía* del estado -que debía haberse iniciado con la imposición de algún gravamen significativo sobre los beneficios de las tres empresas que controlaban el 90% de las exportaciones bolivianas, y con la protección de los derechos asociativos de sus trabajadores-, y *fueron los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas y no los partidos políticos quienes iniciaron en 1936-39 y en 1943-46 los primeros ensayos reformistas*.

Sólo durante los tres años que mediaron entre los regímenes militares de entreguerras el movimiento obrero boliviano pareció iniciar una evolución "clásica". Entre 1939 y 1943, el PIR, el primer y último partido marxista de masas de la historia de Bolivia, afiliado a la Comintern y estrechamente ligado desde sus orígenes a la organización de los primeros sindicatos, se convirtió en el canal de expresión de las demandas obreras dentro de un sistema político de *representación restringida* en cuyo seno el voto de los trabajadores de las minas tenía un enorme peso, y los sufragios masivos de los mineros en favor de los candidatos marxistas explican en realidad la mayor parte del espectacular ascenso electoral que experimentó el partido en aquéllos años. Pero este desarrollo fue cortado de raíz por los acontecimientos que se sucedieron a partir del golpe de estado de Villarroel en 1943. Como

⁹⁴ Este es sin duda el caso los sindicatos mineros del norte de Chile.

vimos, el PIR colaboró con los partidos oligárquicos en la oposición al gobierno militar y tras el linchamiento de Villarroel se incorporó a un gobierno de "reconstrucción democrática" que nunca tuvo espacio para emprender la política de reformas que le hubiera permitido consolidar sus vínculos con los sindicatos. Por el contrario, la persistente crisis minera endureció la actitud de los "barones del estaño", que fueron capaces de implicar una vez más al gobierno en una brutal política represiva -"masacres" mineras incluidas-, a consecuencia de la cual el PIR, que poco después sería sometido a una persecución de "guerra fría", fue repudiado para siempre por los sindicatos que tanto había contribuido a crear. Tras el suicidio del PIR, los sindicatos mineros jugaron la única carta que disponían para influir en la arena política nacional: comenzaron a colaborar con el núcleo restante de la oposición anti-oligárquica de clase media, apoyando a la camarilla del MNR en sus acciones conspirativas con los sectores nacionalistas del ejército, y el resultado de aquella alianza fue que la participación masiva de las organizaciones mineras convirtió la intentona golpista de abril de 1952 en una auténtica revolución social.

Las vicisitudes del sistema político boliviano en el período formativo del movimiento obrero, por lo tanto, pueden explicar por qué los sindicatos mineros terminaron vinculándose con un grupo político *preexistente*, con un origen independiente y ajeno por completo a las luchas obreras, que enarbolaba una ideología policlasista enormemente vaga, y que ante todo estaba caracterizado por una *gran diversidad interna* y un *escasísimo desarrollo orgánico*. En estas condiciones, los lazos que estableció el MNR con las organizaciones sindicales fueron desde el principio muy laxos, puramente instrumentales, y no debe extrañar que se disolvieran rápidamente y por completo con las primeras disputas distributivas tras del triunfo revolucionario. Pero la abigüedad ideológica y la debilidad institucional del partido/movimiento, reducido en la práctica a una amalgama de caudillos y redes clientelares, hizo *posible* que la desintegración de la alianza con los sindicatos no se tradujera necesariamente en una ruptura *política*.

Las alternativas de acción de los sindicatos mineros en el seno del nuevo sistema político instaurado en 1952 permiten a su vez explicar por qué los líderes obreros *optaron* de hecho por no producir tal ruptura. El sistema político pos-revolucionario fue un sistema unipartidista en la práctica, y los dirigentes del movimiento obrero carecieron siempre de los recursos necesarios para alterar esa situación. Las fuerzas de oposición articuladas a nivel nacional no sólo eran muy minoritarias, sino que representaban opciones de derecha

contrarias a los intereses obreros: expresaban las demandas de "orden" de amplios sectores de una clase media que se sentía ahora amenazada por la ominipresencia de las milicias sindicales y por la entrada de las masas campesinas en la escena política nacional. *Resultaba imposible por lo tanto que el liderazgo obrero reconstruyera la alianza que había permitido romper el aislamiento de los campamentos mineros en el período de entreguerras.* Si entonces los trabajadores mineros habían podido movilizar a su favor los sentimientos nacionalistas de los sectores medios urbanos⁹⁵, después de 1952 los "excesos" de la revolución y la "anarquía" sindical comenzaron a convertirse en sinónimo de la "penetración extranjera", ahora "comunista", en un discurso nacionalista reaccionario que supo articular el temor a la pérdida del estatus tradicional sentido por una gran parte del electorado urbano que comenzó a entregar sus votos a la elitista **Falange Socialista Boliviana (FSB)** y al **Partido Revolucionario Auténtico (PRA)**, una escisión derechista del MNR.

Pero, aislado de los partidos de clase media, el movimiento sindical *no tuvo tampoco la oportunidad de construir una alternativa partidaria propia.* La Reforma Agraria y el establecimiento del voto universal habían producido una alteración radical del juego socio-político, provocando *la pérdida de la posición electoral privilegiada que habían tenido los mineros en el seno de la democracia de representación restringida* al inicio de la década de los 40, y ofreciendo a los caudillos del tronco central del MNR la posibilidad de capitalizar su capacidad decisoria en el proceso de distribución de tierras y el miedo a la colectivización para bloquear la posible vinculación de los dirigentes sindicales con el segmento mayoritario del nuevo electorado. A este respecto, el punto de inflexión más importante en las relaciones entre sector obrero del MNR y los campesinos fue tal vez el Plan de Estabilización de 1956: el Plan supuso un golpe brutal para los intereses de los asalariados -en especial los mineros- pero benefició en cambio a los nuevos propietarios agrícolas, que volcaron definitivamente su apoyo hacia la fracción gobernante del movimiento.

La acción colectiva de las comunidades mineras era un recurso formidable en manos de la izquierda y podía darle un gran poder de negociación en el seno del partido, pero la

⁹⁵ Esto a pesar de la nacionalidad boliviana de los propietarios mineros, dado que la creciente transnacionalización de las empresas estañeras hizo que los tres "barones" fueran percibidos por el conjunto de la población como agentes de los intereses foráneos. El papel de la "Rosca" minera como "vendepatria" y "agente del imperialismo" fue de hecho el tema estrella de la literatura nacionalista que se desarrolló a partir de la derrota en la Guerra del Chaco. Sobre la transnacionalización de las empresas mineras bolivianas y la compleja red de vínculos financieros que acabaron creando en todo el mundo, especialmente el grupo Patiño, puede consultarse Almaraz (1987 [1976]).

población obrera boliviana era una base muy escueta para lanzar una alternativa política a los dos grandes caudillos, Paz Estenssoro y Siles Zuazo. Esto permite explicar la clara preferencia del sector obrero por actuar como grupo de presión dentro del movimiento, esperando que llegara el turno presidencial del tercer caudillo de la revolución -Juan Lechín, líder de la COB-, y ensayando todos los equilibrios para evitar una ruptura abierta mientras las milicias sindicales que respondían a su liderazgo y los grupos armados leales a la fracción gobernante se mataban en los campamentos mineros. El nulo desarrollo orgánico del MNR hizo posible que esta situación agónica y absurda se mantuviera durante una década, hasta que Paz Estenssoro decidió en 1964 sucederse a sí mismo apoyándose en el ejército reconstruido con la ayuda norteamericana y marginando a Lechín y a la izquierda.

El proceso de *consolidación de un movimiento obrero sindicalista* puede entenderse, por lo tanto, como *resultado del creciente aislamiento corporativo de los sindicatos mineros en el sistema político posrevolucionario*. La imposibilidad de establecer alianzas con otros sectores sociales significativos hizo inviable cualquier estrategia político-partidaria, convirtiendo a la acción directa a través del sindicato en la única vía de expresión de las demandas obreras. Los *gobiernos militares* que se sucedieron a partir de la implosión definitiva del MNR en 1964 no hicieron sino *completar la transferencia de toda la actividad política del movimiento obrero hacia las organizaciones sindicales*. Los partidos de la izquierda pasaron a la clandestinidad y se limitaron a reproducirse dentro de los sindicatos mineros, las únicas organizaciones de la sociedad civil que fueron capaces de mantener abierto el espacio reivindicativo de las bases obreras a través de largo ciclo autoritario. Las pugnas por ocupar espacios dentro de los sindicatos y la ausencia de confrontaciones electorales favorecieron de paso un creciente *fraccionamiento* de los pequeños partidos de la izquierda, desvalorizándolos aún más a los ojos de las bases obreras al acentuar el contraste entre la "unidad de clase" garantizada por el comportamiento monolítico de las comunidades mineras y la "politiquería" encarnada en una miríada de "taxi-partidos" (Rivadeneira, 1984), eternamente divididos y dedicados a la promoción de los intereses particulares de sus núcleos dirigentes.

LA HORA DEL PODER OBRERO

Nuestros corazones, que estuvieron abiertos a los anhelos de tantos compañeros mineros, tantos trabajadores bolivianos y miles de hijos nuestros que soñamos todos juntos desde abril de 1952 con que "nuestro futuro sería de felicidad", sin que los treinta años transcurridos nos dejaran ver el horizonte, hoy vuelven a estremecerse con la cálida esperanza de que esta vez sí
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia

En Bolivia, al igual que en varios de los países de su entorno, la transición a la democracia coincidió en el tiempo con el estallido de una crisis económica general, que tuvo su origen en desarrollos profundos y de muy largo aliento, y que señaló en realidad el final de todo un ciclo de desarrollo: la quiebra definitiva del modelo de acumulación inaugurado con la Revolución Nacional de 1952¹. La universalidad de la crisis de los años ochenta, que ha marcado en todas partes un punto de inflexión sólo comparable al del período de entreguerras, debería prevenir de entrada contra la tentación de atribuir a los elementos *diferenciales* de la política económica que aplicó el gobierno autoritario de Hugo Bánzer a partir de 1971 la "responsabilidad" absoluta por los determinantes internos del hundimiento de la economía boliviana en los primeros años ochenta².

Pero es indudable que aquella política económica agravó enormemente los problemas heredados: el espurio "milagro económico" de los años setenta, en efecto, no sólo reveló con gran nitidez las fallas estructurales del modelo de acumulación, sino que contribuyó en mucho a producir el *escenario económico especialmente negativo* que constituiría la *diferencia*

¹ Ver, entre otros, Ardaya y Grebe (1986) y Grebe (1985, 1986).

² En los primeros ochenta estaba muy extendida la idea de que «la desorganización actual del sistema económico, monetario y financiero del país se gestó en realidad a comienzos de la década pasada, precisamente en el período en que Bolivia parecía vivir su mayor auge económico» (Grebe, 1983: 85). Una exposición más temprana de los efectos negativos de la política económica de la dictadura de Bánzer puede encontrarse en Vega (1980).

específica del caso boliviano dentro de la dinámica de la crisis regional. Será necesario, por lo tanto, señalar los rasgos básicos de la economía política del último período autoritario para evaluar la magnitud real de los desafíos que enfrentaron los actores del proceso de transición política, y en particular el movimiento obrero.

Por otro lado, también resulta indispensable retrotraer el análisis a los años 70 para describir brevemente la evolución política del "nuevo autoritarismo" boliviano, dado que la dinámica específica y los resultados de la transición democrática tampoco podrían explicarse sin atender a su peculiar legado. La exacerbación bajo la dictadura personalista del proceso de decadencia institucional que se había iniciado con la ruptura de la coalición revolucionaria de 1952, en efecto, permitirá entender la violencia con que se disolvió el poder del estado ante las primeras señales de la recesión económica para dar paso a un proceso de transición "abierto" marcado por una profunda incertidumbre, en el que las organizaciones sindicales alcanzaron una legitimidad sin precedentes y ganaron un monopolio casi absoluto en la representación de las demandas de cambio político.

La abrupta desintegración de las instituciones de gobierno del "Estado del 52" tras la experiencia regresiva del autoritarismo de los 70 elevaría así a un máximo histórico el poder de negociación de los sindicatos frente a las élites políticas. Pero los mismos desarrollos que convirtieron a la COB en el actor dominante del sistema político emergente produjeron cambios fundamentales en su entorno, situando a la organización ante un conjunto de oportunidades y desafíos radicalmente distinto de todo lo que había conocido en el pasado. La descripción analítica del *nuevo contexto estratégico* que enfrentaba el movimiento obrero en la hora de su poder ocupará así el último epígrafe de este capítulo.

EL LEGADO DEL AUTORITARISMO

EL "DESARROLLO" ESPURIO

Tras el triunfo del golpe de estado de agosto de 1971 el gobierno del coronel Hugo Bánzer arregló las cuentas pendientes del país con el capital extranjero, otorgando compensaciones por la reciente nacionalización de varias empresas³, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dió su visto bueno a una estrategia económica que quedó finalmente fijada en octubre de 1972 en el que habría de conocerse como *Plan de Estabilización con Desarrollo*. Aquel Plan contenía, a la par que un conjunto de políticas de estabilización de corte ortodoxo, el diseño de un esquema de crecimiento que otorgaba todas las facilidades a la inversión privada, nacional y extranjera. Iniciaba la creación de un entramado legal pensado para el desarrollo de un sector empresarial privado dinámico que debería, según el discurso oficial, cargar en adelante con lo principal del esfuerzo de desarrollo del país. Al capital privado, en efecto, «se le dieron todas las concesiones que le permitieran tener ganancias sustantivas que, a su vez, servirían para una reproducción ampliada del capital y un crecimiento económico sostenido» (Ugarteche, 1986: 108). El gobierno pretendía al parecer, tras la larga experiencia estatista del MNR y la dictadura de Barrientos e inmediatamente después del momento "cepalino" que vivió el país durante la breve etapa de populismo militar en 1969-1971⁴, *definir unas nuevas reglas del juego en la esfera económica que hicieran de la iniciativa y la ganancia capitalista privada el motor principal del desarrollo*.

³ Durante los gobiernos de los generales Ovando y Torres -septiembre de 1969-agosto de 1971- se nacionalizaron la Mina Matilde, las colas y desmontes de Catavi y las propiedades en Bolivia de la Gulf Oil.

⁴ Pueden verse las formulaciones contenidas en la "Estrategia" para el desarrollo nacional que se elaboró durante el gobierno del general Ovando con la participación de un grupo de intelectuales vinculados al paradigma estructuralista de la CEPAL y fuertemente influidos por los análisis de las escuelas de la "dependencia". La Estrategia identifica en la "dependencia" y la "marginalidad" los rasgos centrales de la sociedad boliviana; afirma que «la marginación de la parte mayoritaria de la población boliviana, la extrema concentración del ingreso y las características de enclave de las actividades dinámicas, impidieron al país impulsar un proceso de desarrollo hacia adentro por la vía de la industrialización sustitutiva de importaciones»; y concluye otorgando al Estado el papel de agente principal del desarrollo, en tanto que «debe cumplir una función dirigente, precursora y empresarial de tal suerte que aglutinado en torno a las mayorías nacionales, a quienes fundamentalmente debe representar, pueda provocar el desarrollo nacional». Ministerio de Planificación y Coordinación, *Estrategia socio-económica del desarrollo nacional*, La Paz, 1970, vol. I, pp. 31, 37 y 128. La bibliografía sobre el convulso período que vivió Bolivia bajo los gobiernos de Ovando y Torres en 1969-71 es muy escasa. Puede obtenerse sin embargo una visión global muy ajustada en Malloy y Gamarra (1987), pp. 41-70. Sobre el gobierno de Torres y el episodio de la Asamblea Popular existe una gran abundancia de trabajos fuertemente politizados, pero las lecturas más informativas son seguramente los trabajos de Gallardo (1972), Strengers (1992) y Knudson (1974).

Pero lo que ocurrió fue algo muy distinto. La actividad empresarial del estado, en efecto, no sólo no se contrajo durante el gobierno de Bánzer, sino que experimentó una notable expansión⁵, y en general el sector público emprendió una actividad inversionista muy fuerte, aportando aproximadamente dos tercios de la inversión total, y una política de gasto crecientemente expansiva. Finalmente, en el *Plan Quinquenal* de 1976 se asignó al sector público la responsabilidad por el 71% de la inversión, reconociéndose así *el papel central en la promoción del crecimiento económico que ya había asumido el estado "de facto" y por omisión*. El problema fue, desde luego, que pese a las facilidades otorgadas por el gobierno los empresarios locales no manifestaron interés alguno en invertir en la producción, y el país no recibió además ninguna inversión extranjera directa significativa. En estas condiciones, el régimen autoritario se vió forzado desde el principio a adoptar una práctica económica radicalmente contraria al discurso ideológico del *Plan de Estabilización con Desarrollo* y terminó sometiendo a éste a una severa corrección. De este modo, el gobierno "neoliberal" de Bánzer acabó produciendo, paradójicamente, una versión extrema del "estatalismo" heredado de la revolución social de 1952⁶.

La explicación de este fenómeno puede estar en parte en la *falta de confianza de los inversores potenciales en la capacidad del gobierno para garantizar el mantenimiento de las nuevas reglas del juego en el medio plazo*. Hay que tener en cuenta que Bolivia había sido siempre considerado un país de "muy alto riesgo" debido a su inestabilidad política crónica, y bien podría mantenerse que los empresarios consideraban pasajera la paz social bajo la dictadura de Bánzer, sospechando que las tensiones sociales acumuladas estallarían pronto de nuevo, como tantas veces en el pasado, con un resultado imprevisible. Sin embargo, tal vez más decisivo fuera el hecho de que a partir de la Revolución de 1952 *el estado se había convertido en el instrumento principal para la acumulación de capitales en el sector privado*, al que alimentó siempre con recursos captados del exterior o de las empresas públicas en forma de contratos y créditos. Cabe pensar por lo tanto que, más allá de cualquier cálculo sobre la situación futura del sistema político, a lo largo de los años setenta la "burguesía

⁵ En el período de gobierno de Bánzer se instalaron varias nuevas empresas estatales -refinería de petróleo, fundiciones de minerales, fábrica de aceite en Villamontes, ingenio azucarero de Bermejo, y alguna más- y se ampliaron otras -ingenio azucarero de Buabirá y fábrica de cemento en Sucre-. Véase Grebe (1983), p. 125.

⁶ El reforzamiento de la vertiente "estatal" del capitalismo boliviano durante el gobierno de Bánzer hace desde luego que resulte totalmente incongruente el calificativo de "neoliberal" que han aplicado varios autores a la política económica del régimen. Entre otros, Sandóval (1990), p. 14 y el mismo Ugarteche (1986), p. 47.

nacional" boliviana simplemente prefirió continuar viviendo al amparo de las transferencias de recursos estatales y siguió por lo tanto interesada en promover una intervención creciente del estado en la economía⁷. En tercer lugar, el fracaso del proyecto autoritario, expresado en la fuerte desinstitucionalización del sistema, hizo que el gasto público se convirtiera, como veremos en el siguiente epígrafe, en el único recurso político del gobierno.

CUADRO 3.1

Formación bruta de capital en los sectores público y privado y gastos corrientes del estado en relación al PIB: 1971-1978

	FBK/PIB Sector público	FBK/PIB Sector privado	Gasto sector público consolidado/PIB
1971	8.6	5.8	21.8
1972	9.0	6.2	20.6
1973	6.4	10.9	26.8
1974	5.1	10.0	24.9
1975	7.5	10.9	28.3
1976	10.6	8.3	27.1
1977	12.2	6.8	29.6
1978	11.7	8.4	31.6

Fuente: Ugarteche (1986), pp. 111 y 118, a base de datos del Banco Mundial.

En cualquier caso, la expansión del gasto estatal, que alcanzó unos niveles sin precedentes en la historia de Bolivia, fue el elemento dinamizador de la actividad económica y el responsable principal de las altas tasas de crecimiento del producto en los años setenta (Ramos, 1982a: 177 y ss.). Una parte del creciente presupuesto estatal pudo financiarse gracias al espectacular *aumento de los precios de las exportaciones* bolivianas, tanto de los

⁷ En la explicación del comportamiento de los empresarios tampoco conviene olvidar la particular psicología de la burguesía señorial boliviana -la «casta maldita», la llamaría Zavaleta-, que seguramente ha tenido siempre como uno de sus rasgos más destacados el total desapego hacia la suerte de un país que apenas considera suyo. En esto parece haberse avanzado poco desde los tiempos de los oligarcas de la vieja "rosca" del estaño, quienes, en palabras de Sergio Almaraz (1969: 7), «se sentían dueños del país pero al mismo tiempo lo despreciaban». No hay estudios con base empírica sobre la ideología o las actitudes generales de las clases dominantes bolivianas, pero puede verse una sugerente hipótesis sobre la continuidad fundamental de los sectores dominantes y sus actitudes hacia el país en Calla (1991).

hidrocarburos y minerales como de los productos "no tradicionales" del Oriente⁸, que experimentaron un alza casi constante desde 1972. La coyuntura fue realmente favorable para el sector externo boliviano, y con él para erario público: en 1978, el índice agregado de los precios de los productos de la canasta de transables del país se había multiplicado por tres desde el comienzo de la década, y ello permitió que *las recaudaciones tributarias, que procedían en alrededor de un 50 por ciento de los impuestos al comercio exterior*⁹, aumentaran considerablemente a pesar de la fuerte reducción de los aranceles de importación¹⁰. Sin embargo, el aumento del valor de las exportaciones no resultó suficiente para sostener los gastos de consumo y los proyectos de inversión del estado, y éstos se fueron financiando cada vez más a base de *endeudamiento externo*.

Bolivia, en efecto, había adquirido una cierta "respetabilidad" a los ojos del mundo financiero a raíz de su política de apertura al capital extranjero y de la aplicación de un programa de estabilización ortodoxo en unos momentos en que la banca internacional disponía de un exceso de liquidez y no se preocupaba demasiado por evaluar la futura capacidad de pago de ninguno de sus clientes¹¹. En aquél contexto resulta explicable que el súbito auge de 1973, provocado por el alza repentina del precio del petróleo y el aumento de las exportaciones agrícolas, fuera considerado un indicador suficiente de la solvencia del país, y que Bolivia se convirtiera por primera vez en su historia reciente en sujeto de crédito para los bancos privados, que olvidaron rápidamente su tradicional desconfianza hacia el inestable país andino (Ugarteche, 1986: 126). Así, a partir de 1974 llegaron los años de la ilusión de los créditos fáciles, que se concedían en una escala desconocida hasta entonces.

⁸ En Bolivia se consideran dentro de esta categoría todos los productos que no pertenecen a los rubros de minería e hidrocarburos. Los principales son los productos de la agroindustria del Oriente, ante todo el algodón y el azúcar. También han ido adquiriendo cierta importancia la soja, la madera, la castaña y los cueros.

⁹ CEPAL, *Anuario Estadístico de América Latina 1980*, Santiago de Chile, ONU, 1981. Sólo hay datos de 1975, año en que los impuestos procedentes del comercio exterior supusieron nada menos que un 52.5% del total de la recaudación tributaria del estado, frente a una media regional del 13.1%.

¹⁰ El continuado descenso de la presión tributaria sobre las importaciones, que cayó del 10.23% en 1972 a un 5.57% en 1978, refleja tanto la relativa "apertura" que impuso el régimen a la economía boliviana como su connivencia con la evasión impositiva de los grandes grupos de intereses ligados al comercio importador. Véase Ramos (1982a), p. 159.

¹¹ Sobre el ambiente de préstamos extraordinariamente permisivo de la primera mitad de los años setenta y la competencia agresiva entre los grandes bancos para conseguir nuevos clientes en el mundo subdesarrollado, pueden verse los comentarios de Devlin (1981), esp. pp. 159-162.

La deuda pública externa ascendió de este modo de 782 millones de dólares en 1971 a 3.101 millones en 1978, y la participación de la banca privada pasó del 4 al 43 por ciento en el mismo período. El resultado fue que en 1978 *el financiamiento externo contribuía ya con cerca de un 50 por ciento a la inversión interna bruta total*, en su mayoría ejecutada por el estado, frente a una media regional de un 10.5 por ciento en ese año¹².

Esta bonanza financiera del estado, amparada por el fuerte aumento de los precios de las exportaciones y una captación de ahorro externo sin precedentes, permitió que la economía registrara un notable crecimiento en los años setenta. Entre 1972 y 1977 el PIB creció a tasas anuales cercanas al 7 por ciento, lo que dio pie a que muchos hablaran también aquí de un "milagro" económico. Sin embargo, no resulta difícil ver que las bases del "desarrollo" económico boliviano de los años setenta eran especialmente frágiles. Lo más revelador en este sentido es sin duda el sorprendente hecho de que *a pesar del aumento sostenido de la inversión pública los sectores productores de bienes apenas experimentaron algún desarrollo real*. Tal vez en el tramo 1971-74 se diera un aumento significativo en la producción física, pero en la segunda mitad de la década el crecimiento de la renta nacional se debió cada vez más a la contribución de los servicios y menos a un incremento en la producción de bienes¹³.

La industria fue el único sector productivo que mantuvo unas tasas de crecimiento apreciables a lo largo de la etapa de gobierno de Bánzer, pero el suyo fue un desarrollo enormemente deformado, cada vez más orientado hacia la demanda de los grupos de altos ingresos y cada vez más dependiente de insumos importados y de la protección y el favor estatales (Ramos, 1982a: 199 y ss.)¹⁴. *La producción del sector exportador*, por el contrario, *mantuvo un estancamiento absoluto a lo largo de toda la década*. Pese a que los precios de las materias primas bolivianas en el mercado mundial continuaron su ritmo ascendente, la producción no pudo seguirlos, de modo que la política de inversiones del gobierno autoritario no amplió la base productiva del sector externo, que resultó incapaz de

¹² CEPAL, *Anuario Estadístico de América Latina 1980*, Santiago de Chile, ONU, p. 173.

¹³ UDAPE, *Análisis de la gestión económica en Bolivia, 1982-1985*, La Paz, 1985, p. 3.

¹⁴ La política industrial del gobierno de Bánzer es sin duda un caso bastante extremo de lo que Fajnzylber (1983) caracterizó como «protección frívola». En general, la industrialización boliviana en los años 70 reprodujo en pequeña escala pero de un modo especialmente grotesco las deformaciones que Fajnzylber encontró en la base de los procesos de industrialización "trunca" de los países mayores del subcontinente.

reaccionar favorablemente a los estímulos positivos del mercado mundial. El caso más patético fue sin duda el del *petróleo*. Después del auge de 1974-75, provocado por el ascenso meteórico de los precios internacionales, la extracción de crudo se redujo violentamente, y a partir de 1980 apenas alcanzaría ya para abastecer el mercado interno. Pero la situación de parálisis era también notoria en la industria minera, y en especial en la producción de estaño, que había sido desde la segunda década de este siglo la "espina dorsal" del sector externo boliviano y el motor del modelo de acumulación. En 1978, el volumen de las exportaciones de estaño era ligeramente inferior al que se había alcanzado en 1971, y sus costos de producción se habían incrementado notablemente, reduciendo la competitividad y por lo tanto la capacidad de supervivencia de la minería boliviana, y en particular de las grandes minas estatales, frente a una posible reversión de la tendencia alcista de los precios de los minerales. El declive de la producción de minerales y petróleo no pudo ser compensado por el inicio de la venta de gas natural Argentina, que fue el único cambio de cierta importancia en la estructura del comercio exterior boliviano producido durante el mandato de Bánzer. *Esta rigidez en la oferta de productos exportables fue sin duda el indicador más claro de los límites del modelo de desarrollo de los años setenta.*

CUADRO 3.2

Estructura de las exportaciones de Bolivia. 1965-1982.

	1965	1970	1975	1978	1980	1982
Minerales	94.6	89.7	57.5	71.0	61.7	46.7
Petróleo	-	4.5	20.9	5.7	-	-
Gas natural	-	-	8.0	10.8	21.2	42.5
Otros	5.4	5.8	13.6	12.5	17.0	10.7

Fuente: Banco Central de Bolivia, *Memoria Anual*, varios números.

El pronunciado aumento de los costos de producción en el *sector minero* durante un gobierno excluyente que impuso fuertes restricciones salariales reflejaba en buena parte el agotamiento irreversible de los viejos yacimientos de estaño, pero era también consecuencia directa de una política económica que atentaba gravemente contra la posición de las principales empresas productivas públicas en el medio plazo. En efecto, la corporación

minera estatal (COMIBOL), la empresa nacional de fundiciones (ENAF) y el monopolio fiscal de hidrocarburos (YPFB), que aportaban alrededor de un 75% de los ingresos por exportaciones del país, tuvieron que soportar *enormes cargas tributarias destinadas a alimentar inversiones improductivas, el desordenado consumo público y una burocracia estatal en continua expansión*. Entre 1972 y 1978, los impuestos directos a la actividad minera - "regalías" - contribuyeron con una media del 15.5% a los ingresos totales del Tesoro, y los derivados de la exportación, producción y consumo de hidrocarburos con un 20%¹⁵. Por otro lado, el tipo de cambio fijo muy sobrevaluado que se mantuvo durante todo el período favoreció a los industriales, a la burguesía comercial, y fomentó *el consumo de las clases medias urbanas* a costa de los intereses de las grandes empresas estatales dedicadas fundamentalmente a la exportación. Finalmente, el sector productivo público tuvo que soportar *la inflación deliberada de los costos de todas sus operaciones* y la ejecución de costosos e irracionales proyectos de inversión para beneficio de intermediarios, contratistas y funcionarios militares o civiles.

Este drenaje de recursos sometió al sector productivo público a una severa descapitalización y terminó provocando, de un modo especialmente notable en COMIBOL, un deterioro profundo de todo su andamiaje técnico-material (Toranzo, 1988: 7). En este contexto, no debe extrañar que varios organismos oficiales hayan destacado como una de las características principales del modelo de crecimiento implantado en el país a partir de 1972 la escasísima rentabilidad de las inversiones¹⁶, y en general la pésima asignación de los enormes recursos financieros de que dispuso entonces el estado¹⁷.

Pero si el gasto público y la transferencia de excedentes a los capitalistas privados no tuvieron apenas efecto en la ampliación de la capacidad productiva del país, sí desencadenaron en cambio una pronunciada espiral consumista entre los grupos de ingresos medios y

¹⁵ Calculado sobre datos de Morales et. al (1992), p. 9. Según los datos obtenidos por una comisión de expertos contratada por el gobierno de Bánzer para planificar una reforma fiscal que nunca se llevó a cabo, los impuestos pagados por las empresas públicas alcanzaron un 26.22 por ciento de los ingresos totales del gobierno central en 1972 y un 44.44 en 1974 frente al 7.9 por ciento que representaban en 1968. Comisión Musgrave, *Informe Musgrave*, La Paz, Ministerio de Finanzas, 1978, p. 263.

¹⁶ Por ejemplo UDAPE, *Análisis...*, cit., p. 2.

¹⁷ Según el Banco Mundial «en pocos países llegó -la mala asignación de recursos- a los niveles que se observan en Bolivia». Véase Banco Mundial, *Bolivia an Economy in Crisis, Causes and Prospects*, Washington DC, November 9, First Draft, p. 9.

altos, y ésta se tradujo inevitablemente en un fuerte incremento de las importaciones¹⁸. Así, mientras las exportaciones se estancaban, *las importaciones experimentaron un crecimiento sostenido durante todo el período*, y la situación de la *balanza comercial*, que había arrojado saldos positivos hasta 1974, comenzó a deteriorarse rápidamente a partir de ese año hasta alcanzar en 1978 un déficit histórico de 179 millones de dólares (Cuadro 3.3).

CUADRO 3.3

Indices de precios, volumen y valor de las exportaciones e importaciones, y saldos de la balanza comercial (1971-1978)

	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Exportaciones*								
Precios	84	87	116	245	220	234	275	306
Volumen	111	119	121	117	105	122	118	104
Valor	93	104	140	287	230	286	324	318
Importaciones*								
Precios	102	108	127	156	177	184	206	228
Volumen	106	108	117	150	186	196	201	223
Valor	108	117	149	234	331	361	414	508
Balanza comercial +	11.8	13.1	17.9	183.6	-137.2	-35.0	-16.41	-179.1

*: Base 1970=100; +: Millones de dólares.

Fuente: CEPAL, *Estudio Económico de América Latina*, varios años; Banco Mundial, *Economic Memorandum on Bolivia 1985*.

El endeudamiento ocultaba por el momento el profundo desequilibrio en el sector externo de la economía¹⁹ y financiaba a la vez los fuertes déficit fiscales, que a partir de

¹⁸ Para una visión fuertemente crítica de este proceso véase Vega (1980).

¹⁹ El desequilibrio externo fué creciendo *a pesar de la mejora en los términos de intercambio*, y está, junto a los intereses propios de la banca privada internacional, en el origen del abultado endeudamiento que heredó el país en la década de los ochenta. En general, la evolución en la situación de los términos de intercambio guarda en toda América Latina una relación inversa a la que sería esperable con los niveles de ahorro externo captado. El período de mayor endeudamiento (1970-80) mostró una mejora del 25% en los términos de intercambio para las exportaciones de todo el subcontinente; el deterioro comenzó en la década de los ochenta y persistió a lo largo de ella, *coincidiendo con el cese del crédito*. De este modo, resulta evidente que «a la inversa de la argumentación teórica sobre la necesidad de ahorro externo, el endeudamiento no se produjo cuando los términos de intercambio

1975 comenzaron a situarse en torno al 10% del PIB. De este modo, *el mantenimiento de los niveles internos de consumo e inversión dependía cada vez más de la captación continua de ahorro externo, y el país vivía así en la segunda mitad de los años setenta muy por encima de sus posibilidades reales, con una economía inflada que sólo podía sostenerse mientras no cesara el flujo creciente de créditos del exterior*²⁰.

LA DECADENCIA POLÍTICA

Hemos visto cómo apoyada en una bonanza temporal del sector externo Bolivia dispuso entre 1972 y 1978 de un abultado volumen de recursos de inversión, y se podría incluso pensar que estuvo realmente en condiciones de dar un importante salto adelante en su proceso de desarrollo²¹. Por ello, lo más llamativo del largo gobierno de Bánzer es sin duda la dilapidación de un excedente enorme para las dimensiones de la economía boliviana, que no fue aprovechado en absoluto para diversificar y fortalecer la estructura productiva del país. Los recursos se diluyeron en parte en proyectos fallidos, inversiones con largos plazos de maduración sostenidas por cálculos erróneos sobre el volumen de las reservas o la evolución futura de los mercados, pero la herencia de "elefantes blancos" que dejó la dictadura no podría explicarse sin atender a la profunda corrupción de los círculos gobernantes. Un porcentaje muy elevado de las divisas, además, no se canalizó hacia la inversión, sino que «fue asignado a la expansión del gasto de consumo, principalmente de la

fueron adversos sino cuando éstos fueron positivos». Ugarteche (1991), p. 72.

²⁰ Tal vez sea necesario recordar aquí que quienes finalmente pagaron la factura del despilfarro no fueron los mismos que se beneficiaron de él. No queremos compartir el que Pablo Ramos calificó con muy buenas razones de «lenguaje cínico de las clases dominantes», que mantuvo que la crisis de los años ochenta fue «el precio a pagar por los años de festejo y bonanza que vivió el país entre 1971 y 1977», olvidando interesadamente que sólo unos pocos participaron en la fiesta. Ramos (1982b), p.10.

²¹ Ramos (1982a: 148) afirmaba al inicio del período democrático: «Cualquier hombre con sentido común, sin necesidad de que sea economista o algo por el estilo, puede comprender que una suma tan grande en un medio tan pobre, como es el nuestro, pudo tener un poderoso impacto para desencadenar fuerzas que generen el progreso nacional».

cúpula social formada en torno al poder político» (Grebe, 1983: 108)²², o simplemente se fugó al exterior²³. La práctica del saqueo del estado, tan habitual en la historia de Bolivia, continuó siendo la norma de conducta de las clases dominantes durante el "nuevo orden" autoritario de los años setenta, y lo fue seguramente en mucha mayor medida que en cualquier otro momento desde el triunfo revolucionario de 1952.

El asalto al presupuesto estatal en los años setenta fue desde luego un hecho espectacular incluso medido a escala latinoamericana, y para explicárselo resulta indispensable conocer los *rasgos distintivos del autoritarismo militar boliviano*. En efecto, aunque Bolivia bajo el gobierno de Bánzer podría presentarse en una primera lectura como un miembro más del grupo de *estados burocrático-autoritarios modernos* que se establecieron en aquéllos momentos en buena parte del subcontinente, el parecido que guardó con ellos fue muy superficial, y lo que en realidad se instaló en el país a partir de 1971 fue una *dictadura personalista*, fundada en la *multiplicación de vínculos clientelares* directos, que condujo a un fuerte deterioro de los niveles de *autonomía estatal* frente a los intereses faccionales²⁴, erosionando gravemente la coherencia interna del aparato institucional de gobierno²⁵. Las limitaciones del proyecto autoritario de los años setenta, en resumen, agravaron profundamente el proceso de *decadencia política* iniciado con la desintegración de la coalición revolucionaria de 1952 en un modo que, como veremos, tendría enormes consecuencias para el desarrollo del proceso de transición y la delimitación de las opciones de los actores sociales y políticos en el inicio de la etapa democrática.

Un primer rasgo distintivo del gobierno de Bánzer es que *no supuso un corte real ni*

²² Toranzo (1988: 20), entre otros muchos, mantiene la misma opinión: para él, los recursos fueron derrochados y la mayoría de la deuda «tuvo una utilización improductiva, y en no pocos casos fue 'distribuida', casi regalada, a determinadas fracciones de la burguesía que apoyaron a Bánzer en la consumación del golpe de Estado».

²³ Según el Banco Mundial, en el tramo 1971-1982 el monto de capitales fugados al exterior equivale al 80% de la deuda contraída. El dato está tomado de UDAPE, *Análisis...*, cit., p. 7. Ugarteche (1986: 141-142), en base a los resultados de otro estudio del mismo organismo, da unas cifras más reducidas: 66% y 57% para los periodos 1971-1975 y 1976-1981 respectivamente. Finalmente, Peñaranda (1985) estima en un 60% de la deuda la fuga de capitales para el período 1971-1979.

²⁴ Grebe (1983: 108) apunta a este desarrollo cuando asegura que durante el gobierno de Bánzer el excedente apropiado por el estado fue "privatizado" en lugar de ser asignado siguiendo una «lógica estatal, como en alguna medida se hizo en el pasado».

²⁵ Para lo que sigue me he basado fundamentalmente en Malloy y Gamarra (1988), donde a mi entender se encuentra la mejor interpretación disponible de la dinámica política durante el período de Bánzer. También puede encontrarse información útil en el capítulo 6 de Dunkerley (1987).

con el modelo de desarrollo ni con la dinámica política previos. La orientación del golpe de estado de agosto de 1971 fue mucho más de restauración y reencauzamiento del pasado cercano que de una negación radical de éste²⁶. En cuanto al modelo económico, vimos que se reforzó el papel del sector estatal como centro dinámico de la economía, en un primer momento en la práctica y después de 1975 también en el discurso económico oficial, y que, pese a la política de apertura externa, se mantuvo la protección estatal sobre una actividad industrial de invernadero que pudo alcanzar en este período sus mayores tasas de crecimiento. La nueva coalición de gobierno tampoco se diferenciaba apenas de la que sostuvo al régimen de Barrientos en la década precedente: una alianza entre los militares, sectores de las clases medias urbanas y de la burguesía "nacional" crecida al amparo de la protección del estado, ahora con un peso mayor de los empresarios agrarios de Santa Cruz. La gran masa de campesinos encuadrada en el aparato sindical para-estatal continuaba siendo su principal apoyo social, y los obreros sindicalizados agrupados en torno a la COB eran nuevamente el gran sector excluido. Bánzer mismo se había ocupado de dejar muy claro el contenido continuista de su gobierno, afirmando que su objetivo era reinstalar a los bolivianos en la senda abierta por la revolución nacional de 1952, de la que se reclamaba heredero, extirpando el tumor "antinacional" crecido a la sombra del desgobierno izquierdista del general Torres y el experimento de la Asamblea Popular inaugurado en mayo de 1971, tan sólo tres meses antes del golpe.

Esta vocación continuista distingue de entrada al gobierno militar boliviano de los que se instalaron en los países vecinos del Cono Sur en los años setenta, dado que éstos sí se propusieron desmontar elementos centrales de la estructura económica que se se había ido consolidando desde la crisis de los años treinta y el inicio de las políticas de industrialización sustitutiva, y, enarbolando un discurso ideológico contrario a la intervención del estado en la economía²⁷, impusieron políticas que atentaban en gran medida contra los intereses de

²⁶ Malloy y Gamarra (1988: 72) afirman al respecto que el de Bánzer no fue un gobierno "contrarrevolucionario" en ningún sentido real del término.

²⁷ Sobre la influencia de la ideología neoliberal en la política económica de los gobiernos autoritarios del Cono-Sur durante los años setenta puede consultarse García Menéndez (1989).

segmentos importantes de la burguesía local que producían para el mercado interno²⁸, y, desde luego, de la clase obrera sindicalizada que había sido un actor fundamental en las coaliciones populistas. El proyecto autoritario ensayado en Bolivia a partir de 1972 no tuvo un componente "reestructurador" comparable al de los programas aplicados en Chile, Argentina y Uruguay, o, con un sentido muy diferente, en el Perú de Velasco Alvarado²⁹, y la nula beligerancia del régimen de Bánzer frente a intereses de sectores significativos incluidos en una coalición de gobierno previa tuvo sin duda mucho que ver con el hecho de que no intentara seriamente dotar al estado de algún grado de autonomía, construyendo un nuevo entramado institucional sólido. Pero su continuismo no puede desde luego dar cuenta de la distancia real que separa a Bánzer de los autoritarismos modernos. A este respecto, cabe recordar que los gobiernos militares que emergieron de los golpes de estado de los años sesenta en América Latina, y en particular el que se instaló en Brasil a partir de 1964, tuvieron un contenido de ruptura mucho menor que los de la década siguiente (O'Donnell, 1981: 201), y sin embargo las Fuerzas Armadas dieron allí un sentido institucional a su acción de gobierno y fueron capaces de definir y perseguir con cierta coherencia metas generales de desarrollo nacional, si bien definido al "modo militar" y fuertemente excluyente³⁰.

En este punto es necesario apelar a un segundo elemento que resulta esencial para

²⁸ Esto es cierto aunque pueda mantenerse, como lo hace O'Donnell (1981: 225), que los gobiernos militares cumplieron "objetivamente" la función de "salvar a la burguesía como clase", eliminando los desafíos a su papel rector en el proceso de producción que había desencadenado el proceso de radicalización y crisis de los gobiernos populistas.

²⁹ Cotler (1985: 407), destacando el contenido de ruptura del golpe de estado de 1968, afirmaba que los militares reformistas «cerraron de golpe un largo capítulo de la historia del país e inauguraron uno nuevo». En el Perú la ruptura con el pasado inmediato se expresó en el enfrentamiento del régimen con la oligarquía dominante, fundamentalmente rural, en la aplicación de políticas nacionalistas y cepalinas para promover la industrialización del país y en el apoyo a la movilización "controlada" de los sectores populares, que debían convertirse en base de sustentación del régimen. Véase para esto sobre todo Cotler (1978). En el mismo año se publicaron otros dos trabajos fundamentales -Stepan (1978) y Trimberger (1978)- que contribuyeron a generar un consenso generalizado entre los analistas en la afirmación de que el estado peruano bajo Velasco Alvarado alcanzó un nivel importante de autonomía frente a los distintos intereses sectoriales. Ignacio Sotelo (1980: 141) apuntaba a la misma idea cuando afirmaba al calor del proceso: «Lo que hace cinco años parecía en el Perú una meta inalcanzable, es hoy una realidad vivida: el estado es capaz de imponer una política de desarrollo, frente a intereses minoritarios, nacionales o extranjeros». Cabría añadir, con Cotler (1985: 282), que la incapacidad del autoritarismo militar para establecer vínculos sólidos con la representación de los colectivos cuyos intereses deseaba favorecer en principio terminó provocando una situación en la que «sus esfuerzos fueron rechazados prácticamente por todas las clases sociales».

³⁰ Este es desde luego el caso de los gobiernos militares de Brasil, a pesar del elevado "costo social" del modelo de desarrollo que diseñaron. A lo más puede afirmarse, con Cardoso y Faletto (1987: 194), que los gobernantes brasileños confundieron el interés público con la defensa del *sistema* de empresas.

entender los rasgos peculiares del autoritarismo boliviano: las características *institucionales* del actor central de la coalición de gobierno. Las Fuerzas Armadas que llegaron al poder con Bánzer, en efecto, no sólo habían alcanzado un nivel de *desarrollo orgánico* bastante inferior a las de los países vecinos, sino que además estaban sometidas a unas *divisiones internas* especialmente profundas, derivadas de su implicación continua y contradictoria en la política nacional desde el período de entreguerras. Conviene recordar que *el golpe de estado de agosto de 1971 se llevó a cabo contra otro gobierno militar* que intentaba desarrollar un proyecto *populista y nacionalista* incluido en una tradición de largo aliento que gozaba todavía de una amplia legitimidad en el seno de las Fuerzas Armadas bolivianas. Pero los militares bolivianos no sólo estaban divididos en sus *afiliaciones ideológicas* sino también, más recientemente, en torno a *líneas generacionales* y, mucho más grave, sobre *lealtades locales* hacia comandantes de tropa que comenzaban a convertirse en "señores de la guerra" cada vez más independientes³¹.

La situación interna de las Fuerzas Armadas bolivianas ha sido siempre enormemente compleja y fluida a lo largo de toda la historia contemporánea del país, y no cabe aquí ensayar una descripción detallada de su evolución bajo el gobierno de Bánzer³². Pero sin duda es el fuerte deterioro de la coherencia institucional de las FF.AA lo que permite explicar, junto a su ya mencionada vocación continuista, el hecho de que para dar una fachada institucional a su gobierno Bánzer creara una agrupación política, el **Frente Popular Nacionalista (FPN)**, en el que además de representantes militares e individuos "independientes" ligados a la empresa privada *participaban los dos mayores partidos tradicionales del país, el MNR, principal artífice de la revolución nacional de 1952, y la Falange Socialista Boliviana (FSB)*, hasta entonces su más enconado rival en la arena política. En efecto, parece indudable que al incorporar a los partidos en el esquema de gobierno Bánzer pretendía asentar su autoridad sobre un cimiento institucional más sólido que el que podían brindarle unas Fuerzas Armadas divididas, y construir de paso una base independiente de poder para

³¹ El hecho mismo de que tras el triunfo del golpe de estado fuera un coronel quien accedió finalmente a la presidencia revelaba ya de por sí el hundimiento de la cadena formal de mando y el grave nivel de descomposición interna que afectaba a la institución armada. Véase Malloy y Gamarra (1988), p. 76.

³² La bibliografía sobre las FF.AA. bolivianas es muy escasa. De hecho el único trabajo amplio sobre la materia es el de Prado (1984), basado ampliamente en los recuerdos personales del autor. Sobre la división ideológica de las FF.AA. puede consultarse Barrios (1983). El mismo autor ha analizado en varias publicaciones distintos momentos de la evolución de la institución armada boliviana (Barrios, 1986a, 1986b, 1989).

la Presidencia que le permitiera enfrentar los desafíos de grupos de oficiales rivales que cuestionaban continuamente su liderazgo en la institución³³.

La oposición militar al gobierno de Bánzer se aglutinaba básicamente en torno a dos discursos contrapuestos: un sector rechazaba la participación hegemónica de los partidos en el FPN, reclamando una mayor presencia militar en el gobierno e incluso un completo marginamiento de la élite política tradicional, mientras otro grupo exigía el retiro total de los militares del gobierno a través de la convocatoria inmediata de elecciones libres sin candidato oficial³⁴. Fueron los miembros más destacados este último sector, que sería conocido en adelante como "institucionalista", quienes realizaron el intento más serio para desplazar a Bánzer de la presidencia, encabezando un golpe de estado en junio de 1974. A pesar de su fracaso, el golpe de junio reflejó una preocupación muy extendida entre los militares sobre los efectos nocivos para la institución armada de su implicación directa en la política nacional, y los oficiales rebeldes mantuvieron intactos su prestigio e influencia entre sus colegas tras su expulsión del país³⁵, dejando muy claro que las Fuerzas Armadas no estaban en absoluto interviniendo en política con un sentido corporativo homogéneo de su "misión de gobierno", encabezadas por un liderazgo formal y reconocido como representante de la institución³⁶. Bánzer reaccionó frente a la amenaza prometiendo elecciones para el año siguiente y eliminando a los partidos políticos del gobierno en julio de 1974. Pero los dos movimientos no hicieron sino reflejar lo precario de su posición: el presidente compraba

³³ Un hecho muy significativo, entre los varios que podrían citarse para ilustrar la precaria posición de Bánzer dentro de las FF.AA., es sin duda el pronunciamiento de la asamblea de oficiales de la ciudad de La Paz el 23 de agosto de 1971, tan sólo dos días después del triunfo del golpe de estado: ante la falta de consenso para su designación como presidente, los oficiales de la capital decidieron otorgarle un "mandato transitorio", y pidieron la convocatoria inmediata de elecciones «ante la necesidad de las FF.AA. de lograr la despolitización de sus integrantes» y de «acabar con la influencia que han tenido en la vida nacional desde noviembre de 1964». Citado Sandóval (1990), p. 99.

³⁴ Esta división ideológica tenía también un componente generacional, dado que los oficiales que abogaban por la salida electoral habían iniciado su carrera después de la Revolución de 1952, en la nueva academia fundada por el MNR. Se definían como "nacionalistas", pero ante todo como profesionales comprometidos con los intereses a largo plazo de la institución militar, y veían con preocupación el hecho de que ésta estuviese convirtiéndose en un mero partido político "armado", incorporando en su seno todas las tendencias disgregadoras de la sociedad civil. Véase para esto Prado (1984).

³⁵ Bánzer exilió a los líderes del movimiento, pero pronto se vio obligado a permitir su retorno al país y su reincorporación a filas. Ver G. Prado, *Poder...*, cit., pp. 206 ss.

³⁶ Si hay algún punto de acuerdo en la interpretación del autoritarismo militar "moderno" en América Latina es que se diferencia del caudillismo tradicional en que «es la institución militar la que, como tal, asume el poder en orden a reestructurar la sociedad y el Estado». Cardoso (1985), p. 41. Subrayado del autor.

tiempo con la promesa de convocar elecciones, que repetiría intermitentemente a lo largo de todo su mandato, y compraba lealtades repartiendo nuevos cargos gubernamentales entre los militares que podían sentirse tentados a desafiar su liderazgo.

Sin embargo, la expulsión de sus aliados civiles no fue sólo consecuencia de las amenazas al liderazgo de Bánzer en el seno de las Fuerzas Armadas; por el contrario, tuvo también mucho que ver con *la absoluta incapacidad que demostraron desde el principio los partidos tradicionales para propocionar legitimidad y una base institucional útil al régimen*. Con la incorporación de los partidos, y en especial del viejo MNR, en su esquema de gobierno, Bánzer había pretendido, más allá de consideraciones tácticas en la pugna interna por el poder en la institución armada, reclamar para su gobierno la legitimidad de la herencia revolucionaria de 1952 y dotarle de una estructura de mediaciones con la sociedad civil. Sin embargo, muy pronto se hizo evidente, por un lado, que cualquiera fuese el valor que conservara el mito fundacional de la Revolución de Abril como sustento de la legitimidad del estado, aquél ya no se identificaba necesariamente con el partido de Paz Estenssoro y, por otro, que los nexos que una vez tuvo el MNR con los actores sociales fundamentales se habían disuelto por completo. La Falange, por su parte, carecía ya del prestigio que había alcanzado entre amplios sectores de las clases medias urbanas cuando canalizó su oposición al mismo partido con el que ahora compartía las tareas de gobierno, y había quedado reducida a un pequeño grupúsculo anacrónico. *El distanciamiento entre el MNR y el movimiento obrero, que agrupado en torno a los sindicatos mineros permanecía como la institución más sólida de la sociedad civil*, no había hecho sino ahondarse a lo largo de la década precedente, mientras el partido iba perdiendo todos sus vínculos con el *campesinado* a partir del gobierno de Barrientos. Además, la participación en el nuevo régimen militar había estado agravando enormemente el proceso de *desintegración interna* que venía sufriendo el MNR desde finales de los años cincuenta.

La ruptura más grave y duradera fue sin duda la que se produjo cuando Hernán Siles Zuazo, que se opuso desde el principio a la colaboración del MNR con Bánzer, decidió apartarse del ala principal del partido y fundó desde el exilio el **Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI)**³⁷. Pero el sector que permaneció con Paz Estenssoro

³⁷ Para entonces cada uno de los cuatro mayores dirigentes del primer MNR tenía ya su propio partido, dado que Walter Guevara, que se separó del tronco central del MNR en 1960 para disputar la presidencia de la República a Paz Estenssoro, lideraba el Partido Revolucionario Auténtico (PRA), fundado al año siguiente, y Juan Lechín

terminó también dividiéndose como consecuencia de los conflictos de intereses entre sus varias facciones clientelares, de las distintas posiciones estratégicas acerca del sentido que debía darse a su cooperación con los militares. El viejo caudillo movimientista había decidido colaborar con Bánzer esperando sacar ventaja de su posición de gobierno cuando se realizaran nuevas elecciones; sin embargo, a medida que se iba aplazando su convocatoria, comenzó a considerar que los beneficios que pudieran derivarse de esa estrategia no compensaban el desgaste a que le estaba sometiendo su apoyo a la dura política de estabilización que aplicó inicialmente el régimen. En segundo lugar, los militares, que consideraban al campesinado como su propia clientela política, estaban bloqueando su proyecto de aprovechar los recursos del estado para reconstruir la estructura partidaria entre los campesinos de la reforma agraria, que aportarían el grueso de los sufragios en cualquier elección futura. Teniendo esto en cuenta es fácil explicar por qué Paz Estenssoro decidió anunciar finalmente, en noviembre de 1973, que el MNR abandonaba el Frente Patriótico Nacional para seguir un camino propio. Sin embargo, muchos de los dirigentes del partido no compartían sus preocupaciones electorales: desde el principio habían hecho una apuesta muy distinta, y su opción más preferida era permanecer a cualquier costo en el gobierno para conservar sus "empleos" y sostener sus propias redes clientelares.

El peso de la tradicional "empleomanía" quedó de manifiesto cuando los dirigentes y cuadros opositores lograron que una Convención Nacional expulsara al "líder" histórico de la mayor organización política del país, desintegrándola por completo. Lo poco que quedaba de ella, ahora bajo el liderazgo de Ciro Humboldt, continuó prestando su apoyo al gobierno y no pudo evitar sufrir nuevas divisiones internas provocadas por las luchas por conseguir y conservar los cargos. A la vista de esta historia resultaría difícil discutir que Bánzer tenía toda la razón de su parte cuando justificó la expulsión definitiva de los partidos, en julio de 1974, afirmando que éstos representaban tan sólo a una multitud de pequeñas camarillas ávidas de ingresar a las redes del patronazgo estatal (Malloy y Gamarra, 1987: 103). Con sus palabras el dictador estaba apuntando en realidad al centro de una dinámica

Oquendo presidió el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN), que organizó a raíz de su ruptura con Paz Estenssoro en 1964 junto a un grupo de dirigentes de la izquierda movimientista. Véase Lora (1987), pp. 324-345.

centrífuga que siempre estuvo presente en la vida política boliviana³⁸ y no haría sino agudizarse a lo largo de su gobierno.

Como vimos, el *desencuentro* permanente, primero en la etapa oligárquica y luego en la década que siguió al triunfo revolucionario de 1952, *entre la democracia representativa y las demandas de los actores sociales fundamentales* -básicamente el proletariado minero- impidió la consolidación de aquélla y el desarrollo de los partidos como mediadores de intereses. Enfrentado a la FSTMB y a la COB, el MNR no pudo convertirse después de 1952 en "partido de estado" a la manera del PRI mexicano que intentó emular (Malloy, 1977: 465), y su fracaso no condujo a un sistema de alternancia política, sino al régimen corporativista autoritario de Barrientos. En los tres lustros de autoritarismo militar ininterrumpido que siguieron al golpe de estado de Barrientos en 1964 no hubo espacio para la construcción del sistema moderno de partidos que nunca había existido antes en la historia de la república. La agudización constante durante aquel largo ciclo autoritario del desarraigo y de la corrupción de la "clase política", privada de sus funciones representativas y condenada a reproducirse vampirizando los recursos de la administración estatal o -en el caso de la oposición izquierdista- de las organizaciones sindicales de base, tendría, como veremos de inmediato, enormes consecuencias para el desarrollo del proceso de transición política en Bolivia.

El intento de consolidar el régimen mediante la alianza con unos partidos tradicionales atrofiados se saldó, por lo tanto, con un fracaso absoluto. Había servido únicamente para agravar las tensiones entre el ejecutivo y las Fuerzas Armadas y la división interna de éstas, sin proporcionar al gobierno una base institucional alternativa, y no debe extrañar, por lo tanto, que a finales de 1974, animado por la bonanza petrolera y por la evolución política de los países vecinos, Bánzer decidiera entregar a los militares todo el control administrativo y político del gobierno y del estado. Así, el Decreto Supremo 11.947 del 9 de noviembre, que acabaría conociéndose como "Plan Nueva Bolivia", estableció que las Fuerzas Armadas permanecerían legalmente en el poder hasta 1980, plazo en el que se comprometían a realizar

³⁸ La hipótesis sobre las causas de la inestabilidad política en América Latina que desarrolló Merle Kling (1965) en los años cincuenta resulta muy útil para explicar este fenómeno, y de hecho ha sido empleada abundantemente por estudiosos de la realidad boliviana, entre ellos Lavaud (1987, 1991) y el propio Malloy (1989). El razonamiento de Kling puede resumirse como sigue: en una economía de base muy restringida en la que resulta muy difícil la movilidad ascendente por medios convencionales, la lucha por adueñarse del gobierno y conseguir cargos administrativos y políticos suele ser el único canal de acceso al poder y la riqueza; en este contexto tiende a producirse una aguda competencia entre los grupos políticos rivales que genera inestabilidad política y a la vez una propensión crónica a la faccionalización de todas las organizaciones.

una transformación absoluta de las relaciones entre el estado y la sociedad civil y a crear nuevas instituciones de gobierno; suspendió indefinidamente la actividad de todos los partidos políticos, incluso la de aquéllos que habían formado parte del régimen hasta hacía muy poco, y prohibió toda actuación independiente de los sindicatos, que serían en adelante dirigidos por "coordinadores" nombrados por el gobierno. Con esta *nueva estructura de gobierno*, en la que miembros de la empresa privada y de la élite tecnocrática civil ocuparían posiciones claves en la administración estatal, se pretendía inaugurar un nuevo modelo de régimen corporativista-autoritario que diera al gobierno una base más estable y coherente que la que había obtenido hasta entonces con la estrategia de alianzas civiles, emparentando definitivamente a Bánzer con sus colegas de Brasil y el Cono Sur. Sin embargo, *el nuevo proyecto nunca pasó de ser una expresión de deseo*, y el régimen, sometido desde el principio a una inestabilidad permanente, terminaría derrumbándose abruptamente tan sólo tres años después.

La precaria trayectoria de este autoritarismo burocrático "moderno" en el país andino no es difícil de explicar, y obedece en realidad a la actuación constante de la misma constelación causal que convirtió a Bolivia a partir de la década de los cuarenta en el ejemplo más extremo y acabado del pretorianismo político latinoamericano. La combinación, en el punto de partida de la crisis de entreguerras, de una base de recursos enormemente estrecha, unas instituciones estatales particularmente débiles, segmentadas y dependientes³⁹, y unos niveles de movilización social que algunos observadores han calificado de "astronómica"⁴⁰, generó una espiral de decadencia política que ninguno de los ensayos corporatistas, democráticos o autoritarios, fue capaz de revertir. El proceso de disolución de las instituciones de gobierno, por el contrario, adquirió una dinámica autoalimentada que en la década del setenta barrió primero las ilusiones doctrinarias del "Plan Nueva Bolivia" y estalló después violentamente en la tortuosa transición política boliviana.

En primer lugar, el gobierno de Bánzer *fue incapaz de desmovilizar a las organizaciones sindicales reivindicativas y establecer la exclusión política de los sectores populares sobre una base sólida* que permitiera prever una mínima estabilidad de las reglas del juego político en el futuro inmediato. Si hasta la publicación del "Plan Nueva Bolivia" en no-

³⁹ Un análisis extenso y particularmente demoledor del funcionamiento de las instituciones estatales bolivianas puede encontrarse en Whitehead (1974-75).

⁴⁰ Un calificativo que comparten incluso los analistas más "equilibrados". Véase sino Malloy (1977), p. 482.

viembre de 1974, los sindicatos de empresa, en particular en las minas y en las principales plantas industriales, habían mantenido una libertad de acción considerable, y la Federación de mineros había podido incluso llevar a cabo sin contratiempos su XV Congreso Nacional en 1973, reelegiendo a sus dirigentes tradicionales perseguidos por la dictadura (Jetté, 1989: 57), después del nuevo giro autoritario la situación apenas cambió, a pesar del endurecimiento de la política laboral. El cambio de actitud del régimen se expresó desde luego en un incremento de las acciones represivas, en especial en los campamentos mineros, pero todos sus esfuerzos para quebrar la resistencia de los obreros del subsuelo y corporativizar sus organizaciones a través de la red de "coordinadores" sindicales resultaron baldíos⁴¹. Así, en mayo de 1976 varios dirigentes sindicales exiliados retornaron clandestinamente al país, y el gobierno tuvo que resignarse a contemplar cómo la Federación sindical minera celebraba de nuevo sin contratiempos su XVI Congreso Nacional, confirmando que *los campamentos mineros continuaban funcionando como "territorios libres", ajenos por completo al control del estado*. El XVI Congreso minero determinó ante todo iniciar una huelga indefinida si no se decretaba un aumento salarial del 100 por ciento en el plazo de un mes, y obligó al gobierno a pasar a la ofensiva, enviando al ejército a las minas, declarando a los campamentos "zonas militares" y sometiendo a toda su población a los rigores del Código Penal Militar (Iriarte, 1983: 172). Pero la ocupación militar de las minas, que se mantendría hasta el término del mandato de Bánzer, sólo probó definitivamente que la fuerza de las armas era el único recurso de que disponía el gobierno autoritario para controlar la acción colectiva del grupo de trabajadores que constituía el núcleo de movimiento obrero. La fuerza bruta no podía corregir por mucho tiempo la ineffectividad absoluta de la acción estatal sobre las áreas mineras, convirtiendo al "estado de excepción" en una solución estable. Menos cuando los sindicatos mineros demostraron una vez más, como tantas en el pasado, su capacidad para sobrevivir a la tormenta, multiplicándose con los rigores de la clandestinidad y organizando desde el interior de las galerías toda la vida cotidiana de la comunidad. De este modo, cercados por ejército y a la espera de una reducción de la presión militar, *los campamentos*

⁴¹ Un episodio que ilustra bien el nulo resultado de la ofensiva gubernamental contra el sindicalismo minero independiente es sin duda el que siguió al cierre de las emisoras de radio mineras y el apresamiento en enero de 1975 de varios dirigentes de Siglo XX, el principal centro minero del país. El gobierno, que intentaba con esas acciones quebrar la oposición a la actividad de sus "coordinadores" laborales, aceptó de hecho la imposibilidad de imponer una estructura sindical "amarilla" a las comunidades mineras después de que los trabajadores emprendieron una huelga de 16 días que le obligó a permitir la reapertura de las radios y la celebración de nuevas elecciones sindicales libres. Véase, para un relato completo de éste y otros episodios de resistencia, Soria (1979).

continuaron siendo durante todo el período un foco permanente de oposición a la dictadura.

Pero si el aparato sindical amarillo de los "coordinadores" laborales organizado para controlar verticalmente la protesta obrera, fue desde el principio, sobre todo en las minas pero no sólo en ellas, una estructura vacía e inoperante, el gobierno de Bánzer terminó además provocando *un deterioro irreversible en la única estructura corporativa relativamente eficaz que había heredado del pasado: el pacto militar-campesino y la organización sindical para-estatal que lo sustentaba.* Aunque en realidad los militares habían aplicado una política económica contraria a los intereses de la pequeña producción agraria desde la época de Barrientos⁴², no fue hasta la década de los setenta cuando el campesinado tradicional comenzó a sentir directamente sus efectos negativos. El descontento que hubieran podido acumular durante la prolongada caída del valor relativo de sus productos frente al de las manufacturas urbanas y al de los productos de la agricultura empresarial del Oriente tropical, en efecto, sólo estalló finalmente cuando el gobierno de Bánzer dictaminó la eliminación de los subsidios estatales a los precios de estos últimos, que los campesinos tradicionales compraban en el mercado y que eran una parte esencial de su dieta. La retirada de los subsidios fue la primera agresión *directa* del "Estado del 52" contra la economía de las familias campesinas⁴³, y provocó una extensa oleada de movilizaciones en el epicentro histórico del sindicalismo agrario boliviano: el Valle de Cochabamba.

Para contener la protesta campesina Bánzer decidió adoptar una estrategia represiva, apartándose abrupta y radicalmente del molde paternalista que habían cultivado con tanto cuidado el MNR y Barrientos en sus relaciones con los campesinos. Aquello fue sin duda un fenomenal error de cálculo, que debe explicarse a partir de la incapacidad de las élites para entender el componente estratégico del apoyo que había prestado hasta entonces al estado un campesinado de la reforma agraria que no era en absoluto la masa inerte y complaciente que

⁴² Barrientos, que dedicó una enorme atención a lubricar el sistema de redes clientales que conformaban la confederación sindical para-estatal, gozó de una popularidad indiscutible en el agro boliviano, en especial en el Valle de Cochabamba. Pero destinó anualmente tan sólo un 3 por ciento del presupuesto a la agricultura, y casi exclusivamente a la agricultura latifundista de las tierras bajas de Santa Cruz y el Beni. El campesinado tradicional fue en realidad un perdedor neto durante su gobierno, como se refleja en el hecho de que la producción de papa y maíz permaneció estancada o disminuyó entre 1964 y 1968. Véase para esto Burke y Malloy (1973), esp. pp. 190-196.

⁴³ Respondiendo a la presión de EE.UU. y de agencias técnicas internacionales en pro de la reforma fiscal, Barrientos anunció en diciembre de 1968 la creación de un *impuesto único* sobre la propiedad agraria. Pero tras las primeras protestas campesinas decidió de inmediato olvidar el proyecto.

muchos, en la derecha y en la izquierda, quisieron ver en él. Sólo el "sorprendente" comportamiento político de los campesinos bolivianos durante el proceso de transición podría demostrar hasta qué punto la nueva actitud gubernamental frente a sus demandas, resumida en la absurda brutalidad de la "Masacre del Valle" de enero de 1974⁴⁴, había debilitado el prestigio de los militares en el agro. Pero ya en aquel momento la inesperada violencia estatal contribuyó en mucho a reforzar la posición de los grupos que pugnaban por organizar un sindicalismo campesino independiente y vinculado a la COB. Estos grupos, influidos mayoritariamente por corrientes de pensamiento *Kataristas* e indianistas⁴⁵, adquirieron una fuerza notable y comenzaron a controlar una buena parte de los sindicatos campesinos de base, ante todo en la zona del Altiplano próximo a La Paz (Rivera, 1986: 129 ss.). Pero la oposición comenzó a crecer también en el Valle de Cochabamba, sede de los poderosos sindicatos agrarios que habían hasta entonces el principal apoyo social de la coalición autoritaria⁴⁶, y ninguna de las sucesivas maniobras gubernamentales para erradicar la influencia de las élites opositoras y devolver al aparato vertical de la **Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB)** el control efectivo de las organizaciones de base podría ya revertir esa situación. Tanto el Congreso Departamental de la Federación campesina de La Paz, celebrado en enero de 1976, como el Congreso Nacional de la CNTCB, en octubre

⁴⁴ La Comisión de Justicia y Paz estableció que el 29 de enero de 1974, en el episodio que se conocería en adelante como "Masacre del Valle", al menos 80 campesinos que bloqueaban los caminos en protesta por las medidas mientras aguardaban confiadamente la llegada de algún representante del gobierno, murieron a manos del ejército o fueron dados por "desaparecidos". Véase Comisión de Justicia y Paz, *La Masacre del Valle*, La Paz, 1975, pp. 93 ss.. De hecho, los campesinos esperaban que en la columna acorazada que se aproximaba viniera Bánzer dispuesto a hablar con ellos y, al estilo de Barrientos, disculparse por su "error". En lugar de ello, los tanques comenzaron a escupir metralla.

⁴⁵ Las corrientes de pensamiento que dieron origen al *Katarismo* y los diversos grupos indianistas surgieron a finales de los años sesenta en el seno de la subcultura aymara urbana que se había ido formando en la ciudad de La Paz a raíz del creciente proceso de migración campo-ciudad que tuvo lugar en esa década. Algunos aymaras urbanos, poseedores de una educación formal recién adquirida, percibieron con fuerza la exclusión y el rechazo a que les sometía la sociedad criolla por su origen étnico y comenzaron a dar a su frustración una expresión ideológica articulada en un discurso que reivindicaba la diferencia indígena, valorando sus tradiciones de organización y lucha y el conjunto de la cultura andina, y atacaba al Pacto militar-campesino como una forma de "pongueaje" -servidumbre- político. Estas corrientes intelectuales influyeron fuertemente en grupos de nuevos dirigentes jóvenes mucho más propensos que sus mayores a percibir los límites de la reforma agraria y de las políticas gubernamental hacia los campesinos, y se convirtieron tras la "Masacre del Valle" en el eje del nuevo sindicalismo campesino autónomo. Sobre el movimiento katarista puede consultarse la monografía de Hurtado (1986). Un resumen útil de la evolución política del sindicalismo campesino se encuentra en Albó (1985).

⁴⁶ Las ideologías Kataristas e indianistas no arraigaron en el valle de Cochabamba, donde el campesinado, que había estado sometido a una influencia urbana muy prolongada, era culturalmente mestizo en mucha mayor medida que el del Altiplano. Las élites sindicales opositoras se vincularon allí en cambio a varios partidos de la izquierda criolla.

del mismo año, aprobaron resoluciones que criticaban con una inusitada dureza la política económica del gobierno, demostrando que las corrientes de oposición habían penetrado ya ampliamente las estructuras del sindicalismo para-estatal (Rivera, 1986: 131-133).

La medida de la importancia de los desarrollos que estaban teniendo lugar en el campo sólo se conocería, como afirmé arriba, tras el inicio del proceso de transición política, cuando los campesinos pudieron expresar en las urnas su desafección hacia el régimen y el sindicalismo campesino independiente pudo organizar sus primeras movilizaciones masivas. Sin embargo, únicamente teniendo en cuenta *tanto la disolución de las estructuras del pacto militar-campesino como la eficaz resitencia de las organizaciones sindicales reivindicativas en las minas y fábricas*, es posible entender el enorme impacto que tuvieron sobre la estabilidad del régimen las protestas de sectores de la clase media urbana agrupados en torno organizaciones de la Iglesia Católica o a instituciones académicas, y algunos errores políticos como las frustradas negociaciones con Chile para la obtención de una salida al mar o el proyecto de instalar en la región oriental del país a un amplio contingente de colonos blancos de Rhodesia y Namibia (Dunkerley, 1987: 233-236). El régimen, en efecto, estaba completamente aislado: había sido incapaz de construir una nueva estructura de mediaciones con la sociedad civil y había terminado destruyendo el escaso legado que recibió del pasado. Su base social se limitaba a algunos estratos urbanos *inorgánicos*, en su mayoría ligados al pequeño comercio y al transporte, cuyo apoyo dependía casi exclusivamente de que se cubriesen sin interrupciones sus expectativas de progreso material.

El núcleo de la coalición gobernante, además, continuaba siendo enormemente frágil. *El apoyo del magro empresariado nacional distaba de ser unánime*, como demostró la actitud de los mineros medianos, uno de sus sectores más influyentes, que se distanciaron por completo del gobierno y comenzaron a pedir la instalación de un sistema político más abierto⁴⁷. Bolivia, por otra parte, no había desarrollado el *estrato de técnicos de clase media*

⁴⁷ La desafección de los empresarios mineros se debió al establecimiento de un sistema impositivo sobre sus actividades que hacía que en la práctica estuviesen subvencionando al sector público y a otros componentes del sector privado, en particular a la banca, al comercio y a los empresarios de la agroindustria del oriente. No existen, hasta donde sabemos, trabajos de base empírica sobre el comportamiento del empresariado en la década del setenta, pero seguramente sería necesario revisar las afirmaciones tradicionales sobre su respaldo unánime al régimen, cuando menos por lo que respecta a la última fase de éste. Es indudable que la gran mayoría de los empresarios privados obtuvieron enormes ganancias durante el gobierno de Bánzer, pero también parece cierto que el gigantesco incremento del gasto estatal provocado en buena parte las necesidades estrictamente políticas de un régimen que, como mantendremos inmediatamente en el texto, sobrevivía casi exclusivamente a base de extender redes clientelares y prebendales privadas, debilitaba objetivamente las opciones de acumulación en el conjunto del sector privado; por otro lado, es comprensible que un número no despreciable de empresarios comenzara a preocuparse seriamente por

que hubiera podido aportar un mínimo de legitimidad ideológica y de capacidad de gestión al estado autoritario. Finalmente, la *coherencia interna de las Fuerzas Armadas* no se había reforzado en absoluto después de la salida de los partidos políticos del gobierno, de modo que Bánzer siguió obligado a maniobrar continuamente para mantener su condición de "primus inter pares" entre sus ambiciosos colegas, incentivando el desarrollo de una corrupción generalizada para ganar lealtades e implicar al mayor número posible de miembros de la institución armada en el sistema, y recurriendo incluso a la eliminación física de los rivales potencialmente más peligrosos⁴⁸.

El país más pobre del subcontinente latinoamericano carecía en verdad de todos los elementos que hubieran permitido consolidar allí un autoritarismo burocrático moderno. No se trata sólo de que el nivel de movilización popular fuera "excesivamente" alto. Se trata también de que en los años setenta Bolivia no había alcanzado -ni lo ha hecho aún- un estadio de desarrollo suficiente para producir un ejército profesional integrado y dotado de una doctrina coherente, ni para generar una coalición social equiparable a la que construyeron las últimas dictaduras del Cono Sur. Los oficiales que desplazaron a un sistema de partidos cupular y atrofiado, se encontraron así frente a un vacío social y tuvieron que enfrentar el profundo subdesarrollo orgánico de la institución armada. En estas condiciones, y en una medida que recuerda mucho más a las situaciones centroamericanas que a los nuevos autoritarismos de subcontinente, Bánzer sustentó su poder de un modo cada vez más exclusivo en la creación y reproducción de redes de clientelas personales entre grupos de militares, segmentos de las élites civiles y funcionarios públicos que debían su puesto a la buena voluntad del gobierno. *El clientelismo personalista y la prebenda privada se convirtieron en la práctica en la única estructura de mediaciones entre el estado y la sociedad civil*⁴⁹, de

los muchos elementos de incertidumbre asociados a la dinámica política del régimen. Véase para esto los comentarios de Malloy y Gamarra (1988), pp. 110-112.

⁴⁸ Fuentes de la policía francesa implicaron al gobierno de Bánzer en el asesinato del general Zenteno, uno de los principales rivales a la derecha del presidente y embajador de Bolivia en París, que fue atribuido oficialmente a una "Brigada Internacional del Ché Guevara", hasta entonces desconocida. El asesinato en Buenos Aires del general Juan José Torres, el representante más notable del nacionalismo populista militar, fue también atribuido inmediatamente a Bánzer y tuvo una fuerte repercusión en el país. Véase Dunkerley (1987), pp. 196-197.

⁴⁹ En palabras de René Zavaleta (1983b: 55), «todo el sistema de Bánzer se fundaba en la corrupción en diversas formas, es decir, en la *prebendalización del sistema estatal*». El subrayado es del original. La corrupción institucionalizada a todos los niveles del estado y el gobierno fue el eje del brillante juicio de responsabilidades que entabló Marcelo Quiroga Santa Cruz contra Bánzer en el Parlamento de 1979. Véase Quiroga (1981).

modo que el régimen "modernizador" de Bánzer terminó promoviendo un gigantesco salto adelante en el largo proceso de decadencia política que vivía el país desde la crisis de entreguerras, un salto en el que todas las instituciones de gobierno perdieron la poca capacidad que conservaban para imponerse metas racionales, generalizar intereses y proporcionar legitimidad al sistema⁵⁰.

La dinámica económica y la vida política del país continuaron girando alrededor del estado central, y éste se presentó en mayor medida que nunca en el pasado como una *extensión particularista* de los intereses de la clientela personal del jefe del ejecutivo. El resultado fue un estado crecientemente débil y heterónomo, que *únicamente podía sostenerse expandiendo el gasto que lubricaba las redes clientelares*. En este contexto, no debe extrañar que el gobierno "neoliberal" de Bánzer provocara una grave hipertrofia del sector productivo público y un espectacular crecimiento del aparato burocrático, que pasó de tener 66.000 personas empleadas en 1970 a cerca de 171.000 en 1977.

La drástica reducción de la tasa de crecimiento de la economía en 1977 dejó al desnudo la fragilidad de aquel sistema de dominación, que sin duda tuvo muy poco de "nuevo". Sólo teniendo en cuenta esta peculiar fragilidad institucional del autoritarismo boliviano resulta posible entender la celeridad con que Bánzer cedió a las presiones de la Administración norteamericana en pro de la democratización del régimen⁵¹. El 30 de septiembre de 1977, tan sólo unos días después de su entrevista con Carter en Panamá, el presidente dejó entrever claramente la posibilidad de iniciar una apertura en plazo breve, y el 9 de noviembre anunció oficialmente que las elecciones tendrían lugar en julio de 1978 (Dunkerley, 1987: 201). Se inauguraba así un largo y tortuoso proceso de transición política.

⁵⁰ Malloy y Gamarra (1988: cap.3) calificaron en esta línea al gobierno de Bánzer de "neopatrimonial".

⁵¹ La presencia de tensiones derivadas del déficit estructural de legitimidad en unos regímenes que no pueden ocultar que se basan en la coerción y que representan a un espectro limitado de la sociedad, fue seguramente una característica común de los "nuevos" autoritarismos latinoamericanos y la razón de su tendencia a desencadenar *presiones internas hacia algún tipo de democratización en cuanto se presentaban problemas económicos relativamente graves*. Una defensa general de la preeminencia de los factores internos en el inicio de los procesos de transición puede encontrarse en Whitehead (1988a). La menor capacidad de legitimación de los gobiernos autoritarios explica seguramente su reemplazo generalizado por gobiernos democráticos en las condiciones de crisis económica de los años ochenta, aunque para comprender los plazos y las características de las distintas transiciones sea necesario tener en cuenta los rasgos específicos de cada uno de ellos. De cualquier modo, la trayectoria de Bánzer es un ejemplo extremo de las limitaciones de la solución autoritaria y, por lo tanto, de la falacia de convertir a la presión externa - que en el caso boliviano fue especialmente visible - en la causa primera de la transición. Esta idea, en realidad bastante extendida, ha sido expresada con claridad meridiana por Hinkelammert (1990: 17), para quien la última ola democratizadora en América Latina fue "decretada" por Carter y promovida luego por Reagan, dado que «los movimientos democráticos del continente estaban destruidos y, por tanto, se podía volver a la democracia».

TRANSICIÓN Y CRISIS ECONÓMICA

LA COB, EL "PARTIDO DE LA DEMOCRACIA"

La intención del gobierno militar era desde luego encabezar un proceso de transición controlada, que limitase al máximo la participación autónoma de la sociedad civil y el desarrollo de opciones "indeseables", dejando fuera del juego a las organizaciones populares más poderosas, en particular la COB y la FSTMB, y a los rivales políticos potencialmente más peligrosos. Tras la convocatoria a elecciones se levantó el veto sobre la actuación de los partidos, pero se mantuvo la prohibición de toda actividad sindical independiente y se excluyó de la amnistía a varias de las personalidades más destacadas de la oposición -entre ellas Siles Zuazo y Juan Lechín-, y a los trabajadores despedidos por su actividad política o sindical. Era evidente que los militares en el gobierno pretendían crear un escenario propicio para constitucionalizar el régimen, imitando en buena medida la estrategia que adoptó Barrientos en las elecciones de 1966. Aunque Bánzer, que distaba mucho de contar con un respaldo pleno de sus colegas, tuvo que renunciar a presentar su propia candidatura a la presidencia, consiguió que se nombrara a uno de sus fieles, el general Pereda, "candidato del nacionalismo" al frente de una Unión Nacionalista del Pueblo (UNP) creada para la ocasión a base de las facciones del MNR y FSB que habían permanecido más próximas al régimen.

El gobierno, sin embargo, calculó muy mal la capacidad de reacción de la sociedad civil. Las corrientes subterráneas de oposición, en efecto, demostraron una vitalidad imprevista y consiguieron forzarle a cambiar casi de inmediato las reglas de la apertura. Tan sólo una semana después del anuncio de la amnistía limitada, cuatro mujeres de dirigentes mineros exiliados se encerraron con sus hijos en el Arzobispado de La Paz e iniciaron una huelga de hambre, exigiendo la promulgación de una amnistía irrestricta, la reincorporación al trabajo de todos los trabajadores mineros despedidos por la dictadura, el restablecimiento de las libertades sindicales y la retirada del ejército de los centros mineros. Aquella acción simbólica, iniciada en plenas fiestas navideñas y sin el apoyo de ningún partido político importante, derivó inesperadamente en un amplio movimiento de protesta cívica. El 18 de enero de 1978 alrededor de 1.200 personas se habían unido ya a la huelga de hambre y gran cantidad de grupos y personalidades, ligados mayoritariamente a la Iglesia y a la universidad,

les prestaban un apoyo activo (Jetté, 1989: 68-69)⁵². Las medidas que adoptó el gobierno para limitar el efecto de la acción opositora fracasaron por completo o tuvieron un efecto contrario al deseado: un paro de 24 horas convocado por el aparato sindical para-estatal terminó con la declaración pública de apoyo a la huelga de hambre por parte de los comités sindicales de base, y las escenas con policías fuertemente armados arrastrando a las ambulancias los cuerpos de personas que llevaban 20 días de ayuno no componían desde luego una buena imagen publicitaria para la campaña electoral del partido oficialista (Whitehead, 1988b: 203). Incapaz de aislar al movimiento o de reprimirlo sin un coste intolerable, Bánzer se vio finalmente obligado a acceder a las principales reivindicaciones de los huelguistas, concediendo una amnistía plena y permitiendo la reincorporación a sus empresas de los activistas sindicales despedidos.

*En el nuevo escenario creado por el éxito de la huelga de hambre se produjo una rápida "resurrección" de la sociedad civil*⁵³. Las concesiones arrancadas al gobierno por la movilización social fueron ante todo la señal de salida para los activistas sindicales, que comenzaron a reorganizar los sindicatos de las minas y fábricas y a liquidar los restos del aparato sindical para-estatal en el campo. Las élites campesinas opositoras de filiación katarista consolidaron su hegemonía en los sindicatos campesinos del Altiplano y crearon una Central sindical paralela a la oficialista que decretó inmediatamente la conclusión del pacto militar-campesino (Hurtado, 1986: 321-325), mientras varios grupos vinculados a la izquierda marxista incrementaban sus actividades y su influencia en el valle de Cochabamba, la sede los sindicatos agrarios más poderosos. Aunque la unificación de las élites dirigentes opositoras en la **Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia** (CSUTCB) tendría que esperar todavía un año, a mediados de 1978 era ya evidente que la estructura del pacto militar-campesino se había hundido por completo. La reorganización de los sindicatos obreros, por su parte, apenas presentó problemas, dado el nulo impacto que habían tenido los intentos gubernamentales de corporativizarlos, y los dirigentes tradicionales, encabezados por Juan Lechín Oquendo, se pusieron inmediatamente a la cabeza de la COB y de las Federaciones de rama.

⁵² Para una descripción detallada véase Asociación Pro-Derechos Humanos de Bolivia, *La huelga de hambre*, La Paz, 1978.

⁵³ La expresión está tomada, por supuesto e O'Donnell y Schmitter (1988), pp. 79 ss.

Los partidos políticos recuperaron a los líderes exiliados e intentaron superar su fragmentación formando frentes electorales. Entre las coaliciones que se crearon en la izquierda, la más importante era sin duda la **Unidad Democrática y Popular (UDP)**, encabezada por Hernán Siles Zuazo y que agrupaba a su propio partido, el MNRI, al partido comunista (PCB), al joven y muy activo **Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR)**, y a la principal facción katarista. En el centro-derecha, Paz Estenssoro y Guevara Arze unieron a sus dos sectores movimientistas para formar la **Alianza Democrática de la Revolución Nacional (ADRN)**. El hecho de que el discurso político de Siles y Paz Estenssoro siguiera fundamentalmente anclado en las rancias consignas del nacionalismo revolucionario⁵⁴ no debería ocultar las profundas diferencias que existían entre las plataformas políticas que sostenían las candidaturas presidenciales de los dos viejos caudillos y entre los intereses sociales que aspiraban a representar. El líder de la UDP, en efecto, se había ido identificando progresivamente a partir del golpe de estado de 1971 con las tendencias más populistas del proyecto original del MNR, mientras Paz, aliado de la dictadura en los años más negros de la represión, circulaba notoriamente a la derecha, hacia la vertiente más desarrollista y antipopulista del movimientismo. Pero, ante todo, *Siles había abandonado la secular fobia antimarxista del MNR y había hecho de la alianza con el partido comunista y de la búsqueda del apoyo de las organizaciones obreras un elemento central de su proyecto*⁵⁵.

Las elecciones del 9 de julio de 1978 terminaron en un completo desastre para el régimen, que para ocultar los resultados reales se vio obligado a recurrir a un fraude burdo y de tal magnitud⁵⁶ que el propio candidato militar tuvo que pedir la anulación de unos comicios que según los datos oficiales había ganado por una amplísima mayoría. El hecho fundamental fue que el partido oficialista no había recibido en la medida esperada el voto del campesinado, que en Bolivia resulta decisivo para definir cualquier proceso electoral y

⁵⁴ Sobre el "nacionalismo revolucionario" boliviano como discurso político deben consultarse Antezana (1983) y Mayorga (1985).

⁵⁵ Sobre la evolución de Siles y el significado de su aproximación a las organizaciones de la clase obrera deben verse los sugerentes comentarios de Zavaleta (1983b), pp. 26-27 y 31-32.

⁵⁶ Para dar cuenta de la magnitud y la torpeza del fraude basta con recordar la curiosa evolución de los cómputos parciales del gobierno en los dos días que siguieron a la elección: el 10 de julio las cifras oficiales otorgaban 153.210 a Pereda y 129.063 a Siles; el 11, Pereda alcanzaba 283.824 votos, pero las papeletas a favor de la UDP habían menguado misteriosamente hasta 103.527. Pueden encontrarse abundantes detalles sobre el fraude en Asociación Pro-Derechos Humanos de Bolivia, *El fraude electoral, un atentado contra la voluntad popular. Elecciones nacionales del 9 de julio de 1978*, La Paz, 1979.

que hasta entonces había sido en los hechos un voto cautivo para cualquiera que detentase el poder del estado. *La inesperada victoria de la izquierda en las zonas rurales* del departamento de La Paz fue sin duda la prueba más contundente de la extensión y profundidad que había alcanzado la oposición al autoritarismo militar, pero el régimen descubrió además que conservaba un apoyo muy limitado en las ciudades, donde ya estaban comenzando a sentirse los efectos de la recesión económica. Aunque resulta imposible conocer las cifras reales de votación de las elecciones de junio de 1978, puede conjeturarse que la UDP de Siles Zuazo debió obtener una mayoría relativa, y ello era desde luego un resultado inaceptable para los militares en el gobierno.

Tras el escandaloso final de las que deberían haber sido elecciones fundacionales del nuevo régimen se inició un período de débiles gobiernos de transición, sometidos a las presiones cruzadas de la crisis económica, las rivalidades interpartidarias, la movilización de los agentes sociales y las maniobras de las distintas facciones de las FF.AA.⁵⁷. Entre julio de 1978 y octubre de 1982, Bolivia tendría seis presidentes militares y dos presidentes civiles; cinco de ellos -Pereda, Guevara, Gueiler, García Meza y Torrelio- serían derrocados por sendos golpes de estado, otros dos -Natusch y Vildoso- serían forzados a retirarse por amplias movilizaciones desde abajo, mientras sólo uno -Padilla- abandonó el poder regularmente tras convocar un proceso electoral.

CUADRO 3.4

PRESIDENTES DE BOLIVIA: 1978-1982

Presidente	Período en el cargo
General Hugo Bánzer Suárez	Agosto 1971-Julio 1978
General Juan Pereda Asbún	Julio 1978-Noviembre 1978
General David Padilla Arancibia	Noviembre 1978-Agosto 1979
Walter Guevara Arze	Agosto 1979-Noviembre 1979
Coronel Alberto Natusch Busch	1-16 Noviembre 1979
Lydia Gueiler Tejada	Noviembre 1979-Julio 1980
General Luis García Meza	Julio 1980-Agosto 1981
General Celso Torrelio	Agosto 1981-Julio 1982
General Guido Vildoso Calderón	Julio 1982-Octubre 1982
Hernán Siles Zuazo	Octubre 1982-Agosto 1985

⁵⁷ En este contexto se generalizaron interpretaciones extremadamente pesimistas sobre la posibilidad de que la transición llegara a buen término. Dos ejemplos notables son los artículos de Whitehead (1988b) y Mayorga (1985).

El 21 de julio de 1978, tan sólo dos días después de la anulación de las elecciones, el general Pereda, candidato militar a la presidencia, derrocó a Bánzer en un golpe de estado incruento, pero su gobierno, enfrentado a una sociedad civil en efervescencia y con la mitad de las FF.AA. en abierta rebelión, fue desde el principio un experimento inviable. Cuatro meses más tarde, en la noche del 23 al 24 de noviembre, el sector "institucionalista", que había encabezado durante un lustro la oposición militar a Bánzer, puso en su lugar al general Padilla al frente de un gobierno explícitamente provisional que se fijó como única tarea preparar unas nuevas elecciones para julio del año siguiente⁵⁸. El objetivo de los "institucionalistas" era, como lo fue en el golpe frustrado de 1974, terminar con la implicación directa de las FF.AA. en la política civil. Esta vez no hubo candidato oficial a la presidencia, y los militares optaron en cambio por apoyar a la alternativa civil más aceptable entre las que parecían tener perspectivas de éxito. Apostaron por la figura de Paz Estenssoro, esperando que el antiguo prestigio de su nombre como "Tata" de los campesinos⁵⁹ pudiera contrarrestar la sorprendente votación que había obtenido la izquierda en las zonas rurales, especialmente en el departamento de La Paz.

La nueva estrategia del sector militar en el gobierno, sin embargo, tampoco fue capaz de producir una solución estable. *Las elecciones del primero de julio de 1979 terminaron con un virtual empate entre los dos grandes líderes de 1952, Paz Estenssoro y Siles Zuazo*, pese a que la votación del primero fue al parecer generosamente hinchada⁶⁰. Bánzer, al frente de su recién creada **Acción Democrática Nacionalista (ADN)**, ocupó un respetable tercer lugar. La posibilidad de que cualquiera de ellos accediera a la presidencia dependía de un acuerdo parlamentario que no se produjo, y el bloqueo mutuo derivó en una solución de compromiso: un nuevo gobierno provisional, encabezado esta vez por Guevara Arze,

⁵⁸ Para un relato de los gobiernos de Pereda y Padilla, véase Dunkerley (1987), pp. 212-216. También tiene interés consultar las memorias del propio Padilla (1980).

⁵⁹ René Zavaleta (1983b: 37) recuerda que «era, el de Paz Estenssoro, el nombre que conocían los campesinos de la reforma agraria, que a la hora de la *reciprocidad* habían exclamado: "AMA KONKAWAICHU VICTOR PAZ"» -en aymara: «no nos olvides Victor Paz»-.

⁶⁰ La comparación de las cifras oficiales con el 67 por ciento de los votos escrutados con los resultados finales parece suficiente para confirmar la sospecha de que la votación de Paz Estenssoro fue hinchada artificialmente para bloquear de nuevo el acceso de Siles al gobierno. El 5 de julio, Siles contaba con 469.575 votos frente a 374.843 de Paz, pero en los resultados finales que se publicaron el 31 de julio la votación de ambos se había igualado, y dos candidatos contaban con 528.696 y 527.184 votos respectivamente.

presidente del Senado, se encargaría de preparar una tercera convocatoria electoral para el año siguiente. El breve gobierno de Guevara se caracterizó ante todo por las disputas entre un ejecutivo que encaraba la necesidad de comenzar a hacer frente a la gravísima crisis económica y cuyo presidente adoptaba a menudo actitudes impropias de su condición de interinidad, y un Parlamento paralizado por la demagogia⁶¹ y las rencillas entre los partidos políticos que competían por ganarse el apoyo ciudadano.

En el Parlamento, varios grupos conspiraban además con elementos de las Fuerzas Armadas agrupados en torno al coronel Natusch, maniobrando para obtener una revocación del mandato de Guevara y propiciar la intervención militar. El nuevo golpe de estado se produjo finalmente en la madrugada del 1 de noviembre, adelantándose al parecer a los planes de la trama civil-militar⁶², y el coronel Natusch se encontró al frente de un levantamiento precipitado que no podría contar con el aval de los "padres de la Patria" y que quedaría huérfano de apoyo civil, más allá de la colaboración de una reducida *clique* de políticos movimientistas⁶³. Pese a que Natusch anunció su intención de mantener el estado derecho, respetando las libertades sindicales y la autonomía de todas las instituciones de la sociedad civil, tuvo que afrontar desde el primer momento una decidida resistencia cívica encabezada por la COB. La Central sindical convocó de inmediato una huelga general de 24 horas que poco después se convirtió en indefinida, paralizando por completo el país y agrupando en torno suyo todas las acciones de protesta contra la intervención militar. El gobierno, que había hecho todo lo posible por presentarse como una nueva expresión del nacionalismo populista dispuesto a colaborar con la izquierda y los sindicatos y que sin duda no esperaba una respuesta semejante, reaccionó con gran violencia, decretando la ley marcial y la censura de prensa y desatando una represión indiscriminada en las calles de la capital

⁶¹ El juicio de responsabilidades entablado en el Parlamento por Marcelo Quiroga contra Bánzer se convirtió muy pronto, independientemente de cuáles fueran las intenciones de su impulsor, en una espiral de intervenciones anti-militaristas demagógicas y absolutamente irresponsables en el contexto de transición política que vivía el país. Es fácil sospechar, sin embargo, que detrás de más de uno de los ejercicios de oratoria anti-militarista que llenaron las sesiones del Parlamento -no es el caso, por supuesto, de Marcelo Quiroga Santa Cruz- se ocultaba precisamente la intención de provocar una nueva interrupción del proceso democrático.

⁶² El golpe se desencadenó a partir de la reacción de la guarnición militar de La Paz ante la destitución de uno de sus jefes. Véase para esto Alcaraz (1983).

⁶³ Entre los principales colaboradores civiles de Natusch se encontraban dos destacados dirigentes del MNR de Paz Estenssoro y tres del partido de Siles Zuazo, entre ellos el candidato a la vicepresidencia por la UDP en las elecciones de 1978.

que produjo más de 200 muertos y desaparecidos en sólo dos días: fue la "Masacre de Todos los Santos"⁶⁴.

La COB, pese a haber recibido una oferta de Cogobierno que incluía el compromiso de que la organización obrera podría definir la política económica del régimen a cambio de su aprobación a la disolución del Parlamento⁶⁵, se mantuvo firme en la condena del golpe, encabezando lo que era literalmente un acoso de la sociedad civil sobre un gobierno cada vez más aislado y dividido. El 7 de noviembre la central sindical decidió levantar temporalmente la huelga general e iniciar conversaciones con Natusch, pero terminó rechazando la nueva propuesta gubernamental de participar en un "triunvirato" junto al propio cabecilla golpista y una representación del Parlamento. Pese a que al parecer existieron algunas dudas iniciales, la actitud que adoptó en los hechos la COB negándose a negociar la interrupción del proceso democrático a cambio de importantes ventajas corporativas, resultó mucho más consecuente con los anhelos democráticos de los sectores movilizados de la sociedad civil que la de los representantes parlamentarios, que demostraron estar mucho más dispuestos a transigir. En cualquier caso, el arreglo institucional planeado por el gobierno no obtuvo la aprobación de ninguna de las partes, y Natusch tuvo que acceder a retirarse tan sólo dos semanas después del golpe, dejando detrás un absurdo baño de sangre y llevándose como único trofeo la cabeza de Guevara Arze, que fué reemplazado por Lydia Gueiler, hasta entonces presidente del Congreso.

La movilización popular de noviembre de 1979 y la humillante derrota del experimento militar de Natusch tuvieron un fuerte impacto en la imagen y las percepciones de los principales actores de la transición. Ante todo realzó el papel de la COB, que parecía estar en el cénit de su poder y que emergió del conflicto como el único baluarte sólido de la democracia representativa. Su imagen de fortaleza y coherencia se agrandaba sobre el fondo de un sistema de partidos debilitado y dividido, incapaz de alcanzar acuerdos en momentos críticos para la supervivencia del sistema, y varios de cuyos dirigentes principales ofrecían además un espectáculo de connivencia e incluso colaboración directa con los militares golpistas. Cuando la central sindical afirmó en su balance de los acontecimientos de noviembre que

⁶⁴ Asociación Pro-Derechos Humanos de Bolivia, *La masacre de Todos los Santos*, La Paz, enero de 1980.

⁶⁵ Dunkerley (1987), p. 224. Al parecer, Natusch ofreció concretamente la nacionalización de la minería mediana -es el nombre que se da en Bolivia a las grandes empresas mineras privadas-, que era una vieja reivindicación de los sindicatos, y un aumento general de sueldos y salarios.

«los partidos no tuvieron en ningún momento capacidad para defender el proceso democrático», se limitó a constatar un hecho que era ya evidente para todos⁶⁶. La división y el desarraigo de los partidos contrastó fuertemente con la capacidad de la Central sindical para movilizar a los sectores populares y a la clase media, encabezando su oposición a la dictadura y expresando el hastío y los anhelos de cambio de todo el "pueblo" de Bolivia⁶⁷.

El débil gobierno de Lydia Gueiler, presionado por el FMI y por la imposibilidad real de continuar dando la espalda a la crisis económica, se vio forzado a dictar un conjunto de medidas de ajuste que implicaba una fuerte reducción del ingreso real de los asalariados urbanos y fundamentalmente de los campesinos. La dirección COB actuó con cautela, convocando a una manifestación de protesta e intentando controlar las reacciones de sus sindicatos, pero la recién creada **Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)**⁶⁸, afiliada a la COB, respondió a las medidas, que en realidad afectaban mucho más al campesinado tradicional que a los trabajadores urbanos, decretando un bloqueo general de caminos que obtuvo una participación masiva e inesperada. Durante una semana, las rutas de acceso a las mayores ciudades del país permanecieron cerradas, y se produjo una grave crisis de abastecimiento que amenazaba con crear un escenario propicio para otra intentona golpista. *Nuevamente, la actitud que asumieron los dirigentes de la COB en la crisis resultó decisiva para la continuidad del proceso de democratización.* Para desazón de quienes creyeron ver en la gigantesca movilización campesina la posibilidad de abrir una auténtica coyuntura revolucionaria⁶⁹, el Comité Ejecutivo de la central sindical se negó a

⁶⁶ Comunicado de la COB, citado en Lazarte (1989), p. 151.

⁶⁷ René Zavaleta (1983b: 35) afirmaba a este respecto que en noviembre de 1979, «las masas proclaman el poder de la COB y no el poder de Siles Zuazo».

⁶⁸ La CSUTCB fue fundada en el Primer Congreso de Unidad Campesina, celebrado en La Paz el 25 y 26 de junio de 1979. El Congreso, organizado por la COB, reunió a representantes de las distintas tendencias del sindicalismo campesino independiente y creó una confederación unitaria que ocupó inmediatamente el lugar de la vieja central campesina para-estatal. Una breve reseña de las distintas tendencias que confluyeron en la formación de la CSUTCB puede encontrarse en Albó y Barnadas (1990), pp. 251-258.

⁶⁹ La obra de James Dunkerley ejemplifica bien esta interpretación de los hechos, muy extendida en los círculos académicos afines a la izquierda radical, y creo que merece la pena citar *in extenso* su argumento: «Al tomar esta línea (presionar para que la CSUTCB llegara a un acuerdo con el gobierno, E.I.), los dirigentes de la COB no solamente se comprometían ellos y a sus miembros con la senda electoralista, sino que se abstuvieron consciente o inconscientemente de aprovechar una oportunidad sin igual para lanzar un ataque importante contra el sistema económico vigente, que estaba aún más vulnerable que a principios de 1971. Frente a un Ejército dividido y desmoralizado y ante una administración muy poco representativa y demasiado atemorizada, la decisión de seguir el ejemplo campesino casi con certeza habría originado una crisis política profunda y abierto la posibilidad de ver realizados

apoyar activamente el bloqueo y asumió en cambio un rol de mediación entre el gobierno y la Confederación campesina, presionando fuertemente a favor de la suspensión de las medidas de fuerza y de la pronta consecución de una salida negociada, que finalmente se alcanzó el 7 de noviembre.

La suerte del programa democratizador dependía casi en exclusiva de las decisiones que adoptaran la COB y las FF.AA., y era evidente que el gobierno provisional no tenía capacidad alguna para influir en ellas. En una confesión de impotencia que no era sino el reconocimiento de la realidad de las cosas, Lydíá Gueiler convocó en abril de 1980 a representantes de las dos organizaciones y firmó con ellas un auténtico pacto "intergubernamental" por el que ambas se comprometieron a apoyar la continuidad del proceso de transición política (Malloy y Gamarra, 1988: 142). *La COB*, que había demostrado ya sobradamente su disposición a cumplir con la parte que le correspondía en el trato, *volvió a asumir entonces el papel de eje de la alianza democratizadora* al agrupar en torno suyo a los mayores partidos políticos del país, con la sólo excepción de la ADN de Bánzer, en un **Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE)**. El interés de los líderes sindicales por promover un acuerdo interpartidario respondía a una muy razonable preocupación por las actitudes públicas que estaban adoptando varios representantes del otro gran actor implicado. De hecho, una buena parte de los mandos de las FF.AA. se había mantenido en una situación de abierta rebeldía frente al gobierno de Gueiler desde el momento mismo de su toma de posesión, desconociendo sus nombramientos militares y la autoridad del ministerio de interior (Dunkerley, 1987: 227-228). Los militares de la línea dura actuaban de un modo cada vez más estridente, y a lo largo de los primeros meses de 1980 desarrollaron una amplia campaña de intimidación, que no excluyó el asesinato político⁷⁰, mientras maniobraban con éxito para aumentar su influencia en el seno de las FF.AA.

Las elecciones del 29 de junio de 1980, las primeras realizadas con unas garantías mínimas de fiabilidad, arrojaron finalmente el resultado que los grupos de poder habían

muchos de los objetivos de la tesis de la COB de 1970 (esto es: el socialismo, E.I)». Véase Dunkerley (1987), p. 230.

⁷⁰ El asesinato en marzo de 1980 del jesuita Luis Espinal fue el primero y el de mayor contenido simbólico. Conspicuo activista de los derechos humanos, Espinal dirigía el prestigioso semanario *Aquí*, que se había distinguido por publicar informaciones bien documentadas sobre la actividad del sector militar golpista, denunciando la formación de grupos paramilitares.

intentado evitar a lo largo de los dos últimos años: una victoria contundente de la Unidad Democrática y Popular (UDP) que, aunque no se tradujo en una mayoría parlamentaria, hacía muy difícil justificar un nuevo bloqueo de su acceso al gobierno. A poco de conocerse las primeras cifras, Paz Estenssoro declaró que su partido apoyaría la elección de Siles, que quedaba así garantizada. Pero la combinación del triunfo electoral de la izquierda, reforzado ahora por el importante ascenso del **Partido Socialista (PS-1)** de Marcelo Quiroga, que se había destacado ante todo por su vehemente empeño en juzgar los crímenes políticos de los militares, y la presencia de un movimiento sindical con unas credenciales muy radicales y con gran capacidad de convocatoria, dibujaba un escenario incierto que una gran parte de los mandos de las Fuerzas Armadas y de los grupos de poder no estaban dispuestos a asumir.

CUADRO 3.5

ELECCIONES DEL 29 DE JUNIO DE 1980

Candidatos	Partido, frente o coalición	Votos	%	Escaños
Hernán Siles	UDP	507.173	38,74	53
Víctor Paz	MNRA	263.706	20,15	40
Hugo Bánzer	ADN	220.309	16,80	25
Marcelo Quiroga	PS-1	113.959	8,71	11
<u>Otros</u>				
Democracia Cristiana (FDR-NA)				5
Formaciones de la derecha movimientista (PRA,MNRU)				5
Falange Socialista Boliviana (FSB)				2
Indianistas (MITKA, MITKA-1)				1

Fuente: Corte Nacional Electoral.

Su previsible respuesta⁷¹ no tardó mucho en producirse: dos semanas después de la jornada electoral, el 17 de julio de 1980, un nuevo golpe de estado derrocó al gobierno constitucional de Lydia Gueiler y puso en su lugar a una junta militar encabezada por el general Luis García Meza. La camarilla golpista consiguió paralizar por completo a la sociedad civil mediante la aplicación de *una violencia sistemática desconocida hasta entonces en la historia de Bolivia*. Los militares de línea dura habían sacado sus propias conclusiones del fracaso de Natusch, que tras desatar una matanza indiscriminada al calor del enfrentamiento callejero, en el estilo más tradicional del golpismo boliviano, había naufragado frente a la resistencia de una sociedad civil cuyas organizaciones permanecieron intactas. Esta vez, en buena parte gracias a la ayuda de los "asesores argentinos", la represión fue más selectiva y enormemente eficaz. Una semana después del golpe, únicamente los sindicatos mineros continuaban ofreciendo una resistencia organizada al régimen, que sólo concluyó cuando los campamentos fueron tomados uno a uno por el ejército con abundante apoyo de la aviación⁷².

La intervención militar contó inicialmente con el apoyo entusiasta de amplios sectores de la clase empresarial⁷³ y de la derecha política representada en el partido de Bánzer, quien no se privó de afirmar que el golpe abría la posibilidad de crear «un nuevo modelo político que desemboque en una democracia a la boliviana y no importada»⁷⁴. Sin embargo, esta vez aparecieron varios elementos nuevos que habían estado gestándose en los últimos años, y lo

⁷¹ Las continuas expresiones de apoyo de los representantes de la administración estadounidense al proceso democrático y sus advertencias sobre las consecuencias que tendría cualquier intento de interrumpirlo, tranquilizaron en exceso a la izquierda, que tendía a atribuir una omnipotencia absoluta al vecino del norte en la determinación de la política local, y en particular de las decisiones de la "reacción", y que por lo tanto no se tomó demasiado en serio los exabruptos de los militares de línea dura contra el "intervencionismo" norteamericano.

⁷² La masacre perpetrada en los centros mineros de Caracoles y Viloco por los soldados del batallón Max Toledo, al parecer totalmente ebrios, fue sin duda el episodio más repugnante de la ofensiva militar y contribuyó en mucho a paralizar la resistencia de las milicias sindicales en los otros campamentos. Los detalles, verdaderamente espeluznantes, de la represión en las minas durante el gobierno de García Meza, en Asociación Pro-Derechos Humanos de Bolivia, *La heroica resistencia de los mineros de Bolivia*, Lima, 1981.

⁷³ Un buen ejemplo del apoyo inicial de los empresarios al sangriento golpe de García Meza es una solicitada que publicaron los bancos bolivianos en el *Wall Street Journal* del 3 de octubre, agradeciendo a los uniformados por haber rescatado de nuevo a una nación «sumergida en un clima de frustración política, trastorno social, en un peligroso desequilibrio económico y al mismo tiempo estancamiento de la economía»; todo ello por el perverso empeño de democratizar Bolivia atendiendo a una presión internacional que desconocía por completo las peculiaridades locales. Citado en Whitehead (1988b), p. 80.

⁷⁴ Declaración de Bánzer a la prensa el 11 de septiembre de 1980, citada por Lavaud (1981), p. 102.

hicieron de un modo tan brutal que la mayoría de los actores que habían respaldado hasta entonces la solución militar terminaron convenciéndose de su absoluto agotamiento. En primer lugar, García Meza y sus seguidores sólo pudieron hacerse con el poder después de ejecutar dos auténticos golpes internos en las Fuerzas Armadas que subvirtieron la cadena jerárquica de mando, lo que revelaba desde el principio el alarmante grado de descomposición a que había llegado la institución armada y era sin duda un dato especialmente preocupante para los sectores de los grupos dominantes con una mayor visión estratégica. La desintegración institucional de las FF.AA. se agravó con la vinculación directa del régimen con las mafias del narcotráfico, personificada en la figura del ministro del interior, Luis Arze Gómez, y con la participación abierta en sus acciones represivas de criminales convictos⁷⁵. Estos hechos convirtieron al gobierno de Bolivia en un paria internacional, amenazando gravemente las afiliaciones tradicionales del país en el sistema mundial de estados. Finalmente, y por primera vez desde los tiempos de Villarroel, la represión ejercida por un gobierno militar atentó directamente contra la clase media urbana⁷⁶. En general, el estilo de actuación de los grupos paramilitares del ministerio del interior, reclutados en el submundo del lumpenproletariado paceño y en las mafias del narcotráfico, *acabó dejando suficientemente claro para todos que los militares habían alcanzado un grado de descomposición y corrupción tales que se habían convertido en un factor absolutamente imprevisible.*

Los 12 meses de gobierno del "dictador delincuente" consiguieron unir en la oposición a todas las fuerzas de la sociedad civil, *haciendo que por primera vez el empresariado se decantase nítidamente en favor de opción democrática.* La **Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)**, que se había fortalecido en los años anteriores hasta convertirse en una organización verdaderamente representativa del conjunto del empresariado nacional, adoptó a partir de entonces un alto perfil de actuación, presionando de un modo continuo para la pronta adopción de una salida constitucional. Enfrentado a todas las fuerzas de la sociedad civil, sometido a un aislamiento internacional casi absoluto y situado además en el

⁷⁵ Es sabido que aparte de emplear a conocidos representantes del hampa local, el aparato represivo del gobierno de García Meza contó con la colaboración activa de varios criminales de guerra nazis -entre los que destacaba sin duda Klaus Barbie- y terroristas neofascista italianos buscados por el atentado en la estación de Bolonia.

⁷⁶ Episodios como el asesinato a sangre fría de 8 miembros de la dirección nacional del MIR el 15 de enero de 1980, rompieron brutalmente las reglas tradicionales de la lucha política entre los miembros de la élite boliviana.

centro de un fuerte conflicto regional⁷⁷, García Meza se vio finalmente forzado a dimitir en agosto de 1981, dejando al país al borde de una guerra civil entre las facciones de unas Fuerzas Armadas que se habían desintegrado ya por completo⁷⁸. Un vez resuelta provisionalmente la crisis de sucesión, los militares en el gobierno iniciaron una ruta que sólo podía concluir en un nuevo repliegue a los cuarteles.

El proceso, desde luego, no iba a carecer de tensiones. Los vicios que emergieron tras el golpe de García Meza habían estado incubándose desde tiempo atrás y estaban sólidamente arraigados en el seno la institución armada. El gobierno de Bánzer multiplicó la división de las FF.AA., extendió la corrupción y acostumbró a los oficiales a las ventajas del acceso directo a las redes prebendales del estado, y seguramente la participación de los militares en el negocio del tráfico de cocaína también venía de entonces. En estas condiciones, no era fácil que amplios sectores de las FF.AA se resignaran a abandonar el poder y menos aún que se llegara pronto a un acuerdo sobre la forma y los plazos de la transmisión del mando a los civiles, que tardaría todavía algo más de un año en producirse. Pero tras la salida de García Meza nadie pensaba ya seriamente que los militares pudieran hacer algo más que preparar su retirada de la escena política.

El hecho es que después de tres años de bloqueo mutuo y ensayos agónicos, los agentes sociales básicos y las principales fuerzas políticas habían terminado aceptando una misma solución. La izquierda política y los sindicatos apostaron desde el principio con bastante coherencia⁷⁹ por el respeto del orden constitucional: con independencia de sus

⁷⁷ García Meza había intentado romper el aislamiento social de su gobierno aprobando la ejecución del proyecto azucarero de San Buenaventura, que debía colmar la vieja aspiración paceña de establecer un polo de desarrollo en el norte del departamento. En Santa Cruz el proyecto siempre había sido considerado como una amenaza para su propia industria azucarera, que era uno de los pilares de la reciente prosperidad del departamento, y la noticia desencadenó una violenta oposición de los poderosos empresarios cruceños, que movilizaron a la población local y crearon un foco de tensión permanente con el gobierno.

⁷⁸ Conviene conocer algunos hechos para tener una imagen de las dimensiones reales de la descomposición de las Fuerzas Armadas. A primeros de junio de 1981, 14 de los 18 miembros del Alto Mando militar habían votado ya a favor de exigir la renuncia del presidente; el 27 de junio, García Meza consiguió abortar un golpe que ya se había iniciado y que contaba con un amplio apoyo a base de repartir más de 2 millones de dólares a 26 oficiales implicados; el 3 de agosto se produjo un nuevo golpe en Santa Cruz, y al día siguiente, después de ser informado de que seis de las nueve guarniciones del país pedían su dimisión, el presidente se resignó a abandonar el cargo; los rebeldes, sin embargo, exigieron una renovación total de los mandos superiores, que no llegó a producirse.

⁷⁹ La principal excepción fue el comportamiento del partido comunista tras el golpe de Natusch, cuando la mayoría de sus dirigentes criticaron a quienes a su entender se aferraban dogmáticamente al respeto de la Constitución privando al movimiento obrero de la posibilidad de aprovechar las oportunidades que podría ofrecerle la colaboración con un dictador de intenciones "progresistas" que el movimiento obrero participase en la toma de

diferentes estrategias en el medio plazo y de los diversos grados de compromiso con los procedimientos de la democracia política, la abrumadora mayoría de los grupos coincidieron en afirmar la ausencia de vías alternativas de acceso al poder y la necesidad de aprovechar las oportunidades que debería abrir en un sistema representativo su propio caudal electoral o el de fuerzas políticas sobre las que cabría ejercer una fuerte influencia. Los intereses empresariales y alguna de las organizaciones políticas de la derecha que los representaban⁸⁰ tuvieron que esperar en cambio a la experiencia caótica de García Meza para convencerse de que la reconstrucción de algún tipo de autoridad central capaz de establecer el horizonte mínimo de certidumbre necesario para la continuidad del proceso de acumulación sólo podría alcanzarse con la instalación de un régimen constitucional que, por el momento, debería estar encabezado por Siles Zuazo y su coalición de centro-izquierda.

Finalmente fue la movilización de los actores sociales, encabezados de nuevo por la COB pero ahora también con una participación muy activa de la organización empresarial, la que determinó el momento y la forma de la transmisión del mando al primer presidente democrático, arrojando una vez más a la basura el calendario de los militares. El 16 de septiembre de 1982, la dirección nacional de la COB, sometida a una fuerte presión de las bases, decretó una huelga general indefinida que paralizó por completo al país. Al día siguiente, el general Vildoso presentaba su renuncia, invitando a los parlamentarios electos en 1980 a inaugurar sus sesiones el 1 de octubre (Jetté, 1989: 176). El 5 de octubre de 1982 el Parlamento eligió Presidente por amplia mayoría a Hernán Siles Zuazo, poniendo punto y aparte a un tortuoso proceso de transición que había presenciado tres elecciones, nueve gobiernos y dos golpes de estado enormemente sangrientos en poco más de 4 años.

decisiones políticas. Véase Jetté (1989), p. 144.

⁸⁰ Notoriamente la Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido creado por Hugo Bánzer en 1979 para defenderse del juicio de responsabilidades que había iniciado contra el Marcelo Quiroga en el Parlamento y que, como hemos anotado arriba, apoyó con entusiasmo el golpe de García Meza.

EL HUNDIMIENTO DEL "CENTRO" MINERO, LA DEUDA, Y LA ESPIRAL INFLACIONARIA

Por debajo del proceso de transición política estaba teniendo lugar la crisis económica más profunda de la historia reciente de Bolivia. En el modelo de desarrollo que surgió de las transformaciones revolucionarias de 1952, la transferencia de los excedentes de las empresas públicas de la minería y los hidrocarburos era la principal fuente interna de recursos para financiar los ensayos de diversificación productiva, las inversiones en infraestructura y la expansión del consumo interno. La evolución de los excedentes del sector primario-exportador determinaba por lo tanto el funcionamiento del conjunto de la economía (Vega, 1987: 52). Es el caso de la industria manufacturera, que experimentó un notable crecimiento durante los años setenta: producía exclusivamente para el mercado interno y dependía por completo de las divisas generadas por la minería y los hidrocarburos para mantener las importaciones no sólo de toda la maquinaria y equipo que utilizaba, sino también de gran parte de las materias primas que consumía en el proceso de producción.

Dado su lugar estratégico en el modelo de desarrollo, la continua disminución en los volúmenes de extracción de minerales e hidrocarburos en la segunda mitad de los años setenta puede tomarse como el indicador más visible tanto del carácter estructural como de los determinantes internos de la crisis económica boliviana (R. Morales, 1985: 18). A finales de la década de los setenta era ya un hecho evidente que la continua transferencia de excedentes al conjunto de la economía nacional había terminado por bloquear las posibilidades de crecimiento de la industria minera. La ausencia crónica de inversión en la renovación de equipo y en la ampliación de operaciones derivó inevitablemente en una continua caída de la actividad, debida al agotamiento de los antiguos yacimientos y a la reducción progresiva de la ley de cabeza del mineral.

Desde 1978 la producción de minerales registró un ritmo acelerado de disminución hasta llegar en 1982 a un nivel del 78% de lo que se producía en 1975. El volumen de las exportaciones de estaño era ya en 1978/80 un 11% inferior en términos reales a la de 1970/-72, y el total de exportaciones minerales un 8% menor. El auge del petróleo, como vimos, había resultado especialmente efímero, y a partir de 1980 las ventas externas se suspendieron por completo para evitar el agotamiento de las reservas. La agroindustria para la exportación de las tierras bajas del Oriente concluyó también muy pronto su ciclo expansivo. Su

crecimiento, que fue presentado como uno de los mayores logros de la "Nueva Bolivia" de Bánzer, se había basado exclusivamente en la expansión de la frontera agrícola, en la recepción de un crédito público abundante y barato y en la bonanza conyuntural de los precios. El resultado fue una agricultura extensiva y depredadora, de muy baja productividad y fuertemente especulativa, que no estaba en condiciones de competir en las nuevas condiciones del mercado de los años ochenta⁸¹.

CUADRO 3.6

Indices del volumen de las exportaciones, 1960-1982. (Bolivia y países seleccionados)

Pais	1960	1965	1970	1975	1978	1980	1982
Bolivia	56.9	65.4	100	119.4	121.3	115.0	108.2
Argentina	66.2	89.4	100	7.8	171.1	147.8	168.7
Brasil	51.4	64.0	100	157.9	193.5	265.1	308.0
Chile	77.0	98.5	100	126.2	170.7	221.9	242.4
México	76.1	99.9	100	119.9	192.0	278.9	405.9
Perú	73.5	92.9	100	71.5	99.8	106.8	114.5

Fuente: CEPAL, *Anuario Estadístico de América Latina 1985*.

A pesar de los altos precios de las materias primas, los setenta fueron por lo tanto una "década perdida" para el desarrollo físico y la diversificación del sector exportador boliviano, un hecho que contrasta fuertemente tanto con lo ocurrido en la década anterior como con la evolución de la mayoría de los países del subcontinente en aquéllos años (Cuadro 3.6). Tan sólo con el inicio de la venta de gas natural a Argentina en 1972 se introdujo un cambio significativo en la inserción comercial externa del país, y el gas fue adquiriendo una importancia creciente hasta convertirse, a partir de 1982, en el principal rubro de su canasta de transables, por encima del estaño. Pero la incorporación del nuevo producto, por un lado, no fue suficiente para compensar la caída global de las exportaciones y, por otro, su desarrollo presentaba problemas nuevos. En particular, debido a la rígida estructura bilateral y monopólica de su comercio los ingresos por exportación de gas natural resultaban muy erráticos y dependían de un modo crítico de la situación económica y política de las dos

⁸¹ Para las limitaciones del sector agroexportador boliviano ver Ibarnegaray (1992).

partes implicadas, como comprobaría muy a su pesar el primer gobierno democrático⁸².

Aunque la caída en la producción de los principales rubros de la canasta de transables produjo ya desde 1978 una reducción sustancial en el ritmo de crecimiento económico, el deterioro productivo del sector exportador había podido compensarse en buena parte hasta 1980 gracias al mantenimiento de unos precios internacionales relativamente favorables. Pero a partir de entonces comenzaron a sentirse los efectos de la depresión de la demanda de productos primarios en el mercado mundial, que provocó una fuerte caída en la cotización de los minerales bolivianos (Cuadro 3.7) y de la mayor parte de sus exportaciones no tradicionales⁸³. El impacto combinado de la reducción en los volúmenes y en los precios de las exportaciones llevó inevitablemente a una caída muy significativa del valor total de las exportaciones en los dos años que precedieron al ascenso del primer gobierno democrático: los 941 millones de dólares que ingresaron al país por ese concepto en 1980 se habían reducido en 1982 a 827.

CUADRO 3.7

Índice de precios de los principales minerales que exporta Bolivia.
(Base 1980=100)

	Estaño	Cobre	Plomo	Zinc	Bismuto	Wolfram	Antimonio	Plata
1978	75	63	72	76	87	100	68	25
1979	89	90	128	100	95	96	88	49
1980	100	100	100	100	100	100	100	100
1981	84	81	80	114	85	100	93	51
1982	76	68	61	108	62	75	83	37
1983	77	73	47	103	65	55	61	54

Fuente: Rolando Morales (1985), p. 171. Elaborado con datos del Boletín Estadístico No. 249 del Banco Central de Bolivia.

⁸² Tras el desencadenamiento de la crisis de la deuda y el agravamiento de sus desequilibrios macroeconómicos, la Argentina comenzó a acumular rezagos en el pago de las facturas del gas boliviano. La mora alcanzaba ya a principios de 1983 un valor de 243.4 millones de dólares, aproximadamente un 8% del PIB boliviano. A partir de septiembre del mismo año ambas partes acordaron que la Argentina pagaría el 50% de las facturas del gas en bienes y servicios, lo que suponía una drástica reducción en el ingreso de divisas para el gobierno democrático de Bolivia. Véase Morales et.al. (1992), p. 79.

⁸³ Entre 1980 y 1983, el precio del azúcar disminuyó en un 50%; el del café 49%; el de la castaña, 58%; el de los cueros, 69%; el de la goma, 61%; el de las maderas, 7%. Ver R. Morales (1985), p.18.

Sin embargo, resulta evidente que la evolución negativa del sector exportador no puede explicar por sí sola la dimensión, los ritmos y las características específicas de la crisis económica de los años ochenta. En primer lugar, Bolivia no sufrió al inicio de la crisis una caída en los términos del intercambio comparable a la que enfrentaron otros países de América Latina. Por el contrario, los precios del intercambio se mantuvieron bastante estables en la primera mitad de la década y sólo se desplomaron a partir de 1985. Por otro lado, hemos visto que el declive del sector exportador, y en concreto de la minería pública, es un proceso de muy larga data que estuvo en el origen de todas las crisis que atravesó el país a lo largo de su historia contemporánea⁸⁴. En realidad, los excedentes del sector primario-exportador no fueron nunca suficientes para promover el crecimiento, de modo que el país había mantenido siempre una fuerte dependencia del ahorro externo para sostener sus niveles de inversión y consumo⁸⁵.

Lo que tuvo lugar en la segunda mitad de los años setenta fue una profundización de esta tendencia secular, junto a un relativo desplazamiento del origen de los créditos desde los fondos de ayuda de EE.UU y los organismos multilaterales hacia la banca privada, que adquirió una participación cada vez mayor en la deuda externa de Bolivia. En estas condiciones, no debe extrañar que el mayor impacto de la alteración en las condiciones marco de la economía internacional a principios de los años ochenta sobre la economía boliviana viniera precisamente del lado del endeudamiento externo, y que el principal determinante coyuntural de la crisis económica en el cambio de década fuera la crisis de la deuda que estalló a raíz de la fuerte elevación mundial de los tipos reales de interés que provocó el giro monetarista de la política económica norteamericana, el acortamiento de los plazos de pago, y, sobre todo, la brusca contracción del crédito (Morales, 1987a, 1988).

⁸⁴ «El agotamiento del modelo de acumulación a base de la actividad minera es un proceso antiguo y no puede atribuírsele el carácter de determinante fundamental de la crisis económica que el país está viviendo desde 1977. No hay duda de que es un factor que contribuye notablemente a la crisis, pero lo mismo puede decirse para todos los períodos de crisis que la economía boliviana experimentó aún desde antes de 1952». Ramos (1982b), p. 3.

⁸⁵ Véanse, sobre este punto, los comentarios de Morales Sachs (1987).

CUADRO 3.8

Flujo de la deuda externa (1970-1985)

(Millones de dólares)

Años	Desembolsos	Amortización	Servicio Intereses	Total (Intereses + Amortización)	Flujo neto
1970	115,80	18,20	6,00	24,20	91,60
1971	66,40	18,80	7,10	25,90	40,50
1972	146,00	41,70	11,90	53,60	92,40
1973	55,60	35,50	17,90	53,40	2,20
1974	129,50	55,50	22,50	78,00	51,50
1975	170,80	64,60	26,90	91,50	79,30
1976	294,90	71,50	39,60	111,10	183,80
1977	439,10	100,80	59,90	160,70	278,40
1978	541,30	271,10	84,40	355,50	185,80
1979	380,20	146,00	119,70	265,70	114,50
1980	438,80	126,40	162,90	289,30	149,50
1981	453,80	108,80	186,20	295,00	158,80
1982	210,90	107,50	177,10	284,60	-73,70
1983	90,90	100,40	228,30	328,70	-237,80
1984	249,70	188,40	210,80	399,20	-149,50
1985	285,70	330,30	94,90	425,20	-139,50

Fuente: Vega (1987), p. 55. Datos del FMI, Banco Mundial, y elaboración del autor.

Mientras en términos reales la deuda externa de Bolivia no se había incrementado entre 1970 y 1975, aumentó en un 65% entre 1975 y 1978. Desde este último año los pagos por amortizaciones, intereses y comisiones comenzaron una progresión acelerada, debida tanto a la modificación de la estructura de la deuda⁸⁶ como al aumento de las tasas internacionales de interés. Así, los pagos de intereses, que suponían menos del 5% de las exportaciones antes de 1975, llegaron al 13% en 1979 y al 15% en 1980⁸⁷. Pero el problema más

⁸⁶ Los plazos de vencimiento de la deuda serán más cortos y mayor la parte sujeta a tasas de interés variables. El porcentaje de la deuda sometida a plazos de vencimiento de más de 15 años, que en 1971 era el 88%, cayó en 1980 al 46%. Los préstamos a 6-10 años, por su parte, aumentaron su participación del 5 al 40% en el mismo período. Por otro lado, los sujetos a un interés menor del 3% bajaron su participación del 51% en el período 1974-1977, al 31% en 1978-1980, mientras los sujetos a interés variable aumentaron la suya del 21% al 31%. Los datos están tomados de R. Morales (1985), pp. 154 y 155 (cuadros).

⁸⁷ Banco Mundial, *Bolivia. Structural Constraints and Development Prospects*, Washington, 1983, p. 4.

grave fue sin duda la repentina paralización del crédito internacional⁸⁸. A comienzos de la década de los ochenta, Bolivia, que tenía ya muchas dificultades para afrontar sus compromisos con los acreedores, vio como el flujo de recursos externos se reducía primero, y, a partir de 1982, adquiría un signo negativo. Los 438 millones de dólares que recibió el país en 1980 se redujeron a la mitad dos años después y a un quinto en 1983, y el flujo neto de la deuda arrojó saldos negativos de 73 millones de dólares en 1982 y de 237 millones, un 30% del valor total de las exportaciones, en 1983, el primer año de gestión del gobierno democrático (Cuadro 3.8, arriba).

El ahorro externo no podría ya ocultar en adelante el fuerte desequilibrio en el comercio exterior que, como vimos, caracterizó al modelo de desarrollo en la segunda mitad de la década de los setenta; tampoco podría financiar los déficits fiscales provocados por la expansión del gasto público, que había sido hasta entonces el principal motor del crecimiento económico. En el nuevo contexto internacional el país no estaba en condiciones de mantener los niveles de inversión y consumo que habían permitido en la década anterior las altas tasas de crecimiento del producto sin desencadenar fuertes presiones inflacionarias.

Finalmente, es indudable que la prolongada parálisis de la política económica durante los cuatro agitados años que siguieron a la retirada de Bánzer en 1978 contribuyó sustancialmente a agravar los problemas económicos que heredó el primer gobierno democrático. A lo largo del incierto proceso de transición política iniciado en 1978 tan sólo el gobierno provisional de Lydia Gueiler hizo un intento serio de corregir el desequilibrio externo, aplicando un programa de ajuste apoyado por el FMI que contenía una serie de medidas encaminadas a estimular las exportaciones y reducir las importaciones, con una fuerte devaluación del tipo de cambio y recortes del gasto público. El "paquete" económico del 30 de noviembre de 1979 consiguió efectivamente reducir déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos, que había alcanzado un récord histórico en ese año, y mejoró la posición de divisas del país⁸⁹. Sin embargo, el golpe de estado de agosto de 1980 interrumpió bruscamente el camino iniciado. Los gobiernos militares no tuvieron ni la voluntad política ni la capacidad

⁸⁸ Hay que hacer notar que el alza en las tasas internacionales de interés no afectó tanto a Bolivia como a la mayoría de los países de América Latina, dado que solamente un tercio de la deuda total estaba comprometida con acreedores privados, en tanto que la participación de éstos alcanzaba un promedio del 80% en el conjunto del subcontinente.

⁸⁹ Banco Mundial, *Economic Memorandum on Bolivia*, Washington, 1983, p.7.

para mantener el programa de austeridad, y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de 38 millones dólares en 1980 a 421 en 1981. Durante el mandato de García Meza se produjo además una brutal reducción de las reservas de divisas, debida tanto al aislamiento a que le sometió el sistema financiero internacional como al espectacular incremento de la fuga de capitales, que alcanzó a 630 millones de dólares en 1981-82, una cifra equiparable a la de los países mayores del subcontinente en sus peores años⁹⁰.

El empeoramiento progresivo de la posición de reservas internacionales obligó finalmente al general Torrelio a devaluar el peso boliviano en febrero de 1982. El porcentaje de la devaluación, sin embargo, resultó insuficiente, y el gobierno decidió establecer un tipo de cambio dual: las divisas a tasa oficial se reservaron para las importaciones de trigo y el pago de la deuda externa pública, mientras que para el resto de las operaciones regía una tasa libre. El abandono del tipo de cambio fijo y único acabó teniendo consecuencias imprevistas, y fue en realidad el detonante inmediato de la alta inflación que heredó el primer gobierno democrático (Morales, 1987b: 21-23). El público, que anticipaba un deterioro progresivo de los flujos de recursos del extranjero, incrementó sus ataques especulativos contra el peso en el mercado libre y el valor del dólar se multiplicó por cinco entre marzo y octubre de 1982. La rápida depreciación de la moneda boliviana repercutió en primer lugar sobre el nivel de precios internos: el Índice de Precios al Consumidor aumentó de marzo a octubre 2.6 veces, dando una tasa anualizada de inflación del 319 por ciento. La creciente inflación disparó el déficit fiscal, que tuvo que ser financiado con expansión de dinero, alimentándose así la espiral inflacionaria (Cuadro 3.9). Por otro lado, dada la disparidad existente entre el valor del dólar oficial y su precio en el mercado libre, los exportadores optaron por vender en éste una parte cada vez mayor de las divisas que debían entregar al Banco Central, reduciendo de ese modo las reservas internacionales en manos del estado.

⁹⁰ En los dos últimos años de dictadura militar la cuenta de Errores y Omisiones de la Balanza de Pagos registró un saldo negativo de 630 millones de dólares, que se interpreta como fuga de capitales. Ministerio de Planeamiento y Coordinación (1985), *Estrategia Nacional de Desarrollo y Plan Cuatrienal 1985-1988*, La Paz, p. 18. Manuel Pastor (1990: 5) calcula también en 600 millones de dólares el monto del capital fugado al exterior en esos dos años, y concluye que «al igual que en buena parte de América Latina, el retorno a los cuarteles fue precedido por una completa desorganización de la economía».

CUADRO 3.9**Indices de evolución del déficit fiscal 1978-1982. Base 1978 (porcentajes)**

Años	Ingresos	Egresos	Déficit
1978	100.0	100.0	100.0
1979	82.0	108.8	185.1
1980	78.3	105.8	183.8
1981	70.7	90.3	146.1
1982	43.4	216.8	709.9

Fuente: Rolando Morales (1985), p.161, con datos del BCB.

Así las cosas, en 1982 el PIB se redujo en un 8.7% y la inflación alcanzó tasas que no se habían visto desde la primera mitad de la década de los cincuenta, en los años que siguieron al triunfo de la revolución nacional. El primer gobierno democrático iba por lo tanto a iniciar su gestión con un margen económico crítico. En un contexto contracción abrupta del crédito internacional, heredaba una economía en abierto declive, un estado incapaz de financiar sus gastos corrientes, en una situación inflacionaria que estaba comenzando a mermar aún más sus ya magros ingresos fiscales, y unas empresas públicas exportadoras que atravesaban una profunda crisis de rentabilidad, provocada a la vez por las alteraciones del mercado mundial de materias primas y por sus propios problemas internos.

LOS RESULTADOS: EL NUEVO CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL MOVIMIENTO OBRERO

Los procesos de ruptura del "statu quo" y de transición hacia un nuevo equilibrio socio-político pueden iniciarse básicamente por dos razones: bien porque ocurran *cambios en la distribución los recursos* que debiliten la posición relativa de alguno los actores más favorecidos por el equilibrio previo, bien porque éste produzca *consecuencias distributivas indeseadas* para alguno/os de los actores de la coalición que lo sustentaba. A lo largo del gobierno autoritario de los años 70 ocurrieron simultánea y sucesivamente ambos tipos de procesos: en primer lugar, la desintegración institucional de las FF.AA., la disminución del ritmo del crecimiento económico y su posterior paralización, redujeron drásticamente los recursos de poder de las élites políticas del estado; en segundo lugar, los arreglos institucionales característicos del "Estado del 52" terminaron teniendo consecuencias negativas para el soporte central de la coalición social de gobierno -los campesinos- y para segmentos importantes de uno de sus actores dominantes -el empresariado-.

En las páginas precedentes intenté describir las diferencias entre el régimen que surgió del golpe de estado de 1971, como reacción al brevísimo y tormentoso experimento populista ensayado por un sector del ejército tras la muerte de Barrientos (Torres, en 1970-71), y los "nuevos autoritarismos" que dominaron el panorama político latinoamericano desde mediados de la década de los sesenta. Afirmé, por un lado, que aquel golpe no tuvo ninguna intención rupturista; que, por el contrario, pretendió únicamente restablecer el orden político sobre la base de la anterior coalición de intereses, eliminando -al igual que en 1964- la conflictividad urbana -encabezada por la nueva juventud radicalizada, ahora, al contrario que en 1964, en la extrema izquierda- y garantizando la continuidad de la exclusión de las organizaciones obreras; y que las FF.AA. bolivianas no prestaron nunca un respaldo institucional a Bánzer, que se vio forzado inicialmente a buscar apoyo en los partidos tradicionales (MNR y FSB) para compensar ese déficit. Por otro lado, avancé la hipótesis de que la *nula beligerancia* del régimen y la *ausencia de un respaldo institucional coherente* permiten explicar por qué el "nuevo orden" autoritario supuso un enorme retroceso en los niveles de autonomía estatal frente a los grupos de interés privados: se trata sin más de que el gobierno, que partía con un nivel muy bajo de *capacidades* institucionales, careció de los *incentivos* necesarios para superar esa situación de partida, incentivos que tal vez hubiera tenido en caso de haberse

visto obligado a enfrentarse con grupos de interés fuertes integrados en la anterior coalición social de gobierno.

En estas condiciones, el sistema de Bánzer no hizo sino alimentar el proceso de decadencia política que se había iniciado en el país con la ruptura de la coalición revolucionaria de 1952 y la desintegración progresiva del MNR. Con el endeble respaldo de unas FF.AA. con un bajo nivel de desarrollo orgánico y profundamente divididas, y una clase política civil fracturada en pequeñas "cliques" ávidas de cargos y carente de vínculos con cualquier actor social significativo, el régimen autoritario fue incapaz de consolidar sus relaciones de gobierno con los agentes de la sociedad civil. Ante todo, el proyecto de crear nuevas estructuras verticales para sostener la exclusión de los sectores organizados de la clase obrera sobre una base más estable que el ejercicio de la represión desnuda se saldó con un fracaso absoluto: una vez más, la solidez de las comunidades mineras hizo inútil el esfuerzo por implantar el sistema de "coordinadores sindicales", las organizaciones independientes mantuvieron intacta su capacidad para la acción colectiva, y *los campamentos mineros continuaron siendo "territorios libres"* hasta que Bánzer, en una confesión final de impotencia, se decidió a invadirlos y a establecer su ocupación militar permanente. Pero el gobierno tampoco pudo obtener en ningún momento un respaldo institucional coherente de los sectores empresariales, cuyas organizaciones, que partían de un nivel muy bajo de centralización y representatividad, no experimentaron ningún desarrollo significativo durante el período autoritario.

En el medio plazo, el sistema de Bánzer produjo además un deterioro irreversible en la única institución corporativista relativamente eficaz que había heredado del pasado. Dado que financió en buena parte la evidente mejora en los niveles de consumo de la población urbana aplicando políticas abiertamente anti-campesinas -reduciendo los fondos para el desarrollo rural y estableciendo unos precios relativos claramente desfavorables para los productos del pequeño propietario agrícola-, se condenó a erosionar paulatinamente el "apoyo difuso" de las grandes mayorías nacionales al estado autoritario. Resulta indudable que a partir de las medidas estabilizadoras de 1974, los campesinos jóvenes -que no habían vivido la servidumbre en los grandes latifundios- fueron adquiriendo una creciente conciencia de que *los arreglos institucionales heredados de la generación de sus padres tenían consecuencias distributivas perversas*. En efecto, era evidente que el intercambio entre los campesinos y las élites del estado -los caudillos del tronco central del MNR después de 1956, y los militares

tras el golpe de 1964-, formalizado en la firma anual del "Pacto Militar-Campesino", se había ido tornando crecientemente *asimétrico* -lo cual, por otro lado, es una evolución característica de los arreglos corporativos "populistas"-: el aparato sindical para-estatal servía cada vez menos para canalizar demandas "desde abajo" y más para imponer "desde arriba" la tolerancia a políticas de desarrollo claramente sesgadas en favor de los intereses urbanos. Así, si en 1967 Barrientos había paralizado una reforma fiscal que exigían los EEUU ante los primeros gruñidos de los dirigentes agrarios, en 1974 Bánzer respondió a las protestas por los agricultores cochabambinos con la "Masacre del Valle", y los dirigentes del "Pacto" tan sólo pudieron repartir pequeños regalos entre los vecinos y las familias de las víctimas. Tal vez cegado por el mito de la pasividad del pequeño campesino, eternamente agradecido al estado por el título de propiedad de su parcela, Bánzer aceleró innecesariamente la degradación del aparato sindical para-estatal, que muy pronto resultaría incapaz de movilizar el apoyo de unos sindicatos de base ganados por liderazgos independientes. En 1977 el "Pacto" era, en efecto, un esqueleto vacío, y *los nuevos liderazgos agrarios estaban intentando coordinar estrategias con otros actores de la oposición para promover un cambio en el equilibrio socio-político*, aproximándose a los partidos de izquierda y a las estructuras clandestinas de la FSTMB y la COB -en un proceso ciertamente difícil, dado que los mineros tenían buenas razones históricas para desconfiar de todo lo que viniera del campo-.

Finalmente, núcleos importantes del empresariado comenzaron también a preocuparse seriamente por las consecuencias distributivas indeseadas de los arreglos institucionales vigentes. Por un lado, el aumento exponencial de las necesidades financieras del estado tendía a reducir la participación global del sector privado en los excedentes; por otro, los procesos centrales de toma de decisiones en un gobierno personalista y segmentado, resultaban crecientemente arbitrarios, sometidos a la dinámica de contratos con pequeños grupos e individuos con una influencia personal en los decisores, e impermeables a los intereses de amplios sectores empresariales, incluido el mayor de ellos -la gran minería privada-, que comenzó a manifestar abiertamente sus protestas contra el régimen.

De este modo, el régimen militar tendió a degenerar crecientemente en *una dictadura personalista, un gobierno "prebendal" que se sostenía sólo en la medida en que podía disponer de crecientes recursos materiales* para mantener un precario equilibrio interno en las FF.AA. mediante el reparto de dividendos a los mandos militares clave -convertidos cada vez más en "señores de la guerra" semi-independientes-, satisfacer los intereses inmediatos

de grupos empresariales privados -en forma de contratas y subvenciones- y las expectativas de mejora material de los nuevos grupos urbanos -alimentando el pequeño comercio con divisas baratas y financiando un aumento exponencial de los empleos en la burocracia pública-. Un régimen, calificado de "neopatrimonial" en una obra reciente (Malloy y Gamarra, 1988: cap. 3), que sin duda tuvo bastante poco que ver con los autoritarismos "modernos" de los países vecinos. Esta peculiar fragilidad institucional del "nuevo autoritarismo" boliviano permite, en primer lugar, explicar por qué las primeras señales de que el crecimiento económico se estaba ralentizando y una conversación con Carter fueron incentivos suficientes para que Bánzer aceptara el papel de *"prime mover"* del último ciclo latinoamericano de transiciones a la democracia, en un intento por dotar a su débil gobierno de nuevos apoyos externos y alguna legitimidad formal. En segundo lugar, permite entender también por qué el gobierno perdió de inmediato cualquier control sobre las condiciones del proceso democratizador: por un lado, el aparato de los coordinadores sindicales resultó incapaz de ralentizar la movilización autónoma de los trabajadores; por otro, las divisiones internas en las FF.AA. y en los grupos económicos dominantes redujeron drásticamente los recursos coactivos del gobierno, que tuvo que resignarse a introducir un cambio radical en las reglas de la transición -legalizando a las organizaciones sindicales independientes y permitiendo concurrir a las elecciones a todos los partidos y líderes de la izquierda- ante las primeras protestas desde abajo; finalmente, el desplazamiento masivo del voto campesino hacia las fuerzas de la oposición tras la quiebra del "Pacto" cerró la posibilidad de constitucionalizar con éxito el régimen, al producir un resultado electoral intolerable para los militares y los grupos económicos dominantes.

El incierto y violento proceso de transición, jalonado por tres convocatorias electorales -1978, 1979, 1980- y seis golpes de estado -dos en 1978, 1979, 1980, 1981, 1982-, contuvo una sucesión enfebrecida de movimientos estratégicos que no pudieron producir una salida estable, capaz obtener el consentimiento de los actores de la oposición y de ofrecer garantías suficientes a los grupos más favorecidos por el equilibrio previo. Pero lo que interesa resaltar aquí es que la dinámica de esta transición "abierta" (Whitehead, 1988b) provocó un fortísimo debilitamiento adicional de todas las instituciones que podían competir con los sindicatos en el juego por agregar y representar las expectativas sociales: En esos años turbulentos, en efecto, las FF.AA. culminaron su proceso de desintegración, arrastrando consigo a las instituciones del aparato administrativo del estado; mientras los

partidos y los liderazgos políticos civiles se mostraban crecientemente incapaces de tomar el relevo. Ambos elementos tendieron a reforzarse mutuamente durante el proceso, alimentando *un círculo vicioso*: la ruptura de las cadenas de mando en la institución armada generó desde el principio una enorme incertidumbre, un ambiente de conspiración permanente que favorecía las estrategias de confrontación y las disputas internas en los grupos, incitando a las élites político-partidarias a respaldar proyectos golpistas -para obtener prebendas personales y ventajas de corto plazo o, simplemente, para evitar quedar "fuera de juego" si los otros ejecutaban antes con éxito el movimiento-, lo que a su vez multiplicaba las oportunidades de los mandos más ambiciosos y reducía aún más la coherencia institucional de las FF.AA., generando más incertidumbre..., y así sucesivamente. *Atrapados en esta dinámica perversa, los actores políticos no hicieron sino desprestigiarse ante la población civil y profundizar su desvinculación de los intereses sociales mayoritarios, que se volvieron hacia las organizaciones sindicales en unos años que, en teoría, deberían haber sido una coyuntura propicia para la reconstrucción y fortalecimiento del "momento" político-partidario.*

El resultado inevitable fue que entre 1978 y 1982 la figura de la Central Obrera Boliviana no hizo sino agrandarse progresivamente sobre el fondo de una decadencia política generalizada. En realidad, puede muy bien afirmarse que en la última fecha *la central sindical era la única institución nacional que parecía quedar en pie en Bolivia*. La solidez de las estructuras que sostenían al sindicalismo minero y su historial de resistencia al gobierno militar, en efecto, fueron en aquél contexto la única referencia segura para todos los sectores sociales que hasta entonces habían estado incluidos en la coalición social del autoritarismo y que desplazaban ahora sus lealtades, creando nuevas organizaciones y buscando nuevas alianzas para defender sus intereses en el nuevo equilibrio socio-político que resultara de la transición. El nuevo sindicalismo independiente campesino se afilió de inmediato a la COB, a través de la recién creada CSUTCB, pero también amplios abanico de pobladores urbanos no asalariados u ocupados en pequeñas empresas, y la enorme masa de empleados de la burocracia pública legada por el régimen "neopatrimonial" de Bánzer emprendieron una febril actividad asociativa e integraron en la central única a sus nuevas organizaciones.

Pero más allá de la espectacular ampliación de las bases del movimiento sindical como resultado de la cascada de "nuevas entradas", el hecho central es que en la coyuntura de la transición *fueron los sindicatos y no los actores políticos quienes cumplieron el papel de*

articular y expresar las orientaciones, valores y demandas de cambio del conjunto de la ciudadanía. Ello hizo, por supuesto, que los trabajadores organizados adquirieran una fortísima conciencia de sus "derechos de reclamación" ante el futuro estado democrático, y que sus demandas adquirieran una enorme legitimidad. Los episodios que se sucedieron a lo largo del período transicional tuvieron sin duda un impacto muy profundo en el imaginario colectivo, y en especial en las percepciones de la izquierda que se preparaba para acceder al gobierno. Nadie, en efecto, podía dejar de reconocer que *la COB y sólo ella era el auténtico "partido de la democracia"* (Velasco, 1985: 118): no sólo había puesto los muertos en la lucha, sino que, en agudo contraste con las élites partidarias, había mantenido una coherencia democrática absoluta, rechazando las ofertas de participación en el gobierno de los militares, había organizado y dirigido el único pacto -el CONADE- para la defensa de la nueva legalidad constitucional. De este modo, si en algún momento había sido realmente cierto que *en Bolivia «donde no hay consenso obrero no hay legitimación» ni gobernabilidad posible* (Zavaleta, 1983b: 49) fue sin duda cuando, a finales de 1982 y tras haber sido sometidos por García Meza a una de las experiencias más traumáticas de su historia -una mafia de narcotraficantes incontrolados en el gobierno de un país que después de todo se reclamaba miembro de Occidente-, todos los bolivianos, incluyendo definitivamente a los empresarios, agrupados ahora en una patronal muy activa, apoyaron la exigencia de la COB de convocar de inmediato al Congreso electo en 1980 y entregar la presidencia al candidato más votado entonces, Hernán Siles Zuazo.

El colapso absoluto del equilibrio socio-político que sostuvo hasta entonces la reproducción del orden autoritario había brindado así al movimiento obrero, por primera vez desde el período de entreguerras, *la oportunidad de superar su tradicional aislamiento corporativo.* Y en aquél contexto de la transición boliviana, en los momentos de consumación del largo proceso de decadencia institucional que había estado viviendo el país, el nuevo protagonismo político del movimiento obrero tuvo necesariamente un referente organizativo "atípico", dado que fué la central sindical la que se convirtió durante aquéllos años en el actor político dominante. Parecía imposible discutir, en efecto, que el sorprendente arrastre electoral que demostró tener entonces la izquierda -la victoria de la UDP hubiera sido casi con seguridad bastante más amplia si se hubieran convocado nuevas elecciones en 1982- no fue sino un reflejo pálido de la enorme legitimidad que alcanzaron entonces los sindicatos.

La amplia convocatoria de la UDP se presentaba como un derivado "parasitario"⁹¹, un *poder delegado* por una COB que había ejercido un liderazgo absoluto en las luchas democráticas, que había sido el único "partido" democrático de masas. En aquellas condiciones, por supuesto, sólo podía reforzarse la ideología sindicalista, profundamente arraigada en la historia del movimiento obrero boliviano y conectada directamente con *un principio sustantivo de legitimación del poder político que negaba a todas las instituciones políticas cualquier autonomía frente a las demandas de los actores sociales*. Si, como afirmaría Lechín poco después, «la voz del pueblo es la voz de Dios», parecía indiscutible que esa voz era entonces la que se expresaba a través de la COB, y *no de las autoridades electas*.

Es fácil apreciar que esta *acumulación de los recursos políticos en manos de la central sindical* había producido un cambio radical en la estructura de la interacción entre los sindicatos y las élites políticas del estado. En primer lugar, *los pagos del primer gobierno democrático*, en agudo contraste con todos los que se habían sucedido desde 1956⁹², *se aproximaban ahora en el práctica a los de un juego de coordinación pura*. El gobierno de la UDP necesitaba, en efecto, obtener la cooperación de los sindicatos porque *carecía de "opción de salida"*: dada la situación de partida, *no podría afrontar en ningún caso el coste político de una ruptura con la COB, que hubiera equivalido en las condiciones descritas a una pérdida inmediata de su legitimidad "democrática"*. Si se tiene en cuenta que *el problema era la debilidad global de las instituciones propiamente políticas frente al movimiento sindical* -y no, por ejemplo, la tantas veces mentada situación minoritaria de la UDP en el Parlamento- es fácil ver que *ninguna estrategia de alianzas políticas hubiera podido ampliar las opciones del gobierno frente a la COB*⁹³.

Del lado de la COB, las cosas resultan algo más complejas, pero puede afirmarse que

⁹¹ René Zavaleta (1983b: 34) escribió entonces que la UDP no fue sino «un parásito del estruendo campesino y obrero».

⁹² La única excepción parcial fue el breve gobierno militar de Torres en 1971, que sin embargo contaba con el respaldo institucional de un sector de las FF.AA. y con el apoyo difuso de la base social campesina encuadrada en el sindicalismo para-estatal.

⁹³ Esto es lo mismo que afirmar que el gobierno de la UDP carecía de la opción estratégica de cooperar con los partidos de la oposición para enfrentar con éxito la oposición de los sindicatos. El problema por lo tanto no estaba, como parece creer Palermo (1990), en que Siles Zuazo *preferiera* confrontar con los partidos y ensayar una concertación social, sino en que en la práctica estaba *obligado* a hacer esto último.

si el nuevo poder de la COB era ante todo poder político en un sentido estricto, los pagos de la organización obrera en el nuevo contexto eran, por primera vez en su historia -de nuevo con la excepción parcial del corto experimento populista de Torres en 1971-, del mismo signo que los de las élites políticas del estado. En efecto, el inmenso poder de negociación de la COB, al estar fundado en su acumulación de recursos políticos a lo largo del proceso de crisis del equilibrio autoritario, parecía tener una contrapartida ineludible: los resultados de la organización -su capacidad para ampliar y consolidar su nuevo poder de negociación- quedaban ligados en lo inmediato a los resultados del nuevo régimen. Las viejas pretensiones de los ideólogos del sindicalismo boliviano, que atribuyeron siempre a la COB el carácter de *institución política* -un "soviet" o una "asamblea popular" presta a constituirse en órgano de gobierno- o las descripciones de la organización minera como un "actor mixto", a la vez grupo de interés y "sustituto funcional" de los partidos, habían terminado haciéndose realidad con todas sus consecuencias a finales de 1982, en el momento en que se consumaba un largo proceso de decadencia política y se iniciaba el tránsito hacia la instauración de un orden democrático.

Lo anterior, desde luego, sólo sería cierto mientras se mantuvieran las reglas del juego democrático: en este caso, la COB conservaría, ampliaría o perdería su poder político, que era el del conjunto del movimiento obrero, en el proceso electoral, de tal modo que los pagos de la organización obrera quedarían ineludiblemente ligados a la capacidad de las políticas de la izquierda gubernamental para cubrir las expectativas de las grandes mayorías nacionales. Había, sin embargo, otros dos escenarios posibles: podía tener lugar un nuevo golpe de estado capaz de reconstruir el orden represivo, devolviendo a la organización sindical a su situación previa de aislamiento corporativo y excluyéndola del juego político de un modo más o menos estable; o bien podía producirse una ruptura revolucionaria capaz de promover al poder del estado a fracciones de las élites políticas del movimiento obrero que iniciarían a su vez la consolidación de un régimen autoritario. En ambos escenarios se quebraría el vínculo entre los pagos de la central sindical y los resultados de las políticas públicas: en el primero, por su exclusión de los procesos de toma de decisiones; en el segundo, de un modo más radical, por su eliminación como actor social independiente. Pero parece evidente que la reconstrucción estable del orden represivo no interesaba a ningún actor del movimiento obrero, y que sólo algunos grupos muy minoritarios consideraban que la revolución "socialista" era una alternativa viable en la coyuntura. Sólo para éstos tendría

sentido -si bien, por supuesto, en ningún momento lo harían explícito- provocar nuevas intervenciones pretorianas carentes de respaldo orgánico y apoyos sociales que podrían tal vez profundizar el colapso institucional y ayudar a generar una coyuntura revolucionaria, pero *la gran mayoría de los actores del movimiento obrero apostaba abiertamente por la consolidación de un sistema político abierto*. Aunque los contornos institucionales precisos del nuevo régimen fueran objeto de discusión, al menos en lo relativo a los niveles y formas de participación de los actores sociales en la formulación y ejecución de las políticas públicas, eran muy pocos los que deseaban y *además* creían posible erradicar el pluralismo político y las elecciones libres.

Pero si esto era así, y si en 1982 la COB era en la práctica el *actor político* dominante, el principal depositario de la *legitimidad democrática* del nuevo gobierno, y si su nuevo poder se derivaba ante todo de ese hecho, resultaba inevitable que la valoración por la ciudadanía de los resultados de la políticas públicas afectara directamente a los pagos de la central sindical *como institución de gobierno*. *Los resultados de la nueva democracia "popular" y las consecuencias del poder sindical serían una misma cosa a los ojos del pueblo de Bolivia*, que expresaría su veredicto en la próxima consulta electoral. Por ello, *la nueva matriz de pagos de la COB en su interacción con las élites políticas del estado exigía una solución cooperativa*. Ello equivale a afirmar que, *dado el desplazamiento de sus recursos hacia la arena política y las restricciones impuestas por las reglas del juego democrático*, la COB tenía un *interés objetivo* en *procesar* las demandas sociales, haciéndolas compatibles con los requerimientos de la coyuntura económica, y no meramente en *expresarlas* frente al estado, a través de *estrategias de presión*, como había hecho durante el sistema político unipartidista en tiempos del MNR y bajo los regímenes autoritarios que se habían sucedido desde entonces.

De hecho en las condiciones emergentes a finales de 1982 sería más ajustado afirmar que el problema de la construcción de un nuevo equilibrio socio-político estable y capaz de consolidar el nuevo poder de negociación de las organizaciones del trabajo se presentaba casi exclusivamente como un problema de *gobierno interno* en la COB, dado que *la frontera entre el campo del conflicto y la negociación con otros actores del sistema y el gobierno interno en la central sindical resultaba casi irrelevante en la práctica*. En primer lugar, porque la COB no tenía enfrente a un actor de gobierno dotado de un poder político independiente del suyo: las élites políticas de la UDP, por el contrario, carecían de una base de legitimidad

propia y de apoyos sociales alternativos, y no disponían por lo tanto de la posibilidad de utilizar los recursos coactivos del estado para hacer efectivas sus decisiones contra la voluntad sindical. En segundo lugar, porque tras la cascada de "nuevas entradas" que se había producido en los últimos años todos los *grupos de interés* organizados estaban integrados formalmente en las estructuras de la COB. Tan sólo los empresarios privados se situaban fuera de los límites del "movimiento obrero y popular", pero difícilmente podría considerárseles un grupo de interés organizado. Por un lado, en tanto que se trataba de un conglomerado de *individuos* con intereses muy heterogéneos, las organizaciones del movimiento obrero deberían anticipar sus reacciones *privadas* a las decisiones políticas que adoptaran, pero difícilmente cooperar o confrontar con ellos; por otro, en la medida en que pudiera mantenerse que la patronal (CEPB), fortalecida en los dos últimos años, representaba a una parte significativa del empresariado, lo cierto es que aquélla era básicamente un actor *político* de oposición, *implicado junto con los partidos parlamentarios de la derecha en un juego de suma cero con todos los actores del movimiento obrero*, interesado tan sólo en evitar la consolidación de su poder. Sólo cabía, en este sentido, derrotarlo en la lucha democrática, ampliando frente a él y sus partidos aliados la representación política de las mayorías nacionales.

En este punto se debe introducir *la alteración fundamental que se había ido produciendo desde finales de los años 70 en los parámetros del juego político: la crisis abrupta y profunda del modelo de acumulación tradicional*. La misma crisis del modelo de acumulación que había contribuido a generar la nueva correlación de fuerzas favorable al movimiento obrero reducía drásticamente la base de recursos materiales de que dispondrían sus organizaciones para consolidar una posición hegemónica en el juego político, dado que la quiebra de las finanzas públicas, derivada de la crisis del sector exportador y de la reversión de los flujos financieros externos, *fijaba un límite más estrecho que en cualquier otro momento de la historia contemporánea del país a las políticas redistributivas del estado*. La confluencia de una profunda crisis económica y una acumulación de demandas insatisfechas en los procesos de cambio político de la última década no es desde luego una característica específica del caso boliviano, aunque la crisis seguramente era aquí particularmente profunda. Pero *lo que sí es desde luego un hecho diferenciador del proceso boliviano es que en 1982 era un movimiento obrero sindicalista y revolucionario, ligado históricamente a los intereses de los trabajadores de una empresa pública en declive, que se*

había convertido ya en una pesada carga financiera para el estado, el actor que en aquéllas condiciones estaba obligado, para bien o para mal, a enfrentar las tareas de gobierno. Desde luego, resultaría muy difícil exagerar la magnitud de los desafíos que enfrentaba la vieja COB en los momentos en que finalmente parecía sonar la hora del poder obrero; en los momentos en que muchos corazones, como afirmaba el documento minero que escogí para encabezar este capítulo, volvían «a estremecerse con la cálida esperanza de que esta vez sí»⁹⁴.

⁹⁴ Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, *Proyecto de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia para la cogestión obrera en la Corporación Minera de Bolivia*, La Paz, 1 de marzo de 1983, p. 12.

LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA "POPULAR"

Hoy nos encontramos en un período de profunda crisis. Es una crisis nueva que requiere meditación, iniciativa y audacia. Pero todas las crisis fueron nuevas en el momento en que se presentaron, y también éstas demandaron del dirigente las mismas condiciones que la presente crisis demanda. En épocas de paz y estabilidad no hay necesidad de estrujarse el cerebro, ni de una gran sensibilidad para determinar medidas, pues no hay riesgo de fracaso. En cambio, en estos momentos históricos hay la necesidad de poner en juego lo máspreciado de un dirigente, cual es la meditación profunda en la adversidad para obtener resultados positivos, para recobrar de esta crisis lo máspreciado, lo más combativo y lo más unitario de las enseñanzas de la clase trabajadora

Juan Lechín

A lo largo del primer año del mandato de Siles Zuazo fueron revelándose con crudeza los límites que imponía la crisis económica a las políticas redistributivas que propugnaban los actores del movimiento obrero. Las soluciones que se seleccionaron inicialmente resultaron radicalmente inconsistentes con las restricciones del entorno de elección, y tuvieron consecuencias indeseadas, profundamente insatisfactorias. La información adicional proporcionada por los fracasos convenció muy pronto a la mayoría de las élites políticas gubernamentales de la necesidad de ensayar un ajuste en las estrategias de política económica. El gobierno, sin embargo, careció de la *capacidad* política necesaria para aplicar efectivamente las medidas que deberían haberse derivado de sus nuevas interpretaciones sobre las alternativas abiertas a la política económica, y ésta entró en una larga fase de estancamiento que agravó peligrosamente todos los indicadores de la crisis.

No cabe duda de que el gobierno de la UDP enfrentó problemas muy serios derivados del funcionamiento y nivel de coordinación interna de las distintas instituciones del aparato

administrativo del estado, y no podría haber sido de otro modo dada la herencia que recibió de los regímenes autoritarios¹. Pero la reforma de la administración pública -que constituye todavía hoy una asignatura pendiente para la democracia boliviana- es un proceso costoso y de largo plazo, y a finales de 1982 se presentaba como un problema de segundo orden, que sólo podría comenzar a resolverse si se alcanzaba el objetivo inmediato de retomar algún grado de control sobre las principales variables macroeconómicas.

Cualquiera que conozca por encima la historia inmediata de Bolivia convendrá también en que la actuación de los *partidos* de la coalición gobernante -los conflictos entre ellos y dentro de cada uno- produjo muchas disfunciones en la formulación y aplicación efectiva de la política económica, y que la confrontación permanente de la UDP con los grupos opositores que controlaban la mayoría de los votos en el Parlamento, añadió importantes escollos adicionales². Sin embargo, los problemas derivados de la composición "frentista" del gobierno y de las relaciones de éste con la oposición política ocuparán, al igual que el funcionamiento de las instituciones estatales, un lugar muy marginal en mi interpretación de los hechos centrales de los dos primeros años del gobierno de la UDP. La hipótesis que ordena mi selección de los datos relevantes para el relato es, por el contrario, que la oposición sindical era una condición *suficiente* para provocar el fracaso de la política económica del primer gobierno democrático; y que es *el monopolio sindical del poder político* en la coyuntura y el consiguiente predominio de los criterios sindicales en la determinación de las *prioridades* sobre los objetivos de la política económica, en un contexto de incertidumbre, lo que permite explicar tanto los aspectos centrales del primer programa de estabilización como la incapacidad del gobierno para alterar el rumbo durante más de un año, a pesar de la evidencia del fracaso. Terminaré analizando cómo los resultados indeseados del ejercicio de su propio poder situaron finalmente a los propios dirigentes sindicales ante los límites que imponía a sus estrategias tradicionales la crisis económica más profunda de la historia contemporánea del país.

¹ La extensión de la corrupción, la consolidación de redes clientelares y la influencia de los circuitos del narcotráfico en el aparato administrativo del estado son sin duda los elementos más llamativos de aquella herencia. En el capítulo anterior ensayé una breve descripción general del proceso de decadencia institucional que alcanzó su culminación con el gobierno de Bánzer y los breves ensayos autoritarios que se sucedieron a lo largo del período de transición.

² Un análisis detallado de la actuación de la oposición política en el período de gobierno de Siles puede encontrarse en Gamarra (1987).

LA IZQUIERDA FRENTE A LA CRISIS

LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO

Para realizar una evaluación ajustada de los proyectos que se elaboraron y de las decisiones que se tomaron a comienzos de la década de los 80 sería necesario abandonar la atalaya privilegiada de la perspectiva que ofrecen los años transcurridos y situarse en cambio en «el clima de incertidumbre» que vivían entonces «los sectores más influyentes del pensamiento económico latinoamericano» (Nun, 1987: 84). Si en general puede afirmarse que en el campo de la política económica en condiciones de crisis «todas las estrategias no son sino preguntas explorativas y experimentales que se hacen a la realidad» (Scharpf, 1992: 33), en el caso que estudiamos resulta indispensable recordar dimensión del desconcierto que compartía el conjunto de las ciencias sociales de América Latina en los momentos de *entrada* en una crisis de características radicalmente nuevas³. Esto debería servir para relativizar la opinión, muy extendida sin duda en el país, de que los "errores" macroeconómicos del primer gobierno democrático pueden entenderse en buena parte atendiendo al hecho de que «Bolivia permanecía en gran medida aislada de las discusiones de los círculos internacionales, académicos y oficiales, acerca de lo que se podía hacer para afrontar la crisis» (Morales, 1988: 368). Por el contrario, parece estéril intentar explicar la diferencia específica del caso boliviano a partir de la constatación de que el primer gobierno democrático carecía de una interpretación adecuada de la realidad en la que tenía que moverse, ya que, dado el "estado" de la ciencia económica latinoamericana en los primeros años 80, sólo la afirmación contraria resultaría sorprendente e interesante. No hay ninguna "peculiaridad" boliviana al respecto, y por lo tanto resulta inútil cargar el discurso con alegatos *a posteriori* sobre el "simplismo" en las lecturas de la crisis y la ausencia de análisis teóricos adecuados de sus dispositivos

³ Sobre el desconcierto reinante en el pensamiento económico latinoamericano en la primera mitad de la década de los 80 puede verse Bitar (1987), que recuerda cómo al menos hasta 1984 predominó abrumadoramente la tesis de que los problemas eran pasajeros.

causales y sus implicaciones⁴.

Es indudable, por supuesto, que el ideario de los partidos coaligados en la UDP no cuestionaba la vigencia de los elementos centrales del régimen social de acumulación implantado a partir del triunfo revolucionario de abril. El programa económico de la izquierda pretendía de hecho promover un relanzamiento de «la vertiente popular contenida en el Estado de 1952»: profundizar la autonomía externa, fortalecer el área estatal de la economía y emprender una nueva redistribución del ingreso en favor de los sectores populares⁵. Así, según la lectura de la izquierda, lo que había entrado en crisis a finales de la década de los setenta no era el modelo de desarrollo nacional primario-exportador y proteccionista con predominio empresarial del estado, sino tan sólo *su versión excluyente*, impuesta por un autoritarismo militar que había dilapidado los recursos generados por las empresas productivas públicas y cercenado el potencial de crecimiento del mercado interno mediante una distribución regresiva del ingreso. Para revertir el declive económico bastaría por lo tanto con simultanear la *ampliación del mercado interno*, impulsando con ello la producción industrial y agraria nacional, y la *reactivación de las empresas públicas de exportación* que, junto con el control de las importaciones y el monopolio estatal del manejo de divisas y del comercio exterior, debería reducir el desequilibrio externo y ampliar los márgenes para la "autodeterminación" nacional.

He afirmado que resultaría muy difícil exagerar el impacto que tuvieron el despilfarro banzerista y el desgobierno de las últimas aventuras golpistas sobre el declive económico boliviano, y en este sentido el diagnóstico de la izquierda tenía una racionalidad indiscutible. Pero el ejercicio de una crítica bien fundamentada a la política económica del autoritarismo no era desde luego suficiente para sustentar la esperanza de que una asignación racional de

⁴ Son muchos los análisis de la gestión de la izquierda en el gobierno que insisten en las limitaciones del marco cognitivo de los decisores, pero los más útiles son sin duda los de Horst Grebe (Grebe, 1986, y Grebe y Ardaya, 1987), el intelectual más brillante del partido comunista y ministro de Trabajo durante una gran parte del mandato de Siles Zuazo.

⁵ Grebe (1988), p. 31. Pueden consultarse también los comentarios al respecto de Mayorga (1988) y Lazarte y Pacheco (1992). El ejemplo más acabado de esta línea de pensamiento es sin duda la idea del «entroyue histórico» con el proceso de la Revolución Nacional desarrollada por el MIR a partir del «proceso colectivo de reflexión» que inició su dirección nacional a mediados de 1977. En aquel debate Paz Zamora defendió con éxito la tesis de que el «programa de 1952» continuaba vigente, de modo que la izquierda debía actuar «al interior de la Revolución Nacional» para progresar en la consecución de sus metas pendientes: «la verdadera independencia nacional frente al imperialismo, la participación democrática de las mayorías en los destinos económicos y políticos del país...». Véase *El Mirista*, 9, septiembre 1977, pp. 31-32.

los recursos podría reparar a partir de entonces los daños sufridos, revitalizando los dos ejes del «área esencial» de la economía -las actividades orientadas al mercado interno de masas y los sectores exportadores básicos de propiedad estatal- para combinar nuevamente crecimiento con redistribución y «profundizar» las conquistas sociales del ciclo revolucionario (Lazarte y Pacheco, 1992: 77-78). ¿Cómo pensaba, en efecto, financiarse el relanzamiento de la economía?. Por el momento las empresas públicas de exportación no parecían estar en condiciones de aportar capital de inversión para el desarrollo nacional, y la gran minería nacionalizada, sometida a una crisis secular de productividad y golpeada por el inicio del declive de los precios de las materias primas en los mercados mundiales, estaba comenzando a convertirse ya, por el contrario, en un enorme sumidero de recursos. Además, y en paralelo, la política monetarista de la administración Reagan continuaba impulsando al alza el precio del dinero y no era difícil prever que el estallido de la crisis mexicana de agosto en 1982, unos meses antes de la investidura de Siles Zuazo, provocaría un endurecimiento adicional de las condiciones en los mercados financieros internacionales.

Pero en cualquier caso no existe una base documental suficiente para sustentar alguna afirmación precisa sobre las interpretaciones dominantes entre los actores de la coalición izquierdista sobre las alternativas abiertas a la política económica. El *programa económico* de la UDP apenas pasó inicialmente de una declaración de buenas intenciones y tanto sus posibilidades de desarrollo ulterior como su probable adaptación a las nuevas condiciones emergentes quedaron cortadas por las urgencias políticas de la transición y las etapas de clandestinidad y exilio que vivieron sus liderazgos durante el agitado período que se abrió a finales de 1977⁶. Demasiadas cosas habían cambiado desde entonces, y en estas condiciones parece mucho más útil en principio remitir sin más el análisis de las interpretaciones dominantes al contenido del programa de estabilización que presentó el gobierno en noviembre de 1982, cuando aun no había transcurrido un mes desde la investidura del nuevo Presidente. El paquete del 5 de noviembre de 1982 fue en efecto el más completo y ambicioso de los ocho que terminarían formulando los sucesivos gabinetes de Siles Zuazo.

⁶ En realidad no existió un programa acabado de política económica. Pero puede verse UDP, *Declaración política de la UDP. Bases del programa de gobierno*, mayo 1980; y MIR, *Programa para la recuperación económica y el potenciamiento nacional*, junio 1982. Las concepciones de la izquierda gubernamental en materia de política económica están también recogidas parcialmente dos documentos tardíos: República de Bolivia, *Plan Nacional de Rehabilitación y Desarrollo, 1984-1987*, La Paz, 1984, y Ministerio de Planeamiento y Coordinación, *Estrategia Nacional de Desarrollo y Plan Cuatrienal 1985-1989*, La Paz, 1985.

También fue el más heterodoxo y el único discutido por todos los participantes en la coalición original, y por ello parecería legítimo describirlo como una expresión bastante acabada de las concepciones de la izquierda boliviana en materia de política económica.

Sin embargo, tampoco tendría demasiado sentido intentar "descubrir" en aquel paquete una traducción nítida del marco cognitivo de los operadores gubernamentales. Por el contrario, las medidas de noviembre contuvieron sin duda muchos elementos tanto de *racionalización de la esperanza* como de *resignación* pura. El paquete se publicó tras una serie de discursos en los que el Presidente constitucional describió con un enorme dramatismo la situación económica heredada de las dictaduras y anunció al país su decisión de aplicar durante cien días una «economía de guerra» para controlar inicialmente la crisis. Sin embargo, como veremos de inmediato, la «economía de guerra» terminó resultando sorprendentemente benigna. Mucho más, sin duda, de *lo que hubiera deseado el gobierno*.

Por supuesto, el 5 de noviembre se dictaron algunas medidas convencionales y muy "impopulares" para la corrección de los precios relativos, en especial una devaluación en un 73% de la moneda nacional y elevaciones en los precios de los bienes y servicios producidos por el estado. Los nuevos precios, junto a una serie de cargas impositivas adicionales para el sector exportador y para los créditos bancarios, estaban destinadas a aliviar el *déficit fiscal* que se había agravado enormemente en los dos últimos años de la transición y que estaba en el origen de un proceso inflacionario que en 1982 alcanzaría ya una tasa anual cercana al 300%. Pero lo cierto es que el componente de *austeridad y saneamiento fiscal* del paquete fue mucho menos importante que el de *reactivación*, que incluía medidas de *aumento de la demanda agregada* junto a otras encaminadas a *alterar su composición*, sentando las bases de un programa de reformas estructurales que debía fortalecer el *control estatal* del proceso económico y favorecer el crecimiento de la inversión productiva.

Ante todo, se implantó un sistema de cambio fijo y único y se estableció un régimen de control estatal de las divisas por el que se obligaba a los exportadores públicos y privados a entregar al Banco Central la totalidad de la moneda extranjera obtenida en las transacciones externas, que sería asignada en adelante por una Comisión de Política Cambiaria en función de las prioridades de desarrollo nacional fijadas por el gobierno. Paralelamente, se penalizó la importación de productos no esenciales, elevando a más de 500 el número de rubros arancelarios de importación prohibida, y se otorgó un tratamiento preferencial a las importaciones de insumos y bienes de capital para el sector agropecuario y la industria nacional. La

pieza clave en la estrategia económica gubernamental para reducir la espiral especulativa heredado y fortalecer el control estatal sobre el proceso económico fueron sin embargo las disposiciones relativas a la *desdolarización* de la economía boliviana⁷. El decreto de desdolarización, dictado en paralelo a la publicación del "paquete", prohibió la realización de transacciones internas en divisas y dispuso que las deudas contraídas en moneda extranjera o con cláusula de mantenimiento de valor se cancelaran en pesos bolivianos a un tipo de cambio inferior al vigente. Se pretendía con ello reducir la demanda de divisas para transacciones comerciales y financieras internas, esperando que aquéllas fueran a parar a manos del estado en lugar de desviarse hacia un eventual mercado paralelo. De este modo ayudarían a sostener el tipo de cambio fijo y aportarían recursos adicionales de inversión para las empresas productivas públicas y privadas. Finalmente, la desdolarización suponía una fuerte reducción en términos reales de las deudas contraídas en dólares por el empresariado nacional, y buscaba por lo tanto incentivar la producción privada mejorando sus condiciones del lado de la oferta.

Pero el paquete del 5 de noviembre diseñó ante todo una *política de ingresos* que constituía un cambio radical frente a todo lo que se había hecho hasta entonces en el país. De entrada, se otorgó un *aumento general de salarios* y se estableció el *control de precios*, fijando topes para los bienes esenciales de la «canasta familiar». El incremento del 30% para todos los asalariados y el congelamiento de los precios de los productos de consumo básico fueron sin duda un esfuerzo muy importante en la coyuntura económica que atravesaba Bolivia, e hicieron que el discurso de la «economía de guerra» se tradujera, paradójicamente, en una *mejora muy sustancial de los niveles populares de consumo*⁸. Además, el gobierno de la UDP asumió el compromiso de garantizar en adelante el mantenimiento del poder adqui-

⁷ Sobre la desdolarización puede verse Jameson (1987) y Carrasco (1982).

⁸ Pese a ello, los aumentos salariales decretados en el paquete del 5 de noviembre inauguraron una batería de críticas radicales, amparadas en una oposición frontal a las devaluaciones de la moneda boliviana y en la manipulación demagógica de sus implicaciones reales, que se reproducirían una y otra vez a lo largo del período de gobierno de la UDP. La nueva paridad de la moneda en 200 pesos bolivianos por dólar habría producido, según estas críticas, una caída del salario real, dado que el cambio oficial durante el último gobierno militar era de 44 pesos por dólar y el aumento del salario en pesos decretado por el gobierno democrático no cubría la diferencia. Véase, por ejemplo, CEDOIN, *Resumen Mensual*, No. 1, noviembre 1982, p. 1. Esta línea de argumentación, compartida por el movimiento sindical, olvidaba interesadamente que el poder adquisitivo de los salarios antes de noviembre de 1982 estaba indexado en la práctica a la cotización de la divisa norteamericana en el mercado paralelo, y que dado que ésta era aproximadamente 200 pesos por dólar, el incremento concedido en noviembre de 1982 era en principio, en su totalidad (un 30%), un aumento en la capacidad adquisitiva real de los salarios.

sitivo de los salarios mediante la implantación del principio de la *escala móvil*, que debería reglamentarse en un plazo breve⁹.

El programa inicial de la izquierda, por lo tanto, era claramente de *estabilización expansiva*: buscaba combinar la estabilización, que se obtendría gradualmente tratando de guiar la inflación, con la reactivación de la economía (Morales, 1988: 34). Si el gobierno conseguía generar la suficiente confianza en su capacidad para sostener la estrategia de la desdolarización y el tipo de cambio, los estímulos ofrecidos tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda deberían tener el efecto de reactivar la producción nacional, reduciendo el ritmo especulativo que había ido adquiriendo la economía en los últimos años de incertidumbre e inestabilidad política y aumentado las reservas de divisas en manos del estado. Con ello, *se podrían combinar gradualmente las exigencias del ajuste con la satisfacción de las demandas de mejora material acumuladas por los sectores populares durante la última década*.

Hoy sabemos que los cálculos sobre la reacción de los agentes económicos privados frente a las nuevas directrices -que equivalían en buena medida a esperar que renunciaran a la especulación por patriotismo- eran absurdamente optimistas; que las esperanzas puestas en *un fuerte incremento de la ayuda financiera* de los organismos multilaterales y de las «democracias amigas»¹⁰, capaz de sostener un gasto público no inflacionario, estaban condenadas a verse desmentidas de inmediato; que la combinación de la herencia "envenenada" del desarrollismo espúreo con las nuevas condiciones del entorno marco internacional hacían inevitable que el ensayo de ajuste expansivo fracasara *de inmediato*, dado que el nuevo nivel de demanda resultaba *incompatible* con la estabilización. Pero si hoy parece cierto que era una apuesta perdida de antemano, lo que no puede discutirse en ningún caso es que *el primer gobierno de la democracia estaba literalmente obligado a intentarlo*.

El problema, en efecto, era que la gobernabilidad del sistema -la efectividad de

⁹ Las descripciones del contenido de los "paquetes" económicos dictados por los gobiernos de Siles Zuazo se basarán en adelante, salvo indicación a contrario, en el extenso trabajo de UDAPE, *Análisis de la gestión económica en Bolivia, 1982-1985*, La Paz, octubre 1985. El listado completo de las disposiciones adoptadas el 5 de noviembre de 1982 se encuentra en las pp. 26-34.

¹⁰ El ejemplo más notable del modo en que la necesidad de apoyo externo para sostener la estrategia generó creó falsas expectativas sobre el comportamiento del sistema financiero y las democracias europeas fue sin duda la extendida creencia en la posibilidad de obtener préstamos abundantes y baratos de los países de la OPEP. Para el bulo del «crédito árabe» véase el comentario de Machicado (1990), pp. 111-112.

cualquier política pública- dependía por completo del comportamiento de los sindicatos, de modo que las opciones del gobierno estaban limitadas por la necesidad de evitar una ruptura con la COB. Partiendo de la constatación de este hecho es fácil ver que podemos evitar especular sobre lo que los operadores gubernamentales *probablemente desconocían*, dado que el contenido esencial del programa de estabilización expansiva puede explicarse bastante bien atendiendo tan sólo a lo que *ciertamente sabían*. Podían estar mejor o peor informados de las restricciones que imponían a las combinaciones factibles de política económica la crisis productiva heredada y las nuevas condiciones del entorno marco internacional, pero es indudable que era plenamente conscientes de que en el *contexto estraiégico* de la transición carecían de alternativas a la cooperación con los sindicatos. La ignorancia no era una peculiaridad boliviana, y sí lo era en cambio el *monopolio sindical de la legitimidad democrática*.

Evitar una ruptura con la COB equivalía, a finales de 1982, a ensayar una política de ingresos muy expansiva, dado que las reivindicaciones obreras se concentraron desde el principio casi *exclusivamente* en obtener el mayor aumento posible de los niveles salariales. El predominio absoluto de las demandas salariales en la estructura de preferencias de los sindicatos bolivianos, que se había evidenciado ya tanto en los meses previos a la investidura del primer gobierno democrático como en las conversaciones que precedieron a la formulación de la estrategia económica, quedó demostrado *a fortiori* por el tono que adquirieron tras la publicación de las medidas las discusiones, ampliamente recogidas por la prensa nacional, sobre la justicia en la *distribución de los costes* de la crisis. Los discursos sobre los derechos adquiridos a una «reposición salarial justa», en efecto, arriconaron por completo en la red sindical a los intentos de iniciar alguna evaluación razonada de las alternativas en materia de ingresos dadas las características de la crisis.

Sin duda, el aumento salarial incorporado al paquete de noviembre quedó lejos de cubrir las expectativas de mejora acumuladas por los trabajadores en los años de lucha contra las dictaduras, pero lo realmente significativo es que *nadie en el movimiento sindical reconociera el enorme esfuerzo fiscal que suponía la medida* dada la situación heredada, y que nadie se ocupara de *precisar* las demandas salariales, que continuaron en cambio circunscritas a la referencia abstracta a un Salario Mínimo Vital con escala móvil, calculado sobre el costo de las necesidades familiares básicas, que había sido uno de los ejes de las

reivindicaciones obreras en las luchas de la transición¹¹. Por el contrario, los dirigentes sindicales se limitaron a afirmar de inmediato que el aumento del 30% resultaba «insuficiente», y, tras analizar durante tres días el contenido de las medidas de noviembre en un Ampliado Nacional¹², a «conceder» un plazo al gobierno hasta el primero de diciembre para revisar nuevamente los salarios.

En este contexto, el gobierno sólo podía aspirar a que los sindicatos le concedieran una precaria «tregua» de cien días, que Siles Zuazo presentó repetidamente como la condición mínima indispensable para desarrollar con éxito la primera fase del programa económico. No se propuso en ningún momento un compromiso a medio plazo, sino únicamente que aceptaran la vigencia «transitoria» del nivel salarial alcanzado en noviembre durante tres meses, absteniéndose de presentar cualquier demanda en ese período, pero incluso aquél acuerdo tan exiguo tuvo que "comprarse" con nuevos desembolsos financieros. La respuesta final de la COB, en efecto, estuvo pendiente durante casi un mes del curso de las negociaciones entre el gobierno y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que concluyeron cuando los mineros obtuvieron la promesa de recibir un bono mensual adicional¹³. Los trabajadores de las minas no se habían dejado impresionar por la ampliación de la plantilla de COMIBOL, un gesto que expresaba claramente el compromiso del gobierno con la consolidación del empleo en el sector, ni tampoco por las sombrías descripciones de la situación económica que habían dejado como herencia los militares. El propio Siles Zuazo

¹¹ En el extenso *Documento Económico de la COB*, publicado en 1979, se proponía ya «Plantear al Gobierno Nacional un aumento de sueldos y salarios para todos los sectores laborales del país, en base al costo de la canasta familiar mínima establecido por estudios específicos». [AC, D-0233]. La reivindicación de un Salario Mínimo Vital con Escala Móvil fue enarbolada por los mineros en la huelga de noviembre de 1981, y en el acuerdo que firmó la FSTMB con el gobierno militar de Torrelío en marzo del año siguiente se decidió crear una comisión para concretar la demanda. Véase para esto CEDOIN, *Unidad para un salario justo*, La Paz, abril 1982. Los cálculos necesarios para precisar la demanda eran, sin embargo, enormemente complicados, y lo fueron cada vez más a medida que avanzaba la inflación. Por ello, la COB nunca llegaría a concretar el contenido del Salario Mínimo Vital con escala móvil, que funcionó en los hechos tan sólo como un referente ideal que señalaba lo que correspondía recibir «en justicia» a los trabajadores bolivianos.

¹² El Ampliado Nacional de dirigentes es la autoridad máxima de la Central Obrera Boliviana entre dos Congresos nacionales. Se convoca generalmente para decidir sobre las líneas de acción a seguir frente a situaciones y problemas de importancia para el movimiento.

¹³ *Presencia*, 11-12-28. Esta decisión, como varias otras conductas "irracionales" en términos económicos, suele atribuirse con frecuencia a la "demagogia" del PCB, que desde el Ministerio de Trabajo se ocupaba supuestamente de ampliar su influencia en la red sindical. Pero la decisión debería explicarse por la inversa: el problema era que ni el PCB, ni el Presidente, ni los otros partidos de la UDP resultaron capaces en la coyuntura de ejercer autoridad ni influencia alguna sobre las poderosas organizaciones mineras.

había viajado a los campamentos para solicitar su apoyo y recordarles la gravedad de los problemas que enfrentaba la izquierda, pero la respuesta positiva de las asambleas sindicales mineras, que el gobierno consideraba con buenas razones de una importancia clave para la definición de la coyuntura, sólo había podido obtenerse finalmente mediante una compensación material muy sustancial¹⁴.

El gobierno no sólo tuvo que hacer muchas más "concesiones" inmediatas de lo que hubiera sido deseable, sino que, como afirmé arriba, se vio obligado a incorporar en el programa de estabilización del 5 de noviembre el compromiso explícito de aumentar progresivamente los salarios reales, aceptando en su discurso que la «reposición» de su poder adquisitivo era el objetivo central de la política económica en la coyuntura¹⁵. Pero las concesiones inmediatas y las promesas de futuro, que hipotecaban peligrosamente las opciones en materia de política económica, no consiguieron arrancar a la COB una declaración de apoyo expreso a los esfuerzos estabilizadores del gobierno ni siquiera en el corto plazo solicitado. Desde luego, pocos días después hacerse público el comunicado oficial minero anunciando el acuerdo alcanzado con el gobierno, un segundo Ampliado Nacional de la COB decidió crear una comisión encargada de estudiar el problema salarial y preparar un documento al respecto, lo que equivalía a aceptar en los hechos la vigencia de la «tregua social». Sin embargo, las conclusiones de la reunión nacional de dirigentes sindicales fueron enormemente ambiguas: allí, según informes de la prensa, se afirmó que «el Comité Ejecutivo de la COB *no rechaza ni acepta* el ofrecimiento del gobierno», aunque «esperará el plazo fijado para reiterar la exigencia del salario mínimo vital con escala móvil»¹⁶. Desde luego, el acuerdo entre la FSTMB y el gobierno había tenido, como era esperable, una influencia determinante en las resoluciones de la organización, pero es probable que la dirección nacional de la COB no deseara comprometerse explícitamente con un resultado que parecía situar a los mineros en una posición privilegiada frente al resto de los asalariados. Sea lo que fuere, lo cierto es que la deliberada ambigüedad del Comité Ejecutivo de la COB sólo sirvió para debilitar los efectos estabilizadores de la «tregua» y alimentar la incertidumbre de futuro.

¹⁴ Los 7.000 pesos equivalían aproximadamente a 35 dólares americanos. Su magnitud en el contexto boliviano podrá apreciarse si se recuerda que el nuevo salario básico fue fijado en 8.490 pesos.

¹⁵ Véase, por ejemplo, el mensaje presidencial del 5 de noviembre, recogido en Salinas (1983), pp. 479-503.

¹⁶ *Presencia*, 16-12-82.

La actitud de los sindicatos, por lo tanto, negó desde el principio al gobierno la posibilidad de diseñar una política de austeridad salarial concertada, privándole con ello del instrumento potencialmente más contundente de que disponía en la coyuntura para contener las presiones inflacionarias. La COB no demostró, en efecto, la menor disposición a asumir compromisos en política de ingresos, y forzó en cambio al gobierno democrático a pagar un alto precio por una «tregua» precaria y de muy corto alcance. Por un lado, la anunciada «economía de guerra» se tradujo en un aumento muy sustancial del poder adquisitivo de los salarios, eliminando la posible eficacia de las medidas de austeridad contenidas en el "paquete"; por otro, las promesas gubernamentales de sostener y reforzar en el futuro inmediato la política de ingresos expansiva estaban condenadas a situar fuertes expectativas inflacionarias en el corto horizonte de los «cien días». Pero si queremos explicar por qué ocurrió todo esto -por qué, en realidad, el programa de estabilización de la UDP nació muerto- *deberíamos ocuparnos mucho menos de las sinrazones de la izquierda en el gobierno* -su «demagogia», la «ignorancia» y el «populismo ingenuo» que oscurecía sus cálculos- y *mucho más de las razones de la COB*.

LAS RAZONES DE LA COB

Aunque el debate sobre los niveles salariales de partida no es en absoluto irrelevante -dado que la inversión de una probable tendencia alcista en los años setenta y la violencia de la caída en el cambio de década podrían dar cuenta en gran medida de la agresividad de las demandas-, lo único que puede afirmarse con seguridad es que la década de gobiernos militares había concluido con una fuerte regresión del consumo obrero, con un deterioro muy profundo, tal vez cercano al 40%, del salario real promedio¹⁷. En cualquier caso, parece

¹⁷ El dato, que debe tomarse con precaución, pertenece al estudio de UDAPE (1985: 145). En general, todas las fuentes coinciden en señalar que entre 1980 y 1982 se produjo una violenta regresión de los salarios reales, a raíz de la confluencia del gobierno represivo de García Meza con el inicio de la espiral inflacionaria. Morales (1989: 4), por ejemplo, calcula que sólo en los primeros tres meses de 1982 se produjo una caída del 10% en los salarios reales. Pero no existe el mismo consenso sobre los niveles de partida en el primer año. La creencia más generalizada es que durante los años setenta, bajo el gobierno de Bánzer, se produjo un deterioro salarial en todos los sectores a excepción de los hidrocarburos. UDAPE, que utiliza datos de los ministerios de Planeamiento y Coordinación y de Trabajo y Desarrollo Laboral, reconoce sin embargo que la calidad de la información, cuando ésta está disponible, es mínima, y tan sólo se aventura a afirmar que «existen fuertes presunciones de que hubo un atraso salarial impor-

indiscutible que los trabajadores bolivianos tenían sobrados argumentos para concentrar sus reivindicaciones en el objetivo de obtener una reposición salarial inmediata. La demanda gozaba de una amplísima legitimidad social, respaldada tanto por los méritos de los demandantes como por una evidencia empírica abrumadora, y esta realidad imponía una fuerte restricción sobre las alternativas estratégicas de *todas* las instancias representativas del nuevo sistema democrático¹⁸. Tanto los dirigentes políticos como los sindicales sabían, por lo tanto, que la reproducción de su poder dependería centralmente de su capacidad para satisfacer las expectativas de mejora material acumuladas por los trabajadores; que cualquier intento de cambiarlas resultaría enormemente costoso en términos de *legitimidad*, dado que abriría una profunda *brecha de interpretación* entre los liderazgos y sus representados: ¿cómo explicar, en efecto, que no se haría efectivo el derecho, sobradamente ganado, a obtener una reposición salarial «justa»?

Es probable que la necesidad de intentar satisfacer las reivindicaciones obreras en las condiciones de la crisis no adquiriera desde el principio la forma de un *problema insoluble* en los mapas cognoscitivos de los operadores gubernamentales. Pero sin duda es cierto que a finales de 1982 los partidos de la UDP en el gobierno deseaban al menos *con la misma intensidad* contener el proceso inflacionario heredado y atender las demandas de consumo, y que si bien no percibirían que ambos objetivos resultaban radicalmente incompatibles mientras pareciera posible apostar por el éxito de algún programa de *estabilización con expansión* no desconocían tampoco que el primero imponía fuertes *restricciones* a sus alternativas en política de ingresos, y que por lo tanto resultaba imprescindible fijar cuando

tante durante todo el período, tanto en relación a la inflación como a la productividad» (UDAPE, 1985: 14). Según un informe del Banco Mundial (1984), los salarios también permanecieron estancados o cayeron en todos los sectores, pero la misma institución afirmaba un año antes que hubo un aumento continuo de los salarios reales hasta 1978, y que el de los trabajadores de la minería estatal, en concreto, se incrementó en un 40 por ciento entre 1972 y 1978, por encima de la media (Banco Mundial, 1983: 4). El problema en este caso es probablemente que el Banco Mundial calculó los salarios en dólares a la tasa de cambio oficial, que no guardaba relación con la inflación interna, y en cualquier caso no cita ninguna fuente para justificar una afirmación sobre los salarios de los mineros que choca frontalmente con la idea generalmente aceptada que fueron uno de los sectores más perjudicados en sus ingresos durante los años setenta. Pero la falta de consenso entre las fuentes queda patente en los resultados de un estudio muy elaborado (Lupo y Larrazábal, 1986) que utilizando datos del Banco Central de Bolivia y del Instituto Nacional de Estadística constata un fuerte aumento de los salarios reales entre 1974 y 1978 y un incremento de casi 9 puntos en la participación de los salarios en el PIB entre 1971 (año del golpe de estado de Bánzer) y 1978.

¹⁸ Conviene anotar que la propia UDP había contribuido ampliamente durante la transición a alimentar las expectativas de mejora material inmediata entre los sectores populares. La famosa consigna de «el hambre no espera», enarbolada por el MIR para forzar la retirada del gobierno militar de Vildoso y la convocatoria del congreso elegido en 1980, es sin duda el ejemplo más notable.

menos unos términos de *compromiso*. ¿Pero acaso los liderazgos sindicales no eran en absoluto conscientes de que la lucha anti-inflacionaria exigía algún nivel de compromiso en política de ingresos?; ¿Deseaban tal vez empeorar las cosas, agravar los problemas del gobierno "burgués"?; ¿O se tratará más bien de que la COB no percibía de entrada la inflación heredada como un problema, no la consideraba una restricción sobre sus alternativas estratégicas en la misma medida que el gobierno?. Si quisiéramos dar alguna importancia a lo primero deberíamos demostrar que los dirigentes nacionales de la COB estaban peor informados que los actores gubernamentales sobre las dimensiones reales de la crisis económica que heredaba el país, y desde luego no es fácil hacerlo. Lo segundo, por su parte, exigiría describirlos de entrada bien como agentes irracionales, cargados de algún odio ancestral, y esto es algo que siempre conviene evitar; bien como estrategias leninistas, lo que sólo valdría en el mejor de los casos para algunos, muy pocos, de entre ellos. Sólo el tercer interrogante permite en principio analizar las actitudes iniciales de la COB frente a las alternativas de la política económica eludiendo la atribución de pulsiones irracionales, inclinaciones dogmáticas o dosis de ignorancia *ad hoc* a sus liderazgos, y sólo por ello merece la pena explorarlo.

Tal vez una descripción sucinta de las *preferencias* de los dirigentes obreros y un análisis de los *cálculos* que podían realizar a partir de ellas en un contexto de incertidumbre que afectaba por igual a *todos* los implicados, permitan ofrecer una explicación suficiente de sus conductas. Para ello conviene comenzar recordando que la organización que se había convertido en los hechos en *el actor político dominante* en la coyuntura democrática *era una organización sindical* estrechamente vinculada por su historia y su estructura orgánica a la defensa de un conjunto de *intereses sectoriales*. El desencuentro inicial entre los actores del movimiento obrero, en efecto, puede *comenzar* a entenderse extrayendo sin más la *consecuencia necesaria*, frecuentemente olvidada, de ese hecho: los dirigentes de la COB y los partidos del gobierno tenían distintas *prioridades*, sus estructuras de *preferencias por los resultados* no eran en absoluto las mismas, porque si bien *todos* dependían para mantenerse en el poder de su capacidad para satisfacer las demandas materiales de los asalariados y todos habían adquirido un fortísimo compromiso con ellas, las élites partidarias, pero no las sindicales, dependían además *directamente* -en el mejor de los casos- del resultado de unas elecciones *generales*. Para las primeras, por lo tanto, el control de la inflación era desde el principio un criterio de éxito *inmediatamente relevante* -un objetivo prioritario-, pero no era

éste el caso de los liderazgos sindicales. Por el contrario, en la medida en que pueda defenderse que su *objetivo central* se concentraba en la defensa del *empleo* y los *salarios* en el sector formal de la economía podrá argumentarse también que la espiral inflacionaria sólo sería percibida como un *problema* inmediato y central -un objetivo prioritario de sus estrategias- por las direcciones obreras cuando su progresión se tornara incompatible con el mantenimiento de los niveles salariales y/o los empleos de su clientela histórica.

En este punto puede ser necesario despejar un posible malentendido. Si bien mi argumento se ha iniciado señalando un conflicto de *intereses* -y no de informaciones, de personalidades o de tradiciones ideológicas- en ningún momento exige negar que los dirigentes sindicales tuvieran una preocupación *real* por promover las demandas del *conjunto* de la población popular. Su *autocomprensión universalista* podía ser, antes bien, absolutamente sincera, y aún entonces sus preferencias continuarían estando inevitablemente ordenadas por *compromisos históricos* especialmente directos y por la *influencia inercial* que ejercían sobre ellas las demandas de determinadas franjas de intereses minoritarios. Tal vez la idea se entienda mejor formulándola de este otro modo: lo que deseo afirmar es tan sólo que si, como dije arriba, todas las instancias de representación del nuevo sistema democrático abrirían una profunda brecha de interpretación si intentaban alterar las expectativas de los trabajadores, para los dirigentes *sindicales* resultaría *particularmente* difícil cerrarla, dado que debían responder *directamente* ante ellos por sus decisiones. Por ello, los criterios con que evaluaban las distintas combinaciones posibles en política económica los cuadros comunistas en el gobierno y en la COB simplemente *no podían ser los mismos*, y si la izquierda parlamentaria tenía sobrados motivos para ensayar de entrada un compromiso, pidiendo a los liderazgos sindicales que contuviesen las demandas de sus bases y asumieran un acuerdo de moderación salarial, éstos deberían haber dispuesto de *razones muy poderosas* para arriesgarse a intentarlo.

La posibilidad de que se produjera una *pérdida de empleo* en el corto plazo, desde luego, no podía ser una de ellas. Por el contrario, resultaba evidente que en lo inmediato el empleo en los sectores que agrupaban al núcleo de su clientela *estaba garantizado*. El gobierno de la UDP, en efecto, no podía situar a los trabajadores ante un *escenario peor que la moderación salarial*, amenazando con imponer unilateralmente un programa de estabilización recesivo, que hubiera unido a la caída del poder adquisitivo de los salarios una destrucción importante de puestos de trabajo. No se trataba sólo de que el gobierno careciera

de los recursos políticos necesarios para hacerlo, sino ante todo de que existía una coincidencia estratégica absoluta entre la COB y los partidos de la UDP en cuanto al tratamiento del sector productivo público y de la planta industrial del país, dado que todos tenían un fuerte compromiso político, asentado en el núcleo de la *identidad* de la izquierda nacional, con el fortalecimiento de las empresas del estado y el desarrollo de la producción industrial para el mercado interno¹⁹. Sus primeras decisiones, y en especial la inclusión en plantilla de unos 1.500 trabajadores eventuales de COMIBOL pese a la gravísima situación financiera que atravesaba la empresa (Chuquimia, 1987: 140), no hicieron sino confirmarlo.

En estas condiciones sólo un *cálculo político de medio plazo* podría haber hecho de la cooperación con la política anti-inflacionaria del gobierno una opción más atractiva, ofreciendo a la dirección nacional de la organización obrera algún incentivo para promover estrategias de moderación salarial. Desde luego, los dirigentes sindicales bolivianos razonaban en términos políticos. Estaban acostumbrados a hacerlo, y sería absurdo pretender que no eran conscientes de que el poder de negociación de las organizaciones sindicales y su capacidad para avanzar los intereses de sus clientelas en el medio plazo dependía de la consolidación del lugar central que ocupaba el movimiento obrero en el sistema político. Sin embargo, los liderazgos obreros estaban en una muy mala posición tanto para realizar *cálculos ajustados* sobre sus *alternativas políticas* como para *trasladarlos* de un modo creíble a sus clientelas. En efecto, el entorno estaba marcado por una fuerte incertidumbre, y la anticipación de las posibles restricciones derivadas del funcionamiento del nuevo sistema político -con sus nuevas reglas y sus nuevos actores- sólo podía ser *extremadamente débil*.

En primer lugar, hay que recordar que la *continuidad* de las nuevas reglas del juego democrático no parecía en absoluto garantizada, que las características peculiares de la transición política boliviana hacían particularmente difícil predecir la evolución del sistema político en el medio plazo. Pero en segundo lugar, y esto es particularmente importante, la ausencia de experiencias previas en el juego político democrático generaba una fuerte incertidumbre sobre las *consecuencias* de sus reglas. No se trataba sólo, por lo tanto, de que resultara muy difícil asegurar que habría elecciones, sino, sobre todo, de que también lo era en la misma medida predecir y explicar a las bases el impacto que tendrían éstas, de haberlas, en los recursos políticos del movimiento sindical, dado que *la verificación del apoyo ciudadano en*

¹⁹ Véanse los textos citados en la nota 7 de este capítulo.

el acto electoral no había desempeñado nunca en Bolivia un papel relevante para la reproducción del poder político. Ya he tenido ocasión de anotar que la ausencia de una tradición democrática significativa había cristalizado en la indiferenciación histórica de los papeles del partido y el sindicato, en la consolidación de la forma organizacional sindicalista característica del movimiento obrero boliviano, que hacía plausible la autocompresión de la COB como "actor mixto", rival o sustituto de los partidos en el juego por ostentar la representación política del pueblo de Bolivia. Pero si la continuidad del sistema democrático era incierta y si los recursos políticos del movimiento sindical podían presentarse en cualquier caso desvinculados del destino de los partidos políticos de la izquierda, ¿cómo podría argumentarse que los trabajadores tenían un interés egoísta en fortalecer al gobierno, dada la ausencia de opciones electorales alternativas en la izquierda y la necesidad de eludir la "trampa" de una mayoría política conservadora?

La única restricción política que reconocían con seguridad los trabajadores, la única "trampa" que deseaban ciertamente evitar en este nivel, era la posibilidad de que se produjera una nueva *involución autoritaria*. Todas las discusiones iniciales sobre la conveniencia de contener las reivindicaciones materiales fueron, en efecto, variaciones en torno a la necesidad de prevenir otro asalto golpista, y no cabe duda de que el tema tenía -no podía ser de otro modo- un fuerte arraigo en la conciencia de la población obrera. La sensación de precariedad y las fuertes dosis de pesimismo histórico que habían inoculado a los bolivianos las experiencias más recientes -en particular la irrupción inesperada del régimen terrorista de García Meza-, en efecto, motivaron muchas jornadas de trabajo gratuito dedicadas a la «defensa de la democracia»²⁰.

Pero el tema abstracto de la democracia y su defensa estaba abierto a demasiadas "variaciones", y resultaba imposible que operara como una restricción política diáfana, capaz de canalizar de un modo efectivo las expectativas y las conductas. Las "enseñanzas" del pasado a este respecto no eran en absoluto evidentes, como tampoco lo era la relación entre la defensa genérica de la democracia -un sistema político abierto a la participación popular- y el respaldo a los trabajos de su primer gobierno. Probablemente sea cierto que para que un actor colectivo "aprenda" de las experiencias pasadas -para que las "lecciones" históricas

²⁰ Estos gestos, surgidos en su inmensa mayoría de iniciativas espontáneas de las bases, fueron recogidos abundantemente por la prensa en los primeros meses del gobierno democrático.

den lugar a ideas compartidas, sedimentadas, capaces de *estructurar* las expectativas y guiar las conductas- éstas tendrían que repetirse un buen número de veces en unas condiciones de entorno estables, dado que de no ser así siempre será esperable que sobreviva una amplia variedad de interpretaciones igualmente plausibles para el mismo conjunto de recuerdos. Esto último era lo que ocurría, en cualquier caso, en el problema que ahora nos ocupa. En efecto, cabía argumentar, como se hizo con frecuencia tanto desde los partidos del gobierno como en la red sindical, que el radicalismo reivindicativo había conducido al movimiento obrero en el pasado a derrotas políticas prolongadas, de tal modo que los sindicatos deberían adoptar en la nueva coyuntura una actitud contenida y abierta a las ofertas gubernamentales de colaboración²¹; pero también podía defenderse que la situación presente era radicalmente distinta, por lo que las conclusiones avanzadas eran ilegítimas²², o apelar a otras experiencias que permitían desafiarlas²³. Del mismo modo, si se trataba sólo de la defensa genérica de la democracia como sistema, y el gobierno de la UDP era sin lugar a dudas una parcialidad, no había por qué suponer que el fracaso de éste arrastraría necesariamente al primero. Era posible pretender que sí, y afirmar por ello que la organización obrera debería estar dispuesta a hacer «todo lo posible porque no fracasase el nuevo gobierno»²⁴, pero también podía insinuarse lo contrario: que se trataba más bien de asegurar la continuidad del sistema resguardándolo de las previsibles agresiones de un gobierno incapaz y «malo»²⁵. De este modo, las *limitaciones cognitivas* derivadas de la ausencia de experiencias históricas en el juego democrático, la fluidez de la situación política en el período transicional, y la ambigüedad de los llamamientos genéricos a la defensa del sistema, hicieron que los cálculos

²¹ Esta era la posición que defendían desde distintas concepciones del valor táctico -instrumental- de la coyuntura democrática los cuadros del PCB y algunos miembros de las corrientes autogestionarias encabezados por Filemón Escóbar, que recordaban constantemente la experiencia de Torres y el golpe de estado que inauguró el "Banzerato".

²² Como hacían repetidamente Juan Lechín y otros líderes sindicales al recordar que no cabía extraer "lecciones" del episodio de Torres, dado que el gobierno de éste, al contrario que el actual, era abiertamente popular y de izquierdas. Véanse por ejemplo las declaraciones del Secretario Ejecutivo de la COB en *Hoy*, 9 de octubre, 1982.

²³ Después de todo, la movilización sindical había sido suficiente para forzar el retorno inmediato de los militares a los cuarteles en noviembre de 1979, de modo que bastaba con mantenerse en guardia frente a las fuerzas de la reacción y alimentar el espíritu combativo de los trabajadores.

²⁴ Oscar Sanjinés, Secretario General de la COB, en *El Mundo*, 7 de octubre, 1982.

²⁵ Juan Lechín, Secretario Ejecutivo de la COB, en *El Diario*, 8 de octubre de 1982.

sobre las alternativas políticas de las organizaciones obreras en el medio plazo se mantuvieran totalmente "abiertos". *Ninguna posible amenaza al poder político del movimiento obrero, por lo tanto, tenía la fuerza suficiente para justificar una moderación de las demandas.*

Finalmente, *la incertidumbre se extendía también a los nuevos parámetros económicos del juego socio-político: todos los actores ignoraban las dimensiones de la crisis y, por lo tanto, las alternativas abiertas en el medio plazo a la política económica.* Si parece indiscutible que la disposición a asumir esfuerzos hoy será mayor cuanto mayores sean los riesgos percibidos -el riesgo de perder mucho o de dejar de ganar mucho-, resulta evidente que en 1982 era imposible conocer el *valor* real de lo que estaba en juego en la lucha política, el contenido y la extensión que podría adquirir la *agenda* de las reformas en el proceso de crisis del modelo de desarrollo. Conviene recordar a este respecto, por un lado, que la memoria "larga" del sindicalismo boliviano parecía avalar la idea de que el crecimiento del empleo formal en la industria nacional y en el sector productivo público era una *tendencia estructural*, independiente de la filiación ideológica y los recursos políticos de los gobiernos. No sólo el país no había sufrido un proceso de desindustrialización desde 1956, sino que las tasas de crecimiento del producto industrial habían sido además muy superiores en los años 70 a las registradas en las dos décadas precedentes, contrariando la tendencia general de América Latina²⁶, mientras el empleo en el sector productivo público no había dejado de aumentar desde la revolución nacional, incluso cuando las élites del estado enarbolaban un discurso privatista²⁷. *Todos los datos parecían demostrar que la única variable de ajuste económico eran los salarios, y que los trabajos, por lo tanto, no estaban en juego.* Por otro lado, resultaba muy difícil *anticipar* la magnitud que podrían adquirir *los conflictos entre los distintos intereses sustantivos* de los colectivos que la organización obrera pretendía representar. Desde luego, si la experiencia histórica acumulada parecía garantizar que el empleo de los trabajadores en el sector formal estaba garantizado -con lo cual no había

²⁶ Las tasas de crecimiento del producto industrial entre los períodos de 1950-1973 y 1973-1980 cayeron en más de un punto y medio para en los países grandes de América Latina, en más de tres puntos en los medianos, y se mantuvieron estables en los pequeños -la caída fue en éstos últimos de 0.2-. En Bolivia, por el contrario, el ritmo del desarrollo industrial se aceleró notablemente -las tasas promedio pasaron del 3.9 anual en el primer período al 5.8 en el segundo-. Fajnzylber (1987), p. 323 (cuadro).

²⁷ El régimen de Bánzer ofreció sin duda, como vimos, el ejemplo más notable de esta contradicción entre el discurso económico y la práctica real.

por qué resignarse a aceptar ningún *trade off* entre empleos y salarios-, la década que siguió al triunfo revolucionario de 1952 también ofrecía alguna ilustración acerca de los efectos perniciosos que podían tener las pugnas distributivas sobre la unidad, el prestigio y la influencia social de la COB -con lo cual sí habría que resignarse a aceptar algún desagradable *trade off* entre los intereses de las clientelas tradicionales, conteniendo cuanto menos su incipiente "salarialismo", y los del nuevo público que había ganado la organización en los últimos años-. Sin embargo, esto último era cosa de esperar y ver: por el momento, en ausencia de información adicional sobre el nivel de recursos del sistema, la política de ingresos expansiva prometía mejorar los consumos *de todos*, y en esta situación las posibles contradicciones *prácticas* entre la ordenación "natural" de preferencias de la COB como sindicato y su autocomprensión universalista no podían tener un impacto relevante sobre el cálculo de sus alternativas estratégicas.

Lo que he venido afirmando hasta ahora debería ser suficiente para entender por qué si los dirigentes sindicales tenían muy buenas razones para aceptar la centralidad excluyente que comenzaron a adquirir desde el primer momento las reivindicaciones salariales, evitando cualquier enfrentamiento con las bases, no las tenían en cambio para intentar contenerlas. Al inicio del período democrático, ningún cálculo económico o político podía impulsarles a renunciar a utilizar todo el poder de negociación de que disponían en la coyuntura para impulsar las reivindicaciones económicas de sus bases. *No tenía sentido*, por lo tanto, *pretender que la COB asumiera una parte de los costos de la gestión de la crisis como consecuencia de algún cálculo sobre sus propios intereses en el medio plazo*. Por el contrario, lo más racional para ella era, a todas luces, arrojar la pelota al tejado ajeno.

En estas condiciones, la única opción de que disponían los cuadros obreros *mayoritarios*, que militaban en los partidos de gobierno y deseaban promover el apoyo de las organizaciones sindicales a los esfuerzos de la UDP, era intentar producir una *transformación solidaria* de la matriz de pagos percibida, reemplazando los *cálculos egoístas* por *consideraciones normativas*: en efecto, dado que la estrategia de moderación salarial sólo podía presentarse como una *concesión* al gobierno -y no como una opción que pudiera interesar a los trabajadores- sólo cabía respaldarla apelando a valores, invocando motivaciones de "compromiso" o "deber". Pero ni el *compromiso* con los partidos de la izquierda ni el deber hacia los representantes electos podían encontrar arraigo alguno en la tradición sindicalista del movimiento obrero, y no debe extrañar, por lo tanto, que las presiones para

producir una transformación solidaria de los cálculos fueran totalmente marginales. Los militantes comunistas, miristas y movimientistas de izquierda afirmaban abiertamente desde el gobierno y en las reuniones partidarias que todos eran miembros de la misma familia, que compartían la misma historia y el mismo destino, que deseaban solucionar los mismos problemas y que, de hecho, la "clase obrera" estaba ya en el poder con la UDP²⁸; pero en la red sindical hablaban con la boca pequeña, adoptaban actitudes vergonzantes y eran absolutamente incapaces de utilizar su preponderancia orgánica en todos los niveles de liderazgo para enfrentar la interpretación sindicalista de la "independencia de clase" avanzada por Juan Lechín, por las corrientes autogestionarias y, en la práctica, por todos los pequeños partidos de la ultraizquierda²⁹, que se adecuaba perfectamente a lo que parecían ser los intereses egoístas de la organización. Si no cabía remitirse al compromiso histórico con los partidos de la izquierda, hubiera resultado aún menos plausible respaldar las concesiones apelando al deber de sostener los esfuerzos del primer Presidente de la democracia. Ya he comentado que la legitimidad legal-racional que pudiera haberse derivado de sus tres victorias sucesivas en las urnas también carecía por completo de arraigo en la tradición boliviana, y que ni el Presidente ni las élites políticas que lo rodeaban habían acumulado durante la transición los "sacrificios" o los "méritos" necesarios para merecer la simpatía de los trabajadores.

Más adelante me referiré con algún detalle a este contexto normativo, pero lo que me interesa destacar ahora es que *la actitud inicial de la COB no tiene por qué explicarse a partir de la ideologías y los valores heredados*. Éstos, de haber sido otros, podrían haber ayudado a alcanzar a un compromiso haciendo de la central sindical en un jugador altruísta - preocupado también por los beneficios gobierno-, pero, siendo los que eran, simplemente permitieron que los sindicatos se comportaran como el calculador "frío", indiferente, que prevé la teoría de juegos. Y las conductas pueden explicarse a partir de esos cálculos, sin necesidad de asumir motivaciones competitivas irracionales respaldadas por hostilidades

²⁸ En los primeros momentos, mientras se diseñaban las medidas económicas, se registraron muchas declaraciones de este tipo. Las más directas y extensas fueron sin embargo las de Ramiro Barrechea, Ministro de Trabajo y militante del PCB, en un programa de la televisión estatal. Véase, por ejemplo, *Presencia*, 19 de noviembre, 1982.

²⁹ La agresividad del discurso sindicalista y el apocamiento de los cuadros obreros de los partidos se traducía en comunicados del Comité Ejecutivo de la COB que respondían de inmediato a las declaraciones gubernamentales que la UDP «no es de la clase trabajadora». Véase *Presencia*, 20 de noviembre, 1982.

ideológicas y personales, o por una cultura política que negaba la posibilidad del compromiso. No hace falta, por lo tanto, apelar al odio ancestral que profesaba Lechín a Siles Zuazo ni aceptar la tautología consagrada: los sindicatos bolivianos no cooperaron con el gobierno porque *eran* así, y no podían comportarse de otra manera.

Por el contrario, la descripción sucinta de sus preferencias como sindicato y de los cálculos que podía realizar a partir de las experiencias previas en un contexto de incertidumbre que compartían todos los actores del nuevo escenario democrático, permite afirmar que la no cooperación era la actitud más racional para *cualquier* jugador egoísta, con independencia de su "identidad". La identidad histórica de los sindicatos bolivianos da cuenta de por qué pudieron tratar al gobierno como un *extraño* -«el gobierno *dice* que es democrático y de izquierdas, pero un gobierno se define por sus actos, no por sus palabras»³⁰- pero puede prescindirse de ella para explicar por qué *decidieron* no apoyar una política de austeridad. Basta con entender que carecían de razones para hacerlo.

LA DIALÉCTICA DEL VETO

EL BLOQUEO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

En la noche del 16 de marzo de 1983 el gobierno dictó 11 decretos y resoluciones supremas que contenían un conjunto de "ajustes" enormemente suaves al plan de estabilización heterodoxo de noviembre. Los aumentos en los precios de nueve productos de la canasta familiar, controlados por el gobierno, fueron insignificantes; no se alteraron los precios de los combustibles, cuya comercialización en régimen de monopolio estatal constituía una fuente de ingresos de importancia capital para el fisco, y se mantuvo también la paridad oficial de la moneda boliviana frente al dólar.

Desde luego, si se toma en cuenta la magnitud de los problemas que había creado ya

³⁰ *Presencia*, 29 de diciembre, 1982.

la aplicación de la estrategia inicial del gobierno, las medidas aprobadas resultaban, más que suaves, absurdamente tímidas. Ante todo, las disposiciones de política cambiaria, y en particular el decreto de desdolarización, habían comenzado a generar, contrariamente a lo que esperaron sus artífices, una violenta intensificación del *comportamiento especulativo* de los agentes económicos y de los pequeños ahorristas. Las expectativas inflacionarias, alimentadas en gran medida por la actitud no cooperativa de los sindicatos, y la desconfianza general en la capacidad del gobierno para mantener la paridad del peso frente al dólar -además del sabotaje deliberado de un buen número de empresarios y banqueros-, se tradujeron desde el principio en un fuerte incremento de la demanda de divisas en el mercado paralelo, iniciando un proceso que adquirió muy pronto una dinámica de "bola de nieve". Los más avisados -o los peor intencionados- retiraron automáticamente sus depósitos bancarios, convertidos en moneda nacional por el decreto de desdolarización, para comprar dólares "negros", impulsando su precio al alza y provocando el pánico de otro grupo de ahorristas, que iniciaba el mismo movimiento y arrastraba tras de sí a un tercero. De este modo, cada uno contribuía a reducir la confianza de los otros, a ensombrececer el futuro de la política económica, y cada vez más agentes manifestaban una preferencia absoluta por la liquidez inmediata, contribuyendo a alimentar el circuito especulativo. Lamentablemente, el resultado fue que la especulación en el mercado paralelo se convirtió de hecho en la actitud más racional para todos los bolivianos, como demostraría poco después la suerte de los ahorristas que se quedaron quietos y terminaron pagando su confianza, su desinformación o sus servidumbres legales con la pérdida de su capital, que se licuó por completo con el avance del proceso inflacionario³¹.

En los primeros meses de 1983, por supuesto, el proceso especulativo estaba sólo comenzando a apuntar, pero la *brecha cambiaria*, que superó en febrero el 200%, tenía ya una enorme repercusión sobre el déficit público. El estado boliviano, en efecto, vendía sus

³¹ El decreto de desdolarización tuvo unos efectos particularmente *perversos*, dado que terminó empobreciendo a aquéllos a quienes pretendía beneficiar, mientras los grupos de deberían haber cargado con los costos de la medida, en particular el sector bancario, salieron indemnes e incluso obtuvieron grandes beneficios con la espiral especulativa. Con el avance de la inflación los depósitos de una gran parte de los pequeños ahorristas y de los fondos de pensiones y de vivienda ligados a sindicatos u otras instituciones populares convertidos a moneda nacional perdieron casi todo su valor. Sobre las espaldas de los modestos, sin embargo, comenzaron a hacerse grandes fortunas, dado que los agentes con mayores recursos materiales y/o mejor acceso a la información, capaces de asumir riesgos o actuar sobre seguro, multiplicaron sus capitales jugando con la moneda. La consecuencia final del proceso sería una redistribución negativa de la riqueza y un drama social de grandes dimensiones cuyas consecuencias se sienten todavía hoy en Bolivia.

divisas, sus productos y sus servicios a la tasa de cambio oficial, y compraba a precios que en su mayoría estaban indexados a las cotizaciones del mercado paralelo, de modo que estaba subvencionando en los hechos a los especuladores a costa de una expansión continua del déficit. Y la creciente emisión inorgánica de dinero para cubrir los agujeros cerraba el círculo vicioso, entregando nuevos medios líquidos al circuito especulativo y alimentando así la escalada de los precios.

En este contexto inflacionario el gobierno aprobó además, el mismo 16 de marzo, la reglamentación de la escala móvil que había prometido tres meses antes, y otorgó a los trabajadores el segundo "reajuste" salarial de la democracia -un aumento del 46% sobre el salario mínimo, equivalente a la inflación acumulada desde diciembre el año anterior-. Mediante un Decreto Supremo dictaminó que la base de la escala móvil sería en adelante el salario mínimo, y que los reajustes tendrían lugar de un modo automático cada seis meses o cada vez que la inflación superase el 40 por ciento. Los partidos de la UDP expresaban así con claridad meridiana su compromiso tanto con consideraciones de justicia en la distribución de los costos del ajuste, como con la preservación del poder adquisitivo de los salarios: al aplicar la escala sobre la base del salario mínimo se intentaba favorecer a los trabajadores con menores ingresos, achatando la curva de las diferencias salariales entre sectores y dentro de las empresas, mientras la revisión inmediata de los salarios si la inflación superaba el 40% -principio del "gatillo"- pretendía evitar cualquier posible acumulación de retrasos importantes en perjuicio de los asalariados.

La mayoría de los decisores gubernamentales, sin embargo, eran perfectamente conscientes de los riesgos que estaban asumiendo al mantener las subvenciones al consumo, y de que las normas para la aplicación de la escala móvil introducirían con seguridad problemas adicionales para el manejo futuro de la política económica, dado que si se mantenía la progresión inflacionaria la aplicación del principio del "gatillo" en plazos cada vez más cortos contribuiría inevitablemente a multiplicar la espiral, mientras el criterio de equidad tendería a igualar rápidamente los salarios, generando intensos agravios comparativos. De hecho, y contrariamente a lo que pudiera hacer pensar el claro continuismo de las nuevas disposiciones del 16 de marzo de 1983, *las interpretaciones dominantes en el equipo económico gubernamental sobre las alternativas en política de ingresos habían sufrido ya por entonces cambios de una enorme importancia.*

En efecto, un par de meses antes, el MIR, responsable inicial del área económica,

había abandonado el gobierno en un episodio bastante oscuro³², y tras una larga crisis dos tecnócratas sin filiación partidaria y vinculados directamente al Presidente habían pasado a encargarse de la dirección del equipo económico, ocupando las carteras de Finanzas y Planeamiento. Ambos estaban convencidos de que el programa de estabilización expansiva estaba condenado al fracaso, y comenzaron a pugnar intensamente por introducir una reorientación global de la política gubernamental hacia posiciones más "realistas". La idea fuerza que animaba sus argumentos era que en la situación de colapso cambiario que vivía el país *resultaba indispensable llegar a un acuerdo con el FMI* que abriese la posibilidad de recibir nuevos créditos de la banca privada y de los organismos multilaterales, y su primera decisión al incorporarse al gabinete fue, en consecuencia, reanudar los pagos de la deuda con los bancos comerciales internacionales que estaban en mora desde septiembre de 1982, antes de que la UDP se hiciera cargo del gobierno. Por supuesto, aquélla señal de buena voluntad no fue suficiente para los representantes del Fondo, que exigieron al gobierno boliviano, como condición previa a la consecución de cualquier acuerdo, la aplicación de un programa de austeridad capaz de promover una reducción drástica del déficit público. La estrategia del nuevo equipo económico era aproximarse a esa meta introduciendo una serie continua de ajustes graduales en la economía, reduciendo paulatinamente la demanda interna a unos niveles adaptados al nuevo entorno económico. Según su interpretación, era imposible mantener el nivel de demanda y la política de ingresos sin disparar el déficit y provocar muy pronto una inflación incontrolable³³. Este diagnóstico pesimista, avalado por los efectos iniciales del programa heterodoxo de noviembre y la actitud de los posibles financiadores externos, adquirió una credibilidad adicional cuando comenzaron a revelarse las dimensiones del brutal "shock de oferta" provocado por el colapso de la producción agrícola a comienzos

³² El 7 de enero el MIR retiró a sus seis ministros del gabinete, aunque el partido continuó integrado en la UDP y mantuvo a Jaime Paz Zamora, su principal dirigente, en la vicepresidencia de la República. Según expresaron entonces los portavoces del MIR, la renuncia de sus ministros se debió a la «falta de conducción unitaria del gobierno» provocada por la actitud de un sector del MNRI -el «sector palaciego»- que negaba «teórica y prácticamente, la validez de la UDP». Véase *Presencia*, 10 de enero, 1983. Esta salida del MIR, producto en realidad de la pugna por el poder entre los partidos de la coalición, tuvo unos efectos políticos devastadores. De entrada, cuando menos, contribuyó a debilitar aún más la confianza del público en la voluntad y la capacidad del gobierno para aplicar el plan de estabilización de noviembre. Más difícil es calibrar el impacto real de las conductas aberrantes que asumió de inmediato el MIR en la oposición, que sólo pueden explicarse en un contexto político dominado por los conflictos de interés entre camarillas con una nula educación en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno.

³³ Véase el "Memorándum" presentado al Presidente de la República por Flavio Machicado, Ministro de Finanzas, en julio de 1983.

de 1983. Como consecuencia de las sequías e inundaciones que sufrió el país en los primeros meses del año, en efecto, se produjo una caída del producto agropecuario que terminaría aproximándose finalmente al 25% y que fue mucho más pronunciada en los cultivos destinados a la alimentación popular³⁴, generando una enorme escasez y promoviendo las tendencias inflacionistas en los mercados populares.

Así, todos los datos parecían apuntar a la necesidad de emprender el giro "realista" que recomendaba el nuevo equipo económico, y nadie en la UDP estaba en condiciones de ofrecer otra interpretación plausible de las alternativas abiertas a la política económica. *Sin embargo, la «nueva política económica gradualista»* diseñada por los tecnócratas independientes, avalada por el aparente agotamiento de las soluciones de la "izquierda nacional" y por las crudas cifras del declive productivo, *se estrelló de inmediato contra las realidades de la situación política boliviana*. Los ministros independientes, en efecto, intentaron concertar con la COB y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) el marco para la aplicación de la nueva estrategia, pero su apuesta estaba perdida de antemano. Si la patronal otorgó de entrada un respaldo pleno al proyecto, que contenía en su lectura una «saludable» aproximación a la ortodoxia³⁵, los dirigentes obreros rechazaron «por principio» todo su contenido. El período de consultas no condujo a ningún acuerdo, y las propuestas del gobierno tan sólo generaron de inmediato un ambiente tenso, cargado de acusaciones mutuas que expresaron las posiciones irreconciliables de los agentes sociales. Mientras la COB afirmaba que la patronal estaba conspirando con grupos de la oposición civil para provocar un «golpe constitucional» destinado a eliminar el poder de los sindicatos y cargar todo el peso del ajuste sobre los trabajadores, la prensa afín a los medios empresariales denunciaba a diario las intenciones sindicales de «tomar el poder del Estado»³⁶. En este contexto, los representantes obreros abandonaron las conversaciones, aseguraron que no tenían nada que negociar y que Siles Zuazo tenía en sus manos la responsabilidad de decidir «libremente» si

³⁴ La producción de tubérculos cayó en un 58%, la de hortalizas y legumbres en un 53% y la de cereales en un 29%. Véase Espejo (1990a), p. 14.

³⁵ Fernando Illanes, presidente de la patronal, afirmó a la salida de las conversaciones que el plan elaborado pro los ministros "independientes" era «coherente, completo» y contenía un esfuerzo serio para reducir el déficit fiscal. *Presencia*, 14 de marzo, 1983.

³⁶ Pueden verse como botón de muestra las afirmaciones del Comité Ejecutivo de la COB en *Presencia*, 12 de marzo, 1983, y el editorial de *El Mundo* en la misma fecha.

optaba por «los trabajadores o por el sector empresarial»³⁷.

Lo que estaban afirmando los dirigentes de la COB con su actitud era, desde luego, que *no tenían motivos para tomar en cuenta las nuevas preocupaciones del gobierno*. Tras el fracaso del programa heterodoxo inicial, el control de la inflación se había ido convirtiendo definitivamente en el objetivo prioritario del gobierno, y los nuevos ministros percibían que su consecución resultaba incompatible con el mantenimiento del nivel de demanda fijado en noviembre del año anterior. En los cuatro meses transcurridos desde finales de noviembre de 1982 las interpretaciones de los actores gubernamentales, y por lo tanto sus preferencias por las combinaciones alternativas en política económica, habían sufrido varaciones muy sustanciales. El problema, sin embargo, es que estos cambios *no podían tener incidencia alguna en los resultados: el gobierno tenía un nuevo marco cognitivo, pero carecía por completo de los recursos políticos necesarios para llevar adelante siquiera parcialmente sus proyectos sin la cooperación de los sindicatos*. El gobierno no podía amenazar con emprender ninguna acción unilateral, y los sindicatos, por lo tanto, no tenían ninguna razón para incorporar a los cálculos sobre sus alternativas las nuevas preferencias de un jugador de cartón, impotente, carente por completo de autonomía frente a ellos. Por eso los representantes obreros pudieron limitarse a expresar su total desacuerdo con el discurso de los "licenciados" y a cerrar después la puerta, dejando «en libertad» a los políticos para decidir lo que consideraran más conveniente, con la seguridad de que enterrarían las medidas bajo la alfombra.

Eso fue exactamente lo que ocurrió. Los ministros del área económica se limitaron a hablar con todos hasta que se resignaron a aceptar que, por el momento, la prédica del gradualismo no se traduciría en ninguna acción de política económica. La COB había dejado suficientemente claros los límites de lo que estaba dispuesta a tolerar, y los partidos de la UDP en el gobierno no deseaban ponerlos a prueba, en especial -aunque seguramente no hay que dar demasiada importancia a esto- en una coyuntura en la que el MIR estaba haciendo coro con la oposición demagógica de la derecha y acusando al nuevo gabinete de haber dejado de lado el proyecto original de la UDP para disponerse a restaurar «de manera dramática, la acentuación de la crisis y sus efectos negativos para el país y para el

³⁷ *Presencia*, 1 de marzo, 1983; *El Mundo*, 14 de marzo, 1983.

pueblo»³⁸. Así las cosas, no debe extrañar que el gobierno anunciara su decisión de mantener inalterados el tipo cambio y los precios de los carburantes tan sólo un día después de que el Comité Ejecutivo de la COB le recordara en un comunicado que ambos puntos eran de «una especial importancia para la clase trabajadora»³⁹, y que las medidas del 16 de marzo, que debían haber sido el acto fundacional de la nueva política económica «gradualista», no tuvieran finalmente nada que ver con lo que hubieran querido los ministros independientes. Dada la suavidad de las medidas, la reacción laboral fue muy moderada y, pese al descontento por un aumento salarial considerado de nuevo «insuficiente» en los medios sindicales no hubo grandes manifestaciones de protesta. Se había conseguido de este modo evitar la escalada de conflictos que muchos habían previsto que estallaría a la conclusión de los cien días de «tregua»⁴⁰. Sin embargo, *todos estaban condenándose a pagar un precio muy alto por preservar la paz social*.

La situación de bloqueo de la política económica, en efecto, se prolongó indefinidamente. El «momento político adecuado» para dictar los ajustes previstos en el programa no llegó nunca, y a mediados de julio de 1983, sólo cuatro meses después del anuncio inicial de su estrategia «gradualista», los ministros de Finanzas y Planeamiento decidieron presentar su dimisión irrevocable al Presidente. El titular de Planeamiento justificó su renuncia al cargo asegurando que nada de lo propuesto se había llevado a la práctica, y que a esas alturas su proyecto no tenía ya ninguna posibilidad de éxito. El programa de estabilización presentado en marzo requería de reajustes graduales y continuos en los precios «sin esperar grandes acumulaciones», pero, según el ministro, un cúmulo de «consideraciones sociales y políticas» habían impedido hasta entonces tomar cualquier decisión: los responsables de la política económica habían sido obligados a postergar una y otra vez las medidas correctoras «con el argumento de que la evaluación política del momento no las aconseja y sería bueno esperar otra coyuntura»⁴¹. Pero la cruda realidad era que si el programa «gradual» de austeridad diseñado por los ministros independientes había nacido muerto, *los actores del movimiento*

³⁸ *Presencia*, 12 de marzo, 1983.

³⁹ *Presencia*, 4 y 5 de marzo, 1983.

⁴⁰ La agencia EFE, por ejemplo, había augurado un inminente «tormenta laboral» en cuanto concluyera el plazo. *Informe Mensual*, No. 5, marzo 1983, p. 7.

⁴¹ *El Mundo*, 13 y 21 de julio, 1983.

obrero no proponían ninguna política alternativa. De este modo, una vez agotado el efecto estabilizador que produjo inicialmente sobre las expectativas la incorporación al equipo económico de los tecnócratas y el inicio de negociaciones con el FMI, *la economía boliviana comenzó a deslizarse de nuevo por la pendiente inflacionaria.* En medio de la parálisis gubernamental, la cotización del dólar en el mercado paralelo, que había caído en abril y mayo por primera vez desde la instalación del gobierno democrático, se disparó a partir de junio, y la inflación siguió el mismo camino. En julio, la tasa de inflación acumulada obligó al gobierno a decretar un nuevo reajuste salarial en aplicación del principio del "gatillo", y el índice de precios dio un nuevo salto: la tasa mensual de inflación, que había sido del 3.20% en junio y del 10.06% en julio, ascendió a 25.93% y 16.41% en agosto y septiembre respectivamente.

EL DEBATE SOBRE LA PARTICIPACIÓN SINDICAL EN EL GOBIERNO

Las discusiones en torno al lugar que debían ocupar las organizaciones del trabajo en la estructura institucional de la nueva democracia boliviana estuvieron ligadas desde el principio a un núcleo temático que había tenido siempre una gran relevancia en la agenda del sindicalismo minero: la *cogestión obrera*. La UDP había asumido un compromiso explícito en su programa electoral con «el derecho de los trabajadores a participar colectiva y responsablemente en la cogestión de las empresas del área estatal»⁴², y se preocupó muy pronto por reglamentar las nuevas modalidades de gestión participativa. El 5 de noviembre de 1982 creó mediante Decreto Supremo una comisión mixta encargada de fijar los fundamentos legales para el funcionamiento efectivo de las administraciones cogestionarias, y al día siguiente promulgó otros dos decretos que establecieron ya el principio de la *participación paritaria* de los trabajadores en los directorios de COMIBOL y YPFB, las dos mayores empresas del estado.

Una participación «paritaria» estricta era, por supuesto, imposible, y resultaba

⁴² UDP, *Bases del programa de gobierno de la UDP*, La Paz, mayo 1980, p. 3.

necesario trascender el compromiso abstracto para acordar un diseño preciso de las estructuras internas de autoridad en las empresas. Sin embargo, las negociaciones para definir las, que comenzaron a desarrollarse en el seno de la comisión mixta el 22 de diciembre de 1982, entraron en una vía muerta desde su jornada inaugural. La UDP necesitaba preservar de algún modo el control central sobre el funcionamiento de las empresas que constituían el eje del sector exportador, pero los dirigentes sindicales mineros tenían su propia idea, radicalmente incompatible con la del gobierno, sobre las estructuras de poder que debían regir el ejercicio de la cogestión obrera en Bolivia: la FSTMB, en efecto, no estaba dispuesta a resignar el "derecho" de los trabajadores del subsuelo a decir la última palabra en todas las decisiones conectadas con la política minera. Con el debate planteado en estos términos, no debería extrañar que las discusiones en el seno de la comisión mixta relegaran por completo el análisis de las alternativas más funcionales para superar la profunda crisis que heredaba el sector productivo público, y se centraran exclusivamente en determinar «quién *debe* tener el poder de decisión en las unidades de producción»⁴³. Para la FSTMB y la COB se trataba ante todo de conseguir que la administración cogestionaria incorporara una mayoría de votos obreros en el directorio de las empresas, y Juan Lechín advirtió desde el principio que los representantes sindicales estaban dispuestos a mantener «invariable» esa exigencia a lo largo de todo el proceso de negociaciones⁴⁴.

En realidad, sólo los sindicatos mineros se ocuparon en serio del problema de la cogestión, situándolo en un lugar central de su agenda reivindicativa, y fueron ellos quienes bloquearon las negociaciones emprendiendo una defensa cerrada del principio de la cogestión obrera *mayoritaria*. Los trabajadores mineros eran los únicos que habían vivido una experiencia relativamente prolongada de participación en la gestión de sus empresas y, sobre todo, eran quienes percibían con una mayor intensidad la incertidumbre, las amenazas que proyectaba la profunda crisis del sector, y quienes deseaban en mayor medida, por lo tanto, dotarse de los medios para ejercer algún "control" sobre su futuro. Pero, ¿cómo había que interpretar la exigencia de un control «mayoritario», algo que era sin duda la primera idea fuerza de las reivindicaciones mineras?; ¿se trataba tan sólo de reclamar la gestión autónoma de COMIBOL por parte de sus trabajadores?. Los distintos grupos políticos que convivían

⁴³ Declaraciones de Víctor López, secretario general de la FSTMB, a *El Diario*, 8 de febrero, 1983.

⁴⁴ *Presencia*, 3 de diciembre de 1982.

en el seno del movimiento minero intentaron desde luego imponer interpretaciones muy diversas del significado de la demanda. La *autonomía* podía integrarse en perspectivas estratégicas que insistían -era el caso de los grupos afines a las varias ortodoxias radicales de raíz leninista, mayoritariamente ligados al trosquismo- en su carácter de instrumento para la *exacerbación de la lucha de clases*, o que destacaban la necesidad de institucionalizar la participación obrera mayoritaria como «*un paso hacia la autogestión*»⁴⁵. Pero, al igual que en las discusiones paralelas sobre el significado de la "independencia de clase", ambas tendencias confluían en términos prácticos con el instinto corporativista, netamente defensivo, encarnado en la figura emblemática de Juan Lechín. En la lectura del viejo dirigente minero, el objetivo de la cogestión mayoritaria era, en efecto, simplemente «*desligar*» a la COMIBOL del control del Poder Ejecutivo⁴⁶:

«¿Quieren seguir gobernando, quieren seguir manejando las empresas los del gobierno?. Díganlo, porque eso, desde luego, de acuerdo con nuestro proyecto aprobado en congresos y ampliados, nosotros no lo aceptaremos»⁴⁷.

Pero aunque sólo algunos dirigentes comunistas en la COB y la FSTMB pugnaron, sin ningún resultado, para que el movimiento sindical centrara el debate sobre la cogestión en la búsqueda de las alternativas más funcionales para reflotar las empresas públicas y no en los grados de «independencia» o «autonomía» obrera, argumentando que el saqueo secular de la minería pública había sido obra de «determinados gobiernos» y no «del Ejecutivo»⁴⁸, resultaría absurdo pretender que el problema estaba en que los trabajadores mineros y sus dirigentes no eran conscientes de los límites que imponía la crisis al ejercicio de su poder corporativo en la empresa, o a cualquier "autogestión" pensable; o, una vez más, que sus cálculos estaban realmente influidos por las estrategias leninistas de asalto al poder. Cuando menos, el contenido del *Proyecto de la FSTMB para la Cogestión Obrera en COMIBOL*, presentado en conferencia de prensa por la dirección sindical minera el 2 de marzo de 1983,

⁴⁵ Víctor López, Secretario General de la FSTMB y miembro del Grupo de Trabajo Sindical (GTS), en *Presencia*, 9 de diciembre de 1982.

⁴⁶ *Presencia*, 28 de octubre, 1982.

⁴⁷ Juan Lechín a Roberto Arnez, en *Presencia*, 4 de diciembre, 1982.

⁴⁸ Simón Reyes, dirigente minero del PCB y Secretario de Relaciones de la COB, en *Hoy*, 12 de octubre, 1982.

pocos días después de que el presidente de la comisión mixta declarara que el estudio del tema se había «agotado» sin haberse alcanzado ninguna solución consensuada⁴⁹, no parece avalar ninguna de esas conclusiones.

El documento minero ensayaba, en primer lugar, un análisis particularmente sombrío de la crisis que heredaba la empresa, asegurando que nadie sabía mejor que sus trabajadores que «antes de la catástrofe total...no queda mucho tiempo ni espacio»⁵⁰. En segundo lugar, contenía una rotunda afirmación de la necesidad de que la FSTMB, «en nombre y representación del pueblo boliviano», se hiciera cargo del «manejo mayoritario» de la COMIBOL y de «las empresas estatales que resulten comprendidas» en el sistema cogestionario minero, dado que sólo *una administración obrera autónoma* encabezada por los mineros podría evitar la ruina inminente, y «hacer de COMIBOL ... la empresa tecnológica de la PRODUCCION de la riqueza social minera del pueblo boliviano», garantizando en adelante «el AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD para una mayor y mejor distribución de la riqueza social»⁵¹. Aunque la descripción de la crisis de la empresa y de las penosas condiciones de vida de sus trabajadores⁵² ocupaba desde luego la práctica totalidad del documento y la parte propositiva estaba muy poco desarrollada, *el proyecto minero se articulaba en torno a un par de ejes claramente identificables que conducían a un claro reconocimiento de los límites del ejercicio del poder corporativo en la nueva coyuntura.*

El primero era desde luego la ya mencionada exigencia del *control obrero mayoritario* -autónomo- sobre los destinos de COMIBOL. Los mineros habían extraído las "enseñanzas" pertinentes del episodio agri dulce del «control obrero con derecho a veto» que ejercieron durante el período posrevolucionario, que se había limitado entonces a ciertas decisiones administrativas y a materias vinculadas directamente con las relaciones de trabajo sin extenderse nunca a las «medidas de carácter técnico» ni a la política global de la empresa,

⁴⁹ Declaraciones de José Núñez del Prado, en *Hoy*, 18 de febrero, 1983.

⁵⁰ FSTMB, *Proyecto de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia para la Cogestión Obrera en la Corporación Minera de Bolivia*, La Paz, 1 de mayo 1983, p. 6.

⁵¹ *Ibid.*, p. 9. Las mayúsculas son del original.

⁵² No está de más recordar que en las minas bolivianas en los primeros años 80 la tuberculosis afectaba al 40% de la población -el dato es del campamento de Telamayu-, la esperanza de vida era 10 años menor a la media nacional, la mortalidad infantil era de 176 por mil para los varones, el consumo de calorías era cerca de tres veces menor al recomendado por el Ministerio de Salud, y cada día se registraba la muerte de un minero a causa de la silicosis. Véase COMIBOL, "Documento No. 23", La Paz: Dirección de Relaciones Públicas, 1985.

en la que el gobierno tuvo siempre la última palabra (Lazarte, 1987: 208). Así circunscrito, el «control obrero» perdió inevitablemente toda su eficacia como instrumento de defensa de los intereses de los trabajadores desde el momento en que comenzaron a discutirse los proyectos para la "racionalización" de la COMIBOL, decididos en una esfera sobre la que sus representantes no podían intervenir, y la insistencia presente en ejercer un control mayoritario de las estructuras centrales del gobierno de la empresa debería interpretarse en este contexto como un primer movimiento para superar alguna de las limitaciones más evidentes de la vieja experiencia. Cualquier proyecto para la reforma de COMIBOL sería en adelante decidido y gestionado directamente por los trabajadores: *el poder de veto limitado, por lo tanto, se transformaba en control directo sobre la política global de la mayor empresa pública del país.*

El segundo eje del documento era la demanda de *integración de todo el sector estatal de la economía en el sistema cogestionario con mayoría obrera*. El proceso debía comenzar con el sector minero, corrigiendo la «desmembración» que mantenía desconectadas a COMIBOL -extracción y concentrado de minerales-, ENAF -fundición-, GEOBOL -exploración-, el Banco Minero -comercialización- y los Institutos de investigación, mediante el establecimiento de un Complejo Minero-Metalúrgico Nacional que, bajo la administración sindical, mantuviera el control de toda la política minera. La FSTMB, en efecto, sabía que la cogestión obrera no podría resultar eficaz si se mantenía confinada en los límites de COMIBOL: la participación obrera, por el contrario, debería extenderse como mínimo al conjunto del sector minero-metalúrgico. Pero resultaba evidente que la definición de las estrategias globales para el desarrollo de un sector que conformaba, junto a la producción de hidrocarburos, el eje del comercio exterior boliviano, *equivalía en los hechos a reclamar poder de decisión sobre los aspectos centrales de la política económica del país*. El interés en defender los medios de vida de los trabajadores de la gran minería nacionalizada, por lo tanto, terminaba planteando perentoriamente, dadas las condiciones de la crisis, el viejo problema de la *inevitabilidad de la política*. Y el *Proyecto de la FSTMB para la Cogestión Obrera en COMIBOL* concluía de hecho afirmando *la necesidad de las organizaciones obreras institucionalizaran su participación en el gobierno central*:

«De cara a las amenazas de la realidad y la necesidad de garantizar lo eficiente de la COGESTION OBRERA EN COMIBOL, y de todo el sector nacionalizado de la economía, *exigimos la participación preponderante y orgánica de los trabajadores bolivianos en los centros de decisión del poder político*. Este es, además, uno de los medios efectivos para garantizar la sobrevivencia de la coyuntura democrática, como una obra y creación de la clase obrera junto al pueblo boliviano»⁵³

En el contexto boliviano, la demanda de participación política enarbolada por los sindicatos mineros tendría el efecto de situar en el centro de la agenda las discusiones sobre el "Cogobierno" entre la COB y los partidos de la coalición izquierdista. Antes, sin embargo, *la FSTMB decidió superar el estancamiento de las negociaciones con el gobierno imponiendo por la vía de los hechos consumados la cogestión mayoritaria que propugnaba*. A mediados de abril de 1983, cuando la COMIBOL estaba paralizada por una huelga salarial de sus cuadros técnicos, la FSTMB, tras condenar la actitud «antinacional» de la plantilla de profesionales, intervino la empresa y nombró un Consejo de Administración sindical encargado de dirigirla provisionalmente. La respuesta del gobierno se limitó a un durísimo discurso de Siles Zuazo, transmitido abundantemente por radio y televisión a todo el país, en el que el Presidente aseguraba que los trabajadores estaban siendo manipulados por una cúpula de dirigentes «anarco-sindicalistas», decididos a precipitar a Bolivia en «el caos y la anarquía»⁵⁴. Por lo demás, tuvo que resignarse a reconocer "de facto" a la nueva dirección obrera de las minas nacionalizadas, después de que un Ampliado Nacional de Emergencia de la FSTMB resolviera que el resultado inicial de la intervención había sido «positivo» y declarara «iniciada en Bolivia la experiencia de ADMINISTRACION OBRERA EN COMIBOL»⁵⁵. El 20 de mayo el gobierno presentó a la FSTMB su propio proyecto de Cogestión Paritaria, y Siles Zuazo insistió en una carta anexa en que la acción minera creaba el riesgo de convertir a COMIBOL «en propiedad privada y grupal» y de precipitar a los sindicatos mineros hacia el «economicismo»⁵⁶. Pero la FSTMB continuó negándose a aceptar

⁵³ FSTMB, *Proyecto...*, cit., p. 11.

⁵⁴ El discurso está recogido íntegramente en toda la prensa nacional del 23 de abril de 1983.

⁵⁵ Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, *Resoluciones del Ampliado Nacional de Emergencia*, 25 de abril de 1983, p. 1 [CEPROMIN, D-0186.38].

⁵⁶ Carta del Presidente de la República al Comité Ejecutivo de la FSTMB, 20 de mayo, 1983. [SIDIS, documentos básicos]

la propuesta gubernamental, y apeló al carácter universal y democrático de sus planteamientos y a su lucha histórica por «la defensa, consolidación y desarrollo del interés de la Nación». Y el discurso minero, que *planteó desde el principio la intervención como un sacrificio en aras del interés nacional*, gozaba de una amplísima legitimidad:

«Hoy nuevamente, habiendo demostrado los mineros su tenaz sentir nacional al hacerse cargo de COMIBOL en momentos de una crisis económica general, sin precedentes, que en el caso de COMIBOL también es crisis de producción, hemos pedido a los demás trabajadores y al pueblo, así como a las autoridades nacionales, su justa comprensión para el desafío de nuestra responsabilidad y sacrificio que supone nuestra participación mayoritaria en la gestión de COMIBOL, la cual al democratizar el ejercicio del poder en esa empresa estatal, defiende y profundiza el proceso democrático nacional, que tantas jornadas de esfuerzo y dolor costó al pueblo boliviano y en especial a los trabajadores»⁵⁷

Así las cosas, Siles Zuazo se vió obligado a nombrar un primer directorio mixto «provisional» de COMIBOL en el que figuraba entre los representantes gubernamentales un dirigente minero avalado por la FSTMB⁵⁸, estableciendo de ese modo en la práctica la cogestión obrera mayoritaria, que quedaría finalmente fijada por ley mediante el Decreto de cogestión del 23 de septiembre del mismo año que, según un informe sindical, recogía «un noventa por ciento del proyecto de la FSTMB»⁵⁹. La apuesta estaba hecha, y los sindicatos no podrían eludir en adelante los compromisos derivados de su participación mayoritaria en la gestión de la mayor empresa pública boliviana:

«...sabiendo que las condiciones desastrosas en que se encuentra esta entidad están a punto de paralizar la producción, pero plenamente convencidos de que la conciencia de clase, el profundo y real patriotismo de los obreros del subsuelo, les dan la fuerza para demostrar su capacidad de conducción. *Esta es la contribución a que aspiramos en beneficio del pueblo, de los propios trabajadores, del país y de su liberación nacional y social*»⁶⁰

⁵⁷ Carta del Comité Ejecutivo de la FSTMB al Presidente de la República, 25 de mayo, 1983, p. 2. [AMTDL, Recibidas, 1983, Tomo 3, FSTMB 258/83].

⁵⁸ Daniel Ordóñez, dirigente del sindicato de la mina San José. Entrevistado por la prensa, afirmó que «mi posición es la misma que la de la Federación, pues soy dirigente sindical y me debo a mis bases». *Presencia*, 26 de junio, 1983.

⁵⁹ Informe de los directores obreros presentado al XX Congreso Minero de Matilde en abril de 1984. Citado por Lazarte (1987), p. 224.

⁶⁰ FSTMB, «La Federación de Mineros en Defensa del Proceso Democrático», 2 de agosto, 1983; p. 2. [SIDIS, FSTMB 1982-1988, T. 19, No. 70]. La cursiva es mía.

Las contundentes afirmaciones de Juan Lechín fueron desde luego mucho más irresponsables que las declaraciones institucionales de la FSTMB, pero sus promesas reflejaban sin duda muy bien tanto las esperanzas que alimentó la acción minera en amplios sectores de la población como *la magnitud de los riesgos* que asumían los dirigentes obreros:

«El país debe escoger entre cambiar la administración que durante 31 años, incluyendo el actual gobierno, ha manejado pésimamente la Corporación Minera de Bolivia, o la caída de la empresa. *Con una administración mayoritaria de los trabajadores en COMIBOL existe la plena seguridad de rehabilitar esa empresa*»⁶¹

Pero tras la intervención el problema de la participación de los trabajadores «en los centros de decisión política», presentado en el documento de la FSTMB como una prolongación *necesaria* de la cogestión, indispensable para su éxito, no fue objeto de ningún debate serio en el movimiento sindical. ¿Cómo puede explicarse esta extraña ausencia, que parece contradecir directamente la clara conciencia de los dirigentes mineros sobre la "inevitabilidad de la política" para la solución de los problemas laborales más inmediatos?; ¿Acaso no resultaba evidente que el destino de la empresa que ahora dirigía la organización más poderosa del movimiento obrero dependería del contenido de las estrategias de política económica que seleccionara el gobierno central?; ¿Por qué decidió entonces la COB abdicar de la posibilidad de incorporarse a la gestión gubernamental, marginando deliberadamente las demandas participativas?.

En realidad, Siles Zuazo había ofrecido el "Cogobierno" a la COB mucho antes, en los días previos a su investidura, y en cierto modo era inevitable que lo hiciera. El "Cogobierno" fue la forma que adquirió la concertación entre el sindicalismo y las élites del estado durante el único período en que ambos mantuvieron relaciones de cooperación definidas, los seis años (1952-1957) en que los gabinetes del MNR incorporaron un número de «ministros obreros» elegidos por las organizaciones sindicales como sus representantes directos ante el poder central (Lazarte, 1988: 121-131). A medida que se ensanchó la brecha entre los intereses sindicales y la acción política del MNR, el sistema de "Cogobierno" fue adquiriendo contornos míticos, convirtiéndose en un componente esencial de la imagen del "gran verano" revolucionario, contra cuyo recuerdo los trabajadores fueron valorando los datos de un presente crecientemente gélido. La restitución del sistema participativo terminó teniendo así,

⁶¹ *Aquí*, No. 91., 11/17 de junio, 1983, p. 5. La cursiva es mía.

en el imaginario colectivo del movimiento obrero, el carácter de una *condición* que cualquier gobierno popular estaba obligado a satisfacer, un derecho histórico adquirido por los trabajadores⁶². En este contexto era previsible que las ofertas y las demandas de "Cogobierno" adquirieran desde el principio una importante presencia discursiva en el debate político, al igual que había ocurrido tras la instalación del breve régimen populista de Torres⁶³.

Pero el "Cogobierno" no había sido sino una traducción institucional específica de la colaboración inicial entre el MNR y los sindicatos mineros, los dos poderes independientes que confluyeron para liderar el triunfo revolucionario de abril: cada uno de los actores tenía algo que ofrecer al otro, *ambos tenían un poder igualmente sustantivo*, y el sistema formalizó un intercambio que ambos consideraban útil y posible. Y en noviembre de 1982, como afirmé arriba, *sólo* la UDP tenía un interés real en establecer relaciones de cooperación con las organizaciones del trabajo, acordando un compromiso capaz de reforzar la gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas. Así, la única respuesta de la COB a la oferta inicial de Siles Zuñazo fue el desplante de Juan Lechín, que exigió «el cincuenta por ciento más uno» de los ministerios como condición previa para el diálogo⁶⁴ y cerró provisionalmente la discusión por el procedimiento de eliminar desde el principio la posibilidad de alcanzar cualquier acuerdo.

Resultaba sin embargo inevitable que el problema de la participación sindical en el gobierno reapareciera con fuerza en el debate público a partir de la nueva coyuntura abierta por la presentación del *Proyecto* cogestionario de la FSTMB y la intervención de COMIBOL. El 5 de abril, un Ampliado Nacional de la COB decidió recoger la propuesta minera y demandar formalmente la «participación preponderante y orgánica de los trabajadores en los centros de decisión política»⁶⁵. Cuatro días después Siles Zuazo anunciaba, en el discurso

⁶² «De tal modo que si hay cogobierno no sería porque el gobierno es popular, sino más bien es popular porque hay cogobierno». Lazarte (1988), p. 129.

⁶³ El general Torres había intentó restablecer el "Cogobierno" a finales de 1970 para consolidar el único experimento populista que se ensayó en el país después de la caída del MNR. Su oferta de entregar a la COB la mitad de las carteras ministeriales, sin embargo, enfrentó primero la desconfianza de los dirigentes obreros -que exigían "pruebas" de la vocación popular del nuevo gobierno- y tuvo que dejarse finalmente en suspenso ante la amenaza del Colegio Militar de tomar las armas si la fórmula volvía a hacerse efectiva. Para la actitud de los líderes sindicales ante la oferta inicial de Torres puede verse Strengers (1992), pp. 95 ss.

⁶⁴ *El Diario*, 8 de octubre de 1982.

⁶⁵ *Presencia*, 6 de abril, 1983.

conmemorativo de la Revolución Nacional, su disposición a tratar en profundidad «todas las formas de cogestión en las empresas del Estado y la participación de los trabajadores en el gobierno»⁶⁶, y a partir de entonces la problemática del "Cogobierno" comenzaría a ocupar un amplísimo espacio en los medios de comunicación y en la actividad discursiva del gobierno y los sindicatos. El Segundo Congreso de Unidad Campesina de la CSUTCB, celebrado a finales de junio, dio el último impulso a la demanda, al decantarse con firmeza a favor de la presencia de la COB en el gobierno y aprobar una plataforma reivindicativa que relegaba las demandas económicas para concentrarse en la participación institucional de las organizaciones sindicales⁶⁷. La invitación formal de Siles Zuazo llegó finalmente el 4 de agosto. En esa fecha, el gobierno constituyó una comisión para estudiar el modo de «viabilizar la participación laboral en distintos niveles de decisión del Poder Ejecutivo» y pidió a la COB que se integrara en ella «a fin de dar a conocer formalmente sus puntos de vista sobre la posibilidad de la participación laboral en el gobierno, que tiene la firme decisión de aplicar una política económica y social que responda a los intereses mayoritarios de la nación»⁶⁸.

Al día siguiente, el Comité Ejecutivo de la COB decidió, según Juan Lechín, que contestaría a la invitación del Presidente exigiendo, como ya hizo en noviembre de 1982, «preponderancia en el gobierno»⁶⁹. El problema estaba ahora en determinar la formulación concreta del contenido que debía adquirir esa hegemonía obrera, un asunto que se convirtió por unos días en el tema central de las discusiones sindicales. Finalmente, se decidió que la «preponderancia» debería ser «programática» en un sentido muy concreto: la COB aceptaría incorporarse al gobierno en el caso de que se aplicara *de inmediato y en su integridad* un programa económico elaborado para la ocasión por los dirigentes sindicales y sus asesores,

⁶⁶ *Aquí*, No. 98, 30 de julio/5 de agosto, 1983, p. 5.

⁶⁷ Tras la institucionalización del "Cogobierno", la plataforma recogía en este orden las siguientes demandas: (2) Por la COPARTICIPACION en todos los mecanismos e instancias estatales relacionados con las actividades agropecuarias; (3) Por la COGESION en todos los proyectos de desarrollo rural; (4) Por la AUTOGESTION en nuestras organizaciones económicas y sociales; (5) Por el apoyo unitario y combativo a la COGESTION MAYORITARIA en COMIBOL; (6) Por la promulgación de nuestro proyecto de LEY DE REFORMA AGRARIA. Véase, CSUTCB, *II Congreso de Unidad Campesina. Documentos y Resoluciones*, La Paz, 1983, p. 34. Véase también Rivera (1985), pp. 139-140.

⁶⁸ Carta del Ministro de la Presidencia al Secretario Ejecutivo de la COB, 4 de agosto, 1983. En *Aquí*, No. 99, 6/12 de agosto, 1983, p. 5.

⁶⁹ *Presencia*, 6 de agosto, 1983.

el *Plan Económico-Social de Emergencia* de la COB, concluido y presentado el 9 de agosto. El Plan de la COB, que se convertiría desde entonces en el referente básico de las reivindicaciones obreras, comenzaba planteando una clara disyuntiva:

«el gobierno debe optar por una de las dos siguientes opciones: o someterse a los dictados del Fondo Monetario Internacional y a las presiones de los grupos económicos que son sus aliados y sostenedores, o poner en marcha con firme decisión el Co-gobierno con la Central Obrera Boliviana, formulando *una nueva política económica y social de defensa de los intereses nacionales y de protección de su capital humano*»⁷⁰

Pero la «nueva política económica» que proponía la COB a continuación tenía muy poco de nuevo, dado que en realidad se trataba de un llamamiento a retomar y radicalizar los planteamientos iniciales de la coalición izquierdista. Los puntos principales del programa delineaban una amplia política de inversiones públicas para la reactivación del sector productivo: ante todo, las empresas estatales recibirían mayores recursos, pero también se incrementaría el apoyo a la producción privada mediante la distribución de créditos de fomento a los productores agropecuarios y una protección selectiva de la industria nacional. Para evitar que esas medidas agravasen el déficit fiscal se debía reducir el gasto público «irracional e improductivo» a través de «una política de rigurosa austeridad» y racionalizar el sistema de recaudaciones y administración tributaria para eliminar el fraude de la empresa privada, emprendiendo una fiscalización efectiva del sistema financiero. Además, la central sindical exigía la suspensión de los pagos de la deuda externa a la banca privada internacional hasta que una mejora en la situación económica permitiera reanudarlos, y la venta, como medida de emergencia, de las reservas de oro del Banco Central. En cuanto a la política de ingresos, la COB deseaba complementar el control de precios con una política de comercialización y distribución directa del productor al consumidor «a través de los mecanismos propios del Estado, los trabajadores y almacenes populares», e incrementos salariales en aplicación del principio de la escala móvil, calculados sobre la evolución del IPC con la participación de los sindicatos⁷¹.

⁷⁰ *Plan Económico-Social de Emergencia de la Central Obrera Boliviana*, La Paz, 9 de agosto, 1983, p. 4. El énfasis es mío.

⁷¹ El Salario Mínimo Vital se planteaba en el documento de agosto de 1983 como un objetivo estratégico a alcanzar en el medio plazo: «La política económica de la Central Obrera Boliviana en el campo salarial está destinada a recuperar el poder adquisitivo del salario y tiende a la concreción del salario mínimo vital con escala móvil». COB, *Plan Económico-Social de Emergencia de la Central Obrera Boliviana*, La Paz, 9 de agosto, 1983, p. 7.

El Plan de la COB, que merece ser leído en su integridad, subestimaba sin duda la reacción de los agentes económicos frente a políticas muy agresivas de intervención estatal, que iban bastante más allá de las ensayadas inicialmente por la UDP, despreciaba en buena medida las restricciones externas, y contenía unas propuestas para la contención del déficit fiscal que, aún en el muy dudoso supuesto de que pudieran ser aplicadas con eficacia, resultaban claramente insuficientes. Pero lo que era indiscutible es que su desarrollo requería de una profunda *reforma del estado* que sólo podría ejecutarse en el medio plazo, y que *en lo inmediato* su aplicación conduciría a una expansión de la demanda interna y del gasto público que resultaban difícilmente compatibles con el ajuste externo y la lucha antiinflacionaria en la situación de declive productivo que vivía el país.

Sin embargo, cuando el 22 de agosto el gobierno anunció que, pese a reconocer que entre el programa de la UDP y el de la COB existía una «absoluta coincidencia»⁷², consideraba imposible, dadas las características de la crisis, aplicar *en el corto plazo y en su integridad* el Plan Económico-Social de Emergencia, la COB adoptó de inmediato una posición maximalista y decidió abandonar las negociaciones. Decretó un «estado de emergencia nacional» y convocó a «marchas y concentraciones a lo largo y ancho de Bolivia» con el objetivo de «defender e iniciar la lucha para imponer al gobierno la aplicación del Plan Económico-Social de Emergencia»⁷³. Pero en los actos que se realizaron entonces en todo el país apenas hubo mención alguna al "Cogobierno", y los dirigentes sindicales optaron por transferir al otro todas las responsabilidades por acción u omisión, declarando que su programa se convertiría en adelante en lo que había sido en realidad desde el momento mismo de su formulación: un «pliego de peticiones», un listado de demandas máximas que el gobierno debería encargarse de procesar⁷⁴. Aquello dejó suficientemente claro que el "Cogobierno" era para la COB tan sólo un problema incómodo. La "provocación" inicial de

⁷² Roberto Arnez, Ministro de Trabajo, en *Hoy*, 13 de agosto, 1983.

⁷³ *Hoy*, 26 de agosto, 1983.

⁷⁴ En realidad, los dirigentes sindicales habían tenido ya ocasiones de demostrar abundantemente su escasísimo compromiso con los planteamientos participativos antes de que el comunicado gubernamental del 22 de agosto cancelara, según la interpretación interesada de la COB, toda discusión sobre el "Cogobierno". Lo más significativo fue seguramente el hecho de que en las marchas que se convocaron en todo el país a primeros de mes, en los momentos en que se estaba concluyendo la redacción definitiva del *Plan Económico-Social de Emergencia*, tan sólo uno de los oradores intentara explicar la importancia de la demanda, mientras el resto de los líderes no la mencionaban o la relegaban deliberadamente a un segundo plano. Véase Jorge Lazarte, "Una marcha que no cumplió su objetivo", en *Aquí*, No. 99, 6/12 de agosto, 1983; también Jetté (1989), p. 200.

Juan Lechín reclamando «la mitad más uno» de los ministerios, se había convertido ahora en la exigencia de una aplicación inmediata de un programa que resultaba radicalmente incompatible con la estabilización de la economía en el corto plazo⁷⁵.

Sin embargo, las razones de la COB eran las mismas entonces y ahora: se trataba, por supuesto, de que *no esperaba ganar nada con su participación en el gobierno*. Es necesario recalcar que el contenido del *Proyecto* cogestionario y el tono de las reflexiones mineras sobre los límites de la acción corporativa en aquéllos "tiempos duros", no permiten afirmar que los sindicatos estuvieran cegados por una mentalidad de "grupo de presión" y que negaran en consecuencia la importancia de la política. Por el contrario, el desinterés de la COB por participar en el gobierno debería explicarse a partir del claro reconocimiento de que éste carecía de poder político y que, por lo tanto, *participar en él equivalía tan sólo a asumir directamente los costes de la gestión de la crisis sin obtener un poder de negociación adicional sobre las decisiones de política económica*. El gobierno de Siles Zuazo, carente de recursos propios, privado de autonomía frente a los intereses sindicales, aparecía, en efecto, como un mero *instrumento* de éstos: tenía el poder *formal* de decisión, pero el poder político *real* estaba ya en manos de la COB. Participar en el gobierno, coordinar e intentar ejecutar desde el nivel central las políticas públicas, significaba para la central sindical *aceptar las responsabilidades asociadas al ejercicio de su poder, pero no incrementarlo*.

El poder del primer gobierno democrático sólo podía derivar *del sistema político como tal, de la eficacia de las reglas constitutivas del juego democrático*, y no de alguna dotación de recursos pre-políticos: no disponía de *dinero* para comprar lealtades, y cualquier amenaza de utilizar las *armas* para imponer sus decisiones hubiera estado desprovista por completo de credibilidad, dado que de cumplirla provocaría su propia caída. Las reglas constitucionales, que otorgaban a los representantes electos el derecho formal a establecer las prioridades generales en la agenda de las negociaciones y a cerrarlas adoptando decisiones vinculantes, hubieran sido eficaces de haber tenido algún arraigo normativo, de modo que los actores gubernamentales hubieran podido apelar a la *legitimidad* de sus acciones. Pero el basamento normativo de la primera democracia boliviana jugaba en este punto en contra de cualquiera que ocupara el poder ejecutivo en las condiciones de la crisis, dado que las *convenciones*

⁷⁵ Según Urioste (1987: 289), «este planteamiento programático (el Plan de Emergencia de la COB) fue realizado desde la perspectiva de 'la COB como instrumento de poder del pueblo boliviano', prescindiendo absolutamente de los partidos políticos en el gobierno, o de otros partidos de izquierda fuera de él».

democráticas predominantes no podían sostener las reglas formales del sistema representativo. La "democracia", en efecto, sólo en último término significaba en Bolivia el poder legítimo de los representantes electos. Si era cierto que la población popular había hecho bandera de la democracia representativa, también lo era que no existía en el país una tradición democrática, y que todos habían sido educados por la historia en el desprecio y la desconfianza hacia el "electoralismo" y las maniobras de los "caballeros" (Zavaleta, 1983b: 42). Todo el cúmulo de convenciones democráticas apoyaba los derechos sustantivos del pueblo de Bolivia, desde la libertad irrestricta para la acción colectiva de protesta a la satisfacción de sus reivindicaciones materiales, y no el poder formal del Ejecutivo democrático.

La oferta de participación, por lo tanto, no podía contener la promesa de compartir un poder que no estaba en manos del gobierno. No podía tratarse de un intercambio, dado que la COB hegemonizaba la representación política del "pueblo" de Bolivia, presentándose como *la única voluntad del escenario democrático*. Si el gobierno era un mero instrumento de la central sindical, si ésta concentraba ya el poder real de decisión, ¿por qué tendría que aceptar asumir los costes que acarrearía necesariamente su ejercicio formal?. El hecho es que mientras la COB pudiera continuar pensando que estaba "suficientemente bien", que el mantenimiento de la política económica expansiva no amenazaba seriamente su posición en el futuro, no tendría ningún incentivo para incorporarse a los procesos formales de toma de decisiones y asumir las responsabilidades asociadas a ellos.

"LAS AMENAZAS DE LA REALIDAD"

EN LA PENDIENTE

El persistente bloqueo de la política económica introdujo al país en un círculo muy peligroso, y a la entrada del invierno -austral- de 1983 estaban comenzando a hacerse realidad las proyecciones más pesimistas de los ministros "independientes" dimisionarios. La alta inflación, en efecto, diluyó casi de inmediato el aumento salarial otorgado en julio: los plazos entre los reajustes se estaban acortando, y *sólo cabía esperar que los trabajadores, anticipando la evolución futura de los precios, exigiesen aumentos cada vez más pronto y*

cada vez mayores. Así, en octubre de 1983 llegó la primera gran oleada de huelgas sectoriales del período democrático, que forzó al gobierno y a la COB a emprender de inmediato un largo proceso de negociaciones para determinar la cuantía del nuevo incremento salarial. El descontento de las bases por el aumento de los precios, que licuaba rápidamente el poder adquisitivo de sus salarios, sometió esta vez a una enorme presión a la cúpula de la COB, y las conversaciones se desarrollaron bajo la amenaza sindical de convocar una huelga general si el gobierno no presentaba una oferta satisfactoria.

El proceso de negociaciones pareció concluir con la decisión gubernamental de elevar el salario básico nacional de 17 a 30 mil pesos con retroactividad al primero de octubre y otorgar un «bono de compensación» de 22.500 pesos a todos los asalariados. El aumento era muy sustancial, superior con creces al del IPC, y cubría por completo las expectativas de los sindicatos. Sin embargo, inmediatamente después de alcanzarse el acuerdo el Ministro de Finanzas anunció que el incremento formaría parte de las «medidas globales» que tenía previsto adoptar el gobierno, entre las que se incluiría una devaluación de la moneda. La COB respondió decretando «estado de emergencia», retirando a sus negociadores de la mesa, y publicando un comunicado en el que aseguraba que cualquier devaluación «anularía los principios del acuerdo obtenido, retornando a cero el curso actual de las negociaciones»⁷⁶. El Secretario Ejecutivo de la COB parecía tener la razón de su parte cuando recordaba que «luego de varias semanas de discusión» se había acordado «con los representantes del gobierno, los ministros de Finanzas y Trabajo un aumento, en el entendido que éste se hacía sobre el tipo de cambio actual»⁷⁷. Pero también era cierto que el gobierno no había dejado de repetir desde marzo que necesitaba imperiosamente "hacer algo", dictar algún ajuste inmediato para corregir la situación caótica en que estaba debatiéndose la hacienda pública. De hecho, en el mismo momento en que se preparaban para iniciar la primera reunión de la ronda de negociaciones salariales con la COB, los ministros de Planeamiento y Hacienda anunciaron al país que el equipo económico estaba preparando un paquete de medidas que se llevaban estudiando «algún tiempo» y cuya publicación no podía seguir «postergándose indefinidamente»⁷⁸. Y nadie podía dudar que los ajustes tendrían que incluir una devaluación

⁷⁶ *Presencia*, 1/2 de noviembre, 1983; *El Mundo*, 4 de noviembre, 1983; *Presencia*, 11 de noviembre, 1983.

⁷⁷ Declaraciones de Juan Lechín, en *Presencia*, 4 de noviembre, 1983.

⁷⁸ *Presencia*, 14 de octubre, 1983.

de la moneda, algo que resultaba ya absolutamente necesario para prevenir el colapso de la hacienda pública y del sector productivo estatal.

La paridad oficial del peso frente al dólar, en efecto, se había mantenido inalterada, por mor de la oposición sindical a cualquier propuesta de devaluación, durante todo el primer año de gobierno de la UDP, mientras la caída continua de la cotización de la moneda boliviana en el mercado paralelo había ido ensanchando la brecha cambiaria, que en octubre de 1983 alcanzaba un nivel superior al 400%. Este abultado retraso cambiario estaba provocando de entrada que un porcentaje cada vez más elevado del comercio exterior se realizara vía contrabando, eliminado su efecto fiscal, y el dato era particularmente preocupante si se tiene en cuenta que alrededor del 50% de los ingresos del Tesoro General de la Nación procedían de impuestos sobre ítems relacionados con la exportación e importación de mercancías. Por otro lado, la aplicación del tipo de cambio oficial a la fijación de las tarifas públicas y de los precios de los productos subvencionados por el estado en un contexto en el que las actividades económicas estaban indexadas en la práctica a las cotizaciones del mercado paralelo, había creado unas distorsiones de precios que alcanzaban niveles críticos, achatando brutalmente los ingresos fiscales y descapitalizando a las empresas públicas⁷⁹. El resultado de todo esto sólo podía ser un deterioro brutal de los ingresos tributarios, que en el año 1983 cayeron a un exiguo 2.7% del PIB, frente al 4.8% del año anterior y el 9.2% alcanzado en 1981.

Pero la devaluación de la moneda sólo resultaría útil para contener el déficit fiscal y ralentizar la inflación en la medida en que se indujera realmente una caída de la demanda interna, evitando que los costes -salarios y gasto público en general- se acomodaran rápidamente al nuevo tipo de cambio. Los ajustes previstos en el paquete "monetarista" del gobierno fueron desde luego muy «tímidos» (Morales, 1989: 12), y pretendieron afectar lo menos posible al nivel de vida de los ciudadanos con menores ingresos. La moneda boliviana mantuvo un valor oficial tres veces mayor que su cotización en el mercado paralelo -de modo que la devaluación del tipo de cambio oficial quedó muy lejos de lo que hubiera exigido cualquier consejero "monetarista"- y los aumentos de los precios de los productos básicos y de las tarifas en los servicios públicos apenas se acercaron a lo que hubiera sido necesario para corregir las profundas distorsiones existentes en la estructura de precios. Pese a ello,

⁷⁹ Como ejemplo basta recordar que en los días previos a la publicación de las medidas de noviembre de 1984 una botella de "coca-cola" costaba 150 pesos y un litro de gasolina 20.

resultaba evidente que el gobierno deseaba deprimir la demanda y, dado que había resultado imposible acordar con los sindicatos una contención del gasto y de los salarios reales, *se vio forzado a intentar imponerla "por la espalda" de los trabajadores*, haciendo descansar la eficacia del ajuste en la posibilidad de que el fuerte incremento acordado antes de la devaluación produjera una *ilusión monetaria* relativamente duradera, de modo que aquéllos no reaccionaran contra la depresión del poder de compra de sus salarios (Morales, 1985: 7).

Aquél movimiento burdo, que no fue sino una confesión diáfana de la desesperación y la impotencia en que se debatían los operadores gubernamentales, concluyó en un fracaso absoluto. Aunque el salto inflacionario que siguió de inmediato a la aplicación de los reajustes hizo que en noviembre de 1983 el salario mínimo, considerado en el mes de gasto, fuera por primera vez menor al vigente antes del acceso de Siles Zuazo a la Presidencia, *la reacción sindical fué inmediata*. Los trabajadores, en efecto, *anticiparon* la caída y trataron de protegerse de ella iniciando desde el momento mismo de anunciarse las medidas una amplia cadena de huelgas sectoriales, y la COB se vio arrastrada a convocar las dos primeras huelgas generales del período democrático: a la primera de 24 horas, el 21 de noviembre, emprendida para evitar «la victoria del Fondo Monetario Internacional y de la gran empresa privada»⁸⁰, siguió una segunda de 48 horas, los días 13 y 14 de diciembre, en medio de una constante intensificación del conflicto sectorial. Y en las concentraciones de protesta de diciembre de 1983 se corearon por primera vez estribillos que calificaban de «hambreador» al gobierno de Siles Zuazo⁸¹, que con sus ajustes "monetaristas" estaba cometiendo ya, según el Comité Ejecutivo de la COB, una «manifiesta traición a los intereses populares»⁸².

Tal vez sea necesario recordar que la resistencia frontal de los trabajadores bolivianos a las devaluaciones de la moneda no era, como se ha pretendido, el resultado de un "bloqueo psicológico" que les impedía percibir que en determinadas condiciones la tasa de cambio fija podía causarles perjuicios adicionales⁸³, sino la consecuencia necesaria de su negativa a aceptar cualquier caída de sus ingresos reales. En la medida en que el gobierno esperaba a

⁸⁰ *Presencia*, 21 de noviembre, 1983.

⁸¹ *El Mundo*, 22 de noviembre, 1983.

⁸² *El Diario*, 21 de noviembre, 1983.

⁸³ Como afirmaron varios analistas vinculados a los ministros independientes que diseñaron el programa de estabilización gradualista de marzo de 1983. Véase Jetté (1989), p. 189.

alterar el tipo de cambio para reajustar los precios controlados y subvencionados, y la devaluación de la moneda era el instrumento de política económica seleccionado para provocar esas caídas, por lo tanto, la oposición "cerril" de los sindicatos a las depreciaciones estaba plenamente justificada. Es indudable que si comparamos hoy el nivel de los "sacrificios" exigidos entonces con los que terminaría imponiendo a más largo plazo la inflación a todos los trabajadores, tendríamos que aceptar la irracionalidad de aquéllos comportamientos. Pero esto sólo podemos hacerlo ahora, y en cualquier caso la explicación de la conducta de los trabajadores no debería buscarse en algún "bloqueo psicológico" que les impidiera entender cabalmente los efectos de las devaluaciones. Por el contrario, los entendían perfectamente, y rechazaban las devaluaciones precisamente por eso: porque se negaban a asumir los costes *inmediatos* de las medidas estabilizadoras que proponía el gobierno.

Sin embargo, el resultado final de las negociaciones y los conflictos salariales de octubre y noviembre de 1984 demostraron suficientemente que lo único que podía esperarse de los esfuerzos por mantener la política de ingresos eran crecimientos exponenciales del IPC, y que *si el país continuaba descendiendo por la pendiente sería cada vez más difícil para la COB defender el poder de compra de los salarios de sus clientelas y controlar la dinámica del conflicto sectorial*. Los problemas de la organización obrera, además, no se limitaban al hecho de que prolongación de la espiral inflacionaria estuviese revelando aceleradamente los límites de la política de ingresos expansiva. Junto a ello, el bloqueo de la política económica estaba penalizando fuertemente a las empresas estatales del sector exportador y, más en concreto, arrastrando a COMIBOL, que heredaba una profunda crisis productiva y enfrentaba el declive de los precios de sus minerales en los mercados mundiales, a una situación financiera insostenible: en 1983 acumularía unas pérdidas de 96 millones de dólares, doblando la cifra del año anterior, y una gran parte del hundimiento de sus cuentas de resultados se debía a los efectos negativos de la política cambiaria. Si la sobrevaluación de la moneda había sido tradicionalmente un instrumento utilizado para extraer excedentes de COMIBOL, y uno de los principales responsables de su progresiva descapitalización, ahora era la COB la que obligaba al gobierno a depredar los recursos de la empresa matriz del movimiento obrero, convirtiéndola en la principal víctima de los esfuerzos por sostener la demanda interna. La COMIBOL estaba bajo la administración directa de los sindicatos desde el mes de abril de 1933, y la FSTME, desde luego, no debía tener el menor interés

en presidir la ruina de la gran minería nacionalizada.

Parecía indudable que la congelación de la política económica en los términos fijados en el programa expansivo de noviembre de 1982 afectaba ya negativamente a todos. Pero, ¿acaso no existía ninguna alternativa al "monetarismo"?; ¿acaso sólo podía romperse el bloqueo aceptando hoy una fuerte caída de los ingresos para evitar males mayores en el futuro inmediato?.

EL PELIGRO DE "MORIR DE ÉXITO": LA HUELGA NACIONAL DE HAMBRE DE ENERO DE 1984

Si la COB estaba comenzando a enfrentar la primera oleada masiva de descontento e "indisciplina" sectorial a finales de 1983, el gobierno de Siles Zuazo atravesaba también entonces una coyuntura particularmente delicada. La segunda huelga general de la COB, decretada en diciembre, había coincidido, en efecto, con una brutal ofensiva demagógica de la oposición de derechas, que impulsó una resolución parlamentaria que exigía al gobierno la concesión de un aumento del 100% a los salarios de todos los trabajadores y emitió un voto de censura en el Senado contra el contenido «anticonstitucional, antipopular y antinacional» de las medidas de ajuste promulgadas en noviembre⁸⁴. Los denodados esfuerzos de la mayoría parlamentaria derechista para corregir las desviaciones «fondomonetaristas» de la UDP obtuvieron entonces como premio una dimisión colectiva del gabinete que inauguró una larga crisis ministerial y dejó al gobierno en una situación de extrema debilidad, atrapado entre la ofensiva demagógica de la derecha, que le acusaba simultáneamente de deslizar al país hacia el comunismo y de venderlo al Fondo Monetario Internacional, y la oposición cerrada de sectores de la izquierda política que reclamaban, en la línea del Plan Económico-Social de Emergencia de la COB, una radicalización de los planteamientos estatistas y de las medidas expansivas del programa original de la coalición. El cuadro se completaba con

⁸⁴ Hoy, 15 de diciembre, 1984.

las oscuras actitudes del MIR, que participaba en alianzas parlamentarias con la derecha⁸⁵ mientras no dejaba de recordar siempre que se presentaba la ocasión su lealtad a la UDP y su deseo de volver a formar parte de un gabinete verdaderamente "popular".

A finales de año el ambiente político se hizo irrespirable. Las agresiones verbales de la oposición, que reclamaba una y otra vez la renuncia del Presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas, fueron cada vez más frecuentes, y comenzaron a extenderse las denuncias cruzadas de conspiraciones golpistas entre sindicatos, empresarios y partidos de la derecha y la izquierda. Todos, sin embargo, coincidían en repudiar la vocación "antipopular" de un gobierno que desde el anuncio del programa «gradualista» de estabilización en marzo de 1983 había sido incapaz de aplicar ninguna de las medidas que se había ido resignando a aceptar como necesarias para detener el deterioro de la economía. En estas condiciones, Siles Zuazo optó por hacer suyo el llamamiento de la Iglesia Católica en favor de una «convergencia» de todas las fuerzas vivas, aprovechando el discurso de fin de año para intentar comprometer al poder Legislativo y a los actores sociales en un gran acuerdo nacional destinado a consolidar el nuevo régimen⁸⁶. Unos días después, cursaba una invitación formal a todas las formaciones políticas, a la Central Obrera Boliviana y a la patronal empresarial para iniciar un diálogo que debería concluir con el establecimiento del «pacto por la democracia» que nunca se firmó durante la transición, recogiendo el compromiso explícito de todos los actores con el mantenimiento de las nuevas «reglas de juego»⁸⁷.

Sin embargo, nadie estaba interesado en fortalecer al gobierno. Para la derecha política y social su debilidad era un regalo, dado que tanto el MNRH de Paz Estenssoro como la ADN de Hugo Bánzer y la patronal empresarial (CEPB) habían optado claramente por seguir una estrategia de confrontación frontal para acelerar su desgaste y forzar la convocatoria de elecciones anticipadas. Para la oposición mayoritaria, el juego con la coalición izquierdista era de conflicto puro, y lo más probable es que ni siquiera una oferta

⁸⁵ Al parecer el MIR conspiró con grupos de la oposición de derechas, en particular con miembros del MNRH de Paz Estenssoro, para promover la inhabilitación de Siles Zuazo y el consiguiente ascenso a la Presidencia de Jaime Paz Zamora. Las denuncias que efectuó en su momento el semanario izquierdista *Aquí* fueron confirmadas más tarde por destacados dirigentes del partido. Véase Jetté (1989) p. 220.

⁸⁶ El texto íntegro del discurso en *Presencia*, 1 de enero, 1984.

⁸⁷ *Presencia*, 8 de enero, 1984.

de participación en el gobierno hubiera alterado la percepción de sus pagos. En cualquier caso a finales de 1983 Siles Zuazo no se planteaba seriamente la opción de sustituir a la UDP por un «gobierno de convergencia» con la derecha⁸⁸, reconociendo sin más su derrota, aceptando el adelanto de las elecciones y concediendo ya un carácter provisional a un mandato obtenido tras tres victorias sucesivas en las urnas.

¿Cómo podía el gobierno, en este contexto, *legitimar las demandas de austeridad*? Resultaría imposible mientras todos continuaran negándose a apoyarle en ese empeño. Mientras tanto, sólo cabía seguir aplazando las decisiones, continuar comprando tiempo. A finales de 1983 el Ministerio de Finanzas tuvo que encargarse de ello, cediendo una y otra vez a las reivindicaciones salariales de los sindicatos y eliminado de inmediato los efectos estabilizadores que pudieran haberse derivado de los ajustes de noviembre. Así, mientras los portavoces gubernamentales afirmaban con una creciente insistencia que era indispensable contener el déficit público y que los salarios se habían convertido en el detonante fundamental del proceso inflacionario que estaba amenazando las bases de la joven democracia boliviana, se veían obligados a aplicar en los hechos disposiciones "populistas", expandiendo el gasto para adormecer temporalmente el conflicto con los sindicatos⁸⁹.

Los alegatos del gobierno, por supuesto, tenían a su favor las cifras de la crisis, que al final del año dibujaban ya una situación sin duda demasiado próxima a la catástrofe. El declive productivo impulsado por la contracción del sector exportador y la dramática reversión del flujo de la deuda⁹⁰, y agravado por los efectos de la sequía, había dado, en efecto, un enorme salto adelante en 1983. El PIB total terminaría cayendo un 6.6%, duplicando con creces la cifra negativa del año anterior, y la tasa anual de inflación ascendió al 328%. El

⁸⁸ En su discurso de fin de año se ocupó de puntualizar que «es inexacto asociar nuestra invitación al diálogo, con la organización inmediata de un gobierno de convergencia nacional», afirmando a continuación que esa opción podría plantearse «en el futuro, si las distintas corrientes políticas pueden lograr un gran acuerdo y coincidir en un programa común». *Presencia*, 1 de enero, 1984.

⁸⁹ La prensa recogía casi a diario declaraciones de los portavoces gubernamentales sobre la necesidad imperiosa de adoptar un cambio radical en la política de ingresos que se había seguido hasta entonces. Ante todo, insistían en que la aplicación de la escala móvil de salarios debía ser revisada de inmediato y adaptada a «las realidades de la economía nacional» para evitar que fuera únicamente «un instrumento destinado a incentivar la inflación y terminar con el poder adquisitivo de los salarios», dado que «el aumento de salarios significa aumento de precios en general». *Presencia*, 4 de enero, 1984.

⁹⁰ En 1983, las transferencias netas al exterior desde Bolivia terminarían suponiendo un 4.6% del producto, un récord histórico que no sería ya superado en el futuro. Banco Mundial, *World Debt Tables*. 1988-1989 Edition, Washington DC, 1988.

ahorro interno, por su parte, se contrajo en una proporción brutal -aproximadamente un 60%- , ya que en el contexto especulativo alimentado por las expectativas inflacionarias sólo mantenían sus capitales en el sistema financiero los pequeños ahorristas más desinformados o las instituciones que no tenían otra alternativa⁹¹. Finalmente, la caída acelerada de los ingresos fiscales hizo que el déficit de la hacienda pública se aproximara al 8% del PIB (Morales, 1986: 6). Conviene recordar aquí que junto a los efectos derivados del hundimiento de las exportaciones e importaciones legales y de la actividad económica interna en el sector "formal" -incluyendo el sistema financiero, abandonado por los ahorristas-, el Tesoro General de la Nación se resintió enormemente por los atrasos en las facturas del gas natural exportado a la Argentina: en 1983, los ingresos por este concepto fueron un 13.8 por ciento de lo presupuestado, frente al 93.5 por ciento del año anterior⁹². Todo ello se combinaba para agravar el déficit, y éste, en ausencia del tradicional apoyo financiero externo, debía ser cubierto recurriendo en una proporción cada vez mayor a la emisión monetaria inorgánica. La emisión inorgánica alimentaba por supuesto a la inflación, y ésta reducía de nuevo los ingresos fiscales, dado que los impuestos adeudados al estado iban perdiendo fracciones cada vez mayores de su valor en el momento del pago.

Los portavoces gubernamentales argumentaban que en estas condiciones la recuperación de los ingresos era una diana móvil, que únicamente podría alcanzarse en períodos cada vez más breves a costa de un multiplicación de la inflación⁹³. Sólo quedaba que los sindicatos reconocieran que la carrera estaba perdida de antemano, y se resignaran a aceptar la estabilización de los salarios en niveles compatibles con la realidad de la crisis: había que abandonar definitivamente, al menos en el corto plazo, la experimentación con unas políticas expansivas que habían demostrado ya su fracaso⁹⁴. La respuesta «definitiva» del gobierno a las exigencias salariales de la COB afirmó así tajantemente, tras recordar una

⁹¹ Flavio Machicado, "Informe Reservado" entregado al Presidente de la República en marzo de 1984, p. 4.

⁹² UDAPE, *Análisis...*, cit., p. 91.

⁹³ «De continuarse con el reajuste salarial toda vez que el IPC llegue al 40 por ciento, el aumento será mensual, semanal y, finalmente, diario, debido a sus efectos multiplicadores». *Hoy*, 6 de enero, 1984.

⁹⁴ *El Mundo*, 18 de enero, 1984.

vez más la dramática coyuntura económica que atravesaba el país⁹⁵, que no sólo era imposible aumentar los salarios hasta alcanzar un nivel "de justicia", expresado la demanda abstracta del Salario Mínimo Vital que enarbolaban con creciente insistencia varias federaciones sindicales, sino que era absolutamente necesario corregir a la baja la política salarial aplicada hasta entonces: «Se revisará la forma de aplicación de la escala móvil, a fin de lograr su compatibilidad con una política de remuneraciones acorde con el fortalecimiento del sector productivo en general y de las empresas públicas en particular», vinculándola en adelante «a la evolución del producto y de la productividad»⁹⁶. Pero al día siguiente de la publicación del documento gubernamental *la COB decretó un ayuno nacional y amenazó con convocar en el plazo de 10 días, y por primera vez desde el establecimiento del régimen democrático, una huelga general indefinida*. La oposición mayoritaria, apurando hasta las heces su estrategia de confrontación frontal con el gobierno, apoyó sin matices las demandas sindicales⁹⁷, dejando a Siles Zuazo literalmente en manos de la COB. Su única alternativa era alcanzar un acuerdo inmediato con ella, y así, en la noche del 22 de enero decidió aplicar sin mayor dilación la escala móvil, renunciando de nuevo «por el momento» al tantas veces anunciado cambio de rumbo en la política de ingresos, y una semana después se resignó a cubrir por entero la demanda salarial de los sindicatos, otorgando un fortísimo incremento retroactivo⁹⁸.

⁹⁵ «Ajenos (sic) a la responsabilidad del gobierno, se ha producido la caída del PIB en 16 por ciento en los dos últimos años, la disminución del producto agrícola en 23 por ciento en 1983 como consecuencia de la sequía y las inundaciones y la caída de los precios promedio de nuestras exportaciones mineras en un 26 por ciento, como resultado de la recesión mundial». *Presencia*, 20 de enero, 1984.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Tanto el MNRH de Paz Estenssoro como la ADN de Hugo Bánzer jugaron exclusivamente a desestabilizar al gobierno, deslegitimando sus llamamientos a la austeridad y recordando los derechos de los trabajadores. El Parlamento aprobó, por ejemplo, una declaración propuesta por un MIR definitivamente dispuesto a emplear todas las armas a su alcance para promover una recomposición del gobierno favorable a sus intereses, que expresaba el «pleno respaldo» de los miembros del Congreso y el Senado «a las justas reivindicaciones planteadas por la Central Obrera Boliviana al Poder Ejecutivo, manifestando al mismo tiempo su protesta por la poca responsabilidad y seriedad con la que el gobierno considera los problemas de los trabajadores del país y del pueblo». El texto está recogido en *Última Hora*, 24 de enero de 1984.

⁹⁸ El equipo económico gubernamental afirmaba que el porcentaje del aumento no podía pasar en ningún caso del 54% a aplicarse desde el primero de enero, pero la COB manejaba datos sobre la evolución del IPC que avalaban su demanda de un incremento del 57% retroactivo al primero de diciembre del año anterior. La guerra de cifras terminó el 29 de enero a las 3 de la madrugada, cuando los representantes gubernamentales anunciaron su "decisión" de conceder un incremento salarial del 57% para todos los trabajadores retroactivo al primero de diciembre.

En el acuerdo que puso fin a la huelga nacional de hambre el gobierno no sólo otorgó un aumento salarial por el monto íntegro que exigían los sindicatos, sino que también *asumió compromisos que en la práctica equivalían a desarrollar los lineamientos centrales de la política de ingresos del Plan Económico-Social de Emergencia de la COB*. En adelante, la política anti-inflacionaria se basaría, como quería la central sindical, en un mayor control estatal sobre la comercialización de los bienes de consumo, a partir de la institucionalización inmediata de un régimen de abastecimientos bajo precios controlados y estables para los productos básicos que comprendería la instalación de pulperías empresariales y almacenes populares a los que se tendría acceso con libretas de racionamiento, y la entrega de la gestión de los mercados campesinos a los sindicatos rurales.

El contenido de los acuerdos podía afectar sin duda a los intereses básicos del empresariado, y así, tras la ofensiva de los parlamentarios de la ADN y el MNRH -varios de ellos representantes prominentes de la empresa privada- a favor de las demandas "legítimas" de los huelguistas, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ordenó un *lock out* de 48 horas en protesta por las concesiones salariales «desmedidas» y la clara intención la COB y un sector del gobierno de «acabar con la libre empresa boliviana»⁹⁹. La demagogia obrerista de los parlamentarios durante la huelga de hambre y el cierre patronal de los días 6 y 7 de febrero, acompañado y prolongado en una violenta campaña de prensa contra el «populismo» y la «irresponsabilidad» de los partidos gobernantes, revelaron con claridad meridiana el doble juego de la derecha, dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para precipitar el desgaste de todos los actores del movimiento obrero.

El gobierno "populista", por su parte, no creía en absoluto en la eficacia de las medidas que acaba de adoptar bajo la presión sindical¹⁰⁰, y el fatalismo y la sensación de descontrol invadieron por completo la esfera de la política económica. La esquizofrenia de Jordán Pando, ministro de Planeamiento, es sin duda el mejor ejemplo de ello. Según Jordán, la firma del acuerdo con la COB era «una muestra de lo que se puede hacer trabajando en

⁹⁹ Fernando Illanes, Presidente de la CEPB, en *Presencia*, 3 de febrero, 1984.

¹⁰⁰ Un buen ejemplo de la intensidad y la "calidad" de las presiones a que fue sometido el gobierno, al margen de la huelga de hambre masiva, fue la irrupción violenta de un grupo de mineros procedentes de los campamentos de Catavi y Siglo XX en la habitación del Ministerio de Planeamiento en la que se desarrollaban las negociaciones entre los ministros del gabinete económico y los ejecutivos de la COE. Para una descripción de este acontecimiento ver *El Mundo*, 27 de enero, 1984.

democracia, a diferencia con otros tiempos en los que se dictaban disposiciones de arriba y los trabajadores no eran consultados o no existía un diálogo», y que la resolución del conflicto fue posible «gracias a la madurez de los dirigentes sindicales»; pero a continuación aseguraba que a fin de cuentas «trabajando en democracia» no se podía hacer nada bueno, porque los acuerdos, necesarios para «amainar la situación política», reducían enormemente «la capacidad financiera para desarrollar una política antiinflacionaria»¹⁰¹. Más aún: las últimas disposiciones, que «fueron inevitables», debían entenderse en realidad como expresión de una «democracia anárquica» en la que «sólo participan los que presionan y otorgan plazos». El ministro terminaba así reconociendo una vez más la impotencia del gobierno para aplicar medidas como la contención salarial y la fijación de precios «reales» que eran «absolutamente necesarias» para estabilizar la economía, manifestando su «completo acuerdo» con quienes le criticaban porque «pese a saber el camino a seguir», no estaba haciendo «ningún intento serio por adoptar una política antiinflacionaria efectiva». Peor aún, parecía sentir una cierta añoranza por aquéllos regímenes en los que «los trabajadores no eran consultados» pero en los que, finalmente, los gobernantes eran «capaces» de hacer lo que consideraban necesario¹⁰².

Sólo la COB se mostraba enteramente satisfecha con los resultados de la huelga de hambre, y parecía tener buenas razones para ello. Los acuerdos alcanzados no sólo representaban «una conquista muy importante»¹⁰³, sino que *constituían de hecho, según los mismos dirigentes sindicales, «el inicio de la aplicación del plan de emergencia de la Central Obrera Boliviana»*¹⁰⁴. El gobierno, en efecto, se había comprometido a diseñar su política económica sobre la base del programa de la COB. *Las concepciones que inspiraron los acuerdos respondían por completo a las interpretaciones sindicales de la crisis*, apartándose diametralmente de las que habían desarrollado paulatinamente los actores gubernamentales tras el rápido fracaso de su primer programa de estabilización expansiva, y ello era un reflejo bastante exacto del enorme poder de negociación de que disponían los sindicatos en la

¹⁰¹ *Presencia*, 30 de enero, 1984.

¹⁰² *El Mundo*, 4-2-84. El Ministro de Planeamiento hizo estas declaraciones en un programa de la radioemisora católica Radio Fides.

¹⁰³ Declaraciones Juan Lechín, secretario ejecutivo de la COB, en *Presencia*, 30 de enero, 1984.

¹⁰⁴ Declaraciones de Juan Lechín, en *Presencia*, 31 de enero, 1984.

coyuntura. En cualquier caso, si existía realmente, como pretendía la COB, una alternativa a la austeridad "monetarista" para detener la caída por la pendiente, aquél era sin duda el momento de demostrarlo.

Pero las medidas arrancadas al gobierno por la huelga de hambre tuvieron unas consecuencias devastadoras. El aumento salarial tuvo un fortísimo impacto inflacionario que afectó de inmediato a los productos de la canasta alimenticia básica, dado que tanto el gobierno como los sindicatos simplemente carecían de los medios para intervenir con eficacia los circuitos de comercialización, controlando las reacciones especulativas de los agentes económicos. Así, el 14 de febrero, a sólo dos semanas de la firma de los acuerdos, la COB decretaba de nuevo un estado de «emergencia y movilización general» en protesta por «la indiscriminada elevación de los precios de los artículos de consumo»¹⁰⁵, y tres días después, impulsada por una rápida escalada de la conflictividad social, daba un plazo de 72 horas al gobierno para que atendiera «de una vez» sus compromisos, anunciando que, una vez cumplido el plazo, «se convocará un paro de 48 horas»¹⁰⁶. El gobierno respondió entregando rápidamente un conjunto de decretos que satisfacían por completo las demandas de la central sindical, y ratificaban los acuerdos en todos sus puntos. La convocatoria de huelga fue suspendida, y los dirigentes obreros volvieron a comprometerse declarando que los decretos gubernamentales constituían «el principio de una reformulación de la política económica del poder ejecutivo, tomando como norte la defensa de los intereses nacionales y populares»¹⁰⁷.

Por supuesto, el papel impreso no podía solucionar la ineffectividad de la acción estatal sobre las actividades "informales", que abarcaban un área cada vez mayor de la economía. El contrabando y la especulación con los productos de la canasta básica continuaron creciendo al amparo de la renovada política de precios subvencionados y provocaron en febrero y marzo una severa crisis de abastecimiento en los mercados populares. Y así, a medida que la situación iba deteriorándose y crecía el malestar en sectores cada vez más amplios de la población, *los efectos perversos de la política de ingresos expansiva comenzaron a preocupar seriamente a las direcciones sindicales*. Las acusaciones rituales contra

¹⁰⁵ *Presencia*, 15 de febrero, 1984.

¹⁰⁶ *Presencia*, 18 de febrero, 1984.

¹⁰⁷ *Presencia*, 22 de febrero, 1984.

un gobierno supuestamente dedicado a "sabotear" los acuerdos y carente de voluntad para cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores, «principalmente con relación a la política de abastecimiento, de comestibles y precios»¹⁰⁸, en efecto, no podían ocultar el hecho de las últimas decisiones habían sido impuestas y saludadas por la COB como el inicio de la aplicación de su propio programa económico.

Finalmente, en una carta a Siles Zuazo del 22 de marzo de 1984, el Comité Ejecutivo de la central obrera mencionó por primera vez la «*necesidad de precios reales*», si bien dentro de una «política global» que incluyera también «la necesidad de salarios reales y de medidas que alcancen favorablemente a la población asalariada del país», afirmando que «insistir sólo sobre uno de los aspectos, como el de las subvenciones estatales, es continuar con la práctica que ha conducido al agravamiento de la crisis, *con perjuicio ya irrecuperable para los sectores populares*»¹⁰⁹. Noel Vasquez, Secretario Permanente de la COB, amplió el alcance de la autocrítica, asegurando que «*sólo una política realista sacará al país de la crisis*» y que «los precios subvencionados no están beneficiando a los trabajadores», sino, por el contrario, creando insatisfacción e incluso dando lugar «a irregularidades y corrupción entre algunos dirigentes sindicales». En opinión de Vasquez, la experiencia última había desmentido ya suficientemente a quienes mantienen en el seno del movimiento sindical la opinión de que «con pulperías y almacenes populares se solucionará la crisis» sin querer darse cuenta de que «esos alimentos salen del país y alientan el contrabando»; por ello, «la COB no puede oponerse a la eliminación de las subvenciones, y eso es lo que hemos planteado al presidente»¹¹⁰.

Las reflexiones iniciales sobre las consecuencias que cabía extraer de los resultados inmediatos del "éxito" sindical -una progresión geométrica de los precios de los productos de consumo básico y un desabastecimiento imparable de los mercados populares-, sin embargo, fueron cortadas de raíz por una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo celebrada unos días después. El comunicado que se emitió entonces para «aclarar» la posición de los sindicatos frente a las alternativas de la política económica, en efecto, desautorizó las interpretaciones autocríticas recordando sin más el hecho -indudable- de que estaban «en

¹⁰⁸ *El Mundo*, 13 de marzo, 1984.

¹⁰⁹ AMTDL, Correspondencia recibida 1984, s/n.

¹¹⁰ *Presencia*, 24 de marzo, 1984.

abierta contradicción con la *posición tradicional* sustentada por la COB al respecto», y clausuró el debate incipiente entregando al país *una defensa cerrada de las viejas certidumbres*:

«...la COB, ayer como hoy, ha planteado al gobierno que una forma de frenar de veras el desabastecimiento, contrabando y el alza vertiginosa de los precios de los artículos básicos de la canasta familiar es con la implantación de un nuevo sistema de abastecimiento y distribución, que para la COB, es el sistema de pulperías empresariales (tanto privadas como públicas) y de la creación de los almacenes populares, que permitan que el producto llegue directamente al consumidor, obviando el mercadeo de los mismos, que permita la vigencia de los precios reales como el pleno abastecimiento de los artículos de primera necesidad»¹¹¹.

Esta reafirmación de las viejas certidumbres, esta la fuga hacia adelante que inició la dirección obrera para cerrar su primera crisis sensible en el período democrático, resulta fácilmente explicable si se tiene en cuenta *la magnitud de los problemas implicados en el desarrollo de la argumentación autocrítica*. Se trataba, en efecto, de que en la situación de estrangulamiento del crédito externo y de shock de la oferta nacional -agravado por la brutal sequía del año anterior- que atravesaba el país, establecer la política de «precios y salarios reales» que proponía la COB en su carta al Presidente equivalía necesariamente a *asumir la necesidad de imponer un fuerte ajuste a la baja de los ingresos de los trabajadores*. Equivalía a reconocer y explicar a los trabajadores que no estaban jugando un *juego fructífero*, que el enorme poder de negociación de que disponía la COB en la coyuntura no podría traducirse en una mejora de sus niveles de consumo. Reconocer y explicar que la crisis del sector exportador y la inversión en el signo de los flujos de capitales, habían reducido radicalmente la capacidad del país para importar y privado al estado de la posibilidad de financiar la política expansiva sin recurrir a una creciente emisión monetaria inorgánica; que en esas condiciones la multiplicación del proceso inflacionario, de los movimientos especulativos y el contrabando, la "informalización" progresiva de la economía y el desabastecimiento de los mercados, eran *el único resultado esperable* de cualquier intento por recuperar de inmediato los ingresos perdidos en los últimos años.

Resultaba más fácil desde luego buscar amparo en la radicalización del discurso antigubernamental, recordar el largo historial de "traiciones" reformistas, y continuar

¹¹¹ Recogido en *Presencia*, 28 de marzo, 1984.

eludiendo cualquier enfrentamiento con las expectativas de las bases. Pero la agresividad verbal que desplegaron desde finales del mes de febrero los liderazgos sindicales, achacando los efectos nocivos de la política expansiva a la «ineptitud» o al «sabotaje» deliberado del gobierno¹¹², no podía exorcizar las profundas contradicciones, las «amenazas» que dibujaba, según la expresión de la FSTMB, «la realidad de la crisis» en el horizonte estratégico de la organización obrera a poco de cumplirse el primer aniversario de la democracia. El resultado perverso del "éxito" inmediato y absoluto de la huelga de nacional de hambre de enero de 1984, había marcado así un punto de inflexión inocultable en la trayectoria del movimiento obrero boliviano en democracia.

LOS RESULTADOS: LAS ANTINOMIAS DEL MOVIMIENTO OBRERO

Después de un año de bloqueo de la política económica en un esfuerzo continuado por defender los niveles salariales en medio del declive productivo y el agotamiento de las reservas internacionales, el avance de la espiral inflacionaria había comenzado a producir ya desde finales de 1983 un ajuste *caótico* de la economía boliviana a las nuevas condiciones del entorno, y las consecuencias del "éxito" de la huelga de hambre de enero *informaron suficientemente de que la COB no podía hacer nada más para evitar la caída global del consumo interno*. Las estrategias sindicales encontraron así su límite "natural" en la nueva coyuntura: tras la desintegración de las instituciones de gobierno del "estado del 52" (Zavaleta), la COB se había hecho finalmente con la llave del cofre, pero el tesoro se había malgastado tiempo atrás y ningún filántropo estaba dispuesto a reponerlo. El estado simplemente carecía de recursos para sostener el consumo interno, y la única "traición" que podían imputar los dirigentes sindicales a unas élites políticas reducidas a la impotencia era su negativa a recurrir al expediente efímero e irresponsable de vender las reservas de oro del

¹¹² Ver, por ejemplo, *Hoy*, 28 de febrero, 1984, y *El Mundo*, 13 de marzo, 1984.

Banco Central¹¹³.

La brutal reducción de los recursos económicos del sistema desde finales de los años 70 era, en efecto, un "desastre ambiental" que había estado ocurriendo muy lejos del alcance de *todos* los actores de la transición y que *había reducido en los hechos sus alternativas a la elección entre distintas combinaciones en la distribución de los costes del ajuste*. Las opciones del movimiento obrero en este punto -la distribución de los costos- abarcaban dos niveles: por un lado, en la *dimensión inter-temporal*, se trataba de imponer hoy un nivel *global* de demanda compatible con la estabilización de la economía para detener una espiral descendente que amenazaba con infligir mayores pérdidas *a todos* en el futuro inmediato; por otro, en la *dimensión inter-personal*, cualquier estrategia de política económica tendría que repartir *desigualmente* los sacrificios entre los diversos intereses sustantivos que pretendía representar, *jerarquizando* sus demandas competidoras. Pero vayamos por partes.

Los problemas que enfrentaría inevitablemente la autoridad de la COB si se mantenía inalterable el contenido de las estrategias "tradicionales" de presión sobre el estado habían comenzado a revelarse ya en octubre de 1983, cuando un buen número de sindicatos inició acciones sectoriales para defender sus posiciones al margen de las directrices de la COB, mientras ésta negociaba con el gobierno en el nivel central. Fueron mayoritariamente los trabajadores de "cuello blanco" quienes emprendieron entonces una aguda lucha salarialista, rebasando la «influencia moderadora» de la COB¹¹⁴ y «debilitando la unidad y la combatividad de la clase trabajadora»¹¹⁵. Pero el «salarialismo insolidario»¹¹⁶ había comenzado a afectar también a grupos eminentemente proletarios y con una larga tradición sindical. La Federación Sindical de Trabajadores Fabriles de Bolivia, en efecto, también había optado a finales de 1983, según reconoció el propio Juan Lechín, «por seguir un camino propio,

¹¹³ La venta de las reservas nacionales de oro para subsanar en el corto plazo los problemas de liquidez y financiar las políticas redistributivas fue una demanda que la COB repitió una y otra vez desde el inicio del proceso, generalmente por boca de Juan Lechín, y que incluyó como uno de los puntos de su *Plan Económico-Social de Emergencia*.

¹¹⁴ Véase *Informe Mensual*, CEDOIN, La Paz, octubre 1983, pp. 1-2. El Ministerio de Informaciones señaló que eran «los sectores de clase media» los que estaban «realmente provocando problemas y amenazando con paros, huelgas y bloqueos de calles». *El Diario*, 4 de octubre, 1983.

¹¹⁵ Comunicado de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, en *Presencia*, 10 de octubre de 1983.

¹¹⁶ Declaración de fuentes sindicales a *Última Hora*, 15 de octubre, 1983.

debilitando a la COB que se encuentra en diálogo con el gabinete económico del gobierno»¹¹⁷. Dentro de la COB, los fabriles pugnaban con una creciente intensidad para imponer una línea "salarialista" al Comité Ejecutivo, elevando al primer plano la reivindicación del Salario Mínimo Vital, pero empezaron a luchar sobre todo fuera de ella por mantener sus "privilegios", derivados de aumentos conseguidos a lo largo del año al margen de la aplicación general de la escala móvil. Dando plazos al gobierno para que estableciera «el salario mínimo vital *para el sector fabril*»¹¹⁸ y respaldando su demanda con una amplia cadena de huelgas, consiguieron arrancar importantes concesiones al Ministerio y terminar el año con una subida en su salarios reales que contrastaba fuertemente con las caídas que se produjeron entonces en el resto de los sectores. La escalada inflacionaria, argumentaban, amenazaba a diario con la inanición a las bases y había terminado por agotar su paciencia:

«Hasta estos momentos, los trabajadores fabriles hemos esperado pacientemente a que se resuelva nuestro problema salarial como sector productivo. La madurez sindical demostrada es por velar la suerte de nuestros derechos democráticos, y ello nos ha obligado a abstenernos de asumir posiciones radicales en defensa de nuestra economía, sin que ello signifique que la fuerza combativa de la segunda fuerza laboral del país haya perdido el empuje... Por ello creemos que *ha llegado el momento de asumir posiciones tendentes a no permitir que la clase fabril muera de inanición por falta de alimentos. Que el salario miserable que recibimos cada fin de mes nos sirva siquiera para poder alimentar a nuestras familias medianamente*»¹¹⁹

El avance de la marea salarialista, que a finales de 1983 había rebasado el ámbito de los nuevos sindicatos de cuello blanco y llegado de pleno a «la segunda fuerza laboral del país», ilustró suficientemente sobre *los límites de la estrategia de veto* que había seguido hasta entonces la COB. La prolongación del proceso inflacionario, en efecto, se estaba tornando incompatible con el mantenimiento de los niveles de consumo de los trabajadores: las caídas eran ya cada vez más rápidas después de las reposiciones salariales, y a medida que los trabajadores iban aprendiendo que los aumentos generales de salarios se trasladaban

¹¹⁷ *El Mundo*, 25 de octubre, 1983.

¹¹⁸ Resoluciones del Ampliado de la Conferación Sindical de Trabajadores Fabriles de Bolivia, en *El Mundo*, 19 de octubre, 1983.

¹¹⁹ Comunicado de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, 8 de octubre de 1983. AMTDL, Correspondencia Despachada, 1983, Tomo 3, s/n.

inmediatamente a los precios comenzaban a pugnar con mayor intensidad para obtener incrementos *sectoriales* por encima de la media y, por lo tanto, por encima de la evolución esperable de la inflación, dado que eran éstos los únicos que les permitían recuperar sus ingresos en el corto plazo. Cada uno intentaría cada vez más defender el poder adquisitivo de sus salarios luchando por conseguir sus propios "privilegios", arrancando al gobierno concesiones en forma de «bonos» o porcentajes sobre el salario mínimo. La *reacción* inmediata de la COB ante esta situación fue *incrementar las presiones distributivas sobre el estado* en el nivel central, pero los resultados del conflicto de enero demostraron a su vez que por ese camino sólo se conseguiría reducir el tamaño del producto a repartir, multiplicando la especulación, el contrabando de productos de consumo básico y agravando el desabastecimiento. Parecía por lo tanto evidente que *la central sindical no podría defender los ingresos de los trabajadores aumentando la agresividad de sus reivindicaciones*: ¿o acaso era posible superar el "éxito" total de la huelga de hambre de enero?.

De este modo, dadas las características de la crisis, los dirigentes obreros sólo tenían la opción de evitar que se prolongara una espiral descendente que afectaba negativamente a todos. El único "interés común" que podía atribuirse a sus representados, en efecto, era la estabilización del consumo interno en un nivel capaz de detener la caída, minimizando las pérdidas globales en el tiempo, y ello exigía *imponer ahora una política general de austeridad, conteniendo las reivindicaciones de cada uno*.

Pero la incipiente sectorialización del conflicto social no estaba expresando sólo la emergencia, tras un año de declive productivo acompañado por una escalada imparable de los precios, de una situación de "dilema de prisionero" en la que los esfuerzos de cada grupo para salvar su nivel de ingresos tendían a empeorar progresivamente los resultados de todos. Se trataba también de que la «posición tradicional» de la COB en las políticas de ingresos e inversiones estaba teniendo unos efectos fuertemente *excluyentes*, y ello obligaba a los sectores menos favorecidos a intentar defender sus intereses al margen de las directrices de la organización central. Lo que estaba en juego aquí no era la mayor o menor capacidad del actor central del movimiento obrero para perseguir un bien *colectivo* -el control del proceso inflacionario para evitar la decadencia *general* de los ingresos del "pueblo"- sino su actitud diferencial frente a los bienes *privados* de los distintos segmentos del campo popular.

El contenido concreto de las recetas "tradicionales" en política de ingresos debe entenderse en el marco de *la experiencia histórica de los trabajadores mineros*, para quienes

la pulpería empresarial con precios subvencionados representaba una conquista fundamental de las luchas sindicales y su principal *recurso defensivo* frente a los efectos de la inflación. Pero el problema con esto era que si bien la solución beneficiaba probablemente a los mineros, que disponían en sus centros de trabajo de un sistema de pulpería subvencionada bien establecido y que funcionaba con una cierta regularidad, y tal vez a otros colectivos empleados en empresas públicas productivas y en algunas instituciones estatales, *su extensión al conjunto de los asalariados era un proyecto inviable*. El gobierno, que estaba haciendo ya un enorme esfuerzo para mantener abastecidas las pulperías existentes, no podía plantearse seriamente la posibilidad de universalizar el mecanismo, y en estas condiciones la actitud de la COB tenía el efecto *práctico* de defender el privilegio relativo de los trabajadores que estaban incorporados ya al sistema frente a los segmentos mayoritarios que no podrían acceder a él. Las subvenciones, en efecto, provocaban mayor inflación, vía su impacto sobre el déficit fiscal, y la mayoría de los asalariados *sólo* percibía ese efecto perverso de las políticas que estaban imponiendo sus dirigentes en el nivel central, dado que el gasto público en la provisión de productos a precios congelados tenía un impacto marginal o nulo en sus niveles de consumo.

Este era el caso desde luego de los trabajadores fabriles y de los segmentos de cuello blanco. Pero éstos últimos estaban además *doblemente excluidos*. No sólo el salario en especie tenía una incidencia insignificante en sus ingresos, lo que permite explicar que, al igual que los fabriles, derivaran con especial intensidad hacia el «salarialismo», sino que tanto la COB como el gobierno de la UDP habían mantenido desde el principio un claro prejuicio "productivista" que tendía a deslegitimar y marginar fuertemente sus demandas. Conviene recordar a este respecto que el primer reajuste salarial general decretado por el gobierno estuvo acompañado de bonificaciones sectoriales que permitieron que el salario promedio de los trabajadores "productivos" se mantuviera en un índice 173 en diciembre de 1982, mientras el de los "no productivos" se situaba ya entonces en un nivel inferior al que había alcanzado antes de la «reposición» de la democracia¹²⁰. Si se tiene en cuenta que los trabajadores de los servicios y las administraciones públicas carecían de defensas frente a la inflación y que sus intereses ocupaban un lugar marginal en el discurso y en la práctica de

¹²⁰ La fuente consultada afirma que sus salarios reales se situaban en un índice 96 al terminar el año. Véase UDAPE, *Análisis de la gestión...*, cit., p. 166. Para la evolución diferencial de los niveles de ingresos en los sectores "productivo" y "no productivo" a lo largo de todo el mandato de Siles Zuazo, véase Zabalaga (1990).

la izquierda -tanto en el gobierno como en la COB-, parece innecesario cargar el análisis con alusiones a su falta de "conciencia de clase" para dar cuenta de la elevada conflictividad de sus sindicatos¹²¹, de que, emprendiendo cada vez más acciones autónomas con efectos claramente «impopulares»¹²², se convirtieran de hecho en un desafío constante a la capacidad de gobierno interno de la organización obrera.

Los trabajadores mineros estaban en el extremo opuesto de la línea. El propio Ministerio de Trabajo destacó en octubre de 1983 su «responsabilidad» y el hecho de que mientras la mayoría de los sectores ingresaba en una espiral de conflictos ellos se mantuvieron «canalizando disciplinadamente todas sus demandas a través de la COB»¹²³. Tan sólo alguna conducta aislada¹²⁴ rompió entonces el tono general de moderación en las posiciones de la FSTMB y la «disciplina» de sus sindicatos afiliados, que fue una constante a lo largo de todo el primer año del mandato de Siles Zuazo (Lazarte, 1987: 237). En realidad, no podía ser de otra manera, dada la absoluta *identidad* que existía en los hechos entre los intereses de «la primera fuerza laboral del país» y las recetas tradicionales de la COB en política de ingresos. Aunque es imposible efectuar hoy un cálculo preciso de lo que suponía el salario en especie para los empleados de COMIBOL al término del primer año del gobierno de la UDP, es indudable que representaba un porcentaje muy importante de la cantidad percibida en moneda¹²⁵, y que ello permitía a los mineros defenderse relativamente

¹²¹ El trabajo de Arauco (1992) sobre la acción colectiva de los trabajadores de cuello blanco durante el período de gobierno de la UDP hace a mi modo de ver un excesivo hincapié en este tipo de factores. Véanse especialmente las pp. 135-138.

¹²² Entre los paros más «impopulares» que realizaron los trabajadores de cuello blanco en octubre y noviembre de 1983, desarrollados por completo al margen de las consignas de la COB, estuvieron los de ENTEL (Teléfonos), Trabajadores de Salud, Servicio Nacional de Caminos, Maestros urbanos y la Caja Nacional de la Seguridad Social. Todos ellos dañaban *directamente*, al privarla de servicios básicos, a una población popular que tenía ya suficientes problemas, y su conjunción generó un amplio malestar que la prensa recogió abundantemente en sus entrevistas.

¹²³ *Presencia*, 6 de octubre, 1983.

¹²⁴ Notoriamente, la del sindicato de Huanuni, que el 1 de octubre de 1983 llevaban 13 días en huelga general indefinida «exigiendo la aplicación del salario mínimo vital y otros planteamientos de tipo económico». El hecho de que ese sindicato afirmara repetidas veces de que la FSTMB pretendía «aislarle del movimiento sindical minero» refleja claramente el carácter marginal de sus acciones. Véase, por ejemplo, *Presencia*, 1 de octubre, 1983.

¹²⁵ El salario mínimo en COMIBOL a fines de 1983 era de 31.000 pesos bolivianos, y según cálculos efectuados sobre informaciones recibidas de fuentes oficiales de COMIBOL en aquél momento, su valor real era inferior al del salario en especie. El cupo mensual de pulpería permitía a los empleados de la empresa gastar 200 pesos para obtener un conjunto de productos por los que hubieran tenido que pagar como mínimo 40.000 en cualquier mercado urbano. Véase Luis Antezana, "La realidad del salario minero", en *Presencia*, 28 de diciembre,

bien de los efectos de la inflación, evitando las tentaciones "salarialistas".

Pero *el peso de los intereses mineros en el seno de la COB* se expresaba sobre todo en su tratamiento de la crisis de COMIBOL, que se convirtió muy pronto en el reflejo más llamativo de las contradicciones que atenazaban al movimiento obrero. A medida que declinaban el volumen y el valor de su producción, la COMIBOL se fue convirtiendo en un enorme sumidero de recursos que terminaría engullendo *más de la mitad del crédito en moneda extranjera concedido al conjunto del sector público* durante todo el mandato de Siles Zuazo¹²⁶. Mientras en el ejercicio 1983 la producción de minerales bajaba en un 24%, los costos se incrementaban en un 370%, y la empresa acumulaba unas pérdidas cercanas a los 97 millones de dólares -una cifra que equivalía a un 28% del valor total de las exportaciones de minerales en ese año y prácticamente doblaba la cifra del ejercicio anterior, en el que había obtenido ya los peores resultados de su historia¹²⁷-, la COB y la FSTMB arrancaban al gobierno recursos que prolongaban la agonía de muchos yacimientos casi agotados y financiaban el consumo de una plantilla que había aumentado de 26.000 a 28.000 empleados desde la instalación del nuevo régimen. Así, en los acuerdos de enero-febrero de 1984 el gobierno tuvo que resignarse a entregar a COMIBOL la comercialización de la producción de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), que hasta entonces monopolizaba el Banco Minero estatal¹²⁸, fortaleciendo el control corporativo de la administración cogestionaria de

1983. Todos estos cálculos, sin embargo, deben tomarse con precaución, dadas las disparidades que existen entre las distintas fuentes. La que asigna un porcentaje menor al salario en especie de entre las consultadas (Olave y Pinto, 1985: 22, cuadro) estima que éste suponía en diciembre de 1983 un 60% del salario monetario. Quienes defendían que era una falacia atribuir a la pulpería minera el carácter de "privilegio" relativo en la situación inflacionaria aludían al hecho de que otros grupos de trabajadores en empresas de servicios habían logrado establecer almacenes con una mayor cantidad de artículos con precios congelados y con cupos mayores a los que recibían los mineros. Las fuentes, sin embargo, no se refieren nunca a sectores o empresas con nombres y apellidos, sin duda por la absoluta falta de datos fiables al respecto, dada la enorme complejidad de la estructura salarial boliviana y la inexistencia de estudios empíricos. Así por ejemplo, Arturo Crespo, tras criticar a quienes estaban atribuyendo cada vez más privilegios inexistentes a los mineros, afirmaba que «sería interesante que el Instituto de Investigaciones Sociolaborales o el Departamento de Salario dependiente del Ministerio de Trabajo diera publicidad a la estructura salarial y sus componentes de todos los sectores laborales, particularmente de los bancarios, universitarios, petroleros, ferroviarios, trabajadores del Estado...». Arturo Crespo, "Los trabajadores mineros y la 'pulpería barata'", *Presencia*, 28 de enero, 1984.

¹²⁶ UDAPE, *Análisis...*, cit., p. 52.

¹²⁷ Los datos están tomados de COMIBOL, "Documento No. 20", La Paz: Dirección de Relaciones Públicas, 1984.

¹²⁸ En adelante, el Banco Minero se ocuparía únicamente de la comercialización de la producción de la "minería chica" -básicamente el sector cooperativista-, aproximadamente un 15% del producto minero total.

COMIBOL sobre las divisas generadas por la exportación de minerales, y se comprometió además a incrementar el apoyo financiero a la minería estatal, pese a las protestas públicas de los responsables del área económica sobre el enorme agujero fiscal que estaban produciendo sus déficits¹²⁹.

En este contexto, resultaba inevitable que los petroleros recordaran muy pronto a la COB que ahora eran ellos, y no los mineros, quienes aportaban al país la gran mayoría de las divisas¹³⁰, y que la Federación de Fabriles comenzara a respaldar por su cuenta las presiones de sus empleadores para arrancar al gobierno cantidades adicionales de divisas a precios preferentes¹³¹. La renuncia de la COB a establecer *prioridades estratégicas* en la distribución de las subvenciones al consumo y de las inversiones estatales para sostener el empleo no podría eliminar la competencia entre los sectores: tan sólo garantizaba que en el corto plazo la distribución sería el resultado *arbitrario* del poder de negociación que fuera capaz de desplegar cada uno de ellos. Era evidente, por ejemplo, que la prioridad estratégica de fortalecer a la minería pública resultaba contradictoria con la defensa *indiscriminada* del empleo en la industria sustitutiva:

«para importar un material tan esencial para la producción minera como es la cañería plástica, en este momento nosotros estamos lidiando para que el Ministerio de Industria y Comercio nos dé el permiso de importación de este producto, pues efectivamente, tenemos una fábrica nacional aquí pero nos vende 10 veces más caro de lo que significaría este producto importado...Habría que señalar que en el caso concreto de este producto, las fábricas que se dedican a fabricar cañería plástica sencillamente no están produciendo, porque a ellas efectivamente les resulta un negocio mucho más beneficioso conseguir las divisas de la Comisión de Política Cambiaria, muchas veces a través de la presión que realizan nuestros compañeros fabriles, y no producir, metiendo esos dólares en el mercado negro»¹³²

¹²⁹ Inmediatamente después de dar a conocer los compromisos asumidos por el gobierno, Jordán Pando, ministro de Planeamiento, afirmaba que «el déficit fiscal alcanzó (en 1983) a 240 mil millones de pesos, de los cuales 168 mil millones provienen de COMIBOL». *Hoy*, 28 de enero, 1981. La cifra que presentó el ministro era ciertamente exagerada, pero en 1983 el déficit de COMIBOL supuso cerca del 25% del déficit total del TGN. UDAPE, *Análisis*, p. 92.

¹³⁰ *Ultima Hora*, 12 de febrero, 1984; *El Mundo*, 20 de febrero, 1984.

¹³¹ *Conversaciones con líderes sindicales del sector*.

¹³² José Pimentel, dirigente minero y miembro del Directorio cogestionario de COMIBOL, "Evaluación de la experiencia cogestionaria en COMIBOL", s/f, s/e, p. 129.

La protección legal a todas las ramas de la industria nacional afectaba negativamente a los intereses de todas las empresas exportadoras, al igual que las subvenciones a la producción y al consumo interno a través de la sobrevaluación de la moneda. Los dirigentes sindicales mineros se lamentaban con abundantes razones de los enormes costos que tenía para su empresa el dólar barato¹³³, ya que como todos los exportadores debía entregar sus divisas al Banco Central al tipo de cambio oficial y comprar la inmensa mayoría de sus insumos a precios indexados al dólar paralelo.

Cualquier política anti-inflacionaria efectiva, por lo tanto, no debía sólo ocuparse de promover una contención global de los salarios, sino también de la distribución *desigual* de los sacrificios entre sectores de trabajadores que impulsaban demandas competidoras y contradictorias sobre unos recursos públicos muy escasos. *La COB pretendía que el estado pagara todas las diferencias*, obligando al gobierno a importar cada vez más papel moneda para adormecer en la medida de lo posible los conflictos distributivos y empeorando así progresivamente los resultados conjuntos. Pero los efectos perversos de las estrategias sindicales contribuían además a multiplicar "injustamente" la hostilidad de segmentos mayoritarios de la población hacia los trabajadores mineros y a oscurecer el futuro de su empresa en el medio plazo. El riesgo que había asumido la FSTMB al hacerse cargo «de un muerto»¹³⁴, en efecto, estaba adquiriendo rápidamente las características de un suicidio a medida que la empresa sufría las consecuencias de una política macroeconómica "irracional" y se veía forzada a protegerse arrancando al estado unos préstamos que podían presentarse demasiado fácilmente como un "privilegio" sectorial obtenido a cambio del sacrificio de los intereses generales. De este modo, si el Presidente de su Directorio cogestionario había afirmado solemnemente que «si la COMIBOL se hunde, el país se hunde, y los trabajadores estamos dispuestos a defender la empresa, que es propiedad del pueblo boliviano»¹³⁵, un segmento cada vez mayor de la ciudadanía estaba comenzando a percibir, impulsado por una

¹³³ «Habría que señalar claramente que en este momento a la Corporación Minera de Bolivia no le interesa aumentar su producción, por cuanto vemos que el tipo de cambio es irreal», *Ibid.*, p. 123.

¹³⁴ Los grupos de trabajadores que se opusieron a asumir la responsabilidad de la gestión de la empresa en crisis, notablemente el sindicato de Huanuni, lo hicieron utilizando esta expresión literal: «estamos haciéndonos cargo de un muerto». Véase, por ejemplo, *Ultima Hora*, 20 de diciembre, 1983.

¹³⁵ Víctor López, dirigente minero de la corriente autogestionaria y Presidente del Directorio de COMIBOL, citado en Le Bot (1984), p. 111.

amplia campaña de prensa, que, por el contrario, los esfuerzos sindicales por sostener la minería pública servían exclusivamente para proteger unos intereses *estrechos* a costa del hundimiento del país. No debería extrañar, en este contexto, que la celebración del primer aniversario de la cogestión obrera estuviera plagado de manifestaciones de desánimo y de renovadas propuestas de abandonar el timón: incluso el sindicato de Catavi, uno de los más comprometidos con el proyecto participativo, afirmó entonces que los trabajadores deberían plantearse la conveniencia de «devolver al presidente el decreto de cogestión» para evitar que en el futuro «los enemigos de la clase trabajadora responsabilicen a la administración cogestionaria de la crisis»¹³⁶.

Pero si parecía inevitable que los conflictos entre los intereses sustantivos de los distintos segmentos de la *población asalariada en el sector formal de la economía* fueran agravándose a medida que declinaba el nivel de recursos del sistema, *su interacción con los pobladores urbanos del sector "informal" y los campesinos había adquirido ya una dinámica de "suma cero"*. Tanto el conjunto de la población ocupada en pequeños talleres artesanales o en actividades por "cuenta propia" como las grandes mayorías que habitaban el campo, en efecto, no recibían ningún beneficio directo de la política de ingresos ni del gasto público para sostener el empleo formal, mientras percibían cómo sus ingresos menguaban a medida que se agravaba la recesión económica y sufrían con creciente intensidad los efectos perversos de las decisiones que imponían los sindicatos al gobierno. Todos ellos estaban en realidad *obligados* jugar contra la política de ingresos que propugnaba la COB, dado que el éxito de ésta hubiera provocado en los hechos *una distribución de los costes del ajuste radicalmente contraria a sus intereses y marcadamente favorable a los de los asalariados del sector formal*.

Los "informales" urbanos sólo podrían sostener sus niveles de vida en la medida en que fueran capaces de ingresar con buen pie y mantenerse a flote en los circuitos de la especulación y el contrabando. Algunos obtenían ciertos beneficios, dado que los resultados dependían en algún grado de su astucia y su suerte, aunque los que estaban ganando realmente eran los más ricos y mejor informados, mientras la incertidumbre y la volatilidad de las fortunas afectaban fuertemente a los que disponían de menores recursos y menor capacidad para sobrevivir a los fracasos. En cualquier caso, estaban condenados a convertirse

¹³⁶ *El Mundo*, 30 de marzo, 1984.

en "especuladores": ellos no podían defenderse de la escalada de los precios acudiendo a sus pulperías u obteniendo incrementos salariales, y sólo podían hacerlo anticipándose, mediante la "especulación", a los efectos inflacionarios de la política de ingresos expansiva. ¿Hasta dónde debería extenderse entonces la *represión* de los circuitos de la especulación y el contrabando que exigía la COB al gobierno?. ¿Se pretendía condenar a la inanición a la miríada de pequeños transportistas e intermediarios minoristas que pueblan la economía boliviana para salvar el consumo de los asalariados del sector formal?.

Con la población campesina el movimiento obrero enfrentaba un problema equivalente, dado que la insistencia de la COB en el control de precios para los productos agrícolas constituía en la práctica un atentado directo contra los intereses de los pequeños productores integrados en los circuitos comerciales. Estos, al igual que los informales y los pequeños propietarios urbanos, no tenían otra opción que dinamitar la política de ingresos que propugnaba la COB para salvar los suyos. Las situaciones eran muy desiguales¹³⁷, pero en el campo sólo prosperaban aquéllos que tenían la suficiente información para negociar sobre los precios especulativos y evitar que los "rescatadores" -intermediarios- fueran los únicos beneficiarios del caos¹³⁸: en cualquier caso, si para la agricultura boliviana el período inflacionario terminó siendo en general una etapa de prosperidad relativa (Godoy y Franco, 1992: Urioste, 1989), a lo largo de 1983 lo fué en la medida en que los productores consiguieron eludir las restricciones que intentaban imponerles los actores centrales y redujeron a la ineffectividad sus medidas de control de precios¹³⁹. La COB, en su *Programa Económico-Social de Emergencia*, pretendía superar la contradicción secular ciudad-campo - salarios urbanos-precios agrícolas- eliminando los procesos de intermediación para distribuir directamente los alimentos a la población urbana mediante un sistema de monopolio estatal de los medios de transporte y comercialización. Esto, como acabo de afirmar arriba, hubiera anunciado un horizonte muy oscuro para la multitud de pequeños transportistas y

¹³⁷ Para una panorámica general puede consultarse Maletta (1989).

¹³⁸ Según un observador muy atento de la problemática campesina, los "rescatadores" compraban habitualmente a los campesinos por un precio entre 3 y 4 veces menor al que pagaba el consumidor urbano. Véase Miguel Urioste, "Programa de Emergencia de la COB, sector agropecuario y campesinos", *Presencia*, 29 de febrero, 1984. Las violentas fluctuaciones en los precios, sin embargo, hacían sin duda que esos márgenes fueran enormemente variables.

¹³⁹ Véase para esto Banco Mundial, *Bolivia. Poverty Report*, Washington D.C., 1990.

comerciantes independientes de no haber sido una propuesta radicalmente inviable, dado que el estado carecía por completo de los recursos financieros y técnicos necesarios para llevarlo adelante. Entretanto, los pronunciamientos sindicales sobre la necesidad de fijar «precios justos» para la producción campesina se enfrentaba cotidianamente con la realidad de que un buen precio para el productor campesino significaba una canasta alimenticia cara para el consumidor asalariado urbano, y la política de ingresos empeñada en sostener un nivel de consumo "justo" para los asalariados a base del congelamiento de los precios de los bienes agropecuarios se hubiera traducido, de haber sido efectiva, en el reestablecimiento del viejo "equilibrio desigual" que, dado el declive productivo, hubiera tenido sin duda para los campesinos unas consecuencias aún más duras que en los peores años del "Banzerato". Lamentablemente, el poder obrero había llegado en un muy mal momento para el pueblo de Bolivia.

EL COLAPSO INSTITUCIONAL

Es el hambre que azota a nuestras familias. El hambre que nos va destruyendo cada día y hora. Porque no hay esperanza de solución a los graves problemas que confronta la nación. Porque están vacías nuestras pulperías, porque no tenemos herramientas ni medicamentos, porque se hace imprescindible encontrar soluciones... Por eso nos movilizamos sobre la ciudad de La Paz.

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia

La evolución de la política económica a partir del estrepitoso fracaso de las medidas arrancadas al gobierno por la huelga de hambre de enero de 1984 no puede explicarse ya desde las *razones* de la COB. Resultaría muy difícil, en efecto, defender que después de más de un año de políticas expansivas y tras experimentar las consecuencias perversas del rotundo "éxito" de sus estrategias tradicionales, los dirigentes sindicales continuaban careciendo de razones para emprender un giro hacia la moderación, para ensayar una actitud más cooperativa con los esfuerzos estabilizadores del gobierno. Pero lo que trataré de mostrar en este capítulo es que, fueran cuales fuesen las percepciones de sus liderazgos, la *herencia institucional* del movimiento sindical boliviano hacía imposible en la práctica iniciar con éxito cualquier ajuste estratégico en esa dirección, que era precisamente la que exigían las nuevas condiciones del entorno.

Describo la publicación del paquete estabilizador de abril de 1984 como un momento crítico, una coyuntura de definición en la que el gobierno de Siles Zuazo planteó el primer desafío serio a la *capacidad de estrategia* de la COB tras la larga etapa de declive y estancamiento en la política económica que había seguido al fracaso del primer experimento heterodoxo e inmediatamente después del abrupto naufragio de los acuerdos de enero. A la publicación del nuevo programa de ajuste siguió una explosión del conflicto social que colocó contra las cuerdas a un Comité Ejecutivo de la COB que terminó perdiendo por completo el

control de proceso de negociaciones. Los nulos resultados obtenidos hasta entonces terminaron provocando una profunda crisis de legitimidad que hizo imposible, en vísperas del VI Congreso nacional de la organización, defender el continuismo: resultaba imprescindible proceder a un cambio en las estrategias de conflicto, y ello conllevaría necesariamente una renovación de las direcciones. En este punto, el contexto institucional del sindicalismo boliviano permitirá entender los límites de las discusiones que tuvieron lugar en el transcurso del VI Congreso, y explicar por qué la organización reaccionó frente al reto impuesto por el fracaso de las estrategias que había mantenido hasta entonces profundizando el viejo *radicalismo reivindicativo*.

Finalmente, intentaré mostrar por qué la decisión de emprender una estrategia de confrontación frontal con el gobierno de la UDP arrojó unos resultados radicalmente contrarios a lo deseado, agravando la disolución de la autoridad de la organización central sobre sus sectores afiliados y produciendo un abrupto declive del poder de negociación de los sindicatos frente a las élites políticas del estado. Una pérdida de poder que se pondría crudamente de manifiesto en el "canto del cisne" del sindicalismo revolucionario boliviano: las "jornadas de marzo" de 1985.

EL DERRAPAJE¹

UN SEGUNDO ENSAYO DE ESTABILIZACIÓN

Si todavía quedaba alguna duda sobre la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la oposición parlamentaria para despejar la situación política, la reacción de los principales partidos ante la huelga de hambre de la COB en enero de 1984 terminó de disiparla, al demostrar que estaban dispuestos a utilizar cualquier medio para desestabilizar al gobierno, incluyendo el apoyo sin matices a unas demandas sindicales que atentaban contra el núcleo de los intereses de los sectores empresariales que la respaldaban². Pero inmediatamente después de la violenta ofensiva de los parlamentarios de la ADN y el MNRH -varios de ellos representantes prominentes de la empresa privada- a favor de las demandas "legítimas" de los huelguistas, la patronal ordenó un *lock out* de 48 horas en protesta por las concesiones salariales «desmedidas» y la clara intención la COB y un sector del gobierno de «acabar con la libre empresa boliviana»³. La demagogia obrerista de los parlamentarios y el cierre patronal de los días 6 y 7 de febrero, acompañado de una violenta campaña de prensa contra el «populismo» y la «irresponsabilidad» de los partidos gobernantes, revelaron con claridad meridiana el juego de la derecha. Sus movimientos en las arenas política y social, aparentemente contradictorios, respondían, en efecto, a una estrategia de confrontación global con la izquierda que no dejaba ningún espacio abierto a la concertación.

En este contexto, la única alternativa de que disponía en realidad Siles Zuazo para

¹ La expresión procede de una obra de F. Fouret y D. Richet (*La Révolution française*, París: Fayard, 1973, 9a. ed, cap. X: "Le dérapage de la révolution"). En la edición del trabajo de Dobry (1988) se tradujo literalmente por "derrapaje", término de a mi modo de ver expresa de un modo muy gráfico la imagen de un "momento" de la coyuntura de crisis en el que puede percibirse que los actores centrales pierden aceleradamente el control sobre el curso los acontecimientos.

² El Parlamento aprobó, por ejemplo, una declaración propuesta por un MIR claramente dispuesto a emplear todas las armas a su alcance para promover una recomposición del gobierno favorable a sus intereses, que expresaba el «pleno respaldo» de los miembros del Congreso y el Senado «a las justas reivindicaciones planteadas por la Central Obrera Boliviana al Poder Ejecutivo, manifestando al mismo tiempo su protesta por «la poca responsabilidad y seriedad con la que el gobierno considera los problemas de los trabajadores del país y del pueblo». El texto está recogido en *Ultima Hora*, 24 de enero de 1984.

³ Fernando Illanes, Presidente de la CEPB, en *Presencia*, 3 de febrero, 1984.

ampliar los apoyos partidarios de su gobierno era recomponer la coalición original, y tras un largo y complejo proceso de negociaciones que tuvo lugar en marzo y los primeros días de abril de 1984 logró en efecto que el MIR retornara al gabinete. El MIR aceptó entonces respaldar un programa económico que había sido diseñado en los meses previos por el ex-ministro "independiente" Flavio Machicado tras recibir un encargo personal del Presidente y que comprendía *una batería completa de medidas de estabilización muy próximas a la ortodoxia*, expresando en un conjunto coherente las interpretaciones de la situación que habían terminado imponiéndose a los actores gubernamentales a medida que avanzaba la crisis. El PCB y los sectores más populistas del MNRI avalaron sin reticencias el programa, dado que *las experiencias del último año habían terminado otorgando una enorme credibilidad a quienes propugnaban la necesidad de emprender un giro radical en dirección a la ortodoxia*; y el MIR, pese a sus protestas verbales contra la intervención de tecnócratas independientes en el diseño de la política económica, *no disponía*, al igual que el conjunto de la izquierda, *de una propuesta alternativa*⁴.

Pero la principal baza política del gobierno en la nueva coyuntura no era desde luego la reconstrucción de la coalición original, sino *la conciencia generalizada de la profundidad que había adquirido la crisis*. Mientras cerraba las negociaciones con el MIR, Siles Zuazo había intentado, en efecto, con unas declaraciones deliberadamente cargadas de dramatismo, convencer a los bolivianos de que se enfrentaban a una situación de «emergencia», de que se estaban agotando ya las oportunidades para «retomar las riendas de la situación económica» y revertir «la merma de las capacidades del Estado», corrigiendo la política «anárquica» que sus gabinetes se habían visto obligados a seguir hasta entonces. Si el estado no lograba recuperar en ese momento «todos sus atributos y prerrogativas, superando el encasillamiento feudal que se ha creado en cada una de sus instituciones» para imponer los cambios necesarios en las políticas salarial y fiscal, el país se precipitaría en una situación hiperinflacionaria que beneficiaría tan sólo a unos pocos especuladores a costa de las grandes mayorías y de la quiebra de «los cimientos de nuestra democracia»⁵.

Las declaraciones del Presidente anunciaron las líneas maestras del nuevo plan de

⁴ Las tesis defendidas por el MIR durante las negociaciones para su reingreso en el gobierno no pasaron de ser planteamientos abstractos sobre objetivos generales de la política económica. Véase si no la carta del Comité Ejecutivo del MIR al Presidente de la República reproducida en *Hoy*, 5 de abril, 1984.

⁵ Mensaje presidencial a la nación. *Hoy*, 7 de abril, 1984.

estabilización, publicado finalmente el 12 de abril de 1984, que constituiría a la postre el paquete de mayor alcance de cuantos se ensayaron durante el mandato de Siles Zuazo tras el fracaso del programa inicial de estabilización expansiva. El paquete comprendía, en primer lugar, un conjunto coherente de medidas de austeridad fiscal y liberalización fuertemente apegado a la ortodoxia: una devaluación de la moneda en un 75% , abultados incrementos, entre un 400 y un 500 por ciento, en los precios y tarifas oficiales, y una liberalización total de los precios de los productos agrícolas. El objetivo de estas medidas era frenar el creciente déficit de las principales empresas del estado⁶ y reducir el contrabando de bienes, que había alcanzado proporciones gigantescas. Paralelamente, se otorgó un reajuste salarial muy modesto, a través de "bonos" de compensación que sólo paliaron en parte el efecto inmediato de los aumentos en los precios subvencionados y, ante todo, se intentó establecer un mayor control sobre los incrementos salariales futuros introduciendo *un cambio fundamental en la reglamentación de la escala móvil*, que en adelante debería aplicarse en plazos fijos de cuatro meses y no cada vez que el aumento del IPC superase el 40%. El segundo pilar del programa fue el diseño de una reforma administrativa dirigida a reforzar la capacidad de las autoridades en el manejo del sistema económico, mediante la creación de una Junta Monetaria que debería en adelante normar y ejecutar la política monetaria, cambiaria y financiera. Se pretendía con ello superar los problemas derivados de la descoordinación de las instituciones del estado encargadas de aplicar la política económica, reduciendo el «encasillamiento feudal» a que había hecho mención el discurso del Presidente.

La primera reacción de la COB tras conocer el contenido de las medidas de ajuste fue declarar una huelga general de 24 horas, pero el Ampliado nacional de dirigentes sindicales celebrado el 15 de abril decidió suspender la convocatoria y aceptar la invitación gubernamental para iniciar una ronda de conversaciones «sin medidas de presión». La COB, como era esperable, declaró que el marco de la discusión no sería el programa económico gubernamental, rechazado «en toda su magnitud», y que sus representantes se limitarían en cambio

⁶ Debido a la escalada inflacionaria y a la evolución del mercado paralelo del dólar, los precios de los bienes y servicios que producían las empresas estatales del petróleo y derivados (YPFB), de ferrocarriles (ENFE) y de electricidad (ENDE), representaban en la práctica cantidades irrisorias. Dado que las empresas públicas solventaban los crecientes déficits que les provocaba esta situación acudiendo al crédito fiscal, eran una fuente continua de presiones inflacionarias. En cuanto a la devaluación de la moneda, ya he comentado el efecto que estaba teniendo sobre las cuentas de COMIBOL el mantenimiento de un peso oficial enormemente sobrevaluado.

a «discutir con el gobierno sobre el Plan Económico de Emergencia»⁷, con lo que planteaba de nuevo de un modo explícito el conflicto entre dos convenciones democráticas opuestas. Los sindicatos recusaban los títulos del gobierno y la legitimidad democrática de sus decisiones, negándose «por principio» a discutirlos⁸, mientras aquél insistía en el aval legal-racional de sus acciones, en las prerrogativas constitucionales exclusivas del Presidente electo⁹. Era indudable que la COB *pretendía delimitar de antemano el rango de los resultados posibles del proceso de negociaciones imponiendo el marco más favorable a sus intereses*, y en esta situación no debería extrañar que el diálogo inicial estuviera surcado de malentendidos y declaraciones contradictorias. Así, mientras Ernesto Aranibar, el nuevo ministro de Planeamiento, se declaraba satisfecho con el rumbo de las conversaciones, asegurando que las coincidencias del gobierno con los sindicatos eran «muy grandes» y que había «grandes acuerdos» en los «objetivos económicos globales»¹⁰, la COB denunciaba la inconsistencia y el doble lenguaje del gobierno, que a la vez declaraba en público que los lineamientos centrales de su paquete económico no podían discutirse y aseguraba en las reuniones estar dispuesto a considerar el Plan de Emergencia de los trabajadores, «que es precisamente un cuestionamiento del plan económico gubernamental»¹¹.

Pero la sucesión de afirmaciones contradictorias y la «falta de seriedad» que atribuía el secretario ejecutivo de la COB a los representantes gubernamentales¹², se debía a que los ministros del área económica estaban concentrando por primera vez su discurso en *diferenciar explícitamente las alternativas de que disponían los actores del movimiento obrero en el corto y el medio plazo*. A lo largo de todo el proceso de negociaciones, en efecto, el gobierno pretendió encauzar la discusión hacia los planteamientos estratégicos, de largo alcance, en los que existía una coincidencia absoluta entre los intereses de los trabajadores y los objetivos políticos de la UDP, insistiendo en que «si hay acuerdos en torno a las metas

⁷ *Hoy*, 16 de abril, 1984.

⁸ *Ultima Hora*, 17 de abril, 1984.

⁹ *Hoy*, 17 de abril, 1984; *Presencia*, 18/19 de abril, 1984

¹⁰ *Presencia*, 18 de abril, 1984.

¹¹ Declaraciones de Juan Lechín, en *Hoy*, 19 de abril, 1984.

¹² Declaraciones de Juan Lechín, en *Presencia*, 20 de abril, 1984.

globales, debería haber capacidad de ponerse de acuerdo sobre los instrumentos que operativicen esos objetivos»¹³. Las medidas de ajuste que habían elaborado, afirmaron una y otra vez, eran sencillamente la única alternativa para estabilizar la economía en el corto plazo, y no reflejaban cambio alguno en sus objetivos estratégicos. El hecho de que los sindicatos no lo hubieran comprendido así sólo podía deberse a su «falta de información»: ¿Acaso no era indispensable hacer todo lo posible para detener la caída libre de la economía boliviana?; ¿acaso no era necesario que los actores "populares" alcanzaran finalmente un acuerdo para la estabilización, sabiendo que «si fracasa el gobierno, también fracasará el sindicalismo»?¹⁴.

Desde luego, el gobierno no podía apelar a la memoria histórica de los sindicatos para avalar su discurso sobre la identidad de intereses en el medio plazo. Ya he anotado arriba que por un lado la experiencia acumulada por los trabajadores bolivianos no había registrado ningún momento de colaboración fructífera con la izquierda reformista, mientras mantenía por el contrario muy presente la "traición" de las élites del MNR y el papel de Siles Zuazo en la ofensiva anti-sindical que siguió al Plan de Estabilización de 1956; que, por otro, la historia de las luchas sociales en Bolivia no ofrecía razones para imaginar que el poder futuro de la COB pudiera depender en algún sentido significativo de la suerte de una izquierda política que había sido siempre muy débil, de modo que los sindicatos difícilmente percibirían como propios los problemas de los partidos de la izquierda en el gobierno. Sin embargo, *los dirigentes nacionales de la COB tenían ya en abril de 1984 suficientes motivos para preocuparse por las consecuencias de la persistente espiral inflacionaria sobre el poder de su organización, y, por lo tanto, para tomarse realmente en serio la necesidad de estabilizar la economía.*

En primer lugar, el salto inflacionario de finales de 1983 y los efectos perversos de los acuerdos sobre precios y abastecimientos alcanzados tras la huelga de hambre de enero habían beneficiado claramente a otras *organizaciones de la sociedad civil que rivalizaban con los sindicatos* en la representación y canalización de las demandas populares: las Juntas Vecinales y los Comités Cívicos. A medida que la situación económica se deterioraba, las **Juntas Vecinales**, dirigidas mayoritariamente en La Paz por militantes de los principales partidos de la derecha (Jetté, 1989: 223), fueron reemplazando su discurso reivindicativo

¹³ Ernesto Aranibar, ministro de Planeamiento, en *Presencia*, 18 de abril, 1984.

¹⁴ Jaime Paz Zamora, en *Presencia*, 8 de abril, 1984.

desde los intereses de base territorial hacia las demandas de los pobladores urbanos en tanto que consumidores (Laserna, 1992: 134), y fueron ampliando así paulatinamente su capacidad de convocatoria hasta encabezar en febrero y marzo de 1984 un amplio movimiento de protesta cívica con una sucesión de huelgas de hambre y bloqueos de calles que obtuvo un importante respaldo en los barrios populares. De este modo, las Juntas de La Paz y Cochabamba, pese a las constantes divisiones internas derivadas de la diversidad de sus bases y su bajísimo nivel de institucionalización¹⁵, estaban convirtiéndose en una instancia de representación crecientemente importante para el amplio sector de pobladores urbanos que sufría los efectos del aumento exponencial de los precios y el desabastecimiento de los mercados, mientras no se beneficiaba de los aumentos salariales ni tenía acceso a pulperías empresariales subvencionadas. Desafiaban así la credibilidad del discurso universalizante de la COB y amenazaban directamente a su recurso principal en la arena política¹⁶.

Pero la multiplicación de las actividades de los **Comités Cívicos** en los principales departamentos del país representaba seguramente un peligro aún más importante para el poder de la COB que la acción de las juntas vecinales. El desarrollo secular del regionalismo boliviano¹⁷, que planteaba un profundo desafío a la vocación unitaria y centralizadora de la COB, había sido mantenido con éxito fuera de los límites del "movimiento popular" mientras el papel hegemónico desempeñado por segmentos de la oligarquía local en la dirección de los Comités Cívicos y la función legitimadora del poder político que cumplieron éstos en la práctica durante el período autoritario contribuyeron a dotar de una gran credibilidad al discurso descalificatorio de la izquierda obrera (Laserna, 1985: 211-212; Calderón y Laserna, 1983). Sin embargo, la destacada participación de los Comités en la lucha contra la dictadura de García Meza les devolvió una cierta legitimidad democrática,

¹⁵ Estos problemas fueron mucho más importantes en La Paz que en Cochabamba. En la ciudad del Valle las Juntas Vecinales se beneficiaron de la presencia de la sede de la Conferación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE), manejaron un mayor volumen de recursos y demostraron tener una notable capacidad de convocatoria. En la capital, las Juntas optaron por realizar acciones de protesta que no requerían de una participación masiva. En concreto, los bloqueos de calles, que resultan enormemente eficaces en una ciudad con tantas dificultades de comunicación interna como La Paz, terminaron siendo el elemento estrella de su repertorio.

¹⁶ La CONALJUVE reconocía a la COB como la instancia máxima de representación de los sectores populares, pero la central sindical manifestó siempre una clara desconfianza hacia las juntas, a las que percibía con buenas razones como competidor en la representación y articulación de un mismo conjunto de intereses y un elemento disolutor de la unidad y coherencia del movimiento popular.

¹⁷ Sobre el desarrollo del regionalismo boliviano deben consultarse la monografía de Roca (1980) y los trabajos compilados en Calderón y Laserna (1983).

y las organizaciones regionalistas aprovecharon la coyuntura para incorporar a su discurso nuevos temas vinculados con las demandas más inmediatas de los sectores populares urbanos -desabastecimiento, precios-, que fueron enarbolando con una mayor eficacia a medida que se sucedían los fracasos de las soluciones propuestas por los actores centrales. Las élites locales, por lo tanto, estaban ampliando también su influencia al amparo de la situación de crisis y *compitiendo exitosamente con la COB en la representación de las demandas de sectores cada vez más amplios de la población popular* en los departamentos, como atestiguaba el creciente impacto de sus "paros cívicos" en Cochabamba o Santa Cruz.

En segundo lugar, el desarrollo de la espiral inflacionaria había comenzado a provocar importantes problemas de *gobierno interno* a la central sindical, erosionando su capacidad para dirigir las movilizaciones y controlar las acciones de segmentos crecientes de sus clientelas. La puja intersectorial desatada tras el aumento general de salarios de noviembre de 1983 se había desarrollado ya en gran medida al margen de las instrucciones de un Comité Ejecutivo claramente preocupado por el «debilitamiento» que provocó en su posición negociadora frente al gobierno, pero fue con la espiral reivindicativa que siguió a los acuerdos de enero cuando se hizo evidente hasta qué punto la prolongación de la crisis inflacionaria estaba amenazando con disolver la representatividad y el poder de negociación de la COB. Las más de 80 huelgas registradas en los meses de febrero y marzo de 1984 certificaron que los "éxitos" que obtenía la organización en la arena central de las negociaciones, arrancando al gobierno aumentos generales en los salarios y una multitud de compromisos sobre inversiones sectoriales, tenderían tan sólo a multiplicar la intensidad de los conflictos, dados sus efectos inflacionarios y la ausencia de recursos para atender simultáneamente a las demandas de todos. Los efectos perversos de las políticas expansivas, en efecto, estaban dinamitando la autoridad de la organización sindical y empujando al movimiento popular hacia una *situación hobbesiana* en la que la competencia entre los grupos por defender sus intereses particulares amenazaban con tornarse cada vez más violentos.

A mediados de febrero, los trabajadores de plantilla de COMIBOL y los mineros cooperativistas, que subsistían vendiendo a la empresa pública cogestionada la producción de socavones marginales, se enfrentaron a tiros en los alrededores de Huanuni, con un saldo de más de 10 heridos¹⁸. El problema era, desde luego, que por mucho que el sindicato de

¹⁸ *El Mundo*, 16 de febrero, 1984.

Catavi exigiera al gobierno «un trato igualitario tanto a COMIBOL como a los cooperativistas»¹⁹, las presiones para mantener el abastecimiento de las pulperías²⁰ y el subsidio a la producción de las grandes minas deficitarias, agotaban en la práctica los recursos de la empresa pública, marginando los intereses de la parte más débil; y los cooperativistas, que veían cómo COMIBOL acumulaba cada vez mayores retrasos en sus pagos, sólo podían recurrir a la violencia para obtener la atención de la FSTMB y el gobierno. El enfrentamiento armado entre los cooperativistas y los mineros de COMIBOL fue sin duda un caso extremo de competencia intersectorial, pero la gran mayoría de las huelgas salariales de febrero y marzo de 1984 no fueron sino una manifestación menos virulenta de la misma dinámica. Dado que los aumentos generales en los salarios negociados por la COB resultaban incapaces de revertir la caída del consumo global, los grupos privilegiados concentraban crecientemente sus luchas en mantener y ampliar en lo posible sus categorías y bonificaciones y los menos favorecidos en conseguir la «homologación» de sus ingresos con los primeros, mientras todos pugnaban por obtener la cancelación de sus haberes antes que los demás²¹. El resultado de esta dinámica era el *desarrollo progresivo de grandes diferencias arbitrarias*²² entre los salarios reales de los trabajadores, que sólo podían multiplicar los agravios comparativos y alimentar la competencia intersectorial.

En este contexto parece difícil explicar la fijación exclusiva del discurso del Comité Ejecutivo de la COB en las consecuencias inmediatas de las medidas de ajuste sobre los ingresos de los trabajadores²³ -su rechazo «por principio» a enmarcar las negociaciones en

¹⁹ Hoy, 17 de febrero, 1984.

²⁰ El 14 de febrero los trabajadores de COMIBOL en el Consejo Central Sud habían iniciado una huelga general indefinida en protesta por el desabastecimiento de sus pulperías. MTDL, Oficina Sectorial de Estadística, Formulario estadístico de registro de paros y huelgas, febrero 1984.

²¹ Al menos 15 de las 40 huelgas de febrero de 1984 estuvieron motivadas por demandas de «homologación» o por la defensa de privilegios particulares, y 17 de las 44 huelgas registradas por el Ministerio de Trabajo en el mes siguiente exigían la cancelación inmediata de haberes devengados. MTDL, Oficina Sectorial de Estadística, Formulario estadístico de registro de paros y huelgas, febrero y marzo de 1984.

²² A medida que las organizaciones centrales perdían el control sobre la dinámica del conflicto social, la mayor capacidad de presión, beligerancia o simplemente suerte de unos grupos frente a otros comenzó a traducirse, por ejemplo, en el hecho que los sueldos en algunos organismos *públicos* duplicaran con creces a los que se cobraban en otros para funciones similares. *Presencia*, 18 de febrero, 1984.

²³ «No es la falta de información lo que impide, como cree el gobierno, que el pueblo comprenda y acepte el paquete. Los trabajadores no necesitan de la información oficial para saber a quién favorece y a quién perjudica el paquete. Les basta saber lo que pasa diariamente en sus hogares para rechazar la política del gobierno». Declaración

la perspectiva estratégica propuesta por el gobierno- invocando a una supuesta falta de interés en poner coto al proceso inflacionario. Por el contrario, tras el fracaso de las medidas de enero existía una tensión manifiesta entre los pagos percibidos por la dirección sindical nacional y las reivindicaciones de sus bases que se había reflejado ya, como vimos, en el documento colegiado que reclamaba la formulación de una política económica «realista». Parece indudable que los liderazgos de la COB percibían ya la progresión de la espiral inflacionaria como un problema prioritario en los primeros meses de 1984, que *tenía ya sus propias y poderosas razones para desear establecer un compromiso entre las demandas "legítimas" de sus representados y las exigencias del ajuste económico*. La profundización de la crisis había terminado alterando los mapas cognoscitivos del actor central del movimiento obrero, atenuando así la soledad inicial de la débil UDP.

En estas condiciones, y aunque los términos del programa gubernamental eran probablemente inaceptables para la COB, la organización obrera parecía dispuesta a *negociar un compromiso* desde la posición de fuerza que le otorgaban la convención democrática "popular" y las expectativas de sus representados. Esto es, al menos, lo que parece indicar su esfuerzo por contener la vieja reacción mecánica tras la publicación del paquete, anulando la convocatoria de la huelga general y aceptando iniciar una ronda de conversaciones libre de medidas de presión. Finalmente, la política "realista" que habían reclamado los dirigentes sindicales dos meses antes estaba a mediados de abril de 1984 sobre la mesa de negociaciones, y *ello planteaba el primer desafío directo a la capacidad de estrategia de la COB tras más de un año de ensayos fallidos y estancamiento en la política económica*:

«Este marco de solución propuesto, como todo hecho humano, es perfectible, pero mucho más que todo debe ser permanentemente evaluado y corregido, lo que equivale a decir que sería ingenuo y poco serio considerar que lo que se ha planteado tiene un carácter definitivo y que por sí solo va a resolver los graves problemas que agobian al pueblo y a la economía del país. El gobierno ha cumplido con su responsabilidad. Ahora es cuando todas las fuerzas sociales deben poner su cuota parte en una acción común y siempre pensando en el destino de la Patria»²⁴

Se trataba ahora, al parecer, de fijar las condiciones de la política económica "realista", de concertar y hacer cumplir las cláusulas de un compromiso capaz de poner freno

del Comité Ejecutivo de la COB, en *Presencia*, 16 de mayo, 1984.

²⁴ Carta del gabinete económico al Comité Ejecutivo de la COB, en *Presencia*, 14 de abril, 1985.

al deterioro. Pero en cualquier caso *no podía ignorarse que la organización obrera se encontraba ante una coyuntura crítica, que había llegado el momento de tomar decisiones que marcarían de un modo profundo e irreversible el curso futuro de los acontecimientos*. El Secretario Ejecutivo de la COB fue el encargado de anunciar el advenimiento de la encrucijada, describiendo las alternativas en el único modo en que podían entenderlas tanto las bases del movimiento como, seguramente, él mismo:

«El movimiento obrero boliviano se encuentra ante una grave encrucijada porque, por un lado, queremos defender el proceso democrático conquistado por los trabajadores y el pueblo boliviano y, por otro, tenemos que protestar con todos nuestros pulmones contra las medidas hambreadoras, contra el paquete económico del gobierno»²⁵

LA EXPLOSIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL

El problema, sin embargo, es que resulta imposible saber hoy cuál hubiera sido la estrategia negociadora de la COB en la nueva coyuntura, porque el Comité Ejecutivo de la organización obrera fue desbordado muy pronto por las acciones independientes de los sectores y perdió por completo el control sobre la dinámica del conflicto social. Podría argumentarse que la dirección nacional utilizó inicialmente la «desesperación popular» y la amenaza latente de una movilización «autónoma» e «incontrolable» de los trabajadores²⁶ como un *recurso táctico* para presionar al gobierno y obtener mejores términos en la arena central de las negociaciones. Pero los dirigentes sindicales no redujeron *voluntariamente* su control sobre las acciones de las bases y sus sindicatos afiliados con fines tácticos. Por el contrario, la indiscutible credibilidad de sus amenazas, que ciertamente incrementó su poder de negociación frente al gobierno, apuntaba a una quiebra latente de la autoridad de la organización central que eliminaría por completo su *capacidad de estrategia*, atándola a adoptar decisiones ciegas, *que sabía irracionales a la luz de su nueva información sobre los datos del entorno*.

²⁵ Intervención de Juan Lechín ante los delegados del XX Congreso Nacional de la FSTMB, en la mina Matilde. Recogida en *Presencia*, 26 de abril, 1984.

²⁶ Hoy, 20 de abril, 1984; *Presencia*, 22 de abril, 1984; *Presencia*, 24 de abril, 1984.

Cuando el 25 de abril se inauguró en la Casa Social del Maestro de La Paz el segundo Ampliado Nacional sindical desde la publicación de las medidas de ajuste, los problemas a tratar tenían una magnitud sin precedentes. Dos días antes, la Federación Sindical de Trabajadores Fabriles había iniciado una huelga general indefinida, y si la dirección de la COB aseguró que aquéllo no significaba que hubieran «rebasado» su autoridad y que se someterían sin duda a las resoluciones del Ampliado²⁷, los líderes del sector contestaron de inmediato que mantendrían su huelga aún el caso de que la conferencia nacional decidiera continuar negociando con el gobierno y «descartar paros y huelgas»²⁸. Las presiones para que los dirigentes nacionales «se definieran» y dejaran de «frenar las aspiraciones de los trabajadores», convocando de una vez la huelga general indefinida, eran desde luego muy intensas; se comentaba que existía un peligro inminente de fractura del movimiento obrero, y proliferaban las amenazas de acciones unilaterales y los augurios de un «rechazo» masivo de las bases «a sus organismos sindicales»²⁹. El problema no estaba desde luego en la actividad de los cuadros de los grupúsculos de ultra-izquierda: por el contrario, la renovada presencia de su discurso agresivo³⁰ era tan sólo *el síntoma más evidente de la crisis institucional que atenazaba al movimiento obrero*.

Las decisiones del Comité Ejecutivo de la COB estaban cogeladas ante la imposibilidad de encontrar una salida que resultara a la vez capaz de contener el deterioro de la situación económica y justificable ante las bases; las conversaciones con el gobierno habían entrado en una vía muerta, y a medida que pasaban los días y se acumulaban las voces de protesta y las acciones autónomas de cada vez más grupos de trabajadores, se iba estrechando el margen de maniobra de los liderazgos nacionales. En este contexto, las discusiones del XX Congreso Minero (20-27 de abril), de cuyas resoluciones dependía la decisión del Ampliado, reflejaron con claridad meridiana las dimensiones de la *parálisis* sindical.

²⁷ *Presencia*, 25 de abril, 1984.

²⁸ *Presencia*, 26 de abril, 1984.

²⁹ Los ejemplos de estas actitudes y amenazas abundan en la prensa en los días previos al inicio de las sesiones del Ampliado Nacional del 25 de abril. Las expresiones entrecomilladas están tomadas de *Presencia*, 18 de abril, 1984, y *Hoy*, 19 de abril, 1984.

³⁰ Las afirmaciones del estilo de «el oficialismo pretende, a través de sus agentes incrustados en el seno del movimiento obrero, obligar a los explotados del país a soportar el paquete hambreador del gobierno» (*Presencia*, 26 de abril, 1984), proliferaron en todos los foros durante aquéllos días.

No hubo allí debate alguno sobre las alternativas de la política económica. Por el contrario, las deliberaciones del Congreso, sometidas a partir de su tercer día a la fuerte presión impuesta por la huelga indefinida que habían declarado de un modo unilateral los sindicatos fabriles, se concentraron casi exclusivamente en discutir la conveniencia de que los mineros dictaran o no la misma medida, arrastrando con ellos a la COB. El debilitamiento del PCB en funciones de gobierno amplió las opciones de los partidos de ultra-izquierda, que agrupados en un «bloque revolucionario» intentaron por todos los medios que los delegados se pronunciasen a favor de la huelga indefinida. Los militantes comunistas obtuvieron una severa derrota en las discusiones, mientras Lechín, tras describir su dramática «encrucijada», se mantenía en un cómodo e inquietante mutismo, y la moderación sólo pudo imponerse gracias a las intervenciones de un orador independiente, miembro destacado de la Ejecutiva nacional de la COB, que con un brillante discurso sobre la prioridad de la defensa de la coyuntura democrática frente a la amenaza «fascista» logró volcar la opinión de los indecisos en contra de los planteamientos más radicales³¹. Finalmente, el XX Congreso Minero decidió tan sólo proponer a la COB la convocatoria de una «huelga controlada», de 72 horas, que debía iniciarse el 30 de abril. Sus largas jornadas de acalorado debate "político" habían arrojado desde luego un resultado inmensamente pobre.

Nadie había mencionado la necesaria moderación de las demandas, y en aquellas condiciones resultaba imposible que la «huelga controlada» ordenada por la COB resultara capaz de cerrar el conflicto y contener su creciente sectorialización. Así, aunque el gobierno relajó de inmediato su posición negociadora tras conocer las decisiones del Congreso, ofreciendo un aumento salarial del 100%³², los mayores sindicatos mineros -Siglo XX, Catavi, Huanuni, Colquiri, San José, Matilde, Santa Fe, Viloco, Bolívar-, la Federación de

³¹ La Comisión Política del Congreso, compuesta por 9 miembros, tiene la facultad de elegir dos de entre todos los proyectos de "tesis política" para su votación en la Plenaria. En el XX Congreso, la Comisión escogió "por mayoría" la tesis de los partidos del "bloque revolucionario" y "por minoría" la del PCB: de una de ellas debía salir, tras la votación en la Plenaria, la Declaración Política del Congreso y por extensión la plataforma para la acción inmediata de la FSTMB. La tesis del PCB tenía todo en contra, y el proyecto de la ultraizquierda conllevaba la declaración de una huelga general indefinida. Sin embargo, Filemón Escóbar logró hacer prevalecer sus planteamientos en las discusiones de la Comisión Política, forzando ya el 25 de abril una definición contraria a la convocatoria de la huelga, y consiguió dos días después imponer en la Plenaria las líneas de la Declaración Política del Congreso, derrotando a los defensores de las dos tesis seleccionadas. Puede encontrarse un relato detallado de estos acontecimientos en *Aquí*, 136, 12-18 de mayo, 1984.

³² No sin advertir, por supuesto, que «los cambios que se introducirán en la política económica, como el nuevo aumento de salarios, pueden implicar distorsiones mayores en la economía». Declaraciones del ministro de Industria, en *Presencia*, 4 de mayo, 1984.

Fabriles y los trabajadores del estado decidieron continuar en huelga, decretando paros indefinidos o manteniendo los que estaban en curso al margen de las directrices de la COB. La inflación de las demandas estaba eliminando por completo la autonomía negociadora del Comité Ejecutivo, que no pudo plantearse siquiera la posibilidad de aceptar el aumento propuesto por el gobierno, y decidió en cambio multiplicarlo por cuatro, exigiendo ¡un 400%! En ese momento Juan Lechín presentó su renuncia al cargo que había desempeñado desde la fundación de la COB en protesta por las constantes manifestaciones de «indisciplina sindical, atentatorias a la unidad de los trabajadores»³³, que estaban poniendo además en serio peligro el futuro del movimiento obrero:

«la experiencia de tantos años de lucha me ha enseñado que ningún combate debe ser irreflexivo y decidido por la desesperación. Antes de lanzarse a la lucha es imprescindible meditar seria y responsablemente sobre las posibilidades de victoria y ajustar a ellas las tácticas correspondientes»³⁴

Desde luego, no todos los conflictos sectoriales atentaban en la misma medida contra la unidad de acción del movimiento, y alguno incluso resultaba en apariencia funcional para los objetivos de la COB. Era el caso de las acciones que inició el sindicato del Banco Central a partir del 13 de abril, que terminarían manteniendo paralizado al ente emisor durante un mes y medio, bloqueando por completo al sistema financiero nacional, imponiendo una fuerte contracción del comercio exterior y de los ingresos fiscales, y ejerciendo así una presión formidable sobre el gobierno. Su reivindicación principal, la supresión de la Junta Monetaria, era también el objetivo político más importante del Comité Ejecutivo de la COB en la coyuntura, y si el sindicato del Banco Central pretendía, amparado por un discurso izquierdista radical, bloquear las reformas programadas por el gobierno para conservar sus privilegios corporativos, básicamente su control de la política de ascensos y el reparto prebendas en la institución³⁵, la COB tenía un enorme interés en evitar que la consolidación

³³ *Presencia*, 8 de mayo, 1984.

³⁴ Carta de Juan Lechín al Comité Ejecutivo de la COB, 5 de mayo, 1984. AC, s/n.

³⁵ El sindicato del Banco Central había llegado a tener un fuerte control sobre las decisiones de sus directivos, lo que imponía serios límites al control que en teoría debía ejercer el gobierno sobre la política del ente emisor. Esto, por supuesto, se traducía en ventajas materiales para los empleados, como el importante aumento salarial que arrancaron a los gerentes del Banco tras las medidas económicas de marzo de 1983. El aumento, que contradecía la política salarial diseñada por el ministerio de Finanzas y situaba a los empleados del Banco Central en una situación de claro privilegio frente al resto de los asalariados, fue obtenido tras unas negociaciones realizadas a espal-

de la Junta Monetaria redujera en el futuro su influencia sobre la definición de la política económica. Esta coincidencia táctica relegó a un segundo plano las preocupaciones acerca del impacto negativo de la largísima huelga y las acciones "salvajes" de los empleados del Banco Central tanto sobre los intereses de amplios colectivos de trabajadores como sobre la valoración social del sindicalismo³⁶, y se tradujo en un apoyo explícito del Comité Ejecutivo de la COB a todas las decisiones de los bancarios³⁷.

Pero no ocurría lo mismo con las acciones unilaterales que emprendieron el resto de los gremios, y los continuos llamamientos de la dirección nacional pidiendo «la suspensión de todas las huelgas y paros» y el acatamiento de «las instrucciones del máximo organismo sindical del país, con el fin de alcanzar el éxito que buscan los trabajadores»³⁸ no surtieron efecto alguno. Así, mientras el Comité Ejecutivo diseñaba el 11 de mayo un cronograma ordenado de movilizaciones para todos los sectores, que excluía los paros de labores y preveía una huelga nacional de hambre como último recurso en las negociaciones con el gobierno, los trabajadores del estado, maestros, petroleros, fabriles, y la práctica totalidad de los sindicatos mineros, continuaron acelerando una escalada reivindicativa que puso progresivamente en juego todo el repertorio de acciones colectivas acumulado por el movimiento sindical -*bloqueos de calles, marchas violentas, ocupación de oficinas y empresas, sabotajes, huelgas de hambre*-, desautorizando a diario a la cúpula de la COB.

das del Presidente de la institución, un cargo político nombrado por el ministro. Cuando éste intentó tomar medidas para revertir el aumento, los empleados iniciaron una huelga de hambre para defender su ventaja relativa, amparándose también en un discurso izquierdista que se oponía a la reanudación los pagos a los acreedores extranjeros. La huelga terminó con una intervención del ministro del Interior que dio la razón al sindicato y desautorizó en la práctica al Ministro de Finanzas. Véase para este episodio, Christian Jetté, *De la toma...*, cit., pp. 191-192.

³⁶ Los empleados públicos, por ejemplo, desencadenaron progresivamente huelgas para exigir el pago de sus sueldos, que el gobierno no podía desembolsar mientras el Banco Central permaneciera paralizado. Más preocupante para el Ejecutivo de la COB, sin embargo, era el hecho de que la prolongada huelga bancaria agravó enormemente los problemas de abastecimiento de alimentos y material de trabajo que enfrentaban los mineros, ya que, como denunció entonces un dirigente de la FSTMB, impedía a la COMIBOL contar con los fondos necesarios para cubrir sus obligaciones con los trabajadores, haciendo que la situación del sector fuera «cada día más difícil». *Hoy*, 8 de mayo, 1984.

³⁷ El 4 de mayo, en unos momentos en que toda la prensa nacional repudiaba a diario el comportamiento de los empleados del Banco Central y algunas instituciones cívicas declaraban a los bancarios «enemigos públicos», el Comité Ejecutivo de la COB entregó un documento a varios periódicos que fijaba su posición en los siguientes términos: «...los trabajadores del Banco Central de Bolivia, en actitud patriótica de defensa de los intereses nacionales y populares, se encuentran sosteniendo una huelga que *constituye la respuesta más eficaz* a las intenciones del actual gobierno de agravar la miseria del pueblo boliviano y afianzar la dependencia del país a los intereses del imperialismo y de los sectores explotadores de nuestra economía». *Presencia*, 4 de mayo, 1984. (La cursiva es mía)

³⁸ *Hoy*, 12 de mayo, 1984

En el origen de varios conflictos estuvieron los agravios directos derivados de la paralización del Banco Central: es el caso de las huelgas generales indefinidas del magisterio y de los trabajadores del estado, o de los bloqueos de calles de los cooperativistas mineros, que reclamaban el pago de sueldos devengados y deudas que ni el gobierno ni el directorio obrero de COMIBOL podrían liquidar mientras el ente emisor no reanudara sus actividades. En otros se trataba de agravios comparativos, como las huelgas, marchas y bloqueos de los empleados públicos, que se consideraban con razón marginados frente a los trabajadores productivos. Alguno fue promovido sin duda por activistas políticos o líderes locales ajenos al movimiento sindical, como los bloqueos de carreteras que llevaron a cabo grupos de campesinos en la región de los Yungas, los valles tropicales próximos a La Paz que desempeñan un papel clave en su abastecimiento de productos alimenticios³⁹. Finalmente, un cuarto grupo de conflictos, que el Comité Ejecutivo de la organización matriz calificó entonces de «divisionistas»⁴⁰, perseguía claramente la obtención de ventajas sectoriales al margen de los aumentos generales que pudiera negociar la COB en el nivel central. Así, mientras ésta adelantaba la demanda del 400% de aumento salarial general y diseñaba su cronograma de movilizaciones, los fabriles decidieron desconvocar su huelga indefinida, ampliada desde el 2 de mayo con una huelga de hambre⁴¹, tras arrancar al gobierno un conjunto de beneficios particulares que añadieron a su complejo sistema de "bonos" y porcentajes, no sin expresar de inmediato que continuaban repudiando la política económica del gobierno y que actuarían en adelante con el máximo «respeto y disciplina»⁴². Los petroleros, por su parte, iniciaron una huelga de hambre el 10 de mayo y consiguieron arrancar a la gerencia de YPFb un convenio leonino, que multiplicaba su posición de privilegio relativo frente al conjunto de los trabajadores bolivianos, y rompieron fácilmente la resistencia ulterior del gobierno declarando una huelga indefinida que incluyó el cierre

³⁹ Según fuentes sindicales, los organizadores de aquéllos bloqueos acompañados de «actos vandálicos como robos y amenazas», fueron «ex coordinadores campesinos que han servido a pasadas dictaduras». *Presencia*, 15 de mayo, 1985.

⁴⁰ Declaraciones de Juan Lechín, en *Ultima Hora*, 15 de mayo de 1984.

⁴¹ Una decisión que fue calificada por el Comité Ejecutivo de la central sindical de «franca indisciplina que daña enormemente la fortaleza de la COB». *Hoy*, 5 de mayo, 1984.

⁴² Pronunciamiento del Comité Ejecutivo de la Confederación General de Sindicatos Fabriles, en *Presencia*, 8 de mayo, 1984.

total de los campos y la suspensión de los suministros de carburantes en todo el país⁴³.

Si el Comité Ejecutivo de la COB cabalgaba en los hechos sobre una oleada de conflictos sin precedentes en la historia de Bolivia sobre la que apenas ejercía algún control, las repetidas amenazas gubernamentales de emplear sus atribuciones legales para castigar las acciones «salvajes» de los sectores carecían también de cualquier eficacia. Dado que la organización obrera, incapaz de disciplinar a sus afiliados, estaba optando por justificar *a posteriori* la inmensa mayoría de los conflictos para *salvar una apariencia de representatividad*; resultaba evidente que *para desencadenar cualquier acción punitiva el gobierno debía estar dispuesto a enfrentar una ruptura política con la COB*. Pero toda la información derivada de su práctica reciente apuntaba justamente a que no se arriesgaría en ningún caso, y sus continuas afirmaciones sobre la imposibilidad de alcanzar «una solución nacional al margen de la participación del movimiento sindical, que era «el principal pie» del proceso democrático⁴⁴, no hicieron sino confirmar la percepción compartida por todos los actores de una situación que anulaba por completo la plausibilidad de las amenazas de sanciones legales que emitía casi a diario el Ministerio del Interior⁴⁵. Así, amparados por la influencia de la COB, que mantenía intactos sus recursos políticos frente al gobierno de la izquierda, *los trabajadores no tenían ninguna razón para prever una elevación en los costos de la*

⁴³ El gobierno recortó el aumento salarial de un 200 a un 100%, pero accedió a concederles un adelanto del 25% sobre el total ganado en un año, además de un incremento muy sustancial en sus "bonos" de "refrigerio" y de "gas", en especie -250 litros de gasolina mensuales-. *Ultima Hora*, 18 de mayo, 1984.

⁴⁴ *Presencia*, 8 de mayo, 1984.

⁴⁵ El gobierno había asegurado inmediatamente después de dar a conocer el paquete de estabilización su compromiso irrevocable con la adopción de «las medidas indispensables que garantizan este objetivo conducente a normalizar las actividades nacionales», amenazando implícitamente a quienes «parecen» desear «que las soluciones no sean encaradas por la legitimidad democrática, sino por la fuerza de las dictaduras» (*Presencia*, 15 de abril, 1984). A lo largo de abril y mayo, el ministerio del Interior solicitó repetidas veces al de Trabajo que le informara sobre la situación legal de las huelgas [AMTDL, Correspondencia recibida, 1984, T. 4], y amenazó a los participantes en huelgas ilegales con someter sus actos a la justicia ordinaria y aplicarles «la máxima sanción de la ley» (p.e., *Presencia*, 16 de mayo, 1984, y *Hoy*, 17 de mayo, 1984), mientras el Presidente, en un «mensaje a la nación», afirmaba que «el gobierno está obligado a asumir una actitud enérgica frente a los que en nombre del pueblo atentan contra el mismo, y lo hará en forma inflexible, acorde con la gran responsabilidad histórica contraída en un proceso democrático amenazado por minorías abiertamente entregadas a la sedición» (*Presencia*, 17 de mayo, 1984). Uno de los problemas que enfrentaba el gobierno era, desde luego, que todas las huelgas en curso atentaban contra las disposiciones de la Ley General del Trabajo, violando todo su articulado sobre mecanismos de conciliación y arbitraje y regulación del derecho de huelga (Sandóval, 1988: 271-274). En realidad, aunque las organizaciones sindicales de la burocracia pública eran respetadas en la práctica por el gobierno, ningún funcionario podía ejercer legalmente el derecho de huelga. El hecho de que todas las huelgas fueran ilegales restaba de por sí credibilidad a las declaraciones del gobierno, pero ni siquiera las amenazas contra los sindicatos que estaban cometiendo claramente actos de sedición contra el estado, confiscando y destruyendo patrimonio público, tuvieron algún efecto intimidatorio.

acción colectiva derivado de un endurecimiento de la conducta gubernamental. En estas condiciones, el resultado de la crisis institucional que desintegró rápidamente la autoridad de la organización obrera sólo podía ser la emergencia de «un clima de indisciplina, caos y anarquía»⁴⁶, que hizo que en mayo de 1984 a toda la prensa nacional le sobraron argumentos para acusar a los actores centrales de la izquierda de haber precipitado al país a una situación en la que todo parecía estar permitido, o que el diario *Presencia* pudiera incluir en sus páginas como sección fija una abultadísima «Agenda de paros, huelgas, emergencias y ultimátums».

En este contexto, la huelga nacional de hambre que emprendió la COB el 16 de mayo sólo podía ser, al contrario que en enero, un acontecimiento más entre muchos otros, destinado a pasar prácticamente desapercibido. Los dirigentes obreros se habían visto de hecho obligados a iniciar la huelga varios días antes de lo previsto para adquirir alguna presencia en los conflictos⁴⁷, y tuvieron que resolver poco después «acelerar las medidas de presión», ampliando la huelga de hambre, para no perderla⁴⁸. Intentar situarse a la cabeza de la explosión de protestas «anárquicas», defenderse de los efectos disolventes del caos social pretendiendo estar a su favor, amparándolo con una plataforma de demandas maximalistas, parecía desde luego la decisión más cómoda. Tal vez era también la única posible. Pero estaba destinada, en cualquier caso, a arrojar unos resultados enormemente perversos.

Los conflictos, en efecto, estaban en marcha desde hacía ya más de un mes. Algunos se habían ido cerrando a medida que se alcanzaban acuerdos sectoriales con el gobierno; otros sólo podrían solucionarse por la misma vía, y no esperaban casi nada del resultado de las negociaciones entre la COB y el gobierno. En paralelo, y mientras crecía el malestar entre segmentos cada vez más amplios de la población, canalizado eficazmente en los

⁴⁶ La expresión está tomada de un Comunicado de la Federación de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN), del 9 de mayo de 1984, que constataba con preocupación que de continuar «el actual estado de cosas» se cernirían «problemas inminentes» sobre «los trabajadores y el pueblo» de Bolivia [AC, s/n].

⁴⁷ El Comité Ejecutivo había previsto inicialmente esperar hasta el 21 de mayo para adoptar la decisión de ingresar en huelga de hambre. *Hoy*, 12 de mayo, 1984.

⁴⁸ El Ampliado Nacional de Emergencia celebrado el 21 de mayo decidió el ingreso inmediato en la huelga de hambre de los dirigentes de las federaciones nacionales y de los sindicatos de base, además de expresar el respaldo de la COB a las acciones de los sectores y autorizarlos a «realizar marchas y manifestaciones para presionar al gobierno dentro de los objetivos del plan de lucha de la Central Obrera Boliviana». *Presencia*, 22 de mayo, 1984.

departamentos por los Comités Cívicos, cada vez más organizaciones del movimiento obrero iban sumándose a las protestas contra la prolongación de las huelgas. Las Confederaciones nacionales de trabajadores de la construcción, ferroviarios, cooperativistas mineros, Federaciones regionales de campesinos y las Centrales departamentales de Santa Cruz y Potosí, exigieron sucesivamente la conclusión inmediata de un acuerdo. En estas condiciones, *el paso del tiempo jugaba a favor del gobierno, que pudo limitarse a esperar que los costos derivados de la prolongación de la protesta resultasen intolerables para la COB*, y la pasividad de Siles Zuazo tenía sin duda un elemento de cálculo. Interesado en moderar en lo posible el monto de la «reposición» salarial e incapaz de confrontar con los sindicatos, el gobierno sólo podía esperar a que el creciente malestar social⁴⁹ y la progresión de las salidas y las voces de protesta en el seno del movimiento sindical debilitara la posición negociadora de la COB.

Pero el enfrentamiento, desde luego, tendría costes *para todos*. Para ralentizar la escalada de conflictos y poner fin a una huelga de hambre masiva en la que llegaron a participar simultáneamente 5.500 personas, Siles Zuazo tuvo que resignarse aceptar una vez más la dimisión de su ministro de Finanzas, comprometerse a postergar temporalmente todos los servicios de la deuda, eliminar en la práctica todas las atribuciones de la recién creada Junta Monetaria, y elevar su oferta salarial hasta un 130% de incremento general. Había terminado así por suscribir la posición de la COB sobre la deuda con la banca internacional, cediendo sus atribuciones en la definición de un elemento clave de la política exterior del país⁵⁰, se había resignado a paralizar el proyecto de reforma institucional encarnado en la Junta Monetaria, el instrumento estratégico diseñado para centralizar la ejecución de la política económica, y había entregado a los dirigentes obreros la cabeza del arquitecto y

⁴⁹ La huelga salvaje del Banco Central, apoyada abiertamente por la COB, provocó situaciones tan dramáticas como el desabastecimiento de los hogares de menores. Según sus administradores, la huelga impedía que se liberaran los fondos necesarios para pagar los medicamentos depositados en los aeropuertos y para comprar combustible y alimentos. Como consecuencia de ello, los hogares se vieron obligados a reducir las raciones de comida a un único plato al día, los niños comenzaron a sufrir síntomas de desnutrición y aumentó la tasa de infecciones sin que hubiera medicinas para paliar sus efectos. *Presencia*, 18 de mayo, 1985.

⁵⁰ Cabe recordar que Bolivia fue el primer país que suspendió formalmente sus pagos durante la crisis internacional de la deuda, de modo que la falta de precedentes generó una enorme incertidumbre acerca de la reacción de los bancos frente a la decisión acordada por el gobierno con los sindicatos. El Comité de bancos acreedores, sabedor de que su respuesta era estrechamente vigilada por otras naciones deudoras y por los banqueros internacionales, adoptó de hecho una actitud muy dura ante el anuncio gubernamental, y su director llegó a amenazar con que el Comité «podría recomendar que los aproximadamente 140 bancos acreedores tomen cualquier medida que sea necesaria para cobrar sus deudas» [AMTDL, Correspondencia recibida, Tomo 3-1984, s/n].

principal avalista del programa de estabilización, que no pudo imponer en ningún momento sus criterios de firmeza a los partidos de la UDP⁵¹. *Renunciaba otra vez, por lo tanto, a intentar estabilizar la economía*, arrojando a la basura el programa económico «de emergencia» que se había diseñado «en el convencimiento de que constituye la única alternativa presente para superar la profunda crisis que afecta al país»⁵².

Por su parte, *el Comité Ejecutivo de la COB se había condenado a deslegitimarse ante sus bases* desde el momento mismo en que optó por intentar cubrir al alza las demandas de todos los sectores con una plataforma maximalista absolutamente inalcanzable. Aunque el Ampliado del 31 de mayo decidió, después de más de seis horas de deliberaciones, respaldar el principio de acuerdo alcanzado con el gobierno, el Comité Ejecutivo recibió críticas de una violencia sin precedentes que fueron respaldadas por el aplauso mayoritario de los delegados, lo que provocó una bochornosa retirada de Juan Lechín y obligó a concluir abruptamente la reunión⁵³. Pero las agrias discusiones que tuvieron lugar en las seis horas que duró el

⁵¹ El Ministerio de Finanzas había intentado sin éxito que el gobierno emprendiese de inmediato acciones legales contra los sindicatos de empleados públicos que «consideran parte de su patrimonio particular» los bienes y fondos de las instituciones que los emplean, manejándolos «en beneficio propio y no de todo el país al que pertenecen», recordando que «dentro de las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República establecidas en el Art. 96 de la Constitución Política del Estado se encuentran las de ejecutar y hacer cumplir las leyes». El principal problema para el Ministerio de Finanzas era la «feudalización» del Banco Central, expresada en el permanente boicot ejercido sobre las acciones del equipo económico gubernamental por su sindicato, una de cuyas múltiples «injurias» fue enviar un télex al FMI desautorizando las gestiones del ministro, «arrogándose funciones que no le competen» y actuando «dolosamente en la revelación de datos contables de la Institución Emisora». Informe del Ministerio de Finanzas al Presidente Constitucional de la República, 9 de mayo, 1984 [AMTDL, Correspondencia Recibida, 1984, T. 4, s/n.]. El 17 de mayo, el equipo económico consiguió que el gobierno dispusiese mediante Decreto Supremo la «normalización» inmediata de las actividades del Banco Central, amenazando con el despido a todos los funcionarios que no reanudasen sus tareas; al día siguiente, fuerzas policiales ocuparon la sede del ente emisor para prevenir la repetición de nuevos «actos de sabotaje» y permitir la reparación de los sistemas dañados, pero la «normalización» comenzó a aplazarse; el 23 de mayo, el ministro de Finanzas aseguró a la prensa que el gobierno se enfrentaba a una «prueba de fuego, y que no podía posponer más el momento de «actuar con la firmeza necesaria y la amplitud requerida», aplicando el Decreto y procediendo a los despidos (*Presencia*, 24 de mayo, 1984); dos días después, presentó su dimisión, recordando al Presidente en su carta de renuncia cómo «en reiteradas ocasiones» le había comunicado «la necesidad imperiosa de que el Gobierno Constitucional ejercitara sus facultades, en el marco de la legitimidad y autoridad que le otorga la Ley, para rodear de eficacia el cumplimiento del Programa Económico», y cómo todas sus disposiciones habían sido «entrajadas en su ejecución, así como rebasadas y tácitas desconocidas a nivel político» -se refiere las reuniones entre los comités ejecutivos de la UDP y la COB-. *Presencia*, 26 de mayo, 1984.

⁵² Mensaje del Presidente de la República a los trabajadores bolivianos. En *Presencia*, 1 de mayo, 1984.

⁵³ El viejo líder minero se retiró intempestivamente de la sala en que se celebraba el Ampliado mascullando lo siguiente: «Hubo 10 minutos de aplauso, yo no vuelvo, es irreversible, 10 minutos no pueden disculparse, no hay disculpa, me retiro del Ampliado, me limitaré a ayudar a mis compañeros en la realización del congreso» -se refiere al VI Congreso de la COB, cuya celebración se había aplazado por las «divisiones» que enfrentaban varios sectores sindicales-. *Presencia*, 1 de junio, 1984.

Ampliado del 31 de mayo auguraban acontecimientos mucho más graves.

LA INERCIA

LA RADICALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CONFLICTO

El Comité Ejecutivo, en efecto, no podría cerrar en las semanas sucesivas la enorme brecha creada entre las expectativas que generó la demanda del 400% de aumento salarial general y el pequeño premio, básicamente simbólico, que había conseguido arrancar al gobierno. Sus esfuerzos por presentar el acuerdo como una victoria "política" de los trabajadores fueron incapaces de contrarrestar la frustración que había provocado entre unas bases que reclamaban cada vez más, a medida que avanzaba la crisis, mejoras materiales y no compromisos ideológicos, el resultado obtenido después de mes y medio de movilizaciones casi ininterrumpidas. La frustración generalizada ofreció una ocasión inmejorable a las élites sindicales de oposición, que acusaron repetidamente de «traición» a los dirigentes nacionales, pero el descontento más o menos sordo se extendía a la gran mayoría de las agrupaciones y sindicatos de base⁵⁴. En estas condiciones, ni siquiera el carisma de Juan Lechín, que llegó a afirmar entonces que *«los trabajadores son los perjudicados con los aumentos salariales y no así los empresarios, quienes elevan los precios de los productos todos los días»*⁵⁵, podría haber evitado que un nuevo Ampliado nacional, celebrado cinco días después, decidiera «por unanimidad» exigir al gobierno un «aumento salarial acorde con el incremento del costo de la vida»⁵⁶. En esta ocasión, por lo tanto, el acuerdo no dio una salida siquiera pasajera a los enfrentamientos, ya que la organización obrera no pudo imponer

⁵⁴ Según las informaciones recogidas por la prensa fueron muchos los delegados que se opusieron frontalmente a los acuerdos, y los que los apoyaron lo hicieron sin mencionar el problema salarial. *Presencia*, 1 de junio, 1984.

⁵⁵ *Hoy*, 5 de junio, 1984. Las cursivas son mías.

⁵⁶ *Presencia*, 6 de junio, 1984.

en ningún momento el resultado a la mayoría de las Federaciones y sindicatos de base, que lo impugnaron desde el principio e impulsaron a la dirección nacional a reiniciar el enfrentamiento con el gobierno. Así, *la COB se vio obligada finalmente a iniciar el 5 de julio la huelga general indefinida cuya convocatoria había logrado eludir hasta entonces.*

Lo peor de todo era que la organización obrera parecía haber decidido ensayar *por primera vez en el período democrático* la medida más extrema de su repertorio con una carencia absoluta de objetivos. ¿Qué era, en efecto, lo que se pretendía obtener con la movilización?. Al parecer, se trataba de exigir al gobierno que cumpliera los compromisos adquiridos a finales de mayo, fijando con claridad su posición frente al problema de la deuda y poniendo fin a «la constante elevación de los precios de los productos de primera necesidad». El gobierno, que por su parte hacía protestas diarias de fidelidad a todos los compromisos adquiridos, estaba «borrando con el codo lo que ha suscrito con la mano», y resultaba evidente que «no entiende otro lenguaje que el de la presión directa, porque durante todo este último tiempo los ministros, dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de la UDP, prácticamente se han estado haciendo burla de la Central Obrera Boliviana y de los acuerdos y planteamientos presentados»⁵⁷.

Todo ello era demasiado previsible, como también lo era que las nuevas presiones y la firma de nuevos decretos no conseguirían mejorar la efectividad de la política de ingresos, la capacidad del gobierno para garantizar el abastecimiento regular de los productos básicos a precios estables. Lo más plausible es pensar que los límites de cualquier política de precios y abastecimientos dependiente de un mayor desembolso de créditos inflacionarios y del control administrativo del estado eran ya, tras los resultados de los acuerdos que pusieron fin a la huelga de hambre a principios de año, una realidad evidente para casi todos. Y si algo había cambiado a este respecto en los últimos meses había sido para peor, dada la creciente escasez de divisas y la pérdida progresiva del control estatal sobre el funcionamiento del sistema económico derivado de la extensión de las actividades informales a todos los niveles: la banca privada estaba canalizando todas sus operaciones hacia una «segunda ventanilla», captando recursos a un interés muy elevado y dirigiéndolos a las actividades especulativas más rentables; los importadores optaban por re-exportar los bienes de consumo básico y de equipo comprados con divisas obtenidas al tipo de cambio oficial, con lo que

⁵⁷ Hoy, 21 de junio, 1984; *Presencia*, 26 de junio, 1984.

obtenían enormes beneficios; la gran mayoría de las exportaciones, finalmente, se ejecutaba vía contrabando para evitar la venta de las divisas obtenidas al Banco Central. En paralelo, la situación del sector productivo público, y en particular la de la gran minería exportadora, se había deteriorado rápidamente, en buena parte por los costos derivados de la multiplicación de los conflictos. Así, si el XX Congreso Minero había expresado su respaldo pleno a la cogestión y el compromiso de los trabajadores con la defensa de la minería pública, el directorio COMIBOL se vio obligado a reconocer sólo un mes después que la proliferación de huelgas en los campamentos permitía asegurar ya que no se podrían cumplir las magras previsiones del plan de la FSTMB sobre la producción de minerales para el año en curso y que sería necesario ampliar los créditos oficiales para cubrir la diferencia⁵⁸.

En este contexto de desintegración del sistema económico formal, que estaba necesariamente acompañado de una progresiva corrupción de los aparatos administrativos del estado, carecía de sentido achacar la responsabilidad por los malos resultados a la falta de voluntad política, la «ineptitud» o el «sabotaje» deliberado del gobierno. No debe extrañar, por lo tanto, que las anticipaciones racionales de los trabajadores produjeran el fracaso estrepitoso de una huelga general indefinida que sólo aspiraba a arrancar al gobierno unos decretos destinados a convertirse de inmediato en papel mojado, y que el 5 de julio de 1985 la COB tuviera que enfrentarse así a la salida de unas bases incrédulas, que dieron masivamente la espalda a su convocatoria.

La huelga, en efecto, tuvo un seguimiento notablemente menor que todas las anteriores⁵⁹ y algunos miembros de la dirección llegaron a reconocer que la primera jornada de paro «casi fue un día normal», mientras en otras ocasiones la norma había sido que «cuando la COB declaraba una huelga prácticamente se paralizaba el país»⁶⁰. Así las cosas, la medida tuvo que suspenderse tres días después de su inicio, tras haberse alcanzado unos acuerdos que contenían únicamente la promesa ritual de que en adelante el gobierno garantizaría la estabilidad en los precios de los siete artículos básicos de la canasta familiar «a través de disposi-

⁵⁸ Informe oficial de COMIBOL, citado en *Presencia*, 8 de mayo, 1984.

⁵⁹ No existen, por supuesto, datos al respecto, pero las informaciones de prensa sobre la reacción de los trabajadores en los distintos departamentos parecen avalar la opinión expresada entonces por Horst Grebe, ministro de Trabajo y militante del PCB, que afirmó que la COB había evaluado muy mal «el verdadero estado de ánimo de los trabajadores». Véase *Presencia*, 6 de julio, 1984.

⁶⁰ *Hoy*, 6 de julio, 1984.

ciones legales para su cumplimiento por los comerciantes bajo control de las autoridades». El Comité Ejecutivo se esforzó de nuevo por justificar los resultados, explicando a las bases que la COB había logrado «al fin, acuerdos completamente positivos para la clase trabajadora y el pueblo boliviano», que insistir en nuevos aumentos salariales habría tenido como única consecuencia «la elevación desproporcionada de precios», mientras el compromiso asumido por el gobierno tendía a «cuidar el poder adquisitivo de sueldos y salarios» a través del congelamiento de los precios de los productos básicos⁶¹. Pero es fácil ver que la salida del conflicto no fue sino un paréntesis dictado por el agotamiento de los actores. Los problemas de abastecimiento y el aumento en los precios de los productos básicos se presentaron de inmediato, como era previsible, y esta vez la COB no se molestó siquiera en acusar al gobierno de incumplir los acuerdos. La aceptación del compromiso gubernamental había sido tan sólo una confesión de impotencia, y el fracaso simplemente se daba por supuesto.

Sin embargo, era evidente que la dirección nacional de la organización obrera no podía permanecer impasible ante estas experiencias negativas. Tendría que discutir necesariamente sobre las «lecciones» que cabía extraer de ellas e *impulsar algún cambio en las estrategias que había seguido hasta entonces*. El comportamiento del Comité Ejecutivo durante la larga crisis que abrió en el movimiento la publicación de las medidas del 12 de abril había recibido violentas críticas desde todos los frentes y en cada uno de los Ampliados nacionales de emergencia que terminaron celebrándose con una frecuencia casi semanal. De hecho, sobraban argumentos para la crítica, dado que *los conflictos ya no lograban siquiera mantener el juego en las posiciones de partida, sino que lo desplazaban a un punto cada vez más bajo, agravando progresivamente la situación del conjunto de los trabajadores. Casi nadie estaba interesado, por supuesto, en la reproducción de esta dinámica perversa. Pero la herencia institucional del movimiento obrero boliviano estaba especialmente mal adaptada para llevar adelante con éxito cualquier ajuste estratégico en la dirección que parecían exigir las circunstancias*.

⁶¹ Declaraciones de Armando Morales a la prensa, en *Presencia*, 9 de julio, 1984.

EL VI CONGRESO DE LA COB

A partir de la «encrucijada» de abril, la estructura sindicalista heredada por el movimiento obrero tuvo ya una influencia marginal en la evolución de la política económica. La COB, en efecto, tenía ya sus propias razones para luchar por «reducir la tasa de inflación», radicalmente alejadas de cualquier «colaboracionismo de clase»⁶². Desde las posiciones más próximas al anarco-sindicalismo o al marxismo consejista, que describían a la central sindical como «órgano de poder», y cuyas tesis a este respecto dominaban en los hechos el discurso de la mayoría de los dirigentes obreros⁶³, se argumentaba así que:

«Esta crisis ha abierto un enorme espacio político no, como suponen muchos compañeros de la izquierda, para que ellos lleguen al poder; la profundidad de la crisis económica ha creado un enorme espacio político para que la contrarrevolución retome el poder. A juicio nuestro ahora es la extrema derecha la única alternativa de poder. Ante este hecho evidente, real, (planteamos) que la COB enfrente la crisis económica del país desde el ángulo de los intereses populares y nacionales. Si la COB enfrenta a la crisis, habrá logrado tres objetivos: primero, la supervivencia de la Coyuntura democrática; segundo, se habrá transformado, a los ojos de la nación, en la única alternativa de poder; tercero, estaremos en condiciones de responder a la contrarrevolución, tanto si viene como golpe de estado o como golpe contrarrevolucionario, con la huelga general indefinida y el bloqueo de caminos»⁶⁴.

No cabe duda de que durante los primeros días de septiembre de 1984, mientras comenzaban las deliberaciones del VI Congreso de la COB, la conciencia de la gravedad de los problemas que debería enfrentar el sindicalismo boliviano si se prolongaba la caída libre de la economía estaba ampliamente extendida incluso entre los liderazgos más alejados de los partidos del gobierno:

⁶² Intervención de Filemón Escóbar en la Comisión Política del VI Congreso. Central Obrera Boliviana, *VI Congreso de la COB. Protocolos y tesis de la discusión política*, La Paz, Hisbol, 1985, p. 47.

⁶³ Véanse las entrevistas realizadas por el semario *Aquí* (Nos. 121-138) a dirigentes sindicales de diversos sectores y filiaciones políticas en la etapa previa a la celebración del VI Congreso. Con la excepción de algún destacado cuadro comunista, todos respondieron a la pregunta «¿para usted la COB es solamente un sindicato o tiene tareas políticas que cumplir?», afirmando enfáticamente que la central obrera era un «órgano de poder», sustituto de los partidos en las tareas de representación política del pueblo de Bolivia.

⁶⁴ Intervención de Filemón Escóbar, *ibid.*, p. 23.

«La derecha y el fascismo⁶⁵ están recuperando espacio político y están preparando no solamente un cuartelazo o ganar las elecciones del 86, sino que algo más grave está sucediendo, compañeros: están germinando las condiciones para que grandes sectores sociales puedan conformar la base social del fascismo. Lo que nos viene, pues, no es un golpe más, es toda una etapa fascista que podría quebrar la acumulación histórica de la conciencia de clase de nuestro movimiento obrero y popular»⁶⁶.

Sin embargo, los dirigentes de las dos grandes tendencias que pugnaron el seno del VI Congreso por contener la radicalización de las estrategias sindicales *encontraron un límite absoluto en su incapacidad para presentar alternativas realistas a lo hecho hasta entonces*. Los discursos de la fracción sindicalista encabezada por Filemón Escóbar, de los cuadros comunistas que dominaban el Ejecutivo saliente y de los militantes del MIR, en efecto, obtenían una aprobación general cuando llamaban a la defensa de la «coyuntura democrática» y describían, recurriendo a la experiencia histórica de los trabajadores bolivianos, los riesgos de la confrontación abierta con el gobierno, pero su vertiente propositiva resultaba radicalmente implausible. Todos sabían que «la derecha avanza rápidamente, ocupa cada vez más espacios políticos, que probablemente no tenga incluso necesidad de recurrir al golpe de estado y pueda asumir el control total a través del voto universal»⁶⁷, que «la única alternativa de poder que hay ahora en el país es el fascismo, es Paz Estenssoro y es Bánzer»⁶⁸, pero muy pocos podrían convenir en que lo mejor que podía hacerse para evitarlo era continuar como hasta entonces, y esto último era lo que parecían proponer los defensores de la moderación.

Para los comunistas se trataba, en efecto, de continuar luchando por establecer «una democracia de masas, una democracia popular», participando de un modo constructivo en la lucha de clases que «también opera en el seno del propio gobierno» a base de combatir los intentos de dar un sesgo reaccionario, pro-imperialista, a la política económica. Pero si el

⁶⁵ En el discurso de la gran mayoría de los dirigentes obreros los términos "derecha" y "fascismo" tendían a adquirir un significado equivalente. En la amenaza "fascista" incluían la posibilidad cierta de una victoria electoral de los partidos liderados por Paz Estenssoro y Hugo Bánzer.

⁶⁶ Intervención de Guillermo Pacheco, cuadro sindical del Partido Socialista, en la Comisión Política del VI Congreso. Central Obrera Boliviana, *VI Congreso de la COB...*, cit., p. 60.

⁶⁷ Intervención de Alejandro Almaraz, militante del MIR, en la Comisión Política del VI Congreso. *Ibid.*, p. 35.

⁶⁸ Intervención de Filemón Escóbar en la Plenaria del VI Congreso. *Ibid.*, p. 83.

único ejemplo que podían encontrar para ilustrar las potencialidades de esta línea de acción, encaminada a imponer y consolidar un «sello popular» en el proceso democrático, eran los acuerdos COB-gobierno⁶⁹, no disponían, desde luego, de una buena carta de presentación. Filemón Escóbar y los grupos más afines al consejismo, por su parte, enfrentaban exactamente el mismo problema. Su única ventaja al respecto era que a ellos, al contrario que los comunistas y los militantes del MIR, no podía acusárseles de tener «dos caras», dado que no pertenecían a un partido que había firmado «decretos económicos fondomonetaristas»⁷⁰. Por lo demás, ambas posiciones resultaban indistinguibles en la práctica⁷¹.

El núcleo del problema era, por supuesto, que mientras resultaba evidente que no se debía seguir como hasta entonces, de modo que quienes pudieran ser identificados como defensores del continuismo estaban condenados a la derrota, *ninguna de las tendencias en disputa podía plantear tampoco la posibilidad de efectuar un ajuste estratégico en dirección a las políticas de austeridad y moderación salarial* que el PCB y el MIR en el gobierno se habían resignado a aceptar como la única alternativa viable para contener la crisis inflacionaria. Los moderados ofrecían en la práctica "más de lo mismo" y carecían de respuestas plausibles, más allá de la apelación constante a la amenaza fascista, cada vez que los militantes de los partidos de la izquierda más radical afirmaban que la experiencia reciente garantizaba que la contención, la «presión controlada», la negociación de compromisos, no conducían a ninguna parte, dado que todos los acuerdos quedarían en papel mojado, ayer, hoy y mañana. Nadie podía pretender imponerse prometiendo la perpetuación de estrategias que habían demostrado abundantemente su fracaso en nombre de una defensa abstracta de la «coyuntura democrática». En estas condiciones, el resultado del VI Congreso

⁶⁹ Con los que «las masas nos han enseñado que son la presión que son la presión constante, la movilización, la huelga, incluso la huelga de hambre, la marcha sobre los centros urbanos y sobre los propios centros de poder, los que hacen posible avanzar el proceso democrático en la dirección de la liberación nacional». Oscar Salas, presentación del Proyecto de Declaración Política del PCB. *Ibid.*, pp. 39-40.

⁷⁰ «En cuanto a la posición de los compañeros del PCB, yo creo que el partido comunista no tiene capacidad de autocrítica. Les pregunto ahora ¿por qué firmaron decretos económicos fondomonetaristas?. Si de veras somos anti-imperialistas, tenemos que luchar contra la política del FMI, tanto si estamos en el gobierno como fuera de él. Y el PCB, en el gobierno, no luchó contra el FMI. Otra cosa más. El PCB no explica con claridad su pensamiento político. Las posiciones que expuso ayer el compañero Oscar Salas (PCB) en gran parte coinciden con las posiciones del compañero Escóbar; y eso no puede ser». Intervención de Filemón Escóbar en la Comisión Política. *Ibid.*, p. 48.

⁷¹ Aunque podían debatir largamente sobre los papeles respectivos del partido y el sindicato en la dirección de la futura revolución socialista o sobre el contenido institucional de la "Dictadura del Proletariado".

estaba cantado: el ajuste supondría el final de la fase de «oposición conciliatoria»⁷² y el inicio de una nueva etapa marcada por la confrontación frontal con el gobierno de la UDP.

Uno de los asesores más destacados de la central obrera había anunciado ya tres meses antes de la instalación del Congreso que «para la COB la solución más económica sería retomar su tradicional rol 'contestatario' para desatar el nudo gordiano»⁷³. Pero cabría preguntarse, sin embargo, si Juan Lechín decidió encabezar la candidatura de aquél extraño conglomerado de pequeños partidos de la izquierda extraparlamentaria que fue la **Dirección Revolucionaria Unitaria (DRU)**⁷⁴, enarbolando las banderas del «antioficialismo» y prometiendo emprender una «lucha intransigente por la implantación del salario mínimo vital»⁷⁵, simplemente porque aquélla era la solución más económica. Tal vez no convenga despreciar el oportunismo del veterano dirigente minero, que hacía tan poco había asegurado a sus compañeros que en su larga experiencia como dirigente había aprendido la necesidad de «meditar seria y responsablemente sobre las posibilidades de victoria», y que en la coyuntura que atravesaba el país «los incrementos salariales no benefician a los trabajadores». Pero carece de interés elucubrar ahora sobre los motivos personales de quien había sido Secretario Ejecutivo de la COB desde su fundación. Tal vez "Don Juan" pensara tan sólo que el riesgo de ruptura era excesivo, que *la huida hacia adelante era la única salida viable en un contexto institucional en el que parecía radicalmente imposible ejecutar el movimiento contrario, legitimando y emprendiendo con éxito un ajuste hacia estrategias de austeridad*.

Conviene señalar en primer lugar que las profundas desigualdades en la distribución del poder entre los distintos grupos de interés dentro del movimiento obrero estaban acompañadas de una profunda *desarticulación normativa* interna que hacía enormemente difícil legitimar una política de austeridad apelando a los intereses *de todos*, a la necesidad

⁷² "La COB ante la situación del país", 22 de enero, 1984, p. 4 [ACED, D-4142].

⁷³ Jorge Lazarte, "La COB en una dramática encrucijada", en *Aquí*, No. 139, 2-8 de junio, 1984, p. 1.

⁷⁴ La DRU era una sopa de letras compuesta al menos por los "albanos" del PCB/ML, el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK), el PRIN de Juan Lechín, los minúsculos y ultraizquierdistas Partido Obrero Revolucionario "De Pie" (POR "De Pie") y POR-Unificado, ambos escindidos del grupo trosquista de Guillermo Lora, el Movimiento Campesino de Bases (MCB), los autogestionarios del Grupo de Trabajo Sindical (GTS) y dos facciones disidentes del MIR (MIR-Frente de Masas Obrero) y del Partido Socialista (PS1/Palacios). Véase "El Congreso detrás del telón", en *Aquí*, no. 154, 22-28 de septiembre, 1984, Suplemento Especial, p. 2.

⁷⁵ Proyecto de Declaración Política al VI Congreso de la COB de la Dirección Revolucionaria Unitaria. Central Obrera Boliviana, *VI Congreso de la COB...*, cit., p. 129.

de *compartir* los sacrificios que estaba imponiendo ya la crisis. Desde luego, el resultado más transparente del hecho de que el movimiento obrero boliviano naciera y se consolidara como un movimiento *minero* era una distribución del poder entre las distintas organizaciones en las estructuras de gobierno de la COB que mantenía a su Comité Ejecutivo sometido a una dependencia extrema de los intereses mineros. Las decisiones de la FSTMB se trasladaban de un modo inmediato al seno de la central sindical, y *las estrategias negociadoras de la COB en la coyuntura podían interpretarse así en gran parte como un costoso esfuerzo por satisfacer las demandas de los trabajadores de la minería pública deficitaria*. En el capítulo previo incluí ya algún comentario sobre este problema, que no había hecho sino tornarse cada vez más evidente a medida que avanzaba la crisis y menguaban los recursos del sistema, agravando los conflictos de intereses entre los distintos grupos representados en la COB⁷⁶. Pero lo que me interesa destacar aquí es que esta distribución profundamente desigual del poder tenía su otra cara en *la falta de una identidad común*, que negaba a las direcciones del movimiento la posibilidad de recurrir tanto a *valores reconocidos por todos* los segmentos de su clientela como a su *simpatía mutua* para legitimar una aceptación *solidaria* de los costos del ajuste.

La desarticulación normativa, *producto de la ausencia de una experiencia histórica compartida*, anulaba la eficacia de cualquier llamamiento a la solidaridad intersectorial, y permitía por el contrario a cada grupo apelar a algún derecho particular diferencial para eludir los costos del ajuste. Bajo la defensa universal de la «sagrada unidad del movimiento obrero» se escondía, en efecto, una enorme «dispersión de las fuerzas populares»⁷⁷ que alimentaba peligrosamente la competencia interna. El aislamiento tradicional de los mineros, cuyo primer enfrentamiento con los trabajadores industriales urbanos se remontaba al momento en que éstos apoyaron mayoritariamente el Plan de Estabilización de 1956 y la

⁷⁶ Conviene recordar, sin embargo, que más allá de las presiones para sostener el sistema de pulperías subvencionadas y obtener créditos públicos para sufragar los crecientes déficits de COMIBOL, los últimos acuerdos alcanzados entre la COB y el gobierno incorporaban en un lugar preferente la asignación a COMIBOL del 30% de las divisas que generara en cada ejercicio y el permiso para proceder a importaciones directas de insumos. En los meses siguientes se entabló una agria polémica entre el ministro de Industria y el directorio obrero de COMIBOL respecto a la importación de carne argentina. El ministro aseguraba que la práctica lesionaba los intereses nacionales, y los mineros que los argentinos vendían más barato y que no estaban dispuestos a renunciar a esos ahorros para «apoyar los apetitos insatisfechos de los ganaderos». *Hoy*, 28 de julio, 1984.

⁷⁷ Declaración política por mayoría del VI Congreso de la COB. Central Obrera Boliviana, *VI Congreso de la COB...*, cit., p. 113.

organización sindical paraestatal impulsada por Siles Zuazo, y la reciente incorporación de sectores carentes de historia sindical, como la burocracia pública y los petroleros, identificados hasta hacía muy poco con los gobiernos autoritarios, hacían del movimiento obrero boliviano una hidra de mil cabezas, cargada de agravios históricos y privada de cualquier conciencia colectiva. Los valores dominantes, que legitimaban la distribución del poder de negociación entre las distintas organizaciones en el seno de la COB, podían recurrirse con facilidad siempre que no fuera posible manipularlos para defender los derechos particulares de éste o aquél sector. Así, a lo largo de todo el proceso los grupos recurrieron alternativamente a la ideología obrerista, a los derechos históricos adquiridos en las luchas del pasado, a la productividad de cada cual y a su aportación al «desarrollo nacional», a su mayor o menor consecuencia revolucionaria, etc..., para defender la posición propia, las reivindicaciones sectoriales, frente a las demandas de *los otros*.

En este contexto normativo, la solidaridad de clase sólo podía ser una expresión vacía. Por supuesto, dado que esta realidad apenas se hacía explícita en el discurso, es imposible presentar alguna evidencia empírica capaz de reflejar su importancia real, y carecería de sentido entregar un listado aleatorio de la multitud de declaraciones que podrían recogerse en una somera lectura de la prensa del período. Sin embargo, tal vez resulte útil mencionar algún ejemplo tomado de los conflictos que tuvieron lugar en los días previos a la celebración del VI Congreso de la COB para dar siquiera una idea aproximada de la magnitud de la desarticulación normativa que azotaba al movimiento obrero boliviano en la coyuntura democrática.

A mediados de agosto de 1984, mientras la COB evaluaba los resultados de las últimas movilizaciones y preparaba la reunión nacional, las federaciones sindicales de los petroleros y empleados públicos comenzaron sendas huelgas indefinidas avanzando nuevas reivindicaciones salariales. En el mes de mayo, los petroleros habían afirmado con claridad sus derechos particulares ante el Ampliado nacional de la COB por el hecho de ser los trabajadores «más productivos», reclamando una mayor atención a sus demandas salariales - una «justa remuneración»- y a las necesidades de su empresa -exigiendo la asignación a YPFB del 58% de las divisas que generara⁷⁸. Si la FSTMB podía afirmar que «la libre disponibilidad de divisas es un derecho de quienes las generan con el sacrificio, sudor y quebranto de

⁷⁸ Posición política, económica y social de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, en *Hoy*, 12 de mayo, 1984

sus pulmones mineros»⁷⁹, los petroleros también generaban *sus* divisas y sufrían los riesgos y molestias del trabajo «a la intemperie»; más aún: *su* empresa pública incluso era rentable, de modo que debían tener «un tratamiento salarial distinto a los otros sectores que, al contrario, ocasionan pérdidas al Estado»⁸⁰. Los compañeros de clase debían entender por ello, aceptando sus «mil disculpas» (sic), que a finales de agosto paralizaran una vez más durante una semana la producción y distribución de combustibles -incluyendo los de uso doméstico- y obligaran a retrasar una vez más el VI Congreso de la COB para arrancar al gobierno un aumento adicional del 100% sobre el que habían obtenido ellos. Los empleados públicos, por su parte, iniciaron en la misma fecha una huelga general indefinida, desatendiendo los servicios estratégicos y de emergencia y saboteando el pago de sueldos y salarios, «haciendo perder el sentido de solidaridad entre la clase trabajadora» y adoptando actitudes que el Secretario Permanente de la COB llegó a calificar de «inmorales»⁸¹. Se resistían a aceptar la premisa de que «hay trabajadores y trabajadores, que unos desempeñan labores en interior mina y otros en oficinas sin mayores complicaciones de salud ni contribuir a las exportaciones que dejan divisas»; por el contrario, estaban dispuestos a defender que «también los empleados públicos producen»⁸² y «saben comer, no solamente petroleros y mineros»⁸³, y a luchar consiguientemente por no continuar quedando marginados de los aumentos salariales generales, perdiendo posiciones frente a los "productivos". La respuesta de los mineros a estas nuevas movilizaciones de sus "compañeros" estuvo cargada también esta vez del resentimiento que demostraron siempre hacia estos «advenedizos»: las huelgas injustificables estaban «poniendo en peligro el proceso democrático», pero eso no debía extrañar a nadie si se recordaba que los petroleros y los empleados públicos «nada hicieron por conseguir las libertades que actualmente estamos gozando»: por el contrario, «siempre

⁷⁹ Comunicado del Comité Ejecutivo de la FSTMB, 2 de agosto, 1984. AC, D-1008.

⁸⁰ Declaración de dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores de Bolivia al diario *Presencia*, 17 de mayo, 1984.

⁸¹ *Presencia*, 9 de agosto, 1984.

⁸² Declaraciones de Mario Viveros, secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores del Estado de la La Paz, en *El Mundo*, 19 de junio, 1984.

⁸³ Mario Viveros, en *El Mundo*, 29 de mayo, 1984.

han servido a los gobiernos de facto»⁸⁴

Para la COB, sin embargo, los «advenedizos» constituían el segmento mayoritario de la población asalariada -los empleados públicos- y el sector con un mayor poder de negociación en la arena económica -los petroleros-. No podía permitir que abandonaran el movimiento, y en aquél contexto marcado por valores tan diversos y desprecios tan profundos, la única opción viable para conservar su frágil "unidad" consistía en legitimar sin mayores reflexiones estratégicas o éticas las demandas y las conductas de cada uno. Tal vez tuviera algo que ver en todo aquéllo la actitud «electoralista» que denunciaba la prensa en Lechín durante los días previos a la instalación del VI Congreso, pero conviene tener en cuenta que aquél "electoralismo" del viejo líder minero era tal vez lo único que hacía de él, según reconocían incluso sus mayores adversarios dentro de la COB, ese indispensable «factor de unidad», necesario para superar todas las amenazas de ruptura que «han surgido en el pasado y pueden surgir después»⁸⁵. En aquéllos dos grandes conflictos Lechín optó, en cualquier caso, por dar un apoyo explícito a los petroleros, avalando sus argumentos «insolidarios»⁸⁶ y abogar por un tratamiento «comprensivo» hacia los empleados públicos⁸⁷.

Con la misma "comprensión", y eludiendo todos los debates, *los delegados presentes en el VI Congreso de la COB optaron por intentar reconstruir en el discurso de oposición frontal al gobierno la vieja unidad negativa del sindicalismo revolucionario*. El gobierno de

⁸⁴ Comunicado del sindicato de Huanuni, en *Hoy*, 25 de agosto, 1984.

⁸⁵ Declaraciones de Simón Reyes, parlamentario comunista y Secretario de Relaciones de la FSTMB y de la COB, en *Hoy*, 19 de abril, 1984.

⁸⁶ «Las reclamaciones salariales de los petroleros son justas», ya que «cada trabajador petrolero, según cálculos, produce al año 75.000 dólares». *Presencia*, 25 de agosto, 1984.

⁸⁷ *El Mundo*, 19 de agosto, 1984. Los empleados de la administración prolongaron su huelga, después de haber alcanzado un acuerdo salarial, exigiendo la cancelación de sus haberes por los días no trabajados. Desde la COB se afirmó primero que aquéllo no correspondía, que «en la lucha por mejorar las condiciones socio-económicas se tiene que perder algo» (*Presencia*, 14 de agosto, 1984). Pero Lechín carecía de argumentos para defender esa posición de «coherencia con los principios del movimiento obrero y madurez sindical» (*ibid.*), dado que sólo unos meses antes había apoyado la misma demanda del magisterio y celebrado abiertamente la claudicación del gobierno (*Presencia*, 24 de mayo, 1984). Los sindicatos de Trabajadores del Estado no estaban dispuestos a que se les utilizara para «sentar un precedente» (Mario Viveros, en *El Mundo*, 19 de agosto, 1984): ¿si los maestros no pagaron nada por reducir el primer trimestre escolar de 1984 a 12 días de clase, por qué deberíamos hacerlo nosotros?. En este caso, el gobierno actuó con una mayor firmeza y pudo imponer un acuerdo intermedio -descuentos parciales-. Pero no contó con la ayuda de la COB, ni pudo evitar que el conflicto se mantuviera latente, con constantes amenazas de reiniciar una lucha de «consecuencias imprevisibles» si los descuentos eran «excesivos». Carta del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores del Estado al ministro de Trabajo, 29 de agosto, 1984 [AMTAL, C-1057.11].

la UDP era sin duda el culpable de todo lo que pasaba. Todos los sectores tenían sin duda razones sobradas para avanzar sus demandas particulares y ejecutar sus medidas de presión. Si en el camino las aulas quedaban vacías durante meses, las calles sin luz, las ciudades sin transporte ni teléfonos, las casas sin combustible... durante días y semanas, alimentando el malestar, la agresividad o el fatalismo de la sociedad boliviana, era desde luego porque el gobierno «quería caerse»⁸⁸. La Confederación Sindical de Trabajadores Ferroviarios había pedido a la dirección nacional de la COB cinco días antes de la inauguración del Congreso que hiciera un esfuerzo por «reasumir la facultad de capitalizar, en adelante, toda gestión de índole salarial, en procura de evitar mayores privilegios y preferencias», o que de lo contrario entregara «instrucciones en el sentido de que los diferentes sectores, a partir de la fecha, planteen sus peticiones con absoluta independencia del organismo matriz»⁸⁹. La primera tarea estaba probablemente fuera del alcance de las direcciones sindicales. En cualquier caso, la COB decidió no hacer el esfuerzo, y el "antioficialismo" militante del Comité Ejecutivo que resultó electo en su VI Congreso entregaba en la práctica una "patente de corso" a cada uno de los sectores para que utilizara libremente todo el potencial de conflicto y negociación de que dispusiera en la coyuntura.

Pero si por un lado toda aquélla agresividad "antioficialista" sólo ocultaba, sin resolverlas, las contradicciones internas del movimiento, *la confrontación con el gobierno "reformista", además, sólo tenía sentido en el medio plazo si se optaba explícitamente por la vía revolucionaria*. La crítica de la facción trosquista de Guillermo Lora a la posición de la DRU apuntaba aquí en la dirección correcta:

«Si ellos creen que no es posible la salida revolucionaria y que la UDP no sirve, deberían presentar otra alternativa de manera coherente, y no lo han hecho...ustedes ya han oído la respuesta: no es posible que los explotados gobiernen este país porque no hay dirección, porque no hay armas, porque viene el golpe fascista, porque hay que resguardar el proceso democrático, etc»⁹⁰.

La notoria *omisión de cualquier perspectiva estratégica* en el discurso de la nueva

⁸⁸ Juan Lechín, en *Presencia*, 24 de agosto, 1984.

⁸⁹ Carta de la Confederación Sindical de Trabajadores Ferroviarios y Ramas Anexas al Comité Ejecutivo de la COB, en *Presencia*, 29 de agosto, 1984.

⁹⁰ Ascensio Cruz, presentación del proyecto de tesis política de la Brigada Sindical Revolucionaria. Central Obrera Boliviana, *VI Congreso de la COB...*, cit., p. 33.

dirección, que situaba claramente al movimiento obrero ante un callejón sin salida en el nivel político, no se derivaba tan sólo, por supuesto, de la inconsistencia intelectual o ética de los cabecillas, como quería el rancio voluntarismo de Lora. El problema fundamental estaba, por el contrario, en que los procesos de toma de decisiones en la red sindical, caracterizados por la combinación de procedimientos muy próximos a la democracia directa asamblearia con una elevadísima fragmentación de las élites dirigentes, tendían a producir un sesgo *sistemático* hacia las definiciones más miopes de los intereses de los trabajadores. En efecto, las dirigencias sindicales, con independencia de sus convicciones y afiliaciones partidarias, se veían impulsadas a alimentar la espiral de reivindicaciones de corto plazo para evitar su anulación por un sinnúmero de élites opositoras, en un contexto asambleario que iba estando cada vez mejor abonado para el ejercicio de la demagogia a medida que se agravaban los efectos de la crisis.

Las iniciativas podían partir de ellos mismos, de los cuadros de los partidos opositores, o de liderazgos informales surgidos en el seno de la asamblea. En estos últimos casos, el sindicato era "rebasado" por las bases, e iniciaba de inmediato un conflicto. Importaba muy poco, en particular en los campamentos mineros, que la organización local estuviera "controlada" por el moderado PCB o los extremistas del POR-De Pie, y la trayectoria del sindicato de Huanuni, una de las grandes empresas de COMIBOL y su única explotación rentable, resulta sin duda particularmente ilustrativa a este respecto. La dirección comunista de Huanuni sufrió, en efecto, constantes "desbordes" por la base, que convirtieron a su sindicato en el más conflictivo e inmedatista de la FSTMB. Ya a finales de 1983, el sindicato acusó a la FSTMB de haberle dejado aislado en la huelga general indefinida que llevaba adelante exigiendo «la aplicación del salario mínimo vital y otras demandas de tipo económico»⁹¹, y en los meses siguientes estuvo siempre en primera línea informativa por sus amenazas de movilizaciones y la agresividad de su discurso antigubernamental⁹². En abril de 1984 fue el único sindicato que declaró una huelga indefinida antes de la publicación del paquete económico, y la mantuvo, contradiciendo la plataforma de lucha aprobada por el XX Congreso Minero, con el argumento de que resultaba imposible «contener a los

⁹¹ *Presencia*, 1 de octubre, 1984.

⁹² Amenazas de marchas hacia la capital (*Ultima Hora*, 16 de febrero, 1984), comunicados contra las «manipulaciones antiobreras y antipatrióticas» en las que sin duda estaba embarcado el gobierno mientras diseñaba nuevas medidas económicas (*Hoy*, 30 de marzo, 1984), etc...

compañeros, que ya han rebasado a nuestra dirección sindical»⁹³: de hecho, el 13 de abril una Asamblea general de trabajadores de Huanuni había criticado con dureza «a los dirigentes de la COB y la FSTMB por no adoptar medidas en defensa de la economía popular», calificándolos de «voceros del gobierno antiobrero», y resuelto coordinar directamente sus acciones con otros sindicatos de base, instándolos a organizar marchas a la sede de gobierno⁹⁴; cinco días después, los dirigentes tuvieron que limitarse a asentir cuando una nueva Asamblea decidía declarar a sus partidos «traidores al movimiento obrero»⁹⁵. ¿Qué diferencia hacía que el Secretario General de Huanuni, militante del PCB en funciones de gobierno, estuviera convencido de la necesidad de emprender una lucha «unitaria» para avanzar hacia «la estabilización, consolidación y profundización del proceso democrático»⁹⁶, si su propio sindicato batía entre tanto todos los récords de conflictividad, paralizando durante más de un mes la única explotación rentable de COMIBOL?

El contexto asambleario y la competencia intra-elitaria provocaban una enorme *rigidez* en la conducta de las direcciones en toda la red sindical minera, privándolas de cualquier autonomía decisoria. Las acciones de los sindicatos de base tendían a ser una expresión *inmediatista*, "espontaneísta", de los estados de ánimo de la comunidad, convenientemente calentados por la multitud de facciones opositoras. En las explotaciones de la minería privada la situación era equivalente, y sus empresarios, al igual que los gerentes de las grandes empresas nacionalizadas en los años que siguieron a la revolución de 1952, tenían sin duda muy buenas razones para lamentar la inutilidad de negociar con un sindicato local o una FSTMB incapaces de cumplir sus compromisos⁹⁷.

⁹³ XX Congreso Minero. *Actas de las distintas plenarias bajo la dirección del Presidium* [AC, s/n., p. 2]. Fueron muchos los delegados que pidieron entonces una explicación a los dirigentes de Huanuni por su actitud "intransigente". Lo paradójico, por supuesto, es que los dirigentes de aquel sindicato "extremista" eran miembros de una plataforma de partidos pro-gubernamentales que encabezaba el PCB.

⁹⁴ *Presencia*, 14 de abril, 1984.

⁹⁵ *Hoy*, 18 de abril, 1984.

⁹⁶ *Hoy*, 25 de abril, 1984.

⁹⁷ «Deseo informarle que la disciplina laboral, el sentido de responsabilidad y el compromiso de cumplir responsablemente con el trabajo en nuestro campamento minero, no está siendo cumplido. La irresponsabilidad y la falta de conciencia política hacen que las bases sobrepasen la autoridad, funciones y responsabilidades del Sindicato... En este sentido es mi obligación informarle a usted que últimamente el sistema de relaciones, diálogo y soluciones conjuntas ha sido roto por parte del Sindicato, sobrepasado por las bases, ya que primero y además ilegalmente se decretaron paros o huelgas sin antes dialogar y negociar... Para terminar, y no queriendo molestar

Desde luego, la práctica de la "democracia obrera", que era una realidad cotidiana e indiscutible en las minas, no se extendía a la gran mayoría de los sectores del movimiento obrero, en particular a sus secciones nuevas, carentes de tradición sindical e insertas en contextos urbanos muy alejados del entorno comunitario de los campamentos. Pero *la dispersión política, la convivencia de una pluralidad de élites faccionales en competencia, estaba presente en todas partes y jugó sin duda un papel muy destacado en el desencadenamiento de buena parte de los conflictos más radicales y "salarialistas"*. No deseo cargar el texto con ejemplos cuya multiplicación no aportaría apenas nada al argumento, pero tal vez convenga volver muy brevemente a las movilizaciones de trabajadores del estado y petroleros que antecedieron al VI Congreso, y anotar algo sobre el trasfondo de aquella huelga general indefinida que emprendieron los fabriles en mayo, «desconociendo la autoridad de su organización matriz» y «debilitando a la COB», para ilustrar lo que acabo de subrayar arriba.

En el Ampliado que puso término el 21 de agosto a las tres semanas de huelga de los empleados públicos, una mayoría de los delegados atribuyeron el origen y la radicalización del conflicto al "proselitismo" de Mario Viveros, secretario general de la Federación paceña y el cuadro sindical más destacado del Partido Socialista (PS-1)⁹⁸. La acusación no carecía de fundamento, dado que el dirigente socialista no había dudado en apoyarse en los liderazgos de la ultraizquierda «empeñados en desestabilizar este proceso al igual que la derecha reaccionaria»⁹⁹. El PS-1, desde luego, no estaba dispuesto a permitir que el buque insignia de su reducida escuadra sindical fuera derrotado por las facciones trosquistas que estaban ganando día a día posiciones en todas las organizaciones de "cuello blanco". En la huelga petrolera del mismo mes no hubo señales aparentes de división interna o competencia intra-elitaria, pero ello se debió tan sólo a que el Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia había sacado las enseñanzas del conflicto anterior y se limitó ahora a seguir a la ultraizquierda. En efecto, dos meses antes -en mayo de 1984- había optado por desautorizar una huelga hambre del sindicato de La Paz, calificándola de «movi-

más su atención, deseo poner bien en claro que no permitiré que después de tanto sacrificio de obreros responsables... así como *la cooperación y comprensión de la FSTMB* y mi esfuerzo personal durante la crisis de Atoroma, volvamos a caer en una situación de crisis similar. Carta del Gerente de la Empresa Atoroma Ltda. al Ministro de Trabajo, 3 de octubre, 1984 [AMTDL, Correspondencia recibida, T. 3, 1984, s/n].

⁹⁸ Hoy, 22 de agosto, 1984.

⁹⁹ Ibid.

miento anárquico» promovido por «elementos trosquistas incrustados en el sindicalismo»¹⁰⁰, tan sólo para asistir impotente a su extensión a los sindicatos de base de todo el país, con la sólo excepción de Sucre, y terminar decretando una huelga general indefinida para cortar la ofensiva opositora y sus acusaciones de «traición» y «servilismo al gabinete económico de la UDP»¹⁰¹. Pero los pequeños partidos de la extrema izquierda distaban de tener el monopolio de la miopía "salarialista". En el sindicalismo fabril, la dirección nacional dominada por cuadros comunistas, no pudo resistir en ningún momento las presiones cruzadas de la ultraizquierda, muy influyente en las organizaciones de la capital, y la demagogia corporativista de Lucio López, un líder local que mantenía una precaria hegemonía sobre los poderosos sindicatos del valle cochabambino. El imparable ascenso del salarialismo "indisciplinado" en el sector fabril, desde la oleada de conflictos de octubre de 1983 a la huelga general indefinida de mayo del año siguiente, no puede entenderse sin atender a las profundas divisiones internas que fueron el principal determinante de los continuos aplazamientos del VI Congreso de la COB y alimentaron una competencia a varias bandas que hizo de «la segunda fuerza laboral del país» un modelo de conducta «economicista» (Del Granado, 1987: 141).

Los grupos opositores tenían a su favor el fuerte arraigo que tenía en toda la red sindical el *basismo* que había acompañado tradicionalmente al *asambleísmo* minero. El basismo, consecuencia inevitable de una historia en la que la organizaciones sindicales nunca habían logrado ofrecer *resultados* tangibles a sus clientelas, privaba a los liderazgos de cualquier *margen de confianza* y tendía a forzarles a demostrar cotidianamente su compromiso con las reivindicaciones de sus representados. Era muy fácil y muy eficaz acusar de "traición" a los dirigentes que asumían compromisos, y resultaba muy difícil legitimar la moderación apelando a sus efectos benéficos *en el medio plazo* o a la necesidad de evitar males mayores contra las sospechas tradicionales de las bases hacia las «maniobras» cupulares. El propio Juan Lechín había tenido la ocasión de comprobarlo en todos los Ampliados y en la gran mayoría de las Asambleas que se convocaron a lo largo de la oleada que conflictos que desencadenó el programa de estabilización del 12 de abril.

En estas condiciones, resultaba casi indiferente que los liderazgos nacionales hubieran

¹⁰⁰ Comunicado de la FSTPB y del delegado de los petroleros ante la COB, en *Presencia*, 12 de mayo, 1984.

¹⁰¹ Rolando Guevara, secretario general de los petroleros de La Paz, en *Presencia*, 19 de mayo, 1984.

comenzado a considerar la necesidad de evitar la trampa de una victoria electoral aplastante de la derecha como una restricción política seria sobre sus estrategias. O que estuvieran convencidos, como Armando Morales, de que «con las demandas salariales sólo se está provocando mayor inflación y pérdida del poder adquisitivo, de manera que los planteamientos de esa naturaleza son demagógicos y puramente proselitistas, para sobresalir como el más efectivo con las huelgas»¹⁰². En aquél contexto, todos estaban obligados a jugar al juego de la demagogia salarialista para sobrevivir. Empezando por el propio Morales, integrado con Juan Lechín en una Dirección Revolucionaria Unitaria que hizo de la demanda del Salario Mínimo Vital su segunda bandera de lucha -junto al "antioficialismo"¹⁰³-, y terminando con los comunistas, que practicaron el mutismo más absoluto a lo largo del VI Congreso¹⁰⁴.

Pero debería quedar claro que el triunfo del salarialismo cortoplacista sólo fue un resultado «inevitable» del desarrollo de la crisis *en el marco de la herencia institucional del movimiento obrero boliviano*. Si el viraje estratégico terminó siendo una huida hacia adelante, condenada a multiplicar los problemas que se habían presentado hasta entonces fue porque *dentro de ese marco* resultaba imposible en la práctica emprender y legitimar un ajuste en la dirección contraria. Tras el VI Congreso, la COB mantendría en lo inmediato un simulacro de autoridad sobre una "clase" unida en la oposición al "gobierno hambreador", aunque todos supieran que el Salario Mínimo Vital era una demanda demagógica, que una política salarial más agresiva sólo provocaría «mayor inflación», y la gran mayoría sospechara cuando menos

¹⁰² Hoy, 30 de agosto, 1984.

¹⁰³ «Hay quienes se han opuesto a esa medida revolucionaria -se refiere al salario mínimo vital-; pero en este momento el gobierno está estudiando nuevas medidas económicas y yo pregunto a esos que defienden al gobierno, cuando salgan esas medidas contra el pueblo, ¿qué van a hacer?. Ah! no van a hacer nada; pero los trabajadores saldrán unidos a rechazar las nuevas medidas económicas, porque el pueblo ya no puede soportar más y no está dispuesto a seguir aguantando medidas que van a beneficiar a la empresa privada y a los aliados de la UDP». Intervención de Armando Morales en la Plenaria, en COB, *VI Congreso de la COB...*, cit., p. 96.

¹⁰⁴ Resulta muy significativo que Simón Reyes, candidato del PCB a la Secretaría Ejecutiva de la COB frente a Lechín y la DRU, dedicara la mayor parte de su intervención en la Plenaria del VI Congreso a poner en duda la posibilidad de que el sindicato «pueda garantizar la conducción revolucionaria, sea el ejecutor, el instrumento político de la revolución» y a criticar a la DRU por «anteponer el poder de los sindicatos» mientras afirmaba a la vez que «no es posible hacer la revolución sin la acción de los partidos», para concluir pidiendo un «compromiso» entre las tesis sindicalistas de Escóbar y la posiciones defendidas por el frente de pequeños partidos «revolucionarios». El PCB, al parecer, no tenía nada que decir más allá de recordar ritualmente que la alternativa real no se hallaba en el enfrentamiento de «oficialistas» y «antioficialistas», sino entre «democracia» y «fascismo». Véase COB, *VI Congreso de la COB...*, cit., pp. 105-107.

lo que cabía esperar en el medio plazo de la descomposición económica. En medio de tanta insensatez, los trosquistas del grupo de Lora tenían sobrados motivos para ufanarse de defender el único discurso coherente:

«¿Por qué dicen que es imposible?. ¿Por qué se necesita aumentar la productividad?. El salario mínimo vital no puede estar condicionado a la producción. Es obligación de todo gobierno y toda clase dominante alimentar a sus esclavos. Si no pueden hacerlo, entonces hay que echarlos del poder»

Para ellos, el salarismo era exactamente eso: una consigna demagógica destinada a agravar la crisis económica para revelar en toda su intensidad las contradicciones del capitalismo dependiente. Sólo faltaba que la nueva «dirección traidora» se animara a hablar de estrategia, arribando a la única conclusión coherente tras haber optado por multiplicar el viejo radicalismo reivindicativo; que reconociera que «la única forma de gobierno para los explotados es la dictadura proletaria» y que «la vía de la toma del poder es insurreccional»; que dejara de «poner en duda la capacidad de la clase obrera», aceptando que la victoria final estaba un tiro de piedra¹⁰⁵. Si no, ¿hacia dónde esperaba llevar al movimiento obrero?.

¹⁰⁵ Ascensio Cruz, intervención en la Comisión Política, en *VI Congreso de la COB...*, pp. 32-34.

LA DESINTEGRACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO

EL GOBIERNO PROVISIONAL

Las conversaciones que iniciaron los representantes de la UDP y de la COB tras la conclusión del VI Congreso despejaron de inmediato cualquier duda acerca de cuál iba a ser en adelante la conducta del nuevo Comité Ejecutivo. El reelecto Juan Lechín no tuvo ningún reparo en afirmar a la prensa, al término de su primera reunión con los líderes de la UDP, que «de antemano estamos rechazando cualquier medida económica del gobierno porque estamos seguros que van a continuar con la política hambreadora»¹⁰⁶; dos días después, la COB decretaba «estado de emergencia y movilización nacional para impedir la aplicación de nuevas medidas antipopulares»¹⁰⁷ y dirigía una nota a la dirección de la UDP que comenzaba afirmando lo siguiente:

«El Comité Ejecutivo de la COB ha decidido hacer conocer a ustedes que el máximo organismo laboral del país, así como todos los trabajadores bolivianos, se opondrán intransigentemente a cualquier medida que implique devaluación del peso boliviano, elevación de precios de los productos que integran la canasta familiar, elevación del precio de los carburantes y de la energía doméstica, ya que todo ello entraña siempre una reducción en el ya exiguo poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de campesinos y pequeños productores independientes»¹⁰⁸.

Con este planteamiento inicial no es difícil entender que la preparación de su respuesta generara fuertes tensiones en los partidos gobernantes, que llegaron incluso a pedir disculpas a los representantes sindicales por verse obligados a aplazarla «indefinidamente»¹⁰⁹. En el seno de la UDP se estaba debatiendo el carácter que debía darse a la rees-

¹⁰⁶ *Presencia*, 22 de septiembre, 1984.

¹⁰⁷ *Presencia*, 24 de septiembre, 1984. La actitud de la COB frente al gobierno daba la razón a los comentarios de la prensa más reaccionaria. *El Mundo*, en su editorial del 1 de octubre afirmaba así que «La Central Obrera Boliviana, al margen de todo precepto legal, ha decidido vetar la adopción de cualquier medida económica por parte del Gobierno. En la práctica, lo que está haciendo es impedir que el Poder Ejecutivo ejerza sus funciones constitucionales».

¹⁰⁸ AMTDL, Correspondencia recibida, Tomo 4-1984. s/n.

¹⁰⁹ Declaraciones de Oscar Eid a la prensa después de su breve entrevista con los miembros de la COB que esperaban en el lugar fijado para la primera reunión. Véase *Hoy*, 6 de octubre de 1984.

tructuración del gabinete prevista para encarar la «segunda etapa» de su gobierno -en octubre se cumplían los dos primeros años del mandato de Siles Zuazo-, a partir de la exigencia avanzada por el PCB y el MIR de fortalecer el contenido «liberador» del programa del frente¹¹⁰. Se discutía la conveniencia de volver a los orígenes, ensayando, tras el colapso del paquete estabilizador de abril, *un nuevo experimento heterodoxo que se presentaba como una exigencia política ineludible*. La derrota de sus militantes en el VI Congreso de la COB había sido sin duda un duro golpe para el PCB, un partido que derivaba su poder de su fuerte presencia orgánica en los sindicatos, y que necesitaba por lo tanto reconstruir el prestigio perdido entre la clase obrera para sobrevivir en el escenario político nacional. El juego del MIR, marcado por las ambiciones electorales de Jaime Paz, resultaba menos claro, pero *parecía evidente que el gobierno estaba obligado, más allá de los intereses de particulares de cada uno de los partidos, a realizar un último esfuerzo para obtener la cooperación de los sindicatos*.

Siles Zuazo, en efecto, atravesaba un momento político particularmente delicado, enfrentado a una agresiva campaña de acoso por parte de la oposición, que continuaba dispuesta a utilizar todos los medios para profundizar su desprestigio y forzar una adelanto de las elecciones. A finales de agosto, la revelación de una entrevista entre el jefe del Comité Nacional de Lucha Contra el Tráfico de Drogas y Roberto Suárez, el mayor narcotraficante del país, ofreció una ocasión inmejorable para el despliegue de toda la violencia verbal de que era capaz la impoluta derecha boliviana y le permitió incluir en la agenda la amenaza de un juicio de responsabilidades al Presidente. La ofensiva de los "padres de la patria" contó de nuevo con la ayuda directa de los empresarios privados, que aprovecharon el asesinato de un hacendado a manos de uno de sus empleados para organizar el 4 de septiembre un cierre patronal de 24 horas, envenenar el ambiente político con un torrente de declaraciones sobre la «amenaza comunista» y el «caos y la anarquía» reinantes en el país, y conminar de paso a sus afiliados a «ignorar» cualquier disposición de política económica que dictara el gobierno.

En ese contexto, la crisis política interna que estaba viviendo la UDP sólo podía solucionarse con la aceptación de las tesis del PCB, dado que con la derecha sólo cabía firmar una «rendición incondicional». De este modo, el maltrecho gobierno de Siles Zuazo aseguró finalmente a los sindicatos que había decidido inaugurar su «nueva etapa» retomando

¹¹⁰ PCB, "Análisis político, económico y social", 5 de octubre de 1984. Archivo personal.

y profundizando «los lineamientos programáticos que permitieron a la coalición obtener la mayoría de votos en las pasadas elecciones»¹¹¹. En aquella respuesta que tanto les había costado elaborar, los partidos de la UDP declararon enfáticamente su voluntad de acordar todos los términos de la política económica con los representantes obreros, y señalaron una vez más la identificación absoluta de la coalición izquierdista con los planteamientos de la COB en materias como el fortalecimiento del área estatal de la economía, la reforma de la administración pública, la defensa del poder adquisitivo del salario y la promoción de las condiciones de vida de las grandes mayorías nacionales. La tarea inmediata era desde luego recuperar «el control efectivo de las palancas de mando de la economía y la sociedad», introduciendo ajustes de urgencia. Pero éstos en ningún caso serían impuestos «verticalmente», sin una concertación amplia y un acuerdo previo con los sindicatos que permitiría tal vez emprender con éxito un nuevo giro hacia la heterodoxia, desechando «correctivos de tipo convencional, centrados básicamente en el sistema de precios y mercado» para diseñar «un nuevo enfoque» en política económica. *La propuesta de concertación, radicalmente abierta, planteaba así «un profundo desafío a la imaginación del gobierno, de las organizaciones sindicales y de los sectores populares»*¹¹².

Lo más probable es que la COB tuviera plena conciencia de que de su respuesta dependía en lo inmediato la capacidad de supervivencia de la izquierda en el gobierno. En cualquier caso, optó por confirmar su voluntad de ruptura, agudizando deliberadamente el aislamiento del ejecutivo:

«(las propuestas de la UDP) sólo buscan vitalizar al gobierno en su estado de debilidad en que se encuentra por incoherencia programática e ideológica. Lo que se busca no es atender las necesidades e intereses de los obreros, campesinos y sectores medios empobrecidos, sino fortalecer al Estado a costa de la supeditación del movimiento popular a una política de conciliación de clases, orquestada en base a una planificación concertada en lugar de reforzar la unidad del pueblo boliviano alrededor de un Programa de Emergencia Liberador»¹¹³

Mientras contestaba de ese modo a la propuesta de concertación de la UDP, la COB iniciaba un plan de movilizaciones «contra el hambre, el paquete económico y el golpismo»,

¹¹¹ *Presencia*, 10 de octubre, 1984.

¹¹² *Ibid.* Respuesta del CEN de la UDP a la COB.

¹¹³ Resoluciones del Ampliado nacional de dirigentes, en *Presencia*, 13 de octubre, 1984.

que comprendía marchas y concentraciones en las principales ciudades del país. En los discursos que cerraron la mayor de ellas, celebrada el 12 de octubre en La Paz, los oradores sindicales, encabezados por el nuevo Secretario General de la organización matriz, amenazaron con «echar a patadas» a los parlamentarios si persistían en conspirar contra Siles Zuazo, y aseguraron conocer a «los pazestensoristas y a los fascistas de ADN», pero dejaron igualmente claro que no estaban dispuestos a conceder ningún margen al gobierno: las movilizaciones debían entenderse como «el ultimátum para que el gobierno responda, caso contrario, se atenga a las consecuencias»¹¹⁴. Pero, ¿qué otra cosa podía responder la UDP?

A lo largo de varias rondas de conversaciones, salpicadas por un largo intercambio de cartas, propuestas, desmentidos y comunicados contradictorios sobre las posiciones mutuas, los representantes gubernamentales se esforzaron por alcanzar algún acuerdo sobre medidas concretas de política coyuntural para detener la crisis, pero la COB se negó a concertar en ese terreno: las medidas de corto plazo debían dirigirse, «en virtud de las resoluciones del último congreso de la COB», a la «recuperación inmediata del poder adquisitivo de los salarios»¹¹⁵. La dirección de la central sindical no estaba dispuesta esta vez a hacer la más mínima concesión en materia salarial y, por lo tanto, no tenía nada que negociar con el gobierno. Según Juan Lechín, los trabajadores se limitaron en las reuniones sucesivas a repetir la letanía de las "reformas estructurales", y «no entraron a discutir las medidas económicas» a dictarse; éstas eran «de responsabilidad exclusiva del gobierno, al haber desechado el plan económico de la Central Obrera Boliviana»¹¹⁶.

Finalmente, el Ampliado Nacional de dirigentes sindicales del 6 de noviembre decidió romper el diálogo de sordos y dar un «plazo» de 24 horas al gobierno para que tomase una decisión, advirtiéndole de nuevo que «si no quiere caerse, tendrá que adoptar medidas que no atenten contra la economía popular»¹¹⁷. En caso de que el gabinete se mantuviera inactivo, la COB convocaría en primer término una huelga general de 48 horas y decidiría la conveniencia de «radicalizar» las medidas de presión en función de la evolución posterior

¹¹⁴ *Hoy*, 13 de octubre, 1984.

¹¹⁵ Respuesta de la COB a la UDP, en *Presencia*, 24 de octubre, 1984.

¹¹⁶ *Presencia*, 31 de octubre, 1984.

¹¹⁷ *Hoy*, 7 de noviembre, 1984.

de los acontecimientos¹¹⁸. El paro de 48 horas se realizó, como estaba previsto, los días 9 y 10 de noviembre, y el 14 se inició una huelga general indefinida. Por primera vez, la medida más extrema del repertorio sindical no se desencadenó como una respuesta a medidas ya adoptadas, sino como un movimiento destinado explícitamente a alterar el contexto de decisión de los actores gubernamentales. Las negociaciones se reiniciaron ahora bajo la amenaza de una «radicalización» de la huelga general, que supondría la suspensión de todos los servicios de emergencia¹¹⁹, y la presión logró de hecho acentuar las discrepancias entre los partidos de la UDP sobre algunos aspectos de la política económica a adoptarse, reforzando los argumentos e incrementando el poder de negociación de quienes pugnaban por acentuar el «viraje a la izquierda»¹²⁰.

Pero el gobierno tenía muy poco margen de maniobra en los ajustes de corto plazo, *y la actitud intransigente de la COB terminó hundiendo al frente gobernante en la que sería su crisis definitiva*. Tras la convocatoria de la huelga general indefinida, en efecto, los acontecimientos políticos se precipitaron. Los dirigentes de la UDP continuaron intentando hasta el último momento conseguir algún acuerdo con la COB para eludir el desenlace, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Los ministros del área económica se presentaron el 21 de noviembre en el Ampliado Nacional de la COB para explicar por última vez sus razones y solicitar el apoyo de los trabajadores. No lo lograron. En ese momento, el PCB hizo pública su decisión de abandonar el gobierno debido a la imposibilidad de dialogar con los nuevos liderazgos sindicales¹²¹, y los representantes de todos los principales partidos políticos del país, que mantenían conversaciones desde el 14 de noviembre bajo el auspicio de la Iglesia, acordaron finalmente adelantar las elecciones nacionales a junio de 1985,

¹¹⁸ *Hoy*, 7 de noviembre, 1984.

¹¹⁹ *Presencia*, 20 de noviembre, 1984.

¹²⁰ El PCB y el MIR condicionaron la consideración de las medidas de ajuste a la aprobación previa de otras disposiciones, entre ellas la nacionalización del Banco Industrial y las industrias molineras, la creación de un Instituto Nacional de Comercio y un Banco Estatal de Comercio Exterior.

¹²¹ Según Marcos Domic, parlamentario y dirigente del partido, la causa de la renuncia de sus ministros fue «la imposibilidad a que se llegó para concertar una acción común entre la clase obrera y el gobierno» -una concertación sin la cual las medidas de política económica quedaban «incompletas» y estaban «condenadas al fracaso»-, debido a la actitud de las corrientes «salarialistas» e «irresponsables» que dominaban en ese momento en la COB: «Hemos preferido dejar el gobierno para ir a pelear estas posiciones dentro de la clase obrera». *Informe Mensual*, Noviembre 1984, p. 6.

recortando en más de un año el mandato de Siles Zuazo¹²².

Totalmente aislada, enfrentada a las presiones cruzadas de todos los actores sociales y políticos, la UDP tuvo que resignarse a aceptar que la «segunda etapa» del gobierno de la izquierda había nacido muerta. A partir de ese momento, la convocatoria de elecciones anticipadas inauguraba una largísima campaña electoral. Los comicios se convertirían en adelante en la preocupación exclusiva del nuevo gobierno *provisional* de Siles Zuazo y en un referente ineludible para todos los actores socio-políticos, *alterando de un modo radical el contexto estratégico en que hasta entonces había tenido lugar la interacción entre los sindicatos y las élites políticas del estado*.

LA APOTEOSIS DEL "SALARIALISMO" Y LA HIPERINFLACIÓN

El nuevo paquete económico, desprovisto ya por completo del carácter "fundacional" que habían querido otorgarle los actores gubernamentales, se hizo público el 22 de noviembre de 1984, y, pese a contener medidas estructurales encaminadas a fortalecer al sector estatal de la economía e importantes avances políticos para el movimiento obrero¹²³, tuvo que enfrentar una oposición cerrada de la COB. Mientras la central sindical sostenía la huelga general indefinida y la UDP terminaba su proceso de desintegración¹²⁴, lo que quedaba del gobierno no tardó mucho en decidir poner fin al conflicto concediendo a los trabajadores un espectacular aumento salarial, del orden del 600%, que hizo que el salario real fuera en diciembre un 50% superior al que se alcanzó tras la primera "reposición" de la democracia. El Comité Ejecutivo de la COB tenía sobrados motivos para sentirse satisfecho si aquél era el estilo de "decisión" que había estado exigiendo con su prolongado "ultimátum", aunque

¹²² Los documentos más relevantes y las actas de las sucesivas reuniones entre los representantes de los principales partidos del país están recogidos en Muller & Machicado (1987)

¹²³ Fundamentalmente, la autorización a las empresas estatales para realizar importaciones directas, anulando la intermediación de los importadores privados para reducir costes y agilizar las operaciones; la creación de un Consejo Nacional de Comercio y Financiamiento Exterior para coordinar el funcionamiento del área externa de la economía, diseñando estrategias para racionalizar las importaciones e incrementar las exportaciones, en especial de las empresas públicas; la ampliación de la participación laboral en los directorios de los Bancos Estatales, y la creación de la Empresa Nacional de Seguros. Véase UDAPE (1985), pp. 62-73.

¹²⁴ A mediados de diciembre de 1984 el MIR rompió con la coalición y Jaime Paz Zamora renunció a la Vicepresidencia para presentar su candidatura presidencial a las elecciones de junio. El PCB, que había salido ya del gabinete en el mes anterior, abandonó también el frente político.

anegar el país con una nueva partida de billetes de banco importados era desde luego una salida que dejaba en muy mal lugar a «la imaginación del gobierno, de las organizaciones sindicales y de los sectores populares».

La central sindical había conseguido llevar al gobierno a una situación de debilidad extrema, anulando por completo su voluntad de oponer cualquier resistencia seria a las demandas de las bases obreras. A finales de 1984 era sin duda menos capaz de sostener, como hizo entre mayo y julio, una oferta salarial máxima a la espera de que la COB terminara viéndose forzada a aceptarla; seguramente necesitaba con mucha mayor urgencia aplacar un conflicto social que había adquirido, tras los resultados del VI Congreso de la COB, una dimensión nueva. La nueva dirección nacional de la COB se encontraba, en efecto, "atada" a una estrategia de confrontación frontal, y sin duda sus *amenazas* de disponer cualquier medida, incluyendo la suspensión de todos los servicios de emergencia, y de mantener las movilizaciones "hasta las últimas consecuencias", multiplicando los *costes* del conflicto, *eran ahora más plausibles*.

Pero, sobre todo, el gobierno carecía ahora de *motivos* para intentar ofrecer una resistencia seria a la COB. Si la experiencia de la deslegitimación del Comité Ejecutivo tras los acuerdos de mayo parecía *garantizar* que los nuevos dirigentes iban a ordenar cualquier "radicalización" de las medidas, que estaban dispuestos a llevar al país a una situación límite para evitar la repetición del "fracaso", la disolución del frente político de izquierdas y la convocatoria anticipada elecciones habían provocado, por otro lado, *una alteración drástica de las prioridades del gobierno, debilitando su interés en enfrentar las reivindicaciones obreras*. El deterioro de la situación económica, en efecto, era ya ante todo un problema del sucesor de Siles Zuazo, y los objetivos del gobierno provisional se centraban casi exclusivamente en garantizar la celebración de los comicios y la transmisión regular del poder. La *nueva matriz de pagos* del gobierno, por lo tanto, favorecía enormemente el poder de negociación de la COB en el corto plazo. Dado que el control de la inflación no figuraba ya como la prioridad de su agenda política, era muy poco lo que podía ganar resistiendo las demandas salariales de los sindicatos. Por el contrario, podía perderlo todo si se desencadenaba una explosión de descontento social capaz de precipitar una salida militar o su destitución mediante un "golpe parlamentario" para asegurar la celebración de las elecciones, lo que frustraría por completo la consecución de la *única "meta histórica" que estaba todavía a su alcance*. El gigantesco aumento salarial de finales de 1984 fue así la decisión de un

gobierno provisional que sólo deseaba ya comprar tiempo para arribar sin mayores sobresaltos a la fecha de su muerte anunciada.

Por supuesto, los nuevos niveles salariales se financiaron por completo mediante emisión inorgánica de dinero, y *la economía se hundió definitivamente en una situación hiperinflacionaria*: el IPC ascendió a un ritmo mensual del 60% en diciembre, del 68% en enero y del 182% en febrero de 1985. El incremento salarial fue de tal magnitud que a pesar del ascenso exponencial del IPC el salario real promedio del trimestre enero-marzo de 1985 se mantuvo todavía muy por encima del nivel alcanzado en noviembre de 1982. De hecho, los datos parecen indicar que en el último semestre del gobierno de Siles Zuazo, entre enero y junio de 1985, los salarios reales se recuperaron en medio de la hiperinflación, y que en general fueron sustancialmente mayores a los vigentes inmediatamente después de la primera "reposición" de la democracia (CUADRO 5.1).

CUADRO 5.1

INDICE DE SALARIOS REALES: NOVIEMBRE 1982-JUNIO 1985

(BASE NOVIEMBRE 1982=100)

TRIMESTRE	SALARIO EN MES FINAL DEL TRIMESTRE	SALARIO PROMEDIO DURANTE EL TRIMESTRE DE GASTO
1982		
NOV-DIC	92.8	74.2
1983		
ENE-MAR	103.4	87.3
ABR-JUN	88.2	93.5
JUL-SEP	80.9	79.5
OCT-DIC	91.9	81.4
1984		
ENE-MAR	65.5	72.3
ABR-JUN	69.5	67.2
JUL-SEP	65.6	65
OCT-DIC	150.5	81.2
1985		
ENE-MAR	122.0	139.0
ABR-JUN	100.5	102.3

Fuente: Elaboración de Morales (1987b: 70) sobre datos de UDAPE

El fuerte crecimiento de los salarios, que reflejaba el mayor poder de negociación que había obtenido en lo inmediato la COB tras su ruptura abierta con la UDP y la transmutación del gobierno de la izquierda en un gobierno provisional, *no redujo sin embargo el descontento de las bases sindicales*. El problema era que *la enorme crisis de desabastecimiento limitaba la posibilidad de hacer efectivos los salarios*, y tal vez pueda mantenerse que en aquéllas condiciones los trabajadores padecieron una suerte de "ilusión monetaria perversa" que les impulsó a continuar exigiendo al gobierno mayores aumentos salariales (Morales, 1987b: 72). La "ilusión", de haber existido, sólo podría referirse sin embargo a su incapacidad para percibir el problema *global*, porque *desde una perspectiva sectorial la persistencia de la puja salarialista tenía una racionalidad evidente*. Mientras la dinámica de la crisis hiperinflacionaria alimentaba a un ritmo exponencial la especulación y el contrabando, agravando la escasez de bienes, los sectores que obtenían ganancias por encima de la media lograban, en efecto, mejorar durante un tiempo su capacidad para competir en los mercados desabastecidos. Y en esta situación de *Dilema de Prisionero* en la que permanecían encerrados los grupos de trabajadores, las conductas egoístas resultarían crecientemente agresivas a medida que la reducción del total de bienes a repartir fuera haciendo que los conflictos sectoriales adquirieran una dinámica cada vez más próxima a la "suma cero". Dado que los aumentos salariales sólo resultarían útiles si superaban a los del resto, sólo cabía esperar una multiplicación de las acciones violentas para defender las "conquistas" sectoriales, como el laudo arbitral que concedió un incremento salarial del 200% a los trabajadores fabriles y motivó una huelga general indefinida del sector y el secuestro durante dos días de 150 directivos en fábricas en enero de 1985; dado que habría cada vez menos recursos para todos, los grupos se enfrentarían abiertamente para defender sus posiciones, aún a costa del empleo de sus compañeros, como los mineros de Siglo XX que decidieron hacer oídos sordos a las apelaciones a su «posición revolucionaria y solidaridad de clase» cuando dejaron de pagar a sus asalariados de la "Voz del Minero" y decidieron cerrar la radioemisora, dejándolos sin más en la calle¹²⁵.

Ya en enero de 1985 resultaba evidente que la estrategia de confrontación abierta con el gobierno no había *mitigado la tendencia hacia la desintegración interna del movimiento sindical*. La COB continuaba teniendo sobrados motivos para preocuparse por los efectos de

¹²⁵ *Presencia*, 26 de enero, 1984.

«la situación económica, el aumento de los precios, el desabastecimiento y otros problemas que no son atendidos favorablemente», y sólo cabía esperar que las cosas fueran a peor ante la pasividad de un gobierno abúlico:

«El gobierno no da muestras de vida y, si la COB se queda tranquila, se convertirá en espectador del deterioro nacional mientras los trabajadores asumen posiciones individuales obligados por la desesperación»¹²⁶

Lo que sí en estaba consiguiendo en cambio la radicalización de las estrategias de conflicto era *alimentar el resentimiento de segmentos cada vez más amplios de la población popular hacia los sindicatos*. Y los miembros del Comité Ejecutivo eran, sin duda alguna, perfectamente conscientes de lo que estaba ocurriendo. El propio Juan Lechín, en una evaluación de los resultados de la larga huelga general de noviembre de 1984, había reconocido que la COB estaba generando un amplio vacío social a su alrededor y había manifestado abiertamente su desconsuelo ante la «incomprensible actitud de la ciudadanía que condenó la huelga por las molestias que le provocó», en particular «los sectores artesanales y otros sin dependencia salarial» que «interpretan la huelga como contraria a sus intereses, sin tomar en cuenta que la COB lucha por el bienestar común de los bolivianos»¹²⁷. Aquel mismo día, en el curso de un Ampliado Nacional de dirigentes sindicales, expresó con una absoluta claridad desazón que dominaba a los miembros del Comité Ejecutivo: «No podemos ni debemos quedarnos solos. La fortaleza de la COB está en la lucha por las mayorías, en la que aún no hemos logrado conseguir nada»¹²⁸.

Los acontecimientos estaban adquiriendo un cariz realmente preocupante, y los problemas de la COB no se limitaban a que en verdad no estaba consiguiendo nada para nadie. Además, las exigencias de la estrategia de confrontación aprobada en el VI Congreso tendían a multiplicar *necesariamente* los agravios *directos* sobre una población popular no asalariada que aparecía como un mero rehén pasivo de los sindicatos en su pugna con el gobierno y que era en los hechos el principal receptor de los costes de los conflictos. Juan Lechín podía lamentar el aislamiento social de la COB, y preocuparse seriamente por ello; pero pocos días después, en el curso de la misma huelga general de noviembre de 1984, se

¹²⁶ Noel Vásquez, Secretario Permanente de la COB, en *Presencia*, 7 de enero, 1985.

¹²⁷ *Última Hora*, 23 de noviembre, 1984. El énfasis es mío.

¹²⁸ *Presencia*, 23 de noviembre, 1984. El énfasis es mío.

veía obligado a amenazar con el hambre a todo el pueblo de Bolivia, asegurando al gobierno que «si actualmente hay comida, posibilidades de transporte de artículos de primera necesidad importados, eso se va a acabar»¹²⁹. En estas condiciones no resultaba desde luego muy difícil convencer a la población civil de que la COB había adoptado una actitud "antinacional" y buscaba dañar deliberadamente a las mayorías para favorecer intereses estrechos y ambiciones políticas espurias.

El discurso de los dirigentes nacionales, en efecto, avalaba en la práctica cualquier acción "salvaje" que decidieran adoptar los sectores, y los petroleros, empleados en servicios públicos, todos los que estaban en una situación privilegiada para chantajear al gobierno atentando contra los pilares de la infraestructura productiva o privando a la población de servicios básicos, tomaron buena nota de ello. Carecía de importancia que, a la luz de los resultados, la COB criticara en ocasiones el vandalismo, cada vez más frecuente, de grupos de trabajadores, asegurando que los actos violentos estaban siendo promovidos por «elementos ajenos al movimiento obrero» que arrastraban a los sindicatos a adoptar actitudes «que sólo perjudican a la población, afectada ya negativamente por la crisis económica»¹³⁰. Resultaba inútil repudiar la sucesión de sabotajes o de cortes intempestivos del fluído eléctrico y el servicio telefónico, que perjudicaban ante todo «a los mismos trabajadores y a sus familiares»¹³¹, si el Comité Ejecutivo de la COB, abocado a salvar su legitimidad ante la clientela multiplicando el radicalismo reivindicativo, sólo ofrecía argumentos para justificar esas prácticas. Después de todo, como afirmaba por entonces Juan Lechín, «los poderes Ejecutivo y Legislativo, que violaron la Constitución Política del Estado con el adelanto de las elecciones para 1985, no pueden exigir a los ciudadanos el respeto a las leyes»¹³².

En el origen de la creciente violencia de las luchas sectoriales se encontraba también sin duda *la rápida desvalorización que estaban sufriendo los recursos económicos del movimiento sindical*. Las preferencias inter-temporales de los trabajadores de cada uno de los sectores se orientaban con una intensidad creciente hacia el presente más inmediato, dado que los ahorros capaces de sostener las movilizaciones, de existir, se evaporaban a una velocidad

¹²⁹ Hoy, 1 de diciembre, 1984.

¹³⁰ Comunicado de la COB, en *Presencia*, 1 de diciembre, 1984

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Hoy, 15 de diciembre, 1985.

vertiginosa en el contexto hiperinflacionario, y el valor de los aumentos porcentuales reivindicados caía cada semana, de modo que había que obtenerlos hoy y conseguir que se desembolsaran mañana, a ser posible por adelantado. Pero si los trabajadores estaban realmente "desesperados", como aseguraban a diario los dirigentes sindicales de base para justificar el desencadenamiento de sus acciones salvajes, el gobierno, por el contrario, tenía cada vez menos que perder con la espera. *Su nueva matriz de pagos le hacía relativamente indiferente al daño económico que pudieran provocar los trabajadores con sus movilizaciones;* y ese daño, además, era cada vez menor, dado el declive general de la producción. Una nueva huelga general indefinida en cualquiera de los agonizantes campamentos de COMIBOL era ya un fenómeno tan previsible, natural e inane como la lluvia en la estación húmeda del Oriente, y no era el gobierno provisional de Siles Zuazo quien debía preocuparse por las cifras catastróficas que entregaban regularmente a la prensa los directores obreros de la corporación minera pública.

En estas condiciones, *los sectores estaban obligados a extender continuamente su potencial disruptivo, volviéndolo directamente* contra todos sus conciudadanos y ensayando «nuevas formas de lucha» para compensar el deterioro de sus recursos económicos. Mientras el repertorio de acciones de protesta se enriquecía con adquisiciones como la «huelga de hambre seca», el bloqueo de calles se convertía en una realidad cotidiana, proliferaban los cortes abruptos en las comunicaciones telefónicas o el suministro eléctrico, en la provisión de gasolinas y combustibles de uso doméstico, e incluso de la atención hospitalaria, y las acciones dirigidas contra personas y grupos concretos, tanto "enemigos" como "compañeros de clase". Las ocupaciones de oficinas, las tomas de rehenes y los asaltos físicos a representantes gubernamentales se desarrollaron en paralelo a los bloqueos de camiones o ferrocarriles con víveres para las pulperías mineras y a las negativas a pagar sueldos o desembolsar recursos y materiales necesarios para el funcionamiento de otras empresas. Provocar deliberadamente problemas graves a los "compañeros de clase" para "inducir" su solidaridad, ampliando la escala de los conflictos, se convirtió en una práctica recurrente, aunque, por supuesto, nunca confesada de un modo abierto¹³³.

¹³³ Una excepción notable fue la negativa de los trabajadores de CENACO (Centro Nacional de Computación), en huelga general indefinida, a despachar las planillas de los maestros urbanos. En aquella ocasión sus representantes no tuvieron reparo en afirmar que buscaban con ello forzarles a decretar también una huelga en demanda del pago de sus sueldos —lo que efectivamente ocurrió—, para obtener así «el respaldo de los trabajadores de la educación para presionar al gobierno en busca de un incremento de sueldos». Hoy, 12 de septiembre, 1984.

El efecto devastador que estaba teniendo el "salvajismo" abierto de los conflictos sobre el prestigio social de la COB y la unidad del movimiento sindical resultaba sin duda especialmente preocupante *en el horizonte de las elecciones generales previstas para junio*. La aparente confianza de Juan Lechín y otros líderes obreros en que si bien las elecciones sólo beneficiarían a «sectores de la oligarquía, el Imperialismo y el Fondo Monetario Internacional» no introducirían ningún cambio sustancial en las políticas gubernamentales¹³⁴, reflejaba desde luego certezas que tenían un fuerte arraigo en la experiencia histórica del movimiento obrero, pero a lo largo de los últimos años se habían producido transformaciones de una enorme importancia en su entorno estratégico que la COB no podía desconocer. Los partidos de derecha, por supuesto, no aportaron ninguna información sobre el contenido de unos programas económicos todavía inexistentes, pero los empresarios privados habían sostenido de un modo muy consistente a lo largo de los últimos años *un discurso anti-estatalista que reflejaba un cambio radical frente a sus actitudes tradicionales y que parecía amenazar directamente a los recursos y los intereses del núcleo del movimiento obrero*.

La prédica abstracta de la CEPB en favor de la reducción del tamaño del estado y de la apertura externa de la economía tendría que afrontar, por supuesto, la prueba de su traducción en medidas concretas, pero la creciente fortaleza organizativa del empresariado y su novedosa implicación en política *en tanto que clase*¹³⁵, ofrecían razones para tomarse en serio la amenaza. La COB era sin duda consciente de la amplia representatividad que había adquirido la patronal, conocía la ideología «neoliberal» que había desarrollado a partir de sus experiencias traumáticas en los últimos regímenes militares y reforzado en su oposición frontal al gobierno de la UDP, y sabía de su intensa participación e influencia en los principales partidos de la derecha¹³⁶. Si la central obrera sabía de sobra a comienzos de 1985 que «el ansia popular, bajo la angustia del pan cotidiano, se encuentra al borde de

¹³⁴ El gobierno que surga de las urnas, afirmaba Lechín, «seguirá con la misma política aplicada en los dos últimos años». *Presencia*, 16 de diciembre, 1984.

¹³⁵ Mediante la representación institucional de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que agrupaba de un modo efectivo a la gran mayoría de los grupos empresariales privados, y ya no, como había ocurrido en el pasado, a través de la participación individual y la integración de grupos de empresarios en las redes clientelares del estado.

¹³⁶ La COB, de hecho, denunció una y otra vez el apoyo directo de los empresarios a las campañas electorales de el MNRH y la ADN. Sólo unas semanas después de la convocatoria electoral, el Secretario General de la organización aseguraba que «tenemos información de que los empresarios privados están aportando ingentes cantidades de dinero para apoyar las candidaturas de Bánzer y Paz Estenssoro». *Hoy*, 14 de diciembre, 1984.

la peligrosa desesperación, atizada por las más negras capas de la reacción»¹³⁷, también debía sospechar que lo que estaba en juego era mucho más que un cambio en las siglas, una nueva careta para el mismo contendiente -la entrada de algunos «nuevos ministros con mayor capacidad que los de la UDP», como afirmaba por entonces Juan Lechín¹³⁸-.

Resultaba indudable que con independencia del contenido y la amplitud que adquirieran los programas de estabilización y reforma económica, la erosión de la imagen y de la representatividad de la COB limitaría necesariamente su poder de negociación frente a cualquier gobierno que surgiera de las urnas. Sin embargo, a estas alturas era ya muy poco lo que podía hacerse al respecto. Tras la publicación del paquete de medidas de ajuste del 8 de febrero de 1985, y ante todo, durante las "jornadas de marzo", un gigantesco movimiento de protesta civil catalizado por la movilización inicial de los trabajadores mineros, la COB apuró sus últimas opciones para mejorar su posición de recursos frente a los actores socio-políticos de la derecha. Pero los distintos movimientos que emprendieron los líderes obreros en los estertores del mandato de Siles Zuazo terminaro sirviendo tan sólo para revelar con una claridad meridiana los límites y las contradicciones de la estrategia de confrontación frontal con el gobierno democrático que había adoptado la central sindical a partir de su VI Congreso.

¹³⁷ «La COB ante la situación del país (Documento de balance y análisis político)», 22 de enero, 1985, p. 5 [ACED, D-4142].

¹³⁸ *Presencia*, 16 de diciembre, 1984.

LOS RESULTADOS: LA DEMOCRACIA CONTRA LA COB

El 8 de febrero de 1985 se publicaron 11 decretos con medidas de ajuste destinadas a ralentizar la espiral inflacionaria. El gabinete "de transición" no se planteaba ya la posibilidad de detener la crisis (UDAPE, 1985: 74), y pretendía tan sólo disminuir sus efectos en lo inmediato para evitar que la profundización del colapso hiperinflacionario terminara creando una situación insostenible que pusiera en peligro el proceso electoral o simplemente convenciera a todos de la incapacidad de Siles Zuazo para presidirlo. Tanto la devaluación de la moneda como los aumentos en los precios de los carburantes y tarifas públicas fueron muy fuertes, y provocaron un espectacular incremento del IPC del 182% en febrero¹³⁹.

La "compensación" salarial fue muy moderada y las expresiones de protesta se extendieron de inmediato por todo el país. Pero la COB prefirió eludir las reivindicaciones salariales y aprovechar la publicación de los ajustes para ensayar un cambio radical en sus estrategias que le permitiera reconstruir en lo posible su prestigio entre la población popular. El Ampliado Nacional del 12 de febrero instruyó así «nuevas formas de lucha en el marco de la movilización y autoorganización de los trabajadores», delineando ante todo un programa de abastecimientos que deberían aplicar los propios sindicatos. El Comité Ejecutivo de la COB afirmó en la ocasión que «la realización de paros, huelgas, manifestaciones, firmas de convenios y aprobación de decretos han sido inútiles para dar al país una solución a la crisis», y que había llegado el momento «para que los trabajadores muestren su capacidad de dar solución a los problemas más urgentes». Cada uno de los sectores del movimiento obrero recibiría instrucciones de la organización central para ejecutar en adelante el control de precios y el abastecimiento de productos de primera necesidad: los sindicatos fabriles deberían garantizar la venta directa de los alimentos producidos por la industria nacional, en colaboración con comités de abastecimiento y de *amas casa*; los campesinos, organizar la venta directa de sus productos al consumidor urbano, y los trabajadores petroleros cuidar del precio del transporte, estudiando la posibilidad de bajar los precios de los carburantes,

¹³⁹ Cada vez que se hacía un reajuste en los precios controlados, incluido el tipo de cambio, se producía de hecho un fuerte salto en el IPC. Pero conviene tener en cuenta, como señala Morales (1987b: 49), que el peso de los precios controlados en el cálculo del IPC dificulta el análisis de la evolución de la inflación *real* en períodos cortos, ya que «se puede concluir que un determinado mes fue de alta inflación, siendo que lo único que ocurrió fue reconocer abiertamente mediante la corrección -de los precios controlados-, una situación de *inflación reprimida* acumulada desde meses anteriores».

encontrando «formas no antipopulares de capitalizar su empresa». Todos los trabajadores de base tendrían que asumir «tareas de vigilancia y control» para eliminar la especulación y el contrabando¹⁴⁰.

El Comité Ejecutivo de la COB deseaba desde luego *evitar a toda costa la convocatoria de una nueva huelga general*, y se limitó a programar la realización de una serie de marchas y concentraciones de protesta para acompañar y dar la publicidad necesaria a las «nuevas formas de lucha». Se trataba de medidas casi puramente expresivas, porque resultaba impensable que las instrucciones sobre control de precios y abastecimientos se pusieran en práctica en una escala apreciable, dados los escasos recursos organizativos con que contaba el movimiento sindical y el nivel de "informalización" que había alcanzado por entonces la economía boliviana. Sin embargo, la decisión explícita de convertir a la COB en un "poder paralelo" abriría espacios para realizar alguna acción simbólica¹⁴¹, conseguiría tal vez enfatizar ante la población popular el abismo existente entre el gobierno y la central obrera, y ayudaría a descargar sobre aquél, acusado de biocotear los esfuerzos patrióticos de los sindicatos, toda la responsabilidad por una situación que había «sobrepasado ya los límites de lo previsible»¹⁴².

Pero la movilización sectorial de los mineros introdujo entonces un cambio radical en la situación. Las asambleas de base celebradas en los campamentos mineros, en efecto, obligaron a la FSTMB a ordenar «movilizaciones masivas hacia la sede de gobierno» para protestar contra la «falta de una definición en el aspecto salarial agravada por el total desabastecimiento de las pulperías y la elevación vertiginosa en los precios de los artículos de uso y consumo»¹⁴³, y cuando el 4 de marzo se realizó en La Paz la primera manifestación convocada por la COB ya había en la ciudad un importante contingente de trabajadores de las minas del interior del país. La presencia en la capital de 10.000 mineros, agotados después de recorrer grandes distancias y acompañados de sus mujeres y de sus hijos, reavivó tal vez en las conciencias el recuerdo de sus luchas, generando una amplia corriente de

¹⁴⁰ *Presencia*, 13 de febrero, 1985.

¹⁴¹ La COB distribuyó algunos alimentos de los almacenes estatales. La Comisión de abastecimiento de la COB afirmó entonces que sus acciones habían sido entorpecidas por las autoridades «porque consideraron que la distribución directa afectaba al principio de autoridad», pero que pese a ello había «beneficiado a centenares de amas de casa». *Presencia*, 2 de febrero, 1985.

¹⁴² Walter Delgadillo, Secretario General de la COB, en *Hoy*, 4 de febrero, 1985.

¹⁴³ Carta Abierta de la FSTMB a Siles Zuazo, 26 de febrero, 1985 [AS, FSTMB-65/85].

simpatía y solidaridad que alcanzó a casi todos los sectores de la población urbana¹⁴⁴. En cualquier caso, su llegada fue el detonante que permitió aunar el cansancio y la frustración acumulados por los trabajadores y la población popular en un gigantesco movimiento de oposición al gobierno, un auténtico "motín" popular. Comenzaban las *"jornadas de marzo"*:

«La movilización de mineros, fabriles, artesanos, desocupados, pobladores de barrios populares, amas de casa -organizadas y no organizadas en los Comités-, maestras mayores de los mercados, vivanderas de los callejones del Cementerio, Chijini, Sagárnaga, heladeros, sectores medios, estudiantes, organizaciones barriales juveniles y tantas otras familias y personas anónimas, fue un hecho que destacó durante la huelga de los 16 días en la ciudad-capital. Solidaridad más allá de toda previsión»¹⁴⁵

En este nuevo contexto, los dirigentes del Comité Ejecutivo de la COB, encabezados por Juan Lechín, recogieron y difundieron con entusiasmo la consigna de "¡Fuera Siles!"¹⁴⁶, que había comenzado a repetirse ya en las asambleas mineras celebradas unos días antes¹⁴⁷ y se extendía ahora por las calles de La Paz. Con la decisión de *potenciar el desplazamiento del conflicto hacia la arena política*, el Comité Ejecutivo pretendía sin duda lograr que la organización obrera apareciera de nuevo como el portavoz de un deseo de cambio que a esas alturas era universalmente compartido, devolviéndole el papel que había desempeñado en las luchas democráticas frente al gobierno de Bánzer y las dictaduras militares que se sucedieron a lo largo del proceso de transición. Y en el paroxismo de las "jornadas de marzo" sus reclamos de representatividad sobre el campo de "lo popular", que habían ido perdiendo credibilidad a lo largo de los dos últimos años, parecieron adquirir, en efecto, una realidad indiscutible. La COB, recogiendo "las voces de abajo", expresando la frustración de todos en una consigna política indiscutiblemente "popular", enarbolaba una vez más la representación de "todo el pueblo" de Bolivia, recuperaba el aliento épico, dejando atrás "el tiempo de las cosas pequeñas", y dirigía una amenaza formidable a cualquier

¹⁴⁴ «Nosotras sabemos que están luchando para todos los bolivianos. Hemos dado almuerzos, y si tenemos otra posibilidad vamos a seguir ayudando...»; «Yo estoy regalando refrescos a los mineros porque soy hija de obrero y esposa de obrero»; «Ellos también han llegado con sus hijos, vemos que no comen...». Vendedoras del mercado Figueroa, en *Aquí*, Nos. 173 y 174, marzo 1985.

¹⁴⁵ Sandóval (1986), p. 31.

¹⁴⁶ «Esta no es una consigna salida de arriba, sino son voces de abajo, que provienen de la democracia obrera boliviana», y no puede desconocerse porque «la del pueblo es la voz de Dios», afirmó Lechín en su discurso del 4 de marzo ante la multitud reunida en la Plaza de San Francisco. *Hoy*, 5 de marzo, 1985.

¹⁴⁷ *Hoy*, 26 de febrero, 1985.

gobierno que surgiera de las urnas¹⁴⁸, advirtiéndole que en caso de enfrentarse a los sindicatos «él también será muy débil»¹⁴⁹.

Pero esta vez la situación era radicalmente distinta de todas las que la COB enfrentó en el pasado inmediato. En primer lugar, porque la solución de "las cosas pequeñas" había adquirido una urgencia que seguramente no tenía precedentes, en particular *para los mineros*: sus pulperías estaban *realmente* desabastecidas y habían sido excluidos además de la "compensación" salarial que concedió el gobierno al resto de los trabajadores. Si el Comité Ejecutivo de la COB había recibido desde el principio las críticas de varios sindicatos de base contra sus "confusas" decisiones, contra su renuncia explícita a decretar las medidas de presión "tradicionales" para arrancar al gobierno una reposición salarial «adecuada»¹⁵⁰, ahora, enfrentado a la movilización minera y a la respuesta de los afiliados de otros sectores que habían decidido ya en asambleas sumarse a ella, tuvo que terminar considerando necesario «*declarar la huelga indefinida para evitar el rebasamiento de las direcciones sindicales por parte de sus bases*»¹⁵¹. Después de las intervenciones de los delegados mineros reclamando el apoyo de los compañeros para su lucha¹⁵² fueron, en efecto, muy

¹⁴⁸ Específicamente a Hugo Bánzer, que se perfilaba como el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones. Hubo muchas referencias a lo largo del conflicto a su papel como «aviso» para la derecha, pero valga este extracto de la evaluación que realizó la FSTMB de las jornadas de marzo: «...cuando la certera visión política de los trabajadores para ubicar al enemigo puede desarrollar su expresión combativa en las calles, como sucedió a través de las marchas y bloqueos en las jornadas de marzo, el pueblo se compenetra, y por ello resultó la movilización minera y la Huelga General Indefinida la más efectiva batalla lograda contra la derecha que es el banzerismo. Las barriadas populares de La Paz han aprendido lo que piensan y sienten los trabajadores mineros movilizados y los demás sectores, del dictador Bánzer y de su pretensión de volver a humillarnos con la tortura y la prisión, la explotación y la muerte». FSTMB, *Evaluación de nuestras jornadas de marzo*, Oruro, 14 de abril, 1985.

¹⁴⁹ Declaraciones de Juan Lechín, en *Hoy*, 18 de julio, 1985.

¹⁵⁰ Las críticas se arrojaban generalmente con un discurso ultrista. Un ejemplo muy ilustrativo, aunque sin duda extremo, de este estilo, es el del sindicato mixto de la Corporación de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ), que tras afirmar que «la burocracia cobista pretende -con sus «nuevas formas de lucha»- convertir a los obreros en gendarmes al servicio del gobierno, cuando en realidad de lo que se trata es de expulsar a la burocracia del poder y sepultar al actual sistema capitalista», exigió al Comité Ejecutivo de la COB que se limitara a plantear «objetivos concretos de lucha en relación al salario». *Hoy*, 27 de febrero, 1985.

¹⁵¹ *Presencia*, 7 de marzo, 1985.

¹⁵² Los delegados mineros pidieron continuamente la palabra en el curso del ampliado nacional del 7 de marzo, y atacaron con dureza a los dirigentes «que no cumplen con su función» resistiéndose a convocar la huelga: «No hemos venido a pedir como una limosna el apoyo a nuestra posición, venimos a exigir que los dirigentes cumplan con sus bases y no dilaten más esta situación». *Ultima Hora*, 8 de marzo, 1984. Sin duda, el Partido Socialista (PS-I) captó bien la naturaleza del problema planteado por los mineros cuando decidió apoyar la convocatoria literalmente «*como una medida desesperada* para evitar que los mineros se aislen, lo cual, de suceder, amenazaba con convertirlos en una trágica división de la clase obrera». PS-I Laboral, *Mañana el Pueblo*, No. 17, s/f.

pocos los dirigentes que se atrevieron a continuar insistiendo, durante el Ampliado nacional del 7 de marzo, en la necesidad de evitar a cualquier precio «que se repita la experiencia negativa de la huelga indefinida de casi un mes en noviembre del año pasado»¹⁵³. La experiencia se repetiría, y esta vez los resultados serían mucho peores.

Los trabajadores de las minas habían dejado sus campamentos enarbolando un pliego de demandas materiales concretas¹⁵⁴, pero tras la llegada del primer contingente minero a La Paz el sector mayoritario de la dirigencia había impulsado una transformación de las reivindicaciones originales en un programa maximalista que pretendía *expresar* la profundidad de la ruptura con el gobierno. La plataforma reivindicativa contenía ahora *en primer lugar* la demanda de la *aplicación inmediata del salario mínimo vital con escala móvil*; exigía la integración de todo el sector minero-metalúrgico, incluyendo las explotaciones auríferas privadas, en la estructura de COMIBOL; la estatización del transporte pesado, el transporte urbano y la banca privada; el monopolio estatal del comercio exterior; la nacionalización de la minería mediana, y el desconocimiento de la deuda externa con la banca internacional¹⁵⁵. El radicalismo extremo del programa, que contenía demandas que los propios dirigentes sindicales habían calificado de «inalcanzables» y «demagógicas» en las condiciones, indudablemente mucho más favorables, que enfrentaba el país dos años antes, estaba destinado a completar las "provocaciones" de los liderazgos obreros que gritaban "¡Fuera Siles!" en todas las tribunas. Pero si la intención original de las direcciones al formular el programa maximalista de marzo fue seguramente afirmar ante el conjunto de la población la profundidad de la ruptura con el gobierno, señalando la distancia entre las posiciones de los partidos reformistas y las de la COB, para intentar así desvincular a organización obrera de las consecuencias de su fracaso, ahora aquél se había transformado en la plataforma reivindicativa de una huelga general indefinida. Ya no se trataba de recordar a todos que los sindicatos de Bolivia, al contrario que su gobierno, eran socialistas y nacionalistas, y que los trabajadores bolivianos tenían el mismo *derecho* que los norteamericanos a recibir un salario

¹⁵³ *Presencia*, 7 de marzo, 1985.

¹⁵⁴ Carta Abierta al Presidente Constitucional de la República, 26 de febrero, 1985 [AS. FSTMB-65/85].

¹⁵⁵ *Comunicado de la COB*, 11 de marzo, 1985.

digno¹⁵⁶: ahora la COB estaba comprometida de nuevo en una lucha salarialista en la que sabía que, de tener éxito, tan sólo lograría multiplicar el descontento de todos.

¿Quién iba a ganar si el gobierno aumentaba, al igual que en noviembre, seis veces los salarios monetarios, como exigía el cálculo minero del "salario mínimo vital"?¹⁵⁷. Las bases de la COB, comenzando por las poblaciones mineras desplazadas a La Paz, no sólo pedían aumentos en los salarios monetarios, sino también precios estables y un abastecimiento regular de productos básicos. Y el problema no era sólo que ya no podía dudarse de que la primera demanda era incompatible con la consecución *general* de las dos siguientes. Además, el fuerte deterioro del consumo de los trabajadores mineros durante los últimos meses había demostrado claramente que *con la profundización de la crisis el sindicalismo de presión estaba comenzando a arrojar resultados perversos incluso para los intereses de los segmentos más poderosos de la clase obrera*. Las caídas de la producción y el colapso de los circuitos económicos regulares en la crisis hiperinflacionaria, en efecto, había ido reduciendo la eficacia del mecanismo defensivo que mantenía a los mineros a cubierto de la espiral especulativa a medida que el estado resultaba crecientemente incapaz de abastecer sus pulperías. El movimiento sindical, por lo tanto, estaba condenado a volver a vivir, en una escala ampliada, las «experiencias negativas» del pasado reciente.

Pero en marzo de 1985 la COB no conseguiría ofrecer a sus bases ni siquiera un nuevo aumento salarial, dado que *el contexto estratégico de la acción sindical sufrió entonces un cambio fundamental que incrementó enormemente la voluntad y la capacidad del gobierno provisional de resistir a sus demandas*. El hecho fue, en efecto, que si el desplazamiento del conflicto hacia la arena política pudo tener inicialmente una gran eficacia expresiva, en el curso de las negociaciones se volvió de inmediato en contra de los sindicatos, ofreciendo al gobierno *nuevas razones* para enfrentarse a la COB y *nuevos recursos* para hacerlo con éxito. Siles Zuazo deseaba garantizar en lo posible el cumplimiento del calendario electoral y, por encima de todo, presidir el primer acto de alternancia democrática en el último medio siglo de historia del país. Tenía ahora, por lo tanto, buenos motivos para demostrar firmeza ante

¹⁵⁶ Esa fue la respuesta que esgrimiría Juan Lechín frente a los argumentos de los ministros del área económica en las negociaciones de marzo: les recordó que el salario mínimo vital con escala móvil «ya se aplica en Estados Unidos, donde los obreros constructores ganan más que un ingeniero. Allí no se hacen cálculos del salario mínimo vital, sino que se le agregan nuevas necesidades». *Presencia*, 12 de marzo, 1985.

¹⁵⁷ El nivel del "salario mínimo vital" debía haber sido en marzo de 1985, según la FSTMB, de 32 millones de pesos, seis veces mayor que el acordado al término del conflicto.

quienes exigían su dimisión inmediata. Por primera vez, además, recibió el respaldo de todas las "fuerzas de orden", interesadas en asegurar la celebración de las elecciones y el mantenimiento de los plazos, y conscientes de que el Presidente y la debilitada fuerza política que lo sostenía ya no eran un enemigo a batir. La Iglesia, las FF.AA., la patronal y la oposición parlamentaria decidieron así variar las actitudes que habían mantenido hasta entonces: unos abandonaron su neutralidad para brindar un apoyo explícito a Siles Zuazo y los otros dejaron de jugar a debilitarle.

En la nueva coyuntura, el Presidente constitucional *contó sobre todo con la posibilidad de apelar a un principio democrático independiente de la voluntad de los actores sociales. La proximidad del acto electoral, en efecto, hizo que las reglas formales del juego democrático resultaran por primera vez eficaces para la distribución del poder entre los actores.* La COB no podría utilizar en aquélla ocasión la precaria legitimidad del contendiente para forzar una salida favorable en las negociaciones, dado que si lo que quería ahora mayoritariamente el pueblo de Bolivia era "que se fuera Siles", las elecciones garantizaban que vería satisfecho su deseo en un plazo muy breve. Siles Zuazo, por su parte, podría hacer efectivas por primera vez sus prerrogativas constitucionales amparándose en la defensa de un principio formal de legitimidad democrática: el proceso electoral, en el que el pueblo expresaría libremente su voluntad de cambio político.

El contexto, por lo tanto, era radicalmente distinto de los que habían prevalecido tanto desde noviembre de 1982 como bajo todos los gobiernos, civiles o militares, del "Estado del 52". La COB no tenía ahora delante a un gobierno "popular" con una legitimidad dependiente de su apoyo; tampoco a uno al que la población descontenta sólo pudiese esperar destituir articulando su oposición a través de los actores sociales. Se enfrentaba, por el contrario, a un gabinete provisional que proponía la defensa de una *regla* clara, las elecciones con sufragio universal, que fijaba una fecha precisa para su abandono del poder y designaba a un conjunto de actores políticos capaces de canalizar las demandas de cambio y constituir un nuevo gobierno. De este modo, la COB, que después de muchas reuniones y tras reconocer las dimensiones de su pérdida de credibilidad renunció a la opción de encabezar una nueva coalición electoral de la izquierda, *se había topado finalmente con las restricciones que imponían las reglas de la democracia representativa a sus alternativas en el juego político.* La única opción de que disponía para evitar el rápido desgaste de su posición negociadora frente al gobierno y el inminente trasvase del poder político que había acumulado en los años

de la transición hacia los nuevos jugadores -los partidos políticos de la derecha- era *romper las reglas del juego*. Así, mientras Lechín confesaba no saber qué eran ni qué objetivo perseguían aquellas tumultuosas jornadas de protesta política -«sería una huelga revolucionaria si los trabajadores tuviesen las armas»¹⁵⁸-, varios de sus aliados en la cúpula sindical se dedicaron a buscar en las FF.AA. algún sector "nacionalista" dispuesto a aprovechar la ocasión para encabezar un nuevo golpe¹⁵⁹. Pero las puertas de los cuarteles permanecieron selladas. Siles Zuazo no tenía en verdad razones para tomarse en serio la amenaza y dudar de las promesas de "lealtad" que los militares le transmitieron a diario desde el inicio de las movilizaciones: las experiencias traumáticas de los años de transición, que culminaron con la desintegración institucional de las FF.AA. tras el golpe de García Meza, estaban sin duda demasiado presentes en la memoria de los oficiales, y la situación crítica que atravesaba la economía nacional no invitaba desde luego a ensayar una aventura golpista.

El Presidente pudo así limitarse a esperar que el impulso huelguístico se fuera debilitando; y, como era previsible, el deterioro se produjo muy rápidamente. Si el campesinado había optado desde el principio por la espalda a la COB¹⁶⁰, las dramáticas privaciones a que sometía la huelga a las poblaciones urbanas comenzaron a extender muy pronto el desaliento y la oposición abierta entre amplios colectivos populares:

«En las regiones, inclusive en La Paz, la prolongación de la huelga estaba estrechamente relacionada con el creciente sometimiento de la población a privaciones en el consumo básico, especialmente en las ciudades-capital; situación que no sólo afectaba al deterioro de la movilización popular sino que la existencia misma de los actores populares se volvía dramática. Ciudades como Sucre y Potosí sufrieron el fuerte impacto del desabastecimiento de productos de primera necesidad como consecuencia del drástico bloqueo de caminos y carreteras efectuado por los campesinos. Otras

¹⁵⁸ *Presencia*, 12 de marzo, 1985. Unos días antes había respondido a las preguntas de los periodistas sobre las «alternativas» que planteaba la COB en la coyuntura: «Es un problema que se lo verá conforme se vayan desarrollando los sucesos. Se declara huelga, y en el transcurso de la misma se va viendo qué se debe hacer». *Presencia*, 8 de marzo, 1985.

¹⁵⁹ En varias entrevistas me han asegurado que tales movimientos, denunciados por el gobierno, existieron realmente, aunque no pasaron de alguna reunión intrascendente con oficiales sin una representatividad real en las FF.AA.

¹⁶⁰ En el departamento de Cochabamba los campesinos se mantuvieron totalmente inactivos, mientras en La Paz, Santa Cruz y Oruro se registraron únicamente algunas pequeñas movilizaciones en las áreas rurales, y sólo en Sucre y Potosí los bloqueos de caminos ordenados por la COB fueron efectivos. Recuérdese que el populoso valle de Cochabamba había sido tradicionalmente la sede de los sindicatos agrarios más poderosos, y que el Altiplano paceño, con su densa población aymara, era el epicentro del "nuevo sindicalismo" campesino. Las áreas nucleares del sindicalismo campesino, por lo tanto, no participaron en los bloqueos de caminos que decretó la COB el 7 de marzo para respaldar al movimiento minero.

ciudades también sintieron los efectos del desabastecimiento pero como resultado de la acción especulativa de los comerciantes y de la paralización de los diferentes servicios de transporte.... Las crecientes privaciones en el plano del ingreso y el consumo, que agravaba las condiciones de vida de muchos sectores sociales, y las marchas de presión al gobierno sin obtener resultados favorables, provocaron acciones de oposición y rechazo a la huelga de importantes estratos de la población, que fueron utilizadas y apoyadas por las clases dominantes y sus instrumentos de información e inclusive, por el propio gobierno, que buscaba soluciones al conflicto en su favor»¹⁶¹

El creciente peso de los costes de la huelga en la situación de crisis que atravesaba el país, reforzado sin duda por el recuerdo de las experiencias negativas del pasado más reciente, impulsó muy poco después la "salida" en cascada de la gran mayoría de los sindicatos. Los ferroviarios y los trabajadores de la fábrica Manaco, el segmento más organizado del proletariado fabril, manifestaron abiertamente en las asambleas su oposición a la huelga; la mayoría de los sectores laborales en Cochabamba, Oruro y Tarija decidieron retornar a sus puestos de trabajo, mientras los petroleros habían adoptado ya la misma decisión en varias ciudades, disponiendo la venta normal de gasolina. Así, cuando el Comité Ejecutivo instruyó la «radicalización» de la huelga y de los bloqueos de caminos para quebrar la resistencia del gobierno, sólo disponía ya del potencial disruptivo de los 10.000 trabajadores mineros desplazados a La Paz, apoyados por los estudiantes universitarios y algunos grupos radicales de clase media.

El 19 de marzo la capital vivió una jornada enormemente tensa. La presencia abrumadora de los mineros en sus calles, acompañada por el estallido de innumerables cartuchos de dinamita y por el griterío de estudiantes universitarios y maestros radicalizados, era sin duda un arma formidable en manos de la dirección sindical. El problema, sin embargo, era que a esas alturas las acciones disruptivas del contingente minero y de los segmentos más radicalizados de la clase media urbana eran ya *el único recurso* de que disponía la COB, y en esas condiciones el gobierno no tuvo ninguna dificultad en presentar las últimas acciones de los sindicatos como un mero problema de orden público en la ciudad de La Paz, asegurando que «en el resto del país la situación es de absoluta normalidad»¹⁶². Se limitaba a señalar una realidad evidente para todos, y le bastó ordenar el despliegue de efectivos de

¹⁶¹ Sandóval (1986), pp. 33 y 38.

¹⁶² Declaraciones del ministro de Defensa, en *Presencia*, 20 de marzo, 1985.

la policía y las Fuerzas Armadas en las calles de la capital para acabar definitivamente con el conflicto. En la madrugada del 20 de marzo, las fuerzas de orden cerraron las vías de acceso a la capital, impidiendo la entrada de nuevos contingentes mineros, y ocuparon todas sus arterias principales para impedir la realización de nuevos bloqueos. Las "jornadas de marzo" habían degenerado en una incómoda violencia callejera, y la decisión gubernamental de atajar el caos recibió un aplauso casi unánime. Sólo quedaba convocar una huelga de hambre. Doscientos mineros la iniciaron en Oruro, y un grupo de 45 activistas sindicales lo hizo en Santa Cruz, pero el movimiento ya estaba agotado.

El "ayuno nacional" de enero de 1984, una medida puramente expresiva emprendida contra el criterio de quienes querían decretar la que hubiera sido la primera huelga general indefinida del período democrático, había sido una demostración impresionante de la fuerza que acumulaba el movimiento sindical: la COB, consciente de su enorme poder de negociación, decidió entonces no recurrir al paro de labores, atendiendo a los dirigentes más sensibles a las consecuencias políticas de la conducta sindical (Calla, 1985: 90-1), y el ayuno masivo fue suficiente para obligar a la UDP a ensayar un giro radical en la política económica. Ahora, en marzo de 1985, el ayuno era una acción desesperada, un intento de evitar *in extremis* que 16 días de huelga general terminaran en la "claudicación" absoluta frente a un gobierno fortalecido por la proximidad del proceso electoral, respaldado por la práctica totalidad del arco parlamentario y, lo que era mucho más grave para la COB, por *la inmensa mayoría de la opinión pública*. Capaz, por lo tanto, de recurrir a las FF.AA. todo el tiempo que fuese necesario para garantizar el mantenimiento del orden, y dispuesto a hacerlo. *La distancia -en su trayectoria y su sentido- entre las dos huelgas de hambre dió la medida exacta del profundo desgaste que había sufrido el poder de los sindicatos en poco más de un año*. Esta vez, la COB, que había asistido ya a la "traición" del campesinado y al abandono paulatino de la mayoría de sus sectores afiliados, sólo podía esperar que el ayuno reflejase la auténtica magnitud del debilitamiento de su poder corporativo y del aislamiento social que había generado a su alrededor, multiplicando la dimensión de su fracaso.

En estas condiciones no debe extrañar que, en un segundo «análisis de la situación», el Ampliado Nacional de dirigentes celebrado el 23 de marzo decidiera dejar en suspenso la convocatoria y aceptar la oferta máxima del gobierno: la incorporación al salario básico de la totalidad del «bono de compensación» fijado tras la publicación de las medidas y su extensión a los los trabajadores del subsuelo. Con la firma de un acuerdo cuyo contenido,

calificado unánimemente de «irrosiorio,» había recibido un sólo voto afirmativo en un primer Ampliado celebrado tres días antes¹⁶³, el Comité Ejecutivo certificaba una derrota paliativos. Esta vez los dirigentes no intentaron siquiera ocultar la gigantesca brecha entre las expectativas iniciales del movimiento y su resultado final apelando, como hicieron en ocasiones anteriores, a alguna redefinición de los "verdaderos" intereses de las bases. No hubo mención alguna al compromiso gubernamental de mantener congelados los precios de cuatro productos básicos, desembolsar 30 millones de dólares para COMIBOL y avanzar en la integración minero-metalúrgica o dedicar el 30% de los ingresos por exportaciones de la empresa a la importación directa de equipos e insumos. Los acuerdos sobre políticas sectoriales para el sector minero no tenían ningún valor a sólo tres meses del proceso electoral, y todos sabían que el compromiso en materia de precios era una mera afirmación ritual que carecía de cualquier credibilidad en una economía sometida un proceso hiperinflacionario sin precedentes en América Latina y entregada a una dinámica especulativa sobre la que el gobierno no podía ejercer ningún control.

Pero, además, el magro aumento salarial arrancado al gobierno beneficiaba casi en exclusiva a los mineros, que percibirían el monto íntegro del «bono de compensación» del que habían sido excluidos inicialmente. La integración del bono al salario básico equivalía en general a una recomposición de las curvas salariales y de algunos beneficios colaterales - básicamente el bono de antigüedad- desde un nivel más alto¹⁶⁴, y para la mayoría de los empleados en el resto de los sectores eso apenas suponía un incremento despreciable en los salarios vigentes tras el reajuste de febrero¹⁶⁵. El fracaso estrepitoso de las "jornadas de

¹⁶³ La propuesta de exigir la inclusión del 100% del bono en el sueldo básico recibió entonces un sólo voto, la de continuar la huelga sin diálogo obtuvo 9, y la de reanudar las conversaciones con el gobierno manteniendo los objetivos iniciales, 19. *Presencia*, 21 de marzo, 1985.

¹⁶⁴ Recuédese que el «bono de compensación» fue otorgado en febrero como un monto fijo que cobrarían por igual todos los trabajadores. Eso suponía una fuerte igualación por abajo de la curva salarial, ya que los salarios de las diferentes categorías profesionales se calculan sobre porcentajes del sueldo básico, que no sufrió ningún aumento. Los beneficios colaterales que perciben algunos trabajadores también son mayoritariamente porcentajes del sueldo básico.

¹⁶⁵ El MIR-Masas, partido integrado en la DRU en el que militaba el Secretario General de la COB, recordaba unos días antes de la firma del acuerdo que aceptar la inclusión del 100% del bono en el salario básico equivaldría a dejar «al resto de nuestros compañeros trabajadores, obreros y de clase media solo y abandonados a su suerte», y que incluso «para los trabajadores nuevos, que no tienen antigüedad ni categoría significará que recibirán menos salario» -lo último porque no obtendrían ningún aumento en términos monetarios, mientras su nuevo salario básico, en cambio, sufriría mayores retenciones para la renta las cajas de la «seguridad social». Esto tendría unas consecuencias fatales para la unidad del movimiento obrero, ya que todos los sectores a excepción del minero «no

marzo" y el impacto diferencial, excesivamente evidente, de las nuevas disposiciones salariales fueron el golpe de gracia para la debilitada organización obrera. Los mineros habían sido los únicos en obtener algún beneficio de corto plazo, una ganancia minúscula que cuando menos les ofreció la justificación que necesitaban para concluir la mayor movilización de su historia y retornar a sus "cementorios" en la altura. Pero el premio era desde luego muy pequeño, ridículo en relación con el esfuerzo invertido, y mientras todos sus compañeros de clase se preguntaban para qué habían perdido los sueldos de dos semanas, las columnas mineras intentaban ahogar su frustración prometiéndose que en el próximo envite todo sería diferente: "¡Volveremos!", gritaron entonces mientras recorrían las calles de la capital camino de El Alto.

A partir de las "jornadas de marzo" el Comité Ejecutivo de la COB dejó de existir a efectos prácticos. Desde entonces, y hasta la celebración del nuevo proceso electoral, la dirección nacional se limitó a contemplar impotente el estallido de una vertiginosa cadena de conflictos que, inaugurada una vez más por los sindicatos de la burocracia pública, introdujo a la práctica totalidad de los sectores del movimiento sindical en una espiral reivindicativa que terminó adquiriendo una violencia sin precedentes en mayo y junio de 1985. Aquella versión extrema del "invierno del descontento" que unos años antes había acorralado al último gobierno laborista británico, fué en gran parte la última expresión de la pugna salarial inter-sectorial que había continuado agravándose a medida que avanzaba la hiperinflación y se disolvía por completo la capacidad de estrategia de la organización central. Mientras todos caían, cada grupo se movilizaba para intentar evitar perder "más que la media", y todos actuaban con mayor violencia a medida que sus recursos económicos perdían valor y que lo que parecía estar amenazado era cada vez más su propia supervivencia física.

Sin duda, la «extraña actitud de conflicto»¹⁶⁶ que adoptaron la gran mayoría de los sindicatos en el tramo final del mandato de Siles Zuazo contenía también motivaciones políticas y expresivas, que adquirieron una mayor importancia cuanto más se aproximaba la fecha de las elecciones. No puede discutirse que muchos líderes sindicales recibían consignas de los partidos de oposición, en la derecha y en la extrema izquierda, que tenían un interés

habrán logrado nada nuevo, se habrán movilizado para nada, y nosotros les habremos abandonado cobardemente y, entonces, ya nunca más creerán en su vanguardia minera». Mir-Masas, *Compañeros mineros, ¿es el momento de retroceder?*, Panfleto.

¹⁶⁶ *El Mundo*, 11 de junio, 1985.

evidente en promover situaciones de "desorden controlado" que profundizaran el desprestigio de la izquierda sin poner en peligro el proceso electoral (Jetté, 1989: 232), o que creyeron ver en la multiplicación de la violencia una situación propicia para la apertura de una "coyuntura revolucionaria" o simplemente para ganar posiciones a los dirigentes de la izquierda más moderada. Pero la proliferación de acciones radicales, acompañadas por un asombroso protagonismo de los liderazgos trosquistas y afines, respondía también a las necesidades "objetivas" de las nuevas organizaciones sindicales de los sectores de cuello blanco, en tanto que éstas, que carecían de la mínima certidumbre de futuro de los sindicatos obreros más consolidados, necesitaban afirmar su presencia y su identidad gremial frente al resto del movimiento y los nuevos actores políticos que se harían cargo del gobierno en un plazo inmediato.

Si la realidad del conflicto social era diversa y compleja, el efecto global de su vertiginoso desarrollo durante aquéllos meses fue sin la conclusión del proceso de *"feudalización" de la estructura institucional del país* (Gironda, 1987: 23-5): la implosión final del aparato administrativo y del amplio conglomerado de empresas públicas en una pluralidad de centros de poder autónomos que no respondían a las directrices de ninguna autoridad superior, y en los que los sindicatos construían auténticas "trincheras" corporativas para defender contra todos los intereses más estrechos y cortoplacistas de su clientela inmediata¹⁶⁷. Tal vez merezca la pena rescatar aquí un extracto de los editoriales que aparecieron en la prensa nacional durante mayo y junio de 1985 para reproducir el modo en que se vivían entonces aquellos desarrollos:

«Jamás antes se habría osado apropiarse de un Banco, aduanas, ferrocarriles o minas. Hoy sin embargo todos esos centros están a disposición y al capricho de pequeños núcleos de gentes... (con el resultado de una) total y criminal desatención de los servicios, algunos de los cuales hacen a la seguridad nacional -como los de las comunicaciones con el exterior y correos-, el aflojamiento total de la atención de los tribunales de justicia que es promovida con cualquier pretexto hasta por los porteros de juzgados y Cortes. En fin, paros y huelgas que hacen a la educación, transporte, abastecimiento alimentario, suman un sistemático "bombardeo" al concierto, disci-

¹⁶⁷ Los casos más tempranos y paradigmáticos fueron desde luego los de los sindicatos de YPF (especialmente en Santa Cruz) y del Banco Central ("Banco Central, burocracia y crisis", *Boletín CIDRE* no. 1, mayo 1984). Pero sus actuaciones tan sólo llamaban más la atención que las de la mayoría de los sindicatos, menos poderosos, de la administración pública y el resto de las empresas estatales, incluyendo a COMIBOL. En este último caso, la única diferencia práctica estribaba en que los sindicatos mineros disponían de una mayor cobertura ideológica para ocultar sus conductas crecientemente corporativistas y la deriva del sistema de gestión hacia una defensa a ultranza de la supervivencia y los privilegios relativos del "feudo".

plina, equilibrio de la ley y la estructura del Estado y sus Poderes»¹⁶⁸.

Pero el «bombardeo» a la estructura estatatal no era en absoluto «sistemático», como pretendía una prensa conservadora que veía detrás de todos aquellos acontecimientos la mano de las «cúpulas anarcosindicalistas de la COB», empeñadas en «alimentar una situación social conflictiva para hacerla explotar»¹⁶⁹. La abrumadora presencia del «lenguaje de los hechos consumados» y de la «insumisión feudal» de las instituciones, por el contrario, respondía a una situación en la que los actores centrales *habían perdido ya toda su capacidad de estrategia, y no podían intentar siquiera detener una espiral que sabían autodestructiva*. El gobierno, resignado a agravar cada semana la dimensión de su derrota electoral, se limitó a decretar el 16 de mayo una devaluación parcial del peso y postergó «indefinidamente» todas las disposiciones necesarias para completar aquella medida aislada, alegando que no estaban dadas «las condiciones para la dictación de un nuevo paquete económico»¹⁷⁰. Los liderazgos nacionales de la COB y la FSTMB, a cuyos «intereses políticos» atribuían la responsabilidad por el caos el conjunto de la prensa nacional, los partidos de la derecha y una patronal cada vez más activa, habían dejado de existir a efectos prácticos, y se limitaron a manifestar una y otra vez su aprensión ante las consecuencias previsibles de la inminente «arremetida de la derecha» y a lamentar «la imposibilidad de frenar sus aspiraciones a través de la conformación de un frente amplio de los partidos de izquierda»¹⁷¹, mientras asistían «preocupados» a la desafección masiva de unas bases «desesperadas» y sometidas a unas «condiciones críticas»¹⁷².

Sólo unos pocos días después de la conclusión de las "jornadas de marzo", los mineros de Huanuni se lamentaban de que la COB sólo hubiera «arrancado promesas vacías al gobierno»¹⁷³, y sus compañeros de Siglo XX aseguraban que «la pasada huelga general

¹⁶⁸ *Hoy*, 4 de mayo, 1985.

¹⁶⁹ *El Mundo*, 12 de mayo, 1985.

¹⁷⁰ Freddy Justiniano, ministro de Planeamiento, en *El Mundo*, 18 de mayo, 1985.

¹⁷¹ Resoluciones del Ampliado Nacional Minero, en *Presencia*, 16 de abril de 1985; Mensaje de la FSTMB en su 41 Aniversario, en *Presencia*, 11 de junio, 1985.

¹⁷² Noel Vásquez, Secretario Permanente de la COB, en *Presencia*, 22 de mayo, 1985.

¹⁷³ Dirigentes sindicales de Huanuni, en *Hoy*, 11 de abril, 1985.

ha sido en vano», dado que sus pulperías estaban «más desabastecidas que nunca»¹⁷⁴. Mientras la FSTMB pretendía de las últimas movilizaciones, lejos de haber sido un fracaso, fueron «la más efectiva batalla contra la derecha» y un notable salto adelante «en la lucha revolucionaria de los trabajadores bolivianos que ha permitido consolidar la conciencia política de la mayorías nacionales»¹⁷⁵, las asambleas de base en Huanuni y San José amenazaban con emprender una nueva marcha sobre la capital, recordando que sus pulperías continuaban «completamente desabastecidas»¹⁷⁶, y los pobladores de Llallagua, cabecera de las mayores minas de COMIBOL, desfilaban por sus las calles portando ollas vacías¹⁷⁷.

En el comunicado que emitió con ocasión del Primero de Mayo, la Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz afirmaba que los trabajadores del país estaban dispuestos a «morir luchando»¹⁷⁸, pero incluso los más entusiastas tuvieron que reconocer que los actos convocados para el Día del Trabajo fueron «los más pobres, desorganizados y fríos que hemos visto en esta ciudad»¹⁷⁹. La organización matriz del proletariado boliviano había perdido por completo la confianza de sus clientelas, que tenían sobrados motivos para el escepticismo y el desaliento. En esas condiciones, y tras muchos aplazamientos, la COB no sólo no se atrevió a iniciar una huelga general para canalizar el «generalizado descontento laboral» provocado por la devaluación del 16 de mayo, sino que evitó incluso convocar cualquier manifestación o concentración de protesta¹⁸⁰.

Tras la experiencia de las "jornadas de marzo", al Comité Ejecutivo de la COB sólo le quedaron ánimos para agrupar las reivindicaciones de todos los sectores afiliados a la central en un gigantesco Pliego Petitorio que entregó finalmente a Siles Zuazo el 9 de junio. Trabajadores de la construcción, campesinos, metalúrgicos, artesanos, cocalleros, cooperativistas mineros, maestros, bancarios, empleados de la administración y de cada una de las empresas públicas de servicios..., exigían allí atención inmediata a una multitud de demandas

¹⁷⁴ Cristóbal Aranibar, Secretario General del sindicato de Siglo XX, en *El Mundo*, 11 de abril, 1985.

¹⁷⁵ FSTMB, "Evaluación de nuestras jornadas de marzo", 14 de abril 1985, p. 3, en FSTMB, *Las jornadas de marzo*, abril 1985.

¹⁷⁶ *Hoy*, 24 de abril, 1985.

¹⁷⁷ *Hoy*, 24 de abril, 1985.

¹⁷⁸ *Presencia*, 1 de mayo, 1985.

¹⁷⁹ *Aquí*, 181, 4-10 de mayo, 1985, p. 5.

¹⁸⁰ *Hoy*, 29 de mayo, 1985.

salariales, solicitaban créditos, divisas a precio preferente y una cantidad ingente de medidas sectoriales para sostener sus puestos de trabajo¹⁸¹. *Aquella interminable "lista de quejas", inabarcable y contradictoria, era sin duda un testimonio completo del fracaso del movimiento obrero, la confesión última de la impotencia de sus instancias representativas para gobernar las demandas sociales en la coyuntura de crisis.*

La quiebra de los actores encargados de generalizar intereses y promover medidas guiadas por un principio de racionalidad colectiva, claramente expresada a partir de abril de 1984 en la renuncia a poner en práctica cualquier política de ingresos centralizada, había terminado traducándose, en efecto, en *la consumación de un ajuste caótico y profundamente regresivo*. La escalada de conflictos sociales, impulsada por una lógica de "suma cero", dio lugar en los hechos a un juego de suma negativa, agravando las caídas de la producción y de las importaciones, y reduciendo más allá de lo necesario los niveles de consumo interno. A mediados de 1985, el consumo agregado del conjunto de la población popular había sufrido fuertes caídas con respecto a sus niveles de partida en 1978, y *el "ajuste" del nivel de vida de los ciudadanos de Bolivia a las nuevas condiciones del entorno marco internacional estaba concluido con creces*. Pero el hundimiento de las instancias centrales, además de hacer imposible el reequilibrio de la economía, conteniendo la espiral descendente, tuvo sin duda *el efecto adicional de concentrar las pérdidas sobre los sectores más débiles de la sociedad*.

Desde luego, los datos sobre la distribución de la renta, que registran un ligero empeoramiento entre 1980 y 1986 (Vega et. al., 1987: 30-1), deben ponerse entre paréntesis, al igual que la inmensa mayoría del material estadístico disponible para el período. Cabe sospechar, sin embargo, que si los costes del ajuste terminaron cayendo sobre todos - especuladores aparte-, la alta inflación y la hiperinflación -entre el 14 y el 20.000% en 1985- que acompañaron a las caídas del PIB per cápita, debieron tener un efecto especialmente devastador sobre los ingresos de los grupos *urbanos* más desfavorecidos, y entre ellos se encontraban la gran mayoría de los asalariados. Pero la distribución de las pérdidas entre las poblaciones urbanas fue, ante todo y sin duda alguna, radicalmente *arbitraria*. Si algo parece indisputable en lo que se refiere a la evolución de los salarios sectoriales durante la última etapa del mandato de Siles Zuazo es, en efecto, que incrementaron fuertemente sus desviaciones respecto al promedio general, y que la suerte de cada uno tuvo muy poco que ver con

¹⁸¹ "Pliego Unico Nacional de la COB", 7 de junio, 1985 [AC, D-0099.02].

las variaciones en su productividad, y mucho con el desarrollo de «mercados internos fuertes con un nexo bien marcado entre gerencia y sindicato, basado en la complicidad para la supervivencia» (Olave y Pinto, 1985: 22). Las variaciones arbitrarias entre empresas del mismo sector debieron ser también crecientemente importantes¹⁸², en una situación en la que la confluencia de la hiperinflación con complejos sistemas de bonificaciones¹⁸³ y múltiples arreglos particulares hacía imposible que incluso los dirigentes de las Federaciones de rama tuvieran una idea aproximada de los salarios reales de sus representados¹⁸⁴. Las fluctuaciones en la estructura inter-sectorial del salario entre 1982 y 1985, a las que el CUADRO 6.2 sólo ofrece una aproximación muy gruesa¹⁸⁵, estuvieron relacionadas sin duda con un deseo deliberado de favorecer a los sectores productivos; pero también, y sobre todo, con los efectos distorsionadores del proceso inflacionario y la desaparición paulatina de cualquier régimen disciplinario en la administración salarial.

Pero por encima del deterioro en la distribución del ingreso y el reparto desigual y arbitrario de los costes, el primer lustro de los años 80 se cerró con un declive del 11 % en el ingreso total y de un 23 % en el ingreso per cápita, una cifra que para el sector familias ascendió probablemente a más del 28 % entre 1980 y 1985 (Morales, 1985: 23). El ingreso per cápita del 40 % más pobre la población descendió de 207 a 154 dólares anuales entre 1981 y 1986, y el del 40 % de la población con ingresos medios de 771 a 593 dólares. Por lo que respecta a los asalariados, los ingresos per cápita del 40 % más pobre cayeron de 194 a 126, y los del 40 % intermedio de 664 a 432 dólares anuales (Vega et. al., 1987: 30-1). No es este el lugar para discutir qué porcentaje de las caídas que reflejan los datos a 1986 debería atribuirse a los efectos recesivos del exitoso programa de estabilización que aplicó a partir de agosto de 1985 el gobierno de Paz Estenssoro. Resulta imposible calcular de un

¹⁸² Por ejemplo, en septiembre de 1984, las remuneraciones promedio de los empleados del First National City Bank -el más elevado en la banca privada- superaba ligeramente al que percibían los del Banco Central de Bolivia, pero en marzo de 1985 éstos ganaban un 33 % más que sus colegas.

¹⁸³ Por ejemplo, el trabajador fabril tenía los siguientes "bonos": Incremento del 16 %, Salario dominical, Bono de movilidad, Bono de categoría, Sueldo 15, Bono patriótico, Bono compensación social, Bono vacacional, Bono escolar, Bono de asistencia, y otros subsidios además del Aguinaldo, la Prima anual, el Bono de antigüedad y el Bono de producción.

¹⁸⁴ Entrevista con ex-dirigentes del sector fabril. Véase también Espejo (1990), p. 27.

¹⁸⁵ Debe tenerse en cuenta, por ejemplo, que aunque el cuadro registra una importante mejora en la posición relativa de los mineros, no incorpora los pagos en especie, que también resultan de una enorme importancia para calcular el salario real en los sectores del transporte y el petróleo.

modo preciso la evolución del consumo y los ingresos reales durante el período de la alta inflación y la hiperinflación, pero las cifras cuando menos no contradicen la idea intuitiva de que fueron los estratos de ingresos bajos y medios los que soportaron lo peor del peso de la crisis durante el último tramo del mandato de Siles Zuazo. Sólo los detentadores de la propiedad, los que tenían acceso a la información necesaria para especular con los bienes y la tasa de cambio, los comerciantes e industriales que optaron por desviar a los circuitos especulativos los créditos preferentes y los subsidios estatales a los precios, medraron sistemáticamente en medio del hundimiento general¹⁸⁶, aunque también muchos pequeños comerciantes, dedicados a la práctica más asequible y "socializada" del contrabando, se las arreglaron sin duda bastante bien.

CUADRO 5.2

CATEGORIZACIÓN SALARIAL POR SECTORES ECONÓMICOS: 1980-85

SECTOR	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Petróleo	1	1	1	1	1	1
Bancos	2	2	2	3	3	2
Elec./Agua	3	3	5	2	2	3
Trans./Com.	4	4	3	4	8	4
Comercio	5	5	4	7	6	5
Construcción	6	6	7	9	9	8
Manufactura	7	7	8	6	4	7
Serv./Priv.	8	8	6	8	7	9
Minería	9	9	9	5	5	6

Fuente: Larrazábal, et. al. (1986), p. 14.

Todos los demás, y en particular los asalariados, habían padecido ya suficientemente el castigo de la crisis a mediados de 1985, sufriendo una y otra vez caídas sin precedentes en sus niveles de consumo en medio de violentas fluctuaciones. Sus luchas sectoriales, crecientemente agónicas, intentaban únicamente evitar que las pérdidas fueran aún mayores,

¹⁸⁶ Se ha hecho notar con razón que las críticas de la derecha a la política económica de los gabinetes de Siles Zuazo corrieron un tupido velo sobre las fabulosas fortunas que hicieron entonces muchísimos empresarios. Véase por ejemplo Dunkerley (1990), p. 16.

y sólo lograban impulsar con ello nuevas caídas en el nivel agregado. En estas condiciones, no sólo era cierto que *el reequilibrio de la economía en el nivel mínimo que se había alcanzado tras el desplome del PIB y del consumo per cápita era el único resultado que podía describirse como un "bien colectivo" desde la perspectiva del conjunto de la población popular*, sino también que cualquier instancia que pareciera capaz de promoverlo alcanzaría de inmediato una enorme legitimidad.

LA DEMOCRACIA GOBERNANTE (EPÍLOGO)

Una nación que sólo demanda de sus gobernantes el mantenimiento del orden ya es esclava en el fondo de su corazón; es esclava de su bienestar, y el hombre que va a encadenarla puede arribar a la escena

Alexis de Tocqueville

Los años del gobierno de la UDP no fueron la primera ocasión en la historia contemporánea de Bolivia en la que la apertura del sistema político a la participación de los actores sociales dentro de un contexto de extrema escasez de recursos y acumulación de demandas insatisfechas provocó una fuerte frustración de las expectativas sociales y una brutal escalada de los conflictos, desembocando en una situación hobbesiana que parecía empujar inevitablemente el péndulo hacia la solución autoritaria. Por el contrario, en el período 70-71, durante el breve mandato del general Torres, se produjo una configuración muy parecida, y otro tanto podría decirse de los desarrollos que culminaron con el enfrentamiento abierto entre los gobiernos movimientistas y los sindicatos mineros a partir de 1956 y el derrocamiento de Paz Estenssoro en 1964. Sin embargo, a mediados de 1985 confluyeron elementos que no habían estado presentes en ninguna coyuntura anterior, y que permitieron que la reconstrucción del centro autoritario a partir de 1985 no estuviera acompañada por una ruptura violenta del régimen político.

En primer lugar, *las élites sociales y políticas de oposición actuaban por primera vez en el contexto de un sistema pluripartidista* que les ofrecía la posibilidad cierta de acceder regularmente al gobierno, y no en un sistema de partido dominante, sostenido por el voto en masa del campesinado, como en 1956-64, o en un régimen formalmente cerrado a la competencia política, como en 1970-71. En las elecciones generales del 14 de julio de 1985, el MNR y la Acción Democrática Nacionalista (ADN) de Hugo Bánzer, los dos principales partidos de oposición, obtuvieron de hecho cerca del 60% de los sufragios, mientras los

partidos de la UDP apenas superaban entre todos el 15% y el Partido Socialista perdía cerca del 70% de sus votos (CUADRO 6.1).

CUADRO 6.1

RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES LISTAS ELECTORALES: 1980-1985

29 DE JULIO DE 1980			14 JULIO DE 1985		
Partido/s	Votación	%	Partido/s	Votación	%
UDP (MNRI/MIR/PCB)	507.173	38,74	MIR	153.143	8,8
			MNRI	82.418	4,7
			FPU	38.124	2,2
			(MIR-BL/PCB)		
PS-1	113.959	8,71	PS-1	38.786	2,2
<hr/>			<hr/>		
MNR	263.706	20,15	MNR	456.704	26,4
ADN	220.309	16,83	ADN	496.735	28,0

Fuente: Corte Nacional Electoral

El segundo elemento diferencial es el profundo cambio que se había producido en la *correlación de fuerzas entre las nuevas élites del estado y los actores sociales*: aquéllas recibían un amplísimo *mandato* y *disponían de mayores recursos políticos* que en cualquier momento del pasado, mientras que *el poder de las organizaciones sindicales* había alcanzado ya un *mínimo histórico*. La amplitud del mandato que entregaron los ciudadanos a los partidos de oposición en las elecciones de julio de 1985 no se refiere sólo al porcentaje de los sufragios que recibieron aquéllos, sino, ante todo, a su carácter *extraordinario*. Los resultados del experimento de "democracia popular" habían creado una coyuntura especialmente propicia para la reconstrucción de la autoridad política central, en efecto, porque existía una percepción generalizada de que el país estaba tocando fondo, un nuevo marco de expectativas garantizaba una popularidad inmediata a cualquier intervención capaz de restablecer el orden, poniendo fin a la desenfrenada dinámica autodestructiva que alcanzó su clímax en los últimos meses del mandato de Siles Zuazo. Paz Estenssoro incrementó notablemente sus sufragios ante todo porque era un "hombre de estado", y Hugo Bánzer

alcanzó la primera minoría prometiendo "paz y orden". La izquierda insistió en recordar a la ciudadanía que la de Bánzer había sido «la paz de los cementerios», pero el ex-dictador fue el candidato más votado en Tolata, escenario de su "Masacre del Valle", y en varios distritos mineros. Resulta indudable que lo que prevalecía en todas partes era «una demanda social muy importante por estabilidad» (Morales, 1987b: 31).

Por un lado, la frustración de las expectativas populares había arrastrado consigo a la COB en mucha mayor medida que nunca en el pasado, situándola ante una *crisis de legitimidad sin precedentes*. Su posición dominante en un sistema político participativo situó a la central sindical ante los ciudadanos como el principal causante del caos económico, el desorden social y el hundimiento general de los niveles de vida, por mucho que sus liderazgos se esforzaran por enfatizar, y en ocasiones creyeran sinceramente, que "ellos no habían estado allí", y que todo lo ocurrido era en realidad consecuencia del «entreguismo y la incapacidad de la UDP para aplicar soluciones populares y nacionales a la crisis»¹. Su presencia abrumadora en un escenario de interacción política abierto, sin embargo, garantizaba que esta vez no podría eludir su responsabilidad en los resultados.

Por otro lado, el *profundo deterioro de los recursos económicos* de la gran mayoría de los segmentos del movimiento sindical en paralelo a la profundización de la crisis, y la incapacidad de la organización para defender los intereses de sus clientelas directas, habían debilitado fuertemente su *poder corporativo*. Unos recursos menguados en la arena económica y una menor capacidad organizativa para movilizarlos se unían así al vacío social que habían generado a su alrededor los sindicatos.

De este modo, si el sistema político ofrecía a los opositores la opción de apostar por la alternancia electoral, por la continuidad del orden constitucional, el aislamiento social, la erosión de los recursos económicos y la desintegración interna del movimiento sindical reducían a su vez la necesidad de apelar a la violencia para reconstruir el centro autoritario. La espiral de conflictos provocada por la violenta frustración de las expectativas sociales en el proceso de apertura política podría culminar así en *un resultado inédito en la historia contemporánea de Bolivia*: las élites del estado tendrían la oportunidad de hacer efectivas las reglas formales del nuevo juego político, instaurando, por primera vez desde el colapso del orden oligárquico, una *democracia gobernante*. En este contexto, la Nueva Política

¹ Documento político del Eje de Convergencia, citado Mayorga (1991), p. 200.

Económica del gobierno de Paz Estenssoro se presentó explícitamente como un «plan político» destinado, en palabras de uno de los principales responsables de su formulación, a «restablecer la autoridad del Estado sobre la sociedad» (Sánchez de Lozada, 1985: 6)

La publicación del programa de ajuste ortodoxo el 29 de agosto de 1985 se acompañó de *dos movimientos* sucesivos que dotaron de inmediato de una gran *credibilidad* a los actores políticos y comenzaron a construir un *horizonte de certidumbre* radicalmente nuevo para todos los agentes sociales. La primera decisión del gobierno fue emprender *una estrategia de confrontación radical e intransigente con los sindicatos*. La COB, que había iniciado una huelga general indefinida tras conocer el contenido del paquete económico, se enfrentó finalmente al primer "estado de sitio" de la democracia² y al hermetismo de un ejecutivo que se negó a entablar cualquier diálogo, declaró inamovibles los términos de la Nueva Política Económica e hizo oídos sordos a todas las propuestas de mediación, empezando por la de la propia Iglesia católica. Pero la dictación del "estado de sitio" en la madrugada del 19 de septiembre, el aparatoso despliegue armado y las detenciones y confinamientos masivos de dirigentes obreros, no fueron en absoluto una expresión de la debilidad política de un gobierno *obligado* una vez más, como tantas en el pasado, a recurrir a la violencia desnuda para superar el veto de las organizaciones sindicales. Por el contrario, el gobierno aplicó deliberadamente dosis de violencia calculada que encerraban ante todo una fuerte carga *simbólica*: no se trató de la actuación de un estado forzado a replegarse a su "fase de emergencia", incapaz de imponer su autoridad legal al margen de las organizaciones obreras, acosado y "encogido a su último reducto" (Zavaleta, 1983b: 47), sino de un movimiento dirigido a *certificar* el nuevo poder que habían adquirido ya las élites políticas en democracia.

La variación más sustancial en la correlación de fuerzas entre las élites del estado y los actores sociales, en efecto, se había producido meses atrás, cuando Siles Zuazo pudo esgrimir *por primera vez*, durante las "jornadas de marzo", su mandato democrático frente a una COB desprestigiada ante el grueso de la población y abandonada por sus clientelas escépticas y carentes de recursos económicos para sostener las movilizaciones. Siles no había necesitado entonces ni decretar el "estado de sitio" ni satisfacer los reclamos salariales de los sindicatos para atajar el conflicto social, y le bastó con un discretísimo despliegue de las FF.AA. para restablecer el orden público y acabar con una huelga que ya se había agotado

² El último "estado de sitio" había sido decretado por el gobierno golpista de García Meza en julio de 1980.

en la práctica. Pese a los abundantes rumores que circularon entonces y a la multiplicación de las voces que reclamaban "mano dura" con los "anarcosindicalistas", la medida de excepción no se decretó porque el Presidente no tenía nada que ganar con ello: la reproducción de manifestaciones agónicas de protesta no pondría ya en peligro la celebración de las elecciones, y el gobierno no tenía ningún objetivo ulterior: si la supervivencia de una COB debilitada le resultaba por completo *indiferente*, ¿para qué ensuciar en el último momento su límpida imagen internacional con una demostración *gratuita* de poder?.

Si el gobierno de Paz Estenssoro tenía en agosto de 1985 una *nueva matriz de pagos* en su interacción con los sindicatos, que hacía de la confrontación frontal su estrategia preferida, ello se debía mucho menos a alguna alteración en los *recursos* de ambos actores que al cambio fundamental que se había producido en los *objetivos* del gobierno, cuya preocupación central era otra vez *estabilizar la economía*. Las élites del estado habían incrementado ya enormemente su *capacidad* política para enfrentar y derrotar a la COB; pero ahora tenían, además, *motivos* para intentarlo. La demostración abrumadora de la disposición gubernamental a recurrir a la coacción en el "estado de sitio", la *saña* con que actuó frente a los sindicatos durante aquéllas jornadas, deben entenderse en este contexto como *una jugada destinada a hacer público el nuevo equilibrio de poder, estabilizando a futuro las expectativas sociales*. La represión y la renuncia absoluta al diálogo informaron a todos los grupos de interés de que en adelante las acciones agónicas de protesta tan *sólo acarrearían costes*, e hicieron saber a los ciudadanos y a todos los agentes económicos que el gobierno estaba dispuesto a mantener el inalterado su compromiso con todos los términos de la nueva política económica. El cerco de los campamentos mineros, que habían terminado quedándose solos de nuevo pidiendo la libertad de sus dirigentes en medio de la indiferencia general, y los despidos masivos en el Banco Central -el 72% de la plantilla- y en otras instituciones públicas³, formaban parte del mismo "paquete" informativo: Paz Estenssoro no defraudaría el mandato de los electores, que habían expresado una «exigencia de orden» al votar por su lista⁴.

El segundo movimiento del gobierno estuvo dirigido a consolidar su poder a medio plazo, *neutralizando a la oposición parlamentaria y eliminando así la mayor fuente potencial*

³ Informe 'R', septiembre 1985, p. 2.

⁴ *Presencia*, 21 de septiembre, 1985.

de inestabilidad e incertidumbre en el nuevo escenario. El 16 de octubre de 1985, Víctor Paz Estenssoro y Hugo Bánzer firmaron el "*Pacto por la Democracia*", un compromiso de colaboración entre los dos partidos mayoritarios que constituía un hecho sin precedentes en la historia reciente del país. La ADN de Hugo Bánzer, que había lanzado violentas acusaciones de fraude al término del proceso electoral, y afirmado poco después que reconocía «la legalidad pero no la legitimidad» de la investidura de Paz Estenssoro (Malloy y Gamarra, 1988: 194), parecía estar inaugurando en verdad, como pretendía el texto del "Pacto", «una nueva forma de conducta política». Resultaría difícil exagerar la importancia que tuvo el "Pacto por la Democracia" para la reconstrucción del centro político, y *lo realmente decisivo* fue que el acuerdo no sólo contenía un compromiso explícito con el fortalecimiento de las nuevas reglas del juego político, sino que incorporaba además *un apoyo sin matices al contenido del nuevo programa económico.*

Este resultado era casi inevitable, dado que Bánzer y su ADN habían perdido la posibilidad de desarrollar un discurso opositor cuando descubrieron que las disposiciones agrupadas en el Decreto Supremo 21.060 eran un calco exacto de su propio proyecto económico. Podrían lamentarse en privado de que Paz Estenssoro les había robado todo, la Presidencia y el programa, pero carecían de argumentos para justificar un enfrentamiento con el gobierno ante el público, y menos aún ante sus avalistas comunes: la patronal, los EE.UU. y los organismos financieros internacionales. Se había producido, en efecto, *una absoluta convergencia en los mapas intelectuales de los liderazgos políticos mayoritarios*: ambos defendían la misma terapia de choque ortodoxo y la necesidad de emprender una profunda transformación estructural del modelo de desarrollo, reduciendo drásticamente el tamaño del sector público y liberalizando los mercados. En cuestión de meses, días incluso, el MNR *había desarrollado una visión de las alternativas abiertas a la política económica que negaba radicalmente su identidad histórica.* Fue, el efecto, el mismo fundador del "Estado del 52", el "jefe" secular del "nacionalismo revolucionario" boliviano, quien decidió avalar en su tercer mandato la destrucción de su obra, y debió tener razones muy poderosas para hacerlo.

Seguramente, lo que tuvo el veterano estadista fue una percepción bastante clara de la dimensión de los problemas que estaba obligado a enfrentar. Por un lado, Paz Estenssoro sabía que sus opciones de éxito dependían del anuncio de un programa impoluto, capaz de diferenciarse nítidamente de todo lo que se había ensayado en el pasado reciente, y que fuera también radical y rápido, capaz de romper ataduras y evitar, parafraseando a Marx, que

"toda la antigua porquería volviera a aparecer": «O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificio, para *plantear de modo radical una nueva política*, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere»⁵. Por otro, si consideraba necesario *reducir el tamaño del estado*, recortando el presupuesto de sus empresas e incrementando el papel de los mercados y los agentes económicos privados en la generación y distribución del producto, era ante todo porque deseaba eliminar la "feudalización" y la corrupción generalizada para reconstruir la autoridad del ejecutivo. El apoyo de Paz Estenssoro a la terapia de choque y su abrupta conversión al neoliberalismo, por lo tanto, pueden explicarse atendiendo a la adaptación funcional del discurso agresivo de los "boys" (Conaghan et. al., 1990) a sus percepciones sobre la profundidad de la crisis y a su interés en «restablecer la dignidad del Estado».

La estructura caudillista del MNR le permitió marginar de entrada a los grupos de poder tradicionales del partido, dar la espalda a las recetas del gabinete económico "in pectore", e, inmediatamente después de su investidura, encargar la elaboración de la política económica a un grupo de recién llegados y tecnócratas independientes. Estos, a su vez, recurrieron al mismo grupo de expertos extranjeros que unos meses antes había elaborado el programa del partido de Bánzer: el equipo de economistas de Harvard encabezado por un Jeffrey Sachs que comenzaba aquí una frenética carrera de consejero aúlico internacional en países que carecían de soluciones y de personal aborígen, o que habían perdido la confianza en ambos. Para los dirigentes tradicionales del movimientismo aquéllo fue un castigo muy duro, e intentaron convencerse de que el partido volvería pronto «a los cauces del nacionalismo revolucionario»⁶. Pero las dudas que suscitaron el hundimiento del mercado del estaño y el fuerte aumento del valor del dólar a finales de 1985 se resolvieron en enero del año siguiente con una profunda reestructuración del gabinete, que certificó la decisión presidencial de aplicar rigurosamente la Nueva Política Económica «cualesquiera sean los obstáculos»⁷. Así, la serie de ásperas disputas entre "políticos" y "expertos" concluyeron con la retirada del "histórico" Guillermo Bedregal en el ministerio de Planeamiento y el ascenso de Gonzalo Sánchez de Lozada, el principal avalista de los "Harvard Boys". El resultado se

⁵ Mensaje presidencial del 29 de agosto. En *Presencia*, 30 de agosto, 1985.

⁶ Javier Campero Paz, Secretario Ejecutivo del MNR, en *Informe 'R'*, noviembre de 1985.

⁷ Palabras de Paz Estenssoro en la toma de posesión del nuevo gabinete, en *Hoy*, 23 de enero, 1986.

consolidó con la firma de acuerdos vinculantes con el FMI, que comenzó a liberar recursos después de que sus dos misiones -diciembre de 1985 y febrero de 1986- forzaran una fuerte revisión a la baja del gasto público presupuestado para 1986, la aprobación de una nueva ley de Reforma Tributaria, y compromisos en materia salarial y sobre reforma del sector público, en particular la "racionalización" de las operaciones de COMIBOL.

Las condiciones enormemente exigentes que impusieron los organismos internacionales para la reanudación y la continuidad del financiamiento externo sometieron al país a *un rígido marco de plazos y restricciones presupuestarias*. En este nuevo contexto importaba muy poco que el "Pacto por la Democracia" hubiera incluido, en el más franco estilo prebendal, un reparto de "pegas" -empleos- a los militantes más destacados de la ADN, que ocuparon la dirección de las principales empresas públicas, dado que los recursos para generar redes clientelares y adoptar gestos populistas habían desaparecido por completo. El Ejecutivo alcanzaba así una enorme *autonomía*, acorazado frente a cualquier posible alianza entre segmentos de las élites políticas y grupos de interés, convertido en una máquina insensible las presiones de la sociedad civil, a las protestas contra los costes del ajuste⁸. Desde luego, el reverso de aquélla autonomía del ejecutivo fue la cesión absoluta de *soberanía* en materia de política económica por parte de los representantes democráticos bolivianos, que quedaron "atados" en adelante al poder omnímodo de una pequeña *clique* tecnocrática y a la escrupulosa supervisión de los organismos financieros internacionales⁹.

El objetivo inicial de la Nueva Política Económica era muy simple: cerrar la fuente principal de creación de dinero que eran los créditos del Banco Central al sector público para

⁸ La única excepción notable fue el trato de favor concedido a la industria azucarera cruceña que, condenada a extinguirse de haberse mantenido abierta la importación del producto, consiguió arrancar al gobierno la protección necesaria para sobrevivir produciendo a precios cuatro veces mayores a los vigentes en el mercado internacional. Su éxito provocó la reacción de otros grupos amenazados por la apertura, pero las concesiones del gobierno terminaron allí.

⁹ Elster (1985: 421), adoptando la idea de "precompromiso" original de Thomas Schelling, apunta la hipótesis general de que este resultado puede deberse a una elección estratégica de gobiernos que deciden abdicar su poder de decisión en los organismos financieros internacionales para ser capaces de resistir las presiones redistributivas inflacionistas de los agentes internos: si puede decir "mis manos están atadas", tendrá un mayor poder de negociación frente a los actores políticos y sociales. El problema no es, como no lo era en el caso de la COB que comenté más arriba, si detrás de la abdicación hay una pérdida previa de recursos que la haya convertido en la *única* opción posible, sino si el resultado -deliberado o *emergente*- refuerza en los hechos la capacidad del actor para alcanzar sus objetivos. Por lo que respecta al gobierno de Paz Estenssoro -pero no a la COB a mediados de 1984- resulta indudable que la abdicación resultó enormemente funcional para la consecución de sus metas inmediatas: la reconstrucción del centro autoritario y la estabilización de la economía. Por supuesto, la situación será muy distinta si se rompe la confluencia entre los intereses del actor dependiente -el gobierno- y las decisiones y acciones del actor dominante -los organismos financieros internacionales-.

financiar sus déficits (Morales, 1990: 54). La congelación de los salarios en el nivel previo a la publicación de las medidas redujo de entrada los gastos, mientras el ascenso exponencial de los precios de los carburantes producidos y comercializados por el monopolio estatal y la gigantesca devaluación "de facto" del peso boliviano consiguieron que los ingresos fiscales aumentaran de un modo espectacular. Las medidas de austeridad tuvieron una eficacia estabilizadora inmediata (cuadro 6.2).

CUADRO 6.2 EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN (1982-1987)

TASAS DE INFLACIÓN ANUALES (1982-87). (diciembre a diciembre, porcentajes)

1982	1983	1984	1985	1986	1987
296.6	382.5	2.177.2	8.170.5	66.0	10.7

TASAS DE INFLACIÓN MENSUALES

SEPTIEMBRE 84-AGOSTO 85 SEPTIEMBRE 85-AGOSTO 86

Septiembre	37.32	Septiembre	56.5(*)
Octubre	59.21	Octubre	-1.9
Noviembre	31.55	Noviembre	3.2
Diciembre	60.88	Diciembre	16.8(*)
Enero	68.76	Enero	32.9(*)
Febrero	182.77	Febrero	7.9
Marzo	24.94	Marzo	0.1
Abril	11.78	Abril	3.6
Mayo	35.66	Mayo	1.0
Junio	78.46	Junio	4.3
Julio	66.30	Julio	1.8
Agosto	66.46	Agosto	0.7

(*) La alta tasa de septiembre de 1985 fue un efecto de la eclosión de la inflación reprimida por el tipo de cambio oficial y los precios administrados hasta el mes anterior. En diciembre de 1985 y enero de 1986 se produjo el último rebrote de la inflación, debido esta vez a una expansión *no-intencional* del gasto público, provocada en parte por un cálculo incorrecto del Aguinaldo de Navidad, y a la repercusión retardada del derrumbe del mercado del estaño en octubre, que presionó sobre las reservas de divisas y el tipo de cambio. Véase Juan A. Morales, "Precios, Salarios...", cit., p. 84.

Fuente: Morales (1989), p. 5; Morales (1987b), pp. 85 y 106, a base de datos del Instituto Nacional de Estadística y UDAPPE.

Junto a los ajustes de corto plazo, el D.S. 21.060 contenía *un paquete de medidas de "reforma estructural"* encaminadas a liberalizar los mercados de divisas, de bienes y trabajo, y a reducir el peso del sector estatal en la economía. Con las medidas liberalizadoras se dejó caer definitivamente a una buena parte de la agonizante industria sustitutiva y se impusieron fuertes restricciones adicionales al poder de negociación de los trabajadores en la arena económica, pero la transformación estructural que habría de tener un impacto más profundo y duradero en la dinámica del juego político boliviano y en la evolución de su movimiento obrero fué sin duda *la decisión de dismantelar la gran minería nacionalizada*. Si el empleo público total cayó en un 10% en 1986 y declinó más lentamente en los dos años siguientes para comenzar a repuntar de nuevo en 1989, el empleo en las *empresas estatales* sufriría una contracción cercana al 50% a lo largo del mandato de Paz Estenssoro (Morales, 1993: 109-10), mientras *la plantilla de COMIBOL, el eje histórico del movimiento obrero boliviano, se redujo de 27.900 a 7 mil trabajadores en sólo dos años*¹⁰. El objetivo inicial del gobierno a este respecto era parcelar las operaciones de COMIBOL y dismantelar progresivamente sus explotaciones menos rentables, pero el desplome del mercado del estaño en octubre de 1985 le ofreció la oportunidad y razones adicionales para ejecutar la jibarización abrupta y radical de la mayor empresa productiva de Bolivia.

Aunque el D.S. 21.060 confirmó la vigencia del sistema de cogestión obrera implantado en 1983, los términos de la "racionalización" de la minería pública estarían en adelante en manos del Banco Mundial, un actor inaccesible a las presiones y las sugerencias de la FSTMB. Resultaba evidente que en el nuevo contexto político las viejas organizaciones sindicales de la minas de Bolivia podrían hacer muy poco para evitar la destrucción masiva de las fuentes de trabajo de sus representados, y los mineros, sometidos a un cerco de hambre y desaliento tras la liquidación del sistema de pulperías y el hundimiento poder adquisitivo de sus salarios¹¹, comenzaron a abandonar los campamentos en un goteo

¹⁰ Datos de COMIBOL, en Ministerio de Planeamiento y Coordinación, *Estrategia de Desarrollo Económico y Social, 1989-2000*, La Paz, abril 1989, p. 145.

¹¹ De nuevo resulta imposible ofrecer cifras precisas sobre este punto. UNITAS (1987) estimaba entonces que sumando la caída del salario monetario y los efectos de la retirada de las subvenciones a los artículos de pulpería se obtenía una reducción del 75% en el poder adquisitivo de los mineros entre junio y diciembre de 1985, y es probable que sus cálculos fueran bastante ajustados. En una investigación que realizó el semanario *Aquí* en el campamento de Siglo XX durante los primeros meses de 1986 se describía así la el colapso del sistema de pulperías: «Hasta el mes de agosto del año pasado se entregaban con cierta regularidad entre 33 y 36 kilos de carne por mes y trabajador, un kilo de manteca, cinco litros de aceite, 24 litros de azúcar, 16 de arroz, 600 piezas de pan y 16 kilos

constante de deserciones¹². En este contexto, los resultados del XXI Congreso Minero, celebrado en Oruro entre el 12 y el 19 de mayo de 1986, certificaron, por un lado, que *los trabajadores habían adquirido una nueva conciencia sobre la gravedad de la crisis que enfrentaban*, y, por otro, que *no existían alternativas de acción viables en la coyuntura*.

La nueva conciencia sobre la profundidad de la crisis que enfrentaban las organizaciones obreras, se expresó en el dramático marginamiento de Juan Lechín, el líder histórico del proletariado minero boliviano, y en la derrota de las viejas tesis maximalistas que reclamaban la nacionalización de la minería mediana y, por lo tanto, «la toma del poder por la clase obrera», como la única opción estratégica del movimiento. El primer anuncio de lo que iba a ocurrir en el Congreso fue la decisión de las Asambleas de base de los mayores sindicatos mineros -Catavi, Siglo XX, Huanuni, Colquiri...- de aceptar la «renuncia irrevocable» de Lechín (Calla, 1986: 6), que hasta entonces había sido siempre una mera declaración ritual. A continuación, los delegados aprobaron por una mayoría abrumadora la tesis política "reformista" del sindicato de Catavi¹³, y los dirigentes de la Dirección Revolucionaria Unificada -transmutada ahora en Eje de Convergencia Patriótica-, que había desplazado a los liderazgos más moderados en el VI Congreso de la COB, perdieron las votaciones para todas las carteras de mayor jerarquía del Comité Ejecutivo. Finalmente, Juan Lechín, cuyo cargo había sido respetado por los vencedores para evitar la posibilidad de un cisma, ratificó formalmente su renuncia el 4 de junio, lamentándose por la "inexplicable" aprobación casi unánime del documento de Catavi y el desplazamiento de su gente, «barrida por el sectarismo

de fideos. Todo eso ya es recuerdo. A partir de la asunción del gobierno del doctor Paz Estenssoro apenas se han entregado cuatro kilos de carne en marzo, dos latas de leche, un bidón de aceite y un kilo de manteca, además de un kilogramo de arroz a precio de costo». Véase Aquí, *Testimonios de mineros*, La Paz, s/f, p. 6. Aunque el reconocimiento tardío de los esfuerzos de la UDP incorporaba tal vez una mitificación interesada de los "buenos viejos tiempos", resultaba muy difícil exagerar la magnitud del contraste. Una comisión de Derechos Humanos que visitó el mayor campamento minero de Bolivia a principios de abril constató por ejemplo que los trabajadores llevaban 4 meses sin recibir sus salarios y que bajaban a las galerías con los estómagos llenos de pan, agua y fideos. *Ibid*, p. 9.

¹² «En Catavi están trabajando 3.649 compañeros al 31 de marzo (de 1986). Antes éramos más de 4.500. Entre diciembre y febrero hubo 800 retiros voluntarios...Estamos tratando de dar una motivación para que la gente se quede. Sabemos que con hambre no se puede trabajar, por eso hablamos de un plazo de uno o dos meses. Esperamos que en ese plazo surja un plan de rehabilitación serio. Hasta tanto, es cuestión de aguantar, y esperamos que los partidos de izquierda de una vez se unifiquen, para empezar a trabajar por la toma del poder». Pedro Gómez, Secretario de Relaciones del Sindicato de Catavi [AC, s/n].

¹³ Calla (1986: 39), presente en el Congreso, ^{estuvo} calculó que sólo 70 de los 551 delegados titulares votaron a mano alzada por la tesis política rival, "mientras una mayoría arrolladora gritaba a todo pulmón '¡Catavi!, ¡Catavi!'".

y el oportunismo»¹⁴, en el nuevo Comité Ejecutivo.

La tesis política del sindicato de Catavi comenzaba recordando que los mineros fueron siempre «el corazón de la vida económica del país» y que esa había sido hasta entonces la base de su inmenso «poder político y social», para afirmar de inmediato la novedad radical del desafío que enfrentaban entonces los trabajadores: «El presente proceso regresivo a diferencia de los anteriores intenta liquidar con dicho poder económico para aplastar así nuestro poder político. Si esto se consuma, el poder de la COB, que no es otro que el poder de la FSTMB, se habrá extinguido»¹⁵. Lo que correspondía en esas condiciones era aunar esfuerzos -«no tenemos otra alternativa»- para evitar el cierre de las minas, trabajando sin descanso hasta que las explotaciones de COMIBOL fueran rentables: la consigna era, en palabras de los representantes de la plataforma política derrotada, «producir, producir, producir» (Calla, 1986: 24). Estos, por su parte, se limitaron a repetir que «la crisis del sistema ya no tiene otra solución en beneficio popular que no sea la revolución»¹⁶, y que el sacrificio sólo beneficiaría «al gobierno y a la burguesía» (Calla, 1986: 24)

El problema, sin embargo, era que el éxito de la estrategia del sindicato de Catavi, que había iniciado ya en marzo una jornada de trabajo ininterrumpida de 45 días de duración para incrementar la producción de su empresa¹⁷, dependía tanto o más del comportamiento altruista de los otros que del sacrificio propio: «Con esta plataforma de lucha la nación toda nos ayudará, el proletariado internacional vendrá en nuestro auxilio, ningún trabajador del mundo permitirá que el símbolo minero muera en Bolivia»¹⁸. No cabe especular aquí sobre

¹⁴ Carta de renuncia de Juan Lechín Oquendo, La Paz, 4 de junio, 1986, en CEDOIN, "Los mineros de ayer y de hoy", *Informe Especial*, La Paz, octubre 1986.

¹⁵ FSTMB, *XXI Congreso Nacional Minero, Oruro 12-19 de mayo 1986. Documentos y Resoluciones*, La Paz, CEPROMIN, 1986, p. 100.

¹⁶ Tesis del Eje de Convergencia Patriótica, en CEDOIN, "Los mineros...", cit., p. 25.

¹⁷ El 12 de marzo los trabajadores de Catavi y Siglo XX comenzaron a trabajar los siete días de la semana, «a pesar de que hace cuatro meses que no nos cancelan sueldos y que las pulperías se encuentran desabastecidas», con el objetivo de «demostrarle al gobierno que es una gran mentira eso de que la era del estancamiento ha terminado». Filemón Escóbar, secretario general del sindicato de Catavi, aseguraba que se pretendía -arrimando el hombro y buscando dinero «por mar y tierra»- aumentar la producción del ingenio, que había caído a 0,5 toneladas finas diarias, a 240 toneladas por mes -en sus mejores tiempos Catavi liberaba 1.200 toneladas mensuales-, para devolver a los trabajadores su fuerza económica y poder plantear las negociaciones con el gobierno «de igual a igual». *Hoy*, 19 de marzo, 1986.

¹⁸ FSTMB, *XXI Congreso...*, cit., p. 104.

si era o no posible que los mineros de Bolivia consiguieran los créditos solidarios que necesitaban para respaldar su sacrificio y salvar sus fuentes de trabajo. El gobierno, en cualquier caso, no estaba dispuesto ni a hacer un esfuerzo altruísta ni a permitir que los trabajadores ensayaran por su cuenta los planes de rehabilitación que estaban diseñando sus organizaciones, y el 6 de junio de 1986 hizo público su propio "Plan de Rehabilitación" para COMIBOL, rompiendo su promesa de esperar a conocer las propuestas sindicales: despidos masivos, cierre de empresas y cooperativización de galerías marginales. La FSTMB estaba ya en un callejón que sólo tenía una salida. Mientras los consultores del Banco Mundial aseguraban que estaban estudiando la viabilidad de los planes de los mineros, el gobierno utilizaba los recursos ya desembolsados por el mismo Banco y el FMI para cancelar los despidos y entregar un "regalo" extraordinario de 500 dólares a quienes abandonaran voluntariamente sus puestos de trabajo, consiguiendo con ello que 7.000 trabajadores dejaran la empresa entre enero y julio de 1986. Cada vez eran menos los que estaban dispuestos a continuar «absorbiendo polvo sin ganar nada»¹⁹. Y aunque la Federación minera aseguró que las deserciones colectivas, como la ocurrida en la mina Matilde²⁰, no volverían a repetirse, era muy poco lo que podía hacer para contener el rápido deterioro de la situación.

Finalmente, el 29 de julio la FSTMB se vio obligada a decretar un "paro forzoso", después de que en muchos campamentos, los mineros, abandonados a su suerte y carentes de los insumos mínimos necesarios para mantener la producción, habían dejado ya de acudir al trabajo. El 18 de agosto se decretó una huelga general indefinida que parecía condenada a convertirse realmente, dada la indiferencia del gobierno, en un paro eterno. Entre 1980 y 1985, el valor bruto de la producción minera había caído en algo más de un 80%²¹, y en esas condiciones Paz Estenssoro, respaldado por una cómoda mayoría parlamentaria, por el repliegue corporativo de todos los sectores obreros, que habían dejado de creer en la eficacia

¹⁹ Simón Reyes, Secretario de Relaciones de la FSTMB, en *Informe 'R'*, 117, julio 1986, p. 7.

²⁰ Los 500 trabajadores de la mina Matilde se acogieron al retiro "voluntario" y abandonaron el campamento con sus familias con destino a las barriadas de La Paz. La experiencia fue dramática: «Mucha gente de Matilde viene a la Federación a preguntar qué va a hacer, la plata que les dieron no les sirve siquiera para un anticrético -alquiler en depósito- en El Alto. La mayoría de los mineros no tiene casa, el trabajador se encontró sin casa, con mujer, hijos, sin asistencia médica, sin siquiera la aspirina que les daba la empresa y, finalmente, sin escuela para los hijos». Simón Reyes, *Ibid.*, p. 8.

²¹ Ministerio de Planeamiento y Coordinación, *Estrategia de Desarrollo ...*, cit., p. 138.

de las luchas nacionales²², y por el "consenso posinflacionario" que estaba comenzando a generar entre la ciudadanía el éxito inicial del plan de estabilización, tenía muy poco que perder con la prolongación del conflicto. Gonzalo Sánchez de Lozada, ministro de Planeamiento y Coordinación, no se privó de comentar con aire sarcástico que todo aquello suponía un útil ahorro para el estado, dado que «día de huelga es día que no les pagan su sueldo»²³. Al parecer, una huelga general de la FSTMB sólo servía ahora para dar a los tecnócratas la oportunidad de ejercitarse en el humor negro.

El acto final de la tragedia minera comenzó el 21 de agosto, cuando la FSTMB ordenó una "movilización general" de sus afiliados, y los trabajadores del subsuelo de todo el país se concentraron en Oruro para emprender al día siguiente la "Marcha por la Vida y la Paz" con rumbo a la capital. Una semana antes de que la columna de 10.000 mineros comenzara su caminata por el Altiplano, Juan Lechín había tenido ocasión de constatar en una reunión privada con Jeffrey Sachs, mientras tres ministros viajaban a Whashington para negociar un nuevo financiamiento y demostrar que el país estaba cumpliendo al pie de la letra todas las recomendaciones del FMI, que la economía boliviana estaba dirigida ahora «por control remoto»²⁴. En esas condiciones no cabía concesión alguna, y en la madrugada del 29 de agosto, cinco días después de aprobar el D.S. 21.377, de "reestructuración" de COMIBOL, Paz Estenssoro decretaba el segundo "estado de sitio" de la democracia, enviando al ejército a detener la marcha minera a las puertas de La Paz. Una buena parte de la izquierda quiso ver en aquella decisión el anuncio de un retorno inminente de los viejos tiempos. Dos estados de excepción en menos de un año parecían descubrir a un gobierno acorralado, condenado a depender cada vez más del recurso a la violencia para mantener el orden, reprimiendo a un movimiento popular que ascendía a medida que la nueva política económica se demostraba incapaz de garantizar a los bolivianos los medios mínimos de subsistencia. El desarrollo de los hechos, sin embargo, iría desmintiendo muy pronto esas lecturas esperanzadas. La jugada, en efecto, no fue un segundo paso atrás del gobierno "neoliberal", sino, por el contrario, *el golpe fatal contra la debilitada capacidad de resistencia de los actores sociales tradicionales*. En adelante, Paz Estenssoro no necesitaría

²² Jorge Lazarte, "¿Crepúsculo del movimiento obrero?", en *Informe 'R'*, 114, abril 1986, p. 14.

²³ Citado en "¡Por la vida y la paz!", separata de *Informe 'R'*, 118, septiembre de 1986, p. 2.

²⁴ *Presencia*, 14 de agosto, 1986.

hacer más demostraciones de fuerza bruta.

De vuelta en los devastados campamentos, los mineros no pensaron en volver al trabajo. Varios grupos emprendieron huelgas de hambre en los socavones, que fueron extendiéndose en los días sucesivos hasta incorporar a 2.000 personas en todo el país. La Iglesia Católica pidió entonces al gobierno que escuchara «el clamor de los mineros», y éste aceptó finalmente entablar conversaciones con los representantes de la FSTMB. Pero en el acuerdo definitivo, firmado en la noche del 12 de septiembre, el gobierno sólo se comprometió a mantener la propiedad estatal de las minas de COMIBOL, limitándose por lo demás a prometer que consultaría en lo sucesivo la opinión de los trabajadores; que la plantilla de la empresa, tras su rehabilitación, "podría alcanzar" a 13.000 empleados; y que promovería la creación de nuevas fuentes de trabajo en los departamentos afectados por los cierres²⁵. Seguramente era lo mejor que podían esperar obtener los mineros en las nuevas condiciones. Pero por mucho que el Comité Ejecutivo de la FSTMB se esforzó en señalar que se trataba de la primera vez desde agosto del año anterior en que sus luchas «habían logrado que el gobierno retroceda en algo»²⁶, la gran mayoría de las Asambleas de base se pronunció en contra del convenio. Tal vez en esta actitud pesara el influjo de aquella "cultura política" maximalista arraigada en la historia del movimiento obrero boliviano, que hacía de la negociación algo inherentemente sospechoso²⁷, pero es indudable que en la decisión de las bases hubo también, y ante todo, un claro *elemento de cálculo*, fundado en la certidumbre de que en el medio plazo las acciones colectivas canalizadas a través de los sindicatos serían incapaces de sostener la estrategia de defensa de la minería pública y sus puestos de trabajo²⁸.

La negativa a aceptar el contenido del convenio y la preferencia por concentrar las reivindicaciones en la obtención de una mayor compensación monetaria por los retiros, por

²⁵ *Presencia*, 14 de septiembre, 1986.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lazarte (1989a: 13) recuerda que las corrientes radicales calificaron el convenio de "traición", y que su campaña difamatoria encontró una gran receptividad en las bases, que compartían una percepción radicalmente negativa de las prácticas de la negociación y el compromiso. Para una descripción general de la "cultura política" del proletariado minero puede verse Lazarte (1986a).

²⁸ El propio Lazarte (1986b: nota 11) hizo hincapié en la extensión entre las bases de una profunda desconfianza hacia la capacidad de las organizaciones sindicales en un trabajo escrito al calor de los acontecimientos que estoy relatando.

lo tanto, debería entenderse ante todo como *una opción masiva por la salida individual* de un colectivo de trabajadores consciente de las dimensiones de su pérdida de poder y de la *ineficacia de sus organizaciones tradicionales en el nuevo escenario*. La desconfianza de las bases en la capacidad del sindicato para sostener sus estrategias de resistencia debió ser muy profunda porque las condiciones de la salida individual eran excepcionalmente duras, tanto por el valor de mucho de lo que iban a dejar detrás como por el mísero equipaje que portarían los trabajadores al abandonar su empresa. No debería subestimarse, en efecto, la importancia que tuvieron en el contexto boliviano las conquistas que habían alcanzado los mineros en materia de sanidad y educación, ni la vitalidad, la integración y la especificidad de la vida comunitaria de los campamentos, que convertían a la salida en una ruptura catastrófica de la identidad cultural. Por otro lado, resultaba evidente que los capitales de partida que podían obtenerse con las indemnizaciones serían siempre insuficientes para emprender una nueva vida profesional sin ningún apoyo público; que sólo unos pocos trabajadores del subsuelo disponían de oficios útiles para competir en una economía informal urbana sobresaturada; que los mineros, alejados durante generaciones de la vida rural y habituados al clima de altura, difícilmente se adaptarían con éxito a la faena agrícola en los valles tropicales. Eran numerosos los precedentes de experimentos colonizadores fracasados en tierras mal comunicadas, con mercados raquíticos y apoyos técnicos y financieros inexistentes o muy precarios, y sólo las actividades ilegales ligadas al narcotráfico ofrecían el señuelo de una alternativa de empleo viable²⁹.

Pero a pesar de los enormes costos que tenía para los mineros la salida individual, la gran mayoría de ellos optó por dar la espalda a los esfuerzos del Comité Ejecutivo, deslegitimándole y obligándole a dimitir cuando sólo habían transcurrido los cuatro primeros meses de su mandato. Durante el Congreso Extraordinario celebrado entre el 20 y el 26 de octubre de 1986, el segundo en la historia de la FSTMB³⁰, las corrientes de extrema izquierda parecieron recuperar la iniciativa, e incluso los trosquistas del POR parecieron

²⁹ Pero ni siquiera en sus mejores momentos la explotación de la coca pudo absorber a la población expulsada de las minas, las fábricas y la agricultura tradicional, y además el precio de la hoja sagrada comenzó a caer aceleradamente a partir de 1987 debido a la sobreproducción. En estas condiciones, los fracasos individuales y colectivos de los grupos de mineros que optaron por ingresar en el circuito coca-cocaína se convirtieron en un drama cotidiano. Véase Toranzo y Arrieta (1989), pp. 138-141.

³⁰ El primer Congreso Extraordinario se celebró Pulacayo en 1946, en los días que siguieron al linchamiento de Villaruel, y aprobó la famosa Tesis Política de la FSTMB -"Tesis de Pulacayo"- de inspiración trosquista.

encontrar motivos para pensar que había llegado aquél esperado momento en el que las percepciones de las bases sintonizaban con el discurso de su "vanguardia"³¹. El sindicalismo minero estuvo de hecho al borde de la ruptura. Finalmente, sin embargo, se impusieron las viejas tradiciones unitarias que, impulsadas desde la base, obligaron a los aparatos partidarios a ceder en sus planteamientos de principio o en sus aspiraciones hegemónicas. No era el tiempo de discutir estrategias políticas, y las bases eran perfectamente conscientes de que una división abierta en la FSTMB dificultaría aún más la negociación de sus compesaciones por despido. Los partidos ligados al Eje de Convergencia Patriótica terminaron aceptando así la permanencia del PCB en puestos clave del nuevo Comité Ejecutivo; los comunistas, por su parte, tuvieron que resignarse a co-presidir la disolución del núcleo central de la clase obrera boliviana³². Sus posiciones, al igual que las del grupo autogestionario, habían sido marginadas por completo en los debates del Congreso, y tan sólo podían intentar contribuir a que el retiro masivo de los trabajadores de COMIBOL tuviera lugar en las mejores condiciones posibles. Era lo único que quedaba por hacer.

Así, en diciembre de 1986 los portavoces gubernamentales pudieron anunciar con satisfacción que 19.000 mineros de COMIBOL habían sido ya "relocalizados". Con aquella expresión eufemística certificaba el hundimiento del eje histórico del movimiento obrero boliviano, la conclusión de un proceso equivalente a la desindustrialización masiva y abrupta de la economía del país. Las transformaciones estructurales provocadas por la quiebra paralela de la manufactura sustitutiva a raíz de la liberalización radical del comercio exterior tuvieron, dado el lugar relativamente marginal que ocupó siempre la industria moderna en la economía nacional, un impacto infinitamente menor sobre los recursos del movimiento obrero que la quiebra de la gran minería nacionalizada. En cualquier caso, al término del

³¹ El POR propugnaba el retiro masivo de los trabajadores, concentrando la lucha en la demanda de unas compesaciones que el estado no podría satisfacer. La frustración consiguiente tendería a transformar las reivindicaciones económicas en una pugna por el poder, previa ocupación de las minas. Catavi y Siglo XX, los mayores sindicatos mineros y los mismos que habían lanzado unos meses antes la estrategia de sacrificios y defensa a ultranza de las empresas de COMIBOL, incorporaban también ahora el aumento de los "beneficios" por despido como punto central de la plataforma de lucha, de modo que los trosquistas se encontraron con que la Comisión Política resolvió presentar su documento ante la Plenaria del Congreso, «cediendo a los sentimientos que parecían dominar» entre amplios colectivos de trabajadores. "II Congreso Extraordinario Minero: unidad y determinación de lucha", separata de *Informe 'R'*, p. 2.

³² No podían, por supuesto, asumirlo en su discurso, y después de su elección continuaron afirmando que rechazaban "por principio la negociación de mejores beneficios sociales para los trabajadores que se retiren". *Ibid.*, p. 8.

primer año del mandato de Paz Estenssoro *los resultados de la doble transición*, expresados en la espectacular reconstrucción del poder del centro político en el marco de las reglas formales del juego democrático y en la desaparición del eje histórico del viejo modelo de desarrollo, *habían consumado ya una transformación radical en las condiciones que permitieron la emergencia y la reproducción en Bolivia de un fuerte movimiento obrero sindicalista y revolucionario.*

CONCLUSIONES

1. He intentado defender que los elementos centrales de la forma organizativa que heredó el movimiento obrero boliviano en la coyuntura democrática pueden explicarse como el resultado de un *proceso de adaptación funcional a unas condiciones de entorno específicas*, dadas por la evolución peculiar del modelo de acumulación y el sistema político a lo largo de la historia contemporánea de Bolivia. Aquellas condiciones de entorno determinaron el desarrollo de un movimiento obrero absolutamente dependiente de los recursos de un núcleo de trabajadores mineros insertos en contextos comunitarios, condenados a competir con las élites del estado en un juego de conflicto puro, privados de la posibilidad de promover sus intereses a través de la acción político-partidaria pero capaces a la vez de mantener abierta la perspectiva de la toma del poder en un acto insurreccional espontáneo. La vitalidad y la presencia continua de la COB en el escenario nacional boliviano como "actor mixto", organización corporativa minera y movimiento político revolucionario, respondió a su vez a la reproducción esas mismas condiciones de entorno; o, en otras palabras, a la perpetuación de *las características específicas del subdesarrollo boliviano*: el confinamiento minero-exportador de su economía y el proceso de decadencia institucional que se inició en la quiebra del orden oligárquico y progresó a lo largo de la revolución "inconclusa". El poder corporativo minero y la decadencia institucional del "Estado del 52" explican así la fuerza que adquirió el sindicalismo y la credibilidad de su discurso revolucionario.

2. Pero el confinamiento minero también determinó durante décadas los límites del movimiento obrero boliviano, que fueron los de un *grupo de presión* incapaz de desarrollar un programa político para las mayorías. Como el sudor del minero producía casi la totalidad de los magros recursos internos de inversión de que disponía el país, su sacrificio les enfrentó necesariamente a muchos, condenándoles a una lucha solitaria para conseguir una

participación digna en el producto de su propio trabajo. Aislados después de 1952 de las clases medias urbanas y de las grandes poblaciones campesinas, los mineros desencadenaron y sufrieron una y otra vez las violentas pugnas distributivas que hicieron de ellos víctima eterna de "masacres" y que parecieron convertir a Bolivia en «país de vísperas» (Quiroga): el territorio en el que «la segunda revolución», esta vez definitivamente socialista, era siempre «una posibilidad vital» (Dunkerley, 1987: 287). Tal vez nadie haya captado mejor que Sergio Almaraz (1969: 69-70) tanto el carácter agónico y limitado del movimiento como el contenido milenarista de las esperanzas que tantos observadores y militantes depositaron en él:

«Se cree de buena fe que los mineros forman un sector proletario cuyas luchas pueden oscilar dentro de los márgenes dados de reivindicaciones posibles. Es un error, porque en las minas la vida ha retrocedido a la última frontera; para rescatarla hay que destruir un sistema (...). Están acercándose a la verdad bajo la desnuda violencia que se desató en 1964. Descubrirán que nada le deben al país que no sea su miseria y que ella es la condición que Bolivia retiene para mantener una existencia artificial. Cada vez creen menos en el país y hombres, y están curando la primera herida con la pérdida de la esperanza reformista. Esta dolorosa aproximación a la verdad, les revelará la única condición posible de su liberación: la de confiar solamente en sus propias fuerzas. Y entonces será cuando el rencor, actualmente ausente del pecho de las víctimas, les hará decir "nosotros" antes que "la Patria" produciendo el último descubrimiento: el derecho al país propio y el destino elegido. Así el rencor alimentado por la verdad, devastará con las ondas destructoras de la revolución un pequeño mundo donde todo fue mezquino menos el sufrimiento»

3. En la medida en que mi interpretación del desarrollo histórico del movimiento obrero boliviano -construida sobre la hipótesis de la elección racional y la descripción de estructuras de oportunidades objetivas- fuese convincente, haría innecesario apelar a las variables habituales, tan escurridizas y tan fuertemente ideologizadas -influencias "foráneas", sustratos culturales andinos, niveles "insuficientes" de "madurez" política o, por contra, un elevado grado de conciencia "socialista"-, para entender sus rasgos característicos. Las "razones" del sindicalismo revolucionario boliviano serían, por el contrario, fácilmente comprensibles, dado que cualquier conjunto de individuos enfrentado a la misma sucesión de circunstancias habría producido en el medio plazo una configuración semejante. También serían fácilmente comprensibles *los determinantes de su crisis* si se acepta que *la vitalidad de esa forma organizativa dependía de la reproducción de los parámetros que constituían su "nicho" ambiental*, y se constata que éstos se disolvieron en gran medida por efecto de la

"doble transición" que arrancó a finales de la década de los setenta.

Al reflexionar sobre el hundimiento de la COB en la coyuntura democrática, Javier Medina (1986: 51) evocaba el manido mito de Sísifo, comparándolo con el héroe condenado por poderosas fuerzas adversas a caer hasta el fondo del valle «para al día siguiente volver a cargar con sus "representantes" por la empinada cuesta de la lucha de clases». Desde la perspectiva de este trabajo, sin embargo, parecería mucho más apropiado imaginar a un Sansón anémico derribando un frágil templo de cartón³³ sobre su propia cabeza. Y la conclusión central de los argumentos que he desarrollado a lo largo de las páginas precedentes podría tal vez resumirse diciendo que aquéllo fue en realidad un final *inevitable: resultaba sencillamente imposible*, en efecto, *que aquel viejo movimiento minero, sindicalista y revolucionario, aprovechara las nuevas oportunidades y enfrentara con éxito los nuevos desafíos que emergieron durante el cambio de década con el cierre de un largo ciclo de la historia de Bolivia.*

4. En el capítulo 3 de esta tesis afirmé que a finales de los años setenta y en paralelo al ascenso del poder obrero, los parámetros y las reglas del juego socio-político habían sufrido cambios fundamentales bajo el doble impacto del agotamiento del modelo de acumulación tradicional y de la transición política, de tal modo que exigían el tipo de estrategias de *cooperación* con el gobierno -concertación- que el sindicalismo boliviano no había tenido ocasión de desarrollar a lo largo de su historia previa. Si la caída del orden autoritario le ofrecía la posibilidad de romper su secular confinamiento minero, la crisis del modelo de acumulación tradicional, que auguraba un fuerte declive del poder de negociación del viejo núcleo proletario en la arena económica, hacía de ello una necesidad perentoria. La organización obrera, por lo tanto, no jugaba en 1982 a debilitar desde la sociedad civil a un estado excluyente, sino a *consolidar en lo posible, en medio de la crisis económica más profunda de la historia de Bolivia y en el marco de las reglas de juego de la democracia representativa, los recursos políticos que había atesorado a lo largo del proceso de declive del orden autoritario.* Por ello, los pagos de la central sindical tenían ahora el mismo signo que los de los partidos agrupados en la UDP, dado que la suerte de todas las organizaciones

³³ «¿Qué es ahora la UDP?...Si no está para un soplo de vela, ni siquiera de un fósforo». Intervención de Filemón Escóbar en la Comisión Política del VI Congreso, COB, *VI Congreso de la COB*, cit., p. 72.

del "movimiento obrero y popular" dependía de la capacidad del nuevo régimen para ofrecer soluciones a las grandes mayorías nacionales; por ello, su primer objetivo debía ser estabilizar la economía, conteniendo la espiral inflacionaria que habían heredado de la última administración militar.

Es cierto que el movimiento obrero boliviano enfrentó en la hora de su poder problemas "insolubles" a los que ninguna organización hubiera sido capaz de responder con éxito. En otras palabras: no cabe duda de que dadas las condiciones críticas en que tuvo lugar el proceso de transición, el movimiento obrero, como *cualquier* actor de gobierno que hubiese ocupado entonces su lugar, debía asumir necesariamente algún costo, que jugaba en realidad a no perder demasiado. Pero también parece evidente que la radical inadecuación de sus conductas a las exigencias de la coyuntura democrática contribuyó precisamente en mucho a que perdiera demasiado, a multiplicar la escala del descalabro. Entiendo que aquella espectacular destrucción de sus recursos políticos no fue un acto deliberado, impulsado por consideraciones de justicia distributiva -como el mundo no me ofrece lo que merezco, prefiero abandonarlo-, sino una consecuencia indeseada de acciones que tenían otros objetivos, y a partir de este punto mi tarea ha sido intentar iluminar las razones de su estrepitoso fracaso; intentar explicar -reduciendo perplejidades propias y espero que alguna ajena- *por qué las conductas del movimiento obrero boliviano se alejaron diametralmente de lo que exigía su nuevo contexto estratégico*.

5. La teoría de la elección racional propone explicar las conductas que se alejan del equilibrio del juego desde la *información incompleta* de los decisores, y a lo largo del capítulo 4 mantuve que una parte importante de la respuesta puede encontrarse sin duda aquí: en las limitaciones de actores "racionales pero mal informados", sometidos a las restricciones propias del entorno incierto característico de todos los momentos de entrada en situaciones históricas radicalmente nuevas. Como argumenté en su momento, a finales de 1982, y *dado el necesario desconocimiento de las dimensiones de la crisis, la precariedad del nuevo orden institucional, y la ausencia de experiencias previas en el juego de la alternancia democrática*, ningún cálculo económico o político de medio plazo podía haber aportado a los liderazgos de la COB motivos suficientes para abandonar el repertorio tradicional de estrategias de presión salarialista y apoyar en cambio una política de austeridad que les hubiera forzado a asumir los costes inmediatos y ciertos de un enfrentamiento con las demandas de sus bases.

Si era imposible para todos los actores prever tanto la magnitud de las amenazas que se derivaban de la crisis económica como el destino de las nuevas instituciones democráticas, y si además no cabía recurrir a precedentes históricos para anticipar el impacto de una posible derrota electoral de la izquierda sobre el poder político de las organizaciones del trabajo, sólo cabía esperar que la COB renunciase al compromiso y se dispusiera a desplegar todo el poder de negociación de que disponía para obtener la máxima satisfacción posible de las demandas materiales de su *clientela* tradicional. Conviene tener muy claro que cualquier calculador egoísta, dada la estructura de preferencias de los dirigentes sindicales y las condiciones de incertidumbre contextual en que debían tomar sus decisiones, habría adoptado una conducta parecida. Dicho de otro modo: el origen de la "racionalidad limitada" que demostró el movimiento obrero boliviano a lo largo de todo el primer año del mandato de Siles Zuazo estuvo, más allá de la desinformación que compartían *todos* los decisores, simplemente en el hecho de que el actor político hegemónico era un sindicato, de modo que *fue la estructura de preferencias del sindicato la que determinó las prioridades de la política económica.*

6. En este punto, la hipótesis de la elección racional permite evitar que la perspectiva privilegiada que otorga el tiempo transcurrido desde entonces produzca una *inversión idealista* de los términos del problema. Hoy sabemos, en efecto, que el compromiso *normativo* con los partidos de la izquierda o con las convenciones de la democracia electoral hubiera resultado funcional para coordinar las políticas anti-inflacionarias que interesaban al conjunto del movimiento obrero: paradójicamente, la concertación de una política de austeridad que interesaba en los hechos *a todos* los actores de la izquierda sólo podría haberse producido de haber estado los cálculos egoístas del sindicato *distorsionados* por afectos y valores. Pero el universo de normas-valores del sindicalismo revolucionario boliviano *no explica* por qué la COB decidió dar la espalda al compromiso: tan sólo permite entender por qué *pudo comportarse* como un calculador egoísta frente a la coalición de partidos de la izquierda, sin pasar por ningún debate interno y condenando al mutismo a los dirigentes que deseaban imponer una transformación cooperativa o "solidaria" a la matriz de pagos que percibía *como* *sindicato*. La tradición sindicalista, por lo tanto, no funcionó como una "anteojera", sino como una *coartada estratégica* que permitió dar la espalda sin costo alguno a una cooperación que *no interesaba* entonces al sindicato. *La negativa a concertar*

con el gobierno una política de austeridad se explica así desde los intereses corrientes del *sindicato* y no, como es la norma en los trabajos sobre este tema, desde las rivalidades ideológicas ancestrales o las "culturas políticas" milenaristas que supuestamente nublaron el entendimiento de los liderazgos obreros de Bolivia.

7. Apartar del análisis todas las variables personales, culturales e ideológicas equivale a perpetrar una simplificación teórica bastante brutal, pero a cambio ilumina la raíz del problema que enfrentó el movimiento obrero boliviano durante el primer año del mandato de Siles: *la radical disfuncionalidad de la tradición sindicalista para la ejecución eficaz de las tareas de gobierno que le dictaba la coyuntura*. La concentración del poder político del movimiento obrero en manos del *sindicato* permite explicar, en efecto, *la diferencia específica del caso boliviano* en un entorno incierto en el que las estrategias de política económica sólo podían ser «preguntas explorativas y experimentales» a una realidad desconocida (Scharpf, 1992: 33). Tanto el profundo sesgo salarialista que adquirió finalmente un programa de estabilización que había sido presentado como un esfuerzo "de guerra", como la incapacidad de la UDP para romper el prolongado bloqueo de la política económica e iniciar el deseado viraje hacia un mayor "realismo" financiero adquieren pleno sentido en este contexto. A lo largo de 1983, la COB tuvo el poder, pero no las razones que hubieran podido llevarle a compartir las responsabilidades de gestión. Como se ignoraba la magnitud de la crisis y como era imposible anticipar y trasladar de un modo creíble a las bases el *interés* de evitar la trampa de una victoria electoral de la derecha, sólo la *identificación* de los trabajadores con los partidos de la izquierda hubiera podido aportar los motivos necesarios para asumir un sacrificio que a la postre habría beneficiado a todos. Pero esta concordancia *fortuita* entre la herencia normativa del movimiento obrero boliviano y los requerimientos de la coyuntura no se produjo, y el gobierno de la UDP tuvo que asistir impotente a la caída libre de la economía por la pendiente inflacionaria.

8. La explicación de las estrategias del movimiento obrero boliviano en la coyuntura democrática no puede reducirse, sin embargo, a la falta de *motivación* del *sindicato* para cooperar en el gobierno de la crisis. Anoté en alguna parte que si las decisiones iniciales adoptadas en los momentos de entrada en un contexto de crisis y transición arrojan resultados absolutamente imprevistos, la constatación de este hecho ofrecerá siempre al decisor daños

adicionales para perfeccionar o alterar las teorías causales y las expectativas sobre el comportamiento de los otros sujetos que regían hasta entonces sus conductas. Sin duda, todos aprendemos de la experiencia. Pero los actores colectivos deben poseer, además, el *poder institucional* necesario para comprometer a sus miembros en un curso de acción acorde con sus nuevas percepciones, y *las estrategias cooperativas exigían mucho más de los representantes sindicales que las viejas prácticas confrontacionistas*: requerían el tipo de articulación organizacional del que la COB carecía por completo.

En el capítulo 5 defendí así que desde mediados de 1984 las decisiones del movimiento obrero sólo pueden entenderse *desplazando la atención desde el cálculo egoísta del sindicato en un entorno incierto hacia las variables institucionales que delimitaban su capacidad de estrategia*, y presenté el estrepitoso fracaso de las medidas arrancadas al gobierno con la huelga de hambre de enero de 1984 como un punto de inflexión a este respecto. Resultaría muy difícil sostener, en efecto, que después de esa fecha los liderazgos sindicales continuaban desconociendo que el "éxito" de sus presiones distributivas sobre el estado tan sólo generaría graves crisis de abastecimiento en los mercados y saltos inflacionarios cada vez más pronunciados; que los dirigentes obreros no estaban preocupados por la multiplicación de la competencia entre los grupos de asalariados y por el hecho de que una parte creciente la población tendiera a dar la espalda a la COB, canalizando sus acciones de protesta a través de actores sociales competidores y manifestando su preferencia por las fuerzas políticas más hostiles al movimiento obrero. En este contexto, la publicación del paquete económico de abril de 1984 puede describirse como un momento de definición fundamental, dado que el intento de romper el bloqueo de la política económica planteó el primer desafío serio al gobierno interno de una COB que *tenía ya razones para tomarse suficientemente en serio la necesidad de estabilizar la economía, emprendiendo un giro hacia la moderación de las demandas*. Por entonces resultaba ya totalmente evidente, en efecto, que los trabajadores no estaban implicados en un juego fructífero; que no se trataba de ganar, dado que la realidad de la crisis garantizaba que los niveles salariales no podrían mejorarse en el corto plazo, sino de evitar que la prolongación de la caída impusiera pérdidas mayores.

9. Pero la *herencia institucional* que recibió la COB como actor corporativo en la coyuntura democrática de los ochenta estaba particularmente mal adaptada para emprender con éxito el ajuste hacia estrategias de compromiso y moderación salarial que exigía su nueva

matriz de pagos. El sindicato, en primer lugar, se había consolidado como una *organización minera*, y únicamente en los estertores de un largo proceso de decadencia política emergió como representación corporativa del heterógeno conglomerado de asalariados urbanos, trabajadores informales y campesinos tradicionales que constituyen el "pueblo" de Bolivia. Y si era inevitable que aquel torrente de "nuevas entradas" de actores que abandonaron abruptamente sus afiliaciones tradicionales en la crisis multiplicara los focos potenciales de *conflicto interno* entre intereses grupales y la *desarticulación normativa* del movimiento sindical, el compromiso histórico de la organización central con la defensa de una gran minería pública que había terminado convirtiéndose en un gigantesco sumidero de recursos públicos estaba condenado a agravar las contradicciones internas, multiplicando los agravios comparativos. Argumenté que en ese contexto resultaba imposible para el liderazgo nacional justificar el giro hacia la moderación apelando al interés *de todos*: no existía ningún nivel de integración normativa y cognitiva entre los miembros del movimiento, y los conflictos entre las preferencias materiales de los sectores eran demasiado evidentes. No cabía, por lo tanto, desarrollar estrategias que resultaban atractivas *en conjunto*, pero no para cada miembro individual. En segundo lugar, los dirigentes de la COB debían adoptar sus decisiones en un sistema de gobierno muy próximo a la *democracia directa*, amparado por una *ideología basista* sólidamente arraigada y marcado además por la presencia de una pluralidad de *élites faccionales* en competencia. Espero haber mostrado que en esas condiciones resultaba indiferente que los liderazgos percibieran la necesidad de emprender un ajuste estratégico capaz de contener las pérdidas *futuras*. Mientras la multitud de posiciones políticas presentes en los debates asamblearios de los Ampliados y o en el Congreso nacional obligaba a reducir la complejidad limitando las discusiones a problemas de corto plazo, la ideología basista -que privaba de cualquier margen de confianza a todo aquél que ocupara posiciones de "poder"- y el desafío permanente de las élites opositoras forzaban a los liderazgos a demostrar cotidianamente su compromiso con las reivindicaciones *inmediatas* de las bases en todos los niveles de la red sindical.

10. Dada la ausencia de cualquier estructuración vertical efectiva de la autoridad en seno el actor colectivo, seguramente resulte más adecuado describir a la COB de 1982 como una poderosa *coalición de intereses* formada en torno a las comunidades mineras durante los años de oposición al último autoritarismo militar, y no como un *actor corporativo*. Desde

luego, sus órganos de gobierno poseían el poder formal de adoptar por mayoría decisiones vinculantes, capaces de comprometer los recursos de sus miembros en acciones concertadas. Pero en los hechos la COB operaba bajo reglas que eran consensuales *de facto*, lo que hacía imposible la *discriminación* y permitía a cada grupo actuar en cada momento para maximizar sus intereses individuales, apoyando o no las estrategias colectivas en función de cálculos puramente egoístas. La coalición comenzó así a disolverse con la desafección campesina cuando la dirección central intentó imponer decisiones vinculantes que favorecían claramente a los segmentos urbanos; progresó con la creciente "indisciplina" de los sindicatos de "clase media" -burocracia civil- cuando se sintieron marginados *vis a vis* los trabajadores manuales, y concluyó con la reducción del movimiento huelguístico de marzo de 1985 a las acciones del contingente minero desplazado a La Paz, apoyado sólo por un núcleo de universitarios radicalizados.

11. La ineffectividad de las decisiones adoptadas por mayoría en los órganos de gobierno tuvo sin duda aspectos positivos, dado el carácter marcadamente *excluyente* de alguna de ellas: sólo hay que imaginar la suerte que hubiera corrido el pequeño campesino que producía para el mercado de no haber podido optar por la salida, evadiendo los controles de precios. Sin embargo, la absoluta ausencia de mecanismos institucionales capaces de coordinar las acciones de grupos que no poseían de entrada vínculos de solidaridad ni orientaciones cognitivas comunes, terminó arrojando el peor resultado posible para la gran mayoría de los asalariados y para los grupos populares con menores recursos. A medida que la progresión de la crisis económica fué recortando el total a repartir, el carácter de suma cero de cada conflicto inter-sectorial se hizo más evidente, abriendo de par en par la puerta a la violencia anómica, y mientras todos continuaban perdiendo en una espiral descendente que parecía no tener límite, la redistribución de los recursos menguantes entre los sectores del "movimiento obrero y popular" tendió a depender tan sólo de la magnitud de los daños que pudiera infligir cada uno a sus conciudadanos y compañeros de clase. Pero debería quedar claro que la explosión anómica del conflicto sectorial y aquel salto al vacío que fue la exaltación del viejo discurso radical-revolucionario en el seno del VI Congreso de la COB sólo fueron un resultado *inevitable* del desarrollo de la crisis debido al contenido específico de la estructura institucional que había recibido el sindicalismo boliviano de su trayectoria histórica previa. No existe una correlación necesaria entre los contextos de crisis económica

y el desencadenamiento de dinámicas hobbesianas en el seno de las clases populares: fue la ausencia de una organización capaz de "representar" con eficacia los intereses generales lo que estableció en Bolivia el vínculo causal entre ambos procesos.

12. Fue la nula capacidad de estrategia de la COB, por lo tanto, lo que hizo de ella a partir de mediados de 1984 un *jugador intratable*, insensible a los llamamientos al compromiso, a las apelaciones al futuro o a los intereses comunes. Como la COB sólo podía en los hechos expresar, agregándolas, las demandas de suma cero de los sectores, como sólo podía sostenerse exaltando la unidad negativa de todos en la oposición al gobierno - amplificando el viejo discurso radical-revolucionario-, estaba condenada a pedir cien donde sólo había diez, y a exigirlo todo ahora, olvidando el futuro más inmediato. Entre abril de 1984 y marzo de 1985, los gobiernos de Siles Zuazo actuaron frente a la COB del único modo en que podían hacerlo: si era absurdo esperar *obtener concesiones de la COB*, y si era imposible *prescindir sin más de la relación con ella*, no quedaba sino ceder una y otra vez a sus presiones. El resultado de esta interacción entre un actor social enteramente rígido, *atado a un maximalismo reivindicativo que no era sino la suma agregada de todos los conflictos de suma cero que emprendían los distintos sectores de sus bases*, y un gobierno "popular" atado a cooperar con él, fue por supuesto que Bolivia se hundió en la peor hiperinflación registrada hasta entonces en América Latina, y el movimiento obrero en la crisis de legitimidad más profunda de su historia.

En marzo de 1985 la COB se enfrentó definitivamente a las restricciones que impusieron la crisis económica y las nuevas reglas institucionales a sus alternativas en el juego socio-político. Por un lado, el sistema democrático ofrecía ahora a todos aquéllos que participaron en las protestas políticas impulsadas por la COB -protestas que culminaron en aquél gigantesco motín popular que fueron las "jornadas de marzo"- una salida institucional precisa -las elecciones- y designaba a un conjunto de actores -los partidos- encargados de canalizar las demandas de cambio: de este modo, el poder político de la COB sólo podía ir disolviéndose a medida que se aproximaba la fecha de las elecciones y los nuevos jugadores se aprestaban a entrar en la escena. Por otro, la progresión de la crisis económica terminó

erosionando por completo la eficacia del conflicto huelguístico: la experiencia de las "jornadas de marzo" ofreció una demostración dramática de que el movimiento sindical ya no estaba en condiciones ni de infligir costes materiales al adversario ni de soportar los propios, sosteniendo las movilizaciones y evitando la desertión de unas bases que necesitaban cada vez más cobrar su salario íntegro y cobrarlo cuanto antes.

Así, la proximidad de la convocatoria electoral permitió a Siles Zuazo apelar por primera vez en marzo de 1985 a la legalidad constitucional para disolver sin dificultad un movimiento huelguístico que había quedado reducido ya al núcleo minero. Dos meses después, la ciudadanía votó masivamente a la oposición de derechas, entregó al nuevo gobierno un amplio mandato de orden del que Paz Estenssoro supo extraer el máximo provecho. Su duro programa de ajuste logró, por un lado, contener la inflación, reforzando de inmediato la legitimidad de la autoridad estatal y revirtiendo el proceso de decadencia política; por otro, liquidó, en combinación con el hundimiento del mercado mundial del estaño, el eje histórico del sindicalismo boliviano. En adelante, el gobierno constitucional emprendería un proceso de concentración del poder en el ejecutivo, que alcanzó un nivel de autonomía sin precedentes y fue capaz de negar a los actores sociales «la participación abierta implícita en el proceso de liberalización política» (Malloy, 1992: 145). Lamentablemente, la experiencia de los años previos había reducido las expectativas populares a una demanda de estabilidad. No conviene olvidar a este respecto que en las elecciones de 1985 Bánzer no sólo fue el candidato más votado en aquellos pueblos cochabambinos donde hacía una década había perpetrado la siniestra "Masacre del Valle", sino que también recogió un impresionante caudal de sufragios de los mismos distritos mineros. Y es que a mediados de 1985 los bolivianos tenían sin duda muy buenas razones para desear que su gobierno dejase de tratar con la COB.

El hundimiento de las viejas comunidades mineras ha eliminado las estructuras capaces de sostener acciones colectivas prolongadas, de soportar los fuertes costos de la confrontación manteniendo abierta la perspectiva de una transformación social y política radical, y esto ha alimentado tendencias hacia la negociación con los gobiernos en el seno del movimiento sindical. Por otro lado, el funcionamiento continuo de las reglas de la democracia representativa ha tendido a forzar el reconocimiento de los partidos como canal privilegiado para ejercer las presiones políticas sobre el estado. El sindicalismo revolucionario ha ido así languideciendo al compás del deterioro de las bases tradicionales de la acción

colectiva obrera, que ha restado credibilidad a los discursos radicales, y de la consolidación de las nuevas reglas institucionales, que niegan a la COB la posibilidad de presentarse ante la ciudadanía como una estructura eficaz de representación política. Pero sólo en la medida en que vaya resultando posible armonizar cambio social y democracia, los liderazgos obreros podrán justificar su adhesión al nuevo sistema y sostener una estrategia adaptativa *deliberada* y *consciente*, apoyando el desarrollo de las instituciones democráticas y el fortalecimiento de opciones políticas reformistas capaces de competir en la arena electoral. Por supuesto, la situación actual está muy alejada de ese escenario, y los dirigentes sindicales parecen condenados por el momento a enfrentar la reproducción permanente de la vieja polémica sobre si la miríada de partidos "revolucionarios" son el "instrumento político" adecuado o, por el contrario, la COB continúa siendo un "soviet" en potencia, un actor político paralelo, agazapado a la espera de que con la multiplicación del descontento social en esta larga crisis suene finalmente la hora de la segunda revolución boliviana.

No será fácil, desde luego, arrojar por la borda el lastre del sindicalismo y de los discursos revolucionarios mientras los actores del sistema político sólo ofrezcan a la bases sindicales la perspectiva de una interminable travesía por el desierto de la recesión. Tampoco lo será replantear la discusión sobre el contenido de la "democracia obrera" en el seno de la red sindical, por mucho que la dramática disolución del movimiento en una lucha hobbesiana durante la segunda etapa del mandato de Siles Zuazo -que espero haber reflejado con suficiente realismo en el texto- parezca ofrecer buenos argumentos para hacerlo. Tanto la percepción radicalmente negativa del poder de la organización formal, expresada en el profundo arraigo del basismo, como la idea tradicional de que la central sindical debe incluir, en nombre de la unidad, a todas las voces políticas del campo "popular", tendrían que contraponerse, en efecto, al hecho de que la estructuración vertical de la autoridad, la autonomía y coherencia ideológica de las élites dirigentes son condición *sine qua non* para la acción estratégica racional en *cualquier* juego socio-político. Pero el poder de la organización no puede consolidarse únicamente a base de voluntad política y reformas legales. Depende, por el contrario, de una legitimidad de personas y discursos normativos que sólo arraigará cuando los resultados ofrezcan una base plausible para la confianza y generen en el medio plazo la identificación de las bases con su representación colectiva.

Al parecer, por lo tanto, la pescadilla se muerde la cola. Si el desarrollo democrático de Bolivia exige la incorporación de las masas populares al proceso político través de la

adhesión de la COB, que continúa siendo percibida por todos como el actor *natural* para canalizar las demandas sociales, la central sindical sólo alcanzará el poder necesario para iniciar con éxito ese movimiento si la democracia le ofrece finalmente la oportunidad de mostrar resultados a su gente. Es indiscutible que poco se ha avanzado desde 1985 en la articulación de una nueva matriz sociopolítica capaz de consolidar la democracia combinando «un estado fuerte, un sistema de partidos fuerte y un sistema fuerte de actores sociales autónomos» (Garretón, 1991: 45). Hasta ahora, lo que ha estado "consolidándose" en Bolivia ha sido más bien, y por el contrario, el aislamiento del centro del poder político frente a una sociedad civil debilitada, un aislamiento que va siendo también cada vez más síntoma de debilidad a medida que la estrategia económica parece agotarse y van reconstruyéndose ciertas bases para la acción colectiva de protesta. Pero si la transformación drástica de la economía-mundo capitalista sólo ha devastado aquel «pequeño mundo donde todo fue mezquino menos el sufrimiento» (Almaraz, 1969: 70) para sustituirlo por otro igualmente pequeño y mezquino, lo cierto es que lo ha devastado para siempre. Sabemos, por lo tanto, que el cambio es irreversible; que la revolución socialista iniciada en el levantamiento espontáneo de las comunidades mineras ha dejado de ser «una posibilidad vital» (Dunkerley, 1987: 287) en Bolivia; que los desafíos son hoy radicalmente nuevos. Tampoco podemos dudar de que la historia de Bolivia no ofrece motivo alguno para la añoranza; de que los más débiles fueron finalmente quienes más perdieron en aquéllas largas décadas de incertidumbre y violencia. Por ello, y aunque la ruptura del círculo vicioso en que se debate hoy la democracia boliviana requiere seguramente de un impulso externo, invertir energías en el desarrollo institucional, en el fortalecimiento y consolidación de las instituciones políticas y de la vieja organización sindical única, será mientras tanto la mejor apuesta de futuro. Desconocemos lo que deparará el destino a Bolivia, pero la experiencia de la transición debería habernos enseñado que en ausencia de instituciones sólidas su pueblo sólo podrá dejarse arrastrar por la deriva de una historia que hasta hoy siempre le ha sido adversa.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

I. ARCHIVOS

Archivo del Centro de Documentación e Información-CEDOIN (ACED), La Paz.

Archivo del Centro de Promoción Minera-CEPROMIN (AC), La Paz.

Archivo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (AMTDL), La Paz.

Archivo del Sistema de Información y Documentación Sindical-SIDIS (AS), La Paz.

II. DOCUMENTOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

Asociación Pro-Derechos Humanos de Bolivia, *La Masacre del Valle*, La Paz, 1975.

_____, *La huelga de hambre*, La Paz, 1978.

_____, *El fraude electoral, un atentado contra la voluntad popular. Las elecciones nacionales del 9 de junio de 1978*, La Paz, 1979.

_____, *La masacre de Todos los Santos*, La Paz, 1980.

_____, *La heroica resistencia de los mineros de Bolivia*, Lima, 1981.

Banco Mundial, *Economic Memorandum on Bolivia*, Washington, 1983.

_____, *Bolivia an Economy in Crisis, Causes and Prospects*, Washington, 9 de noviembre 1984 (First Draft).

_____, *Bolivia. Structural Constraints and Development Prospects*, Washington, 12 de enero 1983.

Centro de Documentación e Información (CEDOIN), "Los mineros de ayer y de hoy", *Informe Especial*, La Paz, octubre 1986.

Central Obrera Boliviana (COB), *Documento Económico de la COB*, La Paz, 1979.

_____, *Plan Económico-Social de Emergencia de la Central Obrera Boliviana*. La Paz, agosto 1983.

_____, *VI Congreso de la COB. Protocolos y tesis de la discusión política*, La Paz: Hisbol, 1985.

Centro de Documentación e Información (CEDOIN), "Los mineros de ayer y de hoy", *Informe Especial*, La Paz, octubre 1985.

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), *Análisis y proyecciones del desarrollo económico, IV. El desarrollo económico de Bolivia*, México, 1958.

_____, *Anuario estadístico de América Latina*, Santiago de Chile, varias fechas.

_____, "Transformaciones, desequilibrios y cambios estructurales en Bolivia", en CEPAL, *Transformación Ocupacional y Crisis Social en América Latina*, Santiago de Chile, 1989.

Comisión Musgrave, *Informe Musgrave*, La Paz: Ministerio de Finanzas, 1978.

Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), *II Congreso de Unidad Campesina. Documentos y Resoluciones*, La Paz, 1983

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), "Documento No. 20", La Paz: Dirección de Relaciones Públicas, 1984.

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), *Proyecto de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia para la Cogestión Obrera en la Corporación Minera de Bolivia*, La Paz, marzo 1983.

_____, *XXI Congreso Nacional Minero, Oruro 12-19 de mayo 1986. Documentos y Resoluciones*, La Paz, CEPROMIN, 1986.

_____, *Las jornadas de marzo*, La Paz, abril 1985.

Instituto Nacional de Estadística, *Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976*, La Paz, 1976.

Ministerio de Planeamiento y Coordinación, *Estrategia socio-económica del desarrollo Nacional*, La Paz, 1970, 2 vols.

_____, *Estrategia Nacional de Desarrollo y Plan Cuatrienal 1985-1988*, La Paz, 1985.

_____, *Estrategia de Desarrollo Económico y Social, 1989-2000*, La Paz, 1989.

III. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

<i>.Aquí</i>	Semanario
<i>.Bolivia Libre</i>	Organo del MIR
<i>.El Mirista</i>	Publicación interna del MIR
<i>.El Mundo</i>	Diario
<i>.Hoy</i>	Diario
<i>.Informe "R"</i>	Publicación quincenal del CEDOIN (1982...)
<i>.Presencia</i>	Diario
<i>.Resumen Mensual</i>	Publicación mensual del CEDOIN (1981-82)
<i>.Resumen Semanal</i>	Publicación semanal del CEDOIN (1980-81)
<i>.Ultima Hora</i>	Diario
<i>.Unidad</i>	Organo del PCB, semanal

IV. BIBLIOGRAFIA

- Aguiar, F. (1990), "La Lógica de la cooperación", *Zona Abierta* 54/55: 7-41.
- Albó, J. (1985), "De MNRistas a Kataristas: Campesinado, Estado y Partido, 1953-1983", *Historia Boliviana* 5: 87-128.
- Albó, X., y J. M. Barnadas (1990), *La cara india y campesina de nuestra historia*, La Paz: UNITAS/CIPCA.
- Alcázar, J. L. y J. Baldivia (1973), *Bolivia: otra lección para América*, México: Era.
- Alford, R. (1965), "Class voting in the Anglo-American political system", en S. M. Lipset y S. Rokkan, eds., *Party Systems and Voter Alignments*, Nueva York: Free Press.
- Almaraz, S. (1969), *Réquiem por una república*, La Paz/Cochabamba: Los Amigos del Libro.
- _____ (1987), *El poder y la caída*, La Paz/Cochabamba: Los Amigos del Libro.
- Anand, P. (1993), *Foundations of Rational Choice Under Risk*, Oxford: Clarendon Press.

- Anaya, M. R. (1966), *Política y partidos en Bolivia*, La Paz: Juventud.
- Anderson, P. (1985), *Teoría, política e historia. Un debate con E. P. Thompson*, Madrid: Siglo XXI.
- Antezana, L. H. (1991), *La diversidad social en Zavaleta Mercado*, La Paz: CEBEM.
- (1983), "Sistema y procesos ideológicos en Bolivia (1935-1979)", en R. Zavaleta (comp.), *Bolivia hoy*, México: Siglo XXI.
- Arauco, A. I. (1985), "La acción social de los sectores medios: el caso de la burocracia estatal", en Roberto Laserna (comp.), *Crisis, democracia y conflicto social*, Cochabamba: CERES
- Ardaya, G. y H. Grebe (1986), "Elementos para el estudio de la crisis de hegemonía y de las opciones del movimiento popular". *Estado & Sociedad* 3: 15-49.
- Arrow, K.J. (1974), *The Limits of Organization*, Nueva York: Norton.
- Arteaga, V. (1984), *Las banderas de María Barzola. Análisis de la coyuntura de Catavi como un momento de ruptura política*, México: FLACSO, Tesis de Maestría (mimeo).
- Axelrod, R. (1986), *La evolución de la cooperación*, Madrid: Alianza.
- Baldivia, J. (1986), "Bolivia: evolución y crisis del movimiento obrero", *Nueva Sociedad* 83: 103-115.
- Barcelli, A. (1957), *Medio siglo de luchas sindicales en Bolivia*, La Paz: Editorial del Estado.
- Barrat-Brown, M. (1976), *Después del Imperialismo*, Buenos Aires: S. XXI.
- Barrios, R. (1983), *El proceso Ovando-Torres, 1969-1971*, México: UNAM, Tesis de Licenciatura.
- (1986a), "El nacionalismo militar boliviano: elementos de la reformulación estratégica", *Nueva Sociedad* 81: 36-45.
- (1986b), "Fuerzas Armadas y proceso democrático en Bolivia (1982-1986)", *Estado y Sociedad* 3: 99-119.
- (1989), "MNR-Ejército: Las relaciones cívico-militares en Bolivia (1952-1964)", *Estado y Sociedad* 6: 13-32
- Bhaskar, R. (1989), *Reclaiming Reality*, Londres: Verso.

- Bergquist, Ch. (1988), *Los trabajadores en la historia latinoamericana*, Bogotá: S. XXI.
- Binmore, K. (1990), *Essays in the Foundations of Game Theory*, Oxford: Basil Blackwell.
- Bitar, S., "El pensamiento latinoamericano ante la crisis económica", en *Síntesis* 2: 63-75.
- Bobbio, N. (1986), *El futuro de la democracia*, México: Fondo de Cultura Económica.
- Bohman, J. (1991), *New Philosophy of Social Science*, Cambridge: Polity Press.
- Brennan, G. (1990), "What Might Rationality Fail to Do?", en Cook, K. S. y Levi, M. (comps.), *The Limits of Rationality*, Chicago: Chicago University Press.
- Bulmer, M., ed. (1975), *Working Class Images of Society*, Londres: Routledge & Keagan Paul.
- Burke, M. y J. M. Malloy (1973), "Corporativismo nacional", en M. Burke, *Estudios críticos sobre la economía boliviana*, La Paz: Los Amigos del Libro.
- Caínzos, M. A. (1989), "Clases, Intereses y actores sociales: un debate posmarxista", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 46: 81-99.
- Cajias, G. (1988), *Historia y leyenda. Vida y obra de Juan Lechín Oquendo, líder de los mineros bolivianos*, La Paz: Ediciones Gráficas.
- Cajias, M. (1987), *El deterioro de una alianza. Mineros y MNR en Bolivia, 1952-1958*, México: UNAM, Tesis de Maestría.
- Calderón, F. (1982), *La política en las calles*, Cochabamba: CERES.
- (1989), "Cuestionados por la sociedad: los partidos en Bolivia", en L. Meyer y J. L. Reyna (coords.), *Los sistemas políticos en América Latina*, México: Siglo XXI/UNU.
- Calderón, F. y R. Laserna, comps. (1983), *El poder de las regiones*, Cochabamba: CERES/FLACSO.
- Calderón, F. y R. Laserna (1983), *Estado, nación y movimientos sociales regionales en Bolivia (1971-1983)*, San José: UNU/FLACSO, mimeo.
- Calhoun, C. J. (1988), "Radicalism of tradition and the cuestion of class struggle", en M. Taylor (ed.), *Rationality and Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Calla, R. (1985), "La encrucijada de la COB: temas del movimiento obrero en la coyuntura democrática", en R. Laserna (comp.), *Crisis, democracia y conflicto social. La acción colectiva en Bolivia: 1982-1985*, Cochabamba: CERES.

- _____. (1986) *La derrota de Lechín. Las luchas políticas en el XXI Congreso Minero*, La Paz: Tigre de Papel.
- _____. (1991): "Nueva Derecha, Vieja Casta", en *Estado & Sociedad*, 7: 1-11.
- Callinicos, A. (1987), *Making History*, Londres: Polity Press.
- Cameron, D. R. (1984), "Social Democracy, Corporatism, Labour Quiescence, and the Representation of Economic Interest in Advanced Capitalist Society", en J. H. Goldthorpe, ed., *Order and Conflict in Contemporary Capitalism. Studies in the Political Economy of Western European Nations*, Oxford: Clarendon Press.
- Canelas, A. (1981), *¿Quiebra de la minería estatal boliviana?*, La Paz/Cochabamba: Los Amigos del Libro.
- Cardoso, F. H. y E. Faletto (1987), *Dependencia y desarrollo en América Latina*, México, Siglo XXI.
- Cardoso, F. H. (1985) "Sobre la caracterización de los regímenes autoritarios en América Latina", en D. Collier (comp.), *El nuevo autoritarismo en América Latina*, México: FCE.
- Carr B. y S. Ellner, eds. (1993), *The Latin American Left: From the Fall of Allende to the Perestroika*, Londres/San Francisco: Westview Press/Latin American Bureau.
- CLACSO-Comisión de Movimientos Laborales (1986), *El sindicalismo latinoamericano en los ochenta*, Santiago de Chile.
- Cohen, G.A. (1986), *La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa*, Madrid: Siglo XXI/Pablo Iglesias.
- Coleman, J.S. (1982), *The Asymetric Society*, Siracuse, NY: Siracuse University Press.
- Collier, R. B. y D. Collier (1991), *Shaping the Political Arena*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- CONADE/FLACSO/ILDIS (1986): *Crisis económica y perspectivas de desarrollo en América Latina*, Quito.
- Conaghan, C. M.; J. M. Malloy y L. A. Abugattas (1990), "Business and the 'Boys'. The Politics of Neoliberalism in the Central Andes", *Latin American Research Review* XXV (2): 3-30.
- Conaghan, C. M. (1990), "Retreat to Democracy: Business and Political Transition in Bolivia and Ecuador", en D. Ethier (ed.), *Democratic Transition and Consolidation in Southern Europe, Latin America and South East Asia*, Londres: Mc.Millan.

- Cotler, J. (1978) *Clases, estado y nación en el Perú*, Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
- _____ (1985a), "Estado y régimen: notas comparativas sobre el Cono Sur y las sociedades de 'enclave'", en D. Collier (comp.), *El nuevo autoritarismo en América Latina*, México: FCE.
- _____ (1985b), "Perú: estado oligárquico y reformismo militar", en P. G. Casanova (coord.), *América Latina: Historia de medio siglo*, México: Siglo XXI.
- Crouch, C. (1982), *Trade Unions: The Logic of Collective Action*, Glasgow: Fontana.
- _____ (1993), *Industrial Relations and European State Traditions*, Oxford: Clarendon Press.
- Cuevas, A. (1990), *Sindicato y poder en América Latina*. Madrid: Alianza.
- Czada, R. M. (1991), "Interest Groups, Self-Interest and the Institucionalization of Political Action", en R.M. Czada y A. Windhoff-Héritier, eds., *Political Choice, Institutions, Rules, and the Limits of Rationality*, Frankfurt am Mein/Boulder, Col.: Campus/Westview.
- Davis, M. (1971), *Introducción a la Teoría de Juegos*, Madrid: Alianza Editorial.
- De Francisco, A. (1995), *Cambio social y sociología*, Madrid (mimeo).
- Del Granado, J. (1987), "El Movimiento Sindical Fabril (Los fabriles de La Paz como punto de referencia)", en FLACSO/ILDIS, *Crisis del sindicalismo en Bolivia*, La Paz.
- Delgado, T. (1984), *100 años de lucha obrera en Bolivia*, La Paz: Isla.
- Devlin, R. (1981), "¿Es compatible el financiamiento bancario comercial con el desarrollo económico del Tercer Mundo?", en J. Estévez y S. Lichtenstejn (comps.), *Nueva fase del capital financiero. Elementos teóricos y experiencias en América Latina*, México: Nueva Imagen/CEESTEM/ILET.
- Dobry, M. (1988), *Sociología de las crisis políticas*, Madrid: CIS/S.XXI.
- Domenech, A. (1991), "Introducción" a J. Elster, *Domar la suerte*, Barcelona: Paidós/ICE-UBA.
- Douglas, M. (1987), *How Institutions Think*, Londres: Routledge and Keagan Paul.
- Dunkerley, J. (1987), *Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia 1952-1982*, La Paz: Quipus.
- _____ (1990), *Political Transition and Economic Stabilization: Bolivia, 1982-1989*, Londres: ILAS.

- _____ (1993), "The Crisis of Bolivian Radicalism", en B. Carr y S. Ellner (eds.), *The Latin American Left: From the Fall of Allende to the Perestroika*, Londres/San Francisco: Westview Press/Latin American Bureau.
- Eckstein, S. (1976), *The Impact of Revolution: A Comparative Analysis of Mexico and Bolivia*, Londres/Beverly Hills: Sage Publications.
- Elster, J. (1984), "Marxismo, funcionalismo y teoría de juegos. Un alegato en favor del individualismo metodológico", *Zona Abierta* 33: 21-62.
- _____ (1985), *Making Sense of Marx*, Cambridge: Cambridge University Press.
- _____ (1988), *Uvas amargas*, Barcelona: Península.
- _____ (1989a), *Nuts and Bolts for the Social Sciences*, Cambridge: Cambridge University Press.
- _____ (1989b), *The Cement of Society*, Cambridge: Cambridge University Press.
- _____ (1991), *Juicios Salomónicos*, Barcelona: Gedisa.
- Ericson, A. (1962), *Labor Law and Practice in Bolivia*, Washington, D.C.: U.S. Department of Labor.
- Espejo, J. (1990a), "El sector productivo durante el período inflacionario", *Documento de Trabajo*, IISEC, febrero.
- _____, (1990b), "El empleo y la distribución del ingreso durante la inflación", *Documento de Trabajo*, La Paz: IISEC, abril.
- Estévez, J. y S. Lichtenstejn, comps. (1981), *Nueva fase del capital financiero. Elementos teóricos y experiencias en América Latina*, México, Nueva Imagen/CEESTEM/ILET.
- Etzioni, A. (1992), "Foreword", en Mary Zay, ed., *Decision Making: Alternatives to Rational Choice Models*, Londres: Sage.
- Fajnzylber, F. (1983), *La industrialización trunca de América Latina*, México: Nueva Imagen.
- _____ (1987), "La industrialización en América Latina: especificidades y perspectivas", en Gonzalo Martner (coord.), *El desafío latinoamericano. Potencial a desarrollar*, Caracas: Nueva Sociedad.
- Friedman, D. y M. Hechter (1988), "The Contribution of Rational Choice Theory to Macro-Sociological Research", *Sociological Theory* 6 (2): 201-218.

- Friedman, D. (1983), "Why Workers Strike: Individual Decisions and Structural Constraints", en M. Hechter, ed., *The Microfoundations of Macrosociology*, Philadelphia: Temple University Press.
- (1990), "Toward a Theory of Union Emergence and Demise", en M. Hechter, K.D. Opp y R. Wippler (eds.), *Social Institutions. Their Emergence, Maintenance and Effects*, Berlín/Nueva York: Walter De Gruyter.
- Furtado, C. (1977), *La economía latinoamericana. Formación histórica y problemas contemporáneos*, México: S. XXI.
- Gallardo, J. (1972), *De Torres a Bánzer: Diez meses de emergencia en Bolivia*, La Paz: Periferia.
- Gallego, F. (1991), *Los orígenes del reformismo militar en América Latina. La gestión de David Toro en Bolivia*, Barcelona: PPU.
- (1992), *Ejército, nacionalismo y reformismo en América Latina. La gestión de Germán Busch en Bolivia*, Barcelona: PPU.
- Gamarra, E. (1987), *Political Stability, Democratization and the Bolivian National Congress*, Ph.D. dissertation, University of Pittsburgh.
- García, A. (1964), "La reforma agraria y el desarrollo económico de Bolivia", *El Trimestre Económico*.
- (1966), "Los sindicatos en el esquema de la revolución nacional. El sindicalismo en la experiencia boliviana de nacionalización y desarrollo", *El Trimestre Económico*, 33 (4): 597-629.
- García Menéndez, J. R. (1989), *Política económica y deuda externa en América Latina*, Madrid: IEPALA.
- Garretón, M. A. (1991), "Política, cultura y sociedad en la transición democrática", *Nueva Sociedad* 114: 39-50.
- Giddens, A. (1993), *Las consecuencias de la modernidad*, Madrid: Alianza.
- Gironda, E. (1987), *El Desafío Nacional. De la crisis al replanteamiento de formas políticas de organización*, La Paz: Los Amigos del Libro.
- Godio, J. (1985), *Historia del movimiento obrero latinoamericano, 3. Socialdemocracia, Socialcristianismo y Marxismo. 1930-1980*, Caracas: Nueva Sociedad.
- Godoy, R. y M. de Franco (1992), "High Inflation and Bolivian Agriculture", *Journal of Latin American Studies* 24 (3): 617-637.

- Grebe, H. (1983), "El excedente sin acumulación. Génesis de la crisis económica actual", en R. Zavaleta (comp.), *Bolivia hoy*, México: Siglo XXI.
- _____ (1985), "Crisis económica y opciones democráticas", *Estado & Sociedad* 1: 13-40.
- _____ (1986), "Esbozo general del ciclo de la minería del estaño", en FLACSO/ILDIS, *El sector minero. Crisis y perspectivas*, La Paz.
- _____ (1987a), "Bolivia: opciones de inserción comercial externa y de política industrial alternativa", en VV.AA, *Estrategias de desarrollo para América del Sur*, La Paz: CEPAL/ILPES/FLACSO/ILDIS/PNUD.
- _____ (1987b), "Notas críticas sobre la gestión económica de la UDP", en MBL, *Repensando el país*, La Paz.
- _____ (1988), "Innovaciones en las políticas económico-sociales en la Bolivia post-dictatorial", *Documento de Trabajo*, No. 17, La Paz: FLACSO.
- Guzmán, A. (1990), *Historia de Bolivia*, Cochabamba/La Paz: Los Amigos del Libro.
- Halperin Donghi, T. (1979), *Historia contemporánea de América Latina*, Madrid: Alianza Editorial.
- Hannan, M. T. y J. Freeman (1989), *Organizational Ecology*, Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.
- Hannan, M. T. (1992), "Rationality and Robustness in Multilevel Systems", en J.S. Coleman. y T.H. Fararo, eds, *Rational Choice Theory. Advocacy and Critique*, Londres: Sage.
- Hechter, M. (1990), "On the Inadequacy of Game Theory for the Solution of Real-World Collective Action Problems", en Karen S. Cook y Margaret Levi (comps), *The Limits of Rationality*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Hindess, B. (1988), *Choice, Rationality and Social Theory*, Londres: Unwin Hyman.
- _____ (1989), "Two Kinds of Person", en B. Hindess, *Political Choice and Social Structure. An Analysis of Actors, Interests and Rationality*, Hants: Edward Elgar.
- Hirschmann, A. O. (1977), *Salida, Voz y Lealtad*, México: FCE.
- Hobsbawm, E. (1987), *El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y la evolución de la clase obrera*, Barcelona: Crítica.
- Hollis, M. (1987), *The Cunning of Reason*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hollis M. y S. Smith (1991), *Explaining and Understanding International Relations*, Oxford: Clarendon Press.

- Holmwood, J. y A. Stewart (1991), *Explanation & Social Theory*, Londres: Mc. Millan.
- Huntington, S. P. (1990), *El orden político en las sociedades en cambio*, Buenos Aires: Paidós.
- Hurtado, J. (1986), *El Katarismo*, La Paz, Hisbol.
- Hyman, H. (1989), *The Political Economy of Industrial Relations*, Londres: MacMillan.
- Ibarnegaray, R. (1992), *El espíritu del capitalismo y la agricultura cruceña*, La Paz: CERID.
- Iriarte, G. (1983), *Los mineros. Sus luchas, frustraciones y esperanzas*. La Paz: Editorial Puerta del Sol.
- Jameson, K. (1987), "Dollarization and Dedollarization in Bolivia", University of Notre Dame (mimeo).
- Jetté, Ch. (1989), *De la toma del cielo por asalto a la relocalización. Movimiento popular y democracia en Bolivia, 1976-1986*, La Paz: Hisbol.
- Jones, G.S. (1981-82), "Cultura y política obreras en Londres, 1870-1900: notas sobre la reconstrucción de una clase obrera", *En Teoría* 8/9: 33-98.
- Kahneman, D., P. Slovic y A. Tversky, eds. (1982), *Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Katzman, R. y J. L. Reyna, comps. (1971), *Fuerza de trabajo y movimientos laborales en América Latina*, México: El Colegio de México.
- Katznelson, I. (1985), "Working class formation and the state: nineteenth century England in American perspective", en P. B. Evans et. al. (eds.), *Bringing the State Back In*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kaufman, R. R. (1988): "Liberalización y democratización en América del Sur: perspectivas a partir de la década de 1970", en G. O'Donnell, Ph. Schmitter y L. Whitehead (comps.), *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Vol. 3, Buenos Aires: Paidós.
- Kelly, J. y H. S. Klein (1981), *Revolution and the Rebirth of Inequality. A Theory Applied to the National Revolution in Bolivia*, California: University of California Press.
- Kerr, C. y Siegel, A (1954), "The Interindustry Propensity to Strike-An International Comparison", en A. Kornhauser et. al. (eds.), *Industrial Conflict*, Nueva York: Mc. Graw Hill.
- Kitschelt, H. (1993), "Comparative historical research and rational choice theory: the case of transitions to democracy", *Theory and Society* 22: 413-427.

- Klein, H. S. (1984), *Historia general de Bolivia*, La Paz: Los Amigos del Libro.
- (1987), *Orígenes de revolución nacional boliviana. La crisis de la generación del Chaco*, La Paz: Juventud.
- Kling, M. (1965), "Toward a Theory of Power and Political Instability in Latin America", en J. Martz (comp.), *The Dynamics of Change in Latin American Politics*, Englewood Cliffs.
- Knight, J. (1992), *Institutions and Social Conflict*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Knudson, J. (1974), *Bolivia's Popular Assembly and the Overthrow of General Juan José Torres*, Buffalo: Council on International Studies, State University of New York at Buffalo.
- Korpi, W. y M. Shalev (1980), "Strikes, Industrial Relations and Class Conflict in Capitalist Societies", *British Journal of Sociology* 30: 164-87.
- Korpi, W. (1983), *The democratic class struggle*, Londres: Routledge and Keagan Paul.
- Laclau, E. y C. Mouffe (1987), *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*, Madrid: Siglo XXI.
- Laclau, E. ed. (1994), *The Making of Political Identities*, Londres: Verso.
- Lange, P. y Tsebelis G. (1993), "Wage, strikes and power: An equilibrium analysis", en W.J. Booth, P. James y H. Meadwell, eds., *Politics and Rationality*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Larrazábal, E., et. al (1986), *Evolución de los salarios, del costo de la vida y del déficit económico: 1980 marzo de 1986*, La Paz: UDAPE, mayo.
- Laserna, R. (1985), "La protesta territorial (La acción colectiva regional y urbana en una coyuntura de crisis democrática)", en R. Laserna (comp.), *Crisis, Democracia y Conflicto Social*, Cochabamba: CERES.
- (1992), *Productores de democracia. Actores sociales y procesos políticos*, Cochabamba: CERES/FACES.
- Latin American Bureau (1987), *The Great Tin Crash: Bolivia and the World Tin Market*, Londres.
- Lavaud, J. P. (1981) "Bolivie: le retour des militaires", en *Problèmes d'Amérique latine* 54: 20-34
- , "Hacia una interpretación de la inestabilidad política en Bolivia", *Estado & Sociedad* 5: 103-121.

- _____ (1991), *L'instabilité politique en Amérique Latine (le cas de la Bolivie)*, París: Editions L'Harmattan.
- _____ (1992), "La solidarité syndicale bolivienne est-elle une particularité indienne?", *Materiaux pour l'histoire de notre temps* 27: 46-51.
- Lazarte, J. (1986a), "Cultura política, democracia e inestabilidad", en *Estado & Sociedad* 3: 53-73.
- _____ (1986b), *Crisis de identidad y centralidad minera*, La Paz: CEDOIN.
- _____ (1987), "Cogestión y participación: ideología y práctica del movimiento obrero", en R. A. Mayorga (comp.), *Democracia a la deriva*, La Paz: CERES/CLACSO.
- _____ (1988), "Movimiento Sindical y Transformaciones del Sistema Político Boliviano", *Estado y Sociedad* 5: 35-54.
- _____ (1989a), "El movimiento obrero en Bolivia: crisis y opción de futuro de la Central Obrera Boliviana", en *Estudios Sociológicos* VII (14): 3-35.
- _____ (1989b), *Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia. (Historia de la COB: 1952-1987)*, La Paz: ILDIS.
- _____ (1992), "Partidos políticos e informalización de la política", en R.A. Mayorga (comp.), *Democracia y gobernabilidad en América Latina*, Caracas: CEBEM/ILDIS/Nueva Sociedad.
- _____ (1993), *Bolivia: problemas e incertidumbres de la democracia. Procesos de ruptura y crisis de la izquierda*, La Paz: Los Amigos del Libro.
- Le Bot, Y. (1984), "L'Experience de Cogestion a Majorité Ouvrière (1983-1984), entre l'Utopie et le Déclin Minier", en *Problemes d'Amérique Latine* 73: 105-119.
- Lehman, D. (1990), *Democracy and Development in Latin America. Economics, Politics and Religion in the Postwar Period*, Cambridge: Polity Press.
- Levi, M. (1988), *Of Rules and Revenue*, Berkeley: University of California Press.
- Lipset, S. M. y S. Rokkan (1967), "Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction", en S. M. Lipset y S. Rokkan (eds.), *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*, Nueva York: Free Press.
- Little, D. (1991) *Varieties of Social Explanation. Introduction to the Philosophy of Social Science*, Boulder, Col.: Westview Press.
- Lora, Guillermo (1969), *Historia del movimiento obrero boliviano, 1900-1923*, La Paz/Cochabamba: Los Amigos del Libro.

- _____. (1970a), *Historia del movimiento obrero boliviano, 1923-1933*, La Paz/Cochabamba: Los Amigos del Libro.
- _____. (1970b), *Historia de los partidos políticos de bolivia*, La Paz: La Colmena, 2 vols.
- _____. (1979), *Movimiento obrero contemporáneo (1952-1979)*, La Paz: Editorial Masas.
- _____. (1980), *Historia del movimiento obrero boliviano, 1933-1952*, La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro.
- Luce, D.L., y H. Raiffa (1957), *Games and Decisions*, Nueva York: Wiley.
- Lupo, J. L. y E. Larrazábal (1986): "Una medición funcional de la distribución del ingreso en Bolivia: 1970-1985", *Análisis Económico*, La Paz.
- LLobet Tabolara, C. (1990), "Bolivia: Estado y ficción gubernamental", en P. G. Casanova (coord), *El Estado en América Latina. Teoría y práctica*, México: S.XXI.
- Machicado, F. (1990). *Actitudes en las políticas económicas (1952-1989)*, La Paz: ILDIS.
- Magill, J. H. (1974), *Labor Unions and Political Socialization: A case study of Bolivian Workers*, Nueva York: Praeger.
- Maletta, H. (1980), *La fuerza de trabajo en Bolivia, 1900-1976. Análisis crítico de la información censal*, La Paz.
- _____. (1989), "Agricultura y política económica en Bolivia, 1985-1987", *Debate Agrario* 2: 87-123.
- Malloy, J. y R. S. Thorn, comps. (1971), *Beyond the Revolution: Bolivia since 1952*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Malloy, J. y M. Seligson, comps. (1987), *Authoritarians and Democrats: Regime Transition in Latin America*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Malloy, J. y E. Gamarra (1987), "The Transition to Democracy in Bolivia", en J. Malloy y M. Seligson (comps.), *Authoritarians and Democrats: Regime Transition in Latin America*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- _____. (1988), *Revolution and Reaction: Bolivia, 1964-1985*, New Brunswick: Transaction Books.
- Malloy, J. (1977), "Authoritarianism and Corporatism: The Case of Bolivia", en J. M. Malloy (ed.), *Authoritarianism and Corporatism in Latin America*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

- _____ (1989), *La revolución inconclusa*, Cochabamba: CERES.
- _____ (1992), "El problema de la gobernabilidad en Bolivia, Perú y Ecuador", en R. A. Mayorga (comp.), *Democracia y gobernabilidad en América Latina*, Caracas: CEBEM-ILDIS-Nueva Sociedad.
- Mansilla, H.C.F. (1980), "La revolución de 1952 en Bolivia: 'un intento reformista de modernización'", *Revista de Estudios Políticos* 17: 117-128.
- _____ (1989), "Apogeo y declinación del movimiento popular boliviano. Una nota sobre la cultura política del autoritarismo", en *Estado & Sociedad* 6: 65-82.
- March J.G. y J.P. Olsen (1989), *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*, Nueva York: Free Press.
- Martin, G. M. (1984), *The Bolivian Mineworkers Federation (FSTMB), 1952-1965: Labour, Politics and Economic Development*, Phd. Diss., Universidad de Porthmouth.
- Mayorga, F. (1985), *El discurso del nacionalismo revolucionario*, Cochabamba: CIDRE.
- Mayorga, R.A. (1985), "Empate histórico y debilidad constructiva: la crisis del proceso de democratización en Bolivia (1978-1979)", en J. Labastida (coord.), *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*, México: Siglo XXI.
- _____ (1987), "La democracia entre la fragmentación y la imposición", en R.A. Mayorga (comp.), *Democracia a la deriva. Dilemas de la participación y concertación social en Bolivia*, La Paz: CERES/CLACSO.
- _____ (1991), *¿De la anomía política al orden democrático?. Democracia, Estado y Movimiento Sindical*, La Paz: CEBEM.
- _____ comp. (1992), *Democracia y gobernabilidad en América Latina*, Caracas: CEBEM-ILDIS-Nueva Sociedad.
- Medina, J. (1986), "Lechín mediador. Epílogo del Editor", en R. Calla, *La derrota de Lechín. Las luchas políticas en el XXI Congreso Minero*, La Paz: Tigre de Papel.
- Melgar Bao, R. (1988), *El movimiento obrero latinoamericano*, Madrid: Alianza.
- Mires, F. (1988), *La rebelión permanente. La revoluciones sociales en América Latina*, México: Siglo XXI.
- Morales, J. A. (1985), "Acerca de la ineficacia de la política económica", *Documento de Trabajo* 01/85, La Paz: UCB/IISEC.

- ____ (1986), "Crisis y política económica en Bolivia de 1982 a 1985", *Documento de Trabajo* 08/86, La Paz: UCB/IISEC.
- ____ (1987a), "Estabilización y nueva política económica en Bolivia", *El Trimestre Económico*, Num. Especial, LIV: 179-211.
- ____ (1987b), "Precios, salarios y política económica durante la alta inflación boliviana de 1982 a 1985", *Estudio-Diagnóstico-Debate*, La Paz: ILDIS.
- ____ (1988), "La inflación y la estabilización en Bolivia", en M. Bruno, G. Di Tella, R. Dornbusch y S. Fischer (comps.), *Inflación y Estabilización. La experiencia de Israel, Argentina, Bolivia y México*, México: FCE.
- ____ (1989), "Las políticas de estabilización en Bolivia. 1982-1989", *Documento de Trabajo* 07/89, La Paz: UCB/IISEC.
- ____ (1990), "Democracia y política económica en Bolivia", en C. Toranzo (ed.), *El difícil camino hacia la democracia*, La Paz: ILDIS.
- ____ (1993), "Política económica en Bolivia después de la transición democrática", en Juan A. Morales y Gary McMahon (eds.), *La política económica en la transición a la democracia*, Santiago de Chile: CIEPLAN.
- Morales, J. A., et. al. (1992), *Shocks Externos Transitorios y Políticas de Estabilización para Bolivia*, La Paz: IISEC.
- Morales, J. A. y J. Sachs (1987), "La crisis económica en Bolivia", *Documento de Trabajo* 08/87, La Paz: UCB/IISEC.
- Morales, R. (1985), *La crisis económica en Bolivia y su impacto en las condiciones de vida de los niños*, La Paz: UNICEF.
- Moscoso, L. (1992), "Lucha de clases: acción colectiva, orden y cambio social", *Zona Abierta* 61/62: 81-187.
- Mossbrucker, H. (1990), *La economía campesina y el concepto de "comunidad": un enfoque crítico*, Lima: IEP.
- Mouzelis, N. (1986), *Politics in the Semi-Periphery. Early Parliamentarism and Late Industrialization in the Balkans and Latin America*, Londres: MacMillan.
- Myerson, R. B. (1991), *Game Theory. Analysis of Conflict*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Nash, J. (1979), *We Eat the Mines and the Mines Eat Us: Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines*, Nueva York: Columbia University Press.

- _____ (1985), "Religión, rebelión y conciencia de clase en las comunidades mineras del estaño en Bolivia", *Allpanchis*, XXII (26): 115-135.
- Nove, A. (1987), *La economía del socialismo factible*, Madrid: Siglo XXI/Pablo Iglesias.
- Nun, J. (1987), "Vaivenes de un régimen social de acumulación en decadencia", en J. Nun y J. C. Portantiero (comps.), *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*, Buenos Aires: Puntosur.
- O'Donnell, G. (1981), "Las fuerzas armadas y el estado autoritario en el Cono Sur de América Latina" en Norbert Lechner (comp.), *Estado y política en América Latina*, México: Siglo XXI.
- _____ (1985), "Las tensiones en el estado burocrático autoritario y la cuestión de la democracia", en D. Collier (comp.), *El nuevo autoritarismo en América Latina*, México: FCE.
- Offe, C. y H. Wiesensthal (1985), "Two logics of collective action", en C. Offe, *Disorganized capitalism: contemporary transformation of work and politics*, Cambridge: Polity Press.
- Olave, M. y G. Pinto (1985), *Análisis de las variaciones salariales intersectoriales como base para lineamientos de política salarial*, La Paz: UDAPE.
- Olson, M. (1986), *Augey Decadencia de las Naciones*, Barcelona: Ariel.
- _____ (1992), *La Lógica de la Acción Colectiva. Bienes Públicos y la Teoría de Grupos*, México: Limusa.
- Osborne, M.J. y A. Rubinstein (1990), *Bargaining and Markets*, San Diego: Academic Press.
- Ostrom, E. (1986), "A Method of Institutional Analysis", en F. Kaufman, G. Majone y V. Ostrom, eds., *Control and Evaluation in the Public Sector*, Berlín: De Gruyter.
- _____ (1990), *Governing the Commons. The Evolution of Institutions fo Collective Action*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Padilla, D. (1980), *Decisiones y recuerdos de un general*, La Paz: Ed. Boliviana.
- Palermo, V. (1990), "Programas de ajuste y estrategias políticas: las experiencias recientes de la argentina y Bolivia", *Desarrollo Económico* 119: 333-366.
- Paramio, L. (1991), "El final de un ciclo y la crisis de unos actores: América Latina ante la década de los ochenta", Madrid, mimeo.
- _____ (1992), "El materialismo histórico como programa de investigación", Madrid (mimeo).

- Pásara, L. (1991), "Ambivalencia en los nuevos actores sociales. La experiencia peruana", en *Nueva Sociedad*, 115: 56-68.
- Pastor, M. (1990), *Bolivia: hyperinflation, stabilization and beyond*, Draft Submitted to the Journal of Development Studies.
- Peñaranda, B. (1985), *El endeudamiento externo de Bolivia en la década de los setenta*, Tesis de Grado, Universidad Católica Boliviana, La Paz.
- Pfaller, A. P. (1973), "Labor Demands and the Politics of Economic Development. A Theoretical Framework and a Comparative Study of Argentina, Bolivia and Cuba", Ph. Diss., University of Pittsburgh.
- Pffefer, J. (1992), *Organización y teoría de las organizaciones*, México: FCE.
- Pizzorno, A. (1978), "Political Exchange and Collective Identity in Industrial Conflict", en C. Crouch y A. Pizzorno (comps.), *The resurgence of class conflict in Western Europe since 1968*, vol. II, Londres: Macmillan.
- Portantiero, J. C. (1985), "Notas sobre crisis y producción de acción hegemónica", en J. Labastida (coord.), *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*, México: Siglo XXI.
- Prado Salmón, G. (1984), *Poder y Fuerzas Armadas (1949-1982)*, La Paz: Los Amigos del Libro.
- Przeworski, A. (1987), "Marxismo y elección racional", *Zona Abierta* 45: 97-136.
- _____ (1988a), *Capitalismo y socialdemocracia*, Madrid: Alianza.
- _____ (1988b), "Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la democracia", en Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Lawrence Whitehead, comps., *Transiciones desde un gobierno autoritario*, 3, Buenos Aires: Paidós.
- _____ (1991), *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Querejazu, R. (1978), *Llallagua*, Cochabamba: Los Amigos del Libro.
- Quiroga Santa Cruz, M. (1981), *Juicio a la dictadura*, La Paz.
- Ramos, Pablo (1982a): *Siete años de economía boliviana*, La Paz: Puerta del Sol, 3a. ed.
- _____ (1982b): *La crisis de la política económica*, La Paz: UMSA.
- _____ (1983), *Temas de la economía boliviana*, La Paz: Puerta del Sol, 2 vols.

- Rivadeneira, R. (1984a), *El laberinto político de Bolivia*, La Paz: CINCO.
- _____ (1984b), "Partidos políticos, partidos taxi y partidos fantasmas", *Nueva Sociedad*, 74: 75-90.
- Rivera, G (1964), *La masacre de Uncía*, Oruro: Universidad Técnica de Oruro.
- Rivera, S. (1985), "El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática", en Roberto Laserna (comp.), *Crisis, democracia y conflicto social*, Cochabamba: CERES, 1985.
- _____ (1986), *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechwa de Bolivia, 1900-1980*, Ginebra: UNU.
- Rivera, S. y Z. Lehm (1988), *Los artesanos libertarios y la ética del trabajo*, La Paz: THOA.
- Roca, J. L. (1980), *Fisonomía del regionalismo boliviano*, La Paz/Cochabamba: Los Amigos del Libro.
- Roddick, J. y Van Kierek, N. (1989), "Bolivia", en J. Carrière, N. Haworth y J. Roddick (eds.), *The State, Industrial Relations and the Labor Movement in Latin America*, vol. 1, Londres: Mc Millan.
- Rodríguez, G. (1986), "El combate por el tiempo". Ponencia presentada al Seminario de Historia Social Minera, La Paz.
- _____ (1991), *El socavón y el sindicato. Estudios históricos sobre los trabajadores mineros: Siglos XIX-XX*, La Paz: ILDIS.
- Rodríguez, G. (1989a), "Kajchas, trapicheros y ladrones de mineral". *Revista Siglo XIX* 8: 34-50
- Rodríguez, G. (1989b), "Los mineros: su proceso de formación". *Historia y Cultura* 15:
- Roemer, J.E., comp. (1989), *El marxismo: una perspectiva analítica*, México: FCE.
- Romero, S. (1987), "Cultura política y concertación social", en R.A. Mayorga, comp., *Democracia a la deriva. Dilemas de la participación y concertación social en Bolivia*, La Paz: CERES/CLACSO.
- Romero Loza, J. (1990), *Bolivia: nación en desarrollo*. La Paz: Editorial Los Amigos del Libro.
- Rubinstein, A. (1988), "Comments on the Interpretation of Game Theory", *Discussion Paper*, No. TE/88/181, Londres: LSE, agosto.

- Ruiz González, R. (1980), *La administración empírica de las minas nacionalizadas*, La Paz: Juventud, 2a. ed. actualizada.
- Sánchez de Lozada, G. (1985), "La nueva política económica", *Foro Económico* 5, La Paz: ILDIS.
- Sandóval, G. (1986), *Las mil caras del movimiento social boliviano. De las jornadas de marzo a las jornadas de septiembre, 1985*, La Paz: Panamericana.
- Sandóval, I. (1988), *Legislación del Trabajo*, La Paz.
- _____ (1990), *El proyecto político militar, 1971-1982*, Santa Cruz: Universidad Gabriel René Moreno.
- Scharpf, F.W. (1989), "Decision Rules, Decision Styles and Policy Choices", *Journal of Theoretical Politics* 1 (2): 149-176.
- _____ (1991a), "Games Real Actors Could Play: The Challenge of Complexity", *Journal of Theoretical Politics*, 3 (3), 1991: 277-304.
- _____ (1991b), "Political Institutions, Decision Styles and Policy Choices", en R.M. Czada y A. Windhoff-Hérter (eds.), *Political Choice. Institutions, Rules, and the Limits of Rationality*, Frankfurt am Mein/Boulder: Campus/Westview.
- _____ (1992). *Socialdemocracia y crisis económica en Europa*, Valencia: Edicions Alfons el Magnànim.
- Schelling, T. (1989), *La estrategia del conflicto*, México: Fondo de Cultura Económica.
- Scott, J. C. (1976), *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Sen, A. (1977), "Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory", en *Philosophy & Public Affairs*, 6 (4): 317-344.
- Shalev, M. (1980), "Trade Unionism and Economic Analysis: The Case of Industrial Conflict", *Journal of Labor Research* 1: 133-69.
- Shorter, E. y Ch. Tilly (1985), *Las huelgas en Francia, 1830-1968*, Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Shubik, M. (1992), *La teoría de juegos en las ciencias sociales*, México: FCE.
- Simon, H. y Asociados (1992), "Decision Making and Problem Solving", en M. Zay (ed.), *Decision Making: Alternatives to Rational Choice Models*, Londres: Sage.
- Simon, H. (1983), *Reasons and Human Affairs*, Stanford Ca.: Stanford University Press.

- Sobrados, F. (1953), *La influencia de la minería en las economías de Chile y Bolivia*, Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica.
- Soria, C. (1979), *Con la revolución en las venas*, La Paz: Roalva.
- Sotelo, I. (1980), *América Latina: un ensayo de interpretación*, Madrid: CIS.
- Stepan, A. (1985), "State Power and Strength of Civil Society in the Southern Cone of Latin America", en P. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skocpol (eds.), *Bringing the State Back In*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Stepan, A. (19789), *The State and society: Perú in comparative perspective*, Princeton: Princeton University Press.
- Stinchcombe, A. (1965) "Social Structure and Organizations", en James G. March (comp.), *Handbook of Organizations*, Chicago: Rand Mc. Nally.
- Sztompka, P. (1993), *The Sociology of Social Change*, Oxford: Blackwell.
- Strengers, J. (1992), *La Asamblea Popular. Bolivia, 1971*, La Paz: SIDIS.
- Sunkel, O. y P. Paz (1970), *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo*, México: S. XXI.
- Taylor, M. (1990), "Racionalidad y acción colectiva revolucionaria", *Zona Abierta*, 54/55: 69-113.
- Therborn, G. (1983), "Why Some Classes Are More Successful Than Others", *New Left Review* 138:
- Thompson, E.P. (1963), *The Making of the English Working Class*, Londres: Gollancz.
- Tilly, Ch. (1978), *From Mobilization to Revolution*, Reading, Mass.: Addison-Wesley.
- Toranzo, C. y M. Arrieta (1989), *Nueva Derecha y desproletarización en Bolivia*, La Paz: UNITAS/ILDIS.
- Toranzo, C. (1988), "Banzerato: ¿un nuevo modelo de acumulación?", en C. Toranzo, *Bolivia: Reproducción de capital y política*, Santa Cruz: Editorial Universitaria.
- Trimberger, E. K. (1978), *Revolution from above: military bureaucrats and development in Japan Turkey, Egipt and Perú*, New Brunswick: Transaction Books.
- Trujillo Bolio, M., coord. (1988), *Organización y luchas del movimiento obrero latinoamericano (1978-1987)*, México: S. XXI.

- Tsebelis, G. (1990), *Nested Games. Rational Choice in Comparative Politics*, Berkeley: University of California Press.
- Tucker, D. J. et. al. (1990), "Founding Characteristics, Imprinting, and Organizational Change", en Jitendra V. Singh (ed.), *Organizational Evolution*, Londres: Sage.
- UDAPE (1985), *Análisis de la Gestión Económica en Bolivia 1982-1985*, La Paz, UDAPE.
- Ugarteche, O. (1986), *El Estado Deudor. Economía política de la deuda: Perú y Bolivia 1968-1984*, Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
- ____ (1991): *La hegemonía en crisis. Desafíos para la economía de América Latina*, Lima, Fundación Friederich Ebert.
- UNITAS (1987), *La crisis del sector minero y sus efectos socioeconómicos*, La Paz.
- Urioste, M. (1987), "¿Concertación o hegemonía?. La gestión del gobierno de la UDP", en R. Mayorga (comp.), *Democracia a la deriva. Dilemas de la participación y concertación social en Bolivia*, La Paz: CERES/CLACSO.
- ____ (1989), *Resistencia campesina. Efectos de la política económica neoliberal del Decreto Supremo 21.060*, La Paz.
- Valenzuela, S. J. (1983), "Movimientos obreros y sistemas políticos: un análisis conceptual y tipológico", *Desarrollo Económico*, 23 (91): 339-368.
- ____ (1986), "Un marco conceptual para el análisis de la formación del movimiento laboral", en Comisión de Movimientos Laborales-CLACSO, *El sindicalismo latinoamericano en los ochenta*, Santiago de Chile.
- Varoufakis, Y. (1991), *Rational Conflict*, Oxford: Blackwell.
- Vega, O. (1980), *Bolivia: diagnóstico y denuncia de la crisis económica. Interpelación al gabinete*, La Paz: Ed. Alenkar.
- ____ (1987): "Lo interno de la deuda externa. El caso de Bolivia", en *Nueva Sociedad*, No. 89, Caracas, mayo-junio.
- Vega, O., et. al. (1987), *El consumo en Bolivia*, La Paz: ILDIS.
- Velasco, R. (1985), *La democracia subversiva*, Buenos Aires: CLACSO.
- Volk, S. (1987), "Bolivia", G.M. Greenfield y S.L. Maram, *Latin American Labor Organizations*, Nueva York: Greenwood Press.
- Whitehead, L. (1972), "El impacto de la Gran Depresión en Bolivia", *Desarrollo Económico* 12 (45): 50-80.

- _____ (1974-75), "El Estado y los Intereses Seccionales: El Caso Boliviano", *Estudios Andinos* 10: 85-118.
- _____ (1980), "Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros de Bolivia", *Revista Mexicana de Sociología*, 42 (4): 1465-1495.
- _____ (1981), "Miners as Voters: The Electoral Process in the Bolivia's Mining Camps", *Latin American Studies*, 13 (2): 313-346.
- _____ (1988a), "Aspectos internacionales de la democratización", en G. O'Donnell, Ph. Schmitter y L. Whitehead (comps.), *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Vol. 3.
- _____ (1988b), "La democratización frustrada de Bolivia, 1977-1980", en G. O'Donnell, Ph. Schmitter y L. Whitehead (comps.), *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Vol. 2, Buenos Aires, Paidós, 1988.
- _____ (1991), "Bolivia since 1930", en Leslie Bethell (ed.), *The Cambridge History of Latin America*, 8, Nueva York: Cambridge University Press.
- Zabalaga, M. (1990), "Lucha de clases y política económica", *Tesis de Maestría*, La Paz: FLACSO.
- Zavaleta, René (1974), *El poder dual en América Latina. Estudio de los casos de Bolivia y Chile*, México: Siglo XXI.
- _____ (1983a), "Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia", en R. Zavaleta (comp), *Bolivia hoy*, México: S. XXI.
- _____ (1983b), "Las masas en noviembre", en R. Zavaleta (comp.), *Bolivia hoy*, México: Siglo XXI.
- _____ (1990), *La formación de la conciencia nacional*, La Paz: Los Amigos del Libro.
- Zavaleta, René (1986), *Lo nacional popular en Bolivia*. México: Ed. S.XXI.
- Zay, M. (1992), "Criticisms of Rational Choice Models", en M. Zay, ed., *Decision Making: Alternatives to Rational Choice Models*, Londres: Sage.
- Zondag, Cornelius (1968), *La economía boliviana, 1952-1964*, La Paz/Cochabamba: Los Amigos del Libro.